

A.E. Fernández Jilberto

**Dictadura Militar y Oposición
Política en Chile 1973-1981**



INDICE

INTRODUCCION	11
PRIMERA PARTE	23
CAPITULO PRIMERO	25
América Latina: reestructuración del capitalismo dependiente y militarización del subdesarrollo.	
1.1.La interpretación sociológico política del cambio de patrón de desarrollo.	27
1.2.El carácter de la discusión sobre la hegemonía burguesa: la cuestión del Estado y las interpretaciones sobre el fascismo dependiente.	28
1.2.1.El Estado burocrático autoritario.	31
1.2.2.Estado de excepción bajo la forma de Estado militar.	35
1.2.3.Conflicto redistributivo y dictadura militar: la revalorización autocrítica del desarrollismo.	44
1.2.4.Fascismo dependiente.	49
1.2.4.1.Precedentes teóricos.	49
1.2.4.2.Chile: fascismo y dictadura militar.	55
1.3. Formas de Estado y el nuevo sistema de relaciones entre economía y política.	62
1.3.1.Las dificultades teóricas de las generalizaciones referidas a la interpretación sobre el autoritarismo.	63
CAPITULO SEGUNDO	77
Chile: sociedad, política e industrialización.	
2.1.El impacto de la crisis mundial de los años treinta y la reestructuración dependiente del patrón de desarrollo.	83
2.2.El impacto de la crisis sobre el sistema de dominación.	89
2.3.Ibañismo y Frente Popular: dos alternativas frente a la crisis social del desarrollismo.	98
CAPITULO TERCERO	113
Modernización y socialismo	
3.1.La izquierda y el nuevo centro político: la lógica de las alternativas.	114
3.2.Modernización en 'libertad'.	127
3.2.1.Contenido y dificultades del proyecto hegemónico de la modernización.	135

3.2.2. Consecuencias del fracaso del proyecto de profundización capitalista.	144
3.3. El socialismo como alternativa a la crisis.	145
3.3.1. Programa y contenido de la 'vía chilena al socialismo'.	148
3.3.2. Fases de la política económica del gobierno popular.	152
SEGUNDA PARTE	181
La oposición política al Estado autoritario.	
CAPITULO CUARTO	183
La dictadura militar y el proyecto de reestructuración del capitalismo dependiente en Chile.	
4.1. Algunas cuestiones previas.	183
4.2. El nuevo patrón de desarrollo en el modelo de reestructuración.	188
4.3. Fases de implementación del modelo de reestructuración capitalista dependiente.	194
4.4. Régimen político, transformación del Estado y proceso de institucionalización de la dictadura.	223
4.5. Economía y Sociedad después del 'milagro monetarista'.	239
CAPITULO QUINTO	251
América Latina: el marxismo de las sociedades dependientes y sus implicaciones para Chile.	
5.1. El marxismo de las sociedades dependientes.	253
5.2. El marxismo desarrollista y la versión politizada del dualismo estructural.	255
5.3. El marxismo de la segunda versión leninista.	259
5.4. El marxismo de la dependencia.	261
5.5. El marxismo de los movimientos sociales.	265
CAPITULO SEXTO	275
La oposición política al Estado autoritario.	
6.1. Democracia Cristiana y Estado autoritario: la primera crisis de apoyo político de la dictadura.	277
6.1.1. De la semi-oposición-apoyo a la oposición.	302
6.1.2. La Democracia Cristiana como oposición tolerada por el Estado.	306
6.2. La izquierda y la evaluación política de la derrota del gobierno socialista.	308

6.3.La polémica de la izquierda en torno a la conceptualización del nuevo Estado autoritario.	330
6.4.La política de la izquierda respecto de la Democracia Cristiana: la necesidad de una alianza antidictatorial.	342
6.5.El 'gobierno provisional' y las alternativas post-dictadura.	357
6.6.El cambio de táctica del Partido Comunista y la división del Partido Socialista: condiciones estructurales para un intento de renovación política y teórica de la izquierda.	371
CAPITULO SEPTIMO	385
El intento de renovación teórica y política de la oposición: la 'nueva izquierda'.	
7.1.Los fundamentos teóricos que sustentan la necesidad de renovación de la izquierda.	385
7.2.Las transformaciones estructurales del monetarismo como fundamento material de la crisis de la izquierda.	395
7.3.La revisión crítica del marxismo.	399
7.4.El aporte teórico inicial del seminario de Ariccia.	404
7.5.La renovación de las bases históricas del socialismo chileno y los documentos del "Grupo por la Convergencia Socialista".	408
7.6.La Convergencia Socialista y su estrategia de desarrollo alternativo.	420
7.6.1.Los principios de la reindustrialización de la economía.	423
7.6.2.La política económica de emergencia.	426
CAPITULO OCTAVO	433
Resumen y conclusiones.	

INDICE ESTADISTICO

Cuadro I: Inversiones directas norteamericanas en Latinoamérica, por sectores. Años 1897, 1908, 1919, 1920, 1950, 1960, 1967, en millones de dólares.	50
Cuadro II: Cuarenta y nueve países exportadores de productos primarios clasificados por el porcentaje de caída de las exportaciones. 1928-29 a 1932-33.	84
Cuadro III: Chile: ocupación, producción y precios de la industria salitrera.	85
Cuadro IV: Chile: índice de producción industrial.	86
Cuadro V: Inversiones extranjeras promedio por períodos.	87
Cuadro VI: Chile: resultados de la elección presidencial de 1964.	121
Cuadro VII: Chile: importancia relativa de variables claves: 1958-62.	124
Cuadro VIII: Chile: índice de precios al consumidor.	129
Cuadro IX: Sueldos y salarios: Chile, 1965-1970.	132
Cuadro X: Chile: ritmo de crecimiento del producto total y del ingreso.	133
Cuadro XI: Chile: causales de enajenación de tierras para la reforma agraria 1965-1969.	137
Cuadro XII: Chile: incorporación de tierras al proceso de reforma agraria.	138
Cuadro XIII: Chile: formación de asentamientos.	139
Cuadro XIV: Chile: exportaciones totales de cobre.	140
Cuadro XV: Chile: indicadores de utilización de la capacidad instalada en la industria.	157
Cuadro XVI: Expropiaciones de la reforma agraria.	158
Cuadro XVII: Chile: evolución de los precios al consumidor y al por mayor.	167
Cuadro XVIII: Chile: balance de pagos.	169
Cuadro XIX: Chile: índice de salarios y sueldos reales: 1959-1979.	197
Cuadro XX: Chile: destino de predios expropiados por Estado entre 1965 y 1973, a febrero de 1979.	198
Cuadro XXI: Chile: empresas requisadas e intervenidas, devueltas a sus propietarios.	198
Cuadro XXII: Chile: número de empresas públicas.	199
Cuadro XXIII: Chile: inversión extranjera autorizada y materializada.	200

Cuadro XXIV: Chile: financiamiento de la inversión nacional.	201
Cuadro XXV: Chile: valor y composición de las exportaciones.	203
Cuadro XXVI: Chile: algunos indicadores de la evolución del tamaño del Estado, 1970,1974-79.	207
Cuadro XXVII: Chile: indicadores económicos y sociales.	210
Cuadro XXVIII: Santiago de Chile: subsidios al programa de empleo mínimo y afiliación, 1975-1980.	211
Cuadro XXIX: Chile: tasas de interés real cobradas por bancos: 1975-1978.	214
Cuadro XXX: Chile: índice de precios al consumidor. Variación anual 1970-81.	216
Cuadro XXXI: Chile: déficit total y financiamiento exterior.	242
Cuadro XXXII: Chile: valor y composición de las importaciones de bienes.	244
Cuadro XXXIII: Chile: magnitud de la clase obrera en Chile, 1952-1979.	397

*Para Ximena, Paloma Alejandra, Xaviera,
Albert Lagos y los Ribera Sorolla.*

INTRODUCCION

La historia de Chile en el último decenio es la historia de una sociedad civil cautiva por el Estado. La dictadura militar establecida en septiembre de 1973 constituye el inicio de un largo proceso de genocidio social y político que no encuentra paralelo en su historia republicana. El se concreta a través de un conjunto de reformas estructurales y políticas que rompen drásticamente con un modelo de desarrollo implementado durante cuarenta años.

La crisis del patrón de desarrollo primario exportador de finales de la década de los años veinte había creado condiciones favorables a la industrialización nacional. La ilusión que a través de ella era posible llegar a un desarrollo nacional autosustentado y de profundización siempre creciente de la democracia, era ampliamente compartida por vastos sectores de la sociedad. Ello constituyó durante largos años un consenso político que tomó la forma de un '*pacto social*' en beneficio del desarrollo. Las dificultades y los retrocesos no estuvieron ausentes en este largo combate por la industrialización y la democratización de la sociedad. Sin embargo, ellos no lograron comprometer la línea histórica gruesa que la sociedad chilena había asumido.

La naturaleza conflictiva y problemática del desarrollo fue asumida incluso por una forma específica de Estado que se transforma en un estímulo esencial a la industrialización y modernización del conjunto de la sociedad. El '*Estado de compromiso*', la industrialización y la aspiración a una democratización creciente representaban las variables esenciales en la búsqueda del desarrollo. Este asume la tarea de regulación de las desigualdades y conflictos sociales generados por el desarrollo, frente a una sociedad que intenta ampliar progresivamente su capacidad de autogestión frente al Estado.

El prolongado conflicto social por el desarrollo que tiene lugar durante los cuarenta años que preceden al establecimiento de la dictadura es el que hace posible la ampliación de la capacidad de la sociedad chilena para accionar sobre sí misma. Ello se expresa en mi idea que los modelos de desarrollo, más que un diseño técnico que favorece el crecimiento económico, implica un nuevo modelo de sociedad que postula una nueva correlación de poder político y social. La democracia es entendida entonces, como la capacidad de la sociedad civil para gestionar frente al Estado la correlación de fuerzas sociales que materializará el fundamento social del desarrollo. Este último sólo adquiere un contenido democrático cuando se acepta de la sociedad su derecho a reproducción frente a él. Es evidente que el debate político en el seno de la sociedad civil referido tanto al desarrollo como a la industrialización se caracterizó por la lucha teórica y política entre modernización capitalista y socialismo. Ambas alternativas recibieron sucesivamente su oportunidad histórica de concreción y ambas fueron brutalmente erradicadas por el Estado autoritario. El fundamento ideológico de dicha determinación se expresó en la afirmación frecuente de que la crisis y estancamiento de la industrialización encontraba su causa estructural esencial en la presencia del sistema democrático. El estancamiento del proceso de industrialización y la crisis económica y política generalizada a que él da curso desde los años cincuenta, son interpretados como el resultado lógico de un proceso de industrialización deficiente.

Esto último habría dado lugar al surgimiento de una burguesía industrial altamente parasitaria que profitaba tanto del Estado desarrollista, como del proteccionismo económico exacerbado. El sistema democrático por su parte, había creado condiciones políticas para el desarrollo de un amplio movimiento social que presionaba constantemente sobre el proceso de acumulación de capital. La industrialización no sólo había generado una burguesía nacional parasitaria, sino que había favorecido las condiciones estructurales para el desarrollo de un proletariado industrial de carácter nacional.

Este último hecho es considerado por los ideólogos de la dictadura, como la causa material que posibilita la existencia del '*peligro comunista*' que se expresó en el período del gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Por tanto, si se deseaba implementar una alternativa estructural frente a dicho '*peligro*' era necesario sustituir el rol protagónico que la industrialización había representado en el desarrollo nacional. El proceso de desindustrialización a que debía ser sometida la economía posibilitaría la extinción natural de la clase obrera, proceso que se reforzaría a partir de la erradicación drástica del sistema democrático precedente.

Para el cumplimiento de dichos objetivos era necesario un fundamento ideológico que facilitara la sustitución de la idea de que el desarrollo pasa necesariamente por la industrialización. Para ello fue útil el empleo de la afirmación que el desarrollo debería ser conceptualizado como el crecimiento económico, respecto del cual, la industrialización constituía la alternativa más riesgosa. El fundamento ideológico provino entonces de un viejo traje pacientemente remendado: el monetarismo. Es preciso recordar que tanto las viejas teorías monetaristas como el principio de las ventajas comparativas, habían hecho un esfuerzo notable en el curso de la década de los treinta para limitar y eliminar el proceso de industrialización.

Es evidente que la crisis y estancamiento del proceso de industrialización no es un fenómeno privativo de la economía chilena, de la misma forma como no lo es la respuesta autoritaria a dicha crisis. La dictadura militar establecida en Brasil a partir de 1964 constituyó el primer intento por superar la crisis por medio de un esquema de profundización del desarrollo industrial, que se designó como '*patrón de desarrollo asociado*'. En el caso chileno la dictadura militar siguió la alternativa inversa, representada por la decisión política de sustituir el patrón de desarrollo fundamentado en la industrialización, en beneficio de un patrón de desarrollo primario exportador altamente diversificado amparado por la teoría de las ventajas comparativas.

En el contexto descrito se inscribe el objetivo central del presente libro. El está constituido por un intento previo de interpretación de los procesos estructurales (económicos y políticos) que sirven de antecedente explicativo de las transformaciones implementadas por la dictadura militar chilena en el período 1973-81. Esto constituye el marco de referencia para alcanzar el objetivo principal de mi trabajo, a saber, la interpretación y descripción de la conceptualización que la oposición política formula respecto del Estado autoritario en el mismo período. Para ello es necesario interpretar el conjunto de transformaciones que han tenido lugar en el período autoritario y que constituyen el escenario material en el cual se debate la oposición. Se parte de la premisa de que la sociedad civil está confrontada con un proceso específico de reestructuración del capitalismo dependiente.

La concreción de los objetivos citados es el resultado de una amplia investigación previa. Ella estuvo destinada a recuperar el conjunto de la documentación política de los partidos de oposición en el período 1973-1981. Ello tenía como objetivo otorgar una base empírica al estudio sistemático de dicho período. Por documentación política debe entenderse los documentos oficiales de los partidos de oposición: documentos de comité central, comisión política, congresos y plenos. En ellos han estado presente los esfuerzos de democratización de la sociedad chilena, de conceptualización de la dictadura, de sistematización de las transformaciones estructurales por ella implementadas y de elaboración de estrategias, proyectos y modelos de sociedad alternativos.

El criterio de determinación del período de documentación ha sido subordinado a la tesis que a partir de la aguda crisis económica y política verificada en el segundo semestre de 1981, se cierra el ciclo de reestructuración del capitalismo dependiente de carácter monetarista. Es este último hecho el que permite la evaluación de un período de ciclo cerrado, y a partir de dicha fecha, tanto el Estado autoritario como la oposición polí-

tica a él están confrontados a un combate por la permanencia de la dictadura o la democratización de la sociedad chilena.

Es evidente que para la comprensión del contenido de los documentos elaborados por la oposición en el período indicado, se hace indispensable la interpretación y descripción de las distintas fases por las cuales transitó la implementación del modelo de reestructuración monetarista. Sólo dicha perspectiva posibilita un análisis comparativo entre la lógica de las transformaciones reales de la sociedad y la conceptualización que de ellas formula la oposición. Esto constituye un criterio indispensable para dimensionar su propia eficacia en términos de oposición y establecer los límites *estructurales* de su necesaria renovación teórica. El esfuerzo de recopilación documental ha dado como resultado paralelo al presente libro, la elaboración de tres tomos que conservan dicha documentación. Ellos en principio serán publicados bajo el título de "Colección de Documentos para la historia de la oposición política al Estado autoritario en Chile" (1973-1981).

Al fin de obtener los objetivos descritos he dividido el presente libro en ocho capítulos. En el primero, "América Latina: reestructuración del capitalismo periférico y militarización del subdesarrollo", intento sistematizar los procesos estructurales globales que crean las condiciones favorables al establecimiento de los Estados autoritarios. A partir de ello pongo énfasis en las interpretaciones sociológico-políticas del cambio de patrón de desarrollo, que constituye el sustento material de los modelos de reestructuración implementados por las dictaduras militares. Por otra parte, el surgimiento de este nuevo tipo de autoritarismo logró dar curso a una amplia discusión referida al carácter del Estado. Ella se expresó bajo la forma del debate sobre el nuevo tipo de *hegemonía burguesa* en los países de capitalismo dependiente. El resultado fue la formulación de cuatro diferentes interpretaciones globales sobre el Estado autoritario. La diversidad interpretativa se explica a partir del hecho de que cada una de ellas intenta privilegiar un modelo político

alternativo a la dictadura. Es ello lo que explica que se ponga un énfasis desmesurado en las variables políticas (régimen político), en desmedro de la necesidad de construcción de teorías explicativas referidas al carácter específico que asume el Estado capitalista en las formaciones sociales de capitalismo dependiente.

Dentro de las interpretaciones citadas hemos otorgado una relevancia especial a la designación de las dictaduras militares como formas de fascismo dependiente. Dicha relevancia se justifica en relación a la dominancia que ella demostró en el debate referido al *nuevo carácter de la hegemonía burguesa* y por su prolongada influencia en el análisis político de la oposición chilena. Finalmente, ponemos énfasis en el hecho de que las dictaduras militares han dado curso al establecimiento de un nuevo sistema de relaciones entre economía y política y, que en él se inscriben los problemas referidos a las formas de Estado.

En el capítulo segundo, "Chile: sociedad, política e industrialización", intentamos interpretar las características económicas y políticas que asume el proceso de industrialización chilena en el período 1930-1960. Para comprender la relevancia de ello, es preciso recordar que el establecimiento de la dictadura militar puso fin a la continuidad relativa de una política económica que rigió en Chile desde la crisis del sistema de dominación oligárquica. Ella se había concretado en una estrategia de industrialización conceptualizada como desarrollo por sustitución de importaciones. Es necesario tener presente que la crisis de la sociedad chilena de 1970, debe ser definida como una crisis de un desarrollo capitalista dependiente que adquiere una doble dimensión: incapacidad para continuar con un crecimiento industrial autosostenido y de repartición equitativa de sus frutos y, por otra parte, incapacidad del Estado para asegurar la dirección política relativamente estable que había caracterizado la fase de industrialización. Otorgamos una relevancia particular a la interpretación de los procesos políticos que acompañan al proceso de industrialización en este período y de manera específica al razo-

namiento político de la izquierda de la época. Ello es significativo en la medida en que ella participa del pacto social de la industrialización y es integrada a la capacidad negociadora del Estado de compromiso.

El capítulo tercero, "Modernización y socialismo", da cuenta del hecho de que en un período de casi diez años (1964-1973) la sociedad chilena se vió sometida a dos esquemas diferentes y alternativos de desarrollo: el intento de modernización de la economía capitalista dependiente conocido como '*revolución en libertad*' (1964-1970) y, el de '*vía chilena al socialismo*' (1970-1973). Ambos esquemas intentan constituir una alternativa de resolución de la crisis generada por el estancamiento del esquema de desarrollo y de acumulación de capital a que había dado curso la industrialización precedente. Aunque ambas estrategias expresaron un antagonismo político esencial, provocaron cambios significativos en el nivel del Estado. Ellos se concretaron en la ruptura de la continuidad del esquema social que había sustentado el *Estado de compromiso*. Las transformaciones estructurales implementadas por la modernización (Democracia Cristiana) provocaron la inestabilidad de la capacidad de negociación del Estado, que se había caracterizado por la articulación de las políticas centristas con la derecha tradicional. La implementación del programa de la Unidad Popular no hizo más que acentuar dicha inestabilidad. La coincidencia de ambas estrategias en la necesidad de transformaciones estructurales esenciales y de democratización progresiva o radical de la sociedad chilena, pusieron de manifiesto un resultado común: la ruptura del pacto social precedente formulado en torno al desarrollo y a la industrialización.

En el capítulo cuarto, "La dictadura militar y el proyecto de reestructuración del capitalismo dependiente en Chile", damos cuenta de las transformaciones estructurales implementadas por el Estado autoritario en el período 1973-1981. A partir de ello intentamos conceptualizar el contenido del nuevo patrón de desarrollo puesto en práctica por el modelo de reestructuración. Se describen e interpretan las diferentes fases por las cuales transitó el

modelo económico. Otorgamos una referencia especial al régimen político, a las transformaciones de las funciones del Estado y los esfuerzos de institucionalización de la dictadura.

Nuestra tesis central es que las transformaciones implementadas por la dictadura condujeron a la sustitución del patrón de desarrollo y del esquema de acumulación de capital basado en la industrialización, por un patrón de desarrollo primario exportador altamente modernizado y diversificado. El se apoyó en el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la economía mundial. Esto conduce necesariamente a que el centro dinámico del proceso de acumulación de capitales se desplace desde el sector industrial hacia el sector exportador. Ello explica el hecho de que el desempleo que acompaña los nuevos años de terrorismo monetarista constituye un componente estructural de la nueva estrategia. Finalmente presentamos una evaluación de los resultados de la aplicación de la estrategia monetarista.

La prolongada permanencia del Estado autoritario y la ineficacia de los intentos por sustituirlo crearon un amplio debate en el seno de la oposición, referido al carácter que debía asumir el proceso de redemocratización de la sociedad chilena. Para la izquierda chilena dicho debate significó la puesta en discusión de la legitimidad del paradigma tradicional del marxismo como totalidad explicativa de la crisis y desarrollo del capitalismo dependiente, de los procesos de transición de un patrón de desarrollo a otro y de su eficacia política como teoría profundizadora de la democracia alternativa la terrorismo de Estado implementado por la dictadura militar. Esto constituye el objeto central del capítulo quinto, "El marxismo de las sociedades dependientes".

A partir de ello se crearon condiciones suficientes para un debate de renovación política de la izquierda y renovación teórica del marxismo, que no excluyó sugerencias sobre la necesidad de su abandono. Sin embargo, el problema central sigue siendo el otorgar respuesta a una pregunta crucial: ¿qué es lo que la iz-

quierda chilena ha conceptualmente consumido como marxismo? Para responder a dicha interrogante de manera funcional al tema específico que nos ocupa es necesario establecer un criterio ordenador. El está constituido por el intento de identificación de las distintas líneas de conceptualización del marxismo, que se vinculan al carácter y alternativas del desarrollo del capitalismo dependiente. Es preciso advertir que nos referimos a las expresiones latinoamericanas del marxismo y excluimos deliberadamente la vertiente del marxismo europeo. Nuestra tesis está constituida por la idea de que es necesario sugerir explícitamente la pluralidad teórica que encierra el concepto de marxismo latinoamericano. Las ideas que presentamos en este capítulo constituyen el marco teórico introductorio de los dos capítulos siguientes, referidos al estudio de la oposición política.

En el capítulo sexto, "La oposición política al Estado autoritario", intentamos la interpretación y descripción del análisis político formulado por la izquierda heredera de la Unidad Popular, respecto del Estado autoritario. La oposición política del período 1973-1981, se constituye de manera global a partir del espectro político partidario que existía en el régimen democrático precedente. Ella se organiza sobre la base de la participación política de todos los partidos que constituyeron la Unidad Popular y la posterior incorporación de la Democracia Cristiana que había sustentado de manera inicial el golpe de Estado.

Lo que la oposición debe enfrentar es la constitución de un terrorismo de Estado que fundamenta su existencia en la movilización de todos los recursos de la violencia política, y su estabilidad, en la capacidad para profundizar el genocidio político de la oposición. Esto se expresa de manera particular en la ferocidad sistemática del aparato militar y político del Estado, que utiliza indiscriminadamente la brutalidad física (tortura), el asesinato político anónimo (desapariciones), la eliminación de la libertad de opinión (encarcelamiento político), el exilio y la relegación. La consolidación del poder del Estado depende de la generalización de la represión que amplía sistemáticamente

el círculo de víctimas del régimen.

Durante un largo período, las reflexiones políticas de la izquierda estuvieron marcadas por la referencia constante a la necesidad de desarrollar una estrategia de incorporación de la Democracia Cristiana a la oposición. Es esto lo que hace imprescindible la descripción inicial de las políticas de dicho partido frente a la dictadura militar y a la izquierda. Nuestra idea es que en el período inicial dicho partido desarrolló una táctica de semi-oposición-apoyo frente al Estado autoritario y debe recorrer un dificultoso camino para asumir el rol de oposición tolerada por el Estado.

Respecto de la izquierda, iniciamos su estudio con la evaluación política que ella formula sobre la derrota de la Unidad Popular en septiembre de 1973. Ello constituye un antecedente necesario para dar cuenta de la polémica que se abre respecto de la conceptualización teórica y política del nuevo Estado autoritario. Esto a su vez constituye un requisito previo para comprender la política de la izquierda respecto de la Democracia Cristiana y su afán por constituir una alianza antidictatorial. Damos también cuenta de los intentos de la izquierda por formular una alternativa económica y política a la dictadura. Ello se expresa en los esfuerzos constantes por diseñar un tipo de gobierno provisional y alternativas globales que garanticen la eliminación del Estado autoritario. A finales de los años setenta se verifican cambios trascendentales en las políticas de la izquierda respecto de la dictadura y del carácter que debía asumir la oposición. Esto último se expresa tanto en el cambio de táctica del Partido Comunista y en la división del Partido Socialista en 1979. Ambas situaciones crean las condiciones que favorecen la necesaria renovación política y teórica de la izquierda.

Es importante señalar, que en este amplio período, la oposición de izquierda intenta subsistir en un contexto de clandestinidad. Su problema principal está representado por la necesidad imperiosa de adaptación de los aparatos partidarios, que se ha-

bían organizado en los períodos de democracia parlamentaria, a las nuevas exigencias planteadas por la represión. Por ello es que su evolución política y estratégica, la necesidad de reformulaciones teóricas y su recomposición organizativa, adquieren lentitud e ineficiencia. Tanto la segmentación política de ella como sus divisiones son el resultado *lógico* de su dificultad de adaptación a las nuevas condiciones y de la forma centralizada en que ellas deben ser enfrentadas. En ello colabora el hecho evidente de que las burocracias partidarias constituyen estructuras pesadas y que en los momentos de crisis asientan mucho más su legitimidad en el pasado que en la necesidad de asumir las nuevas condiciones políticas. Este último hecho crea dificultades adicionales a la renovación de la racionalidad política y conduce a una enajenación creciente respecto de lo que ocurre en la sociedad, dificultando la lectura real de las transformaciones a que ella está sometida.

En el capítulo séptimo, "El intento de renovación teórica y política de la oposición", doy cuenta del difícil proceso de reestructuración política, teórica e ideológica de la izquierda. En el término de los años setenta e inicio de los ochenta adquiere relevancia un razonamiento teórico que termina por intentar la sustitución del razonamiento político que había servido de base a la oposición heredera de la Unidad Popular frente al Estado autoritario. Su punto de partida está constituido por la constatación del fracaso de los intentos por eliminar el régimen autoritario, que sumado tanto a la división del Partido Socialista como al cambio de táctica del Partido Comunista, configura una crisis generalizada del bloque político de la Unidad Popular. Ello desemboca en la apertura de un espacio significativo de revisión crítica de sus postulados políticos. Ello no sólo pone en discusión la estrategia implementada por la izquierda sino que, se busca también el reemplazo del esquema clásico en que se fundamentaba la estrategia alternativa representada por el socialismo.

El conjunto de este proceso da como resultado la constitución

del Grupo por la Convergencia Socialista, que junto a otros sectores da origen posterior a la formación del Bloque Socialista. De allí que prestemos atención a una serie de aspectos que facilitan y explican dicho proceso. Entre ellos es necesario destacar los fundamentos teóricos que sustentan la necesidad de renovación de la izquierda, el impacto de las transformaciones estructurales del monetarismo como fundamento material de su crisis, la revisión crítica del marxismo, los aportes teóricos del seminario de Ariccia, los intentos de renovación de las bases históricas del socialismo chileno y el rol de la Convergencia socialista y la estrategia de desarrollo alternativo formulada por dicha convergencia. Esto último se fundamenta en el principio de reindustrialización de la economía y en la elaboración de una política económica de emergencia.

Es preciso advertir de que existe un punto de partida del razonamiento político que marca una diferencia substancial entre la Unidad Popular y los intentos de renovación. El dice relación con el hecho de que la izquierda heredera de la Unidad Popular partió siempre del supuesto de la inviabilidad del proyecto de reestructuración implementado por la dictadura militar. La renovación en cambio, plantea la necesidad como testimonio de un duro realismo, de considerar la viabilidad de él. Sin embargo, ambas interpretaciones han encontrado dificultades insuperables para materializar su objetivo político esencial: el derrocamiento de la dictadura. Finalmente, en el capítulo octavo presentamos un resumen y conclusiones.

PRIMERA PARTE

CAPITULO PRIMERO

América Latina: reestructuración del capitalismo periférico y militarización del subdesarrollo.

La generalización de los nuevos procesos de autoritarismo estatal y el establecimiento de dictaduras militares en América Latina han constituido uno de los objetos centrales de las reflexiones teóricas de las Ciencias Sociales en esta región. Dichos procesos (iniciados con la dictadura militar de Brasil en 1964, seguida de Bolivia en 1972, Chile en 1973, Uruguay 1973, Argentina en 1976 y nuevamente Bolivia en 1980) han evidenciado una contradicción fundamental con los proyectos nacionalistas que dinamizaban el '*modelo de desarrollo hacia adentro*' basado en la industria sustitutiva de importaciones.¹

La fase capitalista dependiente conocida como industria sustitutiva de importaciones, que se desarrolló en el período de 1930 a 1960, supuso una ruptura esencial con el viejo Estado oligárquico liberal que había dinamizado la fase de la economía primaria exportadora. Dicho proceso de industrialización fue considerado esencial para las posibilidades de un '*desarrollo capitalista autónomo*'. En la medida en que se sustituyeran internamente los bienes manufacturados obtenidos tradicionalmente a través de las importaciones sería posible romper los lazos de dependencia establecidos por la vieja división internacional del trabajo.² El proceso social que dinamizaba el desarrollo del '*capitalismo autónomo*' se caracterizaba básicamente por el conflicto entre las burguesías industriales desarrollistas y las viejas clases oligárquicas. El proletariado industrial en desarrollo y el resto de los sectores populares desempeñarían una función de apoyo subordinado a las nuevas burguesías nacionales ligadas al mercado interno. El patrón de desarrollo se concentraría en el establecimiento de una política de ampliación progresiva del mercado interno, lo que permitiría acercarse a la

conformación económico-social de los países de economías capitalistas centrales.

Las nuevas dictaduras militares establecidas en América Latina se encuentran íntimamente ligadas a un proceso general de reestructuración del capitalismo periférico.³ Dicha reestructuración se hace en función de la crisis del modelo de desarrollo basado en la industria sustitutiva de importaciones y de las exigencias planteadas por la nueva división internacional del trabajo.⁴ El autoritarismo de Estado está estrechamente vinculado al establecimiento de un nuevo patrón de acumulación y que en algunos casos (Brasil) se concentra sectorialmente en las ramas denominadas '*dinámicas*' correspondiente a los bienes de consumo duradero, bienes de capital de segunda generación y bienes intermedios. Ello da origen al establecimiento de un nuevo patrón de desarrollo designado como patrón de desarrollo asociado⁵ o modelo de desarrollo capitalista dependiente industrializado.⁶

El conjunto de estos procesos debe ser entendido como consecuencia de la internacionalización de los mercados internos de las economías dependientes y del estancamiento del proceso de industrialización que se evidencia a partir de la década de los sesenta. Consecuentemente, es producto de un proceso de diferenciación interna de las clases dominantes caracterizado por el desarrollo creciente de una '*nueva oligarquía*' que intenta reestructurar su hegemonía en el bloque en el poder.⁷

Es en esta dirección en la que se puede sostener que el patrón de desarrollo dependiente asociado, llevado a cabo por las dictaduras militares constituye la negación histórica de la alternativa realizada por la fracción de la burguesía nacional ligada al mercado interno. Ello supone la puesta en práctica de una reorganización general de la estructura y relaciones de clases que habían caracterizado el desarrollo del capitalismo dependiente de la fase precedente. En el nivel político dicho proceso supone la caducidad de la democracia liberal y el establecimiento de un modelo político basado en una forma de '*Estado de excepción*'

permanente', denominado Estado de Seguridad Nacional. El objetivo central de este capítulo es el intentar dar cuenta de la forma como ha sido interpretada la militarización del Estado y el subdesarrollo en América Latina y diseñar líneas fundamentales que permitan avanzar en la discusión teórica de dicha problemática.

1.1. La interpretación sociológico-política del cambio de patrón de desarrollo.

La reflexión socio-política general sobre el carácter que asume la reestructuración de las relaciones de clases en los países de América Latina, en que la hegemonía se ejerce por la vía de la dictadura militar, ha sido situada en el marco teórico de las interpretaciones del *'desarrollo del capitalismo tardío'*. A partir de ellas se intenta derivar una interpretación analítica del subdesarrollo sobre la base de la formulación de una teoría del Estado y las clases sociales en el modo de producción capitalista de las economías periféricas que permita, a su vez, superar las formulaciones de una teoría regional sobre la sociedad y el Estado.

Dicha interpretación busca situarse entre los modelos que fundamentan sus análisis en el estilo de desarrollo del capitalismo central y las sociedades derivadas del *'modo de producción asiático o de situación colonial tardía'*.⁸ Por lo tanto, lo que se valora predominantemente como experiencia histórica válida para la formulación de un marco teórico general interpretativo de la situación latinoamericana es el de los casos de capitalismo tardío clásicos (Alemania, Italia, España).⁹ El aspecto más importante de esta interpretación se vincula con la fase política del capitalismo tardío (fascismo) que se supone teóricamente identificable con la situación política de América Latina (particularmente referida a las dictaduras de Brasil, Chile y Argentina). Esta perspectiva supone la posibilidad teórica de un análisis comparativo en el plano de las relaciones sociales de tipos de sociedades que se ubican en fases históricas diferentes

del desarrollo del sistema capitalista mundial, y que, a la vez, establecieron relaciones posicionales diversas respecto de su integración en éste.¹⁰ Se busca establecer una identificación entre el carácter actual del conflicto social de algunos países de América Latina con el que generó en su época en economías de capitalismo tardío que posteriormente derivaron en economías centrales, sobre la base de la formulación de un análisis sociológico histórico. El establecimiento de dicha perspectiva sobrepasa la necesidad de un reconocimiento de grados de especificidad significativos en la dinámica de las relaciones sociales de las formaciones sociales o capitalismo nacionales que se comparan. El aspecto diferenciador del '*capitalismo tardío*' puesto en práctica en las economías periféricas de América Latina debería considerar el hecho de que éste se ejecuta en una fase posterior al surgimiento del monopolio, por lo menos en lo referente al proceso de configuración de un mercado interior suficiente para asegurar las condiciones de acumulación y reproducción del proceso de industrialización nacional.¹¹

El conjunto de este análisis, basado en el estudio comparativo de las formas históricas de '*capitalismo tardío*', no tiene otro objetivo que desarrollar condiciones teóricas suficientes que permitan caracterizar la intervención militar como conducente a la constitución de un Estado de tipo fascista.¹²

1.2. El carácter de la discusión sobre la '*hegemonía burguesa*': la cuestión del Estado y las interpretaciones sobre el '*fascismo dependiente*'.

El agotamiento del antiguo patrón de acumulación basado en la industria sustitutiva de importaciones y el establecimiento de las nuevas formas que redefinen los marcos tradicionales de inserción de las economías nacionales de América Latina (particularmente los casos de Brasil y Chile) en el sistema capitalista mundial, ha puesto de relieve los estudios sobre el nuevo carácter de los proceso de hegemonía en el interior de las sociedades nacionales.

Los nuevos modelos políticos, que revisten el carácter de regímenes autoritarios y que se fundamentan en la gestión directa del aparato militar, reenvían necesariamente a las consideraciones teóricas sobre el Estado. Desde una perspectiva estructural las formas autoritarias constituyen el resultado de la desestabilización de la estructura de dominación como consecuencia de la crisis del modelo político establecido por el populismo ¹³ basado en el patrón de desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones y en la estrategia de un desarrollo industrial nacional. En otros casos dicha desestabilización es producto del intento por articular un modelo socialista como alternativa al estancamiento económico de la fase capitalista sustitutiva (caso de Chile, 1970-73).

La necesidad de desregionalizar los estudios referidos al capitalismo dependiente latinoamericano, como consecuencia del dominio ejercido por la teoría de la dependencia,¹⁴ se hace evidente si se considera que la internacionalización de las economías nacionales (de los países sometidos a estas dictaduras de nuevo tipo) es la que transforma el proceso de acumulación precedente y genera el reordenamiento de la economía local. Es necesario reinscribir sus estudios en el marco más general de la lógica actual del desarrollo del capitalismo mundial ¹⁵ y que algunos prefieren ubicar en el marco de los estudios sobre el '*capitalismo tardío*'. ¹⁶ Esta desregionalización debería articularse en la centralidad del tema referido al Estado, considerando como eje analítico las actuales transformaciones de los procesos sociales de las sociedades latinoamericanas que conocen este nuevo fenómeno de dictadura militar. Ello debería ser entendido como la expresión de una nueva relación de clases que cristaliza la nueva lógica del proceso de acumulación capitalista en la periferia y sus relaciones con el sistema mundial. El carácter de las nuevas relaciones sociales, que explican las alteraciones ocurridas en el nivel del Estado, deben ser vinculadas a los cambios fundamentales de los patrones de desarrollo.

La reflexión sobre el nuevo sistema de relaciones de clases

constituye el objeto central que otorga especificidad al desarrollo capitalista periférico de los países de América Latina en donde la hegemonía se ejerce por medio de la dictadura militar. La forma histórica concreta que adquiere el Estado capitalista dependiente, en sus variantes liberales, oligárquica, populista o dictatorial militar, deben ser consideradas en relación a las alteraciones ocurridas en la articulación entre economía y política y no bajo la forma de sus consecuencias aparentes, es decir, de Estados fascistas dependientes, burocráticos autoritarios, Estados de excepción, etc. Sólo una formulación de este tipo permite superar los reduccionismos politicastas o economicistas imperantes en las interpretaciones actuales de las dictaduras militares. Es necesario superar las versiones economicistas que consideran las dictaduras como simple efecto de los nuevos patrones de acumulación de capital y que se deriva de un pragmatismo interpretativo de la teoría de la dependencia. Pero también es necesario superar las politizaciones interpretativas que centralizan la problemática del Estado en una consideración abstracta meramente estructuralista.

En el marco de la nueva articulación de las relaciones entre economía y política en las sociedades latinoamericanas el proceso autoritario debe ser considerado como resultado de la crisis manifiesta del Estado y, a la vez, como intento de su propia superación y que, se caracteriza por la reducción histórica del Estado a mecanismos de dominación pura, carente de los componentes básicos de una situación de hegemonía. Este fenómeno debe ser considerado como una contradicción de no coincidencia entre Estado y Sociedad Civil.¹⁷ Esta desarticulación entre sociedad civil y Estado se ve acentuada por las nuevas exigencias de reinserción de la sociedad dependiente en el capitalismo mundial, profundizando la crisis de la heterogeneidad estructural caracterizada por el entrelazamiento de las distintas relaciones de producción y la subordinación del proceso de acumulación del capital '*nacional*' a las exigencias del sistema mundial. Esto conduce al establecimiento de un modelo de dominación al margen de los mecanismos formales de hegemonía. Ello se carac-

teriza por la ruptura entre los procesos políticos de coerción y dirección, en donde el poder que se ejerce en la sociedad nacional encuentra su lógica en la reestructuración del sistema capitalista mundial. Los cambios operados en las formas de Estado, como consecuencia de la reestructuración del capitalismo dependiente latinoamericano, buscan ser conceptualizados a partir de cuatro interpretaciones globales: Estado burocrático autoritario, Estado de excepción bajo la forma de Estado militar, la revaloración autocrítica de la teoría desarrollista y Estado fascista dependiente.

1.2.1. Estado burocrático autoritario.

El surgimiento de nuevos patrones políticos de dominación autoritaria ¹⁸ plantea el problema de las alianzas sociales y contradicciones que genera su propia implantación. El concepto de Estado burocrático autoritario busca distinguirse de otras formas autoritarias de Estado (fascismo, populismo, autoritarismo tradicional, autoritarismo oligárquico, etc.) y se encuentra vinculado a la situación histórica generada a partir de los procesos autoritarios de la década del sesenta en Brasil y Argentina. Pero, encuentra también sus antecedentes teóricos en torno a los procesos de México y España. "Las características definitivas del tipo burocrático autoritario son: a) las posiciones superiores del gobierno suelen ser ocupadas por personas que acceden a ellas luego de exitosas carreras en organizaciones complejas y altamente burocratizadas (Fuerzas Armadas, el Estado mismo, grandes empresas privadas); b) son sistemas de exclusión política, en el sentido de que apuntan a cerrar los canales de acceso al Estado al sector popular y sus aliados, así como a desactivarlos políticamente, no sólo mediante la represión sino también por medio del funcionamiento de controles verticales (corporativos) por parte del Estado sobre los sindicatos; c) son sistemas de exclusión económica, en el sentido de que reducen y postergan hacia un futuro no precisado las aspiraciones de participación económica del sector popular; d) son sistemas despolitizantes, en el sentido de que pretenden reducir las cuestiones sociales y polí-

ticas públicas a problemas técnicos, a dilucidar mediante interacciones entre la cúpula de las grandes organizaciones arriba referidas; e) corresponden a una etapa de importantes transformaciones en los mecanismos de acumulación de sus sociedades, las que a su vez son parte de un proceso de profundización de un capitalismo periférico y dependiente, pero - también - dotado ya de una extensa industrialización".¹⁹

La emergencia de esta forma de Estado se relaciona con un cuadro estructural caracterizado por procesos de creciente participación política de los sectores sociales que pueden constituir una alternativa histórica al capitalismo periférico que altere la estructura de clases interna de éste y sus formas de inserción en el sistema mundial. Existe otro aspecto que desempeña una función importante en la caracterización como Estado burocrático autoritario del proceso de emergencia de los nuevos patrones de dominación autoritaria. El se relaciona con la cuestión de la *profundización* del capitalismo periférico dependiente y que genera importantes alteraciones en los mecanismos de acumulación de dichas sociedades. "El movimiento tendiente al logro de una producción de base que aumentaría gradualmente el grado de integración vertical preexistente, es lo que llamo el proceso de profundización de la industrialización - y, en general, de la estructura productiva - de los países que ya habían llegado a un estadio de industrialización compleja y extendida pero pobremente integrada".²⁰

Dicha profundización se constituye en la única alternativa en el marco de las exigencias planteadas por la oferta mundial de inversiones y tecnología, y por las condiciones del comercio mundial. El proceso de profundización se desarrolla en el marco de sociedades con contextos sociales altamente modernizados y de industrialización extendida que no ha logrado la integración vertical exigida por la profundización del capitalismo dependiente nacional, caracterizado por el ejercicio de una actividad política designada como '*pretorianismo de masas*'. Y en donde las estrategias efectivas de formulación de las demandas de los sec-

tores populares y medios adquiere el carácter de una amenaza efectiva en contra del Estado desarrollista, basado en el rol hegemónico asignado a la burguesía nacional ligada al mercado interno de la fase de industrialización sustitutiva. Este proceso conduce necesariamente a la pérdida del papel asignado por el sistema institucional global a las organizaciones formalmente democráticas.

En este contexto se introduce la variable constituida por el aparato militar, en la perspectiva asignada por Stepan y Huntington,²¹ que se materializa en una intervención destinada al cierre de las vías institucionales de acceso político de los sectores sociales marginados de las condiciones de dominación y que cuestionan la viabilidad histórica del capitalismo periférico nacional. Este fenómeno general constituye el elemento causal básico que se formula en términos de una teoría de los regímenes burocrático autoritarios en las condiciones de modernización. Esto permite establecer una diferenciación fundamental con las formas de autoritarismo tradicional ligadas a una predominancia significativa de los sectores agrarios o con las formas de autoritarismo populista que buscaban una participación política restringida y canalizada de los sectores populares. El problema central que se deriva de esta interpretación está referido a las condiciones necesarias para que la profundización del capitalismo periférico latinoamericano pueda materializarse y que exige el establecimiento de una nueva correlación de fuerzas políticas y sociales diferentes de las formas de capitalismo dependiente originadas en su función exportadora de productos primarios al mercados internacional y, posteriormente, concentrado en la especificidad de la industrialización sustitutiva.

El proceso de profundización del capitalismo periférico latinoamericano plantea como exigencia básica cambios fundamentales en los mecanismos de acumulación, condición necesaria para garantizar la transnacionalización de la economía y la inversión del capital internacional. Esto supone la eliminación de los obstáculos políticos que dificultaban la rearticulación de los meca-

nismos de acumulación, particularmente, las formas políticas democráticas que habían sido engendradas y fortalecidas por el modelo desarrollista basado en la industria sustitutiva de importaciones. Nos parece relativamente evidente que en la construcción del concepto Estado burocrático autoritario²² subyacen las nociones weberianas del concepto de Estado,²³ a partir de las cuales se busca formular un concepto general de una forma específica de Estado capitalista: el Estado capitalista de las formaciones sociales periféricas. La abstracción ilimitada de las condiciones concretas que asume el objeto (el caso de las dictaduras militares de Brasil, Chile y Argentina), conduce a la conceptualización teórica del Estado como un conjunto estratificado de organizaciones y de representación de las relaciones públicas de la sociedad civil que monopoliza los medios de la violencia física. Su legitimidad pasa a depender de su capacidad de manipulación ideológica.²⁴

En dicha perspectiva, el estudio de casos históricos concretos de las formas específicas del Estado capitalista periférico se constituye por formas particulares de relaciones entre las distintas instituciones o aparatos que lo componen y que expresaría el tipo de unidad interna del Estado burocrático autoritario. Pero ello no es suficiente para comprender el carácter específico de la unidad interna del Estado capitalista periférico. "Para comprender la unidad interna específica del Estado capitalista en tanto dominación legítima o poder político institucionalizado, es necesario mirar al Estado desde las relaciones que se establecen entre éste y las relaciones (sociales) de producción. Pero la referencia del concepto de Estado al concepto modo de producción y al de lucha de clases está ausente de la definición propuesta por O'Donnell. Lo que conduce a que la unidad interna del Estado y, por tanto, la relativa autonomía que presenta el Estado capitalista con respecto a las clases y fracciones de clase dominante, desaparezca del análisis".²⁵

De ahí se deriva el que las dos grandes variables que operan

en esta interpretación manifiesten los límites propios de la generalización del concepto de dominación de clase legítima y del concepto de Estado como simple instrumento de la clase dominante. Ello no permite hacer visible la naturaleza contradictoria del Estado, que por un lado debe garantizar las condiciones del nuevo patrón de acumulación que se ha puesto en práctica en el capitalismo periférico y, por otro, como Estado-Nación (representativo de todos los grupos sociales) debe desarrollar los elementos materiales de su propia legitimidad basada en la cohesión social. El carácter específico de la forma particular que asume el Estado capitalista en la periferia estará dado por la forma específica de articulación entre economía y política tal como se expresa en las relaciones de clases que constituyen el bloque en el poder. El concepto Estado burocrático autoritario corresponde a una descripción del régimen y sistema político y no a una formulación teórica de una forma específica de Estado: el Estado capitalista de las formaciones económico-sociales periféricas en las nuevas condiciones de la reordenación de las relaciones entre formaciones sociales capitalistas periféricas y las formaciones sociales capitalistas centrales.

1.2.2. Estado de excepción bajo la forma de Estado militar.

Una interpretación altamente significativa, desde el punto de vista teórico y político, es la que propone caracterizar el proceso social y político que se abre a partir del golpe militar de Chile en 1973, como una contrarrevolución burguesa "protagonizada por un Estado que, correspondiendo al tipo general de Estado capitalista, asume el carácter de *estado de excepción* bajo la forma de Estado militar".²⁶ La instauración de esta forma de '*Estado militar*' encuentra sus antecedentes causales en crisis de los movimientos nacional populistas desarrollistas (surgidos en el marco de la gran crisis de 1929 y fortalecidos en el período de la segunda guerra mundial). Ellos constituyen el marco político del proceso de industrialización basado en el modelo de sustitución de importaciones, convirtiéndose a la vez en una respuesta transitoria a la crisis del Estado oligárquico

liberal, que conformaba la estructura político-jurídica de la fase primario-exportadora. El papel histórico del populismo estaba basado en una dinámica social que debería haber posibilitado el desarrollo de un capitalismo nacional autosostenido y que se caracterizaba por el enfrentamiento entre las *viejas clases rurales* y las burguesías urbano-industriales, en donde el proletariado se incorporaría en condiciones de subordinación a la amplia alianza que se gestaba en torno de la *burguesía nacional*.

El fracaso de los modelos populistas proviene de sus límites estructurales, que si bien facilitan transitoriamente el congelamiento de las contradicciones de clase, no pueden superar la dinámica de expectativas e intereses de los sectores sociales en los que se apoya y que comienzan a exigir una profundización de los procesos de reformas estructurales. "El populismo jugó un papel ambiguo y contradictorio en lo que respecta al desarrollo de la lucha de clases. Por un lado se convirtió en un obstáculo ideológico al mismo, en la medida en que se desarrolló una política de conciliación de clases - apoyado en un programa nacionalista - entre los antagonistas fundamentales, la burguesía y el proletariado; por otro, sin embargo, con su política de industrialización y desarrollo capitalista, fue generando las bases objetivas para la delimitación más nítida de las clases principales y, por consiguiente, para el desenvolvimiento de la contradicción principal".²⁷ Dicha ambigüedad se constituirá en contradicción irresoluble (en el marco de sus límites estructurales) cuando empiezan a operar los cambios de la estructura económica generados por él y que tenderán a afectar la lógica del capitalismo dependiente nacional. En el marco de esta interpretación, la tendencia al estrangulamiento externo (generado por el aumento de los índices de importación de productos básicos en el proceso de producción de la industria sustitutiva) favorece la tendencia a la reincorporación de las clases sociales tradicionales (oligarquía) con capacidad para producir bienes de exportación generadores de divisas. Esto implica la modificación substancial de la alianza de clases que había sustentado origi-

nariamente al populismo, generando un proceso progresivo de desincorporación de los sectores populares.

La otra alternativa destinada a implementar la provisión de divisas necesarias para minimizar los efectos del proceso de estrangulamiento del sector externo aparecía constituido por el capital internacional y coincide con la fase en la cual dichos capitales tienden a orientarse hacia los países dependientes bajo la forma de inversión directa en el sector industrial. La consecuencia de esta política se traduce en el abandono del proteccionismo económico y del contenido nacionalista del modelo, conduciendo a su desarticulación global según los términos en que había sido concebida su base social de apoyo. La necesidad de aumento de la composición orgánica de capital, como consecuencia del agotamiento de la primera fase del proceso de industrialización, constituye el impulso dinámico para el ingreso del capital extranjero.

El conjunto de estos procesos profundizan la diferenciación interna de las clases dominantes en favor del fortalecimiento de una burguesía monopolista, de carácter oligárquico financiero, que busca redefinir la situación de hegemonía en su favor. Sus intereses objetivos contendrán una diferenciación histórica radical de aquellos otros sustentados por la fracción de la burguesía nacional ligada al mercado interno y que afianzaba su poder en el apoyo de los sectores populares. En este contexto, el período se caracteriza por una constante vacilación del populismo, que por un lado busca profundizar el proceso de reformas para no perder su base de apoyo social y por otro, evitar las alteraciones profundas del proceso de acumulación periférica afectada por la profundización de las políticas redistributivas de los ingresos. Frente a esta crisis fundamental del sistema capitalista perisférico, la respuesta de la burguesía asociada está constituida por el golpe militar y el establecimiento de un Estado de excepción de carácter permanente. Es en esta dirección en la que el proceso político chileno (1970-73) es considerado como la expresión más acabada de las

experiencias nacional-populistas. En la política económica de la Unidad Popular,²⁸ se encuentran implícitos elementos que fueron básicos en la concepción nacional-populista-desarrollista y que fueron redefinidos en el marco de la conceptualización de la '*revolución por etapas*' vigente en los conceptos estratégicos de los Partidos Comunistas de América Latina.²⁹

El conjunto de las políticas globales del gobierno chileno para el período 1970-73 condujo a una profunda desarticulación del capitalismo dependiente, enfrentando directamente al gobierno con los intereses del capital internacional de la oligarquía financiera y del capital agrario. Es en esta dirección, y frente a la incapacidad de utilizar la vía legal o fascista, en la que el golpe de Estado es considerado como un intento por restaurar y fortalecer la unidad del Estado y consolidar sobre la base de las fuerzas armadas el poder del capital internacional, sustituyendo radicalmente los principios de la ideología desarrollista. El resultado final de este proceso es la instauración de un régimen de excepción y en donde el Estado militar aparece como una forma de éste. Tanto la militarización de la sociedad global como la del aparato del Estado se explican por la exigencia de la reestructuración del capitalismo nacional en función de los requerimientos del capital internacional. La forma de Estado de excepción entendida como Estado militar se caracteriza "por el hecho de que el aparato represivo fundamental del Estado burgués, las fuerzas armadas, suprime, subordina y asume las funciones del resto de aparatos propios de aquel Estado, es decir, el parlamento, la justicia, etc." ³⁰ y constituye una reacción desde dentro del propio Estado burgués como intento por superar la crisis de acumulación desarrollada dentro del capitalismo dependiente. La militarización global de la sociedad lo diferencia básicamente de otras formas de Estado de excepción, y aquella se expresa en la pérdida de autonomía relativa de los distintos sectores del aparato estatal y en donde son los militares los que centralizan como integradamente las distintas ramas de éste. Por militarización debe entenderse la irradiación a la sociedad en su conjunto de las características organizativas

e ideológicas que son específicas de las fuerzas armadas en un Estado burgués.

El conjunto general de esta interpretación busca formular una perspectiva teórica o metodológica que sea suficiente para conseguir una práctica política alternativa a las formulaciones vinculadas a la caracterización fascista de los nuevos Estados militares en América Latina. La crítica a la interpretación fascista es el punto de partida de la citada interpretación. La utilización de la categoría de Estado de dictadura militar en el marco del concepto de Estado de excepción adolece básicamente de una incapacidad para explicitar los criterios teóricos de su construcción. Es decir, a nuestro juicio, el análisis de las formas de reestructuración de la dominación burguesa sigue siendo abstracto en la medida de que no incorpora a él los estudios concretos de las distintas fases de las modificaciones de la dominación política. En la interpretación de la dictadura militar como una forma de Estado de excepción está ausente la referencia necesaria al proceso de formación y reformulación del rol de las clases que da contenido específico a los modelos de dictadura militar.

Existe una variante interpretativa en el interior de la concepción de *Estado de excepción bajo la forma de Estado militar* y que se define a partir del concepto de *Estado de contrainsurgencia*.³¹ Su objetivo central está constituido por el intento de conceptualizar el carácter de la estructura estatal que encubre la dictadura militar, distinguiendo la naturaleza específica de los distintos proyectos de las fuerzas sociales que sustentan dichos regímenes. En la formulación histórica de dicho Estado, que se hace visible políticamente a partir de la dictadura militar de Brasil en 1964 y continúa con Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia, se materializa a partir de la confluencia de tres vertientes que expresan un proceso contrarrevolucionario global. La primera de ellas se relaciona con los cambios operados en el interior de la estrategia global de U.S.A. puesta en práctica sistemáticamente desde el gobierno de Kennedy. Ello

implicó un cambio significativo en el pensamiento estratégico norteamericano que evoluciona desde los supuestos de una respuesta global y masiva de enfrentamiento directo con la U.R.S.S., a la de una respuesta de carácter flexible capaz de enfrentar los procesos revolucionarios geográficamente localizables. La doctrina de contrainsurgencia debe ser entendida como la militarización de la lucha política ³² y que conceptualiza el conflicto social de los países latinoamericanos como un fenómeno de guerra de clases en un sentido estrictamente militar. Desde el punto de vista de las sociedades nacionales, los procesos revolucionarios son considerados como procesos cuyas causas son externas a la sociedad misma, el concepto de *infiltración del comunismo* desempeña un papel fundamental en dicho análisis.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la situación actual de las dictaduras militares basadas en la *doctrina de la seguridad nacional* el objetivo fundamental de contrainsurgencia buscaba explícitamente el restablecimiento de la democracia burguesa. De ahí que el proceso militar de contrainsurgencia haya sido entendido como un período excepcional de guerra interna, que mediante la reconquista del apoyo social debería dar cauce al restablecimiento democrático.

Otra vertiente aparece constituida por el proceso a que da origen al desarrollo de la burguesía monopolista y que proviene de transformaciones estructurales de la burguesía nacional como consecuencia de la integración imperialista de los procesos productivos. De ahí que a partir de los años cincuenta se verifique en América Latina un proceso de desarrollo de la burguesía monopolista estrechamente vinculado al capital internacional y que se expresa al nivel nacional en cambios importantes en el bloque político dominante. La ruptura con el Estado populista, entendido como Estado de toda la burguesía, constituye el resultado de este proceso. La característica central del antiguo Estado estaba dada por el hecho de que posibilitaba los procesos de acumulación de capital a todas las fracciones de la burguesía nacional. El nuevo Estado, en cambio, se caracteriza por el establecimiento

de mecanismos selectivos de los procesos de acumulación en función de las fracciones monopólicas nacionales y del capital multinacional. El resto de las fracciones burguesas pasan a depender del dinamismo que logre el desarrollo del capital monopolista. En función de este proceso se abre un profundo reordenamiento de las posiciones de clase y fracciones en el interior de las sociedades nacionales dependientes.

La tercera vertiente del proceso contrarrevolucionario está en relación con la reacción popular a la que se ve enfrentada la burguesía nacional y que se materializa con la revolución guatemalteca del período 1944-54, la revolución boliviana de 1952, la revolución cubana de 1959 y el proceso chileno de 1970-73. El Estado de contrainsurgencia se expresa históricamente en condiciones de estructura, funcionamiento y coparticipación de las fuerzas armadas con el capital monopolista que puede o no tener la forma de una dictadura militar. Su característica fundamental es la hipertrofia del poder ejecutivo en virtud de la existencia de dos sectores de decisiones de este poder. El sector militar, que, a través del Estado mayor de las fuerzas armadas, representa la gestión militar del Estado y que incluye el Consejo de Seguridad Nacional constituido como órgano deliberativo superior que coordina a los representantes de las ramas militares con los representantes directos del capital. El segundo sector es el constituido por la rama propiamente económica. El Consejo de Seguridad Nacional es el punto de confluencia del capital monopolista con la gestión desarrollada por los militares y los sectores tecnoburocráticos, es el lugar de materialización real de la confluencia entre el aparato militar y el capital dominante.

La forma de dictadura militar que asume el Estado de contrainsurgencia no revela necesariamente su carácter, ni evidencia automáticamente la relación entre el capital monopolista y las fuerzas armadas, sino que es necesario trascender su mera estructura formal. El Estado de contrainsurgencia debe ser entendido como el Estado cooperativo de la burguesía monopolista y de las

fuerzas armadas y que puede adquirir formas diversas independientemente del régimen político vigente, su naturaleza específica aparece constituida por su esencia básicamente corporativista. Aun cuando el Estado de contrainsurgencia sea la forma histórica en que se expresa la hegemonía del capital monopolista en los países capitalismo periférico no es excluyente de la integración en el bloque en el poder del resto de las fracciones burguesas, en la medida en que el capital monopolista facilita, en función de su producción económica, las condiciones de existencia del resto de las fracciones burguesas subordinadas.

De ahí que no se puede suponer la existencia de condiciones económicas y políticas concretas para el desarrollo de una estrategia alternativa basada en fracciones no monopolistas de la burguesía obstinadas en suprimir dicho Estado. Ello explica la ineffectividad relativa de las políticas de oposición a las dictaduras basadas en frentes antifascistas. La naturaleza de las contradicciones interburguesas proyectan un nuevo carácter que supera la concepción clásica de un conflicto entre los sectores de la burguesía industrial nacional y la oligarquía. Por lo menos así parece demostrarlo la experiencia histórica de países como Brasil en donde esta forma de Estado ha adquirido un desarrollo más acabado.

Por el contrario, la dinámica de las contradicciones es generada por las divisiones que se plantean en el interior del gran capital, en el seno mismo de la burguesía monopolista. "Así, es posible constatar cómo en Brasil - desde que en 1974, entró en crisis el patrón de reproducción económica basado en la industria de bienes de consumo suntuario -, las luchas interburguesas se dan entre las fracciones nacionales y extranjeras (en lo esencial, eurojaponesas), que tienen asiento en la industria básica y de bienes de capital. Se trata, hoy, de decidir los rumbos de la economía del país, del patrón de reproducción que ésta debe seguir y ello implica reasignación de recursos, ventajas fiscales, crediticias, y estimula la rivalidad entre estos dos sectores del gran capital, lo cual polariza a los demás grupos capitalistas que se

encuentran vinculados a uno u otro sector. Conviene tener presente que no es posible ya, en estas circunstancias, enmascarar las luchas interburguesas tras justificaciones de corte nacionalista ni tampoco encauzarlas hacia formulas del tipo antifascista, ya que ellos dividen por igual a los sectores nacionalistas y extranjeros que operan en el país y enfrentan a fracciones del gran capital".³³

Es el citado proceso, de agudización de las contradicciones interburguesas, el que plantea en el caso de Brasil la exigencia de un espacio político en donde puedan ser dirimidas. Esto genera condiciones que permiten superar la rigidez centralizadora del poder político ejercido por la tecnoburocracia militar y que se expresa en la reformulación de la actividad política de los diferentes sectores que componen el bloque en el poder, pero ello supone necesariamente la exclusión de los sectores populares. De ahí que el proceso de institucionalización de las dictaduras ³⁴ se exprese en conceptos tales como '*democracia viable*', '*democracia arbitraria*' o '*democracia protegida*'. Ello es compatible con las exigencias de las condiciones políticas que posibiliten la reestructuración del capitalismo periférico en función tanto de la gran burguesía asociada como del capitalismo internacional. Lo que se conoce como proceso de apertura política reconoce su límite máximo en la conservación de las características esenciales del Estado de contrainsurgencia, es decir, la participación directa del gran capital en el proceso económico y la subordinación del Estado al control de las fuerzas armadas en donde el Consejo de Seguridad Nacional pasa a desempeñar un papel decisivo en tanto que instancia de confluencia de los intereses del capital monopolista y expresión política formalizada de éste a través de las fuerzas armadas. Es el proceso de convergencia y desarrollo de un gran capital monopolista asociado, que debe ser entendido como oligarquía financiera asociada al gran capital imperialista que asume la forma de capital transnacional y que conduce al establecimiento del Estado militar y que debe ser diferenciado mediante los conceptos de dictadura militar generados en las fases anteriores a este proceso en el interior del ca-

pitalismo periférico en América Latina.³⁵

1.2.3. Conflicto redistributivo y dictadura militar: la revaloración autocrítica del desarrollismo.

En el marco general de las interpretaciones teóricas de Raúl Prebisch y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el proceso de militarización de los Estados latinoamericanos se explica por el conflicto social generado en torno a la pugna redistributiva del ingreso. El marco político de dicho conflicto está representado por el proceso de democratización que se había visto fortalecido a partir del desarrollo económico basado en el modelo de crecimiento *hacia adentro*, es decir, en la industria sustitutiva de importaciones. Creíase que la propia dinámica del capitalismo periférico, "la penetración de la técnica de los centros industriales iría difundiendo sus frutos en todos los estratos de la sociedad, y que ello contribuiría al avance y consolidación del proceso democrático".³⁶ El fortalecimiento material de la burguesía ligada al mercado interno, estrechamente vinculada con los sectores medios y los tradicionalmente marginados por el sistema de dominación oligárquico (basado en el modelo de desarrollo *hacia afuera*) deberían haber garantizado la ampliación y profundización del desarrollo democrático. El análisis del desarrollismo³⁷ referido al capitalismo periférico de América Latina y al papel desempeñado por la pugna redistributiva es válido para el modelo de industrialización sustitutiva y bajo los criterios de un capitalismo nacional, no es operativo según el nuevo carácter del modelo de acumulación sostenido políticamente por las dictaduras militares.

Las concepciones de la CEPAL se basaban en la idea de un sistema centro-periferia. El núcleo fundamental de hipótesis expresaba la existencia de una evolución bipolar de dicho sistema basado en patrones de desarrollo desigual y en diferencia de niveles de productividad e ingresos medios y desiguales estructuras productivas. Dichos patrones tendían a determinarse recíprocamente y dicha determinación fijaba los marcos posibles de acumulación de capital. Ello explicaría las transformaciones estruc-

turales desiguales entre periferia y centro. La corriente estructuralista constituida por el pensamiento de la CEPAL suponía una interpretación del subdesarrollo basada en la idea de que él constituía un proceso específico de desarrollo y no un fenómeno de mera ausencia de crecimiento económico. Esta idea se fundamentaba en la existencia de un sistema económico único, en donde la evolución bipolar provoca el desarrollo de los centros y el subdesarrollo de la periferia. El subdesarrollo de la periferia "deriva de un proceso de transformación estructural de la economía periférica, que se produce en el marco de sus relaciones con las economías centrales, y al cual es inherente la desigualdad entre los dos tipos de economías, en cuanto al grado de penetración y difusión del avance técnico, y los niveles de productividad del trabajo e ingreso real medio".³⁸ Los principales componentes que configuran una teoría del capitalismo periférico en el marco global del esquema propuesto por la CEPAL, se ubican en cuatro direcciones: la teoría de los términos de intercambio; la interpretación del proceso de industrialización; el análisis de los obstáculos estructurales al desarrollo, y la teoría de la inflación.

En la perspectiva del carácter asumido por el desarrollo económico social actual de América Latina y en función de las expectativas formuladas por el conjunto de documentos de la CEPAL y particularmente de Raúl Prebisch, dos son las direcciones autocríticas. En primer lugar, se destaca el hecho de que la penetración técnica de los países centrales no fue capaz de difundir el progreso técnico en la totalidad de los sectores sociales constituyentes de las sociedades periféricas de América Latina y naturalmente ello, en segundo lugar, no se tradujo en una consolidación y fortalecimiento del proceso democrático. Por el contrario, se generaliza la constitución de fuertes regímenes dictatoriales en el seno de las sociedades dependientes nacionales.³⁹ El desarrollo fue excluyente de vastos sectores nacionales y se limitó sólo a otorgar sus frutos a los reducidos estratos de altos ingresos que son compatibles con los hábitos de consumo de los países centrales, por oposición al infraconsumo a

que son sometidos los sectores sociales de bajos ingresos. Este tipo de desarrollo es incompatible con el establecimiento y fortalecimiento de una sociedad democrática. La inserción de una sociedad de consumo en el capitalismo periférico sólo es posible por el mantenimiento y desarrollo de una gran desigualdad en la distribución de los frutos del progreso técnico. Particularmente, se parte del abandono del supuesto según el cual el poder expansivo de las economías centrales fuese capaz de fortalecer el desarrollo integral y socialmente equitativo de la periferia latinoamericana. Este sólo ha sido posible en momentos de crisis de los países centrales y en los cuales la periferia logra sustraerse a las imposiciones del mercado internacional. Estos períodos han constituido momentos excepcionales y por lo general sus relaciones económicas siguen debatiéndose bajo las condiciones de hegemonía de las sociedades centrales.

La penetración de las técnicas productivas de las economías centrales, que imprimen su carácter dominante al desarrollo periférico, se vinculan en términos de una sólida alianza con los sectores nacionales que se benefician del aumento de la productividad que ellas traen consigo. Las posibilidades de cambio estructural del capitalismo periférico se limitan al juego de estos dos poderosos factores (técnicas productivas y sectores sociales beneficiados), y el juego espontáneo de la economía se limita al desarrollo de estas relaciones de poder. La forma operativa por medio de la cual los sectores de ingresos elevados captan los incrementos de la productividad está en relación con el hecho de que el aumento de la productividad y su reducción de costos no se traduce en un descenso general de los precios; básicamente, porque la demanda excede la oferta de bienes finales y es esta demanda persistente la que posibilita extorsionar el incremento de la productividad o excedente. Cuando se habla de captación primaria del excedente por parte de los sectores de ingresos elevados se quiere indicar el hecho de que el incremento de la acumulación da origen a un proceso redistributivo, originado por el aumento de la demanda de trabajo. Este proceso redistributivo, origina una creciente polarización de los diferentes secto-

res sociales concurrentes en el proceso productivo que puede ser corregida en el marco del sistema democrático por el poder político gremial.

El proceso de democratización, a juicio de Prebisch, parece ser la causa fundamental de la crisis redistributiva que alcanza la estructura política del capitalismo periférico en América Latina. Sólo el poder político gremial puede contrarrestar la situación del poder político económico de los sectores de ingresos elevados, sólo mediante él se puede lograr compartir los resultados del aumento de la productividad. De esta forma comienza a desarrollarse progresivamente la incompatibilidad entre las posibilidades institucionales administrativas de los estratos altos para captar el excedente del aumento de la productividad y el desarrollo democrático. Esta incompatibilidad ha tendido a disminuir cuando se han limitado estos aspectos de la democratización, "mucho más si éste llega a sofocarse, sobre todo cuando la crisis redistributiva lleva la desequilibrio de la economía y se vuelve socialmente intolerable. En la contención del proceso la democracia representativa funciona en gran parte de modo formal, y los dirigentes políticos y gremiales se incorporan de algún modo al sistema, articulándose con los estratos superiores y compartiendo con ellos las ventajas del desarrollo. De esta manera contribuyen a morigerar las presiones políticas y gremiales, lo cual permite, sino evitar la inflación, por lo menos lograr que se desenvuelva moderadamente en forma que asegure la regularidad del desarrollo. El empleo de la fuerza, en tal caso, accidental o esporádica no constituye un dato permanente del sistema, salvo de modo potencial".⁴⁰

Si el proceso de democratización afecta a la capacidad de extorsión del excedente por parte de los sectores de ingresos elevados, la crisis redistributiva sólo se resuelve con el establecimiento de un régimen político dictatorial, que funcione nuevamente la redistribución del ingreso a los intereses de la acumulación del capital. Sólo mediante este mecanismo es posible restablecer la tasa de extorsión de excedentes sobre la base de

la reducción de los salarios reales y atenuar su descenso cuando se origine nuevamente la necesidad de ampliación del mercado, vinculada a los problemas de realización, "mientras la expansión monetaria y las devaluaciones vuelven a elevar los precios y restablecen en su plenitud el excedente. Por donde se ve que la restauración de la autoridad monetaria se torna hacedera con un costo político y social considerable. Político es evidente. Y social porque el restablecimiento del excedente no sólo vuelve a dar impulso a la acumulación, sino también al consumo desproporcionado de los estratos superiores".⁴¹

En el marco de las relaciones establecidas entre los grupos hegemónicos nacionales de la periferia y los sectores hegemónicos de las economías centrales, se reproduce un fenómeno similar al que se desarrolla en el interior de las sociedades periféricas respecto de la pugna redistributiva. Se desarrolla una articulación de los intereses del centro con los estratos dominantes de la periferia, lo que origina una relación de participación en el ejercicio del poder de los primeros en el interior de las sociedades nacionales. Cuando se desarrollan procesos de autonomía de la periferia en función de los procesos redistributivos, que tienden a marginar el carácter que le otorga el sistema mundial dominante, se originan las respuestas de fuera contra las sociedades nacionales. Es decir, se reproduce el fenómeno que se da a escala nacional entre los sectores que extorsionan los excedentes crecientes originados por el aumento de la productividad y los amplios sectores excluidos del consumo. "Por donde ha de concluirse que el avance del proceso de democratización también exige transformaciones de fondo en el plan internacional".⁴²

El aspecto más significativo del nuevo análisis de Prebisch es, sin duda, el que hace referencia al proceso de democratización. Establece una relación recíproca entre democracia y desarrollo que es manifiesta en la experiencia histórica de la periferia latinoamericana: el proceso de democratización ha acompañado las transformaciones estructurales y la evolución del desa-

rrollo. La naturaleza específica de esta doble relación recíproca entre democracia y proceso redistributivo incluye la crisis generada por este último. "Acontece que en el desenvolvimiento del capitalismo periférico - debido principalmente a la insuficiente acumulación de capital - se tiende hacia una disparidad creciente entre el avance del proceso de democratización y el proceso económico. Esta disparidad lleva fatalmente al desquiciamiento del sistema, a medida que adquiere más amplitud la espiral inflacionaria. En plena lógica, sólo se encuentran dos formas de corregir esa disparidad: transformar el proceso económico en favor del avance democrático, o sacrificar este último para mantener el proceso económico, asegurando el progresivo desenvolvimiento de la sociedad de consumo".⁴²

1.2.4. Fascismo dependiente.

1.2.4.1. Precedentes teóricos.

Caracterizar la militarización de los Estados latinoamericanos como fascismo dependiente constituye la forma interpretativa dominante en el actual proceso político y social de continente. El concepto de fascismo es enunciado de manera similar a la formulación de Georges Dimitrov en el VII Congreso del Movimiento Comunista Internacional el 2 de agosto de 1935: "la dictadura terrorista abierta por los elementos más reaccionarios, más chovinistas, más imperialistas del capital financiero".

El primero en utilizar dicha categoría para analizar el tema de la crisis económica de América Latina y su vinculación con las nuevas modalidades de acumulación fue Theotonio Dos Santos.⁴³ La relación entre crisis económica y crisis política, en términos de alternativas políticas, aparece materializada por las categorías de fascismo y socialismo. La base material del fascismo dependiente está constituida por la creciente penetración del capital internacional en el sector industrial del capitalismo periférico y su estrategia de abandono de las actividades primarias exportadoras en favor de un monopolio u oligopolio más moderno.

CUADRO I

Inversiones directas Norteamericanas en Latinoamérica, por sectores
Años 1897, 1908, 1919, 1920, 1950, 1960, 1967, en millones de dólares

	1897		1908		1919		1929		1950		1960		1967	
Sector de la Economía	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%
Agricultura	56.5	18.6	158.2	21.1	500.1	25.3	877.2	24.1	()	()	()	-	()	-
Minería y Fundición	79.0	26.0	302.6	40.4	660.8	33.4	801.4	22.0	628	14.1	1155.0	13.1	1218.0	12
Petróleo	10.5	3.5	68.0	9.1	326.0	16.5	731.5	20.1	1233	27.1	2882.0	34.2	2917.0	28
Ferrocarriles	129.7	42.6	110.0	14.7	211.2	10.7	230.1	6.3	927	20.8	()	-	()	-
Empresas de Servicio Público	10.1	3.3	51.5	6.9	101.0	5.1	575.9	15.8	()	()	1131.0	15.7	614.0	6
Manufacturas	3.0	1.0	30.0	4.0	84.0	4.2	321.0	6.3	780	17.5	1610.0	19.0	3301.0	32
Comercio	13.5	4.4	23.5	3.1	71.0	3.6	119.2	3.3	877	19.9	718.0	8.4	1207.0	12
Varios	2.0	0.6	5.0	0.7	23.5	1.2	79.4	2.2	-	-	870.0	10.2	956.0	9
Incluido en comercio y varios														

FUENTE: El financiamiento externo de América Latina, cuadro 15 y Survey of Current Business.
Theotonio Dos Santos, "*Socialismo o Fascismo*", México, 1979.

Es necesario tener presente que desde 1960 a 1967 las manufacturas se constituyen en el principal rubro de la inversión norteamericana en América Latina. "El imperialismo deja de ser un enclave-exportador, al tiempo que se cambia la división internacional del trabajo entre la producción de materias primas, por parte de los países subdesarrollados, y la producción de manufacturas, por parte de los países desarrollados. Frente al crecimiento industrial de América Latina en los años 30 y a las medidas proteccionistas tomadas por los gobiernos de la época, el imperialismo se vuelve hacia el sector manufacturero, se integra hacia la economía moderna y pasa a dominar el sector capitalista industrial de esas economías. Esta es la nueva realidad que se constituye en América Latina".⁴⁴ Y supone la reorganización del sistema de relaciones de clases en la estructura de poder; la oligarquía tradicional se constituye en un sector residual y la burguesía industrial en la clase asociada-subordinada del capital internacional. La pequeña burguesía generaliza su condición de asalariada del gran capital y el capitalismo de Estado se funcionaliza en los intereses del capital transnacional. Como resultado de este proceso, el bloque de clases dominantes integradas al capital extranjero, y particularmente la fracción industrializante, abandona sus proyectos nacionalistas que habían dinamizado la fase de industrialización sustitutiva de importaciones. Esto supone la ruptura de su dominio ideológico ejercido sobre el bloque populista que dinamizaba un proyecto industrialista-desarrollista-nacionalista. Según Dos Santos el retroceso político e ideológico de las burguesías industriales sitúa a los movimientos populares urbanos a la vanguardia del desarrollo nacional, permitiendo la ruptura de los viejos esquemas de clases que habían caracterizado la fase precedente. Es necesario tener presente que el conjunto de esta interpretación deriva de la consideración del carácter específico del conflicto social generado con el golpe militar de Brasil en 1964.

A partir de la necesidad de resolver la crisis a su favor, la burguesía industrial crea y desarrolla condiciones para acen-

tuar el autoritarismo del Estado, y el recurso de la fuerza constituirá un elemento cotidiano en las nuevas condiciones de la vida política. El recurso de la militarización del Estado tiene por objeto "sustituir las formas populistas del control del movimiento popular y garantizar una política de ampliación de la tasa de ganancia para permitir la formación de capitales capaces de crear la gran industria pesada. Creemos encontrar ahí el origen de los recientes golpes militares en América Latina".⁴⁵ El conjunto de estos factores políticos y el proceso de reorganización de la estructura económica basada en la concentración e integración sugieren las tendencias fundamentales en la nueva estructura de poder en América Latina: concentración del poder político y económico en los grupos monopolistas y autoritarismo de Estado como expresión orgánica de dicho poder.

La radicalización del conflicto social es la consecuencia necesaria de este proceso que, en el nivel político, se caracteriza por el debilitamiento de las corrientes nacionalistas y democrático-burguesas. Los regímenes de fuerza adquieren un creciente contenido fascista. Hay un proceso de radicalización creciente de la lucha de clases en donde las opciones ideológicas intermedias pierden viabilidad, dando lugar a soluciones extremas que rompen con la tradición de compromisos que caracterizó el período populista de la fase de industrialización sustitutiva. "De esta forma, hay un compromiso real y cada vez más ideológico entre los sectores conservadores y los fascistas en búsqueda de una formula política autoritaria que suprime la condición de excepcionalidad y acepta la concepción de un nuevo Estado mucho más próximo al Estado fascista que al liberal autoritario".⁴⁶ Sin embargo, los regímenes dictatoriales contemporáneos de América Latina deben ser concebidos como una primera fase de un proceso más amplio de fascistización. Esto permite establecer una diferencia substancial entre las posiciones de Dos Santos y las interpretaciones posteriores hechas en torno a la dictadura militar chilena establecida a partir de 1973. Las dictaduras militares actuales y particularmente la brasileña no son necesariamente fascistas por el mero hecho de constituirse o de

arrasar el período democrático ligado a la fase de la industrialización sustitutiva de importaciones. Para ello es necesario el apoyo de las clases dominantes en un movimiento pequeño-burgués que garantice la efectividad de la neutralización política de la alternativa socialista gestada en el seno del movimiento popular.

Las posibilidades para el establecimiento de un régimen *fascista-colonial-dependiente-atípico* están constituidas por el fracaso en la institucionalización de un sistema político que pueda mediar por sobre los sectores sociales en pugna y de su incapacidad para organizar el apoyo activo de la población en el ejercicio de la represión. "Los fascistas tendrán un papel importante en la articulación de los nuevos golpes que se anuncian en el país (Brasil) y a través de éstos se harán absolutamente necesarios en el nuevo esquema de poder. De allí en adelante, el fascismo iniciará la marcha hacia el poder, posiblemente a la sombra del propio gobierno de transición".⁴⁷ La especificidad histórica del fascismo *dependiente-colonial-atípico*, como lo define Dos Santos, estaría dada por la singularidad diferencial del capitalismo periférico en relación a los procesos fascistas generados en los países centrales. La doctrina de la "Seguridad Nacional" constituye la base ideológica que permite la cohesión política en el interior del poder militar. Su contenido fascista difiere de las concepciones clásistas. La élite tecnocrático-militar sustituye la figura del jefe, el aparato burocrático nacional militar sustituye al partido, unido a la represión y al orden como elementos fundamentales del desarrollo nacional: la grandeza de la nación.

La función de los movimientos fascistas de base se limita sólo al período de desestabilización del gobierno popular democrático. "En estas condiciones es natural que, en segundo lugar, se produzca cierta interdependencia relativamente débil (que sólo alcanza cierto auge en situaciones críticas cuando este movimiento asume un carácter ideológicamente muy difuso) y el Estado fascista dominado por la élite empresarial, militar y tecnocráti-

ca. Tal Estado no puede recurrir sin problemas a mediaciones corporativistas, pues no tiene mayores esperanzas de subordinar orgánicamente a la clase obrera y hasta a la pequeña burguesía, en general descontenta con el carácter claramente entreguista y promonopolista de la política fascista".⁴⁸ El proceso de contradicciones internas que genera la reestructuración de las relaciones de clases en el capitalismo periférico, crea ciertas condiciones que favorecen la actividad política limitada del movimiento popular, obligando al Estado autoritario a apoyarse interminablemente en las actividades represivas que resuelven por la fuerza su ausencia de legitimidad ideológica. De ahí que el fascismo dependiente sea políticamente más débil que el desarrollado en los modelos clásicos.

La falta de legitimidad y el precario apoyo social de estos regímenes permite suponer la existencia en los sectores no monopolistas de la burguesía e incluso en sectores vinculados al gran capital, de la búsqueda de una solución política alternativa a la dictadura. De ahí que la lucha por la hegemonía proletaria, pequeño-burguesa o burguesa en la lucha contra la dictadura adquiera una importancia particular en la fase actual. Aun subsisten sectores nacionalistas-desarrollistas-reformistas que se esfuerzan por hacer viable una tercera alternativa política a las dictaduras militares; parten de la inevitabilidad de la dependencia y proponen un modelo de desarrollo dependiente que negocie la participación del capital extranjero en formulas mixtas. El Estado debería desarrollar una gran capacidad participativa como elemento de contención y negociación con el capital multinacional. Considerando al sector militar como el más significativo sostén del capitalismo de Estado, lo consideran un intento viable en la materialización de dicha política. La posibilidad de dichas alternativas está condicionada por la capacidad de readecuación del capitalismo dependiente a la existencia de reestructuración de dicho capitalismo.

En el período en que Theotonio Dos Santos elabora la interpretación del fenómeno de la dictadura, a partir de la relación

establecida entre la crisis económica (agotamiento del patrón de desarrollo basado en la industria sustitutiva de importaciones ligada al mercado interno) y la crisis política (crisis del Estado populista desarrollista redistributivo), debe enfrentar las interpretaciones dominantes basadas en las concepciones del marxismo de la Tercera Internacional y el rol asignado a la burguesía nacional progresista y que se oponen al sistema de dominación oligárquico. Sin embargo, tanto la reflexión teórica como la práctica política del conflicto social en Brasil han permitido superar la antigua óptica. "Desde el punto de vista estratégico, casi todas las fuerzas de izquierda, incluso el Partido Comunista brasileño, han superado la concepción de un Brasil feudal y han aceptado la evidencia de que la economía brasileña es capitalista en lo fundamental, bajo el control del capital extranjero. La lucha en contra de la dominación del capital imperialista no puede, pues, contar con el liderazgo y mucho menos con el apoyo de una burguesía nacional inexistente, anulándose la hipótesis de una revolución democrático burguesa en el país".⁴⁹

1.2.4.2. Chile: fascismo y dictadura militar.

La caracterización fascista de la dictadura militar establecida en Chile a partir del golpe militar de 1973 constituye la interpretación dominante de dicho proceso. En la discusión sobre la naturaleza de dicho régimen existen diversidades interpretativas que van desde la analogía establecida con el fenómeno fascista europeo, la conceptualización de las FFAA en términos de Partido militar, hasta la definición del régimen autoritario corporativo. Las proposiciones y definiciones de conceptualización del régimen militar que giran en torno a la categoría de fascismo son variadas: fascismo dependiente, fascismo colonial, fascismo militar, fascismo atípico, fascismo militar tecnocrático, neofascismo, etc. El papel central que desempeña la discusión sobre el nuevo carácter del Estado es evidente, por lo menos visto como factor de síntesis del nuevo carácter que asumen los procesos sociales y las transformaciones generadas en el capitalismo periférico chileno a partir de la reordenación de la estructura de hegemonía alcanzada

por la dictadura militar.

Sin duda, dicha caracterización refuerza las consecuencias más visibles de la nueva forma de articulación entre economía y política en la sociedad chilena, y de ahí que temas como el control militar del aparato estatal, la represión establecida como sistema de vida cotidiana, cobran un lugar central en este análisis. Dicha óptica debilita necesariamente la centralidad de la problemática referida a la reestructuración y reordenamiento de las relaciones de producción y las diferentes etapas de la lucha de clases que le dieron origen. En la medida en que el análisis del conflicto social y sus determinaciones en el nivel político estén ausentes, el reduccionismo economicista o politicista de la interpretación de la dictadura chilena puede ejercer su influencia teórica.

La conceptualización fascista se sitúa en el marco global de la teoría sobre el Estado capitalista de excepción en donde la *ilegalidad* de la democracia liberal se transforma en la *nueva legalidad* de dicho Estado. Sin embargo, es necesario tener presente que el fascismo no es un concepto abstracto formal, es una categoría histórica que supone una historicidad del fenómeno establecido en una situación histórica concreta. El fascismo fue un fenómeno estrictamente europeo generado por sociedades que no son comparables a la realidad latinoamericana, toda comparación se fundamenta sólo en utilización de conceptos abstracto-formales.⁵⁰

Subyace también un esquematismo interpretativo que, para América Latina, establece la polaridad abstracta (en el sentido de que no guarda relación estrecha con la especificidad de la situación histórica concreta) definida por la antinomia democracia-fascismo y en donde la democracia corresponde a la normalidad del Estado capitalista periférico y el fascismo el caso de excepcionalidad. Ello supone la validación abstracta, en los análisis del capitalismo periférico, de los esquemas teóricos elaborados a partir de la teoría sobre el Estado capitalista

(incluidas sus formas de excepción) de los países centrales y en donde la especificidad histórica del capitalismo periférico sólo es recuperada a partir de que se le añada un adjetivo: dependiente, colonial, militar, etc. Ello supone también que el fascismo, como forma de excepción del Estado burgués, puede generarse independientemente del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la reorganización fascista de la hegemonía del Estado burgués puede darse en diferentes formaciones sociales con diferentes grados de profundización del desarrollo capitalista. De ahí que existan difundidos estudios que han calificado de *fascismo primario* las dictaduras de Somoza, Stroessner, Trujillo, Duvalier, etc. y que corresponden a los países de menor profundización del desarrollo capitalista dependiente. La misma categoría de fascismo es utilizada para caracterizar las dictaduras militares de Brasil, Chile y Argentina, que expresan una profundización y desarrollo del capitalismo periférico no comparable a los casos anteriormente mencionados.

Es indudable que la especificidad histórico estructural que se genera a partir de la constitución y desarrollo del capitalismo periférico no desempeña un papel significativo en dichas interpretaciones, por lo menos en el momento en que implícitamente se sostiene que las contradicciones de este tipo de capitalismo adquieren el mismo carácter de la crisis que se generó en las economías centrales y que dieron origen al fascismo. De ahí entonces, que la tesis de Jorge Dimitrov y el marxismo del VII Congreso de la Tercera Internacional Comunista ⁵¹ constituya el material teórico básico a partir del cual se construyen los parámetros explicativos de las dictaduras militares. Por lo demás, es necesario tener presente que tanto la dictadura chilena como las del resto de América Latina que han inaugurado esta nueva fase de reorganización de la hegemonía burguesa en el capitalismo periférico, se sitúan en un período distinto del desarrollo del capitalismo monopolista. De manera particular, es necesario hacer hincapié en las explicaciones de orden político que están contenidas en el establecimiento del nuevo modelo de acumulación que se implanta a partir del agotamiento del modelo

sustitutivo de importaciones. El proceso de diferenciación interior de las clases sociales dominantes que tiene como resultado el establecimiento de una fracción autónoma que controla el sector dinámico de la economía y que se entronca con la gran burguesía monopolista internacional es el foco dinámico que explica la rearticulación y restructuración de clases del capitalismo periférico chileno.

El problema central que se plantea en la caracterización fascista ⁵² de la dictadura chilena está particularmente vinculado a la naturaleza conceptual de dicho régimen. La hegemonía de clases sociales por él establecida debe ser considerada como transitoria y excepcional respecto de lo que teóricamente se supone como el desarrollo lógico-histórico específico de la lucha de clases en Chile, implícitamente expresado en sólidos parámetros de la institucionalidad democrática. Ello otorga relevancia a la percepción de la dictadura como proceso de descomposición del capitalismo periférico nacional más que interpretarlo como transformación y reformulación adaptada a las condiciones exigidas en el reordenamiento del sistema capitalista internacional y a la crisis de la hegemonía burguesa nacional cimentada en los proyectos de desarrollo de capitalismo autónomo o socialista como los expresados en el gobierno de la Unidad Popular. Ello naturalmente dificulta la evaluación de las proyecciones histórica y la viabilidad estructural del modelo puesto en práctica por la dictadura. Por tanto, la supuesta inviabilidad del capitalismo en la periferia constituye el argumento implícito más relevante en dicha concepción.

La pérdida del predominio de las fracciones manufactureras internas en favor de la fracción financiera exportadora se expresa, entre otras cosas, en la marginación total del proletariado industrial en la gestión política del Estado. La marginación y subordinación de las fracciones manufactureras internas y la extrema rigidez del esquema político que sustenta el nuevo patrón de hegemonía, asigna a las contradiccio-

nes interburguesas un papel meramente coyuntural. Dicha coyunturalidad está fundamentada en la evidencia de que cualquier alianza con el proletariado nacional genera condiciones para el fortalecimiento de una alternativa política socialista a largo plazo. En ello se expresa la carencia de márgenes históricos del capitalismo nacional fuera del modelo puesto en práctica por la dictadura militar. "La circunstancia de que a pesar de las contradicciones económicas no se llegue a estrategias que sean antagónicas se explica por el predominio en el seno del bloque burgués de contradicciones ideológicas, que determina que los sectores de pequeña-burguesía, incluso de mediana burguesía, no obstante el perjuicio de sus intereses materiales, sean incapaces de definir salidas políticas diferentes ante el temor de verse rebasadas por las presiones populares".⁵³

Si la dictadura militar es considerada como una forma transitoria de reorganización de la hegemonía materializada en el Estado de excepción fascista el problema es definir el carácter que asumirá el proceso de retorno a una institucionalidad democrática, en una condición singular de reforzamiento del papel político de las fracciones manufactureras internas y en oposición a las condiciones específicas concretas del nuevo carácter que asume el desarrollo capitalista periférico. Sin duda, la dictadura militar es más que un mero problema de transformación de las formas de legitimación de las clases sociales dominantes y naturalmente supera la visión de una simple oligarquización interna del bloque dominante. Por otro lado, el establecimiento de formas de dominación represivas faltas de capacidad legítima basada en una alianza pluriclasista con delegación del ejercicio del poder en una clase política, no es condición suficiente para concluir con una inestabilidad intrínseca del régimen.

Desde el punto de vista estrictamente teórico, las consideraciones críticas a la conceptualización de fascismo dependiente en Chile, en opinión de sus autores, han descansado en la construcción de un tipo ideal de óptica weberiana fundamentada en el análisis comparativo histórico entre el fascismo europeo y

la dictadura. Todas las críticas se han basado en la construcción de un concepto *típico ideal* descriptivo de fascismo a partir del cual se selecciona una cantidad determinada de rasgos dominantes de un caso clásico, a partir de los cuales se concluye que los hechos históricos constituyen singularidades de tipo histórico fatalmente reproducibles. De ahí que sea necesario revalorizar los elementos teóricos de la construcción de la categoría histórica de fascismo de acuerdo a la tradición clásica del marxismo. Se trata de hacer operativo, en términos de análisis concreto de la dictadura, a partir de las formulaciones de Dimitrov, el concepto de fascismo entendido como la dictadura terrorista que los sectores reaccionarios del capital monopolista establecen sobre la clase obrera en situaciones de aguda crisis del sistema de dominación. El no constituye una simple dictadura burguesa, sino que se caracteriza por el poder absoluto del sector monopolista por encima de los sectores no monopolistas. Dicha dictadura adquiere un carácter esencialmente terrorista que genera cambios cualitativos en las formas de dominación y de Estado que la separa radicalmente de las formas democrático-burguesas. La clase obrera y sus expresiones políticas constituyen su enemigo principal. "Como ya admite Dimitrov no es la existencia o no de un partido de masas lo que define primordialmente al fascismo, sino su naturaleza de clase y el cambio cualitativo que impone a las formas de Estado".⁵⁴

Las condiciones estructurales básicas que posibilitan el proceso de reestructuración fascista del nuevo patrón de dominación encuentra su raíz en la década de los sesenta. A partir de la cual se supera progresivamente el vínculo predominante de la dominación imperialista sobre el sector primario exportador y se inicia el proceso de industrialización dependiente en donde el capital transnacional pasa a articularse en el seno del mercado interior. Al desarrollo del capital monopolista, es necesario añadir el gran comercio y los complejos agroindustriales de factura más reciente, que han ido creando además una fracción de burguesía monopolista nativa y con ella el elemento interno decisivo para la conformación de un bloque monopolista extranjero-

local que, junto con la burocracia militar y civil vinculadas no sólo política sino incluso económicamente a él, constituye el eje social de una dominación eventualmente fascista, o sea, presta a fascistizar cuando las circunstancias históricas lo requieran.⁵⁵

Esto permite establecer una distinción radical con las dictaduras militares tradicionales que expresaban las crisis de los regímenes oligárquicos producto de la profundización o transición al capitalismo manufacturero interno, o de las tiranías semicoloniales que eran consecuencias de las antiguas situaciones de enclave. Por el contrario, los nuevos regímenes basados en la hegemonía del bloque monopolista se caracteriza por el desplazamiento de las fracciones manufactureras burguesas nacionales y de los sectores terratenientes tradicionales. La demolición del Estado democrático burgués y su sustitución por la instauración del Estado fascista no tiene porqué ser uniforme en todos los países de América Latina. Por el contrario, su especificidad histórica proviene de la singularidad del desarrollo de la sociedad concreta, es decir, del carácter y grado de autonomía de la lucha de clases nacional. "Entre el plano de lo esencial-universal y el de las singularidades concretas existe además un plano intermedio, el de la particularidad, que el análisis materialista no puede pasar por alto".⁵⁶ Dicha particularidad está representada por la condición dependiente de América Latina. Son estas condiciones estructurales las que generan la especificidad del fascismo periférico, a lo cual debe agregarse su incapacidad para sustentarse en un vasto movimiento de masas. El crecimiento de la economía periférica supone la acentuación violenta de las desigualdades sociales. A ello debe sumarse la imposibilidad de establecer una política nacionalista frenada por su condición dependiente y subordinada al desarrollo del sistema capitalista mundial.

El fascismo es considerado como el resultado de la penetración del capital extranjero en los espacios económicos nacionales. Se piensa que el supone como proyecto histórico la desna-

cionalización de la economía y el dismantelamiento del capitalismo de Estado en beneficio de las políticas de privatización de las empresas. Ello permite acelerar la pérdida de autonomía del Estado frente al capital transnacional. La sustitución del viejo capitalismo de Estado es interpretado como una exigencia ineludible del capitalismo monopolista transnacional y de la franja monopolista nacional internacionalista.

1.3. Formas de Estado y el nuevo sistema de relaciones entre economía y política.

Una conclusión lógica de los análisis precedentes, incluyendo las diferentes interpretaciones formuladas en torno a la problemática del autoritarismo de Estado, nos conduce a sostener que la amplitud y diversidad de las interpretaciones sobre el carácter de las dictaduras militares de nuevo tipo expresa la dificultad de conceptualizar el nuevo proceso de relaciones sociales a que ellas dan curso. Es esta situación la que ha planteado un bloqueo teórico real a las interpretaciones sociológicas precedentes: teoría del desarrollo, análisis de situaciones de dependencia. Tanto el proceso de desarrollo de un modelo de capitalismo dependiente industrializado (en el caso de Brasil), como en el modelo primario exportador altamente diversificado (caso de Chile), materializan la ruptura con las problemáticas señaladas por ambas interpretaciones. Es preciso señalar que ambas alternativas implementadas por las dictaduras de Brasil y Chile respectivamente no carecen de dinamismo, ni representa la última fase (como lo han señalado versiones populistas del marxismo latinoamericano) en términos de crisis final del desarrollo capitalista dependiente. Tampoco constituyen las *condiciones objetivas* que preceden necesariamente a la revolución socialista como alternativa post-dictadura.

Por otro lado, es necesario destacar que el patrón de desarrollo asociado de carácter concentrado y excluyente requiere una política burocrático-represiva como modelo político necesario a la reordenación de las relaciones sociales y a la rees-

tructuración del capitalismo dependiente. Los patrones objetivos de desarrollo democrático son antagónicos e irreconciliables con la nueva lógica de reordenación del sistema.

La ruptura de las relaciones entre Estado y sociedad civil constituye una de las características fundamentales en que se basan las relaciones entre economía y política en esta fase de desarrollo del capitalismo dependiente.

1.3.1. Las dificultades teóricas de las generalizaciones referidas a la interpretación sobre el autoritarismo.

La amplitud del debate referido al autoritarismo plantea la necesidad de sintetizar el contenido de dicha discusión. Por un lado, se intentó caracterizar los mecanismos que expresan el sistema de relaciones corporativas entre Estado y clases sociales en la dimensión específica de las formaciones sociales de capitalismo dependiente, lo que constituyó el inicio de una discusión que adquirió la forma conceptual de '*Estado burocrático autoritario*'. La fase siguiente está constituida por el análisis del sistema de relaciones de las clases entre sí. Desde esta perspectiva se puede concluir que el fenómeno del corporativismo, no siendo particularmente específico de esta fase del desarrollo del capitalismo dependiente, desempeña un papel fundamental y es redefinido por la actual situación histórica en términos de mecanismo regulador de las relaciones establecidas por el Estado mismo.⁵⁷ Su función está estructuralmente vinculada a las tareas de transformación económica y social que permiten profundizar el desarrollo del capitalismo periférico, dando curso al establecimiento del patrón de desarrollo asociado. Dicha función es a la vez una respuesta a la crisis económica y social derivada del agotamiento del esquema de desarrollo precedente, formalizada en el populismo o en los intentos por establecer un modelo de desarrollo socialista como el constituido por el caso chileno.

El dinamismo económico impuesto por estas formas autoritarias de desarrollo socialmente excluyentes se fundamenta en la articu-

lación materializada por medio del Estado autoritario entre la propia expansión económica de éste, la economía local y los capitales internacionales. El control social, político y económico adquiere una forma específicamente burocrática. La generalización de estos aspectos imposibilitan frecuentemente la necesaria especificación de los procesos de reestructuración que se materializa en cada uno de los países que, con diversas etapas en su desarrollo económico y democracia política, se sometieron finalmente a los sistemas políticos de tipo dictatorial.

Es necesario tener presente que, en cada uno de estos países, tanto las políticas económicas como el carácter del autoritarismo de Estado y la reestructuración de la dependencia contienen especificidades nacionales que constituyen diferencias sustantivas. En el nivel puramente político, por ejemplo en Brasil, se mantuvo en cierta medida la vigencia de los partidos políticos; en otros países dicho juego político fue simplemente *expulsado de la sociedad*. En Chile el eje central de la reestructuración del capitalismo dependiente estuvo basado en la desestabilización y desnacionalización absoluta de la economía, orientándose al igual que en Uruguay hacia una reinserción primaria exportadora de nuevo tipo. En Brasil en cambio, la dictadura militar ha realizado una industrialización dependiente de magnitud significativa. En Argentina, por otro lado, nada permite suponer que un proceso de industrialización monopólica asegure una integración efectiva de la economía a las exigencias planteadas por la nueva división internacional del trabajo. Por otra parte, el proceso mismo de establecimiento de las formas autoritarias actuales en cada uno de los países contiene diferencias significativas; en Brasil, por ejemplo, esto fue resultado de un esfuerzo prolongado; en el caso de Chile fue inmediato.

Es necesario tener presente que el intento por establecer modelos interpretativos del autoritarismo fue hecho en detrimento de la necesidad de escuchar las críticas elaboradas con ellos relacionadas. Una crítica relevante y poco considerada es la elaborada pro Florestan Fernández en su libro *"Aportamentos*

sobre a Teoria do Autoritarismo",⁵⁸ que rechaza dicho concepto en al medida en que él es el resultado ideológico del continuum democracia-autoritarismo-totalitarismo formal, que impide establecer diferencias entre los sistemas económicos en los cuales dicho autoritarismo se constituye: capitalismo, socialismo, comunismo, encontrándose ausente, por lo demás, la relación entre las clases sociales y los regímenes políticos. Como ejemplo del tipo de análisis rechazado por Fernández se puede considerar la obra de Carl J. Friedrich y Zbigniew K. Brzezinski, "*Totalitarian Dictatorship and Totalitarianism*".⁵⁹ Más aún, este tipo de paradigma está destinado a establecer confusiones sistemáticas entre régimen autoritario, fascismo y transición al socialismo. El régimen autoritario podría ser equivalente al de democracia fuerte (ejemplo de ello es el artículo de J. Linz, "*The Case of Spain*").⁶⁰ A estas críticas debe agregarse la opinión de Cardoso en el sentido de que, a pesar del avance teórico constituido por el debate sobre el autoritarismo, no es posible dejar de lado el carácter militar de éste, poniéndose el énfasis en la dinámica de clases que es rechazada por la dictadura misma; dicha dinámica de oposición existe significativamente aun bajo condiciones de represión de la sociedad civil por parte del Estado.⁶¹ A ello debe sumarse la necesidad de establecer una distinción teórico-metodológica entre Estado y régimen político a partir de una mayor atención al estudio de la dominación de clases y las formas del régimen.

La relación entre Estado y régimen político es suficientemente compleja. Sin embargo se puede sostener que la distinción entre ambos proviene del hecho de que la *autonomía relativa* del Estado existe en relación a una clase social y la del régimen político lo hace en relación a clases y fracciones de clases. Por ello es posible sostener que el régimen político es la forma de existencia del Estado.

La centralidad de la problemática del Estado, presente en casi todas las formulaciones referidas al régimen autoritario y en las posiciones críticas a dichas interpretaciones, provienen

del intento por conceptualizar el poder en términos de solución al conflicto social generado por el desarrollo del capitalismo dependiente. En esta dirección el Estado es reducido a los movimientos sociales que constituyen la base de la transformación y la estructura de éste. De ahí que cuando se plantean los distintos enfoques teóricos, en realidad se está hablando del proceso de regulación de las fuerzas sociales en relación al control de la producción y el consumo. El Estado capitalista bajo las condiciones de las formaciones sociales de capitalismo dependiente no puede ser reducido o formulado a la manera de un concepto abstracto; debe ser permanentemente referido a la fase histórica de la dependencia que se analiza. De lo contrario, los riesgos de un formalismo conceptual son enormes.

Toda conceptualización del Estado capitalista no debe ser ajena al concepto de proyecto histórico de clases sociales. "La idea de proyecto histórico permite concebir la praxis en forma que sirva para delimitar universos de la realidad que, sin restringirse a conceptos formales, permitan realizar en su interior (de estos universos empíricos) análisis concretos sustantivos. Así, por ejemplo, en vez de definir al Estado como simple dominación, se deriva el tener que concebirlo como instancia de regulación de las relaciones entre las fuerzas sociales: lo que es diferente a limitarse a definir al Estado teniendo una composición clasista".⁶² Es esta última idea la que permite superar las consideraciones extremadamente ideologizadas del Estado.

Por medio de la incorporación de la variable designada como *lucha política* en los análisis referidos al Estado es posible hacer comprensible la contradicción interna del Estado planteada entre las exigencias del proceso de acumulación de capital y la legitimidad de éste respecto de la sociedad civil. De ahí que una de las características relevantes del proceso populista que acompañó políticamente al proceso de industrialización y formación del proletariado industrial en la fase precedente haya tenido como objetivo obtener, a través del Estado, la socialización de la acumulación. En el caso latinoamericano, éste no

puede ser considerado como simple resultado histórico de los intereses de los capitalistas sino como el lugar por excelencia del conflicto social. Bajo las dictaduras militares, la contradicción entre acumulación y legitimación carece de una mediación como la ofrecida por la democracia parlamentaria del período desarrollista; no es la sociedad civil la que legitima al Estado, sino que es el orden político el que *legitima* y delimita la sociedad civil. En función de esto, el gran objetivo político de la dictadura es el impedir la existencia y desarrollo de un orden social diferente, este es el papel político específico que desempeña la ideología anticomunista que anima a dichos regímenes. "Impedir un orden comunista legitima el orden establecido en base a la falta de alternativa, de ahí que el Estado autoritario militar sea el único Estado posible para el orden burgués, campo no necesariamente de todas las fracciones de la burguesía".⁶³ Es en esta dirección en la que aquello que se ha designado como *crisis de la democracia*, que dio curso al establecimiento del autoritarismo, debe ser definido como el proceso de disociación entre las exigencias de la acumulación y la legitimidad política del Estado en tanto que garante de ésta. En esta medida, la lucha por el restablecimiento de la democracia puede cumplir un papel revolucionario previo, sobre todo si se considera que los grupos sociales que sustentan a la dictadura tienen por objetivo el mero control del Estado a fin de favorecer la transnacionalización de la economía. En esta perspectiva, los proyectos de la *burguesía democrática* (las fracciones que supuestamente sobreviven a la reestructuración de la economía impuesta por la dictadura) se diferencian substancialmente de los proyectos del movimiento popular. Para las primeras el problema consiste en como articular la sociedad civil en función del sistema político; para el movimiento popular el problema consiste en articular la sociedad política en función de los intereses de la sociedad civil y diseñar una política de fuerzas que conduzca al socialismo. Esta última alternativa no puede eludir la destrucción misma del Estado autoritario, sino considerar que el objetivo final del movimiento popular no es el mero restablecimiento de una democracia representativa, que puede sufrir nuevamente los embates de una próxima

crisis de acumulación. Ella (la democracia) debería ser acompañada por un esquema de desarrollo que de garantías al control democrático de las alternativas que se formulen en crisis económicas futuras.

Sin duda, la decisión política de destrucción del Estado autoritario no queda al margen de una pregunta que es central: cómo pasar desde una sociedad civil democrática, resultado de la superación del autoritarismo, a un Estado de tipo revolucionario que asegura su propio contenido democrático. Las respuestas no son, naturalmente, las formuladas por los movimientos socialdemócratas o por los *socialismo reales*. En función de esta problemática es posible afirmar que la teoría del Estado requiere necesariamente de una teoría sobre la lucha política. Pero el conjunto de estas apreciaciones no logran evitar el hecho de que toda la discusión acerca del Estado, y las diferentes conceptualizaciones que de él se han hecho, padecen de una gran vaguedad e insuficiencia de los conceptos utilizados de donde difícilmente pueden escapar a los reduccionismos economicistas y politicistas. Dichas dificultades evidentemente provienen del esfuerzo centralizador de la lectura de la nueva realidad en torno a un período histórico que es formulado de manera extremadamente coyuntural, que no deja espacio suficiente a una apreciación histórico-temporal más amplia y ello es resultado necesario de la impostergable tarea de formular una estrategia de lucha política inmediata.

Lo que frecuentemente se olvida cuando se plantea el problema de la interpretación de un Estado autoritario o del proceso de transición a un Estado democrático es la relevancia teórica que asume el concepto '*forma de Estado*'. "La forma de Estado designa las condiciones estructurales impuestas objetivamente a la rearticulación entre economía y política en la sociedad. Por cierto, esas condiciones estructurales están determinadas por la acción de las clases y la particularidad de la crisis que de ella se deriva. La acumulación no puede ser vista como la consecuencia natural de un automatismo económico".⁶⁴ El cambio en

las formas de Estado (dictaduras militares, fascismos dependientes, Estados burocrático-atoritarios, Estado de excepción bajo la forma de dictadura militar, etc.) no pueden ser consideradas como el mero reflejo del cambio en determinado patrón histórico de acumulación de capital; los sujetos históricos, en tanto que clases sociales, constituyen el elemento protagónico de toda transformación histórica, de otra manera el análisis sociológico carecería de legitimidad y pertinencia teórica. De lo que se trata es de comprender la forma inserción "de la lucha de clases y de la dominación política, en la armazón institucional del Estado... de manera que logre explicar las formas diferenciales y las transformaciones históricas de ese Estado".⁶⁵

En esta perspectiva es necesario no olvidar que el "análisis de la crisis política con que se articula el pasaje a una nueva forma de Estado (las transformaciones en la acumulación y en la estructura de clases) sitúa la explicación en el plano de las mediaciones entre el movimiento de la acumulación y de las clases y los procesos en el seno de los aparatos de Estado".⁶⁶ La mediación fundamental esta constituida por el concepto de sistema político, lo que es particularmente significativo si se considera la sobredimensión que adquiere el sistema político en las sociedades latinoamericanas, lugar específico de constitución de las fuerzas sociales en las sociedades dependientes.

Es evidente que si se sostiene la idea de que el marco estructural explicativo de la presencia de las dictaduras militares está constituido por el estancamiento del patrón de desarrollo precedente, se hace indispensable la interpretación y descripción del proceso de industrialización y desarrollo que se inicia en Chile con la crisis de los años treinta. En el capítulo siguiente abordaremos estos problemas.

NOTAS

1. La industria sustitutiva de importaciones se caracteriza por la producción de bienes industriales de consumo directo, por la participación del capital nacional sometido a patrones de dependencia tecnológica, control extranjero de los sectores primario exportadores y por el establecimiento de un patrón de importaciones donde predominan los bienes de producción y materias primas industriales.
2. Por antigua división internacional del trabajo entendemos el proceso de penetración del capital internacional en las economías nacionales de América Latina, basado en un modelo de enclave exportador y que asigna a la periferia el papel de productora de materias primas y a las economías centrales el de la producción de bienes industriales.
3. El concepto de capitalismo periférico se define en el marco del concepto '*economía capitalista mundial*'. La economía mundial puede ser definida como un complejo de formaciones sociales (formaciones sociales capitalistas avanzadas, formaciones sociales capitalistas subdesarrolladas y formaciones sociales socialistas) definidas por la dominación y determinación de las naciones capitalistas más avanzadas. Por tanto, la economía mundial debe ser considerada como una articulación de formaciones sociales. En el marco del sistema capitalista mundial esta articulación adquiere el carácter de una relación entre economías capitalistas centrales y economías capitalistas periféricas. Los textos fundamentales sobre esta problemática son:
 - a) Christian Palloix, "*Problèmes de la croissance en économie ouverte*", París, Maspero, 1969;
 - b) Arghiri Emmanuel, "*L'Echange inégal. Essai sur les antagonismes dans les rapports économiques internationaux*", París, Maspero, 1970;
 - c) Samir Amín, "*L'accumulation à l'échelle mondiale*", París, Maspero, 1973;
 - d) Christian Palloix, "*L'économie mondiale et les firmes multinationales*", París, Maspero, 1975;
 - e) Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, "*Dependencia y Desarrollo en América Latina*", Siglo XXI editores, México, 1967;
 - f) Samir Amín, "*Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique*", París, Ed. de Minuit, 1973;
 - g) André Gunder Frank, "*Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*", Siglo XXI editores, México, 1969.
4. Pierre Salama, "*Multinationales et l'état*", Coloquio "Multinationales et développement", París, 1977.
5. Fernando H. Cardoso, "*Estado y Sociedad en América Latina*", Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.
6. Luiz C. Bresser Pereira, "*Les entreprises multinationales et le sous-développement industrialisé*", Revue Tiers Monde, To-

- me XIX, nr. 74, 1978. "L'apparition de l'Etat technobu-reacratice-capitaliste dépendent", Revue de l'Institute de Sociologie. Université Libre de Bruxelles, 1981.
- "Estado e subdesenvolvimento industrializado", Sao Paulo, Edt. Brasiliense, 1977.
7. Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, "Dependencia y Desarrollo en América Latina", Siglo XXI editores, México, 1967.
 8. Sergio de la Peña, "El modo de producción capitalista. Teoría y método de investigación", Siglo XXI editores, México, 1978.
 9. Sergio Zermeno, "Estado y sociedad en el capitalismo tardío", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 1, 1977.
 10. Liliana de Riz, "Algunos problemas teórico-metodológico en el análisis sociológico político de América Latina", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 2, 1977.
 11. Atilio A. Boron, "El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras militares de América Latina", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 2, 1977.
 12. Sergio Zermeno, obra anteriormente citada.
 13. Theotonio Dos Santos, "Brasil: la evolución histórica y la crisis del milagro económico", Editorial Nueva Imagen, México, 1978.
 14. Liliana de Riz, "Formas de Estado y desarrollo del capitalismo en América Latina", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 2, 1977.
 15. Agustín Cuevas, "El Desarrollo del capitalismo en América Latina", Siglo XXI editores, México, 1978.
 16. Sergio Zermeno, "Estado, clase y masas (la doble lógica sociopolítica en sociedades heterogéneas)", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XL, Nro. 4, 1978.
 17. Norbert Lechner, "Poder y Orden. La estrategia de la minoría consistente", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XL, Nro. 4, 1978.
 18. El contenido fundamental de esta interpretación se encuentra en diversos trabajos elaborados por Guillermo O'Donnell:
 - a) "Modernización y autoritarismo", Editorial Paidós, Buenos Aires, 1972;
 - b) "Modernización y golpes militares", Desarrollo Económico Nro. 47, diciembre de 1971;
 - c) "Dependencia y Autonomía", Amarrortu editores, Buenos Aires, 1972;
 - d) "Reflexiones sobre las tendencias del Estado burocrático autoritario", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 1, 1977;
 - e) "Estado y alianzas en Argentina, 1956-1976", Centro de

- Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1974;
- f) "*Estado y políticas públicas. Algunas sugerencias para su estudio*", Buenos Aires, 1974;
- g) "*Estado y Corporativismo*", Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1974;
- h) "*Les tensions de l'Etat bureaucratique-autoritaire et la question de la démocratie*", Revue de l'Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1981.
19. Guillermo O'Donnell, "*Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático autoritario*", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 1, 1977.
 20. Guillermo O'Donnell, obra anteriormente citada.
 21. A. Stepan, "*The military in politics. Changing in Brazil*". Princeton University Press, 1974; S. Huntington and C. Moore, "*Authoritarian politics in modern societies. The dynamics of established one-party systems*", Basic Books, 1970.
 22. "Entiendo por Estado el conjunto de las organizaciones y relaciones que reclama para sí el carácter público como contrapuesto a lo privado sobre un ámbito territorialmente delimitado, y que pretende generalizada conformidad con el contenido expreso de sus disposiciones y lo respalda con un control abrumadoramente superior de medios de violencia física. Esta definición es un mínimo analítico, suficiente para distinguir al Estado de otros referentes. En el análisis más específico, como haré en este trabajo, se hace necesario precisarla con otras características más variantes, tales como las referidas a las fuerzas sociales con las que se vincula, sus impactos sobre la sociedad y la ideología que genera en esta situación histórica". Guillermo O'Donnell, "*Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático-autoritario*", Documento CEDES/CLACSO, Nro. 1, 1975, pág. 55.
 23. En Weber el Estado "es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima, Max Weber, "*Economía y Sociedad*", Fondo de Cultura Económica, México 1974, Tomo II, pág. 1056.
 24. Guillermo O'Donnell, "*Estado y Corporativismo*", Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, 1974.
 25. Liliana de Riz, "*Formas de Estado y Desarrollo del capitalismo en América Latina*", Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 2, 1977.
 26. Tomás Amadeo Vasconi, "*Gran capital y militarismo en América Latina*", Serie Popular Era, México, 1978.
 27. Vasconi, obra citada, pág. 21.
 28. "*La Estrategia Económica del Gobierno de Allende*", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1972.
 29. Tomás Amadeo Vasconi, obra citada anteriormente, pág. 25.

30. Tomás Amadeo Vasconi, obra citada anteriormente, pág. 23.
31. Ruy Mauro Marini, *"La cuestión del Estado en las luchas por el socialismo en América Latina"*, Seminario de Estocolmo, 1979.
32. Andre Gunder Frank, *"The Arms Economy and Warfare in the Third World"*, Seminario de Estocolmo, 1979.
33. Ruy Mauro Marini, obra citada anteriormente, pág. 18.
34. Julia Jumme, *"Le Brésil à l'épreuve de la libération"*, Le Monde Diplomatique, Nro. 34, febrero de 1980.
35. Tomás Amadeo Vasconi, *"Los Estados militares en América Latina: papel y alternativas de cambio"*, Seminario de Estocolmo, 1979.
36. Raúl Prebisch, *"Crítica al capitalismo periférico"*, Revista de la CEPAL, primer semestre de 1976, pág. 7.
37. El desarrollismo constituye el proyecto político económico de la fracción industrializante de la burguesía nacional ligada al mercado interno. El se implanta a partir de la crisis de los años treinta sobre la base del desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones y que generó lo que se definió como "desarrollo hacia adentro", en oposición a la fase anterior del desarrollo del capitalismo periférico designada como "fase primario exportadora". El análisis teórico del desarrollismo se encuentra en las publicaciones y estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dirigida por Raúl Prebisch.
38. Octavio Rodríguez, *"Sobre la concepción del sistema Centro Periferia"*, Revista de la CEPAL, primer semestre, 1977, pág. 203-204. También se puede ver el libro del mismo autor, *"La teoría del subdesarrollo de la Cepal"*, Siglo XXI editores, México, 1980. En esta misma dirección es necesario considerar el libro de Gabriel Guzmán *"El desarrollo latinoamericano y la Cepal"*, Editorial Planeta, Barcelona, 1976.
39. Raúl Prebisch, obra anteriormente citada.
40. Raúl Prebisch, obra anteriormente citada, pág. 16.
41. Raúl Prebisch, *"Hacia una teoría de la transformación"*, Revista de la CEPAL, abril, 1980.
42. Raúl Prebisch, *"Crítica al capitalismo periférico"*, Revista de la CEPAL, primer semestre de 1976, pág. 18.
43. Theotonio Dos Santos, *"Crisis económica y crisis política"*, Centro de Estudios Socio-económicos, Universidad de Chile, 1966.
44. Theotonio Dos Santos, *"Socialismo o fascismo"*, México, 1979, pág. 39.
45. Theotonio Dos Santos, obra anteriormente citada, pág. 40.
46. Theotonio Dos Santos, obra anteriormente citada, pág. 71.

47. Theotonio Dos Santos, obra anteriormente citada, pág. 309.
48. Theotonio Dos Santos, obra anteriormente citada, pág. 83.
49. Theotonio Dos Santos, obra anteriormente citada, pág. 530.
50. Atilio A. Boron, *"El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras militares en América Latina"*, Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 2, 1977.
51. George Dimitrov, *"L'offensive du fascisme et les tâches de l'Internationale Communiste dans la lutte pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme"*, Informe al VII Congreso de la Tercera Internacional Comunista, 2 de agosto de 1935.
52. Atilio A. Boron, obra citada anteriormente, pág. 512.
53. Hugo Zemelman, *"Los regímenes militares en América Latina. Problema conceptual? (Notas para una discusión sobre la hegemonía burguesa)"*, Revista Mexicana de Sociología, Vol. XL, Nro. 3, 1978, pág. 83.
54. Rodny Arismendi, *"Reflexiones sobre el momento actual en América Latina"*, México, enero, 1977.
55. Agustín Cueva, *"La cuestión del fascismo"*, Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 2, 1977, pág. 472. También se puede ver su libro, *"El desarrollo del capitalismo en América Latina"*, Siglo XXI editores, México, 1979.
56. Agustín Cueva, *"La cuestión del fascismo"*, Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIX, Nro. 2, 1977, pág. 475.
57. Fernando H. Cardoso, *"El atolladero de los regímenes autoritarios: el caso de Brasil"*, Revista Mexicana de Sociología, Año XLII, Vol. XLII, Nro. 3, 1980. También se puede ver: *"Les impasses du régime autoritaire: le cas Brésilien"*, Problemes d'Amerique Latine, Nros. 4545/4541, París, 1980.
58. Florestan Fernández, *"Aportamentos sobre a Teoria do Autoritarismo"*, Editorial Hucitec, São Paulo, 1979.
59. Harvard University Press, 1965.
60. Publicado por R. Dahl en *"Regimes and Oppositions"*, Yale University Press, 1974.
61. Fernando H. Cardoso, *"On the characterization of Authoritarian regimes in Latin America"* editado por David Collier en *"The New Authoritarianism in Latin America"*, Princeton University Press, 1979.
62. Hugo Zemelman, *"Acercas del estudio del Estado: notas metodológicas"*, Revista Mexicana de Sociología, Nro. 3, 1979.
63. Hugo Zemelman, *"Democracia y autoritarismo"*, Revista Mexicana de Sociología, Año XLII, Vol. XLII, Nro. 3, 1980.
64. Liliana de Riz, *"La transformación del Estado: bosquejo de una línea de investigación de las sociedades latinoamericanas"*, Revista Mexicana de Sociología, Año XLII, Vol.

- XLII, Nro. 1, México, 1980, pág. 444.
65. Nicos Poulantzas, *"Estado, poder y socialismo"*, Siglo XXI editores, México, 1979, págs. 150.
66. Liliana de Riz, obra anteriormente citada, pág. 446.

CAPITULO SEGUNDO

Chile: Sociedad, política e industrialización.

El establecimiento de la dictadura militar en Chile en septiembre de 1973 ha puesto fin a la continuidad relativa de una política económica que rigió en Chile desde la crisis del sistema oligárquico y del modelo de desarrollo primario exportador en los años treinta. Dicha política económica se había concretado en una estrategia de industrialización conceptualizada como desarrollo por sustitución de importaciones, que tenía por objetivo la materialización de un modelo de desarrollo capitalista autosostenido.¹ El Estado autoritario instaura un proceso de reversión brusca del estilo de desarrollo precedente a partir de un esquema de libre comercio de inspiración monetarista. Con dicho esquema busca resolver el estancamiento del desarrollo sustitutivo de importaciones que se verifica claramente en el término de la década de los cincuenta e inicio de los sesenta. Por otra parte, dicho modelo intenta erradicar estructuralmente las posibilidades de éxito de un modelo socialista como el que se había establecido en el período de 1970-73. El esquema de industrialización (dentro de la óptica del monetarismo) no sólo había conducido al estancamiento como resultado del proteccionismo desmedido con que operaba la industrialización, sino que también tenía como consecuencia el desarrollo estructural de la clase obrera industrial en términos de clase nacional, condición histórica material de la posibilidad del establecimiento del socialismo. Por tanto cualquier esquema de reestructuración de la crisis que vivía el capitalismo chileno debía considerar necesariamente la eliminación definitiva de las causas estructurales del peligro comunista: burguesía nacional ligada a la industrialización sustitutiva y proletariado industrial. El establecimiento de un modelo exportador altamente diversificado y la eliminación del proteccionismo que garantizaría la desindustrialización creciente constituían la solución evidente.

La crisis que la sociedad chilena presenta en 1970 puede ser definida como la de un desarrollo capitalista dependiente que tiene una doble dimensión: incapacidad para continuar con un crecimiento industrial constante, autosostenido y de repartición equitativa de sus frutos y, por otra parte, la incapacidad del Estado para asegurar la dirección política estable que había caracterizado a sus fases precedentes de compromiso en torno a la industrialización. Al igual que en otros países de América Latina el reemplazo del Estado oligárquico, a que dió curso la crisis del modelo primario exportador en los años treinta, ² significa la pérdida del control directo de la influencia sobre el Estado por parte de los sectores sociales tradicionalmente hegemónicos, en favor de la influencia política de los sectores medios y de los partidos políticos de centro. La estabilidad política a que ellos dieron curso se fundamentaba en su posición reformista destinada a incentivar la industrialización como estrategia alternativa a la crisis de los años treinta en la profundización de la democracia política y social que favorecía las vinculaciones entre la clase obrera representada por las clases medias ligadas a la industrialización, la burguesía industrial emergente y fortalecida por el nuevo esquema de desarrollo y el incentivo del crecimiento de las funciones del Estado en el desarrollo, y en la urbanización creciente. De ahí que el centro político que fue constituido esencialmente por las capas medias urbanas se convirtiera en el referente político esencial de la industrialización en Chile. Es evidente, que la complementariedad entre el proceso de democratización, que acentuaba tanto la movilización social como la participación, y el esquema económico de industrialización sustitutiva se veía favorecida por las políticas urbanas de distribución de ingresos, que constituían el requisito indispensable para la constitución de un mercado interno requerido por la industria nacional. Pero ello constituía a la vez la dinámica esencial del conflicto social, que se expresaba en términos de una contradicción entre los requisitos de la acumulación de capital y la distribución de ingresos y crecimientos de los salarios a los niveles de constitución de un modelo de consumo favorable a la ampliación del mercado interno.

El desplazamiento de la hegemonía de los sectores dominantes tradicionales en favor del centro político representado específicamente por el Partido Radical hasta 1952 redefine las funciones políticas y las posibilidades de influencia directa en el ejercicio del poder por parte de las clases dominantes tradicionales. Ellas deben revalorar la política parlamentaria como posibilidad de disminuir el *radicalismo* de los programas de los gobiernos reformistas de centro; deben aceptar las condiciones de participación política subordinada al centro cuando desean participar en el gobierno como alternativa a una alianza de centro izquierda y deben aceptar, por lo menos hasta 1952, la condición hegemónica del centrismo representado por el Partido Radical. Sólo en 1958, con la elección del candidato conservador Jorge Alessandri, la derecha política logra superar transitoriamente el bloqueo defensivo que le había sido impuesto por el proceso de industrialización y modernización.³

La fase siguiente de la política de la derecha estará representada por el establecimiento del Estado terrorista de la dictadura militar en 1973. Es la hegemonía del centrismo político ejercida desde los años treinta sobre el proceso de industrialización de inspiración nekeynesiana, de acuerdo como será sistematizado por Prebisch y la CEPAL, la que crea las condiciones para que, a través de las funciones que se le atribuyen a la democracia política, se empiece a formalizar un nuevo tipo de Estado que ha sido conocido como Estado desarrollista o Estado de compromiso. El jugará un papel significativo no solamente como rector de las políticas económicas, sino también como regulador de las desigualdades sociales en una versión subdesarrolladas del *Welfare State*.

En este contexto el esquema de legalidad democrática ejercía funciones esenciales en la permanencia del Estado de compromiso y en el fortalecimiento del proceso de industrialización. Ella institucionalizaba el conflicto social que el propio desarrollo generaba, sometiéndolo a los criterios de la negociación política, bajo el principio de limitación, exclusión y acceso a la lu-

cha política de cada uno de los grupos sociales. El desarrollo de una capacidad progresiva de presión de cada uno de ellos estaba en la base de esta función esencial de la democracia en el período desarrollista. La universalización del principio de negociación se concretaba institucionalmente en una distribución relativa de la influencia de cada uno de los grupos sociales respecto del Estado mismo. El carácter proporcional del sistema electoral acentuaba la vigencia del principio de negociación en la medida en que incentivaba la participación de los grupos sociales en el sistema y, a la vez, era difícil la constitución de mayorías claramente dominantes. Ello permitía y favorecía una dinámica siempre gradualista en los procesos de cambio y reformas estructurales necesarias al fortalecimiento del desarrollo y de la distribución equitativa de sus frutos.

Naturalmente el desarrollo del sistema político y de la democracia de negociación que cubre en Chile el período de 1938-73 fue, al igual que el proceso de industrialización que constituye su marco estructural, esencialmente discontinuo. No existe en él una tendencia de profundización continua. Hay una primera fase que va de 1938 a 1947 que se constituye como un proceso de intensificación gradual de la democratización política al ritmo de la industrialización. Existe una segunda fase que va de 1947 a 1958 en que se establece un *modelo de democracia protegida* que garantiza la exclusión política del sistema de los grupos populares y de los sectores obreros, que se inspira en los principios de la guerra fría. La última etapa corresponde al período 1958-1973 en que se retoman los procesos de profundización de la democracia. Ella se caracteriza por intentos de superación de los desajustes del Estado, derivados de la construcción progresiva en su interior de la influencia de los sectores populistas y reformistas modernos y de las dificultades económicas generadas por el estancamiento progresivo del patrón de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones.⁴

Sin embargo en los doce años que cubren el período de 1958 a 1970 se verifican cambios fundamentales en la línea de reciproci-

dad entre desarrollo y democracia establecidos por el centrismo político desde 1938. En primer lugar, con la elección presidencial de 1958 en favor del candidato de los sectores sociales conservadores, el centrismo político tradicional representado por el Partido Radical debe aceptar por primera vez una participación en condiciones de subordinación a los sectores de la derecha tradicional. En segundo lugar, con la elección presidencial de 1964 y la victoria del candidato de la Democracia Cristiana Eduardo Frei se produce un cambio radical de la dirección política del centrismo en Chile. Dicho gobierno intenta una modernización capitalista radical de las tendencias históricas del desarrollo de la economía y la sociedad. Pero es curiosamente como resultado de dichas transformaciones, inspiradas por lo que se dió en llamar la *revolución en libertad*, que se cierra en ciclo histórico de hegemonía del reformismo centrista que había dominado el proceso de industrialización.

El programa demócrata cristiano de modernización del sector industrial, fundamentado tanto en la monopolización e internacionalización de la economía como en la introducción de las innovaciones tecnológicas necesarias, condujo a la enajenación del apoyo político de los sectores de la burguesía industrial que junto a la influencia norteamericana habían posibilitado la elección de Eduardo Frei. Por otra parte, la puesta en práctica del proceso de reforma agraria marginó definitivamente el apoyo que habían dado al gobierno los sectores vinculados a la oligarquía agraria. Es esta situación la que crea las condiciones políticas necesarias para la reagrupación política de la derecha tradicional en torno a un esquema de modernización de su propia gestión política, que le permita superar el bloqueo defensivo a que había estado sometida desde el inicio del proceso de industrialización sustitutiva. A la vez, es el momento en que ella inicia la formalización de un esquema político que asocia el estancamiento económico a la existencia de la democracia; el sistema político democrático constituirá una de las causas esenciales de la crisis económica del sistema.

De ahí que la sociedad chilena a la altura del año 1970 estuviera confrontada a dos alternativas para superar la crisis y estancamiento del modelo de desarrollo (la representada electoralmente por el candidato Jorge Alessandri y las de Allende y Tomić que no tenían diferencias substanciales en sus programas políticos), y la crisis consecuente del sistema político generado por el Estado de compromiso en torno de la industrialización. La primera alternativa estaba constituida por el modelo autoritario de la derecha que suponía la erradicación del sistema democrático en la medida en que él dificultaba los procesos de acumulación de capital a partir de las políticas de participación y de distribución de ingresos. Sin embargo la puesta en ejecución de dicha alternativa sólo era posible a partir del establecimiento de un Estado autoritario que era dificultado por la legitimidad que había ganado el esquema de democratización en el seno de la sociedad chilena. La segunda alternativa estaba representada por lo que se dió en llamar *vía chilena al socialismo* o proyecto de *democratización no capitalista*, que consistía en que, a partir de la profundización de la democracia en su doble dinámica de igualdad social y sistema político, logrará alterar radicalmente el contenido de clase del sistema de dominación vigente. Dicho modelo debía regirse por el principio de continuidad y ruptura. La continuidad le estaba dada por la profundización de la democracia misma en torno a su carácter redistributivo de la riqueza social y al principio participativo del sistema político. El principio de ruptura aparecía contenido en el intento de superar el proceso de desarrollo de capitalismo dependiente. Ambas dinámicas daban contenido a lo que se designó como transición al socialismo durante el período de la Unidad Popular y la presidencia de Salvador Allende. Ambos proyectos fueron intentados y consecuentemente derrotados.

El esquema de asociación entre democracia y estancamiento elaborado por los grupos empresariales que aspiraban a un modelo de profundización del capitalismo industrial dependiente sólo tiene resonancia en el inicio del período autoritario de septiembre de 1973 a julio del año siguiente, en que se plantea la

necesidad de un programa gradual de estabilización económica bajo la inspiración del ministro Fernando Leniz. Dicho esquema es derrotado en el interior del equipo económico de la dictadura cuando logra imponerse el sector de inspiración monetarista más ortodoxo basado en los modelos económicos de la Universidad de Chicago. La alternativa representada por la Unidad Popular es militarmente derrotada el 11 de septiembre de 1973. El estudio y profundización analítica de esta coyuntura dramática en la historia de nuestro país hace necesario la conceptualización de los procesos históricos que animaron el conflicto social y político del proceso de desarrollo, y ello debería concretarse en un análisis histórico sociológico que dé cuenta de los procesos que precedieron a dicha coyuntura; tal es el objeto de las páginas siguientes.

2.1. El impacto de la crisis mundial de los años treinta y la reestructuración dependiente del patrón de desarrollo.

Los efectos de la crisis mundial de los años treinta, y su impacto sobre el modelo primario exportador que había caracterizado el desarrollo del capitalismo dependiente en Chile, fue precedido por la crisis de la economía salitrera del período 1925-27, resultado de la competencia establecida por el salitre sintético.⁵ De allí que la crisis mundial no hizo más que acentuar dramáticamente la ya deteriorada economía nacional.⁶ Según el informe de la Liga de las Naciones, la economía chilena era la más afectada por la "gran depresión", lo que se ilustraba con una reducción drástica de su volumen de exportaciones equivalentes al 88% para el período 1929-32 y la contracción en un 50% de su capacidad de importación para el mismo período. La dependencia de la economía chilena respecto de sus exportaciones mineras (salitre, y cobre en menor medida) era absoluta, de manera que dicha crisis comprometía la totalidad del equilibrio económico y social en el cual se basaba el esquema de dependencia primario exportador. El empleo generado por el sector minero era esencial para asegurar la estabilidad de la dominación social en las regiones agrarias del centro del país, en la medida en que él

constituía una posibilidad de absorción relativa del excedente creciente de mano de obra en las regiones agrícolas.

CUADRO II

Cuarenta y nueve países exportadores de productos primarios clasificados por el porcentaje de caída de las exportaciones.

1928-29 a 1932-33

Porcentaje de caída de las exportaciones	País
Sobre 80	Chile
75-80	China
70-75	Bolivia, Cuba, Malaya, Perú, Argentina, Canadá, Ceilán, Indias Occidentales Holandesas, Estonia, Guatemala, India, Estado Libre de Irlanda, Latvia, México, Slam, España.
60-65	Brasil, República Dominicana, Egipto, Grecia, Haití, Hungría, Holanda Nicaragua, Nigeria, Polonia, Yugoslavia.
55-60	Dinamarca, Ecuador, Honduras, Nueva Zelanda, Australia, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Finlandia, Panamá, Paraguay.
45-50	Noruega, Persia, Portugal, Rumania.
30-45	Lituania, Filipinas, Turquía, Venezuela.

FUENTE: Triantis, S.G. *Cyclical Changes in Trade Balances of Countries Exporting Primary Products, 1927-1933*, University of Toronto Press 1967, pág. 19.

La competencia establecida en el mercado internacional entre el salitre chileno y el nitrato sintético se acentuó radicalmente durante el período de la crisis comprometiendo definitivamente la viabilidad del esquema de economía de enclave que había caracterizado el período chileno de dominación oligárquica.⁷ Por otra parte, es necesario considerar que los efectos

de la crisis se extendieron predominantemente sobre la producción chilena de nitrato natural con costos comparativos de producción más altos que los del nitrato sintético. El colapso de la industria salitrera chilena multiplicó sus efectos en la restante estructura económica y social del país. Como resultado de su paralización se reduce el empleo desde 59.900 puestos de trabajo en 1928 a 8.394 en 1933.

CUADRO III

Chile: ocupación, producción y precios de la industria salitrera +

AÑOS	OCUPACION (número de personas)	PRODUCCION (en miles de toneladas)	PRECIOS (en dólares por toneladas)
1928	59.900	3.280	67,7
1929	58.700	3.000	62,9
1930	44.100	1.592	53,0
1931	16.563	1.226	41,1
1932	8.711	694	23,5
1933	8.394	438	22,3
1934	14.777	812	22,3

+ *Anuario Estadístico de Chile y Anuario de Minería.*

FUENTE: Hurtado Ruiz Tagle, Carlos, *Concentración de población y Desarrollo Económico. El Caso Chileno.* Instituto de Economía, Universidad de Chile, 1966, pág. 173-174.

La situación de las exportaciones de cobre no se encontraban en una situación diferente a la de las exportaciones del salitre; en ella se produce una caída de los índices de producción de 320 mil toneladas en 1929 a 162 mil en 1933. Esta situación se refleja directamente en el deterioro radical de los ingresos del Estado en concepto de exportaciones y una caída de sus ingresos desde 55 millones a 28 en concepto de impuesto sobre la renta y a la vez un aumento substancial de la deuda externa que alcanza a los 420 millones de dólares, lo que conduce a la suspensión del pago de la deuda acompañado de una reducción drástica del gasto fiscal, que se expresa en la acentuación del desempleo y las re-

bajas salariales.

Por otra parte, la situación de la producción industrial para el mismo período no era envidiable. Entre 1930 y 1931 se produce una caída de la producción equivalente al 30,2%. En 1932 se verifica una recuperación del sector industrial de un 12,4% y en 1933 de un 9,9%. Es decir, en el período 1932-33 se verifica un índice de recuperación equivalente sólo al 22,3%.

CUADRO IV

Chile: Índice de la producción industrial (1927-1929: 100)

MESES	AÑOS				
	1929	1930	1931	1932	1933
Enero	99,0	110,0	91,5	72,3	113,8
Febrero	112,8	119,5	91,5	81,1	116,6
Marzo	113,0	115,5	101,9	99,0	115,4
Abril	115,7	123,0	110,6	97,0	108,9
Mayo	120,0	120,1	94,8	97,6	109,7
Junio	116,9	118,4	93,1	95,2	106,3
Julio	118,3	117,4	91,7	99,2	97,6
Agosto	122,4	129,2	68,4	102,9	112,6
Septiembre	117,8	117,9	72,3	102,8	107,3
Octubre	128,2	119,1	75,0	115,9	110,1
Noviembre	122,4	114,1	76,9	122,2	109,4
Diciembre	116,3	102,2	75,8	107,6	103,5
PROMEDIO	116,9	117,2	87,0	99,4	109,3

FUENTE: Ortiz, Eduardo, *La Gran Depresión y su impacto en Chile 1923-1933*, Vector, Centro de Estudios Económicos Sociales, Santiago de Chile, 1982.

A ello debe agregarse el deterioro de la situación del sector agrícola cuyas dificultades no provienen necesariamente de la crisis y la recesión mundial. Este se vincula directamente con la estructura de la propiedad agrícola expresada en la polaridad latifundio-minifundio, a la cual se liga el corolario de deficiencias sociales. El sector agrícola era dominado por un grupo oligárquico de 626 grandes propietarios de más de 5000 hectáreas y que en conjunto ejercían su propiedad sobre 14 millones hectáreas, que correspondía a una evaluación de 1.051.025.833 pesos con un promedio de 23.141 hectáreas de superficie. En oposi-

ción a ello 129.227 propietarios controlaban 608.785,3 hectáreas, lo que correspondía a una avalúo de 752.214.707 pesos y a una superficie media de 1,6 hectáreas.⁸

Por lo demás, el conjunto de la economía chilena se encontraba mayoritariamente controlada por el capital exterior. Según las estadísticas de la CEPAL el capital exterior había aumentado de 723.000.000 dólares en 1925 a 1.017.000.000 en 1930, concentrados predominantemente en la minería, el comercio y la industria manufacturera.

CUADRO V

Chile: inversiones extranjeras promedio por períodos

PERIODOS	Inversiones extranjeras en tanto por ciento del capital existente
1925-1929	36,0
1930-1933	52,1
1934-1939	39,9
1940-1945	24,7
1946-1950	21,2
1951	21,1

FUENTE: Ortiz, Eduardo, *La Gran Depresión y su impacto en Chile 1923-1933*, Vector, Centro de Estudios Económicos Sociales, Santiago de Chile, 1982.

Es evidente que la crisis mundial de los años treinta marca en Chile la transición al capitalismo industrial dependiente y el abandono del capitalismo de enclave basado en el modelo primario exportador.⁹ Todo eso en la medida en que la crisis de la economía salitrera planteaba la formulación de dos modelos alternativos. El primero de ellos de carácter conservador consistía en sostener la necesidad de mantener la economía ligada al sector exterior en espera de la reactivación del mercado internacional, acentuando las posibles ventajas comparativas de la economía chilena en relación a una mayor especialización en el comercio mundial y preservado el esquema de dominación vigente caracterizado por la presencia del Estado oligárquico. El segundo consistía en el incentivo y desarrollo de las actividades económicas orientadas

al mercado interno, basado fundamentalmente en un esquema de industrialización que debería beneficiarse y apoyarse en un sistema de barreras aduaneras que protegiera la producción interna de los mecanismos de libre importación. La economía chilena siguió la segunda vía después de haber intentado el primer cambio. Para los sectores dominantes vinculados a la economía salitrera este dilema se expresa en el intento por superar la crisis manteniendo el mercado americano, fundamentándose en una política de desvalorización monetaria para favorecer la competitividad de las exportaciones. Otros se declaran partidarios de la ampliación del mercado interno de la transferencia a otros sectores productivos del rol dinámico de la economía, contrarios a la desvalorización monetaria y partidarios del proteccionismo. Pero por otra parte la crisis del modelo primario exportador se refleja al nivel del Estado en una necesidad de apertura de éste hacia la participación de nuevos sectores sociales y hacia una mayor autonomía institucional. "El Estado pasó a ser el lugar de negociación con el imperialismo, al mismo tiempo que la instancia de negociación y compromiso progresivamente abierta a nuevas fuerzas sociales. Garante de la reproducción de la sociedad - el papel del ejército fue estratégico en el mantenimiento de la disciplina de la fuerza de trabajo en el énclave y el arbitraje político en las coyunturas de crisis - el Estado se expresó más como principio de unificación de la sociedad que como agente de transformación de la misma".¹⁰

Sin embargo, existía un marco teórico más amplio que expresaba la discusión teórica respecto de la conceptualización de esta crisis y de sus efectos sobre un capitalismo dependiente como el chileno. En primer lugar, es necesario destacar el inventario de teorías explicativas elaboradas por Gottfried Haberler a solicitud de la Sociedad de Naciones en septiembre de 1930. Algunas de ellas hacían referencia en el marco de una perspectiva monetarista a la idea de que el ciclo económico se explicaba por la expansión y contracción del crédito bancario, la interpretación que ponía énfasis en la sobrecapitalización que explicaba la crisis por el desarrollo excesivo de la industria productora de bienes

de equipo, las explicaciones subconsumistas de inspiración malthusiana que sostenían que la quiebra del equilibrio entre la capacidad de producción y la de consumo estaban en la base de la crisis, etc. Para el marxismo, representado por Varga, teórico del Komintern, la gran depresión se explicaba como una de las innumerables crisis periódicas del capitalismo como resultado de la sobreproducción. Por la "apropiación de la plusvalía producida por los obreros, por la acumulación y centralización, el capital concreta y socializa la producción creando las premisas materiales del socialismo y agrava progresivamente la contradicción entre el carácter social de la producción y apropiación privada, situación momentáneamente resuelta por las crisis periódicas de sobreproducción, lo que hace al poder del capital más y más odioso a los trabajadores del mundo entero y conduce al capitalismo a su pérdida ineluctable por la revolución proletaria".¹¹ Según esta perspectiva el advenimiento del socialismo era evidente. Por el contrario, el proceso de reestructuración del capitalismo dependiente a que da curso la crisis en economías y sociedades como la chilena no siguió a los que buscaban rearticular el proceso de desarrollo a través del fortalecimiento del modelo primario exportador y no verificó el establecimiento del socialismo. Aquella da paso a una intesificación nacional, objetivo respecto del cual participa activamente la clase obrera. Perspectiva que será reforzada por las políticas de frente popular ¹² adoptadas por el VII Congreso de la III Internacional Comunista en su lucha contra el fascismo europeo y que en América Latina serán traducidas como el esfuerzo en favor de industrialización.

2.2. El impacto de la crisis sobre el sistema de dominación.

La ruptura del sistema de dominación oligárquica siguió en Chile caminos algo diversos del resto de América Latina. La transición del Estado oligárquico al Estado desarrollista o de compromiso, a pesar de la gran inestabilidad política que ello originó, se realizó sin ruptura del sistema político. Sin embargo la crisis política que generó la instauración de la República Socialista de los 13 días en 1932 constituyó el primer de-

safío que no logró romper la continuidad de dicho sistema.¹³ Ello había sido precedido por la caída de la dictadura del General Ibañez el 26 de julio de 1931 y por el alzamiento de la marinería el mismo año. Las medidas esenciales tomadas por el efímero gobierno de la República Socialista (tales como la nacionalización de la industria del salitre, el cobre y su apoyo sin limitaciones al movimiento sindical) expresaba la influencia de los obreros de los enclaves mineros. A ello debe agregarse la disolución del Congreso designado por el dictador Ibañez, la amnistía concedida a los participantes en la sublevación de la marinería, la promoción de cogobierno y la restitución de la matrícula a los estudiantes expulsados de la Universidad de Chile, las nuevas atribuciones otorgadas al Banco Central para controlar el crédito y un conjunto de medidas sociales destinadas a beneficiar a los sectores populares gravemente afectados por la crisis. Además de estas medidas existieron otras de carácter más estructural destinadas a formular un esquema de sustitución y reforma del sistema capitalista y que posteriormente serán retomadas e incluidas en casi todos los programas electorales de la izquierda. Ellas se referían, además de a las nacionalizaciones mencionadas, a la creación del Banco del Estado, al control del comercio interior y exterior, la reforma del sector agrícola, la reforma educacional, el impuesto a las grandes fortunas, el pleno empleo, la distribución de las rentas y la revalorización del papel del Estado en la gestión económica.

A pesar de la presencia de las reivindicaciones obreras, particularmente las del sector minero, que dicho programa revela, la gestión política esencial recae en los sectores de clase media del *grovismo* y probablemente el resultado político más trascendental de la experiencia popular de la República Socialista sea la fundación del Partido Socialista encabezado por Marmaduke Grove en 1933.¹⁴ Se crea para cumplir una doble función: la de formular una alternativa política popular frente a la crisis, y como alternativa frente a la gestión política del Partido Comunista fuertemente inspirado en la política de la III Internacional Comunista. En esta dirección, el nuevo partido se define en torno

a una composición plurisocial, en él tienen cabida la clase obrera, los sectores medios, pequeños agricultores y campesinos pobres, peones y obreros, obreros calificados, profesores y artesanos, pequeños comerciantes y pequeños industriales y universitarios, es decir, "todos los que viven de su trabajo, salario o pequeña renta". La naturaleza esencial del conflicto en la sociedad chilena era explicado en torno al enfrentamiento entre oligarquía y pueblo,¹⁵ lo cual naturalmente revela y evidencia su condición de resultado político de la crisis del modelo primario exportador y del Estado oligárquico de dominación, dificultando obviamente la conceptualización explícita de la naturaleza del capitalismo dependiente y la formulación coherente de la construcción de un modelo socialista alternativo de desarrollo. Es esto último lo que lo ubica en sus inicios mucho más cerca de un populismo revolucionario que del socialismo clásico como el representado por el Partido Comunista que se había organizado en 1922. La representación popular del Partido Socialista, aun cuando no excluye a los sectores de la clase obrera organizada, reside en aquellos sectores que a partir de la crisis habían sido marginados del sistema productivo o a los que simplemente se les había impedido incorporarse a él. El restablecimiento de Arturo Alessandri en la presidencia de la República constituye la rearticulación del papel dominante y restaurador del Estado como alternativa al asedio de las influencias socialistas;¹⁶ y al papel político antitradicionalista que desempeñaron algunas ramas de las fuerzas armadas durante el período de la crisis, particularmente los sectores de la fuerza aérea vinculadas al Coronel Marmaduke Grove y el ejército ligado a Ibañez. Esto último había logrado introducir la imagen exacta de que el ejército podía constituir una eventual fuerza de izquierdas; es preciso recordar que el *brazo armado* de la oligarquía que había sido tradicionalmente representado desde la guerra civil de 1891 por la armada, se había deteriorado enormemente por el alzamiento de la marine-ría en contra de la oficialidad tradicionalista.

A fin de consolidar una 'imagen portaliana' del Estado civil y enfrentar el peligro de la *intervención militar de izquierda*,

el gobierno de Alessandri se apoya entre 1933 y 1936 en la constitución de la Milicias Republicanas, "grupos armados compuestos por voluntarios y organizados en regimientos, cuyos efectivos llegaron a 50.000 hombres reclutados generalmente en la clase alta y entre los elementos conservadores ligados con las fuerzas del capital. Después de un corto período de regreso al equilibrio *portaliano*, las milicias se disolvieron voluntariamente. Por esa misma época - 1936 - empezaban a atenuarse los efectos de la crisis mundial".¹⁷ El restablecimiento del equilibrio tradicional de relaciones entre Estado y sociedad civil se extenderá hasta el momento de la constitución del Frente Popular y su acceso al gobierno en 1938, que representará la segunda consecuencia política trascendental de la crisis. Se constituye a partir de la coalición de los partidos radical, democrático, socialista y comunista. La alianza política del Frente Popular fue encabezada y hegemonizada por el Partido Radical, de larga presencia en el escenario político chileno y que formalizaba su representación social a partir de los grupos medios urbanos, sumados a su no despreciable influencia en los sectores terratenientes y mineros. Estos últimos se hicieron presentes en la política económica del frente a través del congelamiento de las posibilidades de transformaciones estructurales en el sector agrario. La política frentista abarcó el período de 1938 a 1947 y el eje de su política económica estará representada por la formulación del proyecto de industrialización que simultáneamente intentará aplicar un proceso de redistribución del ingreso. Esto último dió como resultado que el consenso favorable tanto de la burguesía como de los sectores populares respecto de la industrialización se transformara en un conflicto que se expresó en el dilema *o más salarios o más acumulación*.

Esto constituyó el elemento esencial que animará el conflicto social en la lucha por el desarrollo, a pesar de que intenta ser aminorado a partir de la exclusión del sector campesino de los beneficios y transformaciones que se derivaban del desarrollo industrial.

Un aspecto peculiar de la industrialización chilena, al igual que en otros países de América Latina, es que fue impulsada desde el Estado.¹⁸ Este desempeñó un papel central en los procesos de acumulación de capital que fortalecieron los aparatos industriales excediendo notablemente el esfuerzo de los empresarios locales. El Estado impulsó el reacondicionamiento de la estructura económica nacional en función de asignar los recursos liberados por la contracción de las importaciones hacia los sectores industriales sustitutivos de importaciones y se encargó de crear las condiciones económicas favorables al crecimiento económico. El gasto público fue esencialmente dirigido a incentivar el desarrollo y la creación del mercado interno, a la vez que se formalizaba la constitución y creación en 1939 de la Corporación de Fomento (CORFO) destinada a planificar y fortalecer la creación de las industrias dinámicas y a favorecer las inversiones iniciales. Ella construirá los complejos industriales que posteriormente serán transferidos al sector privado. De esta manera inauguró una política de industrialización que caracterizará la economía chilena hasta el año 1970 y se orientará a la maximización de la ganancia del capital industrial fundamentada en subvenciones permanentes en donde la concentración acentuada se fundamentará en un papel decisivo del capital financiero. Dicha situación se beneficiará del proceso inflacionario y de las magnitudes del mercado, a fin de beneficiarse de los préstamos a bajo interés, de la concentración del ahorro interno y de las constantes devaluaciones monetarias. El sector financiero, industrial y agrario oligopólico se beneficiará permanentemente por estas vías de la estrategia de industrialización sustitutiva formalizada como alternativa a la crisis. Por otra parte, este esquema de industrialización marcará una ruptura esencial con el estilo del crecimiento industrial verificado en Chile hasta la primera guerra mundial. La intensificación en el uso de bienes de capital bajo trajo aparejada una tendencia decreciente en la absorción de la mano de obra que inicia un proceso estructural de desempleo que acompañará la puesta en práctica del modelo.

Respecto del sector agrario, como ya lo hemos sugerido, la

política del Frente Popular fue de marginación de cualquier posibilidad de transformación estructural.¹⁹ Por el contrario, ella estuvo destinada a beneficiar a los propietarios agrícolas en torno a una fórmula de *bajos precios-apoyo estatal*. En definitiva de los que se trataba era de evitar el crecimiento de los precios del sector agrícola, a fin de que no presionaran en el aumento de los costos de la mano de obra industrial urbana, lesionando los índices establecidos como necesarios para la acumulación del capital industrial. A fin de equilibrar dicha tendencia en favor de los propietarios agrícolas, se puso en práctica una estrategia de mecanismos estatales de compensación de dicho sector: tratamiento tributario excepcional, créditos estatales, financiamiento de obras de regadío y construcción de infraestructura, financiamiento parcial de fletes, etc. Incluso se dictaron durante el período disposiciones legales que imposibilitaban la organización sindical campesina y en la práctica ellos quedaron absolutamente excluidos de la alianza social que dió presencia a la política alternativa del Frente Popular. Aparte de la infuncionalidad de cualquier transformación en el sector respecto del esquema de acumulación de capital en que se fundamentaba la industrialización sustitutiva, es necesario considerar las razones ideológicas a partir de las cuales el marxismo del período conceptualizaban la revolución socialista como un proceso eminentemente de obreros industriales. Esto desempeña un papel explicativo esencial en el inmovilismo de los partidos populares respecto del movimiento campesino.

Es preciso recordar que el marxismo de los años treinta en Chile, más que estar directamente confrontado con la lucha contra el fascismo como ocurre con el marxismo europeo, está directamente enfrentado a lo que se ha designado como crisis del sistema de dominación oligárquico y al proceso de crisis y estancamiento del patrón de desarrollo basado en el modelo primario exportador. Debe responder e incentivar los procesos de industrialización en términos de constituir una alternativa de resolución de los efectos de la crisis sobre la economía chilena de la década del treinta. De ahí que en el imperativo de la política de Frentes Populares dise-

ñado por el séptimo congreso del Komintern,²⁰ el modelo de alianza de clases en el contenido se identificará más rápidamente con las tareas de la industrialización que con la lucha contra el fascismo. De ahí que la participación del Partido Comunista chileno en la constitución del Frente Popular que condujo a la victoria del candidato del Partido Radical Pedro Aguirre, se viera fundamentada a partir de la ampliación de la etapa democrático-nacional y de un desarrollo progresista e independiente del capitalismo chileno. Todo ello en oposición a la complejidad que asume la posición del Partido Socialista, fundado en plena crisis mundial y que se reconoce también marxista, que pone énfasis en la *República Socialista de América Latina* y en la *dictadura de los trabajadores*. A pesar de ello, la participación de los partidos marxistas dentro de la política del Frente Popular transformó las orientaciones básicas del socialismo en un compromiso histórico en torno a la industrialización nacional, pero, a la vez, representó el inicio de un prolongado proceso de integración negociadora de la clase obrera al Estado que va ser sólo interrumpido por el período de la *democracia protegida* iniciada con la promulgación de la Ley de Defensa de la Democracia (1947-58). La fase que se abre con el establecimiento del Frente Popular permite, a su vez, establecer los fundamentos de lo que después será designado como *estado de compromiso* dinamizado por la incompatibilidad evidente entre el modelo de acumulación de capital para incentivar la industrialización y la presencia del movimiento obrero.

Dicho proceso de transformaciones de las orientaciones básicas del socialismo ha sido evaluado de modo diferente por distintas ópticas políticas e intelectuales. Para algunos, constituyó el impedimento de la transformación revolucionaria de la sociedad chilena, en la medida en que enseñó a las masas a utilizar el sistema electoral.²¹ Para otros el Frente Popular constituyó un gigantesco acto de mistificación social que no intentó jamás la transformación de las relaciones de propiedad o de recuperar las *riquezas nacionales* en manos del capital extranjero, destruyendo la iniciativa revolucionaria. Para otros, el triunfo del Frente Popular del 38 y el de la alianza democrática en 1946 demostraron a la clase obrera la posibilidad de conquistar el gobierno por una vía que no

es necesariamente la insurreccional.²² Sin embargo, tres elementos se hacen presentes en la crisis y destrucción del existente Frente Popular: la inflación, el deterioro electoral de los partidos de izquierda y la promulgación durante el gobierno de Gabriel González, de la ley de Defensa Permanente de la Democracia; primera versión histórica de *democracia protegida o autoritaria* que posteriormente en un contexto mucho más dramático será reeditada por la dictadura de Pinochet. Los Partidos Socialista y Comunista que habían alcanzado en las elecciones parlamentarias de 1941 un 32% del electorado, reducen dicha cifra al 22% entre 1941 y 1945. El Partido Socialista reducirá su participación electoral del casi 20% al 12% y el Partido Comunista del 14% al 10%.²³ Todo ello a pesar de que la política del Frente Popular respecto del movimiento obrero estuvo destinada a favorecer el sindicalismo legal, que había superado ampliamente las estrategias de paralelismo sindical establecida por Ibañez entre 1927 y 1931 a través de la Confederación Republicana de Acción Cívica. La fundación de la Confederación de Trabajadores de Chile (C.T.Ch.) en 1936, con la cual se superaba la crisis interna del movimiento sindical y las restricciones impuestas a él por la dictadura ibañista, se hizo eco de la política del Frente Popular o por lo menos expresó alguno de los componentes esenciales de su razonamiento político. En su declaración de principios identifica al fascismo (conceptualizado a la manera de Dimitrov) como el enemigo principal de la clase obrera y fundamenta una estrategia de lucha continental en contra de éste a partir de un apoyo efectivo a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) de fuerte influencia comunista. Para materializar dicho objetivo se expresó la necesidad de fortalecer la alianza de la clase trabajadora con los sectores sociales *progresistas* a fin de perfeccionar el sistema democrático e incentivar el desarrollo industrial a partir de la creación de un Consejo Económico con representación amplia de todos los sectores de la economía.²⁴ A pesar de que se sugiere la necesidad de la *expropiación de la propiedad de los fascistas* y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, el lenguaje político es bastante más suave respecto de la necesidad de la sustitución del *sistema social injusto*, que el uti-

lizado por su organización predecesora: la Federación Obrera de Chile (FOCH). La CTCh cambia el lenguaje que hace referencia a la sustitución del capitalismo por el socialismo y el énfasis anterior puesto en la lucha contra el imperialismo, por una insistencia en la lucha contra el fascismo.

La participación del la CTCh en algunas instituciones del Estado ²⁵ y su acceso y legitimación del gobierno del Frente Popular a partir del fortalecimiento del sindicalismo legal posibilitó un hecho que acompañará al desarrollo del Estado de compromiso durante casi toda su existencia: la clase obrera empieza a definirse en función de su participación en el sistema político. El Estado empezaba a ser considerado como el agente esencial en la satisfacción de sus demandas y un espacio central de negociación; ello se hace extensivo y tiene validez para la propia burguesía, sobre todo si se considera que en 1942 el Estado financiaba el 48% de la inversión bruta.²⁶ En la base del deterioro electoral de los Partidos Socialista y Comunista y de la crisis del Frente Popular está la incapacidad de dichos partidos para superar los aspectos puramente distributivos de ingreso en su participación en la alianza de clase que sustentaba el modelo de industrialización. La política de distribución, por lo demás, era de efectos restrictivos, favoreciendo sólo a los sectores obreros organizados. Fracasaron ante el desafío de incentivar y promover las reformas necesarias sin autotransformarse en reformistas, evidenciando su propia incapacidad para elaborar una estrategia alternativa de desarrollo nacional. Debieron sumarse a los esquemas de industrialización tratando de sintetizarlos con las versiones ideológicas del socialismo. El gobierno del último presidente radical elegido por la alianza política que sostuvo el Frente Popular, Gabriel González (1946-1952), se constituye en el sepulturero de dicha política, desplazando definitivamente la política de centro izquierda para derivar en un gabinete de centro-derecha, a la vez que se fortalecía el sistema de relaciones con la política norteamericana. La guerra fría constituye uno de los aspectos esenciales que explican dicha situación. La alianza del gobierno chileno con la política norteameri-

cana en dicho período se materializa la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947, la Carta de la Organización de los Estados Americanos de Bogotá en 1948 y el Pacto de Ayuda Militar de 1952.

A su vez Chile experimentaba en el mismo período los efectos de la recesión sufrida por la economía norteamericana que se expresaba en la contracción de los índices de exportaciones de cobre, que sólo se normalizará durante la guerra de Corea. Pero mucho más relevante que todo eso es la acentuación de la contradicción implícita en el modelo de desarrollo representada por el conflicto entre el esquema de acumulación de capital y la presencia obrera en el gobierno. Las aspiraciones de distribución de la renta no pudieron ser satisfechas ni siquiera para un reducido núcleo de obreros industriales urbanos que privilegiaba la presencia de los partidos obreros. Es preciso recordar que en 1942 el 40% de los sectores sociales más pobres sólo recibía el 9,5% de los ingresos personales y en 1948 sólo el 8,5%. La contradicción entre acumulación y salarios, entre acumulación y distribución de ingresos acentuada por la participación política de la clase obrera, intenta ser resuelta a partir de la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948, que ilegalizó al Partido Comunista y sometió policialmente a las organizaciones sindicales, el derecho de huelga y la negociación colectiva. Para ello existía un marco internacional favorable: la guerra fría y la lucha en contra del comunismo internacional. Ello constituía la primera demostración de fuerza de la burguesía industrial favorecida por el desarrollismo establecido en la década de los treinta en contra de los sectores populares de la clase obrera, y desde el punto de vista histórico, reforzaba la tendencia autoritaria del Estado respecto de las reivindicaciones sociales.

2.3. Ibañismo y Frente de Acción Popular: dos alternativas frente a la crisis social del desarrollismo.

El histórico oportunismo político del último gobierno del Frente Popular, reflejo directo de los sectores de la burguesía

industrial dependiente que se había beneficiado de la nueva estrategia y patrón de desarrollo de industrialización dependiente, el desprestigio de los partidos políticos tradicionales, el fracaso del gobierno democrático burgués y su evolución hacia el autoritarismo con la promulgación de la *ley maldita*, la división del Partido Socialista, la proscripción del Partido Comunista, el deterioro del poder del movimiento sindical víctima de la persecución del Estado y el deterioro económico de los sectores obreros y medios como resultado de la aceleración del proceso inflacionario, crearon las condiciones políticas óptimas para el regreso legal a la presidencia de la República del antiguo dictador Carlos Ibañez del Campo. Es evidente que tras la política de estabilidad monetaria prometida durante la campaña electoral y que suponía beneficiarios a los sectores medios, marginales y obreros, se encontraba presente un acentuado populismo que no elude su similitud con el peronismo argentino y que suponía la formalización de una alianza entre la clase obrera y sectores militares y empresariales. Es preciso recordar que el General Ibañez obtuvo los votos del 47% del electorado gracias a la participación protagónica de los marginados de la ciudad y el campo y de los sectores obreros. Es evidente que en la presencia de masas que acompañan al *caudillo populista* desempeñan un papel significativo los nuevos sectores obreros que provienen de los procesos migratorios recientes que acompañan el fortalecimiento del proceso de industrialización y que, como sugiere Enzo Faletto,²⁷ estaban mucho más orientados hacia la búsqueda de mejoras materiales que a la participación orgánica en los partidos obreros o en el sindicalismo organizado y en condiciones de ser absorbidos por las políticas estatales. Todo eso es independiente de si se integraron o no en el sector laboral derivado de la industria o si simplemente, por el contrario, constituyeron una masa marginal que se ubicó en lo que hoy se designa como el sector informal de la economía. Si se considera que a partir de 1954 el empleo industrial se estanca es posible sugerir que tanto las actividades de la construcción como los servicios constituyeron también sus puntos de absorción e integración laboral.

Hay otro aspecto que explica el apoyo masivo al ibañismo. El sugerido por Liliana de Riz²⁸ y que hace referencia a la heterogeneidad interna del movimiento obrero, que se acentúa con el proceso de industrialización. La integración desigual de los sectores obreros al proceso productivo trajo como resultado una desigual capacidad de presión para alterar el proceso de acumulación de capital en beneficio de la redistribución de ingresos y conseguir influencia política. Los sectores obreros de la minería y la industria constituyeron una minoría dentro del conjunto de la masa laboral, pero, a la vez, fueron los que obtuvieron una mayor capacidad de presión frente al Estado. La política desarrollista no hizo más que acentuar dicha fragmentación que procedía ya del período de la economía de énclave. La política de los partidos populares estuvo dirigida mucho más a favorecer los sectores obreros de las áreas modernas de la economía, excluyendo de la demanda al resto de los sectores laborales. Es entre estos sectores excluidos donde el ibañismo obtiene su apoyo esencial. Los sectores de clase media que lo apoyaban provenían esencialmente del deterioro del Partido Radical que durante cinco lustros había estado presente en el gobierno y que junto a la pequeña burguesía tradicional le dieron su apoyo tras el objetivo de recuperar sus ingresos ampliamente deteriorados. La guerra de Corea había creado una situación económica propicia para el triunfo electoral del antiguo dictador, pero que ya en 1953 había desaparecido, dando lugar a un aumento acelerado de la inflación y a un deterioro generalizado de las condiciones de vida. El gobierno se vió enfrentado entonces a la aplicación de un conjunto de medidas deflacionarias y estabilizadoras, inspiradas por la misión Klein-Sachs, que evidenciaron la naturaleza antipopular del gobierno.²⁹ Ello trajo como consecuencia la reactivación del movimiento sindical que busca superar la desarticulación que le había sido originada por el populismo ibañista y por la permanencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia popularmente conocida como *ley maldita*. Resultado de ello fue la creación en 1953 de la Central Unica de Trabajadores (CUT) que será la organización sindical más vigorosa y permanente conocida en la historia del movimiento obrero chileno.³⁰

Posteriormente, recorriendo la existencia de cuatro regímenes presidenciales, se constituirá en el organismo central de elaboración de las políticas obreras. Ella representaba un amplio espectro ideológico en el que se encontraban integrados tanto los sectores de empleados como los obreros y en menor medida los sectores campesinos, y se orientó por una formulación de principios anticapitalista y en favor de una sociedad sin clases, formulación que incluso es asumida por los sectores medios u obreros de inspiración demócrata cristiana.

Los primeros años de la administración de Ibañez se orientaron hacia la reorganización del funcionamiento estatal a través de la creación de nuevas instituciones públicas como el Ministerio de Minería, el Banco del Estado, la Corporación de la Vivienda, el Instituto de Seguros del Estado, el Instituto Nacional de Comercio, etc. A ello se agregan disposiciones de tipo social tales como: indemnización por años de servicios, asignación familiar obrera y salario obrero agrícola. Sin embargo, la economía se enfrentó a contracciones de su ritmo de crecimiento a pesar de los esfuerzos de estabilización a que se vió sometida. A ello se agregan las dificultades generadas por el sector minero exportador (cobre) derivadas de la disminución de su demanda en los mercados internacionales como consecuencia del término de la guerra de Corea. Ello hizo fracazar las políticas de intermediación de su comercialización a partir del del Banco Central, a las que no eran ajenas las manipulaciones norteamericanas en la comercialización internacional de dicho producto.³¹ En respuesta a dicha situación se patrocina gubernamentalmente la *ley de nuevo trato* cuyo objetivo central estaba determinado por la intención de promover nuevas inversiones y aumentar la producción de dicho metal, "para lo cual se redujo la tributación a un solo impuesto aplicado a las utilidades del 50% y una tasa variable de un 25% según el aumento que experimentase la producción; se estableció un nuevo tipo de cambio para los costos de producción y creó el Departamento del Cobre, encargado del control de las operaciones de estas empresas".³² A pesar de ello la experiencia demostró que los beneficiarios esenciales fueron nuevamente las empresas norteamericanas

que controlaban las explotaciones de dicho mineral ; situación que sólo será parcialmente superada en 1965 con la ley de *chilenización del cobre* o Nuevos Convenios del Cobre. Al deterioro de los ingresos por concepto de exportaciones de cobre debe agregarse el convenio establecido entre el gobierno y las empresas salitreras controladas por el capital extranjero, cuyo objetivo inmediato era otorgar diversas franquicias destinadas a incentivar las inversiones necesarias para el aumento de la producción de salitre. El instrumento central fue el mejoramiento del *tipo de cambio de retorno*, política que sólo será modificada en 1968 durante el gobierno de Frei.

Probablemente desde el punto de vista de la profundización del sistema democrático sea necesario destacar dos hechos significativos que tuvieron lugar durante este período: la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o *ley maldita* que puso término a la represión estatal del movimiento obrero y del Partido Comunista, y la reforma del sistema electoral que permitió el establecimiento de la cédula única que condujo al saneamiento de dicho sistema y al término del recurso extraelectoral de la derecha fundamentado de manera sistemática en el cohecho y el fraude. Pero al ibañismo como movimiento social no logró superar una existencia mayor que la existencia política de su propio caudillo: Ibáñez, el antiguo dictador regenerado. Sin embargo, paralelo a la propia decadencia de su régimen se desarrollan procesos que tendrán una relevancia singular en los años posteriores de la historia política y social de Chile: el fortalecimiento de las relaciones entre política partidista y movimiento social, que se expresa en la vinculación entre movimiento sindical y partidos populares cuyo testimonio histórico inicial es la propia constitución de la Central Unica de Trabajadores y el predominio del análisis político estructural del desarrollo capitalista dependiente de Chile por encima de los intereses coyunturales del movimiento reivindicativo sindical. El problema del poder pasa a ser la cuestión central que anima el movimiento de masas en función de sus objetivos reivindicativos. Dicha situación también es compartida por la derecha chilena que logra reagruparse en torno a la candi-

datación presidencial de Jorge Alessandri en 1958, sostenida por los partidos liberal y conservador que pretende retomar una imagen de apoliticismo.

La constitución del Frente de Acción Popular en 1956 (FRAP), que expresa la primera coalición autónoma de la izquierda, encuentra su justificación estructural en la marcada tendencia al estancamiento del crecimiento económico que se verifica en la economía chilena a partir de 1953. Ello corresponde a los efectos y consecuencia de un fenómeno general al que se enfrentaron las economías latinoamericanas que siguieron la estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones, y que se conoce como "agotamiento de la sustitución fácil en el proceso de industrialización". Ello ponía en evidencia la necesidad de reformas estructurales básicas sin las cuales el proceso de industrialización no podía continuar. A pesar de que la unidad del movimiento obrero encontraba un precedente en la *estrategia del frente de los trabajadores* que había sido formulado por el Partido Socialista, el modelo alternativo constituido por el programa político del Frente de Acción Popular continuaba en la perspectiva del desarrollismo industrialista del Frente Popular y supuso el reconocimiento de la negociación institucionalizada de los conflictos de clase. La conquista del Estado a través de la participación electoral de la izquierda y el movimiento popular era posible, y desde él se podían establecer las reformas necesarias que garantizaran la continuidad del desarrollo y la erradicación de las desigualdades sociales. Los gérmenes de la *vía chilena al socialismo* estaban ya establecidos y obtendrán su oportunidad histórica con el triunfo de la Unidad Popular en 1970.

El contenido esencial que posibilitó la unidad política de los partidos de la izquierda es definido por el propio Frente en los siguientes términos: "El Frente de Acción Popular será una organización que concertará la acción de los partidos que la constituyen en el campo político, parlamentario, sindical y electoral. El Frente de Acción Popular se caracterizará fundamentalmente por ser el núcleo aglutinador de las fuerzas que están dis-

puestas a luchar por un programa antiimperialista, antioligárquico y antifeudal. Su acción esencial se dirigirá a consolidar un amplio movimiento de masas que pueda servir de base social a un nuevo régimen político y económico, inspirado en el respeto de los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigido a la emancipación del país, al desarrollo industrial, a la eliminación de las formas precapitalistas de la explotación agraria, el perfeccionamiento de las instituciones democráticas y la planificación del sistema productivo con vista al interés de la colectividad y la satisfacción de la necesidad de la población trabajadora".³³ Es evidente que la alternativa que se constituye explícitamente a partir de este programa estaba representada por la industrialización y la confianza en que el fortalecimiento de la burguesía industrial vinculada al sector financiero crearían las condiciones necesarias para una mayor intervención estatal y la erradicación de los sectores oligárquicos, precapitalistas y terratenientes. El Estado debería constituir la garantía esencial de la participación política y económica de los sectores medios y obreros. Siendo éstos los supuestos comunes que están presentes en casi todas las reflexiones latinoamericanas del período, en el caso de Chile el carácter específico le viene dado por el hecho de que ella es impulsada por los agentes políticos de la clase obrera. Dichos agentes seguían conceptualizando las líneas centrales del conflicto social en términos de una formulación oligarquía-pueblo. En esta dirección, la política de la burguesía industrial dependiente podía ser atraída al campo de los intereses obreros que le otorgaban a ella un papel protagónico esencial, transformando la política obrera en una política esencialmente defensiva.

Como lo ha sugerido reiteradas veces el economista Aníbal Pinto, a pesar de ser la economía chilena profundamente cíclica, con dificultades de crecimiento derivadas de las dimensiones insuficientes del mercado, la dependencia externa y el estrangulamiento del comercio exterior, se desarrolló en su seno un sistema político que favorece tempranamente un proceso creciente de democratización. Y eso a finales de los años cincuenta y sesenta se va favorecido y estimulado por el auge de dos tendencias paralelas de or-

den ideológico cultural que animarán los escenarios políticos, sociales y económicos de la sociedad chilena en ese período: reformismo y revolución. El primero de ellos se vió incentivado por la ideología modernizadora propugnada por las organizaciones políticas de clase media y por la política norteamericana para América Latina de Alianza para el Progreso. La segunda tendencia fue estimulada por la profunda renovación a que se ve sometido en general el marxismo latinoamericano a partir de la revolución cubana y el proceso de desestalinización sufrido por el marxismo europeo, sobre todo a partir del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética sintetizado en el período de Krushev. A ello debe agregarse la fuerte influencia renovadora del marxismo francés de la década de los sesenta. Ambas perspectivas logran la posibilidad de concreción en la sociedad chilena; la primera de ellas es introducida a partir de la gestión política de la *Revolución en Libertad* representada por el gobierno demócrata cristiano de Frei en el período 1964-70 y, la segunda, a través de la *vía chilena al socialismo* representada por el gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende en 1970.

Sin embargo ambas alternativas serán aun precedidas por el establecimiento del gobierno conservador de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-64) que venció por estrecho margen a la candidatura del FRAP encabezada por Salvador Allende. El triunfo de las concepciones conservadoras y tecnocráticas se basó en una renovación del sentimiento de rechazo a la presencia de los partidos políticos que ya había sido utilizado por la gestión política del ibañismo. El gobierno alessandrista puso en práctica una estrategia de desarrollo en la cual los grupos empresariales surgían como el elemento dinámico del crecimiento económico. Dicho modelo se fundamentaba en la dicotomía entre técnica y política entendidas como aspectos contradictorios. En esta versión conservadora y tecnocrática, la política era conceptualizada como el aspecto negativo de representación de los intereses demagógicos corporativos de los diferentes grupos de presión social. La técnica en cambio constituía la alternativa racional, eficiente y *científica*, que aseguraba la relación óptima entre medios y

finos dentro de la política de desarrollo. En esta versión tecnocrática de la política no existía espacio para el mantenimiento de un compromiso social global en torno al desarrollo y la industrialización y en el que los sujetos sociales del desarrollo eran aspectos técnicos del mismo.³⁴ El eje central del programa económico se constituyó a partir de la liberalización del comercio exterior y la fijación de un tipo de cambio fijo, a partir de una devaluación monetaria previa de un 25%. La inversión extranjera era estimulada con las políticas de libre acceso al mercado de divisas; a su vez, esto último facilitaría la importación de bienes de capital y materias primas industriales que favorecerían los aumentos de la productividad industrial modernizando su capacidad exportadora. A ello debía agregarse la política antiinflacionaria fundamentada en la creencia de que la apertura regulada del mercado interno a los productos importados favorecerían índices de disminución de la inflación. La dinámica del desarrollo pasaría necesariamente por el fortalecimiento del sector industrial a partir de la acentuación de la inversión de capital exterior.

Es evidente que el gobierno de Alessandri ligado a la tecnocracia empresarial se fundamentaba, en el plano político, en el avance de las fracciones monopolistas del capital, que aspiraba a una reestructuración de las funciones del Estado en desarrollo. El Estado debía favorecer y fortalecer las actividades empresariales en detrimento de su papel asistencial, conciliador y redistribuidor de ingresos que le había otorgado el pacto social por la industrialización desde la época del Frente Popular. Sin lugar a dudas, dicho programa se vió facilitado en sus inicios por la coyuntura favorable del precio del cobre en el mercado internacional y la expansión económica por el recurso creciente del endeudamiento externo de la economía. De ahí que para el período 1959-1962 se observa una elevación real del crecimiento económico acompañado de una estabilidad de precios significativa. La coyuntura favorable del comercio exterior fue internalizada en la economía a través del aumento del gasto fiscal y de los programas estatales de vivienda. Dicha situación se interrumpe drásticamente a partir de 1962, fecha a partir de la cual reaparecen con mayor intensidad los problemas clásicos de la economía chilena: inflación,

desempleo, estancamiento, endeudamiento externo, etc. El mejor diseño referido a la primera etapa de este gobierno es sin duda el formulado por el historiador Ricardo Donoso: "En los tres primeros años del nuevo gobierno han quedado en evidencia las fallas del régimen político predominante: el absorbente predominio del ejecutivo, la nulidad del Congreso, la omnipotencia del poder económico y la impotencia de la opinión pública. El régimen político, sin ningún apoyo popular, aparece como el botín de una minoría plutocrática, que cuenta con el apoyo decidido de las clases poseedoras (la Iglesia entre ellas) en el que las expresiones de la vida democrática apenas si encuentran resonancia. Se ha cavado así una fosa profunda entre la mayoría del electorado, de las clases asalariadas y de la burguesía, y el ejecutivo, representación de las potencias dominantes, plutocracia e Iglesia".³⁵

La acentuación de la crisis económica fue enfrentada por el gobierno a partir de una acentuación de su política original a pesar de su fracaso. Cobra nuevamente relieve la idea de que el desarrollo podría ser garantizado por el fortalecimiento de la inversión extranjera y la marginación de los sectores populares de las decisiones del Estado. Ello era presentado como condición básica de la acumulación interna de capitales. El desarrollo sólo podía ser impulsado a partir de una estrategia de desnacionalización de la economía. Pero eso se veía dificultado no solamente por el carácter de la crisis económica, sino también, por sus consecuencias sobre la unificación precedente de la derecha chilena. "En efecto, desaparecidas las condiciones económicas excepcionales de la primera etapa del gobierno, la política de unificación no tenía bases reales. Esta contradicción central marcó el fracaso en el intento de compromiso entre las fracciones dominantes locales y el capital extranjero. Otro aspecto decisivo en el fracaso de la política gubernamental fue la resistencia activa del movimiento sindical que evitó que el aumento de productividad recayera sobre el aumento de la intensidad del trabajo. Por otro lado, ello puso también de manifiesto el parasitismo endémico de la clase empresarial chilena, que en vez de utilizar las franquías

cias tributarias y el sistema de cambio fijo para elevar la productividad a través de las innovaciones tecnológicas llevaron a cabo conductas especulativas, por medio del aprovechamiento de dichas franquicias para la acumulación de divisas e importación de bienes de consumo. A pesar de la reforma agraria promulgada en 1963, inspirada por la política norteamericana de la "Alianza para el Progreso", la superación de la crisis fue imposible. Por otro lado dicha reforma tuvo dimensiones estrictamente simbólicas por la precariedad de sus objetivos, de ahí que fuese popularmente designada como la '*reforma de los maceteros*'. Aspiraba a la división voluntaria de los latifundios.

El fracaso de Alessandri, puso de relieve las dificultades que evidenciaban los sectores tradicionales y la propia burguesía industrial para enfrentar los proyectos de modernización, que garantizaran una alternativa capitalista al estancamiento generalizado generado por el modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Constituyendo los sectores de la burguesía industrial el área más dinámica de la economía, en el nivel de la política económica expresaban un comportamiento profundamente conservador. La respuesta a dicha situación ha sido formulada por Pilar Vergara en términos de que la protección estatal facilitaba artificialmente la industrialización a través de políticas restrictivas de importaciones, ventajas crediticias, facilidades tributarias, aranceles; representado la necesaria modernización como un proyecto lesivo a sus intereses a corto plazo. A ello debe agregarse la resistencia de los sectores oligárquicos agrícolas que se oponían a cualquier extensión del proyecto modernizador hacia el sector agrícola, que suponía la necesaria elevación de la productividad agrícola y la integración de los sectores campesinos en el consumo para la ampliación indispensable del mercado interno en beneficio del fortalecimiento de la acumulación del capital del sector industrial. Ejemplo revelador de ello es la *reforma de los maceteros*. Esta revelaba la vinculación entre el sector latifundista y la burguesía industrial que combatían cualquier reforma como si éstas constituyeran una destrucción efectiva del desarrollo capitalista depen-

diente. Después de todo, el sistema proteccionista generado por el proceso de industrialización le permitía obtener altos índices de ganancia sin tener necesariamente que aumentar la productividad del sistema económico de acuerdo con lo que sugerían los principios de la necesaria modernización. Es esto, entre otras cosas, lo que permite explicar por qué las tareas de la modernización fueron tomadas por los partidos populares y los movimientos de clase media.

Habiendo constituido el gobierno de Alessandri el primer intento de reestructuración capitalista de la crisis generada por el desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, gestado desde un gobierno civil que se constituye en la primera posibilidad de gobierno efectivo de la derecha desde la crisis de los años treinta, la crisis social que en torno a él se genera facilita el fortalecimiento electoral de la alternativa reformista de centro representada por la Democracia Cristiana. El elevado número de votos obtenidos por la izquierda en las elecciones presidenciales de 1964 la convencen de la posibilidad efectiva de llegar a la conquista del Estado a través del sistema electoral. Ambas alternativas recibirán su oportunidad en 1964 y en 1970 respectivamente. El fracasado intento alessandrino de resolución del estancamiento económico a partir de una estrategia de profundización del desarrollo industrial por medio de la desnacionalización de la industria destinada a incentivar la inversión del capital internacional, será retomada en el primer período de gobierno de la dictadura militar de 1973. El alessandrismo considerará a la dictadura militar como su heredera política y ésta al alessandrismo como su fuente de inspiración *política y moral*, como un gobierno sin presencia de *políticos corruptos* e inspirado en un sentido técnico del ejercicio del poder.

En el período de 1964 a 1973 se implementa la aplicación de dos estrategias que se fundamentan en versiones radicalizadas del neokeynesianismo económico y que intentan superar el estancamiento verificado en Chile por el patrón de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. La contra-

dicción acentuada que se verifica en el nivel ideológico contrasta con la complementariedad de las medidas económicas que ellas asumen. Dichas estrategias están constituidas por el intento de modernización del funcionamiento de la economía y la democratización en el caso del gobierno de la Democracia Cristiana (1964-1970), y por el intento de formular una *vía chilena al socialismo* en el período 1970-1973. La relevancia de este período de casi diez años proviene del hecho de que la sustitución del viejo centro político que desde los años treinta se había articulado con las políticas de la derecha, abre un amplio proceso de inestabilidad en la sociedad chilena. Dicha sustitución es iniciada por el advenimiento de la Democracia Cristiana al gobierno. Las transformaciones estructurales implementadas por el gobierno de la Unidad Popular no hacen más que acentuar radicalmente dicha inestabilidad. En el capítulo siguiente consideraré detenidamente los procesos económicos, políticos y sociales que tienen lugar en el período citado.

NOTAS

1. Octavio Rodríguez, *"La teoría del subdesarrollo de la CEPAL"*, Siglo XXI editores, México, 1980.
Gabriel Guzmán, *"El desarrollo latinoamericano y la CEPAL"*, Editorial Planeta, Barcelona, 1976.
2. D.C.M. Platt, *"Business Imperialism 1840-1930"*, Oxford At the Clarendon Press, 1977.
3. Tomás Moulian, *"Desarrollo político y estado de compromiso. Desajuste y crisis estatal en Chile"*, Colección de estudios CIEPLAN Nro. 8, julio de 1982, Santiago de Chile.
4. Oscar Muñoz, *"Crecimiento industrial de Chile 1914-1964"*, Universidad de Chile, Instituto de Economía y Planificación, Santiago de Chile, 1971.
5. Aníbal Pinto, *"Chile un caso de desarrollo frustrado"*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1966.
6. Eduardo Ortiz, *"La gran depresión y su impacto en Chile 1929-1933"*, Vector, Centro de Estudios Económicos y Sociales, Santiago de Chile, 1982.
7. Enzo Faletto, Eduardo Ruiz y Hugo Zemelman, *"Génesis histórica del proceso político chileno"*, Editorial Quimantú, Santiago de Chile, 1971.
8. Julio César Jobet, *"El Partido Socialista de Chile"*, Tomo I, Ediciones Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1971.
9. Markos J. Mamalakis, *"The Growth and Structure of the Chilean Economy. From Independence to Allende"*, New Haven and London, Yale University Press, 1976.
10. E. Faletto, E. Ruiz y H. Zemelman, obra citada anteriormente.
11. E.Ortiz, obra citada anteriormente, pág. 14.
12. Paul Drake, *"Socialism and Populism in Chile 1932-52"*, University of Illinois Press, 1978.
Michael, *"Le marxisme en Amérique Latine"*, Francois Maspero, París, 1980.
Boris Goldenberg, *"Kommunismus in Lateinamerika"*, Verlag Kohlhammer, Stuttgart, 1971.
13. Liliana de Riz, *"Sociedad y política en Chile - de Portales a Pinochet -"*, Universidad Autónoma de México, México. 1979.
14. Pablo González Casanova (ed.), *"América Latina en los años treinta"*, Universidad Autónoma de México, México, 1977.
15. Enzo Faletto, *"Clases sociales, crisis, política y problemas del socialismo en Chile"*, mimeografiado, FLACSO/ELAS, Santiago de Chile, 1973.
16. Julio César Jobet, *"Ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile"*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1951.

17. Alain Joxe, *"Las fuerzas armadas en el sistema político chileno"*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970, pág. 72.
18. Aníbal Pinto, *"Chile, una economía difícil"*, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
19. Enzo Faletto, Eduardo Ruiz y Hugo Zemelman, *"Génesis histórica del proceso político chileno"*, Editorial Quimantú, Santiago de Chile, 1971.
20. Georges Dimitrov, *"L'offensive du fascisme et les tâches de l'internationale communiste dans la lutte pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme"*, Oeuvres Choiesies, Editions Sociales, París, 1972.
Pierre Frank, *"Histoire de l'internationale Communiste 1919-1943"*, Tomos I y II, Editions la brèche, France, 1979.
21. John Reese Stevenson, *"The Chilean Popular Front"*, Greenwood, 1942.
22. Galo González, *"X Congrès du P.C. du Chili"*, abril de 1956, en *"Corvalán, Chili, les communistes dans la marche au socialisme"*, Editions Sociales, París, 1972.
23. Aníbal Pinto, *"Desarrollo económico y relaciones sociales"*, en *"Chile Hoy"*, Siglo XXI editores, México, 1970.
24. Alan Angel, *"Partidos políticos y movimiento obrero en Chile"*, Editorial ERA, México, 1974.
25. Jorge Barria S., *"El movimiento obrero en Chile. Síntesis histórico-social"*, Editorial Trígono, Universidad Técnica del Estado, Santiago de Chile, 1972.
26. Markos Mamalakis y Clark Winton Reynolds, *"Essays on the Chilean Economy"*, Homewood, Illinois, 1965.
27. Enzo Faletto, obra citada anteriormente (nota 15).
28. Liliana de Riz, obra citada anteriormente.
29. Roberto Zahler y otros, *"Chile: treinta y cinco años de discontinuidad económica 1940-1975"*, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago de Chile, 1978.
30. Jorge Barria, *"Historia de la CUT"*, Editorial Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1971.
31. Ricardo French-Davis, *"Políticas económicas en Chile 1952-1970"*, Ediciones Nueva Universidad, Santiago de Chile, 1973.
32. A.Chelen y B.Elgueta, *"Breve historia de medio siglo en Chile"*, en *América Latina: historia de medio siglo*, tomo I. Coordinación Pablo González Casanova, Siglo XXI editores, México 1982, pág. 245
33. Citado por E.Faletto en *"Clases, crisis política y problemas del socialismo en Chile"*, mimeografiado, FLACSO/ELAS, Santiago 1973, pág. 35 y 36.
34. Barbara Stallings, *"Class conflict and economic development in Chile, 1958-1973"*, Stanford University Press, 1978.
35. Ricardo Donoso, *"Breve historia de Chile"*, Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1970.

CAPITULO TERCERO

Modernización y socialismo.

En un período de casi diez años, que se inicia con la victoria presidencial del candidato de la Democracia Cristiana Eduardo Frei Montalva y que termina en septiembre de 1973 con el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende, la sociedad chilena se vió sometida a dos esquemas diferentes y alternativos de desarrollo: el del intento de modernización de la economía capitalista dependiente que se conoció como *revolución en libertad* y el de la *vía chilena al socialismo*. Ambos intentan constituir una alternativa de transformaciones estructurales como resolución de la crisis generada por el estancamiento del esquema de desarrollo y acumulación a que había dado curso la industrialización por sustitución de importaciones. Siendo ambas estrategias antagónicas políticamente fueron parcialmente coincidentes respecto de la necesidad de algunas de las transformaciones estructurales de la economía chilena, verificaron como resultado cambios esenciales en el nivel del Estado, que se concretaron en la ruptura de la continuidad del esquema social de sustentación del *estado de compromiso* que había dinamizado la industrialización nacional.

El programa de transformaciones estructurales puesto en práctica por el gobierno de la Democracia Cristiana condujo a la inestabilización del principio de negociación que había caracterizado la articulación de las políticas centristas con la derecha tradicional y que había sido favorecida por la influencia prolongada del Partido Radical en el escenario político. Sus intentos de modernización del sector industrial le enajenan el apoyo político que le había sido otorgado por la burguesía industrial durante las elecciones presidenciales de 1964; por otra parte, la puesta en ejecución de la reforma agraria supuso una ruptura frontal con los sectores sociales vinculados a la oligarquía agraria. En esta perspectiva el programa político y económico del gobierno de la Unidad

Popular en su intento por establecer condiciones esenciales para la transición al socialismo, no hizo más que acentuar radicalmente la inestabilidad del estado de compromiso iniciada por el programa de modernización del período de 1964-1970. La coincidencia de ambos gobiernos en la necesidad de transformaciones estructurales esenciales y de democratización progresiva o radical de la sociedad chilena evidenciaron un resultado común: la ruptura del pacto social precedente por el desarrollo y la industrialización.

3.1. La izquierda y el nuevo centro político: la lógica de las alternativas.

El fracaso del programa de estabilización y desarrollo del gobierno derechista de Jorge Alessandri situó a la izquierda agrupada en torno del Frente de Acción Popular (FRAP) y a la Democracia Cristiana en condiciones de constituir alternativas evidentes frente a la crisis y el estancamiento. Dicho fracaso ponía además de manifiesto la incapacidad estatal de favorecer el proceso de acumulación de capital y su inadecuación frente a la política de sus adversarios y aliados. Por ello, y a pesar de la expansión económica lograda en el primer período del gobierno, dicho esquema de acumulación no hizo más que acentuar su incompatibilidad con los sectores sociales populares. Es preciso recordar que el estado de compromiso había sustituido a la burguesía industrial en las tareas esenciales de la industrialización, transformándose en gestor de una burguesía capitalista. Lo que la crisis estatal pone de manifiesto es la incoherencia de su doble función: la de agente de la transformación económica de la sociedad (la lógica de la industrialización dependiente) y la de agente de cohesión y unificación de la sociedad (legitimación de las transformaciones impulsadas). Es la contradicción entre transformación y legitimación de las funciones del Estado la que recorrerá de manera esencial la crisis del estado de compromiso en el período de 1964-73. En este contexto se inscribe el intento de la Democracia Cristiana por una redefinición de las fuerzas sociales componentes del bloque hegemónico, a través de la reformulación de una alianza social que legitimara la redefinición necesaria de

una nueva lógica de acumulación de capital ya insinuada por el gobierno de Alessandri. Parece evidente entonces, que lo que estaba detrás de la crisis estatal chilena era la extinción del modelo de acumulación fundamentado en la expansión de la industria ligera de sustitución de importaciones. El nuevo esquema de acumulación de capital alternativo que se manifestaba claramente en el inicio de la década del sesenta, apuntaba hacia el fortalecimiento del sector de producción de bienes duraderos. Era este sector el que debería desempeñar el papel fundamental en el nuevo modelo de acumulación, pero ello era incompatible con la magnitud insuficiente del mercado interno y ponía de manifiesto la necesidad de su ampliación relativa por medio de la extensión de los sectores medios de altos ingresos y de la acentuación de su diferenciación con los sectores sociales de bajos ingresos. Pero eso requería además una legitimación política que posibilitara la hegemonía política del dominio económico del capital monopolista nacional y extranjero industrial: la Democracia Cristiana intentará su materialización.

En la campaña electoral de 1964, tanto el FRAP como la Democracia Cristiana proclamarán la necesidad de transformaciones revolucionarias de la sociedad chilena, los primeros en beneficio de la instauración del socialismo y los segundos en favor de una modernización radical que facilitara la profundización del capitalismo dependiente en función de los requerimientos del nuevo modelo de acumulación de capital. La existencia del FRAP integrado básicamente por los partidos Socialista y Comunista no suponía necesariamente la existencia de una identidad política respecto de los problemas del socialismo; por el contrario, ambos convivían en un esquema de profunda disputa ideológica que incluso a veces sobrepasaba la necesaria atención teórica sobre los problemas del capitalismo nacional. La internacionalización de la disputa ideológica de la izquierda constituía una de sus características relevantes. El Partido Comunista asume en dicho período la tesis de una política antiimperialista y antioligárquica de liberación nacional para posibilitar el socialismo.¹ La necesidad de establecer una etapa democrático-burguesa y la idea de distinguir la existen-

cia de una fracción burguesa progresista están en la base de la formulación de dicha tesis. El Partido Socialista, en cambio, pone el énfasis en la formulación de la tesis del Frente de Trabajadores, negando la independencia y existencia de una fracción burguesa nacionalista con la cual sea posible establecer una alianza, a fin de fortalecer la puesta en práctica de los cambios estructurales necesarios. En esta perspectiva, los obreros industriales y rurales junto a lo que ellos denominan como la *pequeña burguesía*, estaban en condiciones de provocar y desarrollar el proceso revolucionario. A ello debe agregarse su convicción de que el marxismo constituye una orientación práctica de dicho proceso y no una referencia de tipo dogmático que deba ser cultivada en contra de las condiciones específicas que expresa el desarrollo del capitalismo en Chile. Ellos aspiran a instaurar un proceso de cambios que no corresponde necesariamente ni a la revolución *democrático burguesa* ni a las versiones de los socialismos clásicos, dando curso a la existencia de una categoría denominada como un *socialismo propiamente chileno*; esta perspectiva será retomada en el gobierno de Allende bajo la denominación de *vía chilena al socialismo*.

Probablemente sea la polémica socialista-comunista de 1962 la que mejor resuma las diferencias entre ambos partidos.² En dicha polémica, los socialistas rechazan explícitamente la idea de una dirección central del movimiento revolucionario internacional, específicamente representada por la Unión Soviética. A diferencia de ellos, los comunistas aceptan la posibilidad de la existencia de una *vía propia al socialismo* pero insisten en que la Unión Soviética constituye la vanguardia del progresismo mundial; favoreciendo la política internacional de bloques en donde el éxito económico de la Unión Soviética es representado como el símbolo de la victoria del socialismo y su poder militar garantiza la defensa en contra del imperialismo, fortaleciendo la paz internacional. A dicha tesis los socialistas oponen la categoría marxista de la lucha de clases a nivel internacional, que divide al mundo en clases sociales y no en bloques políticos o políticas internacionales. En esta perspectiva, para los socialistas sólo la conceptualización de

la lucha de clases a nivel internacional puede posibilitar una formulación marxista del problema del subdesarrollo. Sin embargo, de cara a la elección presidencial de 1964, los partidos constituyentes del FRAP inician una discusión valorativa de las posibilidades de la *vía electoral*, particularmente respecto de lo que había sido la experiencia de la lucha presidencial de 1958 y sus proyecciones para 1964.

En general existía una visión positiva respecto de los resultados de 1958, que había colocado a Salvador Allende en segundo lugar y a sólo 30.000 votos del candidato de la derecha Jorge Alessandri. A pesar de ello dicha valorización retrospectiva adquiere un significado discrepante para ambos partidos. Para Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista de Chile, había constituido una gran victoria "con la cual el movimiento popular estuvo a punto de conquistar el poder por la vía electoral, de originar un gobierno popular y democrático con la representación básica de los partidos Comunista y Socialista..."³ Con ello se buscaba reforzar la vigencia de la vía electoral y la definición conceptual de un futuro gobierno de la izquierda como *popular y democrático*. Para Raúl Ampuero, Secretario General del Partido Socialista de Chile, "el desarrollo de la campaña presidencial fue la mejor comprobación de la justeza de esa línea (Frente de Trabajadores). Iniciada con el mayor escepticismo de parte de muchos altos dirigentes, tomó pronto el impulso inusitado, dio confianza a las masas urbanas y abrió una brecha profunda en la conciencia campesina, la candidatura considerada originalmente *un saludo a la bandera* carente de expectativas, tomó los relieves de una ofensiva impetuosa, que desafiaba amenazadoramente el dominio reaccionario. Los 30.000 votos que nos separan de la victoria dieron la dimensión física del pujante movimiento desatado detrás de una correcta formulación política".⁴ Lo que dicho partido intenta explicitar, a diferencia de los comunistas, es la capacidad de movilización, enfrentamiento y conflicto del movimiento popular. Ello naturalmente es antagónico con la visión comunista de acceso al poder por la vía pacífica que valora la participación política del movimiento popular en el

contexto del régimen existente.

A la vez, ambos partidos coincidían en la conceptualización de los resultados del gobierno de Alessandri. Para los socialistas "en 1958 la designación de Alessandri fue el acto final de la restauración reaccionaria. Por primera vez desde 1938 la derecha alcanzaba plenamente el poder con un hombre de sus propias filas, sobre una plataforma liberal y libre-empresista, en brazos de una corriente de opinión que, si bien estaba lejos de ser mayoritaria, representaba un claro retorno a los mitos económicos y políticos predominantes con anterioridad al gobierno del Frente Popular".⁵ Para los comunistas el diagnóstico del alessandrismo era: "en resumen se ha hecho más rico al rico y más pobre al pobre. Los monopolios imperialistas han aumentado los privilegios. Los grandes capitalistas han concentrado en sus manos un mayor poder económico a expensas de las masas populares y de los pequeños y medianos industriales, comerciantes, mineros y agricultores".⁶ Sin embargo el conjunto de las discrepancias que expresan la prolongada y tradicional polémica socialista-comunista no logró impedir la nominación conjunta de Salvador Allende como candidato presidencial a las elecciones de 1964 sobre la base de un programa que insistía preferentemente en una política de recuperación de las *riquezas básicas* en manos del capital extranjero, la puesta en práctica de las reformas estructurales necesarias tales como la reforma agraria y un conjunto de medidas que favorecían de manera radical la distribución de las rentas y la profundización de la democratización nacional. Es evidente que dicho programa continúa siendo tributario de la tradición política y de la visión económica del Frente Popular desarrollista.

En dicho programa se encuentran confusas apreciaciones y combinaciones entre un modelo de profundización de una industrialización autosostenida, e imprecisas conceptualizaciones respecto de cómo debe ser traducido el concepto del socialismo en términos de un proyecto nacional de desarrollo; todo ello a pesar de la significativa influencia de la experiencia histórica de la revolución cubana. La confusa relación que se establece entre marxis-

mo y desarrollismo es insuficiente para dar cuenta de las reales dimensiones de una crisis económica generada en torno al estancamiento del modelo de acumulación precedente. Sobre todo si se considera que el intento de superar dicha crisis era formulado en términos de una profundización de la industrialización en donde sin dudas, al igual que la experiencia del Frente Popular, el conflicto entre acumulación y distribución de ingresos constituiría la dificultad esencial para superar la crisis. En esta perspectiva la necesidad de diferenciar un proyecto de desarrollo de capitalismo de Estado dependiente de un proyecto de desarrollo socialista para una economía esencialmente dependiente estaba en la base de las dificultades teóricas de la izquierda para formular una estrategia viable para la sociedad chilena. Por ello es por lo que, para el electorado de 1964, la necesaria distinción entre el proyecto de *revolución en libertad* propugnado por la Democracia Cristiana y la política pro-socialista del Frente Popular, fue difícil de ser establecida. En el contexto de esta situación cobraron mucha más importancia los aspectos ideológicos y puramente propagandísticos en la decisión de la sociedad civil, que los aspectos programáticos propuestos. De ahí que las diferencias ideológicas entre Allende y Frei fueran fácilmente presentadas como un dilema entre *revolución en libertad* o *revolución bajo dictadura comunista*.

A pesar de ello, la disputa entre socialistas y comunistas se acentúa en torno a las vías de conquista del poder. El énfasis comunista puesto en la posibilidad de acceder al poder del Estado por medio de la profundización de la vía parlamentaria electoral, nunca fue un aspecto de consenso respecto del Partido Socialista. Por el contrario, dicha disputa estará aún presente en pleno desarrollo del gobierno de la Unidad Popular en el período de 1970-73. En 1962 el Partido Socialista había rechazado el énfasis comunista en la vía pacífica calificándola como "factor de confusio-nismo".⁷ Sin embargo, la proximidad de las elecciones presidenciales de 1964 posibilitan la modificación transitoria de la óptica socialista sobre dicha disputa y en su congreso nacional realizado en Concepción en febrero de 1964 dicho partido declara que: "en-

frentamos las elecciones, pues, porque existen condiciones favorables para ganarlas y porque ganándolas, ellas deben abrir una nueva etapa en el desarrollo de la revolución chilena. Además, porque objetivamente no existe otra opción".⁸ La derrota electoral de 1964 creará condiciones para la reapertura de dicha disputa. En su XXI Congreso desarrollado en 1966, el Partido Socialista confirma la ineficacia de la *vía pacífica* al declarar que: "En Chile, la política colaboracionista practicada extensamente por los partidos obreros, después de dos décadas de fracasos permanentes, aparece agotada; su práctica ha servido de muro de contención para el descontento social, frustrando las esperanzas de las masas que confiaban en sus conductores".⁹ Ello implica necesariamente el reforzamiento de sus tesis referida al Frente de Trabajadores antes descrita. Por el contrario, el Partido Comunista, sobre la base de la denuncia de "todas las formas de aventurerismo y actividades conspiratorias", después de la derrota electoral de la izquierda en 1964 a través de su XIII Congreso confirma la viabilidad y vigencia de su tesis de la *vía pacífica* e introduce un concepto que será crucial en la configuración del programa político que conducirá a Salvador Allende a la victoria electoral en 1970: *gobierno popular*. Dicho concepto hace referencia a la necesidad de la alianza de los obreros con todas las capas y clases sociales que han formulado como objetivo el "progreso y desarrollo independiente". Con ello ponen en discusión la idea de la *solidaridad de clases*, fundamento de la tesis socialista del Frente de Trabajadores.

La Democracia Cristiana obtiene la victoria en las elecciones presidenciales de 1964 con un programa político y un sistema de reflexión sobre las dificultades generadas por el desarrollo del capitalismo dependiente chileno, no menos ambiguo que el formulado por la izquierda. En dichas elecciones obtiene el 56,09% de los votos emitidos que correspondían a 1.409.012 electores. Una cifra electoral excepcional en la historia política chilena. El FRAP en cambio, es derrotado con un total de 977.902 electores que correspondía al 38,93% de los votos emitidos. Dos aspectos desempeñaron un papel decisivo en la victoria electoral de la

CUADRO VI

Chile: Resultados de la elección presidencial de 1964

CANDIDATO	VOTOS RECIBIDOS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE VOTOS VALIDOS
Frei.....	1.409.012	56,09
Allende.....	977.902	38,93
Durán.....	125.233	4,99
Nulos.....	11.475	
En blanco.....	7.071	
Total.....	2.530.693	100,01

FUENTE: Dirección del Registro Electoral: Resultados Oficiales de las Elecciones Presidenciales de 1964, Santiago de Chile, 1964.

Democracia Cristiana en el seno de una sociedad que tenía mayoritaria conciencia de la necesidad de cambios estructurales para superar su estancamiento y desigualdad. En primer lugar, la incentivación casi morbosa de un anticomunismo primario que se expresó en el propio slogan de '*Revolución en Libertad*'. La puesta en práctica de una táctica psicopolítica anticomunista incluyó la propia participación de Juana Castro (exilada cubana, hermana de Fidel Castro) en un programa de radio cuarenta y ocho horas antes de la elección, en el que proclamaba el "genocidio comunista" iniciado por su hermano a propósito de la victoria de la revolución cubana. El segundo se relaciona con la reagrupación de la derecha integrada por los partidos liberal y conservador en torno de la candidatura de Eduardo Frei, abandonando definitivamente a su candidato original, Julio Durán, que encabezaba el Frente Democrático. Dicho reagrupamiento se produce como resultado de la victoria electoral del candidato del FRAP en las elecciones complementarias para un diputado por Curicó, que tuvo lugar el 15 de marzo de 1964. Dicho resultado puso de manifiesto la posibilidad evidente de la victoria de Allende y significó a la

vez, una derrota contundente al gobierno derechista de Alessandri que a través de su candidato Julio Durán había otorgado a dichas elecciones el carácter de un plebiscito que explicitaría el apoyo al gobierno. No fue ajeno a la reagrupación de la derecha en torno al candidato de la Democracia Cristiana, la influencia y presión de la Embajada Norteamericana que aumentó ostensiblemente su ayuda económica a la candidatura de Frei como quedó demostrado en las investigaciones posteriores realizadas por el Senado Norteamericano, a fin de esclarecer la dimensión de la intervención de U.S.A. en el golpe militar que derrocó al Presidente constitucional en 1973. En la política norteamericana para América Latina en su formulación de '*Alianza para el Progreso*', el Partido Demócrata Cristiano con "su orientación social-cristiana, status de la clase media, organización moderna y alto nivel de liderazgo...su gobierno presenta una alternativa democrática y reformista al comunismo, y, a pesar del escaso tiempo que lleva en el poder, ha evidenciado su competencia y rapidez para constituirse en un primer motor de los asuntos latinoamericanos".¹⁰ Después de las elecciones complementarias de Curicó, el Partido Demócrata Cristiano no hizo más que acentuar la estrategia psicopolítica del anticomunismo como lo certifica su tercera declaración de Millahue en 1964. En dicha declaración se prevenía al pueblo chileno de la posibilidad de una *revolución con dictadura* en los siguientes términos: "Rechazamos tales tácticas (represivas). Y ante ellas deseamos decir la verdad claramente al pueblo chileno. La victoria del FRAP significaría el dominio de dos partidos (socialista y comunista) sobre los otros grupos en la coalición. Esto no es una mentira. Es imposible separar a la coalición socialista-comunista de las grandes experiencias mundiales a las que admiran. Sentimos que tales experiencias, realizadas en nombre del marxismo, han producido sistemas políticos dictatoriales, la colectivización, la regimentación intelectual...".¹¹ El cinismo manipulador de la *estrategia psicopolítica anticomunista* fue revelada explícitamente por un apologista del gobierno demócrata-cristiano como George Grayson. En su tesis de doctorado, "*El Partido Demócrata Cristiano Chileno*" sostiene lo siguiente: "Hablando con docenas de dirigentes y militantes del P.D.C., encontré que casi

ninguno tomaba la anterior declaración en serio (la de Millahue). Al igual que los democratas deben insultar a los republicanos en el año electoral, me dijo un diputado demócrata cristiano, debemos criticar a nuestros oponentes. El objeto del ejercicio era simplemente ganar votos".¹²

La desarticulación de la candidatura derechista encabezada por Julio Durán, miembro del Partido Radical, y su derrota posterior en las propias elecciones presidenciales (125.233 votos que correspondieron al 4,9% de los electores efectivos) supuso el inicio de la caducidad del esquema político precedente que, a través del Partido Radical había articulado la participación de la derecha en la consolidación del *estado de compromiso* que había formalizado el modelo de industrialización *autosostenido*. La victoria Demócrata Cristiana crea las condiciones políticas necesarias para constituirse en el centro político modernizante que intentará articular la participación en el poder de la derecha tradicional.

El proyecto alternativo formulado por la democracia cristiana se fundamentaba en la exigencia de un tipo de orden social que impida la separación del capital y el trabajo. Sobre estas bases se constituye un modelo de sociedad conservadora carente de conflictos sociales radicales. Dicho proyecto sería viable en la medida en que dichos conflictos permanecieran ausentes. En esta perspectiva la profundización de la democracia requería "como condición la supresión de toda forma de privilegios y la renovación de las viejas estructuras sociales. Ella requiere igualmente dar a todo el mundo acceso a la cultura, la economía y el bienestar. Mientras que todos los ciudadanos no reciban lo suficiente, ninguna sociedad cristiana puede permitir que unos pocos gocen del lujo. Por lo demás creemos que, a través de la democracia social se llega a la democracia política y a la libertad".¹³ Es este tipo de concepto el que crea las condiciones teóricas necesarias a la formulación de un modelo de capitalismo moderado que intenta superar el estancamiento y las desigualdades y resolver las deficiencias de un modelo de industrialización altamente protegido.

CUADRO VII

Chile: Importancia relativa de variables claves: 1958-62 - porcentajes

Años	Importaciones:		Reservas Internacionales:		Aumento de deuda externa:		Créditos y compras de divisas a Tesorería:		Ingresos tributarios:		Inversión Geográfica bruta:	
	Ingreso nacional	(1)	Importaciones	(2)	Importaciones	(3)	Oferta de dinero	(4)	Gastos Corrientes fiscales	(5)	Producto Nacional bruto	(6)
1958	17,9		1,7		15,4		36,0		102,5		10,2	
1959	17,1		21,8		-1,0		32,6		111,0		9,9	
1960	20,9		13,1		20,6		54,0		105,6		10,9	
1961	20,8		4,4		53,0		29,3		107,3		13,5	
1962	18,0		-1,4		42,3		57,5		101,0		13,2	

FUENTE: French-Davis, Ricardo, "*Políticas económicas en Chile 1952-1970*", Ediciones Nueva Universidad, Santiago de Chile, 1973.
Cuentas Nacionales 1940-1962. Corporación de Fomento, Santiago de Chile, 1963.

La crítica a las deficiencias generadas por el modelo de industrialización precedente fueron sistematizadas en los estudios del economista demócrata cristiano Jorge Ahumada que logró formalizar en términos de estrategia de desarrollo las formulaciones ideológicas generadas en el seno de la ideología social cristiana, fuertemente inspirada en la encíclica social de los años treinta, 'Quadragesimo Anno'.

En este contexto se proclama la idea de que, en las condiciones de la economía chilena, la industrialización por sustitución de importaciones no había constituido ni constituía una solución ideal para reducir la inestabilidad de la economía chilena.¹⁴ Ello se fundamentaba en el extremo proteccionismo del modelo y en la indiferencia frente a la necesaria diversificación de las exportaciones que el énfasis en la industrialización basada en el mercado interno había generado. La crítica en contra del esquema de industrialización precedente era expuesta por Jorge Ahumada en los siguientes términos: "Podría parecer confuso el hecho de que se diga que es esencial aumentar y diversificar las exportaciones para dar estabilidad a la economía chilena y, al mismo tiempo, se hable de abrirla al comercio internacional. Abrir la economía tiene una connotación de reducción de los aranceles y otros tipos semejantes de protección a la producción nacional, y esto no parece tener conexión con la diversificación de exportaciones. Pero en verdad, no se puede hacer una política de exportaciones dirigida en un sentido totalmente contrario. La razón es muy simple. La continuación de una política indiscriminada de protección industrial, que ha conducido a la creación de fortunas fabulosas en un período corto, encarece los costos internos, y como los costos de todos los artículos están relacionados entre sí - no se puede concebir que suban unos pocos y otros no - los de los productos que pueden ser exportables también suben y al hacerlo, pierden la posibilidad de competir en los mercados internacionales. En consecuencia, si Chile quiere destruir la raíz de la inflación, que se asienta - como se demostró antes - en la inestabilidad estructural de su economía, tiene que reducir el grado de protección que le está concediendo a las activi-

dades nacionales".¹⁵ Dicho diagnóstico se fundamentaba además en la convicción de que el estilo de industrialización había conducido a un aumento significativo de la sensibilización de la economía respecto de las fluctuaciones de las importaciones. Ello era el resultado lógico del hecho de que la sustitución industrial se basó sólo en la transformación industrial de insumos importados. "Ahora bien, Chile tenía y tiene muy pocas posibilidades de sustituir sobre bases diferentes, porque, aunque sus recursos son muy abundantes, no son, en cambio, muy variados. La falta de diversidad de los recursos productivos chilenos es una de las principales razones que hace ineficiente la solución de la sustitución de importaciones para el problema de la inestabilidad de la economía".¹⁶

A ello deben agregarse las dificultades generadas por el propio esfuerzo de la industrialización sustitutiva por resolver el problema de la inestabilidad de la economía, que se expresaba en sustentar el crecimiento económico en la demanda generada internamente. Evidentemente, las dimensiones insuficientes de dicho mercado se pusieron en contra de la solución prevista. La insuficiencia del mercado interno se acentuaba aún más cuando se evidenciaba la necesidad de la producción de bienes de capital, es decir, el paso de la *sustitución fácil* (bienes de consumo directos) a la *sustitución difícil* (producción de bienes de capital). De manera esencial, esta visión demócrata cristiana acentúa su interpretación de la problemática de la inflación y la estabilización de la economía en un marco interpretativo que fue designado como '*enfoque estructuralista*'. Dicho enfoque sostiene que las dificultades del desarrollo nacional provienen de la naturaleza de la estructura económica. Ella se caracteriza por la segmentación de los mercados, desequilibrios de oferta y demanda a nivel sectorial y escasa movilidad de los recursos productivos. En este contexto el crecimiento de la economía está siempre expuesto a las limitaciones que derivan del hecho de que los cambios en la demanda que se generan a partir de los niveles de ingreso más altos, no reciben adecuada respuesta de la oferta (cuellos de botella). Dichos *cuellos de botella* provie-

nen según la interpretación estructuralista, de la rigidez del gasto público y estructura tributaria, deficiencia en la disponibilidad necesaria de divisas, oferta rígida de productos alimenticios, insuficiente ahorro interno e insuficiencia en la oferta de diversos insumos de tipo intermedio.¹⁷ Por ello el enfoque estructuralista se encuentra estrechamente asociado a una concepción política de corte reformista y modernizador de la estructura capitalista dependiente. Sobre todo si se considera que la resolución de dichos problemas, pasa necesariamente por la ejecución de profundas reformas de tipo institucional: intervención del Estado en diversas áreas de la actividad económica, reforma agraria, transformaciones del sistema tributario, etc. "Todos estos cambios afectarían negativamente el ingreso de quienes controlan los recursos escasos que dan origen a los cuellos de botella: los propietarios de la tierra, aquellos que manejan las exportaciones o los que son dueños de materias primas claves para el país. Los recursos extraídos de estos sectores deberían ser canalizados en favor del Estado. Se postula que ellos servirían de base para sustentar posteriores mejoramientos de los niveles de productividad y una distribución del ingreso en favor de los segmentos más pobres y atrasados de la economía. Las reformas estructurales inducirían una gradual redistribución del ingreso en el largo plazo".¹⁸

3.2. La modernización en libertad.

La alternativa económica representada por la Democracia Cristiana para su período de gobierno (1964-70) intenta imprimir un dinamismo a la economía chilena a partir de dos ejes sustantivos. El primero de ellos hace referencia a la acentuación de los procesos de concentración de capital y, paralelamente, favorece la diferenciación de la estructura interna del consumo a fin de posibilitar el desarrollo y consolidación de un mercado de bienes de consumo duradero. Para ello era necesario apoyarse en la influencia creciente de la tecnología y el capital extranjeros. El segundo de ellos hacía referencia a la reforma agraria que suponía la incorporación, tanto en el nivel económico como político,

de vastos sectores campesinos largamente marginados de su participación en ambos niveles.¹⁸

El inicio del gobierno de Frei hace frente a una situación económica cuyos aspectos más relevantes son la existencia de una inflación anual acumulada de un 46% y una situación crítica en su balanza de pagos, agravada por deudas externas apreciables a corto plazo. En el sector fiscal, los ingresos tributarios, deducidos los gastos corrientes, sólo permitían cubrir un cuarto de la inversión fiscal y ello a pesar de que en 1964 las remuneraciones habían disminuido substancialmente para un tercio de los empleados fiscales. Eso sin considerar la disminución efectiva de ingresos sufridas por los trabajadores de las restantes actividades económicas. El conjunto de esta situación se debatía, además, dentro de la carencia absoluta de programación económica que posibilitara la coordinación de las diferentes ramas de la política económica.

Los objetivos del programa de gobierno ²⁰ estaban constituidos por el intento de triplicar la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, reducir la tasa de inflación en un período de cinco años a niveles cercanos a cero y acentuar la redistribución del ingreso. El aumento de la tasa de crecimiento se fundamentaría en la ampliación del ahorro interno y ello conduciría necesariamente al aumento del empleo y a la disminución de la capacidad ociosa instalada del aparato industrial. La ampliación de los servicios sociales del Estado (salud y educación preferentemente), la política de remuneraciones que tendería a mejorar la participación de los asalariados en el ingreso nacional, una nueva progresividad para el sistema tributario, la igualación de las asignaciones familiares, constituirían los instrumentos esenciales de la redistribución de ingresos. "El conjunto de medidas debía avanzar coherente y oportunamente para conciliar los objetivos de estabilidad, crecimiento y redistribución. Con ese propósito, el gobierno proyectaba institucionalizar la planificación económica, creando la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), encargada de asesorar al Presidente en las decisiones económicas

CUADRO VIII

Chile: Índice de precios al consumidor

Variaciones porcentuales

Años	Promedios anuales			Fines de año			Índice corregido de precios al consumidor	
	Oficial	Reponderado ¹	Corregido ²	Oficial	Reponderado ¹	Corregido ²	Promedios anuales	Fines de año
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1952	22,2	21,6	21,7	12,1	23,9	21,2	0,805	0,849
1953	25,3	26,2	26,0	56,1	48,2	49,8	1,014	1,272
1954	72,2	56,5	59,1	71,1	56,2	58,7	1,614	2,019
1955	75,1	76,5	76,3	83,8	89,4	88,7	2,846	3,809
1956	56,1	65,7	64,7	37,7	45,4	44,6	4,688	5,508
1957	26,8	29,5	29,3	17,3	24,1	23,7	6,062	6,813
1958	25,9	25,2	25,2	32,5	24,3	24,6	7,590	8,489
1959	38,6	38,6	39,0	33,3	33,2	33,1	10,55	11,30
1960	11,6	11,5	11,4	5,4	5,5	5,4	11,75	11,91
1961	7,7	7,6	7,3	9,7	9,6	9,4	12,61	13,03
1962	13,9	13,8	13,9	27,7	27,6	28,6	14,36	16,76
1963	44,3	43,8	46,5	45,4	43,2	45,9	21,04	24,45
1964	46,0	44,6	47,2	38,4	38,8	40,4	30,97	34,33
1965	28,8	29,1	29,8	25,9	26,8	27,3	40,2	43,7
1966	22,9	23,5	23,7	17,0	18,0	17,9	49,7	51,5
1967	18,1	19,4	19,4	21,9	22,4	22,8	59,4	63,2
1968	26,6	27,3	27,7	27,9	28,6	29,1	75,8	81,6
1969	30,6	31,1	31,9	29,3	29,8	30,6	100,0	108,6
1970	32,5	32,6	34,1	34,9	34,9	36,2	134,1	147,9

1 Las tasas de variación del período 1952-58 fueron obtenidas de la serie recalculada por el Banco Central.

2 Las tasas del período 1952-58 corresponden a un promedio ponderado de las columnas (1) y (2), según lo descrito en la sección 3, letra a.

FUENTE: French-Davis, Ricardo, "Políticas económicas en Chile 1952-1970", Ediciones Nueva Universidad, Santiago de Chile, 1973.

y recomendar un programa de desarrollo y estabilización (metas y su implementación) al que quedarían subordinadas las decisiones públicas. En suma, ODEPLAN sería una oficina destinada a coordinar y preparar el programa económico general del gobierno chileno. Era el propósito, según el programa planteado por la candidatura triunfante, que las organizaciones populares fomentadas por el sistema de Promoción Popular tuvieran un papel decisivo en el proceso de planificación".²¹ Al mismo tiempo, se confiaba en que la economía nacional lograría alcanzar una tasa de crecimiento del producto nacional que fluctuaría entre el 5 y 6% anual. En los primeros años dicho crecimiento se fundamentaría en una utilización más eficiente de la capacidad instalada. Dicha eficiencia sería incentivada a partir de la inversión en construcción de viviendas, disminución relativa de los precios de los bienes industriales y mejoramiento del ingreso real de los sectores laborales, esperando en definitiva un crecimiento real de la economía equivalente al 7% en 1965. El crecimiento sostenido del producto nacional se garantizaría a través del crecimiento del ahorro que debería pasar del 12 al 20% del producto nacional bruto. Por otra parte, la renegociación de los servicios de la deuda externa, la cuadruplicación de las exportaciones industriales y la duplicación de las exportaciones de cobre resolverían el déficit de la balanza de pagos y la inestabilidad del sector externo de la economía que habían constituido una causa sustantiva en la generación de la inflación interna. En el sector monetario se ejecutaría una política programada a fin de que la demanda agregada guardase relación estrecha con la oferta agregada de la economía y la regulación del déficit fiscal debería estar en función del programa monetario global. Los sectores de las pequeñas y medianas empresas se verían favorecidos por un proceso redistributivo de *'democratización del crédito'*, dentro de una expansión programada de la oferta de dinero. Las inversiones fiscales se concentrarían prioritariamente en la reforma agraria, la vivienda y la educación. A ello debe agregarse la sustitución de los representantes económicos de los grupos empresariales por los representantes del sector público en la dirección del Banco Central.

Es este programa, que constituye un intento de superación del estancamiento de la economía chilena, de modernización radical del desarrollo económico, el que es conceptualizado como una política reformista sustitutiva de la revolución socialista. Esto lo explicaba el propio Presidente en los siguientes términos: "La democracia de inspiración cristiana tendrá éxito en la medida en que ella tenga conciencia de que el continente sudamericano vive una revolución revolucionaria; si ella se vuelve una fuerza de conservación del orden establecido, la democracia representativa estará condenada a la muerte, porque el actual orden es una organización social, económica y política que oprime al 75% de la población. La democracia, salvo en casos muy excepcionales, sólo ha representado al grupo dirigente...²² Hay que poner el acento sobre la palabra revolución, porque hoy en nuestro continente ya no queda tiempo para recurrir a la evolución. Quien cree que dispone de veinte o veinticinco años para realizar una lenta evolución se equivoca. El proceso revolucionario no va a comenzar. Ya ha comenzado".²³ Es decir, el dilema latinoamericano era: modernización o socialismo.

El programa de estabilización económica adopta una clara tendencia gradualista en la medida en que se sometía a los ritmos de la producción agropecuaria, al déficit fiscal y al ritmo de la balanza de pagos. Sin embargo, su principal determinante estaba constituido por la decisión política de garantizar un reajuste de remuneraciones equivalentes al 45% para 1965, relativamente equivalente al índice inflacionario y para los años siguientes establecer un monto de remuneraciones equivalente al porcentaje total de inflación anual. Dicha política de remuneraciones debía discriminar positivamente a obreros y empleados. En el conjunto del programa de estabilización era indispensable establecer la distinción entre presiones de costo y presiones de demanda. Lo esencial a considerar serían las presiones de costo debiendo adaptarse la demanda agregada a los índices de las presiones de costos programados. Los incrementos de la productividad, el nivel del reajuste promedio y los costos de las importaciones, constituirían sus principales variables.²⁴ Tanto la re-

CUADRO IX

Sueldos y salarios: Chile, 1965-1970
(Variación anual del monto nominal)

	<u>Obreros</u>	<u>Empleados</u>	<u>Total</u>	<u>IPC^{a/}</u>
1965	48.5	46.2	47.3	28.8
1966	40.8	34.7	38.1	22.9
1967	39.1	34.1	36.3	18.1
1968	28.2	25.5	26.9	26.6
1969	38.4	43.4	40.8	30.6
1970	42.5	50.1	46.9	32.5

FUENTE: French-Davis, 1973, Apéndice X.

a/ Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
French-Davis, Ricardo, *"Políticas económicas en Chile 1952-1970"*, Ediciones Nueva Universidad, Santiago de Chile, 1973.

gulación de las variables que influían en la demanda agregada como sus consecuencias, condicionarían la relación entre estabilización y empleo. Sin embargo el aspecto específico del programa de estabilización global que marcaba la ruptura con los intentos precedentes se relaciona con el hecho de que la "estabilización se alcanzaría al mismo paso que las reformas estructurales", y serían éstas las que posibilitarían simultáneamente tanto la redistribución del ingreso como el crecimiento económico. En esta dirección se otorgaba mayor prioridad a los problemas económicos y sociales que a la inflación misma.²⁵

A corto plazo se verifican resultados positivos en dicha política. En 1966 se logra una reducción de la inflación al 20% y un 7% de aumento de la producción nacional, que había sido precedida de un 5% para 1965. La producción manufacturera evidenció un aumento de un quinto en el bienio 1965-66, resultado de la redistribución de la renta, el incentivo de la construcción de viviendas y la política de control de precios. La política de control de precios facilitó la reducción de precios de los bienes

CUADRO X

Chile: Ritmo de crecimiento del producto
total y del ingreso (*Tasas anuales de crecimiento*)

<i>Año</i>	<i>Producto bruto interno</i>	<i>Ingreso</i>
1961	6.2	6.3
1962	5.0	3.9
1963	4.7	4.5
1964	4.2	4.8
1965	5.0	6.5
1966	7.0	9.9
1967	2.3	1.4
1968	2.7	3.9
1969	3.0	5.3

FUENTE: Años 1961-68: Presidencia de la República,
Oficina de Planificación Nacional, *Cuentas
Nacionales de Chile 1960-68*.
Año 1969: CEPAL, estimaciones preliminares
a base de indicadores nacionales parciales.

industriales y el crecimiento de los precios agrícolas. En 1964, como en años anteriores, los fuertes controles ejercidos sobre los precios agrícolas habían permitido que los niveles de éstos fueran inferiores a los precios de los mercados internacionales y, por el contrario, los precios de los productos industriales sobre la base de su excesiva protección, la monopolización de la producción industrial y la capacidad industrial no utilizada había generado una profunda artificialidad en los precios de dichos bienes. "La política de precios demostró ser altamente eficiente, acercando los precios agrícolas internos a la vecindad de su costo de oportunidad (precios internacionales). De este modo, se redistribuyó la demanda agregada hacia los bienes manufacturados, lo cual contribuyó al fuerte aumento de la producción industrial, principalmente merced a un mejoramiento de la eficiencia del empleo de los recursos, aumentando la utili-

zación de la capacidad instalada. Este incremento de 20% de la producción industrial fue acompañado de una expansión del empleo, que alcanzó a 18% en el sector".²⁶

El resultado satisfactorio de este primer período del gobierno no logró, sin embargo, ocultar la permanencia de los desequilibrios de la economía chilena. Estos estaban constituidos por la inflación reprimida y el índice de inflación superior a lo programado. Pero más esenciales aún fueron los aumentos de remuneraciones nominales por encima de lo programado y el fracaso del intento por fortalecer la tasa de ahorro interno, que comprometieron definitivamente el éxito del programa de estabilización. El ahorro nacional experimentó un cambio de composición más que un crecimiento, crecieron los recursos de captación de las instituciones financieras y fiscales, disminuyendo el ahorro privado a través de las ventas a plazos de los bienes de consumo y así como en general el ahorro de las empresas. Para 1965 se había programado un incremento del 9% de inversión lográndose solamente el 4%.²⁷ El lento crecimiento verificado en las actividades económicas en 1967 está estrechamente vinculado al bajo nivel de inversión que limitó el mejoramiento real de las remuneraciones acentuando la desocupación.²⁸ Sin embargo, el grueso de los analistas de la Democracia Cristiana coinciden en sostener que el movimiento sindical marginado de la elaboración y aplicación del programa y la imagen populista que el propio gobierno había creado de sí mismo en su intento por aparecer como *más eficiente que el socialismo*, provocó que un alza de un cien por ciento de las remuneraciones en relación a la inflación. Ello provocó que este criterio se transformara en el punto de partida para las negociaciones salariales, comprometiendo seriamente el resultado del programa de estabilización a través de la obtención de un incremento de las remuneraciones superior a los índices inflacionarios. Sin embargo, en virtud del descenso de los precios internacionales de algunos de los bienes importados por la economía chilena y el aumento de la producción industrial por encima de lo programado, habrían permitido absorber convenientemente la desviación laboral en mate-

ria de ingresos. No obstante, la inversión fue drásticamente reducida para hacer frente al alza desmedida de los gastos sociales del Estado generados por el crecimiento de las remuneraciones de los trabajadores del sector fiscal. Ello provocó para el período 1965-66 una reducción significativa del producto nacional bruto. El año 1967, en cambio, constituyó el inicio de un proceso inflacionario creciente. No por ello la situación se tornó explosiva, "evitándose una inflación de demanda descontrolada. La tasa de elevación del nivel de precios estuvo determinada por las presiones de costos, adaptándose a ellas la oferta de dinero. Las mayores presiones de costos fueron generadas, en lo principal, por aumentos de remuneraciones nominales por encima de las metas. El resultado obvio tenía que ser la desocupación generalizada o la inflación, y el gobierno optó preferentemente por la segunda. La desocupación creciente que comenzó a detectarse a partir de 1967 fue resultado, entonces, no de una escasez de demanda agregada, sino de problemas de estructura (brusco freno de la inversión fiscal en vivienda y obras públicas) y de la reducida creación de nuevos lugares de trabajo en los sectores productivos".²⁹

Dicha situación condujo a que las diversas políticas que se adoptaron en el período de 1968-70 se sometieran de manera flexible a la presión inflacionaria de los costos, lo que permitió llegar a una situación de inflación regulada durante este período.

3.2.1. Contenido y dificultades del proyecto hegemónico de la modernización.

En primer lugar es necesario explicitar que la alternativa representada por el proyecto de modernización de la democracia cristiana, en su intento por superar la crisis generada por el estancamiento del modelo de acumulación precedente, coincidía con otros esfuerzos latinoamericanos en el mismo sentido. Los esfuerzos de Kubitschek y Goulart en Brasil se habían encaminado en una dirección similar. En esta perspectiva las dificultades del proyecto de modernización puesto en práctica en Chile no se

diferenciaron substancialmente de las que tuvieron lugar en Brasil. Ambos proyectos desbordaron los límites aceptables de movilización popular y campesina en que se había fundamentado el modelo desarrollista. "Un Estado débil como lugar de dirección política de las transformaciones, que aparecía a través de un sistema político flexible y relativamente abierto, debía ser *puesto en forma*. Se trataba de consolidar un Estado más fuerte, no sólo en el sentido obvio de un Estado más representativo, sino - y sobre todo - en tanto empresario de las transformaciones buscadas".³⁰ A pesar del esfuerzo por incluir dentro de la estrategia de modernización a los sectores sociales representados por el campesinado y proletariado rural y los sectores marginales urbanos que habían constituido los grandes ausentes sociales del conflicto por el desarrollo, no logró superar la contradicción básica que surgía entre el intento de profundización capitalista y el proyecto político reformista. Dicha contradicción irresoluble acompañará al gobierno en la totalidad de su período, y aún más, constituirá la dinámica de la polémica interna en el seno del propio partido Demócrata Cristiano.³¹ Las dificultades del gobierno frente a la derecha política chilena no provenían de su falta de claridad en su proyecto neocapitalista sino en la legitimación demasiado popular que éste adquiría. Pero su propio apoyo popular constituye una dificultad esencial para el mismo gobierno, que proviene de su intento por rearticular los procesos de acumulación de capital y de servir las nuevas demandas sociales, económicas y políticas de dichos sectores. La reforma agraria, cuya ley fue aprobada por el Congreso Nacional a mediados de 1967, y la *chilenización del cobre* constituían los elementos esenciales para formalizar el nuevo modelo de '*desarrollo asociado*'.³²

La promulgación de la ley de reforma agraria autorizaba la expropiación de las propiedades agrícolas por razones de abandono o mala explotación, de superficie superior a 80 hectáreas de regadío básico, por subdivisión minifundista y por habilitación de nuevas tierras agrícolas. La propia ley establecía un principio de indemnización a pagar en parte al contado y el res-

CUADRO XI

Chile: Causales de enajenación de tierras para la reforma agraria 1965-1969

	Número de predios	Causales de expropiación (%)
<i>Expropiaciones</i>		
Predios abandonados o mal explotados	541	50.1
Predios ofrecidos por sus dueños a la Corporación	241	22.3
Predios cuya superficie excede de 80 ha de riego básico	197	18.2
Predios de propiedad de personas jurídicas de derecho público o privado	40	3.7
Unidades de superficie igual a 80 ha de riego básico resultantes de la división de un predio con superficie superior a la mencionada, cuya división se haya realizado entre el 21 de noviembre de 1965 y el 26 de julio de 1967	45	4.2
Unidades resultantes de la división de un predio de superficie superior a 80 ha de riego básico, cuya división se haya efectuado con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 y no se haya hecho materialmente efectiva	16	1.5
<i>Subtotal</i>	1080	100.0
<i>Otras fuentes de obtención de tierras</i>		
Transferencias fiscales, adquisición a particulares y fiscales, fondos en administración, parcelas vacantes de colonias constituidas	38	-
<i>Total predios</i>	1118	-

FUENTE: Corporación de la Reforma Agraria, *Informes de expropiación*.

to a 30 años. La tierra sería asignada a los campesinos por medio de la constitución de una unidad productiva denominada '*asentamiento*'. A ello se agregaba la promulgación de la ley de sindicalización campesina que originó un crecimiento espectacular

CUADRO XII

Chile: Incorporación de tierras al proceso de reforma agraria (*Miles de hectáreas*)

	<i>Número de predios</i>	<i>Total</i>	<i>Riego</i>	<i>Secano</i>	<i>Número de familias</i>
1965	99	541.2	41.3	499.9	3698
1966	265	526.2	57.9	468.3	3235
1967	217	285.0	50.6	234.4	2845
1968	223	657.3	44.7	612.6	2824
1969	314	861.9	54.5	807.4	4788
<i>Total quinquenio</i>	1118	2871.6	249.0	2622.6	17390

FUENTE: Corporación de la Reforma Agraria, Dirección de Planificación y Control.

lar en la organización de los trabajadores del sector agrario.³³ La chilenización del cobre se fundamentó en cambio en necesidades de orden nacionalista y logró la unanimidad del Congreso Nacional, a diferencia de la ley de reforma agraria, que no guardaba ninguna relación con el resultado económico de dicha gestión. Por otra parte los convenios con las empresas norteamericanas del cobre evidenciaron la debilidad de la burguesía chilena y del Estado para favorecer una nueva forma de articulación con el imperialismo americano.³⁴ La chilenización del cobre constituyó una alternativa a la nacionalización total propuesta históricamente por la izquierda y dio como resultado la creación de sociedades mixtas entre el Estado y las empresas norteamericanas mediante la compra a dichas empresas del 51% de su capital. Dicha '*compra-indemnización*' fue cuantiosa, la Anaconda, en las so-

CUADRO XIII

Chile: Formación de asentamientos

	Número de asenta- mientos	Número de predios que los componen	Total	Riego	Secano	Número de familias beneficia- rios
			Miles de hectáreas			
1965	33	36	286.8	16.2	270.6	2061
1966	62	63	145.6	17.3	128.3	2109
1967	151	218	354.8	47.7	307.1	4218
1968	158	229	725.2	53.7	671.5	5644
1969	229	369	1078.2	68.4	1009.8	6404
<i>Total quin- quenio</i>	<i>633</i>	<i>915</i>	<i>2590.6</i>	<i>203</i>	<i>2387.3</i>	<i>20436</i>

FUENTE: Corporación de la Reforma Agraria, Dirección de Planificación y Control.

ciudades mixtas formadas con sus subsidiarias Chile Exploration Co. y Andes Copper Co. recibió por el 51% de las acciones pagarés del gobierno chileno equivalentes a 175 millones de dólares, en unas circunstancias en las que el valor del capital total declarado en los libros de contabilidad de dichas empresas equivalía a 181 millones de dólares. La Kennekott Co. recibió 180 millones de dólares por el 51% de las acciones de su subsidiaria Braden Copper que poseía un valor contable inferior a dicha cifra. El gobierno le avaló además un crédito de 125 millones de dólares y le otorgó los derechos de administración de dicha empresa. A ello deben agregarse los planes de inversión que comprometían créditos con la banca internacional por un monto de 704 millones de dólares.

Las dificultades para la consolidación del *patrón de desarrollo asociado* durante la gestión de la Democracia Cristiana en su esfuerzo por restablecer la dinámica de la acumulación del capital, parecen haber provenido de la debilidad de la propia burguesía nacional.³⁵ Su dependencia respecto del Estado para consolidar el

CUADRO XIV

Chile: Exportaciones totales de cobre (Toneladas)

	<i>Electro- lítico</i>	<i>Refinado a fuego</i>	<i>Total refinado</i>	<i>No re- finado</i>	<i>Total</i>	<i>Valor (millones de dólares)</i>
1960	138.354	74.749	213.103	299.726	512.829	361.2
1961	147.141	69.782	216.923	324.895	541.818	337.2
1962	165.322	74.887	240.209	322.356	562.565	367.0
1963	168.832	77.043	245.875	338.780	584.655	378.4
1964	141.352	71.903	213.255	344.350	557.605	438.8
1965	149.447	67.336	216.783	301.962	518.745	518.5
1966	221.219	95.833	317.072	265.869	582.941	675,7
1967	276.239	85.086	361.325	270.450	631.775	710,6
1968	296.754	81.022	377.776	259.483	637.259	742.2
1969 ^a	...	...	...	...	659.000	882.6

FUENTE: Corporación del Cobre (CODELCO).

^a Estimación

proceso de industrialización monopolista y su dependencia a través de éste respecto del enclave minero (particularmente el cobre) y del capital extranjero, habían configurado en ella un estilo de presencia económica parasitario. Si se considera el estudio de Aranda y Martínez se puede concluir que en el período 1960-68, del total del excedente industrial, restado el impuesto sobre la renta, sólo entre el 25 y el 30% se destinó a la formación de capital fijo y el total de la inversión privada nacional destinado a la formación de dicho capital no alcanzó al 10% del ingreso en el sector industrial.³⁶ Más aún, en el propio período del gobierno de Frei dicho coeficiente de inversión se redujo aún más, de un 16,4% en el período 1960-64 pasó a un 15,6% entre 1965 y 1970. Ello ejerció naturalmente consecuencias negativas sobre el crecimiento del empleo industrial y sobre la participación de los salarios en el ingreso. Es evidente entonces que tanto el Estado como la inversión extranjera, continuaron siendo esenciales para la superación del estancamiento y para la puesta en práctica del nuevo modelo de acumulación.³⁷ Esto último quedó demostrado por el trabajo de José Cademartori, que en un examen de 20 de las más importantes sociedades anónimas del sector industrial consta que el capital extranjero participa con un 36% en el capital global de dichas sociedades.³⁸

Es evidente entonces que, en la base de las dificultades de la Democracia Cristiana para imponer su proyecto de profundización del desarrollo industrial dependiente, de controlar el proceso de acumulación y de ligar fuertemente al Estado el capital monopolista, se encontraban la baja tasa de inversión, los bajos índices de acumulación de capital.

Las dificultades en la concreción de los objetivos comprometieron decisivamente el éxito del esquema de poder propuesto y los objetivos políticos propiamente tales. Como ya lo hemos indicado en páginas anteriores, el esquema del *nuevo poder* propuesto por la modernización aspiraba a reconstruir un sistema de alianza social tras el objetivo de dar legitimidad a la redefinición de la dinámica de la acumulación. Dicha alianza descansaba en la participa-

ción de amplios sectores populares tradicionalmente marginados de la participación o gestión política (campesinado, trabajadores agrícolas en general y marginales urbanos) y en la participación del Estado y del capital extranjero estuviesen dispuestos a modernizar y profundizar el desarrollo industrial dependiente. Ello suponía lógicamente la eliminación de la derecha política tradicional y facilitar la concreción de un nuevo centro político. Ello debería posibilitar la articulación de los sectores modernos de la industria con los sectores medios y populares tras el objetivo de profundización del desarrollo industrial bajo el esquema de desarrollo asociado. Peor la legitimación buscada en la modernización a través de la participación popular condenada desde el inicio por los grupos sociales de derecha que participaban del esquema de alianza gestado por la D.C. La derecha y los sectores medios se aterrorizaban frente a la presión e influencia creciente de dichos sectores y rechazaron de plano la posibilidad de pagar el costo inflacionario de dicha participación. Los propietarios agrícolas resistían las políticas gubernamentales que habían radicalizado el proceso de reforma agraria y aspiraban a hacer frente a la movilización campesina que amenazaba con erradicarlos de la sociedad chilena. La burguesía industrial por su parte rechazaba la creciente presión popular a la que hacía frente la sociedad chilena en dicho período. El gobierno era condenado reiteradamente por los sectores de la mediana y pequeña burguesía que se sentían postergados respecto del gran capital nacional y extranjero. La izquierda condenaba al gobierno por la debilidad de sus reformas y las masas populares en general se sentían frustradas respecto de las expectativas de cambio social puestas en el gobierno. Todos los sectores sociales desbordaron las posibilidades gubernamentales y arrinconaron al régimen en un radical aislamiento. A esto último colaboró el propio sectarismo y la exclusión política practicada desde el mismo gobierno, que tiene muy poco que envidiar al comportamiento del aparato burocrático de los *socialismos reales*.³⁹

Por lo demás era evidente que, tras el objetivo de organizar a los sectores antes marginados, la modernización buscaba neutralizar el potencial radical del movimiento obrero en el cual se a-

fianzaba el poder de la izquierda. Organizaciones comunitarias, centros de madres, juntas de vecinos, promoción popular y reforma agraria constituían los instrumentos esenciales de dicho intento, articulados jerárquicamente a la política del Estado. La ideología integracionista de la D.C. era puesta en juego por la imposibilidad del gobierno para responder al *exceso de la demanda* de los sectores que constituían su base de apoyo. Esto último originó reiteradas veces la respuesta represiva del Estado y que sólo era contenida por los límites que imponía al propio gobierno su declaración de apoyo a los sectores populares. Frente a esta situación el movimiento obrero organizado terminó por radicalizar su política frente al gobierno. En la radicalización del movimiento obrero desempeñaron un papel esencial los intentos reiterados del gobierno por dividir las organizaciones obreras centralizadas en la Central Unica de Trabajadores de Chile, que se había originado en 1953 y en cuya fundación había participado la propia Democracia Cristiana. La estrategia gubernamental de divisionismo obrero y sindical se materializó a través de la creación del "Comando Nacional del Trabajo", surgido de los trabajadores sindicalizados por el gobierno durante la campaña electoral de 1964. A dicho intento fracasado le siguió la organización de la Unión de Trabajadores de Chile, también fracasada y finalmente abandonada por el propio gobierno. Es evidente que la huelga nacional organizada por la Central Unica de Trabajadores en noviembre de 1967 selló el enfrentamiento definitivo con el gobierno. En dicho paro, los trabajadores rechazaron la política deflacionaria del gobierno puesta en práctica a través del '*fondo de capitalización*', que aspiraba a reajustar los sueldos y salarios con bonos de capitalización.⁴⁰ En el sector de la población marginal urbana las demandas populares debían hacer frente a la tecnocracia gubernamental y el gobierno reprimía violentamente las ocupaciones de tierras por parte de los '*sin casa*'.⁴¹ El conjunto de esta situación ejerció consecuencias directas en la capacidad electoral del partido de gobierno; es necesario recordar que Frei había obtenido un 56,09% en las elecciones presidenciales de 1964; en las elecciones parlamentarias de 1965 dicha cifra había descendido al 44% y en 1969 al 31%.

3.2.2. Consecuencias del fracaso del proyecto de profundización capitalista.

La desarticulación del proyecto alternativo puesto en práctica por el esquema de modernización y la imposibilidad de rearticular en torno a la Democracia Cristiana un nuevo esquema de centro político que diera lugar a nuevos procesos de acumulación, condujo a una crisis decisiva de la hegemonía política burguesa en el seno de la sociedad chilena. Dicha crisis se expresó en la inexistencia de una alianza social que hubiera posibilitado la continuidad y estabilidad del modelo político gestado en torno al proceso de industrialización sustitutiva, y la imposibilidad de establecer una nueva *forma burguesa de poder* selló la inestabilidad total del sistema hegemónico. La capacidad de la izquierda para formular un proyecto y una política autónoma facilitó las condiciones revolucionarias que abrieron espacio a la puesta en práctica de lo que se designó como *vía chilena al socialismo*. El propio fracaso político del proyecto de modernización creó las condiciones necesarias para la reconstitución política de la derecha tradicional en torno a la fundación del Partido Nacional en 1966, que había resultado de la fusión de los partidos liberal y conservador. Esto último suponía la *ruptura por la derecha* del esquema de alianza propuesto por la D.C., la superación de la fase defensiva a que había sido sometida por su apoyo electoral a Frei y su independización de los intentos demócrata cristianos por constituirse en el eje de la futura política chilena.

El modelo político que fracasa junto al gobierno es el del intento por articular entorno del centro político representado por la D.C. a la derecha y a los sectores populares en un bloque social y político coherente. Fueron, sin duda, los sectores más tradicionales de la derecha los mayores beneficiarios del fracaso de la modernización, logrando formalizar una alternativa conservadora que se diferenciaba nítidamente de la opción capitalista reformista de centro representada por la Democracia Cristiana. Más aún, logró fortalecer su papel de alternativa a partir de la nominación de su candidato propio, Jorge Alessandri, en las elec-

ciones presidenciales de 1970. Es la división del bloque hegemónico en dos proyectos alternativos lo que parcialmente explica la victoria de la izquierda en dichas elecciones, pero en la práctica será la derecha tradicional la que logrará subordinar a la Democracia Cristiana en su política de desestabilización y derrocamiento del gobierno de Allende en 1973. La complicidad subordinada de la Democracia Cristiana en la destrucción de la democracia chilena fortalecerá el liderazgo de la derecha tradicional en la política burguesa nacional, cruelmente fortalecida por la propia dictadura militar establecida a partir de 1973 y apoyada inicialmente por la propia Democracia Cristiana. En esta perspectiva, la alternativa representada por el socialismo chileno surge inscrita en una complejidad que se expresa en tres niveles diferentes: el conflicto entre Nación e imperialismo que hace referencia al control extranjero sobre actividades productivas esenciales, el conflicto entre clases populares y clases dirigentes y el conflicto entre oligarquía y pueblo que expresa en conflicto en torno a los beneficios económicos y políticos del desarrollo.⁴² La concentración de una sola fuerza orgánica de estos tres elementos constituyó una de las mayores dificultades del gobierno socialista de la Unidad Popular.

3.3. El socialismo como alternativa a la crisis.

Desde el punto de vista de la crisis del Estado y del sistema político es posible asumir la hipótesis de que la *vía chilena al socialismo* suponía la continuidad del modelo político de funcionamiento de la sociedad. Es decir, ella no consideró la ruptura precedente de dicho sistema, que había sido originado en el contexto del fracaso del intento reformista de modernización.⁴³ Dicho fracaso había comprometido la viabilidad de un modelo político relativamente estable articulado en torno a las políticas de centro tradicional que impulsaron tanto la industrialización como la profundización discontinua pero progresiva de la democratización. El proyecto de modernización capitalista inspirado por la Democracia Cristiana puso fin a dicha estabilidad. Es evidente que la estabilidad de la democracia chilena durante todo el período de industrialización hasta 1970 dependía directamente de su vinculación a

las hegemonías políticas de centro. Ello se hace aún más comprensible si se considera que la democracia desde el punto de vista del desarrollo, debe ser conceptualizada como la estructura de legitimación de la gestión del Estado. En esta dirección la democracia posibilita la formalización de las demandas sociales *dispersas* y las hace compatibles con una determinada estrategia de desarrollo, lo que evidentemente no excluye la naturaleza dinámica del conflicto social.⁴⁴

Es en este contexto en el que se inscribe el proyecto alternativo de continuidad y ruptura propuesto por el gobierno socialista de Salvador Allende. De ruptura en la medida en que dicho proyecto supuso y concretó la necesaria reversión del esquema de desarrollo capitalista precedente, a fin de alterar el contenido de clase tradicionalmente vigente en el sistema político de dominación. El criterio de continuidad hacía referencia al necesario mantenimiento y profundización del sistema democrático, tanto en su dimensión redistributiva como en la igualitarista. Este esquema constituyó para algunos la demostración evidente de que la lucha de clases en la sociedad chilena estaba definitivamente determinada y condicionada por la *institucionalidad burguesa*.⁴⁵ Además demostraba supuestamente que el fracaso de la Unidad Popular estaba presente en su propia constitución. Resulta hoy además evidente que los tres años de gobierno de la Unidad Popular estuvieron marcados dramáticamente por este dilema y que se expresó en las alternativas de *consolidar para avanzar* o *avanzar para consolidar*. Es evidente que la izquierda asumió el principio tradicional de que el sistema político constituía un lugar eficiente de resolución de la lucha de clases o por lo menos de que el Estado constituía el espacio político común de participación de todas las clases sociales. Ello sólo puede ser comprendido si se considera que en el seno de la sociedad chilena del período ninguna transformación social, modernizadora o revolucionaria, habría tenido lugar al margen de la legitimación indispensable de la democracia representativa. Es imposible aceptar la idea de que la derrota militar de la Unidad Popular provino de su incorrecta evaluación de la sociedad civil y del sistema político en la medida

en que supone una desvalorización del profundo sentido democrático ejercido por el gobierno popular.

Lo anterior no impide comprender que la conquista del gobierno no es suficiente para favorecer un proceso de transformaciones revolucionarias de la sociedad dependiente y la izquierda debe enfrentar las acciones antidemocráticas de la oposición conservadora. La derecha y el centro político, representados por el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, aspiraron a imposibilitar la concreción de una profundización democrática a través de la destrucción de la democracia misma. Es sin embargo acertado sostener que una de las dificultades esenciales que no fue resuelta por el gobierno fue el no haber conceptualizado eficientemente la problemática del Estado, que le habría permitido hacer frente con éxito a los intentos por derrocar su gobierno.⁴⁶ Ello significa comprender que el carácter conciliador evidenciado por el Estado chileno no había sido resultado directo de la fuerza política de la izquierda socialista, sino el correlato político de un esquema de industrialización que había sido dividido por otros grupos sociales, respecto de los cuales el movimiento popular había constituido una fuerza de apoyo indispensable pero subordinada. Esta autonomía prematura demostrada por el Estado chileno no pudo ser conquistada por la izquierda en el gobierno a partir de la constitución de un bloque popular hegemónico y alternativo a dicho Estado. La gestión de la sociedad no era ni fue compatible con la gestión del Estado. Esta duplicidad e incompatibilidad entre la lógica del Estado y la lógica de la sociedad se reprodujo ideológicamente en el seno de la Unidad Popular, cuyo cruce explica de manera esencial la derrota del gobierno, que se expresó en la dualidad de líneas políticas. Una de ellas representa por el Partido Comunista que concentró su esfuerzo en la destrucción del poder económico de la burguesía nacional y extranjera. La otra fue representada por la política del Partido Socialista que buscaba la construcción y fortalecimiento del poder popular. Ambas líneas políticas que se expresaron en las alternativas de reformismo y tareas revolucionarias no pudieron ser concretadas por ninguno de los dos bloques en el interior del gobierno, lo que provocó como re-

sultado el hecho de que el Estado continuara manteniendo su autonomía respecto de la voluntad favorable de la sociedad civil a cambios sustanciales en la sociedad chilena.

3.3.1. Programa y contenido de la *vía chilena al socialismo*.

El contenido definitorio de la *vía chilena al socialismo* aparece representado por un esfuerzo de transformación social que aspiraba a transformar el contenido de clase del Estado chileno sin su previa destrucción y con una profundización radical del proceso de democratización que además de las variables políticas debería incluir las económicas y sociales de manera esencial. El propio presidente Allende formalizaba dicho concepto en los siguientes términos: "Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista... Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido, apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas - particularmente al humanismo marxista - y teniendo como norte el proyecto de sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno... Puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde, de acuerdo con la Constitución, se puede hacer lo que se desee, desde el momento en que se tiene tras sí a la mayoría de la nación".⁴⁷ Es evidente, entonces, que la singularidad histórica del proceso chileno provenía de la dualidad de poder en el seno del Estado y que se origina a partir del triunfo electoral de Allende.

La concreción de dichos objetivos se pondría en práctica a partir de las medidas contenidas en el programa de la Unidad Popular y que se configuró a partir de cuatro perspectivas esenciales. La primera de ellas hacía referencia a la estatización de los medios de producción entendida como un presupuesto esencial de toda transformación estructural bajo la óptica del socialismo. La segunda se constituyó a partir de la discusión referida a la dependencia, que planteaba la necesidad de la nacionalización de las

empresas extranjeras y del diseño de una estrategia destinada a reducir tanto la influencia de las empresas transnacionales como la influencia financiera de los Estados Unidos sobre la economía nacional. La tercera se vinculaba al pensamiento de la CEPAL referida al establecimiento de una estrategia de desarrollo fundamentada en la producción de bienes de consumo esenciales. Finalmente, se encuentra en enfoque keynesiano que fundamentó una política fuertemente redistributiva y de reactivación económica.⁴⁹ La viabilidad de dicho programa dependía evidentemente de la concreción de ciertas medidas que condicionarían las posibilidades de éxito o fracaso en el nivel económico. La primera de ellas hacía referencia a la necesidad de aumentar la velocidad de la oferta de bienes que satisficiera eficientemente las nuevas características de la demanda, como resultado de la decisión de un aumento radical del consumo. Ello era posible a través de la utilización de dos mecanismos claves: las reservas internacionales como instrumento de ajuste de la composición y el nivel de la oferta a la demanda interna. En segundo lugar, debería producir un ajuste acelerado a la demanda por parte de las inversiones públicas y privadas, a fin de evitar la regresión en la distribución de ingresos y asegurar para ella un desarrollo sostenido. Tercero, deberían compatibilizarse los cambios estructurales (nacionalización de las empresas mineras, creación del área de propiedad social, reforma agraria, etc.) con la redistribución de ingresos, evitándose que los primeros obstruyeran a corto plazo el aumento necesario de producción. Reactivación de la economía, redistribución y transformaciones estructurales no debían necesariamente comprometer el ahorro interno, el aumento de producción y el control del proceso inflacionario. Finalmente, el esquema económico debería favorecer la vinculación de los sectores populares a los grupos medios, en la medida en que el financiamiento de la redistribución debía fundamentarse en los grupos de altos ingresos y en las sobreutilidades generadas por el sector empresarial. Dicho excedente debería satisfacer no sólo la redistribución sino también aumentar la tasa de ahorro nacional, a fin de garantizar la inexistencia de conflictos entre los sectores populares y medios, que comprometieran y frustraran la alianza social propuesta. Es

claro que el acento puesto en el estudio de los problemas estructurales y las macrotransformaciones necesarias descuidaron el énfasis necesario en los problemas coyunturales de la transición al socialismo.⁵⁰

Es relevante el hecho de que, en el programa de la Unidad Popular, la materialización de una nueva sociedad pasaba necesariamente por la construcción de una nueva economía y se expresaba en los siguientes términos: "las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo". El eje central del modelo de *nueva economía* estaba constituido, además de por la nacionalización de las empresas extranjeras y la reforma agraria, por la constitución de tres áreas de propiedad. La primera y esencial de ellas era el Area de Propiedad Social y que se definía en los siguientes términos: "El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área dominante formada por las empresas que actualmente posee el Estado, más las empresas que se expropian". Dicho sector estará integrado por la gran minería del cobre, hierro, salitres, yodo y carbón; por el sistema financiero, la banca privada y los seguros; por el comercio exterior; los sectores industriales estratégicos de carácter monopolista; y en general por todas aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país. La segunda área económica estaría representada por el Area de Propiedad Privada, que se constituiría por la pequeña y mediana industria sujeta a la explotación económica ejercida por los sectores monopolistas. Finalmente, el Area de Propiedad Mixta, que combinara la existencia de propiedades estatales y propiedades privadas en sociedad con capitales estatales.⁵¹

Con este programa alternativo se aspiraba a resolver la crisis y el estancamiento tradicional de la economía chilena, particularmente su modo de funcionamiento, que se había conducido de acuerdo con la expresión del ministro Pedro Vuskovic a un patrón de desa-

rollo necesariamente concentrador y excluyente, "en el sentido de que lleva inevitablemente a una concentración creciente de los frutos del crecimiento en determinados estratos socioeconómicos y, como contrapartida, a la marginación de otros estratos de la población y sectores de la economía".⁵² Las formas precedentes de funcionamiento de la economía no favorecen la idea de que el crecimiento pudiese conducir a un mejoramiento más o menos espontáneo de la distribución de ingreso; por el contrario la experiencia demostraba que las condiciones de funcionamiento espontáneo de la economía operaban con mecanismos de concentración. En esta perspectiva el propio ministro definía el contenido de una nueva estrategia, "esa estrategia podría caracterizarse como un esfuerzo para provocar modificaciones drásticas en la concentración de la propiedad y en la distribución del ingreso; para orientar el esfuerzo productivo hacia las necesidades básicas de la población, no asignando nuevos recursos a la producción de bienes suntuarios, y aún reconvirtiendo, en los casos que fuera posible, la capacidad ya instalada a otros fines; para levantar la productividad de los sectores rezagados del sistema, a través de una asignación de recursos que tienda a atenuar las disparidades sectoriales y regionales de modernización y eficiencia; y para ajustarse a una política muy selectiva de nuevos desarrollos orientados principalmente a la producción de bienes de capital, materias básicas o determinados productos de exportación".⁵³ Dicho contenido del nuevo modelo se expresaba en el programa de la Unidad Popular en los siguientes términos: "Las aspiraciones sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer. Quiere, por ejemplo, viviendas dignas sin reajustes que esquilmen sus ingresos; escuelas y universidades para sus hijos; salario suficiente; que terminen de una vez las alzas de precios; trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas; una previsión social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares".⁵⁴

Por otra parte, es necesario recordar que los criterios que fundamentaban la elaboración de la *nueva economía*, particularmente

el de asignación de un papel preponderante a la gestión económica del Estado, no constituía una innovación radical en la tradición económica chilena. La intervención estatal en Chile y sus funciones económicas no sólo se limitaron a atenuar los posibles conflictos sociales durante todo el período del desarrollismo sustitutivo de importaciones; el Estado intervino directamente en la producción en un intento por asegurar el dinamismo de la economía, para lo cual utilizó casi permanentemente tres estrategias clásicas: uso del gasto público (obras públicas y viviendas) a fin de provocar la reactivación económica; inversiones productivas propiamente estatales; inversiones de financiamiento del sector privado a través de la transferencia de recursos públicos. Dichas medidas permitían concretar sus funciones productivas y redistributivas. El crecimiento de dichas funciones alcanza el índice más alto en 1970. En dicha fecha el Estado chileno, con la excepción de la Cuba socialista, constituía el caso latinoamericano de mayor influencia estatal en la gestión económica nacional. Un informe de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) indica que la inversión estatal fija sobre el total de las inversiones nacionales había alcanzado en Chile el 58,6%; mientras que para México era sólo del 40,8%; para Brasil del 38,8%; para Argentina 37,1%; para Perú 34,1% y Colombia 28,6%. En el período 1964-1970 se verificó una expansión substancial de los gastos fiscales en relación al PGB, se pasó del 16,9% en 1964 a 24,2% en 1970.

3.3.2. Fases de la política económica del Gobierno Popular.

Es posible distinguir tres grandes fases en el ejercicio del gobierno de Salvador Allende en el período 1970-1973. La primera de ellas corresponde a la etapa que se extiende entre el 4 de septiembre, fecha del triunfo electoral de la Unidad Popular, y el 3 de noviembre de 1970, fecha constitucional en la cual el nuevo presidente asume el gobierno. La segunda se extiende desde el acceso a la presidencia hasta mediados de 1972 y es conocida como el período de la política Vuskovic. La tercera fase, el período que abarca desde mediados de 1972 hasta la fecha del derrocamiento militar del gobierno y se distingue específicamente por

la puesta en práctica de la política 'Matus-Millas' como intento de resolución de la crisis económica y política en la que se debatía tanto el Estado como la sociedad civil. La política económica del gobierno de Allende pasó por tres fases que debieron enfrentar los intentos de la oposición interna y norteamericana por derrocar el gobierno constitucional.

La primera fase (4 de septiembre de 1970 - 3 de noviembre de 1970), se caracteriza de manera esencial por los intentos, tanto de la oposición interna como por parte de la política norteamericana, por arrebatar el triunfo obtenido por la izquierda en las elecciones presidenciales de dicho año. Dicho intento se materializó a través de la ejecución de tres tácticas diferentes. En primer lugar, se logró que el candidato de la derecha Jorge Alessandri declarara el 9 de septiembre que en "el caso de ser elegido por el Congreso Pleno, renunciaría al cargo, lo que daría lugar a una nueva elección. Anticipó, desde luego, en forma categórica, que en ella ya no participaría por motivo alguno".⁵⁵ La ratificación por parte del Congreso Pleno era indispensable en la medida en que Salvador Allende había obtenido sólo una mayoría relativa. Con esta estrategia de *segunda vuelta* se buscaba unificar a la derecha y a la Democracia Cristiana en torno a un candidato único que lograra contener las posibilidades de éxito electoral de la izquierda, el candidato del frente único sería naturalmente Frei. Con esto se resolvería la imposibilidad constitucional que impedía a Frei (o cualquier otro Presidente de la República) ser reelegido consecutivamente por un próximo período presidencial.

La segunda táctica, particularmente incentivada por los sectores derechistas de la Democracia Cristiana encabezados por el presidente Frei, estuvo destinada a crear y fomentar en el período postelectoral una crisis económica destinada a demostrar la imposibilidad para conducir la economía chilena por parte del gobierno de la Unidad Popular. El objetivo evidente era la desestabilización previa del futuro gobierno. El ejecutor directo de dicha táctica fue el propio ministro de Hacienda del régimen democrata cristiano Andrés Zaldívar. El sabotaje económico en contra del go-

bierno electo se inició con el intento de crear un caos financiero. En las investigaciones iniciadas por el Senado norteamericano para evaluar las dimensiones reales de la intervención de la CIA en Chile, un miembro de dicha organización (Broe) declaraba que la CIA, en una reunión conjunta con un miembro de la ITT (Garritty) que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1970, se había convenido un programa de acción destinado a "acelerar el caos económico en Chile como medio de poner presión sobre los parlamentarios para votar contra Allende". Ello se concretaría a través de los intentos desestabilizadores destinados a lograr la suspensión o el retraso de la entrega de créditos y de presionar a las sociedades de ahorro y préstamos a fin de lograr su cierre. Las propias declaraciones de Nixon confirmaron dicha intervención en los siguientes términos: "Yo estaba muy preocupado de que la presencia en el gobierno del señor Allende afectara directa y negativamente la seguridad de los Estados Unidos... Por lo tanto, instruí al señor Helms para que la CIA procediera clandestinamente. Instruí además al señor Helms y al doctor Kissinger para que fuese adoptada cualquier medida que tuviera impacto en la economía chilena - tal como cortar toda ayuda externa a Chile - como un paso adicional para prevenir que el señor Allende alcanzara la presidencia".⁵⁶

La tercera táctica estuvo constituida por el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider dos días antes del que el Congreso Pleno ratificara la elección presidencial de Salvador Allende. Tanto para la extrema derecha chilena como para la política norteamericana dicho general era considerado un obstáculo en la política de destrucción del gobierno popular, particularmente por sus constantes testimonios de vocación constitucionalista. Los que mejor expresaron en este período los objetivos económicos y políticos del sabotaje organizado en contra de la designación presidencial del candidato de la Unidad Popular fueron los grupos terroristas de ultraderecha aglutinados en la organización "Patria y Libertad" y que como lo demostraron investigaciones judiciales posteriores no fueron ajenos al asesinato del general Schneider. Ellos se expresaban en los siguientes términos: "la democracia está sujeta a un plazo que vence el 24 de octubre. Los que piensan que llevamos a Chile a una guerra civil

son los cobardes que tienen miedo a la libertad. Si quieren guerra civil, aquí estamos nosotros, de pie. Que sepan que la libertad no se vende y que la patria está intacta. Mienten quienes dicen que pretendemos defenderla con un golpe de Estado. Lo que aquí habrá será un golpe de patriotismo de hombres y mujeres".⁵⁷ Tanto en el asesinato del comandante en jefe del ejército como en el programa general de sabotaje se encontraban implicados altos mandos de las fuerzas armadas y de carabineros como prominentes líderes políticos de la derecha chilena.

El impacto económico del sabotaje en esta fase fue significativo.⁵⁸ Ello se expresó en una fuerte preferencia por billetes y en una caída brusca en la demanda de bienes prescindibles y de construcción, lo que se tradujo, además, en una fuerte presión sobre el sistema bancario con constante disminución de depósitos. Sólo en quince días se verificó un crecimiento de 35% en el volumen de monedas y billetes en manos del sector privado. El riesgo de colapso del sistema bancario era evidente y ello sólo se pudo resolver con un incremento notable en la fabricación de billetes.

La segunda fase se inicia el 3 de noviembre de 1970 con la designación presidencial de Salvador Allende y termina a mediados de 1972. Se caracterizó esencialmente por la puesta en práctica de la política económica bajo la dirección del ministro Pedro Vuskovic. El objetivo de dicha política se expresaba en el intento por combinar los objetivos a corto plazo con las transformaciones estructurales de largo alcance propuestas en el programa. En palabras del propio ministro no era "posible profundizar en las transformaciones sustantivas sin ampliar la base de sustentación política del gobierno y, por lo tanto, los problemas de reactivación y de redistribución del ingreso son un elemento necesario para poder impulsar esos cambios de fondo. Y a la inversa, no se podría seguir una política de reactivación y redistribución sin que simultáneamente se estuviera atendiendo a esas modificaciones de fondo... Esto explica la insistencia en conducir simultáneamente esas dos líneas centrales en la política económica".⁵⁹ De ahí se deriva el que podamos sostener que la estrategia económica de este período

se fundamentó en dos premisas esenciales: la variable política como elemento esencial de la correlación de fuerzas sociales que condicionarían tanto la política económica a corto plazo como las transformaciones estructurales de largo alcance y la necesidad de que las medidas a corto plazo fuesen complementarias con los objetivos de la construcción de la *nueva economía*.

El diseño de la política a corto plazo consideró como un punto de partida la superación de las condiciones recesivas que habían sido creadas por el sabotaje económico de la fase precedente. El eje central fue el intento de reactivación económica basada en el logro de un aumento substancial de la demanda por medio del gasto público deficitario y de reajustes salariales.⁶⁰ Ello debería ser acompañado por una reducción substancial de los índices de desempleo y de una política de reducción de la inflación. El aumento de la producción sería esencialmente obtenido a partir del uso pleno de la capacidad industrial instalada ociosa. La utilización de las reservas internacionales favorecerían el aumento de la demanda global de la economía; dichas reservas serían posteriormente incrementadas con los aumentos en la producción del cobre. Sin duda, en la política a corto plazo, seguía latente la problemática esencial de cómo vincularla con los cambios estructurales en un contexto de profundización de la democratización. Los métodos conocidos de planificación eran insuficientes para conceptualizar dicha problemática, en la medida en que partían del supuesto de una estabilidad estructural de la economía y excluían las variables políticas. Sin duda que estas últimas constituyeron uno de los obstáculos esenciales en la conducción económica de la Unidad Popular.

Los éxitos de la política a corto plazo no se hicieron esperar y, más aún, fueron espectaculares. El producto interno bruto creció en un 8,3% superando en más del doble la tasa de crecimiento de 1970. La producción industrial verificó un crecimiento del 14% en 1971. En el período de julio de 1970 al mismo mes de 1971 se constata un aumento de un 55% de los salarios con un índice de crecimiento de precios que no superó el 9%. Se verifica una reducción substancial de la inflación que cayó de un 35% en 1970 a un

CUADRO XV

Chile: Indicadores de utilización de la capacidad instalada
en la industria¹

	1970 ²
I. <i>Ind. de Consumo Habitual</i>	77,59
<i>Capital</i>	62,96
20 Alimenticias	75,45
21 Bebidas	66,69
22 Tabaco	-
23 Textiles	78,86
24 Vestuario y calzado	83,47
26 Muebles	99,40
28 Imprenta y editorial	81,57
39 Diversas	86,13
II. <i>Industria de Bienes Intermedios</i>	85,46
25 Madera	80,84
27 Papel y celulosa	90,66
29 Cuero	72,41
30 Caucho	91,32
31 Químicas	83,33
32 Derivados del petróleo y carbón	56,69
33 Minerales no metálicos	72,99
34 Metálicas básicas	92,68
III. <i>Ind. Bienes Consumo Durable</i>	
<i>y Capital</i>	62,96
35 Productos metálicos	55,77
36 Maquinaria no eléctrica	70,27
37 Maquinaria eléctrica	71,94
38 Material de transporte	68,78
<i>Promedio sector</i>	75,34

FUENTE: ODEPLAN: Plan Anual 1971, op.cit., pág. 6

¹ Los datos corresponden a establecimientos que ocupan 50 o más personas.

² El año 1970 corresponde a una estimación a partir de los datos del año 1969, utilizando indicadores de producción.

20% en 1971. La participación de los salarios respecto de las rentas totales pasó de un 53,7% en 1970 a un 59% en 1971. Para el gran Santiago se verificó una disminución del paro del 8 al 4% al término de 1971. En el contexto de este marco general de reactivación de la economía se concretaron las transformaciones estructurales básicas para la gestación de la *nueva economía*; se concretó la nacionalización del cobre, carbón y salitre, la estatización de los sectores monopolistas y de base. Se logró el control estatal de la banca privada y se profundizó la reforma agraria hasta casi erradicar totalmente el latifundio. De manera tal que a fines de 1971 tres sectores estratégicos de la economía tales como el sector bancario, el agrario y el minero cumplían prematuramente las exigencias propuestas por el programa de gobierno.

CUADRO XVI

Chile: Expropiaciones de la reforma agraria

	<i>Durante el</i>	<i>1971</i>
	<i>gobierno de Frei</i>	
Número de predios	1.408	1.379
Superficie regada (hectáreas)	290.600	178.400
Superficie total (hectáreas)	3.565.960	2.558.000

FUENTE: Corporación de la reforma agraria, cit. en ODEPLAN, 1972-b.

Los resultados políticos de la aplicación de la política de corto plazo estrechamente vinculada a las transformaciones estructurales esenciales no se dejaron esperar. En las elecciones municipales de abril de 1971 la izquierda logró el 49,75% de la votación nacional. Era evidente que el éxito político del gobierno estaba estrechamente ligado a su éxito económico a corto plazo. El componente estructural esencial de la *nueva economía*, el área de propiedad social, había sido construido. De manera paralela a las transformaciones económicas se intentaba profundizar en la 'gestión obrera', elemento esencial en la política de traspaso del poder de decisión a los trabajadores en el marco general de profun-

dización de los esquemas democráticos precedentes. El punto de partida fue el convenio firmado entre la Central Unica de Trabajadores y el gobierno en diciembre de 1970. En dicho convenio, además del reconocimiento legal otorgado por el Estado a la existencia de dicha central sindical, se expresaba categóricamente la necesidad de construir y establecer los mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas industriales que constituirían las áreas de propiedad mixta y social de la economía. Por 'gestión obrera' se entendía el hecho de que los trabajadores recibieran poder de decisión sobre las políticas de inversión, distribución y producción en las empresas industriales.⁶¹ Sin antes dejar de enfrentar los problemas de incompetencia técnica en la administración de las empresas y las dificultades ideológicas que provenían de la experiencia esencialmente reivindicativa de la clase obrera, en julio de 1971 se definieron las normas de la participación obrera que, sin ratificación parlamentaria, fueron contenidas en el documento *"Normas Básicas de Participación de los Trabajadores en la Administración de las Empresas del Area Social y Mixta"*. En dicho documento y en su posterior ejecución, el poder y la participación de los trabajadores se redujo a la esfera de las empresas reservándose el viejo aparato administrativo los niveles superiores de decisión. Por otra parte la democratización interna de las empresas se vió frecuentemente dificultada por la burocratización de los delegados gubernamentales, lo que se sumaba a las dificultades generadas por el sector de los empleados que rechazaban su igualitarización con el sector obrero.

Dicha situación quedó rota a mediados de 1972 como resultado del 'Encuentro de los Trabajadores Textiles', que rechazaron el fuerte contenido burocrático y formalista que se había otorgado a la participación obrera y las exigencias de los trabajadores prácticamente desbordaron los preceptos del convenio CUT-gobierno. De ahí que sea posible concluir que la conciencia obrera en este período radicó preferentemente en los trabajadores de las empresas nacionalizadas que producían para el mercado interno, la clase obrera que se había generado a partir del desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones. Por el contrario, los sectores

obreros del antiguo enclave, particularmente del cobre, fueron los más reacios a participar en la política obrera del gobierno. Lo cual demostró por lo demás que la influencia tradicional que sobre su vida sindical habían ejercido los militantes comunistas y socialistas se explicaba mucho más por el precepto *remunerativo electoral*.⁶² Por el contrario los sectores marginales que más tardíamente habían sido organizados y políticamente mucho más vinculados a la extrema izquierda, fueron los que más activamente se preocuparon por la cuestión de la participación obrera. La falta de homogeneidad de la conciencia obrera respecto de las políticas del gobierno popular arrancaba esencialmente del hecho de que para algunos sectores obreros el socialismo se vinculaba mucho más a la necesidad de ganar la *batalla de la producción* y para otros a la de la *batalla de la redistribución*. Estos factores explicarán la fragmentación de la clase obrera respecto de las políticas gubernamentales, que se ampliará notablemente a partir de su ubicación estructural diferente en la nueva economía, entre trabajadores de las áreas estratégicas del sector de propiedad social y los trabajadores del sector privado de la economía. Para los trabajadores del área privada, que constituían por lo demás la amplia mayoría, la participación y la gestión obrera se redujo a la constitución de los '*comités de vigilancia de la producción*', a fin de evitar el sabotaje empresarial. Era difícil que los obreros del sector privado aceptaran las eventuales exigencias de un aumento de la rentabilidad de las empresas del sector privado, a fin de fortalecer la batalla de la producción. Finalmente se puede sostener la tesis de que la superación definitiva de los lastres burocratizadores de la participación obrera es lograda a partir del 'paro patronal' organizado por los grupos empresariales y la oposición política al gobierno, debidamente articulada con los proyectos desestabilizadores del gobierno norteamericano.⁶³ En dicha situación la clase obrera debió asumir la gestión y funcionamiento de las empresas industriales y de distribución.

Uno de los elementos esenciales de la estrategia de desestabilización del gobierno se concentró en las dificultades de desabastecimiento que se hacían notorias a mediados de 1971. El corolario

estratégico fue el *mercado negro*. A pesar de que el gobierno opuso a ello la creación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), que intentaban resolver y controlar a nivel de base la resolución de dichas dificultades, fue imposible llegar a una solución definitiva de dicho problema. Particularmente, porque casi el 70% de las empresas comerciales de redistribución eran controladas por grandes capitales privados.⁶⁴

En el sector agrario las dificultades del gobierno en esta fase estuvieron constituidas por el conflicto generado en torno a las limitaciones de la legalidad vigente para impulsar el proceso de reforma agraria y a la radicalización del movimiento campesino tras el objetivo de recuperación de la tierra. Desde 1971, el gobierno impulsó la creación de los Comités de Reforma Agraria (CERA) con el propósito de limitar los objetivos del proceso de reforma puesto en práctica por la Democracia Cristiana durante el gobierno de Frei. Como es sabido, en dicho gobierno el objetivo central estaba vinculado al intento por extender el desarrollo capitalista a la agricultura sobre la base de la creación de asentamientos agrícolas, el resultado político esperado era la constitución de un nuevo estrato social en el campo que apoyasen las políticas generales de modernización del conjunto de la economía capitalista dependiente chilena. El objetivo de los CERA era, por tanto, la limitación del cooperativismo agrario generado en el período precedente. Los CERA se constituían a partir de varios fundos en una unidad mayor sobre la base de una mayor racionalización e integración de su explotación económica. Los trabajadores permanentes de dichas unidades asumían, sobre la base de igualdad de derechos respecto de los beneficios marginales, la dirección de dichas unidades. La Corporación de Reforma Agraria prestarían el apoyo técnico y financiero esencial. Buscaba, por otra parte, evitar que la relación entre los *asentados* beneficiados con la reforma agraria de Frei y los asalariados agrícolas se transformara en una relación de explotación en beneficio de los primeros.⁶⁵ Las dificultades de puesta en práctica de esta dimensión de la política agraria del gobierno popular fueron generadas por la resistencia de los campesinos mismos, la reforma agraria del período precedente había reforzado la existencia

de lo que se dio en llamar '*conciencia campesinista*' que se expresaba en el objetivo de alcanzar la propiedad de la tierra. A ello se sumaba la demagogia de la oposición democrata cristiana expresada en la consigna '*no al Estado patrón*'.⁶⁶ El gobierno buscó una solución de compromiso en torno a la creación del 'comité campesino'. Sin embargo, al igual que el sector urbano industrial, el objetivo central de las actividades agrícolas giraba en torno al lema de '*ganar la batalla de la producción agrícola*', que debía enfrentar la existencia de dos problemas: la organización del sector reformado de agricultura y la aceleración de las expropiaciones. Tras ello existía la situación del campesinado pobre que es aún más relevante, si se considera que con el 50% de la tierra expropiada se logra sólo beneficiar al 15% de los trabajadores rurales.⁶⁷

En el curso del año 1972 se empiezan a manifestar las primeras dificultades significativas del modelo económico puesto en práctica. El supuesto de la utilización de la capacidad ociosa de la economía como motor central de la reactivación económica ya no era utilizable y se carecía de reservas para un crecimiento a corto plazo. La fuerte expansión monetaria necesaria para el financiamiento del gasto fiscal y el desabastecimiento relativo del consumo colaboraban en la configuración global de la crisis. Esta situación puso en discusión la continuidad de la política económica puesta en práctica por el ministro Vuskovic. Sectores significativos del gobierno planteaban la necesidad de terminar con la política expansiva-redistributiva de esta etapa indicando la necesidad de aumentar la tasa de inversión y evitar que el crecimiento de los salarios superara el índice inflacionario. La necesidad de alteración de la política económica vigente se expresaba en la afirmación frecuente en el período de que 1971 había sido el año de la distribución y 1972 debería ser el año de la acumulación. El debate en torno a la continuidad o reformulación de la política económica se concretó en lo que se denominó "cónclave de Arrayán", al cual concurrió el gobierno y los diferentes partidos que formaban la Unidad Popular. Las preocupaciones centrales en dicha reunión giraron en torno de la escasez, el bloqueo institucional del go-

bierno, las presiones inflacionarias y la necesidad de ajustes radicales en la política económica. Los objetivos que se planteaban como solución eran de naturaleza esencialmente contradictoria: disminución del mercado negro y de la escasez, evitar el crecimiento inflacionario, mantener el nivel de distribución de ingresos alcanzado, fortalecimiento del área de propiedad social y evitar los efectos negativos de la política económica sobre los pequeños y medianos empresarios. El origen de la naturaleza contradictoria de los objetivos provenía de la necesidad de materializar transformaciones esenciales en la sociedad conservando y fortaleciendo las situaciones políticas favorables a dichas transformaciones. Era evidente que la naturaleza de la oposición política al gobierno lo obligaba a apoyarse casi exclusivamente en los sectores medios bajos y obreros. Esto a su vez generaba la necesidad de satisfacer globalmente las demandas remunerativas de dichos sectores pero, por otra parte, ello no hacía más que agravar la situación económica. Si se aplicaban mecanismos inflacionarios era evidente que se ampliarían las presiones salariales y si ello no se concretaba, la inflación tendría efectos acumulativos, que se expresarían en fases posteriores acentuando la existencia del mercado negro. La alternativa que se planteó fue la de emplear intensivamente los controles administrativos estatales.

El aumento e intensificación de los controles administrativos sobre la economía no suponía necesariamente el crecimiento del control estatal sobre ésta; más aún, ello fue rechazado por un sector sobre la base de que la expansión del área social generaría mayores desajustes en la política económica a corto plazo. Podría generarse una disminución de la producción en una coyuntura en la cual la economía carecía de reservas y de márgenes de utilización de la capacidad inutilizada. Ello podría colaborar también en una disminución de las inversiones del sector privado. Frente a esta alternativa se encontraba la posición del propio ministro Vuskovic respaldado por parte del Partido Socialista, quienes eran favorables al aumento del control administrativo sobre la base de la consideración de que el control de remuneraciones y el crecimiento de la inflación afectaría negativamente los salarios

reales. Por tanto la limitación del crecimiento de la demanda debía provenir de los recursos de las grandes empresas privadas que aún no integraban el área de propiedad social. A ello debería agregarse un mayor control sobre los consumos básicos y la comercialización de los bienes intermedios. Los que ponían énfasis en los ajustes financieros se fundamentaban en la necesidad de evitar que los sectores sociales medios integraran la oposición al gobierno, reivindicando la necesidad de acumular fuerzas para posteriormente continuar avanzando. Los que favorecían la necesidad de controles directos sobre la economía privilegiaban la necesidad de conservar el apoyo de obreros y empleados, acelerando la constitución del área de propiedad social. Ambas posiciones fueron irreductibles imposibilitando la existencia de un esquema alternativo coherente y se llegó a un modelo de combinación de las dos posiciones que se reflejó expresamente en las políticas de salarios, de precios, cambiaria, reforma agraria, área de propiedad social, monetaria, fiscal, balanza de pagos y participación de los trabajadores. Ello favoreció la irresolución de los problemas básicos de la economía. No se cambió la situación pero tampoco se otorgaron los instrumentos necesarios para favorecer la continuidad de la política económica, lo que provino de un punto muerto político y no técnico.

Dicha situación se vió agravada por el fortalecimiento de una política populista de la Democracia Cristiana que intentaba sumar los sectores obreros y medios a la oposición política al gobierno.⁶⁸ Esto generó cambios sustantivos en los elementos causales de la inflación que pasó a ser determinada por la secuencia precios-salarios-precios, absolutamente independiente de los índices de crecimiento de la economía. Por otra parte, los acuerdos del Arayañ acentuaron la polémica interna de la Unidad Popular respecto de la política económica; más aún, se radicalizaron las diferencias tácticas entre los principales partidos políticos. El Partido Comunista asume la consigna de *consolidar para avanzar* como alternativa a la crisis económica, lo que implicaba la idea de que la prioridad otorgada a la movilización política de masas dificultaba el control del gobierno popular. Luis Corvalán, Secretario

General del Partido Comunista, expresaba en los siguientes términos la táctica a seguir: "El objetivo principal de la revolución no es la conquista del poder en sí sino el cambio de la sociedad, la creación de un nuevo orden económico, político, social y cultural...Para aumentar la producción se requiere urgentemente mejorar la dirección económica, entrar por la vía de la planificación de la economía dando a los trabajadores más participación, más poder en la dirección de las empresas, produciendo allí un cambio real en las relaciones de producción de manera que los obreros comprendan claramente que las cosas han cambiado, que en el aumento de la producción y de la productividad está la base principal del mejoramiento incesante de su situación, para la reproducción ampliada de las industrias y la acumulación necesarias para la inversión fiscal y la realización de las obras sociales".⁶⁹ El Partido Socialista, por el contrario, partía de la tesis opuesta denunciando el carácter burgués del Estado que justificaba la necesidad de otorgar prioridad a la movilización de masas a fin de lograr el control total del poder político.⁷⁰ La intensidad del debate en torno a estas dos líneas abren la fase tercera y final de la política económica del gobierno popular. Se concreta y adopta a partir del encuentro de Lo Curro que provoca la sustitución del ministro de economía por la política conocida como Matus-Millas.

Lo esencial de la política económica de esta tercera fase fue expresada por el propio ministro Millas en los siguientes términos: "Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del gobierno popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen transgresiones al programa de la Unidad Popular. Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del gobierno popular, su mantenimiento y en la continuidad de su obra. Sería funesto seguir ampliando el número de sus enemigos, y por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a las capas medias y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos. En estas condiciones, en nada ayuda al proceso revolucionario poner el acento en el anuncio de lo que haremos en el futuro, cuando ha-

ya condiciones más desarrolladas".⁷¹ La estrategia del Partido Comunista de consolidación había triunfado respecto de la política económica a seguir, pero el gobierno será derrotado en los meses posteriores. Al igual que en la reunión del Arrayán (febrero de 1972) el de Lo Curro (junio de 1972) no logró homogeneizar los criterios respecto de la conducción económica, y las discrepancias continuaron latentes hasta el derrocamiento del gobierno. Esto lo expresó el propio Secretario General del Partido Socialista: "es necesario entrar en una nueva etapa, no de consolidación, sino de profundización y desarrollo del proceso. Creemos que ambas posiciones no son contradictorias. Es perfectamente posible avanzar, pero sin descuidar el manejo eficiente de las empresas del área social, la capacidad de los funcionarios y la planificación de la economía".⁷²

La situación económica se agravó radicalmente después de la puesta en práctica de las 'medidas correctivas' del cónclave de Lo Curro. Lo que dicha política proponía era la resolución de los problemas económicos en el marco del mercado y paradójicamente se asignaba a la *ley del valor* la función específica de la asignación de los recursos. El principio de resolver el desabastecimiento a partir de la restricción del consumo implicaba una ruptura radical con la política económica puesta en práctica por el ministro Vuskovic. Ello condujo a una *reproducción ampliada* de la crisis económica con un nivel de duplicación del índice de precios.⁷³ Los reajustes compensatorios dirigidos a mantener el poder adquisitivo y evitar el deterioro radical de los ingresos de los sectores populares se mostraron ineficaces. El objetivo de concentrar los recursos en los sectores de más bajos ingresos fue rápidamente dificultado por las presiones del conjunto de los asalariados. Ni la devaluación de la moneda en agosto de 1972, que alcanzó un promedio de 85% para las importaciones y 33% para las exportaciones, ni la autorización de las alzas de precios de algunos productos industriales, alimenticios y agropecuarios que alcanzaron índices entre el 30 y 150% lograron paliar la crisis económica. Esta se vió fuertemente acentuada por la oposición parlamentaria y su negativa a financiar reajustes y políticas salariales discriminadas (en favor de

CUADRO XVII

Chile: Evolución de los precios al consumidor y al por mayor

	Índice de precios al consumidor			Índice de precios al por mayor			Índice ajustado de precios al consumidor (calculado por la CIAP)		
	Índice promedio año (diciembre 1969=100)	Variación porcentual		Índice promedio año (1968=100)	Variación porcentual		Índice promedio año (diciembre 1969=100)	Variación porcentual	
		Prome-dio a	Diciem-bre a		Prome-dio a	Diciem-bre a		Prome-dio a	Diciem-bre a
1968	71.8	26.6	27.9	100.0	30.5	33.1	-	-	-
1969	93.8	30.7	29.3	136.5	36.5	39.4	-	-	-
1970	124.4	32.5	34.9	185.8	36.1	33.7	124.4	-	-
1971	149.3	20.1	22.1	219.1	17.9	21.4	149.3	20.1	22.1
1972	265.5	77.8	163.4	372.5	70.0	143.3	281.9	88.8	243.0
1973	1202.1	352.8	508.1	2277.6	511.4	1147.1	1304.1	575.5	681.6

FUENTES: Instituto Nacional de Estadísticas, Índices de precios al consumidor - para octubre a diciembre de 1973 dicho índice utilizó cálculos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile -, e índices de precios al por mayor; CIAP, "El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para el desarrollo de Chile", CIAP/650, 28 de enero de 1974, cuadro AE-1 (Índice de precios al consumidor ajustado).

los sectores de más bajos ingresos); para ello se fundamentaron en el lema populista de '*justicia social para todos*'. Para entender el énfasis puesto por el gobierno en la necesidad de establecer reajustes discriminados basta recordar que en 1971 el 7% de la población económicamente activa concentraba la mitad de los ingresos de la economía nacional. Es evidente que la hipótesis que caracterizó la política económica de esta tercera fase y que consistió en sostener la idea de que a partir de un crecimiento de los precios se iniciaría posteriormente un período de inflación decreciente lográndose una estabilidad económica a otro nivel, había fracasado. Entre otras razones porque la "existencia de mecanismos automáticos de reajuste, creados en la economía chilena tras una larga tradición inflacionaria y en un contexto democrático, impedían una desaceleración rápida del rebrote inflacionario inicial. Oponerse a los reajustes de rentas y reprimir el descontento era inconcebible para la U.P.". ⁷⁴ Por otro lado, la estrategia de búsqueda de un acuerdo con la Democracia Cristiana, supuesto político del nuevo esquema económico, también fracasó. Fracasó en un contexto de una profunda radicalización política del movimiento popular, particularmente a partir del paro patronal de octubre. Por ello es posible asumir la afirmación de Alain Touraine en el sentido de que con el término de la política económica de Vuskovic el gobierno quedó huérfano de política económica. ⁷⁵ En dicha crisis se debatió el gobierno hasta su derrocamiento militar en septiembre de 1973.

A las dificultades generadas por la economía y la oposición política cuya estrategia se fundamenta esencialmente en evitar la resolución de los problemas esenciales de la crisis para asegurar la desestabilización y el derrocamiento del gobierno, se suman las dificultades en el mantenimiento de una línea política unitaria en el interior del gobierno. Las discrepancias esenciales giraron en torno a la problemática del 'poder popular' como poder de base alternativo al poder del Estado y a la concepción tradicional de la 'gestión obrera' propuesta y ejecutada por el gobierno. La relevancia de la discusión de este objeto se había visto acentuado por la conclusión de que las dificultades económicas enfrentadas por el

CUADRO XVIII

Chile: Balance de pagos (*Millones de dólares*)

	1970	1971	1972	1973 ^a
<i>Cuenta corriente</i>				
Exportaciones de bienes y servicios	1267.0	1132.0	965.2	1489.1
Bienes <i>fob</i>	1124.0	984.0	855.2	1369.1
Servicios	143.0	148.0	110.0	120.0
Transporte	70.0	75.0	70.0	85.0
Viajes	50.0	50.0	25.0	20.0
Importaciones de bienes y servicios	1202.0	1231.0	1463.0	1807.8
Bienes <i>fob</i>	928.0	987.0	1203.9	1503.1
Servicios	274.0	244.0	259.1	304.7
Transportes	133.0	142.0	174.1	216.7
Viajes	86.0	46.0	35.0	33.0
Pagos de utilidades e intereses de capital extranjero (netos)	- 179.0	- 137.0	- 141.0	- 89.0
Utilidades	- 126.0	- 72.0	- 11.0	-
Intereses	- 53.0	- 65.0	- 130.0	- 89.0
Donaciones privadas netas	-	-	-	-
Saldo de la cuenta corriente	- 114.0	- 236.0	- 638.8	- 407.7
<i>Cuenta de capital</i>				
Financiamiento externo neto (<i>a+b+c+d+e</i>)	114.0	236.0	638.8	407.7
a) Fondos extranjeros no compensatorios (netos)	235.0	- 31.0	301.7	154.6
Inversión directa	19.0	- 42.0	-	-
Préstamos de largo y mediano plazo	380.0	245.0	318.8	262.5
Amortizaciones	- 140.0	- 192.0	- 23.1	- 119.9
Pasivos de corto plazo	- 24.0	- 42.0	-	-
Donaciones oficiales	-	-	6.0	4.0
b) Fondos o activos nacionales no compensatorios	- 7.0	25.0	-	-
c) Errores y omisiones	- 46.0	- 22.0	- 0.1	- 0.2
d) Asignaciones de derechos especiales de giro	21.0	17.0	18.5	-
e) Financiamiento compensatorio neto (-aumento) Préstamos de balance de pagos, atrasos comerciales, préstamos del FMI y otros pasivos de las autoridades monetarias	5.0	102.0	222.4	232.1
Amortizaciones	- 73.0	- 40.0	- 1.6	-
Divisas (-aumento)	8.0	202.0	58.5	19.1
Oro (-aumento)	- 7.0	- 1.0	-	-
Derechos especiales de giro (-aumento)	- 22.0	- 16.0	39.4	2.1

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, *Balance of Payments Year-book*, vol. 25

^a Estimaciones basadas en estadísticas oficiales.

gobierno de Allende eran de naturaleza política. A la falta de unidad de criterios respecto de la conducción económica de la tercera fase se agrega la ausencia de consenso respecto de los conflictos políticos en el interior del Estado. El elemento precipitante fue la convocatoria en julio de 1972 de lo que se denominó "Asamblea Popular de Concepción". En la convocatoria a dicha asamblea se expresaba la necesidad de "discutir, analizar y denunciar directa y democráticamente la función y el carácter contrarrevolucionario del Parlamento y al mismo tiempo rendir un combativo homenaje a la revolución cubana...". Dicha convocatoria fue duramente rechazada por el Partido Comunista que ejercía una influencia decisiva en la reformulación de la política económica de la tercera fase, y por el propio presidente de la República. Sin embargo, la consolidación de dos líneas políticas paralelas en el interior de la Unidad Popular se había concretado definitivamente. Por lo demás, el paro patronal de octubre de 1972 había creado las condiciones estructurales favorables a la concreción de la estrategia del 'poder popular' y que generó organizaciones populares de resistencia popular en contra de la política de la derecha sin precedentes en la historia chilena. Los cordones industriales y los comandos comunales fueron su expresión.

Dichas organizaciones asumieron en sus manos el funcionamiento de las empresas en la coyuntura del paro patronal y acentuaron e intensificaron los objetivos de su constitución: "la expropiación de los patrones" y la "expropiación de fábricas y fundos". El gobierno había convocado a las organizaciones obreras y populares a asumir el funcionamiento de la economía y a controlar las empresas para mantener bajo control la estrategia golpista de la derecha; por tanto debería enfrentar graves dificultades para convencer posteriormente a dichas organizaciones que debían devolver las empresas ocupadas. La política económica Millas-Matus encontraría graves dificultades para materializar su tesis de un retroceso táctico necesario, a fin de neutralizar a los sectores de la pequeña y mediana burguesía y evitar que se sumaran a la estrategia del derrocamiento del gobierno. Los esfuerzos por la concreción de dicha política llegan incluso a formulaciones que se asemejaban a la in-

genuidad política. Expresiva es por ejemplo la declaración de la ministra del Trabajo Mireya Baltra que en julio de 1973 declaraba: "No podemos intervenirlo todo. Debemos cumplir el programa de la Unidad Popular, que dice que hay tres áreas de la economía. Y nosotros estamos porque exista un área privada de la economía que podamos desarrollar. ¿Porqué no vamos a dejar que los capitalistas hagan sus gastos en la construcción del socialismo? Tenemos que vencer el economicismo... Es fácil ser líder ahora, tomándose una industria. ¿Porqué no lo hacían antes? Ahora abusan porque no hay represión del gobierno de la Unidad Popular".⁷⁷

La alternativa elaborada frente al paro patronal fue la constitución de un gobierno Unidad Popular-militares. Es evidente que el gobierno rechazó la solución de una política de masas en beneficio de una de tipo centrista. De allí en adelante los acontecimientos se precipitaron hasta culminar con el derrocamiento del gobierno. El rechazo popular terminó por bloquear la política elaborada por el Partido Comunista de *consolidar para avanzar*. Por otra parte la unificación de la oposición había quedado materializada a partir de julio de 1972, a partir del acuerdo establecido entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional de unificación electoral entre ambos partidos, a fin de concurrir a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Su objetivo era la obtención de los dos tercios de los votos del congreso a fin de posibilitar el *golpe legal*, es decir, la destitución parlamentaria del presidente de la República. El fracaso de dicha alternativa (el gobierno obtuvo el 44% de los sufragios emitidos en las elecciones parlamentarias de marzo), convenció a la oposición de que la única posibilidad era el *derrocamiento extraparlamentario*, el golpe de Estado, para lo cual era indispensable la participación de las fuerzas armadas. El intento de golpe de Estado de junio de 1973 en el que participaron oficiales del regimiento blindado, re-actualizaron la viabilidad de la estrategia del 'poder popular' y naturalmente acentuaron las discrepancias sobre la línea estratégica y la política económica del gobierno. Ello naturalmente dificultó los esfuerzos del presidente por abrir un diálogo de consenso con la Democracia Cristiana, que por lo demás ya había asumido

la estrategia del golpe militar. Jorge Lavanderos, senador demócrata cristiano declararía en julio de 1973: "Propiciamos la instauración de un gobierno fuerte y autoritario... Basta de conversaciones inútiles".⁷⁸ A ello se sumaba el delirio golpista del propio Eduardo Frei, en aquel momento presidente del Senado de la República y que se había enfrentado a una situación similar con el alzamiento militar de junio de 1969 durante su período presidencial, criticando las medidas tomadas por el presidente Allende a fin de evitar el éxito del intento de golpe de Estado. Frei estimulaba el genocidio de la democracia chilena en los siguientes términos: "... se ha ordenado la ocupación de fábricas y predios rurales, se han reforzado los cordones industriales con los que se pretende cercar la ciudad, y lo que es más grave, existe la certeza de que se reparte armas, y se adoptan disposiciones estratégicas y se lanzan instructivos como si Chile estuviera al borde de la guerra interior".⁷⁹ De junio en adelante la oposición encabezada por Frei y Jarpa, frente al fracaso del intento militar de junio de 1973, iniciaron la preparación de la ofensiva final y para ello se intentó reeditar la huelga patronal de octubre del 72, concretándose el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Ello abrirá un proceso en donde el '*terrorismo de Estado*' y el genocidio social constituirán dos componentes centrales en la política chilena de los últimos diez años. De allí en adelante las diferencias entre la Democracia Cristiana y la derecha reaccionaria se reducirán al dilema 'golpe blando' o terrorismo de Estado. Vencerá la última alternativa y con ello transformará en víctima respetada por la dictadura a la propia Democracia Cristiana. Con el cerco militar y la derrota del presidente Allende se destruyeron 150 años de vida institucional en Chile y cuarenta de esfuerzos por profundizar la democracia y el desarrollo nacional.

La crisis generalizada que la sociedad chilena presenta en el curso de 1973 crea las condiciones favorables para la intervención militar que es apoyada por un significativo movimiento social. Dicha intervención es considerada por la oposición al gobierno de Allende como esencialmente restauradora tanto del orden político como del estilo y patrón de desarrollo que se implementaba en Chile

desde la crisis de los años treinta. Sin embargo, una vez instaurada la dictadura militar y eliminado el sistema democrático, esta asume un proyecto global de reestructuración de funcionamiento del capitalismo dependiente en Chile, gravemente desarticulado por la experiencia de la Unidad Popular. A dicho proyecto de reestructuración global del funcionamiento de la sociedad le prestaremos atención en el capítulo cuarto.

NOTAS

1. Artículo 1 de los estatutos, programa XII Congreso 1963. Tesis para el XIII Congreso de 1965, citado por Norberto Lechner en *"La democracia en Chile"*, Ediciones Signo, Buenos Aires, 1970.
2. Comité Central del Partido Socialista: la polémica socialista-comunista, Santiago de Chile, 1962.
3. Partido Comunista, Revista Principios, Santiago de Chile, enero de 1961.
4. Citado por Enzo Faletto en *"Algunas características de la base social del Partido Socialista y del Partido Comunista 1958-1973"*, documento de trabajo, Programa FLACSO, Nro. 97, Santiago de Chile, septiembre de 1980.
5. Enzo Faletto, obra anteriormente citada, pág. 25
6. Enzo Faletto, obra anteriormente citada, pág. 25.
7. Comité Central del Partido Socialista, obra citada en nota 2, pág. 25.
8. Informe del Comité Central, citado en Revista Arauco, Nro. 79, pág. 23, agosto de 1966.
9. Citado en la Revista Arauco, Nro. 79, pág. 38.
10. George Grayson, *"El Partido Demócrata Cristiano Chileno"*, Editorial Francisco de Aguirre, pág. 12, Buenos Aires, 1968.
11. Revista Ercilla, pág. 11, Santiago de Chile, 24 de agosto de 1966.
12. George Grayson, obra anteriormente citada, pág. 359.
13. Eduardo Frei en *Notes et Etudes Documentaires 3215*, París, 4 de septiembre de 1965.
14. Jorge Ahumada, *"En vez de la miseria"*, Editorial Pacífico, Santiago de Chile, 1958. Para un diagnóstico de las condiciones de la economía chilena es necesario considerar las siguientes obras:
Aníbal Pinto, *"Chile un caso de desarrollo frustrado"*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1959. Del mismo autor, *"Chile, una economía difícil"*, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
Marcelo Cavarozzi, *"The Government and the Industrial Bourgeoisie in Chile: 1938-1964"*, Ph.D., University of California, Berkeley, 1975.
Roger Burbach, *"The Chilean Industrial Bourgeoisie and Foreign Capital, 1920-1970"*, Ph.D., Indiana University, 1975.
David Konkel, *"The Social and Political Causes of Inflation in Chile"*, Ph.D., University of California, Berkeley, 1977.
15. Jorge Ahumada, obra anteriormente citada, pág. 132.
16. Jorge Ahumada, obra anteriormente citada, pág. 130.
17. Sobre este problema se pueden consultar los siguientes autores:

- Alejandro Foxley, *"Experimentos neoliberales en América Latina"*, Colección de estudios de CIEPLAN, Nro. 7 especial, marzo de 1982.
- C.H. Kikpatrick and F.I. Nixon, "The Origins of Inflation in Less Developed Countries: A Selective Review", in M. Parkin and G. Zis (eds.), *"Inflation in open Economies"*, Manchester University Press, 1976.
- Osvaldo Sunkel, *"La inflación chilena: un enfoque heterodoxo"* Trimestre Económico, octubre de 1958.
- Aníbal Pinto, *"La inflación: raíces estructurales"*, Serie de Lecturas El Trimestre Económico, Nro. 3, México, 1973.
18. Alejandro Foxley, obra citada en nota anterior, pág. 15.
 19. José Ramón Letelier Olave, *"Modele d'accumulation et Dictature Militaire au Chili"*, Institut des Sciences Politiques et Sociales, Université Catholique de Louvain, 1979.
 20. Sergio Molina, *"El proceso de cambio en Chile"*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1972.
 21. Ricardo French-Davis, *"Políticas económicas en Chile 1952-1970"*, Ediciones Nueva Universidad, pág. 53, Santiago de Chile, 1973.
 22. Primer Mensaje del Presidente de la República presentado al Congreso Nacional el 21 de mayo de 1965.
 23. Eduardo Frei, *"La Revolution dans la liberté"*, en *France Forum*, París, mayo de 1965.
 24. Jorge Cauas, *"Políticas de estabilización: el caso chileno"*, Estudios Monetarios II, Banco Central de Chile, 1970.
 25. Sobre esto se puede considerar a Barbara Stallings, *"Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958-1973"*, Stanford University Press, 1978.
 26. Ricardo French-Davis, obra citada en nota 21, pág. 58.
 27. Ministro de Hacienda, *"Exposición de la Hacienda Pública"*, 1967, pág. 21 y 23.
 28. Naciones Unidas, *"Estudio Económico de América Latina 1967"*.
 29. Ricardo French-Davis, obra citada, pág. 61.
 30. Liliana de Riz, *"Sociedad y política en Chile"*, Universidad Autónoma de México, México, pág. 78, 1979.
 31. Para el estudio de la polémica interna de la Democracia Cristiana en torno a la "vía no capitalista de desarrollo" se debe considerar la tesis de Gonzalo Ojeda Urzúa, *"El conflicto interno del Partido Demócrata Cristiano de Chile"*, Universidad Católica de Lovaina, Instituto de Ciencias Políticas, 1969.
 32. Dicho concepto aparece explicitado en el capítulo I. Se puede ver también: Fernando H. Cardoso, *"La crisis política y las luchas de clases en América Latina"*, ponencia presentada al seminario de Oaxaca, México, 1973.
 33. Para un análisis detallado del sector agrario se pueden considerar las siguientes obras:

- Sebastian Cox, *"Les dépossédés de la campagne. Communautés indigènes, petits agriculteurs et paysans sans terre au Chili"*, Tome I, Université de la Sorbonne Nouvelle, París 3, 1979.
- Alain de Janvry, *"The Agrarian Question and Reformism in Latin America"*, Johns Hopkins University Press, 1981.
- Kooswardhono Mudikdjo, *"Changes in the Agrarian Production Structure Under Agrarian Reform: Chile, 1965-1970"*, Ph.D., University of Wisconsin, 1978.
- Jean Carrière, *"Landowners and Politics in Chile. A Study of the 'Sociedad Nacional de Agricultura' 1932-1970"*, CEDLA, Amsterdam, 1981.
34. Para el análisis de la chilenización del cobre se puede considerar el trabajo de Sergio Aranda y Alberto Martínez, "Estructura económica: algunas características fundamentales", en Aníbal Pinto y otros: *"Chile Hoy"*, Siglo XXI editores, México, 1973.
 35. Victor Brodersohn, *"Consideraciones sobre el carácter dependiente de la burguesía industrial chilena"*, CESO, Universidad de Chile, Santiago, 1969.
Anthony Francis O'Brien, *"The Politics of Dependency: A Case of Study of Dependency - Chile 1938-45"*, Ph.D., University of Notre Dame, 1977.
 36. Aranda y Martínez, obra citada en nota 34, pág. 77.
 37. Respecto del papel de la inversión extranjera puede considerarse la tesis de Gabriel Gassic, *"Concentración, entrelazamiento y desnacionalización en la industria manufacturera"*, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Santiago, 1971.
 38. José Cademartori, *"La economía chilena"*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, pág. 140, 1968.
 39. Para un examen detallado de la administración Frei se puede consultar los seis tomos de la obra de Arturo Olavarría Bravo, *"Chile bajo la democracia cristiana"*, Editorial Nacimiento, Santiago de Chile.
 40. Emir Sader, *"Movilización de masas y sindicalización en el gobierno de la Unidad Popular"*, CESO, Universidad de Chile, Santiago, 1973.
 41. E. Pastrana y M. Thorelfall, *"Pan, techo y poder"*, Editorial Siap-Planteos, Buenos Aires, 1974.
José Bengoa, *"Pampa Irigoin, lucha de clases y conciencia de clases"*, CesO, Universidad de Chile, Santiago, 1972.
 42. Alain Touraine, *"Vie et mort du Chili populaire"*, Seuil, París, 1973.
 43. Sobre el desarrollo de esta hipótesis se deben considerar los siguientes trabajos: a) Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulian, *"Procesos y bloques políticos en la crisis chilena 1970-1973"*, Revista Mexicana de Sociología, México, 1977. b) Lilia de Riz, *"Sociedad y Política en Chile"*, Universidad Autónoma de México, México, 1979.

44. Norberto Lechner, *"Estado y política en América Latina"*, FLACSO, Santiago de Chile, 1980.
45. Representativo de este tipo de reflexión son los trabajos de Regis Debray, particularmente su libro *"Les critiques des armes"*, tomo 1, Seuil, París, 1974.
46. Sobre los problemas políticos del gobierno de Allende se pueden consultar los textos de Joan Garcés: a) *"Allende en la experiencia chilena. Las armas de la política"*, Editorial Ariel, Barcelona, 1976; b) *"Chile: el camino político hacia el socialismo"*, Editorial Ariel, Barcelona, 1972; c) *"El Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende"*, Siglo XXI editores, México, 1974.
47. Julio César Jobet y Alejandro Chelen, *"Pensamiento teórico y político del Partido Socialista chileno"*, Editorial Quimantú, Santiago de Chile, 1972.
48. Julio López, "Sobre la construcción de la nueva economía", en *"Economía y política de la Unidad Popular. Materiales de los Cuadernos de la Realidad Nacional (1970-73)"*, recopilados por Manuel Antonio Garreton, Editorial Fontanella, Barcelona, 1973.
49. Sobre este objeto se puede consultar a Sergio Bitar, *"Transición al socialismo y democracia. La experiencia chilena"*, Siglo XXI editores, México, 1979.
50. Sobre el debate referido a la transición al socialismo en Chile, se pueden consultar los materiales presentados al seminario "Transición al socialismo y experiencia chilena", organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Nacional de la Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios Socio-económicos de la Universidad de Chile. Dichos documentos fueron publicados en 1972.
51. Héctor Vega, *"Chili 1970-1973, la politique économique de la transition au socialisme"*, Institut de Sociologie de l'Université Libre de Bruxelles, Centre de l'Etude de l'Amérique Latine, 1980.
52. Pedro Vuskovic, "Distribución del ingreso y opciones de desarrollo" en *"Economía política de la Unidad Popular"*, Editorial Fontanella, Barcelona, 1973.
53. Pedro Vuskovic, obra citada anteriormente, pág. 115.
54. Programa Básico de la Unidad Popular. Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1972.
55. Sobre esto se puede consultar el libro de Eduardo Labarca, *"Chile al rojo"*, Editorial Universidad Técnica del Estado, Santiago de Chile, 1971, págs. 256 y 257.
56. New York Time, 12 de marzo de 1976. Para una consideración más detallada de la intervención norteamericana en Chile se puede consultar el libro de Armando Uribe, *"Le libre noir de l'intervention américaine au Chili"*, Seuil, París, 1974.
57. Pablo Rodríguez, "Discurso público del 23 de septiembre de 1970", ver diario El Mercurio, Santiago de Chile, 24 de septiembre de 1970.

58. Sergio Ramos Córdova, *"Chile: una economía de transición?"*, Ediciones Casa de las Américas, Cuba, 1972.
59. G. Palma y A. Zamit, *"La vía chilena al socialismo"*, Siglo XXI editores, México, pág. 45, 1973.
60. Para el estudio de la política global de redistribución de ingresos se puede considerar el trabajo de José Serra y Arturo León, *"La redistribución de ingresos en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Éxito y frustración"*, FLACSO, Santiago de Chile, julio de 1978.
61. Guillermo Campero, *"La gestión de la empresa y participación de los trabajadores"*, Revista Nueva Economía, Nro. 2, Santiago de Chile, 1972.
62. J. Petras, *"Nacionalización, transformaciones socioeconómicas y participación popular en Chile"*, Cuadernos de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile, Nro. 11, Santiago, enero de 1972.
63. Para el estudio de la dinámica de la oposición política se puede considerar el trabajo de Augusto Varas, *"La dinámica política de la oposición durante el gobierno de la Unidad Popular"*, FLACSO, Santiago de Chile, 1977.
64. Jorge Giusti, *"Participación popular en Chile: antecedentes para su estudio. Las JAP"*, Revista Mexicana de Sociología, julio-septiembre de 1975.
65. Ver Judith Astellarra, *"Land reform in Chile during Allende's government"*, Ph.D., Cornell University, 1975.
66. Ver Peter Emile Marchetti, *"Worker participation and class conflict in worker-managed farms: the rural question in Chile 1970 to 1973"*, volumes I and II, Ph.D., Yale University, 1975.
67. J. Chonchol, *"La política agraria del gobierno popular"*, Santiago de Chile, 1972.
68. Lois Edwards Athey, *"Government and Opposition in Chile during the Allende years: 1970-1973"*, volumes I and II, Ph.D., Columbia University, 1978.
Walden F. Bello, *"The Roots and Dynamics of Revolution and Counterrevolution in Chile"*, Princeton University, 1975.
69. Luis Corvalán, entrevista en la revista "Chile Hoy", Santiago, Nro. 43, 6 al 12 de abril de 1972.
70. Se puede considerar el trabajo de Manuel Castells, *"La lucha de clases en Chile"*, Siglo XXI editores, México, 1975.
71. Orlando Millas, *"La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular"*, Revista Principios, Santiago de Chile, mayo-junio de 1972.
72. Carlos Altamirano, revista "Chile Hoy", Santiago, nros. 5, 14 al 20 de julio de 1972. También se puede consultar su libro, *"Dialéctica de una derrota"*, Siglo XXI editores, México, 1977.

73. Kalki Glauser y Julio López, *"Táctica económica o estrategia política"*, revista "Chile Hoy", nro. 13, 8 al 14 de diciembre de 1972.
74. Sergio Bitar, *"Transición, Socialismo y democracia: la experiencia chilena"*, Siglo XXI editores, pág. 161, México, 1979.
75. Alain Touraine, *"Vie et mort du Chili populaire"*, Seuil, París, pág. 229, 1973.
76. Jorge Rojas H., *"Der oktoberstreit von 1972 in rahmen der klassenauseinandersetzungen in Chile"*, Universität Hannover, 1983.
77. Mireya Baltra, revista "Chile Hoy", Santiago, 21 al 27 de julio de 1973.
78. Jorge Lavanderos, revista "Chile Hoy", nro. 60, 3 al 9 de agosto de 1973.
79. Eduardo Frei, diario El Mercurio, Santiago de Chile, 8 de julio de 1973.

SEGUNDA PARTE

La oposición política al Estado autoritario

CAPITULO CUARTO

La dictadura militar y el proyecto de reestructuración del capitalismo dependiente en Chile.

4.1. Algunas cuestiones previas.

En las páginas siguientes intentaremos formular una descripción conceptual de los procesos de transformaciones estructurales puestos en práctica por el Estado autoritario en el período 1973-1981. Dicha descripción nos conducirá necesariamente a la reconstrucción y formalización del modelo de reestructuración del capitalismo dependiente que se verifica en la sociedad chilena en el período citado. La determinación de éste se fundamenta en el criterio de interpretación de la aguda crisis económica y, social que se verifica definitivamente en el segundo semestre de 1981, en términos de cierre del ciclo de reestructuración dependiente de carácter monetarista iniciado en 1973. Es este hecho el que permite la evaluación de un período de ciclo cerrado y, a partir de dicha fecha, es posible afirmar que tanto el Estado autoritario como la oposición política a él están confrontados a un nuevo escenario en el combate por la permanencia de la dictadura o la redemocratización de la sociedad chilena. Es necesario advertir que, en nuestra opinión, la quiebra del modelo económico inspirado en la teoría económica neoclásica de Milton Friedman y la *realpolitik* fundamentada en Hayek que 'teorizó' la 'política' del Estado autoritario, supone el surgimiento de una condición estructural esencial para la redemocratización y no necesariamente su establecimiento definitivo. Rechazo el supuesto de que la permanencia del Estado autoritario dependa del funcionamiento efectivo de su 'modelo económico'. Por el contrario, el hecho de prescindir absolutamente de la sociedad civil por parte del Estado es una de las características esenciales de la dictadura. El cerco que la sociedad civil debe establecer al Estado autoritario encuentra en la crisis económica un recurso de apoyo esencial a su tarea de destruir la dictadura, pero ella no constituye necesariamente la garantía de su éxito.

Es evidente además que la determinación de dicho período de estudio ha sido subordinado al objetivo central de este libro: el estudio y reconstrucción de la historia documental de la oposición política a dicho Estado. Para la comprensión de dichos documentos, se hace indispensable la descripción de las distintas fases por las cuales ha transitado el modelo de reestructuración puesto en práctica por la dictadura. Sólo esta perspectiva puede posibilitar un análisis comparativo entre la lógica de las transformaciones reales de la sociedad y la conceptualización que de ellas formula la oposición. Criterio indispensable no sólo para escribir su historia, sino que también para dimensionar su propia eficiencia en términos de oposición y establecer los límites estructurales de su necesaria renovación teórica. El establecimiento de las distintas fases por las cuales ha transitado el modelo de reestructuración establecido por la dictadura en el período indicado debería poner énfasis en un tipo de lectura que privilegie la consideración de los sujetos sociales que en ellas participan. El primer problema que el intento de una periodización sugiere es el que surge de la multiplicidad de procesos que han dado curso a la concreción del autoritarismo, que no siempre concurren paralela o simultáneamente como para posibilitar un diseño integrado de ellos en términos de fases globales. No siempre se rigen por un criterio de sucesividad que facilite su formulación. Provisionalmente es necesario establecer el reconocimiento de tres dimensiones esenciales que pueden concurrir en dicha periodización: la del modelo económico, la de la institucionalización política y/o de las reformas llevadas a cabo al nivel del aparato estatal y la de la conceptualización política de la oposición.

La intensidad, radicalidad y profundización de las transformaciones estructurales de la sociedad chilena puestos en práctica desde el Estado autoritario y la dramática necesidad por interpretar lo que en ella ocurre, a fin de favorecer la constitución de una alternativa de corto plazo que ponga término al genocidio social y al terrorismo de Estado, ha conducido a la formulación de diferentes conceptualizaciones. Dichas transformaciones han sido interpretadas como la concreción de una 'revolución

capitalista tardía', 'refundación capitalista', 'profundización capitalista', 'nueva modalidad de regulación de la economía', 'revolucionarización capitalista', 'revolución desde el Estado', 'reprimarización de la economía', etc. Dichas conceptualizaciones provienen básicamente de los requerimientos políticos esenciales e ineludibles, pero son teóricamente insuficientes para captar la realidad de las transformaciones materializadas y, por tanto, propongo su rechazo. Para ello me fundamento en el hecho de que lo que ha ocurrido en la sociedad chilena no es un proceso de sustitución de un modo de producción por otro que legitimara la presencia del concepto 'revolución'. La estructura económica que precede a las transformaciones llevadas a cabo por la dictadura no condujo a la constitución de un sistema socialista de producción, sino que constituyó una fase previa de desarticulación radical del funcionamiento capitalista de la economía, radicalizando una versión popular de capitalismo de Estado (el período 1970-73). Tampoco se trata de un esquema de profundización capitalista en el sentido de una profundización autoritaria del desarrollo industrial. Lo que se verifica en Chile es un esquema antagónico a la industrialización. El concepto de reprimarización de la economía es insuficiente para explicitar que se trata de la presencia de un nuevo patrón de desarrollo de carácter integral y globalizador de la totalidad de la sociedad. El concepto de refundación capitalista es más un concepto ideológico que sociológico. El concepto revolución desde el Estado ignora que las grandes transformaciones en los esquemas de desarrollo puestos en práctica en la sociedad chilena han descansado mucho más en la acción protagónica del Estado que en la de la sociedad civil. El concepto 'nueva regulación de la economía' privilegia mucho más a las coordenadas puramente económicas que a los actores sociales, es una lectura esencialmente economicista de las transformaciones que han tenido lugar. La idea de la presencia de una revolucionarización capitalista es mucho más una designación verbalista que conceptual.

Por oposición a dichas descripciones e intentos de conceptualización, lo que se verifica es la sustitución de un patrón de de-

sarrollo, históricamente conceptualizado en Chile desde la crisis del patrón primario exportador de finales de la década de los veinte e inicio de los treinta como industrialización, por otro que fundamenta la dinámica de la acumulación del capital en un nuevo tipo de modelo primario exportador altamente diversificado y que se basa en la versión económica neoclásica de inserción de la economía chilena en el mercado internacional, a partir de las ventajas comparativas de sus productos primarios. En donde el concepto de desarrollo está asociado mucho más a la idea de crecimiento económico que al concepto de industrialización. En esta perspectiva lo que sugiero es que las grandes transformaciones que han tenido lugar en Chile durante el siglo XX están asociadas mucho más al concepto de 'alteración o cambio del patrón de desarrollo' que al concepto clásico de revoluciones. Dichas alteraciones han supuesto, en el caso particular de las crisis del patrón de desarrollo que dio curso al establecimiento de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, una transformación radical de las relaciones sociales, de la estructura de las clases sociales, del Estado, de la economía, de la ideología y de la cultura. En esta perspectiva, por ejemplo, nadie podría negar que el Estado oligárquico de la fase primario exportadora clásica y el Estado de compromiso a que dio curso el proceso de industrialización no constituían expresiones de modelos societales radicalmente diferentes. Sin embargo, el tránsito de una forma de Estado a la otra, mediado por la crisis de los años treinta, no podría ser caracterizada como un proceso de revolución capitalista; sino como una alteración radical de la lógica del desarrollo que aseguraba la continuidad y profundización del desarrollo capitalista, en la perspectiva de la industrialización. Tanto la sociedad oligárquica como la sociedad del 'Estado de compromiso' eran sociedades capitalistas, lo que las diferencia es la presencia de distintas estrategias y modelos de desarrollo. Es este mismo tipo de razonamiento el que sugiero como el más eficiente para conceptualizar las transformaciones estructurales que se han puesto en práctica desde el Estado autoritario en la sociedad chilena para el período 1973-1981. La utilización del concepto 'revolución', con

cualquiera de los apellidos que se le han asignado, se fundamenta mucho más en requerimientos de tipo ideológico que en criterios de eficiencia analítica para conceptualizar los procesos reales. En esta perspectiva el concepto 'sustitución del patrón de desarrollo' precedente es mucho más eficiente, por radical que sea el contenido de las transformaciones.

Es preciso recordar que en la formulación teórica del 'Estado terrorista' que se implanta en Chile a partir de 1973, concurren diversas tendencias ideológicas que convergen en la necesidad de erradicar la presencia del sistema democrático.¹ Milton Friedman y la Escuela Económica de la Universidad de Chicago no son los únicos que se vinculan con la tragedia de la sociedad chilena; a ellos se suman: los sectores conservadores chilenos que explican el estancamiento de la industrialización y de la economía a partir de la 'infuncionalidad del sistema democrático', la tecnoburocracia militar que conceptualiza la 'doctrina de seguridad nacional' a partir de la declaración de la *guerra interna* a la sociedad civil. A ello deben agregarse intelectuales como Huntington que intentan resolver los 'problemas de la sociedad contemporánea' a partir de la sustitución *necesaria* de la 'razón democrática' por la 'razón tecnocrática'. Dicho deseo se expresa en la aspiración de que la soberanía que en los sistemas democráticos reside en la sociedad civil, sea traspasada a la 'tecnoburocracia superior' que fundamenta su poder en el conocimiento específico de la ciencia, particularmente en la economía. Huntington nos sugiere que, "en muchas situaciones, las demandas de experticidad, tradición, experiencia y talentos especiales pueden supeditar las demandas por la democracia como modo de constituir la autoridad...; la efectiva operación de un sistema democrático requiere usualmente alguna medida de apatía y de no involucramiento de algunos individuos y grupos".² Otros convocan a las sociedades modernas a la necesidad de 'derrocar la política' y a que "debemos deshacernos de la ilusión de que podemos crear deliberadamente el futuro de la humanidad".³

En el estudio del proceso autoritario chileno existe un problema de orden metodológico que es necesario advertir. El se ex-

presa en la doble tensión entre la necesidad de la denuncia y la de la comprensión de los procesos. "El lenguaje de las disciplinas académicas se despoja muchas veces de un contenido ético y no siempre es capaz de dar cuenta de la magnitud de la atrocidad, la perversión o la irracionalidad. El está obligado a dar racionalidad, a comprender, como alguien dijo, no al combatiente sino la batalla. Los crímenes históricos deben ser explicados y no sólo denunciados. El azar o la patología de algunos actores tiene poco sitio en el análisis de fenómenos históricos. La propia identidad del analista le crea un desgarró entre la necesidad de asumirla y defenderla y la de comprender. Cuando habla de aquello que lo involucró tiende a la apología, cuando habla de aquello a lo que se opone, tiende a la denuncia. No se supera esta tensión de una vez para siempre. Ella forma parte de nuestro trabajo y con ella debemos vivir".⁴

4.2. El nuevo patrón de desarrollo en el modelo de reestructuración.

La reestructuración capitalista dependiente que se verifica en Chile a partir de la reinserción de un nuevo modelo y patrón de desarrollo impulsado por la presencia del Estado militar, tanto en su contenido económico como en sus dimensiones sociales y políticas, no puede ser comprendido si no se consideran las conceptualizaciones ideológicas que se formulan como críticas en contra de la estrategia de industrialización precedente.⁵ Es preciso recordar que la industrialización nacional fue promovida a partir de la utilización de instrumentos que fueron claves. Entre ellos se destacan las diversas políticas aduaneras restrictivas y el proteccionismo arancelario, que se combinaban con subsidios a las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios y, con políticas de sobrevaloración cambiaria. El Estado centralizaba las políticas generales dirigidas hacia el sector industrial por medio de créditos al sector privado, inversión directa en obras de infraestructura o aportes de capital en la organización de las empresas mixtas. La pérdida del dinamismo de este esquema y sus crisis periódicas intentaron ser resueltas a

través de esfuerzos de reactivación del sector industrial que se fundamentaron en su reorientación hacia la sustitución de bienes de consumo durables e intermedios. A pesar de dichas medidas el restablecimiento del dinamismo necesario del proceso de industrialización no logró los índices requeridos como para garantizar un desarrollo económico relativamente estable.

Es así como en el curso de los años setenta la resolución de la crisis del modelo de industrialización sustitutiva exigía, a partir de las limitaciones generadas por las dimensiones del mercado interno, una apertura del sector industrial al comercio y mercado internacional. Era evidente que el proteccionismo indiscriminado había operado como mecanismo de desestímulo a las exportaciones de los sectores industriales. Fundamentalmente porque el control monopólico u oligopólico ejercido sobre el mercado interno generado por los mecanismo proteccionistas permitía mantener precios incompetitivos a nivel internacional que provenían de los altos costos de la producción nacional. La ausencia de una apertura de la economía que garantizara la existencia de mecanismos competitivos acentuaba también la imposibilidad de avanzar en las importaciones de equipos e insumos a tasas de cambios que no fueran subvaluadas, lo que naturalmente compensaba con creces las pérdidas de beneficios que se habrían obtenido a través de las exportaciones con un tipo de cambio más elevado. Ello operaba negativamente contra el aprovechamiento máximo de la capacidad industrial instalada; los altos índices de capacidad ociosa en el sector industrial chileno constituían una constante histórica, conduciendo a un estilo de desarrollo y a una burguesía industrial altamente parasitarios. La necesidad de reorientación de la industrialización hacia el sector de exportación fue siempre rechazada por los grupos empresariales industriales que se beneficiaban de los mecanismos proteccionistas generados por este estilo de industrialización. En esta dirección los intereses de los sectores industriales coincidían mucho más con el estancamiento que con la necesaria modernización de la economía.⁶

En este contexto la ideología antiliberal que en la sociedad

chilena siempre mantuvo una influencia marginal cobra relevancia a partir de 1973. Ella establece una relación de causalidad entre estancamiento económico y democracia. El mantenimiento de un estilo de industrialización ineficaz no sólo era protegida por el sistema democrático imperante, sino que la democracia facilitaba la presión salarial sobre los índices indispensable de acumulación de capital acentuando los costos de producción. Sumado a ello el hecho de que la coyuntura política de 1970-73 había creado en la oposición a Allende condiciones ideológicas suficientes para soluciones radicales de los problemas estructurales, gana terreno un tipo de diagnóstico que va a constituir el punto de partida esencial en las transformaciones económicas llevadas a cabo por el Estado autoritario: la industrialización por sustitución de importaciones habría constituido el resultado de medio siglo de errores económicos, en donde tanto el 'proteccionismo exagerado' como el 'estatismo agobiante' habría generado condiciones para una "ineficiente, improductiva y artificial asignación de los recursos económicos".

La ideología antiliberal en la que se fundamenta la crítica al proceso de industrialización se fortalece como resultado de su convergencia con dos sistemas doctrinarios que le otorgarán la 'coherencia teórica' necesaria en términos de ideología y política más allá del diagnóstico puramente económico: el pensamiento tradicionalista y la doctrina de la seguridad nacional.⁷ El componente esencial de ambos es la "necesaria negación de la validez social de la democracia". El primero de ellos es relativamente explícito en sus formulaciones y por tanto de breve descripción. Probablemente sean las afirmaciones del sacerdote Osvaldo Lira las más representativas de esta perspectiva: "Es evidente que en frente del sufragio de los siglos muy poco puede valer ni puede significar el sufragio universal de una generación determinada si se manifiesta en sentido contrario al que adoptaron las generaciones que la precedieron y construyeron la nación".

A este tipo de razonamiento se suman las vertientes más tradicionales del pensamiento social católico. La doctrina de la Seguridad Nacional fundamentará la declaración de guerra a la socie-

dad civil y a las formas de Estado democrático precedente, en la exacerbación de la ideología anticomunista. Esto será descrito por el dictador en los siguientes términos: "Como otros países del mundo, y especialmente de América Latina, Chile ha sufrido el embate del marxismo-leninismo, y ha decidido enfrentarlo y combatirlo hasta su total derrota. Pero antes de ello cabe hoy detenerse un instante a reflexionar sobre un problema capital: ¿en qué consiste exactamente este enemigo de hoy? El marxismo no es una doctrina simplemente equivocada, como ha habido tantas en la historia. No. El marxismo es una doctrina intrínsecamente perversa, lo que significa que todo lo que de ella brota, por sano que se presente en apariencias, está carcomido por el veneno que corroee su raíz. Eso es lo que quiere decir que su error sea intrínseco y, por eso mismo, global, en términos de que no cabe él ningún diálogo o transacción posibles. No obstante, la realidad contemporánea indica que el marxismo no es únicamente una doctrina intrínsecamente perversa. Es además una agresión permanente, hoy al servicio del imperialismo soviético. Como lo desarrollara ampliamente en mi anterior mensaje presidencial, esta forma de agresión permanente da lugar a una guerra no convencional en que la invasión territorial es reemplazada por el intento de controlar los Estado desde dentro".⁹

Es este tipo de razonamiento el que posibilita la reducción e identificación entre Estado y Nación e impide que el primero sea considerado como lugar de concreción y resolución institucionalizada de los conflictos entre los distintos sujetos sociales. Este es el principio esencial con el que opera y funciona el Estado autoritario. A partir de dicha identificación y reducción el Estado es considerado como la materialización de la Nación. Los conflictos sociales y las discrepancias políticas son necesariamente entendidas como un cuestionamiento e inestabilidad de la Nación.

Estado y Nación deben concurrir simbióticamente a la ejecución del 'bien común'. Dicha simbiosis es necesariamente homologada con el régimen político autoritario; Fuerzas Armadas, Estado y Nación constituyen una misma e indivisible unidad. Sólo la primera puede

garantizar la continuidad histórica de la Nación. Dictadura y Fuerzas Armadas constituyen a su vez el 'resultado' real de la Unidad Nacional, en donde este último concepto es considerado como un 'hecho natural' que proviene de la 'esencia constitutiva del alma nacional' y no como resultado del consenso social. Los guardianes de la *tradición, esencia y alma nacional* son las Fuerzas Armadas y de allí que los conflictos sociales sean considerados como el resultado directo de la gestión de los 'enemigos de la Patria', y de la *guerra* que debe enfrentar el Estado en contra del 'comunismo internacional'. Toda forma de oposición política debe ser considerada como forma de agresión directa del 'comunismo y de los enemigos de la Nación' y atentatoria a la Unidad Nacional. El único instrumento eficiente para garantizar la victoria y continuidad histórica de la Nación es el fortalecimiento permanente del poder entendido como el necesario y permanente aumento de éste en el sistema político dictatorial, que permite definitivamente reducir la sociedad civil al Estado. Privatización de la economía y estatización de la sociedad civil constituirán lo esencial del modelo postulado por el régimen militar.¹⁰ La estatización de la sociedad civil y la supresión 'definitiva' de su capacidad de gestión política sólo puede ser materializada a partir de la ejecución de una 'guerra interna' prolongada, que debe asumir el carácter de una guerra interna total. La democracia política no constituye una alternativa eficiente para lograr los objetivos propuestos. Los militares recordarán permanentemente que a su amparo se desarrolló y gestó el peligro comunista. En la perspectiva de una guerra total el poder de las Fuerzas Armadas también debe ser total. Me parece evidente que el concepto de doctrina de Seguridad Nacional se refiere de manera exclusiva a la lucha contra el marxismo, el enemigo interno y la subversión, la condición subdesarrollada del capitalismo dependiente nacional estará excluida de sus reflexiones. El modelo económico y el esquema de desarrollo le será aportada por la versión chilena de la teoría económica de Milton Friedman.¹¹

En este contexto ideológico el establecimiento de un nuevo patrón de desarrollo económicamente encontrará condiciones 'teóricas favorables'

representadas por la coherencia que deriva de la síntesis que los partidarios del gobierno formulaban entre doctrina de Seguridad Nacional y Monetarismo. Con esto no aspiraban a resolver la crisis y estancamiento del patrón precedente a través de una profundización de la industrialización (el modelo económico de la dictadura brasileña puesto en práctica desde 1964), sino a crear las condiciones estructurales de su erradicación como eje dinámico de los procesos de acumulación de capital. Para lograr dicho objetivo, sumado a los requerimientos de rearticulación del funcionamiento capitalista de la economía gravemente afectado por la gestión económica del gobierno de Allende, se llevó a cabo una apertura radical y drástica de la economía al mercado internacional que se expresa en la eliminación de las barreras arancelarias. Con ello se intentaba provocar y acelerar la reestructuración de la organización económica a fin de lograr que el sistema de precios se transformara en el principal mecanismo de asignación de los recursos en el sistema económico. La gestión del sector privado de la economía y de los grupos empresariales sería decisivo en este esquema, respecto de lo cual se intentará el incremento de su poder de decisión por medio de la privatización de las empresas del sector estatal. El capital internacional y la inversión externa deberían desempeñar un papel esencial a partir de la sustitución de la función estatal de conducción del proceso de acumulación de capital. La apertura de la economía al exterior y el funcionamiento de los mecanismos del mercado constituirían los medios esenciales a través de los cuales se reasignarían los recursos productivos hacia los sectores en los que la economía verificaba ventajas comparativas y ellos permitirían transformar las exportaciones en el elemento dinámico esencial del proceso de desarrollo. Por tanto, el elemento dinámico del proceso de acumulación de capitales se desplazaría desde el sector industrial hacia el sector exportador y se constituiría a partir de la elaboración de productos basados en la utilización intensiva de recursos básicos, bosques, agricultura y minería. Ello conduciría a la sustitución del patrón de desarrollo y el esquema de acumulación de capital basado en la industrialización por un patrón de desarrollo primario exportador altamente modernizado y diversificado que aprovechara las ventajas comparativas

de la economía nacional, a partir de una nueva forma de inserción en el mercado mundial.

El desempleo que acompaña los nueve años de política monetarista constituirá un componente estructural de la nueva estrategia, en la medida en que es el mercado internacional y no el interno el que favorece la acumulación del capital. Se produce para exportar y no para satisfacer las necesidades del mercado interno, de ahí que la existencia de una política de distribución de ingresos que asegure la presencia de una capacidad de compra y consumo interno en términos de salarios sea absolutamente prescindible. Por el contrario, lo que se requiere es precisamente una política opuesta: concentración de ingresos en niveles suficientes como para consumir los productos importados de precios internacionales que están ahora llamados a satisfacer gran parte de las necesidades del 'mercado interno'.

Para ilustrar la función desindustrializadora del modelo basta recordar que la participación del sector industrial en el P.G.B. pasó de un 29,5% en 1974 a un 20,7% en 1980; esta última cifra es inferior a la alcanzada en 1955.¹²

4.3. Fases de implementación del modelo de reestructuración capitalista dependiente.

La materialización del nuevo esquema de desarrollo se concretó por medio de la ejecución de cinco variables esenciales: a) la liberalización del mercado a fin de transformar el sistema de precios en el mecanismo esencial de asignación de los recursos en el sistema económico; b) disminución de la intervención del Estado en la gestión económica; c) apertura sin limitaciones de la economía al mercado mundial; d) formalización de un mercado de capitales privados a fin de fortalecer la capacidad de ahorro del sistema económico y, e) control e intervención absoluta del mercado de trabajo. Los salarios deberían alcanzar una disminución proporcional al aumento de las exportaciones. Los criterios que se han utilizado para fundamentar la periodización de la puesta en práctica

de este esquema de desarrollo se vinculan a las modificaciones de la política antinflacionaria.¹³ Dicha política persiguió dos objetivos generales: control de los desequilibrios macroeconómicos (control de la inflación y equilibrio de la balanza de pagos) y reorganización del marco institucional de funcionamiento de la economía. Esto último incluye la reducción de la participación del Estado, el nuevo sistema de relaciones con el capitalismo internacional y la alteración del sistema de relaciones precedentes entre capital y trabajo. En función de estos criterios se establece la existencia de cuatro grandes fases en el proceso general de reestructuración capitalista dependiente de la economía y la sociedad.¹⁴

La primera fase corresponde al período de septiembre de 1973-abril de 1975, se inicia con el establecimiento de la dictadura militar en septiembre de dicho año y se cierra con la organización del "Programa de Recuperación Económica". Es evidente que el sentido político de esta primera fase está de alguna manera determinado por la necesidad de satisfacer los intereses económicos e ideológicos de la alianza social triunfante. Las dificultades iniciales en dicha tarea provienen de la extrema heterogeneidad de ella: sectores laborales, comerciantes, empresarios industriales, grandes y pequeños propietarios agrícolas, colegios profesionales. Es ello lo que explica la ausencia en este primer período de una política económica fuertemente coherente y de un proyecto global de transformaciones de la sociedad, la política y la economía. En el nivel político dicha heterogeneidad provenía de la diversidad de la alianza: sectores de inspiración corporativista fascista, Democracia Cristiana, derecha conservadora autoritaria (Partido Nacional) y militares. Resultado de ello es también la ausencia de una coherencia ideológico-política en el equipo económico del gobierno. Sólo existía acuerdo en políticas generales a largo plazo: necesidad de apertura de la economía hacia el exterior, liberalización económica y readecuación del sector industrial en función de la apertura externa. Aún no existe un predominio dentro del equipo económico de la dictadura de los sectores partidarios de las versiones monetaristas y liberales

ortodoxas extremas. Estos coexistían con representantes de los sectores empresariales tradicionales que participaban de la idea de poner en práctica un modelo 'auténticamente chileno' que se fundamentara en una política económica 'realista y pragmática'. A ellos se sumaban los representantes de la Democracia Cristiana que aportaban sus vinculaciones con las organizaciones financieras internacionales.

En esta fase se crean las condiciones estructurales necesarias para la liberalización de las fuerzas del mercado, con exclusión explícita del mercado de trabajo, a fin de facilitar la constitución del sistema de precios en el factor determinante de la asignación de los recursos del sistema económico. La reducción de la participación del Estado y el desmantelamiento de su función rectora de los procesos económicos, junto a la exclusión del movimiento sindical y a la acentuación del terrorismo de Estado definen los principios orientadores de las decisiones económicas del gobierno, otorgando los rasgos iniciales de lo que se designó como "economía social de mercado". Es un período de fuertes pugnas internas en función de las concepciones económicas y políticas que debían orientar el modelo futuro. Por ello, en el interior de esta fase se propone la distinción necesaria de dos sub-fases. La primera de ellas, se inicia en septiembre de 1973 y termina en julio del año siguiente, y corresponde con la necesaria restauración de los elementos mínimos de funcionamiento de una economía capitalista que había sido radicalmente alterada por el programa socialista de la Unidad Popular.

Los objetivos económicos iniciales estaban constituidos por los intentos de regulación de los desequilibrios económicos, el 'saneamiento' de los fundamentos de la economía y la normalización de la inserción internacional de ella. El conjunto de estas medidas articulaban la reducción de los salarios con la libertad de precios y, como resultado, se redujo drásticamente el poder de compra de los primeros. La regulación de los desequilibrios económicos y el saneamiento de las bases productivas estaba destinado a ejecutar el desmantelamiento de las transformaciones estruc-

CUADRO XIX

Chile: Indices de salarios y sueldos reales: 1959-1970
(1969 = 100)

	<u>Salarios y sueldos</u>		<u>salarios</u>		<u>Sueldos</u>	
	Indice promedio	Crecimiento medio anual (%)	Indice promedio	Crecimiento anual (%)	Indice promedio	Crecimiento anual (%)
1959-64	65,2	- 0,5	60,9	- 0,2	66,6	- 0,3
1965-70	90,8	10,2	89,3	10,2	91,6	10,1
1971-72	134,5	8,7	131,6	10,3	137,1	7,1
1973	65,0	-51,7	69,7	-46,2	60,2	-53,9
1974-76	72,5	6,4	69,8	2,9	75,2	10,2
1977-79	115,2	18,0	111,0	17,6	119,3	18,3

FUENTE: Jaime Ruiz-Tagle, "*Antecedentes para el estudio de los salarios y sueldos en una perspectiva histórica: 1959-1979*", Santiago de Chile, marzo de 1980.

turales impulsadas en el período de la Unidad Popular. Ello dio curso al establecimiento de un "Plan de Normalización" constituido por la devolución de las tierras *ilegalmente ocupadas* por los campesinos y la promulgación de un estatuto para la tierra, que aseguraba la disolución de los asentamientos campesinos y la creación de un estrato de pequeños campesinos parceleros, generando un espacio económico significativo para el capital privado y el restablecimiento sin limitaciones del derecho de propiedad privada para el capital en el sector agrícola.¹⁵ Por otra parte, dicho plan incluía la devolución de las empresas industriales requisadas o intervenidas y el restablecimiento del carácter coercitivo de la disciplina laboral asegurada por la suspensión de los derechos de negociación colectiva de los trabajadores y la limitación drástica de la actividad sindical. Esto permitía la disolución de los vínculos del movimiento laboral con los partidos de la oposi-

CUADRO XX

Chile: Destino de predios expropiados por el Estado entre 1965 y 1973, a febrero de 1979

Predios y asignación	Forma de traspaso	Superficie				Tamaño promedio HRB
		HRB	%	HRB	%	
3.806 ^a	Superficie restituida	251142	28			66
2.170 ^a	- restitución parcial			109614	12	50,5
1.636 ^a	- restitución total			141528	16	86,5
46.440 ^b	Superficie asignada	467127	52			10,05
36.533 ^b	- en forma individual			371262	41	10,16
9.907 ^b	- en forma cooperativa			95865	11	9,70
1.972 ^a	Transferido y transfi- riéndose por venta o licitación	177483	20	177483	20	90,00
		895752	100	895752	100	

^a Comprende predios completos y partes de predios.

^b Asignatarios en forma cooperativa e individual.

FUENTE: ODENA, febrero de 1979.

Luz E. Cereceda y Fernando Dahse, "Dos décadas de cambios en el agro chileno", Santiago de Chile, 1980.

ción política ilegalizada. El plan de normalización incluía también el restablecimiento de las vinculaciones de la economía chilena con el sistema capitalista mundial, que era considerado indispensable para el restablecimiento de la confianza del sistema financiero internacional hacia Chile.¹⁶ En esta perspectiva, el

CUADRO XXI

Chile: Empresas requisadas e intervenidas, devueltas a sus propietarios

Años	Empresas Normalizadas (No)
- 1974	202
- 1975	39
- 1976	10
- 1977	6
- 1978	2
T O T A L	259

FUENTE: Fernando Dahse, *"Mapa de la extrema riqueza"*, Santiago de Chile, 1979.

plan antiinflacionario desempeña el papel central y se elaboró siguiendo recomendaciones estrictas del Fondo Monetario Internacional. A ello debía sumarse la restitución de las empresas extranjeras intervenidas o requisadas y la solución de las indemnizaciones de las empresas del cobre que habían sido nacionalizadas en el período 1970-73.

CUADRO XXII

Chile: Número de empresas públicas

	1970	1973	1977	Objetivo para 1980
Con participación accionaria				
-Empresas	46	229	45	15
-Bancos	-	19	4	-
Empresas intervenidas	-	259	4	-
Empresas en liquidación	-	-	17	-
Total	46	507	70	15

FUENTE: CORFO, Gerencia de Normalización y *El Mercurio*, 27 de febrero de 1980. Las cifras corresponden a empresas de propiedad de CORFO.

Foxley, Alejandro, *"Experimentos neoliberales en América Latina"*, Cieplan, Santiago de Chile, 1982.

La segunda subfase se inicia en julio de 1974, y se corresponde con la designación del ministro Cauas en el ministerio de Hacienda y se cierra en abril de 1975. El contenido esencial de esta subfase estaría dado por el desplazamiento del énfasis inicial puesto en la política antiinflacionaria hacia la disminución del déficit fiscal y por el establecimiento de las transformaciones económicas esenciales que dieron origen a lo que se designó como 'nueva institucionalidad económica'. Dicha institucionalidad intenta ser asegurada a partir de una serie de medidas tales como

CUADRO XXIII

Chile: Inversión extranjera autorizada y materializada
(en dólares de cada año)

Años	Autorizada (mill.US\$)	Materializada (mill.US\$)	%Inversión Materia- lizada sobre autori- zada
1974	15,3	2,4	15,9
1975	98,7	49,6	45,6
1976	149,6	34,6	32,9
1977	534,8	48,6	16,9
1978	1266,8	234,6	17,9
1979	1713,8	304,6	17,8
1980	1237,3	304,4	24,6
1981	2508,9	419,2	21,5
Total	6484,0	1398,0	----

FUENTE: Vega, Humberto y Ruiz Tagle, Jaime *"Capitalismo autoritario y Desarrollo económico, Chile: 1973-1981"*, Santiago de Chile, 1982.

1) liberalización de las importaciones y fijación de rebajas arancelarias iniciales que fijarían en un período de tres años un arancel del 60%; y que esto constituyó una drástica modificación del comercio exterior; 2) liberalización radical del mercado de capitales a partir de la posibilidad otorgada a los empresarios nacionales para contraer créditos externos sin autorización previa del Estado desde mayo de 1974 y que aseguraban el desarrollo y fortalecimiento de la burguesía financiera; 3) facilidades al ingreso de capitales extranjeros a partir de la promulgación en el mes de julio del "Nuevo Estatuto del Inversionista Extranjero"; 4) elaboración de los procedimientos y normas por las cuales se regularía la privatización de las empresas, el desmantelamiento del Estado y la privatización de la banca comercial, y 5) derogación de los impuestos al patrimonio, de las ganancias de capital y promulgación de la modificación tributaria que dio origen al Impuesto al Valor Agregado y a la igualación

de las tasas que gravaban las utilidades de las empresas con las que gravaban los sueldos, salarios y pensiones.¹⁷

CUADRO XXIV

Chile: financiamiento de la inversión nacional
(porcentajes)

<u>Años</u>	<u>Origen interno</u>	<u>Origen externo</u>
1970	92,5	7,5
1971	85,9	14,1
1972	68,1	31,9
1973	66,5	33,5
1974	97,9	2,1
1975	60,4	39,6
1976	113,6	-13,6
1977	74,1	25,9
1978	70,7	29,3
1979	69,9	30,1
1980	64,6	35,4
1981	34,1	65,9

FUENTE: Vega, Humberto y Ruiz Tagle, Jaime, "*Capitalismo autoritario y Desarrollo económico, Chile: 1973-1981*", Santiago de Chile, 1982.

El conjunto de medidas adoptadas en este primer período revelan que la vinculación existente entre los distintos sectores que constituían el equipo económico del gobierno provenía del convencimiento ideológico que se expresa en la necesidad de una transformación radical del estilo de economía y desarrollo que había prevalecido en Chile los últimos cuarenta años, transformaciones que se resumían en tres variables fundamentales: disminución del papel del Estado, predominio de las 'fuerzas del mercado', y fortalecimiento del sector privado. Por tanto, se estaba lejos de entender la reestructuración económica como un simple proceso de restauración del esquema de desarrollo que precedió al período

socialista del gobierno de Allende. Sin embargo cobraba fuerza el conflicto en torno a la cuestión de la efectividad de una política gradualista de control de la inflación o de una política radical que debía ponerse en práctica a través de una reducción drástica del déficit fiscal, que 'reduciría' ostensiblemente la prolongación del período de recesión.

La polémica entre gradualismo o ataque frontal al proceso inflacionario revelaba la existencia de dos modelos económicos alternativos que aún en este período no aparecían claramente diseñados. El proyecto de control gradualista implicaba e incentivaba a un esquema de desarrollo en donde la industrialización era mantenida como el eje central del proceso de acumulación pero sometida a procesos de alta modernización que en condiciones de innovación organizacional y tecnológica pudiera enfrentar y penetrar la competencia de los mercados internacionales. Evidentemente, desde el punto de vista de los componentes sociales de este esquema, ello suponía el restablecimiento del papel exclusivo en la economía de los capitales privados nacionales y extranjeros, que sobre la base de una mayor autonomía frente al Estado constituirían los agentes esenciales del desarrollo. Este era sin dudas un esquema de profundización del desarrollo capitalista dependiente fundamentado en la intensificación del desarrollo industrial. En él se encontraba presente una doble lógica de continuidad y ruptura respecto del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. De continuidad, en la medida en que buscaba mantener al sector industrial como eje del modelo de desarrollo, y de ruptura, en la medida en que aspiraba a poner en práctica una política de apertura externa radicalmente mayor que la del período precedente. Sin duda, este modelo, que es el dominante en este primer período, revelaba también la necesidad de la dictadura por movilizar y mantener el apoyo de los sectores empresariales.

Una situación especialmente dramática es la que tiene que hacer frente el movimiento laboral y sindical en este primer período. En la medida en que es considerado como el terreno propicio

CUADRO XXV

Chile: Valor y composición de las exportaciones

	Millones de dólares					Composición porcentual			Tasas de crecimiento		
	1970	1977	1978	1979	1980 ^a	1970	1980 ^a	1980 ^a	1978	1979	1980 ^a
Total exportaciones de bienes	1096	2190	2408	3763	4818	100.0	100.0	100.0	10.0	56.3	28.0
<u>Tradicionales</u>	1019	1578	1635	2544	3189	93.0	66.2	55.6	3.6	55.6	25.4
Cobre	855	1187	1201	1800	2200	78.0	45.6	50.0	1.2	50.0	22.2
Hierro	71	82	80	110	157	6.5	3.3	-	2.4	38.7	42.7
Salitre y yodo	25	40	47	58	89	2.3	1.8	17.5	17.5	24.8	53.4
Molibdeno	11	54	47	193	229	1.0	4.8	-13.0	309.1	18.6	18.6
Harina de pescado	15	87	106	153	234	1.4	4.9	21.8	44.2	52.9	52.9
Celulosa	18	85	116	181	231	1.6	4.8	36.5	56.2	27.6	27.6
Papel y cartulina	15	43	38	49	49	1.4	1.0	-11.6	27.9	-	-
<u>No tradicionales</u>	87	613	773	1219	1629	7.9	33.8	26.1	57.8	33.6	33.6
Mineros	2	41	47	92	243	0.2	5.0	14.6	95.3	164.1	164.1
Agropecuarios y del mar	32	160	204	265	340	2.9	7.1	27.5	30.0	28.3	28.3
Agrícolas	22	129	158	184	244	2.0	5.1	24.4	16.6	32.6	32.6
Pecuarios	8	23	28	38	37	0.7	-	21.7	34.9	-	2.6
Forestales	1	1	2	3	2	0.1	-	7.5	7.5	-33.4	-33.4
Pesca	1	9	16	40	57	0.1	1.2	77.8	155.8	42.5	42.5
Industriales	53	412	522	863	1046	4.8	21.7	26.7	65.7	21.2	21.2
Alimentos y bebidas	16	91	90	148	163	1.5	3.4	-1.1	64.0	10.1	10.1
Maderas	9	70	94	165	286	0.8	5.9	34.3	74.5	73.3	73.3
Productos químicos y derivados del petróleo	6	78	106	128	163	0.5	3.4	35.9	20.7	27.3	27.3
Industrias metálicas básicas	3	103	143	307	279	0.3	5.8	38.8	113.7	-	9.1
Productos metálicos, maquinarias y otros artículos electrónicos	5	37	57	60	64	0.5	1.3	54.1	5.3	6.7	6.7
Material de transportes	10	11	8	26	43	0.9	0.9	-27.3	221.0	65.4	65.4
Otros	4	22	24	29	47	0.4	1.0	9.1	26.0	62.1	62.1

FUENTE: Banco Central de Chile. Estudio Económico de América Latina 1980, CEPAL, Santiago, 1981.

^aCifras preliminares

de la acción de los partidos políticos constituye uno de los aspectos esenciales de los sujetos sociales que atentan en contra de la integridad de la Nación. Debe ser necesariamente considerado como adversario en la guerra interna que las Fuerzas Armadas deben desarrollar en contra de la 'subversión y el comunismo'. La autolegitimidad que el gobierno militar se atribuye para el cumplimiento de dicha tarea proviene de sus propias declaraciones: "al quebrantar (el gobierno de la Unidad Popular) los derechos fundamentales de la libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho, en general, a una digna y segura subsistencia"¹⁸ la intervención restauradora de las Fuerzas Armadas se hace indispensable. Las primeras acciones del gobierno buscan neutralizar la resistencia del movimiento sindical: "Trabajador chileno, las Fuerzas Armadas respetan tus derechos. La participación del sector laboral en la gestión de las grandes empresas dejará de ser una consigna y un pretexto para que una casta dirigente alcance un absurdo poder total".¹⁹

El paso siguiente puesto en práctica por la dictadura fue la eliminación de la Central Unica de Trabajadores de Chile, en virtud del decreto ley nro. 12 del 17 de septiembre de 1973 y que fue complementado con el decreto ley nro. 133 del 13 de noviembre de 1973. Ambos decretos no sólo declaran la disolución de la organización nacional de los trabajadores sino que, además, sus sedes gremiales fueron ocupadas militarmente. Los dirigentes gremiales nacionales, provinciales y locales fueron encarcelados, asesinados en virtud de la aplicación de la 'ley de fugas', desaparecidos o condenados al exilio. A la política general de represión aplicada en contra del movimiento sindical industrial y campesino se agrega la suspensión del derecho a presentación y tramitación de demandas salariales y del fuero sindical, como lo certifica el Bando nro. 36 del 18 de septiembre de 1973. Por otra parte, el decreto ley nro. 43 del 29 de septiembre del mismo año declaró la suspensión de los convenios previos de salarios y los reajustes automáticos de pensiones. El decreto ley del 4 de octubre de 1973 declaró los Tribunales Especiales del Trabajo fuera

del ejercicio de los jueces ordinarios del trabajo y radicalizó las causales de despido contempladas en los códigos legales respectivos con efecto retroactivo. Entre las nuevas causas las más significativas eran las que hacían referencia al hecho de haber dirigido o dirigir huelgas. El conjunto de medidas represivas culmina con el decreto ley nro. 198 del 29 de septiembre de 1973 que obliga a la posesión, previa a toda reunión sindical, de una autorización policial e impide las elecciones sindicales y, en caso de necesidad imperiosa de designación de un nuevo dirigente sindical, ésta debería recaer en los trabajadores más antiguos. Pero tanto los empresarios como el gobierno se reservaban el derecho de objetar el procedimiento de designación. Se otorga además derecho al Ministerio de Trabajo para reemplazar las direcciones sindicales de los funcionarios de la administración pública.

El conjunto de estas medidas represivas dirigidas en contra del movimiento sindical abarcan e incluyen a los dirigentes demócrata cristianos que prestaban, de acuerdo a la política del Partido Demócrata Cristiano, su apoyo a la dictadura militar recién establecida. El movimiento sindical es un enemigo explícito en la guerra interna, prueba de ello es que a los problemas laborales se les hace frente desde el ministerio del Interior, es decir, son considerados como un problema de seguridad interior del Estado. Esto último se expresa además en el decreto ley nro. 314 del 4 de mayo de 1974, que autoriza la creación en cada provincia de una Comisión de Estudios Laborales que debería ser presidida por un oficial de las Fuerzas Armadas en servicio activo.²⁰

La segunda fase de puesta en práctica del modelo de reestructuración dependiente se inicia en abril de 1975 y se cierra con la revaluación monetaria de junio de 1976. El contenido esencial de este segundo período está dado por el abandono definitivo de la política de control gradualista del proceso inflacionario en beneficio de un esquema de intensificación y aceleración de las transformaciones estructurales. Lo que se denominó como política de shock se fundamentaba en la intensificación del uso del instrumental económico ortodoxo, en donde lo esencial del programa

estabilizador estaba representado por la reducción de los gastos fiscales y por la revisión total de las inversiones públicas. Junto a estas medidas, que se denominaron como 'plan de abril', se pusieron en práctica otras de carácter complementario. Entre ellas se destaca el fomento de las exportaciones a través de mayores devaluaciones del tipo de cambio (del peso) y la creación de una institución pública de fomento de las exportaciones (PROCHILE). Esto último tenía como objetivo la disminución de los efectos negativos de la recesión mundial sobre la balanza de pagos. Junto a ello se intensifican las medidas que incrementan la autonomía del sector privado respecto del Estado, a fin de fortalecer la consolidación del modelo de economía abierta. Uno de los procesos estructurales más significativos de este período está constituido por el proceso de traspaso de las empresas estatales hacia el sector privado en un contexto de subvaluación de los activos de dichas empresas, que encontraba su origen en la recesión interna. A ello se agrega la venta de las acciones bancarias que formaban parte de la propiedad del Estado y que habían sido adquiridas por la Corporación de Fomento de la Producción durante el gobierno de la Unidad Popular.²¹

Por otra parte, la política financiera pasa a cumplir el papel de transferencia y traspaso hacia el sector privado de un poder creciente respecto de la captación del ahorro interno y de la asignación del crédito. Las políticas de liberalización o de control de los intermediarios financieros tenían como objetivo la transformación del mercado de capitales en un instrumento para transferir los excedentes hacia los sectores más dinámicos de la economía. De ahí que las financieras operaran en un primer momento como punto de centralización de los procesos de acumulación de capital en beneficio de los nuevos grupos económicos. En el ámbito del comercio exterior, se acentuó la apertura externa modificándose la meta máxima de reducción arancelaria desde un 60% a un 35%.

Los resultados de esta política se hicieron rápidamente evidentes: caída de la producción industrial en un 35% durante el

CUADRO XXVI

Chile: Algunos indicadores de la evolución del tamaño del
Estado, 1970, 1974-79^a

	1970	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Gasto público (% del PGB) <u>a/</u>	40.6	39.6	38.8	30.7	32.4	31.8	30.3
Inversión pública (% del PGB) <u>a/</u>	8.8	10.0	6.9	5.1	4.9	3.9	3.9
Empleo público (% del PEA)	9.3	11.3	10.3	10.0	9.3	8.9	8.8 <u>b/</u>

a La información excluye Defensa, la policía civil, las empresas filiales de CORFO y los asentamientos del sector agrícola, por no encontrarse ésta disponible. Estas cifras muestran en consecuencia la cota mínima de significación del aparato económico estatal.

a/ Excluye el Servicio de la Deuda Pública.

b/ Estimación.

PGB = Producto Geográfico Bruto

PEA = Población Económicamente Activa

FUENTE: Vergara, Pilar, *"Autoritarismo y cambios estructurales en Chile"*, FLACSO, Santiago de Chile, 1981.

tercer trimestre de 1975 con referencia al año anterior y un aumento equivalente al 19,8% de desempleo.²²

Es evidente que a partir de este segundo período la incoherencia, en términos del modelo económico de la fase precedente, que se ubicaba como hemos dicho en un esquema de profundización del capitalismo a partir de la intensificación de la industrialización con apertura externa y reducción drástica de la influencia del Estado, ha sido sustituida por un modelo puro de libre cambio. A partir de la puesta en práctica de esta nueva estrategia, que se presenta tecnocráticamente como programa de estabilización antiinflacionario radical, cobran importancia y poder en el interior del equipo económico del gobierno los sectores más ortodoxos de la tecnocracia estatal inspirados en el modelo monetarista de Friedman. En este nuevo esquema, la apertura radical y acelerada de la economía al comercio

mundial era conceptualizada como un mecanismo que mejoraría ostensiblemente la eficiencia en la asignación de los recursos. Ellos deberían orientarse hacia los sectores en los cuales se contaba con mejores ventajas comparativas. Por otra parte, es evidente que las medidas adoptadas a partir de abril de 1975 y la puesta en práctica del programa de tratamiento de shock pone término a las indefiniciones y vacilaciones respecto de la dirección definitiva de la política económica a largo plazo, evidenciando el triunfo definitivo del monetarismo ortodoxo. Ello supone, para el período, una reducción de los sectores beneficiados con el modelo económico y que habían concurrido con su apoyo a la dictadura militar, que afecta particularmente a los sectores sociales que existían y se habían desarrollado al amparo del proteccionismo económico vigente durante cuarenta años en la economía chilena. El nuevo modelo privilegiará a los sectores de la burguesía financiera vinculada al capital financiero internacional o a los sectores vinculados a las actividades de exportación. Ambos deberían constituirse en los sectores sociales llamados a sustituir la tarea del Estado desarrollista precedente, naturalmente, en el contexto de un proyecto desindustrializador de la economía. De esta forma, la recesión provocada por la política de shock también estaba destinada a fortalecer el poder económico y la capacidad de crecimiento de dichos sectores.

El triunfo del monetarismo ortodoxo supone el establecimiento del nuevo modelo y esquema de desarrollo que hemos caracterizado como primario exportador altamente diversificado y que se concentra en la exportación de materias primas o de productos industriales de bajo valor agregado. Lo que esto supone la necesaria transformación de los modelos de desarrollo precedente y la eliminación del papel del Estado como regulador de las desigualdades sociales. A ello debe agregarse la generalización y extensión del capitalismo a sectores sociales en los cuales había anteriormente alcanzados bajos niveles de intensificación (sector agrario). Es en esta segunda fase cuando se clarifica el hecho de que la dictadura militar no tiene como simple función la restauración de los esquemas societales y de desarrollo precedentes, sino que aspira a un pro-

ceso global de reestructuración del funcionamiento de la economía y la sociedad. El tránsito del principio de restauración al de reestructuración no fue tarea fácil, sobre todo si se considera que vastos sectores del aparato militar habían sido educados en el principio de que la seguridad nacional está directamente vinculada al desarrollo económico y este último era conceptualizado como equivalente a la industrialización.

En esta fase, la situación laboral y su gestión por parte del gobierno es definida por el intento de reemplazar la normativa y las estructuras que habían regido las relaciones en el campo laboral. Dicho intento buscará adecuar la existencia del movimiento sindical al autoritarismo político y al modelo económico monetarista ultraliberal. En el año 1974, la dictadura militar definía y justificaba la represión abierta y radical en los siguientes términos: "lo que se ha pretendido es restablecer el orden económico y social y suprimir los vicios políticos que habían destruido a las organizaciones creadas para la defensa de los trabajadores".²³ El primer hecho efectivo de este intento de adecuación es el decreto 625 del 18 de noviembre de 1973, que autoriza la creación de una comisión especial destinada a elaborar lo que se denominó como Estatuto Social de la Empresa. Los proyectos a cuyo estudio se abocó dicha comisión hacían referencia al proyecto de decreto ley sobre empresas de trabajadores de la administración autónoma, disposiciones para un sistema de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Ello debería dar como resultado la formulación de un estatuto nacional de participación de los trabajadores en la empresa. La necesidad de la constitución de dicha comisión era formuladas por el general Leigh, miembro de la Junta de Gobierno, en términos del que expresa "una exigencia imperativa conjugar el interés de los trabajadores con condiciones que incentiven la creación de recursos".²⁴ El contraste de dicha declaración oficial con la represión desatada resultaba evidentemente trágico.

A dichas disposiciones gubernamentales se suma el anuncio formulado en enero de 1975 en el sentido de elaborar un nuevo código

CUADRO XXVII

Chile: Indicadores económicos y sociales.

PIB per cápita	Saldo en cuenta corriente	Coficiente del servicio de la deuda sobre expon- ciones	Tasa de inver- sión	Empleo total (%)	Ocupados en la población de 12 años y más	Tasas de desocupación Sin PEM	Con PEM	Sueldos y sala- rios reales	Sueldos y sala- rios reales como % del ingreso nacional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1970	100.0	- 159.9	33.5	15.0	100.0	42.9	6.1	100.0	44.3
1974	102.4	- 254.3	18.6	13.00	104.6	40.4	9.2	65.1	34.6
1975	89.3	- 532.3	40.0	10.7	99.0	37.4	13.4	62.9	34.7
1976	91.4	143.5	44.2	9.8	94.9	35.0	16.3	64.8	34.7
1977	97.6	- 531.0	49.2	10.0	99.3	35.8	14.0	71.5	-
1978	101.7	- 952.8	46.4	11.3	102.7	36.2	13.9	76.0	-
1979	107.4	- 911.8	42.3	12.0	103.5	36.3	13.8	82.3	-
1980	11.6	-1100.6	38.7	14.0	109.3		10.6	89.2	

Consumo del 20% más pobre	Pensión pro- medio	Vivienda construc- ción: pro- medio por persona	Matrícula en población de 10-20 años	Matrícula en primer año básico en el estrato de pop. correspondiente	Camas de de hospi- tal por persona	Servicios de salud por persona
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1970	7.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1974	44.5	59.3	85.3	113.1	94.4	89.3
1975		52.0	49.8	-	91.7	84.5
1976		56.4	38.4	-	88.9	90.3
1977		60.9	42.0	116.3	86.1	91.3
1978	51.0	67.0	44.2	115.2	83.3	94.2
1979		75.9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

- = no hay otros datos

n.d. = datos no disponibles

FUENTE: Alejandro Foxley, "Experimentos neoliberales en América Latina", Ciepplan, Santiago de Chile, 1981.

del Trabajo, cuyo anteproyecto fue dado a la publicidad a fin de recoger 'observaciones necesarias'. En marzo del mismo año se crea el Programa de Empleo Mínimo. Constituía un miserable subsidio de

CUADRO XXVIII

Chile: Subsidio al Programa de Empleo Mínimo y afiliación, 1975-1980.

Año	Mes	Monto Nominal \$	Índice real Subsidio (1)	Número	Desocupación Gran Santiago% (2)
				Afiliados G. Santiago	
1975	Marzo	86,20	100	19.041	13,3
	Junio	150,00	103,73	41.690	16,6
	Sept.	190,00	101,05	97.460	16,1
	Dic.	243,20	102,99	126.411	18,7
1976	Marzo	321,00	98,48	131.082	19,8
	Junio	505,00	112,19	157.312	18,0
	Sept.	606,00	108,95	178.139	15,7
	Dic.	660,00	101,87	187.702	13,6
1977	Marzo	700,00	90,85	188.825	13,9
	Junio	700,00	80,89	187.134	13,0
	Sept.	700,00	72,58	189.993	12,8
	Dic.	826,00	77,99	173.238	13,2
1978	Marzo	826,00	72,66	162.191	14,7
	Junio	826,00	67,98	148.027	12,8
	Sept.	826,00	62,70	135.233	13,7
	Dic.	925,00	67,05	117.643	14,8
1979	Marzo	925,00	62,81	121.539	16,5
	Junio	925,00	58,27	128.450	12,5
	Sept.	1.030,00	57,57	138.483	12,5

(1) Deflactado por el IPC.

(2) Encuestas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

FUENTE: Barrera, Manuel, *"Política laboral y movimiento sindical durante el régimen militar"*, Latin American Program, The Wilson Center, Washington, 1980.

paro, para beneficiarse del cual se exigía el cumplimiento pleno de una jornada de trabajo, a fin de desarrollar actividades propuestas por las Municipalidades. El conjunto de estas medidas se complementaron con el anteproyecto del Estatuto Fundamental de Principios y Bases del Sistema de Seguridad Social de noviembre del mismo año, con la ley de Cooperativas y el anuncio del Esta-

tuto de Capacitación y Empleo. Sin embargo, dichas medidas fracasaron y algunas de ellas simplemente no se materializaron, terminando por favorecer la lógica puramente represiva. Esta había sido formulada por el dictador en los términos siguientes: "Para materializar los objetivos del gobierno se requiere de un fuerte poder social. Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas tienen las agrupaciones gremiales sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. Quedará, por tanto, expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta, en la generación y actividad de las directivas gremiales cualquiera sea su naturaleza. La autoridad sindical, para que constituya un auténtico vehículo de participación social y sea genuinamente portadora del pensamiento del pueblo organizado, debe estar liberada integralmente de la política partidista".²⁵

En este contexto de acentuación de la política represiva se verifica un repliegue generalizado del movimiento sindical, como resultado de la persecución y desarticulación de sus organizaciones. Los sindicalistas vinculados a los partidos de la izquierda intentan, sin mayor éxito, constituir una resistencia sindical a la dictadura. Sin embargo, tanto el repliegue como los intentos de organización de una resistencia sindical son elementos típicos de la primera fase. Probablemente lo más significativo de esta fase sea la disminución del apoyo que el gobierno había encontrado en el sindicalismo demócrata cristiano, lo que es particularmente relevante si se considera que los sindicalistas de dicho partido habían hecho esfuerzos considerables por favorecer una imagen positiva del gobierno, particularmente frente a las organizaciones internacionales. Su esfuerzo se fundamentaba también en el intento por constituirse en un interlocutor válido frente a la dictadura, favoreciendo la eliminación del sindicalismo de izquierda que había dominado históricamente desde su constitución la Central Unica de Trabajadores. Manuel Rodríguez y Ernesto Vogel son sin duda los sindicalistas demócrata-cristianos más

representativos en su apoyo a la dictadura militar. Ambos participaron activamente en defensa del gobierno en la 59 Conferencia general de la Organización General del Trabajo, denunciando la 'politización' de la Central Unica de Trabajadores durante el período de la Unidad Popular. Ernesto Vogel sostenía respecto de su experiencia en la citada Conferencia: "los sindicalistas europeos sólo ven la situación chilena en blanco y negro producto de la propaganda marxista. Se niegan a conocer los detalles que originaron el pronunciamiento militar. Todos los esfuerzos están dirigidos a lograr el restablecimiento de la plena libertad sindical".²⁶

Sin duda que la puesta en práctica del modelo monetarista radical y sus consecuencias económicas durante esta fase, sumada al fracaso de la política laboral del gobierno, fortaleció el deterioro del apoyo sindical demócrata cristiano a éste y creó además condiciones favorables para la reactivación sindical, sobre todo a partir del inicio de 1976. Dicha reactivación sindical conducirá a la formalización de lo que será designado como 'los grupos sindicales'. La reacción del gobierno frente al aumento de la actividad sindical, además de la ejecución de políticas represivas de todo tipo, estuvo particularmente constituida por una estrategia de control y de paralelismo sindical. Los intentos de control del sindicalismo disidente se ejercieron particularmente por medio de la Secretaría General de los Gremios, que se crea en marzo de 1976 a fin de ejecutar la política oficialista. A dicha función se suman el Frente de Unidad Sindical organizado el mismo año y la Escuela Nacional Sindical, establecida posteriormente (abril de 1977). En este período el gobierno se declara impermeable a la opinión y solicitudes del movimiento sindical.

La tercera fase de la implementación del modelo de reestructuración se inicia con la revaluación monetaria concretada en junio de 1976. La certificación de que los resultados del tratamiento de shock destinado al saneamiento de los desequilibrios macroeconómicos fue insuficiente es uno de los elementos que caracteriza de manera inicial esta fase. La caída del producto en una cifra

cercana al 15% y un índice inflacionario para el primer semestre que equivalía al 60%, crean las condiciones necesarias para la especificación de demandas empresariales.²⁷ Estas se dirigen a la reducción de los costos de los créditos y a la necesidad de reactivación de la economía. Ello marca una diferencia substancial con la incondicionalidad demostrada por dichos grupos respecto de la política de estabilización drástica puesta en práctica en la fase anterior. Sin embargo, lo que se hace evidente en esta tercera fase es el intento de intensificación de los procesos de la fase precedente y el intento por completar las reformas necesarias para garantizar la conformación definitiva de lo que se designó como 'nueva institucionalidad económica'. Dentro de tales reformas se destacan la reestructuración de la educación y la eliminación de las disposiciones legales que garantizaban la estabilidad del empleo y dificultaban la reducción de los costos de la mano de obra. Al mismo tiempo, en este período se empieza a poner de manifiesto la consolidación irreversible del modelo adop-

CUADRO XXIX

Chile: Tasas de interés real cobradas por bancos : 1975-1978.
(porcentajes anuales calculados a partir de la tasa de interés mensual acumulada)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
Bancos	15,0	51,3	39,1	35,1

FUENTE: Banco Central. Las tasas de interés nominal fueron deflactadas por el IPC corregido por CIEPLAN.

tado y que se afianza a partir del retiro de Chile del Pacto Andino y por las exigencias de identificar el apoyo al gobierno con la aceptación sin limitaciones de la política económica del monetarismo criollo.

En respuesta a las inquietudes de los sectores empresariales, el gobierno plantea la necesidad de un 'giro decisivo' en la política económica, pero dicho giro no incluía la transformación del problema de la reactivación económica en su objetivo central. Es-

taba constituido en cambio por el intento de controlar y manejar el proceso inflacionario de acuerdo a la nueva situación planteada por la balanza de pagos. Esta al mantener un superávit, se constituía en un foco de presión inflacionaria y obligaba a aumentar las emisiones a fin de posibilitar la adquisición de divisas. A fin de resolver dicho problema se adoptó una política destinada a revaluar el dólar y a fijar el valor del tipo de cambio (del peso) en referencia a la tasa de inflación del mes precedente. Con ello se intentaba reducir los precios de los productos nacionales disminuyendo los costos de los componentes importados y transformar a los productos importados en el elemento esencial de regulación de los precios internos y evitar la existencia de una "práctica monopolista de la economía". Pero también con dicha política se aspiraba a eliminar la expectativa inflacionaria del sector privado. Es evidente que en la estrategia antiinflacionaria de esta fase, el acento se desplaza desde el énfasis puesto en la contracción de la demanda hacia la quiebra de las expectativas inflacionarias y a la contención de las presiones de los costos.

En el nivel de las transformaciones de largo plazo se llevan a cabo reformas institucionales de gran significación. La primera de ellas hace referencia a las modificaciones a las normas de ingresos de la inversión extranjera y cuyas dificultades provenían de las vinculaciones de Chile con el Pacto Andino que hacían difícil las rebajas arancelarias consideradas como óptimas por los monetaristas chilenos. El mayor problema estaba constituido por el Arancel Externo Común y las restricciones al capital externo adoptado por los países participantes del Pacto. En virtud de que los restantes países integrantes de dicho acuerdo se negaron a aceptar las proposiciones de modificación arancelaria solicitada por la dictadura chilena, el gobierno optó por retirarse oficialmente el 30 de octubre de 1976. Dicho retiro precipitó el ritmo de desgravación arancelaria, hasta llegar a una tasa uniforme equivalente al 10% en 1979. La segunda reforma institucional estuvo constituida por la aprobación, a inicios de 1977, de un Nuevo Estatuto para la Inversión Extranjera. A través de ella se buscaba otorgar facilidades sin límites al ingreso de capital exterior

CUADRO XXX

Chile: Índice de precios al consumidor. Variación
anual 1970-1981 (diciembre a diciembre, en porcentaje)

	<u>Cifras Oficiales</u>	<u>Cifras corregidas</u>
1970	34,9	34,9
1971	22,1	22,1
1972	163,4	163,4
1973	508,1	911,5
1974	375,9	369,2
1975	340,7	343,3
1976	174,3	198,0
1977	63,5	84,2
1978	30,3	37,2
1979	38,9	38,9
1980	31,2	31,2
1981	9,5	9,5

FUENTE: Humberto Vega y Jaime Ruiz-Tagle, *"Capitalismo autoritario y desarrollo económico en Chile: 1973-1981"*, Santiago de Chile, 1982.

y a la repatriación de utilidades y capitales. Es preciso recordar que las disposiciones del Pacto Andino sólo autorizaban el 4% de repatriación por concepto de utilidades; en cambio la dictadura chilena, en virtud del Nuevo Estatuto, autoriza la repatriación total de las utilidades y en un período de tres años el derecho a la repatriación total del capital invertido. A ello se suman las garantías tributarias fijadas por un período de diez años y la liberación impositiva absoluta por enajenación de los activos.

La tercera reforma institucional hacía referencia a la apertura financiera externa. Se fundamenta en la reestructuración del mercado financiero, la profundización de las rebajas arancelarias y el cambio de las normas reguladoras del endeudamiento externo

de la banca nacional. El problema central enfrentado por el área financiera y la necesidad de reestructurar el mercado de capitales se deriva de la quiebra de instituciones financieras formales e informales verificada a fines de 1976. Dicha crisis, que en el período fue interpretada por muchos como el inicio del fin del modelo monetarista, fue resuelta con un conjunto de medidas que hacían referencia a la ampliación de las exigencias de monto de capital para constituir sociedades financieras, suprimiendo el funcionamiento de sociedades financieras informales y limitando su capacidad de acción en el mercado de capitales.

La cuarta y última fase de ejecución del modelo de reestructuración se inicia en junio de 1979. En esta fase ya se han consolidado las reducciones arancelarias y su peso sobre las importaciones no supera, con excepción de los automóviles, el 10%. La economía en general verifica índices de recuperación del largo período recesivo, acompañada de una reducción drástica del déficit fiscal y un crecimiento constante de sus reservas internacionales. En junio de 1979 se verifica una devaluación de la tasa de cambio que equivale al 5,7%. Se verifica, además, la consolidación general de un 'modelo monetarista de economía abierta' y en cuyo contexto se supone que el sistema de precios verificado en el comercio internacional regulará en forma automática la inflación interna y esta última tendería a equilibrarse e igualarse con los índices inflacionarios internacionales. Se supone además que el tratamiento monetarista de la balanza de pagos garantizará el funcionamiento de mecanismos automáticos de ajustes de la economía. Tanto la fijación del tipo de cambio como el saneamiento del déficit fiscal favorecen una reducción significativa de los índices inflacionarios de la economía que alcanza a un 9,5% en 1981.²⁸ Sin embargo, los resultados catastróficos generados en la economía como resultado de la puesta en práctica del modelo dominan ostensiblemente sobre estos éxitos parciales, que han sido ya explicitados en el punto 2 del presente capítulo.²⁹

Respecto de la situación del movimiento sindical en la fase tercera y cuarta, se concreta el proceso de reactivación que se

venía verificando desde fines de 1975, como resultado de la radicalización de la política económica monetarista particularmente de la fase segunda. Dicha radicalización, como lo indicamos en páginas anteriores, dió como resultado la constitución de lo que se denominó los "grupos sindicales". Es evidente además, que el extremismo económico puesto en práctica por el gobierno no ha facilitado en el curso de las fases tres y cuatro la concreción de tendencias unitarias dentro del sector sindical y al mismo tiempo se bloquean los intentos de reconstrucción de la Central Unica de Trabajadores. Entre los grupos sindicales constituidos es necesario destacar la presencia de los siguientes: el Grupo de los Diez, la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de empleados Particulares de Chile (CEPCH), la Unión de Trabajadores de Chile (UNTRACH) y el Comando Nacional de Trabajadores. Los cuatro primeros son abiertamente opositores a la política puesta en práctica por el Estado terrorista, el quinto, con Bernardino Castillo designado como presidente por el gobierno, se ubicó en una posición de independencia crítica frente a las políticas laborales. El sexto, que es el de menor relevancia, dirigido por el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Municipales René Sotolichio, es abiertamente pro-gubernamental. Como también lo hemos advertido en las páginas anteriores, la política del gobierno frente al proceso de aumento de la actividad sindical se concreta en una estrategia de paralelismo y control sindical. Dicho proceso culminará en octubre de 1978, a partir de la promulgación de tres decretos emanados desde el ministerio del Interior: el 2345 que autoriza a dicho ministerio para despedir sin sumario previo administrativo a los funcionarios de la administración pública, el decreto 2346 que declara la disolución por asociación ilícita de siete Federaciones y sindicatos y, el decreto 2347 que declara ilegales las actividades de organizaciones y personas que, sin personalidad jurídica, asuman la representación de los trabajadores frente a organismos privados, públicos y/o autoridades de gobierno. La confiscación de bienes, clausuras y allanamientos de locales sindicales se ejecutan indiscriminadamente al amparo del decreto 2346. El 27 de octubre del mismo año el ministerio de Trabajo anuncia la realización de

elecciones sindicales en el sector privado para el 31 del mismo mes, en virtud de la promulgación de un nuevo decreto: el 2376. En él se prohíbe la publicidad propagandística, la participación de los dirigentes en ejercicio, la de las personas que tuvieran antecedentes políticos en los últimos diez años a contar de esa fecha y las que resultaran elegidas deberían 'jurar hidalgamente' que en el futuro no participarían en política. Es evidente que este último decreto aspira a constituirse en una respuesta institucional a la reactivación sindical abierta desde fines de 1975. Sin embargo la propia dictadura le daba publicidad como si se tratara de una medida de apertura del régimen que era posible gracias "al éxito con que el gobierno y el pueblo de Chile han superado los peores efectos de la descomposición social y la ruina heredada de los regímenes anteriores".³⁰ Dicho decreto debería, además, ser considerado como un "nuevo estilo de la institucionalidad laboral".

El conjunto de estos decretos representan además un intento de limpieza sindical previa, para avanzar hacia un proceso de ajuste general de las relaciones laborales en función de la consolidación general del modelo de reestructuración puesto en práctica. Dicho ajuste de la situación laboral y sindical culminará en 1979 con la promulgación por parte del ministro de Trabajo José Piñera de lo que se denominó como "Plan Laboral". Frente a la violencia y represión sindical que significaba la puesta en aplicación de las medidas laborales de octubre, el movimiento sindical buscó el apoyo de las organizaciones sindicales internacionales. Como resultado de ello, la reunión de Lima en el mes de noviembre de la Organización Internacional del Trabajo y de la AFL-CIO, decretaron el boycott al transporte de productos desde y hacia Chile en protesta por la violación de los derechos sindicales. Exigiendo además el restablecimiento de las libertades sindicales y de la negociación colectiva. Ello representaba una amenaza evidente para el funcionamiento del modelo de economía abierta puesto en práctica por los monetaristas nacionales. De ahí que el gobierno se esforzara por intentar negociar con dichas organizaciones internacionales a fin de evitar la aplicación del boycott. Como re-

sultado de ello el gobierno obtiene un plazo prudente para ejecutar un plan de normalización de la situación laboral. A fin de concretar dicho plan se designa el 26 de noviembre de 1978 a José Piñera como ministro de Trabajo, que anuncia la formulación de la institucionalización de las relaciones laborales en un plazo breve. Dicho plan incluiría la reapertura de la negociación colectiva y la normativa de las actividades sindicales. En virtud de ello y como resultado de la gestión ante la AFL-CIO de dirigentes sindicales demócrata cristianos, particularmente de Eduardo Ríos y Ernesto Vogel, antiguos entusiastas del gobierno militar, se logran suspender las medidas de boycot. En enero de 1979, el nuevo ministro del Trabajo informa que el plan laboral se concretaría antes del 30 de junio de 1979. En febrero de 1980 se establecen los decretos leyes 2.554 que restablece el derecho de reunión sindical sin comunicación policial previa, el 2.545 que establece la normativa de las cotizaciones en las organizaciones sindicales y el 2.548 destinado a modificar la normativa existente referida al sistema de pensiones, y aumenta la edad de jubilación a los 65 años para los hombres y los 60 para las mujeres.

El Plan Laboral se constituye a partir de la promulgación de cinco decretos que hacen referencia a los subsidios de contratación de la mano de obra, la normativa de organizaciones sindicales, el control de monopolios y la negociación colectiva.³¹ Las normas referidas a la organización sindical aparecen contenidas en el decreto 2.756. En él se define la función sindical como de carácter esencialmente mutualista y de representación de los asociados. El derecho de negociación colectiva sólo le es otorgado a los sindicatos de empresa. Además es posible distinguir la existencia de tres tipos de organizaciones laborales: sindicatos, federaciones y confederaciones. Dentro de los sindicatos la ley establece la existencia de sindicatos de empresa, interempresa, sindicatos de trabajadores independientes y sindicato de los trabajadores de la construcción. A través del decreto ley nro. 2758 de julio de 1979, se formalizan las normas de la negociación colectiva. En él se especifica la imposibilidad de declaración de huelga para los funcionarios estatales, municipales y de empresas

de utilidad pública. Los principios reguladores de la negociación colectiva deben regirse por la idea de responsabilidad, integración entre patronos y trabajadores. Es conceptualizada como un procedimiento destinado a establecer remuneraciones y condiciones de trabajo general en un período determinado. En dicho decreto se establece además que entre el 16 de agosto del mismo año y el 21 de mayo de 1980, se podrán gestionar negociaciones de contrato colectivo, evitando explícitamente la negociación simultánea de trabajadores de un mismo sector o ramas de empresa a fin de debilitar la posición negociadora de los trabajadores. En la situación de huelga y durante su desarrollo se declara la suspensión del contrato individual de trabajo y un 10% de los trabajadores puede decidir favorablemente proposiciones emanadas del empleador y, cualquiera de ellos puede retirarse de la negociación global para negociar individualmente con el patrón. Si la huelga supera los sesenta días, se supondrá que los trabajadores que han participado en ella han renunciado voluntariamente a sus puestos de trabajo y durante ella el patrono tiene autorización legal para contratar los trabajadores extraordinarios que estime necesarios. Todas las negociaciones y acuerdos contenidos en los contratos colectivos referidos a beneficios en dinero, salarios y condiciones de trabajo deberán tener una duración superior a un año.

Es evidente que el derecho de huelga en la presente legislación establecida por el Estado autoritario es considerado como un mecanismo de regulación del mercado de trabajo, más que como un instrumento propio de presión de los trabajadores. Si el patrono ve rechazada por los trabajadores sus ofertas salariales y no consigue empleados se verá obligado a mejorarla; por el contrario, si a partir de dicha oferta existen en el mercado de trabajo personas dispuestas a asumir el empleo por el índice salarial ofrecido, los trabajadores contratados y participantes de la negociación colectiva deberán disminuir el monto de sus exigencias. El resultado de dicho principio es previsible en una economía que ha operado casi permanentemente con un índice de desempleo real que oscila entre el 17 y el 30%. La respuesta oficial del gobierno frente a esta situación es que el nuevo mecanismo de negocia-

ción colectiva garantiza que los aumentos salariales desmedidos no generen inflación ni se traduzcan en desequilibrios que desestimen la inversión. Esta nueva normativa laboral, en la óptica del Estado autoritario, buscaba superar los vicios tradicionales del sindicalismo chileno. En opinión del ministro del Trabajo, José Piñera, "para los dirigentes sindicales resultaba fundamental contar con el favor del político para promover sus intereses, todo lo cual favoreció el control partidista y el predominio del marxismo entre ellos".³² A través de la consideración detallada del mismo discurso es posible explicitar las coordenadas ideológicas que animaban los principios teóricos y normativos de dicho Plan. En primer lugar, se reconocía el hecho de que él se fundamentaba necesariamente en las formulaciones del modelo económico. En segundo lugar era posible reconocer que los trabajadores se veían proporcionalmente 'favorecidos' en relación directa a la disminución de su poder de presión y organización. El poder de presión de las organizaciones sindicales y de los trabajadores en general era definido como su capacidad para producir y que el empresario está dispuesto a retribuir remunerativamente. La intervención reguladora de los desequilibrios sociales cumplida por el Estado debería ser conceptualizada como una de las causas esenciales del socialismo estatizante, del desempleo y del estancamiento económico. De ahí que no deba otorgársele a los problemas laborales el carácter de una cuestión nacional. En tercer lugar, el esquema puesto en práctica por el plan Laboral aseguraba la erradicación definitiva de la lucha de clases que había regulado las relaciones entre capital y salario. Aseguraba también la eliminación de la politización laboral, fuente estimable del primer fenómeno y que otorgaba un carácter necesariamente conflictivo a las negociaciones laborales, creando condiciones para las aspiraciones de expropiación del capital por parte de los trabajadores. En cuarto lugar, el carácter competitivo del mundo empresarial debería constituir el elemento fundamental de unidad entre trabajadores y empresarios, en donde el problema del reparto de los aumentos de productividad debería ser considerado como un problema técnico del desarrollo de la economía. Al existir garantías sobre la libertad de trabajo a partir de la eliminación del 'feudalismo económico

inspirado por los monopolios sindicales", se obtendría una disminución significativa del desempleo. Finalmente, el Plan Laboral estaría en condiciones de establecer un principio de equilibrio entre la 'libertad' y los 'derechos sociales', que ha sido históricamente desarticulado por el ideologismo socialista de los trabajadores y sus agentes políticos. El monopolio privado ejercido históricamente por los sindicatos, es una estrategia esencialmente antidemocrática, en la medida en que electoralmente siempre se afilió a políticas de pleno empleo, provocando con ello el abandono de los mecanismos del mercado como asignadores de los recursos del sistema productivo en beneficio de los intereses mejor representados.

Es preciso advertir que la formulación del Plan Laboral se inscribe en un intento global de transformaciones de las relaciones sociales que imperaban en la sociedad chilena. Dicho intento es formulado por los ideólogos y publicistas del Estado terrorista como "Modernizaciones" y se encuentran inspiradas en el supuesto de que la sociedad civil debe ser liberada del intervencionismo estatal que fundamenta las distorsiones en el funcionamiento del mercado. Es evidente que el modelo de reestructuración dependiente del capitalismo chileno puesto en práctica por la dictadura ha seguido la secuencia lógica de la reestructuración económica, la reorganización del funcionamiento de las relaciones sociales y la institucionalización política. El principio de la modernización se concreta en las modificaciones y transformaciones llevadas a cabo bajo el criterio de la privatización, en el sector de la salud, la previsión social, la educación, el poder judicial y las reformas administrativas.³³

4.4. Régimen político , transformación del Estado y proceso de institucionalización de la dictadura.

Antes de iniciar el análisis del régimen político que equivale a una descripción comprensiva del sistema de relaciones entre Estado y sociedad civil y del esfuerzo de institucionalización de la dictadura, que se expresa en el intento de transformar

un Estado autoritario no normativo en una forma de dictadura militar que apele a la construcción de su propia legitimidad, es indispensable explicar o intentar explicar las razones que pueden justificar la aceptación por parte de las Fuerzas Armadas del esquema monetarista de reestructuración y la política de tratamiento de shock iniciada en 1975. Es evidente que a partir de esta política se crean las condiciones estructurales a largo plazo que facilitarían la sustitución del patrón de desarrollo precedente por lo que se ha designado como patrón de desarrollo primario exportador diversificado. El intento por formalizar dicha explicitación cobra aún más relevancia si se considera el contenido del paradigma tradicional de las fuerzas armadas referidos a la cuestión de la Seguridad Nacional. Es preciso recordar que en él existía una relación estrecha entre conceptos como defensa nacional y desarrollo económico, en donde la presencia del sistema democrático desempeñaba un rol cohesionador de la sociedad civil. En esta perspectiva, la seguridad nacional debía ser articulada con el desarrollo y este último era necesariamente conceptualizado en términos de industrialización. Es evidente además que el anticomunismo desempeñaba un papel esencial en la ideología militar, pero no aseguraba la coexistencia entre ella y las ideologías ultraliberales de economía abierta como la postulada por el equipo económico del gobierno militar a partir de 1975.

La respuesta a dichas interrogantes parecen encontrarse en la naturaleza ideológica del esquema económico propuesto y en la exacerbación de la ideología anticomunista, resultado de la lucha política del período 1970-1973. La primera dimensión de la ideología económica llevada a la práctica por el equipo monetarista del gobierno hace referencia a la presentación de ella como la única alternativa posible y eficiente frente al estancamiento. Es por tanto, necesariamente, excluyente de cualquier otro tipo de razonamiento económico. Se refuerza además la coherencia interna del modelo económico a que ella da curso, y de la cual supuestamente carecerían las alternativas restantes, gestada en el seno de la oposición política. La segunda dimensión se vincula con la 'naturaleza e inspiración científica' del esquema propuesto, lo que

pone al descubierto la naturaleza represiva de la ideología económica. Cuando se recurre a la naturaleza científica de la ejecución del modelo económico se refuerza la neutralidad social de ella, fundamento de su legitimización, y se garantiza simultáneamente el rechazo de cualquier forma de reflexión sobre la situación económica que se fundamente en el sentido común de la sociedad civil. Todos los que rechazan el modelo económico deben ser considerados como entes necesariamente anticientíficos, como fueron oficialmente calificados los opositores a dicha política. Sólo son aceptados en la discusión económica aquellos que están en posesión de la 'verdad económica'. Se argumenta además que el esquema propuesto asegura la superación substancial y no demagógica de la dependencia económica. El mecanismo de dicha superación estaría representado por la expansión constante de las exportaciones que garantizaría la existencia de recursos internos y por el fortalecimiento del prestigio económico internacional del país. La inserción de la economía en el mercado capitalista mundial y los mecanismos que rigen dichas relaciones deben ser considerados como una situación necesariamente dada y exenta de valorizaciones 'políticas' (por ejemplo, desarrollo, subdesarrollo, etc.). La tercera referencia de la ideología económica se vincula a la afirmación frecuente de que sólo la síntesis entre libertad económica y libertad política puede asegurar la existencia futura de una democracia estable. La privatización de la economía, la propiedad privada y la lógica del mercado constituirían los soportes materiales de ella. Por tanto, la consolidación del modelo económico propuesto constituye la vía exclusiva a la existencia de un sistema democrático moderno y su obtención está vinculada a un conjunto de sacrificios económicos (disminución de salarios, quiebra de las industrias ligadas al mercado interno, concentración de ingresos, disminución de los gastos sociales del Estado, desempleo, represión y asesinato político, etc.) que son necesarios de ser asumidos por la sociedad en su conjunto, si se desea aspirar a un "futuro inédito de prosperidad". El último aspecto de referencia de la ideología económica que sustenta el modelo monetarista propuesto se vincula al supuesto de que él constituye una alternativa irreversible frente a los peligros enfren-

tados por la sociedad nacional en el pasado. Es evidente que dicha afirmación está referida de manera especial al período 1970-73, pero no excluye la situación representada por los gobiernos precedentes. Sin duda, la política económica puesta en práctica es vista como una resolución estructural en contra del advenimiento del 'peligro comunista'; en la medida en que el patrón de desarrollo se oriente hacia un modelo de economía exportadora se garantiza la contracción del desarrollo industrial y la presencia del proletariado como grupo esencial de su funcionamiento, y la erradicación estructural de él permite eliminar la presencia material del peligro citado.

Es preciso recordar que las dimensiones ideológicas del modelo económico sustentado se fundamentaban en la óptica más amplia de un régimen político que se define a partir del concepto de 'guerra interna'. Probablemente el razonamiento más representativo sea el contenido en un fallo dictado por el Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile en el año 1974: "La línea que marca la diferencia entre el amigo y el enemigo pasa a través del corazón de la nación, a través de la ciudad, lugar de trabajo, de la propia familia e incluso a través de los órganos de información y de las instituciones públicas, políticas, culturales y religiosas... En último análisis es más bien una línea ideológica que debe ser determinada para poder descubrir al oponente en contra del cual se debe usar la acción militar".³⁴

Por otra parte, las consecuencias de la aplicación de la política económica, particularmente la de tratamiento intensivo de la economía a partir de 1975, genera condiciones políticas favorables a la consolidación del 'mando institucional' en el interior de las fuerzas armadas. Dicha consolidación permitió superar la inestabilidad política que se verificaba en ellas como resultado de la presencia en su interior de una multiplicidad de grupos internos, de gran diversidad ideológica o doctrinaria. Es importante considerarlo, si se recuerda que múltiples investigaciones referidas a la naturaleza del golpe militar de 1973 coinciden en señalar la debilidad institucional del mismo. De ahí que, de acuer-

do a como lo han sostenido algunos investigadores, sea posible afirmar que el golpe militar adquiere carácter institucional sólo un año después. Dicha institucionalización puso término, además, a la disputa de la dirección de la insurrección militar por parte de los diferentes sectores que estimularon o apoyaron la deliberación política en el interior de las fuerzas armadas. El término de dichas disputas a que dió curso la institucionalización de la dirección militar del Estado se fundamentó en la supresión de los mecanismos de deliberación política y en la recuperación de la 'verticalidad del mando'. Todo esto fue además, jurídicamente consolidado a través del "Estatuto de la Junta de Gobierno".³⁵ Dicho estatuto expresa la hegemonía del ejército sobre el resto de las fuerzas armadas. El poder del Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la junta de gobierno se ve a su vez reforzado por la centralización de las distintas ramas de las fuerzas armadas a través del ministerio de Defensa y la asignación del mando de la Dirección de Inteligencia Nacional al Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la junta de Gobierno. Ello facilita la neutralización de todos los oficiales que estaban en condiciones de cuestionar la hegemonía del dictador. Y es además favorecido por la drástica separación de las funciones referidas al mando institucional de las de gobierno en las que participan esencialmente oficiales del ejército.

Son estos proceso que encuentran lugar en el interior de las Fuerzas Armadas los que han facilitado al alto mando del poder político militar de la dictadura el cambio de políticas gubernamentales (como la aceptación del experimento monetarista a partir de 1975) sin que ello conduzca necesariamente a la sustitución de él por parte de nuevos jefes militares. Además, dichos proceso aseguran la autonomía absoluta de las decisiones gubernamentales respecto de las Fuerzas Armadas, de manera tal que las alianzas castrenses en el interior de ellas se hacen innecesarias para sustentar las políticas de gobierno. Es esto lo que explica la estabilidad del poder político, respecto de los institutos armados, que ha evidenciado el dictador en el curso de los últimos diez años.

Sin embargo la aplicación de la política de shock que da curso a la sustitución radical del modelo de desarrollo precedente, y los resultados materiales de ella, conducen a una degradación progresiva de la doctrina propiamente militar que había legitimado el golpe de Estado: la doctrina de la Seguridad Nacional. Ella se ve sometida a una pérdida gradual de su influencia como ideología del Estado. Dicha sustitución es hecha en beneficio de la creciente influencia de la 'ideología del mercado' que legitima y sustenta el modelo económico aplicado y de la 'ideología mercantil' que cubre las dimensiones de la vida cotidiana de la sociedad.³⁶ En general fracasan las tentativas de transformar la ideología de la Seguridad Nacional en el principio cohesionador y políticamente neutralizador de las crecientes desigualdades sociales incrementadas por el esquema económico. Una de las tentativas por abrir cauces a dicha ideología estuvo representada por la creación, en 1974, de la Academia Superior de Seguridad Nacional (ASUSENA). Su objetivo estuvo representado por el intento de homogeneizar la participación de los altos mandos de las fuerzas armadas en la gestión del gobierno y crear una perspectiva propiamente militar de dicha gestión. El resultado fue precisamente el inverso, fueron los ideólogos civiles vinculados a las versiones ultramonetarista los que lograron una mayor eficiencia en la ideologización de los altos mandos militares. La degradación de dicha doctrina y su deslegitimación constante se explica también por la denuncia constante de la oposición interna e internacional de las dimensiones terroristas del régimen.³⁷ El control del Estado ejercido tanto por los militares como por la ideología económica monetarista, han dado como resultados transformaciones esenciales en su esquema de organización política precedente. Ellas están referidas a cambios substanciales en la forma de concreción del ejercicio del poder y de su materialización normativa en términos de leyes. El sistema democrático precedente había funcionado a partir de un principio de equilibrio compartido entre tres órganos constituyentes del Estado: poder legislativo, judicial y ejecutivo. A diferencia de ello, la junta militar asumió el control absoluto de ellos, excluyendo toda posibilidad de control externo. En virtud de dicho

mecanismo, la sociedad civil se vió confrontada con la pérdida de su derecho precedente, consagrado por la Constitución del Estado, a decidir por medio de mecanismos de representación el carácter que debía asumir la organización social y política. Dicha situación fue además acompañada por una concentración creciente del poder en manos del Presidente de la Junta de Gobierno y posteriormente autodesignado como Presidente de la República. Se verifica además un cambio radical en la residencia de la soberanía. Ella deja de ubicarse en la sociedad civil para ser traspasada y ejercida sin limitación alguna por la Junta de Gobierno. Por tanto se declaran improcedentes los principios de mandatos renovables a plazo fijo. En su declaración del 11 de septiembre de 1975 sostiene que: "El gobierno actual pretende ser depositario de un mandato trascendental, construir una sociedad nueva que realice los intereses superiores de la Nación, meta no reducible a plazos, por lo que la legitimidad del régimen no requiere (ni puede) ser sancionada por elecciones". Ello permite concluir que los cambios de residencia de la soberanía se fundamentan en razones y argumentos doctrinarios y no en razones de orden jurídico. Otro de los cambios que se verifican en el esquema de organización del Estado se expresa en la descentralización políticoadministrativa de orden regional. Esta se encuentra inspirada tanto en el pensamiento geopolítico como en la doctrina de la Seguridad Nacional. El objetivo esencial está constituido por el intento de descentralizar las decisiones que no guardan implicaciones de tipo político, como mecanismo de robustecimiento del poder central a través de la verticalización del mando en beneficio del poder presidencial ejercido por el dictador. La administración del territorio nacional está basada en el principio de división regional y este último en la provincialización, que se expresa en la designación de un intendente a la cabeza de la región y de gobernadores subordinados a él en el nivel de las provincias. Tanto los intendentes como los alcaldes deber ser designados directamente por el Presidente de la República y su permanencia en el cargo depende de la voluntad política de este último. Dichas transformaciones son complementadas con la erradicación institucional y normativa del sistema de participación de la sociedad

civil. Esto se expresa inicialmente en la prohibición del funcionamiento de los partidos de izquierda y la declaración de suspensión política para las restantes colectividades, Dichas medidas se inspiraban en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, publicada en marzo de 1974 y que expresaba lo siguiente: "... para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Quedará por lo tanto expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta, en la generación y actividad de las entidades gremiales, cualquiera sea su naturaleza". Las normas derivadas de dicha declaración son posteriormente, en marzo de 1977, completadas con la declaración de ilegalidad de todas las organizaciones políticas independientes de su naturaleza.³⁸

Finalmente, la última transformación en el esquema de organización del Estado, es la representado por el fortalecimiento sin límites del sistema de seguridad interna. Esto se concreta inicialmente en la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional transformada de hecho en la policía política del régimen. Su objetivo esencial estaba constituido por el intento de centralización de los equipos de seguridad dispersos en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Aunque inicialmente dependía directamente de la Junta de Gobierno y del Ministerio del Interior, finalmente, terminó bajo el control directo del Presidente de la República. Como resultado del terrorismo y los asesinatos llevados a cabo por ella, y por la crítica internacional en su contra el gobierno se vió obligado en agosto de 1977 a decretar su sustitución por la no menos terrorífica Central Nacional de Informaciones.

Los cambios descritos que afectan a la estructura de la organización precedente del Estado chileno, generan como resultado cambios en las funciones propiamente políticas de éste. Es evidente que la función coercitiva del Estado predomina absolutamente dentro de las nuevas funciones que éste adquiere y excluye toda

forma de 'necesaria legitimación' de sus actividades. Y eso a diferencia de la fase del Estado de compromiso que acompañó el proceso de industrialización de la economía chileno desde la crisis de los años treinta y que fundamentaba su legitimidad a partir de la formalización de alianzas sociales que confluían en un consenso respecto de las políticas de desarrollo a seguir. De ahí que sea posible sostener que el régimen político, es decir, el sistema de relaciones establecido por el Estado respecto de la sociedad civil, ha sido concretado a través de mecanismos puros de coerción, represión y dominación. Carentes de cualquier elemento que permita asegurar el establecimiento de una hegemonía, es decir, un sistema de dominación legítimo y aceptado por la sociedad civil. La aplicación de los principios de coerción ha sido concretada a partir de un "régimen político de emergencia", que en el período democrático sólo podía ser autorizado por el parlamento, y que aunque tiene un período de duración de seis meses ha terminado por transformarse en un régimen permanente de gobierno. Es evidente que la utilización continuada de la legislación de emergencia está destinada a sustentar jurídicamente el terrorismo político ejercido permanentemente sobre la sociedad y ello explica de alguna manera las dificultades que el propio régimen enfrenta para su institucionalización, ya que cualquier forma de institucionalización de una dictadura que se define por el principio de normativización de su función política remite necesariamente al problema de su legitimidad.

En los primeros años de la dictadura, el problema de la reproducción de su legitimidad no cobraba una relevancia esencial, particularmente porque tanto las fuerzas armadas como los grupos sociales que sustentaron el golpe militar, consideraban que ella constituía una *oportunidad histórica*. Ella estaría destinada a implementar un fortalecimiento del desarrollo capitalista y/o una situación de emergencia que favorecería la resolución de la crisis gestada por la Unidad Popular. En esta medida el gobierno podía beneficiarse también, agitando el ideologismo anticomunista, de la adhesión pasiva de vastos sectores sociales. Pero en la medida en que se se va diseñando el modelo económico, particularmente en la "fase de tratamiento intensivo de la economía", se va explicitando

la naturaleza excluyente de dicha política y se supera la naturaleza propiamente reactiva y contrarrevolucionaria del régimen, abriéndose progresivamente la discusión referida a su legitimidad. Colaboran en ello, las afirmaciones constantes de la dictadura en el sentido de que el cumplimiento de su tarea no tiene plazos sino objetivos y, por tanto, el control sobre el Estado y la sociedad civil es de carácter indefinido. La discusión referida a su legitimidad se deriva de su propia transformación y de su paso desde el carácter de un gobierno propiamente contrarrevolucionario a uno que asumirá un proyecto de reestructuración integral del capitalismo dependiente. Ella compromete no sólo la reestructuración del funcionamiento de la economía y su patrón clásico de industrialización sino que también se concreta en un proyecto de reestructuración de las relaciones entre Estado y sociedad civil.

Es esto último lo que debe ser conceptualizado como el esfuerzo de institucionalización política. Se le presenta como una alternativa relativamente eficiente a la erosión política que sufre como resultado del carácter excluyente de su modelo de reestructuración, y ella es la respuesta a la discusión abierta respecto de su propia legitimidad. Por otra parte, dicha institucionalización es considerada como la garantía jurídico-política de la reproducción del modelo económico puesto en práctica. Es evidente por otra parte que las coordenadas esenciales que constituirán el proyecto de institucionalización política estarán constituidas por la exclusión de toda forma de participación social o política de los sectores que son considerados como enemigos estructurales del régimen. Resultado de ello será la intensificación del rol de la ideología antidemocrática. La aspiración ideal estará constituida por el deseo de obtener la adhesión pasiva y conformista de las clases y grupos sociales subordinados.

Para la obtención de dicho objetivo, el Estado autoritario intentará erradicar tres principios esenciales que sostenían la legitimidad del Estado de compromiso precedente. Será necesario eliminar la naturaleza pública e igualitaria que sostenía a dicho Estado, exterminando su función de regulación de las desigual-

dades sociales y de principal gestor del principio de igualdad social y política, suprimiendo su tarea de regulación de los conflictos sociales generados en torno a los procesos de producción y distribución de sus beneficios. Deberá eliminar también la naturaleza liberal representativa consagrada por la constitución política del Estado desde 1925. Esto equivale a la supresión del derecho de cada persona, agrupación social o política de movilizarse públicamente en beneficio de la obtención de reivindicaciones que eran consagradas como socialmente legítimas y ello se expresará particularmente en la supresión del derecho de reunión. Es evidente que la naturaleza del modelo económico puesto en práctica no resistiría la prueba de una participación democrática. Finalmente deberá intentar también la eliminación del concepto tradicional de libertad imperante en la sociedad chilena precedente. Ella por ejemplo no aceptaba una reducción o subordinación al principio de 'orden' y reclamaba para sí el derecho de reunión, de información y expresión, de participación política sin limitaciones en beneficio de proyectos de sociedad globales, etc.

En relación a los tres principios esenciales que había caracterizado la cultura política de la fase del Estado de compromiso, no sólo se verifica el principio de su erradicación. También los espacios ideológicos por él generados son cubiertos con la asignación y redefinición de sus conceptos otorgada a otros principios. La naturaleza igualitaria y pública cumplida por el Estado precedente le es asignada a un principio ultraliberal de conceptualización de la igualdad, que se basa en la idea de que el mercado debe constituirse en el principal distribuidor de las oportunidades sociales y económicas. La naturaleza liberal representativa consagrada por el sistema político precedente es sustituida por una concepción 'no representativa' de la política, que postula la soberanía absoluta del Estado sobre la sociedad civil, declarando la ilegalidad de cualquier intento por parte de las organizaciones civiles para constituirse en elemento de presión sobre él. Sólo el Estado tiene el derecho de determinar el contenido de conceptos como '*bien común*' o '*intereses generales*' de la nación. Finalmente, el contenido tradicional del concepto de libertad im-

perante en la sociedad chilena es sustituido y reducido por el concepto de libertad económica, y la libertad de los individuos en la sociedad, es entendida como el ejercicio de su soberanía en términos de consumidores.

Cuando se plantea la problemática de la institucionalización política del régimen, como resultado del debate que se abre respecto de la legitimidad del sistema político puesto en práctica por la dictadura, se verifica una referencia directa a la creación de un 'nuevo orden político autoritario'. El deseo de la concreción futura de este 'nuevo orden autoritario' se expresa en la formulación de un 'modelo político' que intenta separar el funcionamiento del Estado, y su esquema de relaciones respecto de la sociedad civil, de su expresión puramente militar. Constituye el mecanismo esencial utilizado para recuperar la legitimidad negativamente afectada por la aplicación del esquema económico. En alguna medida, el modelo político, aunque requiere para su supervivencia de la presencia del sistema militar, aspira a diferenciarse radicalmente de él. Si se considera retrospectivamente el desarrollo del proceso global de reestructuración es posible constatar el retraso evidente en la puesta en práctica del modelo político respecto de la del modelo económico. Ello deriva esencialmente del hecho de que el énfasis inicial se concretó prioritariamente en la elaboración de las políticas de 'normalización económica', pero además ello también se explica por el carácter que asume la legitimidad otorgada inicialmente al golpe de Estado por los grupos sociales participantes en él. Dicha legitimidad se sustentaba prioritariamente en la voluntad política de restauración de los mecanismos esenciales de funcionamiento de la economía capitalista. Sin duda es necesario advertir que el proceso de instauración de un 'nuevo orden político' es esencialmente contradictorio y problemático.

Tanto el estudio del proceso de institucionalización como la formulación del modelo político destinado a concretar y materializar un régimen político autoritario capaz de reproducir sin dificultades su propia legitimidad, evidencian la presencia de una dinámica absolutamente diferente de la revelada por el proceso de

transformaciones económicas que dió curso a lo que se designó como *nueva institucionalidad económica*. La reestructuración de la economía sigue una lógica independiente de la formulación del modelo político o, expresado en otros términos, los esquemas políticos de la institucionalización no constituyen la simple expresión directa del acontecer económico. De ahí que cualquier intento por analizar el proceso político del Estado autoritario requiera del diseño de fases de ejecución diferentes a las formuladas para el estudio de los procesos verificados en la economía. El debe fundamentarse en la consideración de la presencia de dos lógicas fundamentales que animaron el proceso autoritario en su conjunto: la lógica defensiva puramente contrarrevolucionario y restauradora, y la lógica de la reestructuración que aspira a materializar un intento de reorganización capitalista desde el Estado. En la primera de ellas se privilegia esencialmente la represión legitimada por la 'necesidad de la guerra interna' a fin de restaurar el orden. En la segunda, el Estado asume íntegramente la necesidad de reorganizar globalmente la sociedad para lograr la eliminación de las causas estructurales que explican la presencia del populismo y la participación social. Es esta segunda lógica la que marca la diferencia substancial que es necesario establecer respecto de las dictaduras tradicionales. Estas sólo cubren la dimensión restauradora y la reproducen desde el poder del Estado, sin lograr avanzar hacia la formulación de un modelo global de reestructuración del funcionamiento del capitalismo dependiente.

En el período que sigue al establecimiento de la dictadura militar a partir de septiembre de 1973 predomina esencialmente la lógica restauradora y represiva. Su presencia se fundamenta en la naturaleza radical del conflicto social que se verifica en la sociedad chilena del período de 1970 a 1973, en los altos índices de desarticulación del funcionamiento capitalista a que fue sometida la economía chilena durante ese período y en la creciente participación verificada por los sectores populares que respaldaban la *vía chilena al socialismo*. La normalización económica, la desarticulación de la participación política, la recomposición

y reinserción capitalista fundamentadas en el principio de la 'guerra interna', surgían como los intereses prioritarios de esta fase. La necesidad de ello era ampliamente compartida por todos los sectores sociales y políticos que habían respaldado la intervención militar, incluida la Democracia Cristiana. La formulación y puesta en práctica a partir de 1975 de la política económica reestructuradora, que se conoció como *política del shock*, plantea la primera ruptura de la fase restauradora. Pero dicha ruptura no afecta substancialmente la dimensión política de ella; por el contrario los principios restauradores y sus implicaciones represivas se prolongarán en la esfera de la política. Más aún, a partir de la promulgación de las Actas Constitucionales de 1976 se explicita el carácter permanente que aspira a asumir el régimen militar, que se fundamenta en la responsabilidad que se le asigna al régimen democrático y a sus deficiencias para contener las "infiltraciones del marxismo". Frente a la debilidad del régimen democrático para contener la "agresión del marxismo internacional" se hace indispensable la presencia permanente del régimen militar.

Sólo a mediados de 1977 el gobierno hace pública su voluntad de formular un plan político a largo plazo, que aspira a formalizar un régimen político de relaciones entre Estado y sociedad civil relativamente estable. Dicho plan, que fue conocido como "Plan de Chacarillas", establece como objetivo político la concreción de un modelo de democracia que fue designado como "protegida, autoritaria, tecnificada, integradora y de participación". La escasa explicitación del contenido exacto de este anuncio, como también la vaguedad de los plazos formulados, demostraron que constituyó una táctica política destinada a hacer frente a la fragmentación progresiva de los sectores sociales que apoyaban a la dictadura.

La carencia de un modelo político más allá de la permanencia de la dictadura misma era evidente. Sin duda que el anuncio del Plan de Chacarillas constituye, después de la ideología de la nueva institucionalidad expresada en la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974, el primer reconocimiento explícito por parte del gobierno de la necesidad de una institucionalización

política y de la autonormación jurídica de la propia dictadura. Tanto la indefinición de los plazos como la confusión de que hacían gala sus conceptos favorecen la exteriorización del debate interno de los grupos políticos que apoyan al régimen. Dicho debate se verá fortalecido cuando se haga público en 1978 el contenido del Anteproyecto de Constitución elaborado por una comisión especial designada por el gobierno. Dicho anteproyecto aspira a consolidar un modelo político autoritario y restringido, que consagra lo esencial del modelo económico y otorga a las Fuerzas Armadas poder tutelar sobre la democracia, independientemente del control de los poderes civiles.

En el curso de dicho debate se configurarán dos tendencias fundamentales. La primera de ellas es la constituida por el grupo designado como "aperturistas" compuesto esencialmente por personajes ligados a la conducción de la política económica. Se declaran partidarios de la nueva institucionalidad en la medida en que ella, al otorgar una participación política restringida y resolver el problema de sucesión presidencial desde la dictadura misma, garantiza la supervivencia del modelo económico. Esto otorga estabilidad política y permite mejorar la imagen internacional del gobierno, particularmente con Estados Unidos, en el período de la política Carter. El segundo grupo está compuesto por los que se designan como "nacionalistas", que postulan la combinación de un Estado autoritario de régimen militar permanente o corporativo con una política económica más nacionalista y populista. Se expresan fuertemente críticos a la conducción monetarista radical de la política económica y estiman prematura cualquier intento constitucional. Sin embargo, ambas tendencias confluyen en el necesidad del mantenimiento del poder político ejercido por el dictador. Es evidente que los sectores aperturistas constituyen el apoyo esencial al proceso de reestructuración del estilo de desarrollo implementado por el Estado autoritario. Ambos coinciden en la necesidad del mantenimiento de cierto inmovilismo político que se expresa en la afirmación frecuente respecto de la necesidad de "tiempo de maduración". Dicho inmovilismo fundamenta una concepción economicista de las relaciones entre economía y sistema político.

El expresa la confianza de que de la "maduración de las transformaciones estructurales" puede surgir espontáneamente un orden político que impida los intentos futuros de transformación socialista o populista de la sociedad. Dicho debate es transitoriamente resuelto con el plebiscito constitucional de 1980 y la promulgación de la nueva constitución en marzo de 1981.

Lo que tanto el plebiscito como dicha promulgación sancionan es la presencia de un régimen político militar con fuerte concentración personalizada del poder. El excluye cualquier forma de representación o participación efectivamente democrática de la sociedad civil, garantizando las condiciones jurídicas para la reproducción del modelo económico. Es la modalidad política que se establece como resultado del golpe militar la que cobra fuerza plena en el cuerpo constitucional promulgado. En él se encuentra presente la fuerza decisiva de la represión como mecanismo de regulación de las relaciones entre Estado y sociedad civil; caso ilustrativo de esta situación es el famoso artículo transitorio nro. 24 que otorga poderes absolutos al Presidente de la República negando el recurso de Habeas Corpus. La capacidad de la represión es reforzada con las 'leyes antiterroristas' y con la capacidad de acción de los poderosos aparatos de seguridad. Por lo demás, la coincidencia que el modelo político de la dictadura establece entre la más alta autoridad del Estado y la más alta jerarquía militar tiende a formalizar un régimen político altamente personalizado.

Una proyección externa esencial de dicha régimen es la que se expresa en las relaciones exteriores y en la situación internacional del gobierno. Cobra importancia si se considera el aislamiento político internacional casi absoluto a que se ve enfrentado dicho gobierno en el curso de los últimos diez años. Esto no es sólo resultado de la condena internacional en contra de la agresión permanente de que han sido objeto por parte del Estado los derechos civiles y políticos, sino que también se explica por el estilo diplomático a que dichas relaciones han sido sometidas por parte del gobierno.³⁹ El está esencialmente constituido por lo que se

designa como "pretorianismo ideológico", que se expresa en la referencia permanente a una profunda vocación anticomunista y que recurre permanentemente a un esquema bipolar de "guerra fría". Sin embargo, dicha situación no ha repercutido esencialmente en el robustecimiento de un aislamiento económico substancial pero obstaculiza el funcionamiento expedito de las relaciones económicas internacionales. Es necesario recordar que muchos sectores que apoyan al gobierno militar, particularmente, los grupos denominados aperturistas, insistieron permanentemente en el hecho de que el fortalecimiento de las relaciones económicas internacionales eran esenciales para el funcionamiento del proyecto de reestructuración de la economía. Esto es fácilmente corroborable si se considera la lógica del patrón de desarrollo impuesto.

4.5. Economía y sociedad después del "milagro monetarista".

Superada la euforia del crecimiento económico cercano al 8% en los años 1977 y 1978, que se fundamentó en el endeudamiento y financiamiento extero, podemos concluir que la economía chilena en un período de 9 años ha tenido un crecimiento real equivalente a cero. Si se consideran las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central se puede afirmar que en nueve años el ingreso por habitante alcanzó un promedio anual de 0,1% es decir un 0,9% para el total del período. Se puede llegar a dicho resultado si se considera que según las estadísticas oficiales se habría verificado un crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto del 1,86% y un crecimiento vegetativo de la población de 1,8%. Según las estadísticas de la CEPAL, en el período de septiembre de 1974 y septiembre de 1982 se produjo una caída del ingreso por habitante equivalente a un 13,6%. Para los sectores sociales dependientes del Ingreso Mínimo Familiar dicha disminución alcanzó para el mismo período del índice del 18,2%.

El nivel de inversión productiva no presenta una situación muy diferente a la señalada. En América Latina en 1980 se verificó una tasa media anual de inversión por relación al Producto Interno Bruto equivalente al 23%. En Chile, en cambio, dicha tasa

sólo llegó al 13%. Para el período enero de 1974 - enero de 1982 se verifica un crecimiento industrial de un 0,2%. La crisis económica, la utilización improductiva de los recursos económicos y los elevados índices de endeudamiento facilitan la quiebra relativamente generalizada del sector privado de la economía. Los 15.000 millones de dólares que fueron obtenidos por la economía chilena en términos de flujos externos para el período 1974-1982, han sido ineficazmente utilizados y por tanto no han cumplido ninguna función de contención en la crisis de la economía en este último año.

Los altos índices de desempleo, característica estructural del modelo económico aplicado, se ven constantemente acentuados, con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 9,9% para 1977, la tasa de desempleo real para el mismo año osciló entre el 17 y el 18%. A fines de 1982 el índice de desempleo afecta a un millón trescientas mil personas, el 30% de la población económicamente activa. Dicho índice se verifica en el contexto de una política deliberada de concentración y distribución regresiva de la Renta. Es posible constatar que en enero de 1982 el índice de salarios reales es sólo en 1,6% superior al de 1970. A ello deben agregarse los efectos regresivos sobre el nivel de ingresos de la población económica activa derivados de la privatización progresiva de los mecanismos de satisfacción de las necesidades básicas: salud, educación, vivienda y seguridad social. Se verifica, por tanto, un proceso de deterioro generalizado de la protección social que en los períodos precedentes era garantizada por la gestión del Estado. Si consideramos la situación del año 1982, se puede concluir que los resultados de la política recesiva aplicada por el gobierno, se llega a una caída del 14,1 del Producto Interno Bruto, a un 30% de cesantía, a una caída del ingreso por habitante equivalente al 16%.

Uno de los elementos explicativos esenciales del descalabro del "milagro económico chileno" pregonado por Milton Friedman y el Estado terrorista es el endeudamiento externo de la economía en el período 1974-1982.⁴⁰ El funcionamiento de la economía uti-

lizaba los flujos externos de capital como si se tratase de rentas del Estado nacional. El criterio necesario de reproducción interna de dichos flujos, a partir de su utilización en inversiones productivas estaba fuera del paradigma económico puesto en práctica. La existencia parasitaria de la economía chilena en estos últimos años ha sido evidente, el capital exterior fue utilizado para financiar las importaciones de bienes de consumo suntuario. De ahí se deriva también la actual insolvencia de la economía y del Estado para hacer frente a las consecuencias de las deudas contraídas con la banca internacional. Por otra parte, parece evidente que uno de los problemas esenciales que enfrenta la economía chilena a partir de 1982 es su elevado endeudamiento externo, es decir, los 15 mil millones de dólares que en la fecha en que escribo este texto ya supera los 20 mil millones y que marcan un contraste brutal con los índices de endeudamiento de la economía nacional en 1973 que no superó los 4.050 millones de dólares. Es preciso advertir que tanto el 70% del endeudamiento como dos tercios de los recursos externos totales se verifican en sólo tres años: 1979, 1980 y 1981. Años que coinciden con el período de mayor apertura financiera y comercial de la economía chilena, inspirada en la ideología económica de la inserción de la economía nacional en el mercado mundial a través de la explotación de sus "ventajas comparativas" y de la eliminación de las normas restrictivas proteccionistas de importaciones.

Si se hace una evaluación global de este período de nueve años, probablemente sea posible concluir que lo único que ha conservado niveles de eficiencia en el modelo social puesto en práctica por el Estado autoritario, es el terrorismo sistemático aplicado a la población civil, lo que se constata una vez más en el informe del relator especial elaborado por la Comisión de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas para 1983. En él Rajsolomer Lallah concluye que "las acciones de Chile han sido generalmente negativas y no han respondido a las preocupaciones de la comunidad internacional".⁴¹ El concluyente y funcionario lenguaje con que se describe la actual situación de los derechos humanos en Chile puede ser traducido en el relato de una mujer común,

CUADRO XXXI

Chile: Déficit total y financiamiento externo (Millones de dólares a/año)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982 ^o	1974-82	%
A. DEFICIT DE RECURSOS											
CORRIENTES	222	501	- 120	626	1158	1269	2084	4914	2480	13134	87.2
1. Comercial (x)	-135	118	- 461	232	783	873	1439	3408	240	6497	43.1
2. Serv. no financ.	172	99	15	29	-114	279	-285	78	190	- 95	- 0.6
3. Serv. financieros	185	284	326	365	489	675	930	1428	2050	6732	44.6
B. VAR. ACTIVOS LIQUID.	45	-154	492	13	647	880	1188	- 4	-1165	1942	12.9
1. Total (xx)	45	-154	492	13	647	1089	1704	-370	-1200	2266	15.0
2. Recur. propios (menos) ⁺	-	-	-	-	-	209	516	-366	- 35	324	2.4
C. FINANC. EXTERNO	329	440	305	547	1951	2160	3222	4795	1400	15149	100.5
1. Transf. unilat.	11	10	28	75	70	80	113	100	100	587	3.9
2. Inversión directa	-17	-4	-1	16	177	233	170	376	360	1310	8.7
3. Créditos totales (xxx)	235	244	200	556	1769	2014	2995	4393	940	13346	88.5
4. Cr-éditos FMI	100	190	78	-100	-65	-167	-56	-74	-	-94	- 0.6
D. ERRORES Y OMIS.	-62	-93	+67	+92	-146	- 11	+50	+115	-85	-73	- 0.5

x Importaciones CIF

xx Variación total de reservas internacionales menos créditos FMI transferidos a C.4

xxx Excepto FMI

+ Monet. oro, revaluaciones y D.E.G.

o Estimado

FUENTE: Cuadro A y Banco Central de Chile (BCCH) "Boletines Mensuales". Alexis Guardia, Eduardo Herrera, Alberto Martínez, Carlos Ominami y Claudio Rojas "Una renegociación global para una nueva política. La deuda externa chilena 1974-1982", mimeografiado, París, sin fecha.

Lucía Morales que realiza en Santiago de Chile labores de casa y que relata su experiencia reciente en los cuarteles de la policía política designada como Central Nacional de Inteligencia: "Me desesperé, grité, empecé a llorar. Como ya sabía la tremenda dureza de esos interrogatorios, el sólo pensar que podían ocurrirle a mi hija me resultaba intolerable. ; Cómo expresar lo que eso significa! Al día siguiente, me llevaron a una parrilla y me tendieron en ella, desnuda, amarrada en los tobillos y en las muñecas. Con unos plomos o electrodos, me colocaron corriente eléctrica en los pezones, en el estómago, cerca de la vagina. En un momento dado, sentí que mi hija estaba delante mío. Incluso la llegué a tocar: palpé sus manos. "Mamita, dí algo, cualquier cosa para que esto termine", me decía. Traté de abrazarla y no me dejaron. Nos separaron violentamente. La llevaron a una sala contigua y allí, allí escuche con horror que comenzaban a torturarla con electricidad: ; a mi hija ! Al sentir sus quejidos, sus gritos tremendos, ya sí que no aguantaba más. Creí que me iba a trastornar, que mi cabeza y mi cuerpo entero iban a estallar". Para el Estado autoritario, la situación vivida por la señora Morales, representaba el costo social y político necesario a pagar para garantizar el orden y la eficiencia en la "lucha contra el marxismo internacional" y que se expresa en la declaración oficial que sostiene que "si todos respetan los derechos humanos no habría necesidad de conculcarle a nadie sus derechos humanos". Al igual que la de Lucía Morales, la experiencia de miles de chilenos que han pasado por las oficinas o los centros de detención secreta de la policía política del modelo monetarista, contrasta con la declaración del general Humberto Gordon Director de la Central Nacional de Inteligencia. El general Gordon declara que "la seguridad nacional es como el amor: nunca es suficiente".⁴²

La prolongada permanencia de la dictadura conduce a la desarticulación orgánica y política de la izquierda. Ello deriva en una crisis que proviene de su incapacidad por destituir la dictadura militar. Dicha crisis se ve acentuada por las dudas teóricas respecto de la capacidad democratizadora del socialismo. De allí que surga la necesidad de identificar lo que la izquierda chilena

CUADRO XXXII

Chile: valor y composición de las importaciones de bienes

	Millones de dólares				Composición porcentual			Tasas de crecimiento		
	1977	1978	1979	1980 (a)	1970	1979	1980 (a)	1978	1979	1980 (a)
<u>Total</u>	<u>2417</u>	<u>3243</u>	<u>4708</u>	<u>5981</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>34.2</u>	<u>45.2</u>	<u>27.0</u>
Bienes de consumo	789	1079	1327	1923	24.6	28.2	32.2	36.8	23.0	44.9
<u>No alimenticios</u>	<u>440</u>	<u>602</u>	<u>806</u>	<u>1131</u>	<u>10.4</u>	<u>17.1</u>	<u>18.9</u>	<u>36.8</u>	<u>33.9</u>	<u>40.3</u>
Automóviles	99	116	127	204	...	2.7	3.4	17.1	9.5	60.6
De origen industrial	341	486	679	927	...	14.4	15.5	42.5	39.7	36.5
<u>Alimenticios</u>	<u>349</u>	<u>477</u>	<u>521</u>	<u>792</u>	<u>14.2</u>	<u>11.1</u>	<u>13.3</u>	<u>36.7</u>	<u>9.2</u>	<u>52.0</u>
Bienes intermedios	1109	1430	2435	2741	46.5	51.7	45.8	28.9	70.3	12.6
<u>Combustibles y lubricantes</u>	<u>418</u>	<u>439</u>	<u>981</u>	<u>934</u>	<u>6.1</u>	<u>20.8</u>	<u>15.6</u>	<u>5.0</u>	<u>123.5</u>	<u>- 4.8</u>
Materias primas	326	386	565	655	...	12.0	11.0	18.4	46.4	15.9
Repuestos y productos intermedios indust.	365	605	889	1152	...	18.9	19.2	65.8	46.9	29.6
<u>Bienes de capital</u>	<u>519</u>	<u>734</u>	<u>946</u>	<u>1317</u>	<u>28.9</u>	<u>20.1</u>	<u>22.0</u>	<u>41.4</u>	<u>28.9</u>	<u>39.2</u>

FUENTE: Banco Central de Chile.

(a) Cifras preliminares.

a considerado como marxismo en relación a la problemática del desarrollo y se puede constatar la existencia de variados tipos de marxismos. Es este tipo de problemas los que abordaremos en el capítulo siguiente.

NOTAS

1. Sobre este punto se puede considerar la siguiente bibliografía: Tomás Moulian y Pilar Vergara, *"Estado, ideología y políticas económicas en Chile: 1973-1978"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, junio de 1980.
Alejandro Foxley, *"Experimentos neoliberales en América Latina"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, marzo de 1982.
2. S.P. Huntington y otros, *"The crisis of democracy"*, pág. 79, New York Press, 1977.
3. F. Hayek, *"El ideal democrático y la contención del poder"*, Revista de Estudios Públicos, nro. 1, pág. 7-5, Santiago de Chile, 1980.
4. Manuel Antonio Garreton, *"El proceso político chileno"*, FLACSO, pág. 35, Santiago de Chile, 1983.
5. Pilar Vergara, *"Apertura externa y desarrollo industrial en Chile: 1973-1978"*, Revista Desarrollo Económico, nro. 80, vol. 20, Buenos Aires, 1981.
Aníbal Pinto, *"Apertura al exterior"*, Revista Mensaje, nro. 298, Santiago de Chile, marzo de 1981.
6. Ver Pilar Vergara, *"Algunos antecedentes del sector industrial manufacturero en Chile: años 1969/70 y 1978"*, mimeografiado, Cieplan, Santiago de Chile, 1980.
D. Cusack, *"The Politics of Chilean Enterprise under Christian Democracy"*, Ph.D. University of Deventer, 1970.
7. Manuel Antonio Garreton, *"De la Seguridad Nacional a la Nueva Institucionalidad. Notas sobre la trayectoria ideológica del Nuevo Estado autoritario"*, Revista Mexicana de Sociología, Año XL, vol. XL, nro.4, 1978.
8. Osval Lira SSCC, *"Nación y nacionalismo"*, en *"Pensamiento Nacionalista"*, editorial Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 1974.
9. Augusto Pinochet Ugarte, 'Mensaje presidencial del 11 de septiembre de 1976'.
10. Sobre el nuevo estilo de desarrollo se puede considerar:
Mariana Schkolnik y Eugenio Tironi, *"Sobre el nuevo estilo de desarrollo capitalista en Chile"*, Revista Margen, Santiago de Chile, marzo de 1982.
Humberto Vega y Jaime Ruiz Tagle, *"Capitalismo autoritario y desarrollo económico: Chile 1973-1981"*, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1983.
Pedro Vuskovic y Javier Martínez, *"Once proposiciones sobre la situación actual en América Latina"*, mimeografiado, México, 1979.
Mario Lanzarotti y Carlos Ominami, *"Vers une nouvelle régulation de l'économie"*, Revue Amérique Latine, nro. 6, París, 1981. Centre de recherche sur l'Amérique Latine et le Tiers Monde.
Mario Lanzarotti, *"La nueva regulación del proceso económico en Chile. Libre competencia imperfecta y planificación de la estructura productiva"*, Association française des sciences sociales sur l'Amérique Latine, París, 1981.

11. Humberto Vega, *"Teoría y política económica en Chile y la experiencia reciente"*, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, julio de 1980.
12. Pilar Vergara, *"Pasado y presente de la industria chilena"*, Revista Mensaje, nro. 306, pág. 43, enero de 1982.
13. Ver Aníbal Pinto, *"La inflación y el modelo ortodoxo"*, Revista Mensaje, nro. 299, Santiago de Chile, junio de 1981.
14. Para la discusión referida a la periodización del modelo económico se pueden considerar los siguientes trabajos:
 Carlos J. Valenzuela, *"El patrón de acumulación y sus precondiciones. El caso chileno: 1973-1976"*, Revista del Banco de Comercio Exterior de México, setiembre de 1976.
 Alejandro Foxley, *"Toward a free economy: Chile, 1974-1979"*, Latin American Program, The Wilson Center, Washington, 1980.
 Ricardo French-Davis, *"El experimento monetarista en Chile"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, diciembre de 1982.
 Armando Arancibia, *"Chile 1973-1978: la vía chilena a la pauperización y a la dependencia"*, mimeografiado, México, 1979.
 Tomás Moulian y Pilar Vergara, *"Estado, ideología y políticas económicas en Chile: 1973-1978"*, Colección Estudios de Cieplan Santiago de Chile, junio de 1980.
15. Sobre la situación del sector agrícola en el período autoritario es necesario considerar los siguientes trabajos:
 Luz Eugenio Cereceda y Fernando Dahse, *"Dos décadas de cambio en el agro chileno"*, Cuadernos del Instituto de Sociología, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1980.
 Sergio Gómez, "Nuevas formas de propiedad agrícola" en dossier *"Las modernizaciones en Chile: un experimento neoliberal"*, Centro de Estudios y Documentación Chile-América, Roma, Italia, 1981.
 José Bengoa, "Agricultura y campesinado" en *"Cinco enfoques sobre Chile actual"*, documento de trabajo nro. 5, Sur, Santiago de Chile, octubre de 1981. Del mismo autor, *"Transformations agricoles et paysannerie"*, Revue Amérique Latine, nro.6, París, 1981. Centre de recherche sur l'Amérique Latine et le Tiers Monde.
 Lovell S. Jarvis, *"Cuál ha sido la tasa real de crecimiento en los años recientes? una nota acerca de las cifras de producción de la agricultura chilena en el período 1975-1979"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, diciembre de 1981.
 José Bengoa, Jaime Crispi, María Elena Cruz y Cecilia Leiva, *"Capitalismo y campesinado en el agro chileno"*, serie resultados de investigación nro. 1, Grupo de Investigaciones Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, sin fecha de publicación.
 José Bengoa y Jaime Crispi, *"El modelo neoliberal y las transformaciones agrarias: algunas lecciones de la experiencia chilena"*, Centro de capacitación para el Desarrollo, Seminario sobre políticas para el desarrollo latinoamericano, México, marzo de 1981.
 José Calderón, *"La política de la Junta Militar chilena en el sector agropecuario. Antecedentes y perspectivas"*, Revista de Comercio Exterior, vol.27, nro. 12, México, diciembre de 1977.

- Jacques Chonchol y Jaime Lazo, *"La política agraria de la Junta Militar y las medidas económico-sociales agrarias a impulsar por un nuevo orden democrático en Chile"*, La Haya, 1978.
- Teodoro Gajardo, *"Política actual y desarrollo económico agrícola en Chile"*, Instituto para el Nuevo Chile, Rotterdam, sin fecha de publicación.
- Rodrigo Avayay y Ximena Valdés, *"Agricultura, agroindustria y comercialización de la producción alimenticia en Chile"*, Instituto para el Nuevo Chile, Rotterdam, sin fecha de publicación.
- Jaime Crispi, *"El agro chileno después de 1973: expansión capitalista y campenización pauperizante"*, Latin American Program, The Wilson Center, Washington, mayo de 1980.
- María Elena Cruz y Cecilia Leiva, *"La fruticultura en Chile después de 1973: un área privilegiada de expansión del capital"*, tomos I y II, Grupos de Investigaciones agrarias, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, junio de 1982.
- Luis Toledo, *"El rol de la agricultura en la estrategia económica del régimen militar chileno, 1973-1978"*, itinéraires, notes et travaux, nro. 11, juillet 1980, Institut Universitaire d'études du développement, Geneve, Suisse.
16. Ver Alejandro Foxley, *"Hacia una economía de libre mercado: Chile 1970-1978"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, 1980.
 17. Para algunos de estos problemas se puede considerar:

Ricardo French-Davis, *"Políticas de comercio exterior de Chile: 1973-1978"*, Latin American Program, The Wilson Center, Washington, 1980.

Patricio Meller, *"Problemas y opciones del modelo económico"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, 1981.

José Arellano, *"Sistemas alternativos de seguridad social: un análisis de la experiencia chilena"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, noviembre de 1980.
 18. Bando nro. 5 de la Junta Militar de gobierno, 11 de septiembre de 1975.
 19. Bando nro. 31, del 14 de septiembre de 1973.
 20. Respecto de la situación del movimiento sindical se pueden considerar los siguientes trabajos:

Guillermo Campero y José Valenzuela, *"El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario"*, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, diciembre de 1981.

Manuel Barrera, *"Política laboral y movimiento sindical chileno durante el régimen militar"*, Latin American Program, The Wilson Center, Washington, 1980.
 21. Ver Fernando Dahse, *"Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y proceso de concentración de capitales"*, editorial Aconcagua, Santiago de Chile, noviembre de 1979.
 22. Ver Patricio Meller, René Cortazar y J. Marshall, *"La evolución del empleo en Chile: 1974-1978"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, diciembre de 1978.

- Mariana Schkolnik, *"El costo económico y social de la política económica"*, Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, agosto de 1981.
23. Informe de la Comisión Investigadora de la Organización Internacional del Trabajo, 1975.
 24. Diario "El Mercurio", 19 de noviembre de 1973.
 25. Diario "El Mercurio", 2 de marzo de 1974.
 26. Diario "El Mercurio", 17 de julio de 1979.
 27. Aníbal Pinto, *"Un caso de ortodoxia frustrada"*, Revista Margen, Santiago de Chile, 1982.
 28. Ricardo French-Davis, *"Las experiencias cambiarias en Chile: 1965-1979"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, diciembre de 1979.
 29. Además se pueden considerar los siguientes trabajos:
 José Pablo Arellano y René Cortázar, *"Del milagro a la crisis: algunas reflexiones sobre el momento económico"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, julio de 1982.
 René Cortázar, *"Distribución del ingreso, empleo y remuneraciones reales en Chile, 1970-1978"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, junio de 1980.
 J. Leiva Laval, *"La recesión: el nuevo costo social de la política económica"*, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, México, sin fecha de publicación.
 Jaime Ruiz Tagle, *"Antecedentes para el Estudio de los salarios y sueldos en una perspectiva histórica: 1959-1979"*, documento de trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, octubre de 1981.
 30. Ministro de Trabajo, discurso oficial del 1 de julio de 1979.
 31. Respecto de la amplia discusión abierta en torno del Plan Laboral, se puede considerar los siguientes trabajos:
 Manuel Barrera y Teresa Salomé, *"Características del Plan Laboral y sus consecuencias para el sindicalismo en Chile"*, Arzobispado de Santiago, Vicaría Pastoral, Serie estudios Sociales, documento de trabajo nro. 8, junio de 1982.
 Humberto Vega, *"Situación económica y acción sindical"*, Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, octubre de 1981.
 Guillermo Campero, *"Syndicalisme: évolution depuis 1973"*, Revue Amérique Latine, nro. 6, París, 1981, Centre de Recherche sur l'Amérique Latine et Tiers Monde.
 32. José Piñera, Ministro del Trabajo, discurso del 1 de julio de 1979.
 33. Para el estudio de las modernizaciones se puede considerar los trabajos publicados bajo el título, *"Dossier las modernizaciones en Chile: un experimento neoliberal"*, Centro de Estudios y Documentación Chile América, Roma, Italia, 1981.
 José Pablo Arellano, *"Elementos para el análisis de la reforma provisional chilena"*, Colección Estudios Cieplan, Santiago de Chile, diciembre de 1981.
 Jaime Ruiz Tagle, *"Modelo económico y plan laboral"*, programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, octubre de 1981.

34. Citado por Sergio Politoff y Jorge Tapia en su artículo "*La concepción bélica de la política*", Revista Plural nro.1, Instituto para el Nuevo Chile, julio de 1983. Sobre este objeto también se puede ver el trabajo de W. Fortin y C. Medina, "*The Institutionalization of Repression. Chile: a case study*", Instituto para el Nuevo Chile, Rotterdam, sin fecha de publicación.
35. Decreto-ley nro. 527 del 26 de junio de 1974, 'Estatuto de la Junta de Gobierno'.
36. Ver Norbert Lechner, "*Vida cotidiana y ámbito público en Chile*", FLACSO, Santiago de Chile, diciembre de 1980. Augusto Varas, "*Fuerzas Armadas y gobierno militar: corporativización y politización castrense*", Revista Mexicana de Sociología, año XLIV, vol. XLIV, nro. 2, abril-junio de 1982.
37. Un rol particular en la defensa de los derechos humanos ha sido representado por la política de la Iglesia Católica chilena. Para un estudio más amplio de dicha política puede consultarse los siguientes trabajos: Brian H. Smith, "*The Church and Politics in Chile. Challenges to Modern Catholicism*", Limited Paperback editions, Princeton University Press, 1982. Del mismo autor, "*Old Allies, New Opponents: the Church and the Military in Chile, 1973-1979*", Woodstock theological Center, Georgetown University, Washington, 1980. Jorge Hourton, "*Iglesia y Democracia*", clase inaugural de la tercera Escuela Internacional de Verano, Instituto para el Nuevo Chile, Rotterdam, agosto de 1983.
38. Sobre este objeto se puede considerar: Pilar Vergara, "*Autoritarismo y cambios estructurales en Chile*", FLACS, Santiago de Chile, noviembre de 1981; "*Las transformaciones de las funciones económicas del Estado en Chile bajo el régimen militar*" Revista Mexicana de Sociología, Año XLIV, vol. XLIV, nro. 2, abril-junio de 1982.
39. Ver Manuel Antonio Garreton, "*Institucionalización y oposición en el régimen autoritario chileno*", Latin American Center, The Wilson Center, Washington, 1980; "*Democratización y otro desarrollo: el caso chileno*", Instituto para el Nuevo Chile, Rotterdam, 1981.
40. Sobre este tema se puede consultar el trabajo de Alexis Guardia, Eduardo Herrera, Alberto Martínez, Carlos Ominami y Claudio Rojas, "*Una renegociación global para una nueva política. La deuda externa chilena 1974-1982*", Asociación para el Estudio de la Realidad Chilena y el Instituto para el Nuevo Chile, París, 1983.
41. "El Mercurio Internacional", Santiago de Chile, semana del 3 al 9 de diciembre de 1983, pág. 5.
42. Revista Hoy, nro. 332, semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1983, pág. 10 y 11. "El Mercurio Internacional", Santiago de Chile, semana del 3 al 9 de diciembre de 1983, pág. 6.

CAPITULO QUINTO

América Latina: el marxismo de las sociedades dependientes y sus implicaciones para Chile.

Se ha hecho frecuente la puesta en discusión de la legitimidad del paradigma tradicional del marxismo en términos de totalidad explicativa de la crisis y desarrollo del capitalismo dependiente, de los procesos que han dado curso a la transición de un patrón de desarrollo a otro, y de la eficacia de su práctica política para facilitar el restablecimiento de la democracia alternativa al terrorismo de Estado implementado por las actuales dictaduras militares en América Latina. La crisis del patrón de desarrollo fundamentado en la sustitución de importaciones que deberían haber formalizado un tipo de desarrollo capitalista autosustentado y la transición autoritaria a lo que se ha designado como patrón de desarrollo asociado, revolución capitalista tardía, refundación capitalista, modelo primario exportador diversificado o patrón de desarrollo dependiente industrializado, han constituido el marco estructural de las críticas en contra del citado paradigma. Pero es evidente que al impacto de las transformaciones monetaristas debe agregarse el rechazo de sociedades autoritarias que reducen la presencia de la sociedad civil a partir de la identificación entre Estado y partido: el socialismo real, problemática que ha sido redescubierta por la intelectualidad chilena en sus reflexiones sobre la dictadura militar. El tercer elemento está representado por el fracaso de la izquierda en la tarea de destruir el Estado autoritario, fracaso que implica una relativa ineficiencia política inspirada en los patrones clásicos del marxismo tradicional. Ello cobra relevancia si se considera que el papel de la oposición política contra un Estado autoritario es la destrucción de la dictadura misma.

El objetivo central de este capítulo está representado por el intento de identificación de las distintas líneas de conceptualización del marxismo vinculado a la problemática de la dis-

cusión sobre el carácter y alternativas al desarrollo del capitalismo dependiente. Ello bajo una perspectiva de interpretación que sería posible denominar como sociología histórica del marxismo de sociedad dependiente. Dicha identificación está destinada a formalizar las coordenadas esenciales de una investigación posterior. En función de estos criterios hemos estructurado el presente capítulo en cinco partes. La primera de ellas, el marxismo de las sociedades dependientes, está destinada a explicar las problemáticas básicas de las formulaciones iniciales, cuando éste es reconstruido o simplemente aplicado como conceptualización explicativa del desarrollo y crisis del capitalismo regional. La segunda parte, el marxismo desarrollista y la versión politizada del dualismo estructural, está destinada a sugerir la identificación entre el marxismo local y el desarrollismo cepalino cuando se plantea, a partir de la década de los treinta, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La tercera parte, el marxismo de la segunda versión leninista, tiene como objeto el dar cuenta de la percepción que el marxismo norteamericano asume respecto de la problemática de la industrialización; esto se justifica a partir de la influencia que ejercieron dichos autores en la primera fase crítica contra el nekeynesianismo cepalino. La cuarta parte, designada como el marxismo de la dependencia, está destinada a presentar la reflexión teórica esencial de un tipo de análisis que estimuló y concretó innovaciones significativas en la reconstrucción teórica del marxismo desde una perspectiva que intentaba recoger la especificidad histórica del capitalismo dependiente. A la vez, ella es la primera en abrir una perspectiva de estudio del carácter del Estado capitalista en la formación social dependiente, particularmente vinculada al Estado autoritario y a los procesos de reestructuración capitalista dependiente que se inicia con la crisis de la industrialización sustitutiva de importaciones. En la última parte, el marxismo de los movimientos sociales, intentaremos conceptualizar y sintetizar las renovaciones teóricas que se han sugerido en torno a la discusión referida a la "transición del autoritarismo a la democracia" en sociedades como la chilena. Las transformaciones puestas en práctica por el modelo monetarista del período

1973-81 habrían desarticulado el paradigma tradicional de la izquierda chilena, referido a la problemática del socialismo, clases sociales, partido y política. Dichas transformaciones habrían arrojado evidencias deslegitimadoras de la validez del paradigma marxista o, por lo menos, de las interpretaciones formuladas por la oposición que se reconoce en él.

5.1. El Marxismo de las sociedades dependientes.

Si se sigue la investigación de Boris Goldenberg, "Kommunismus in Lateinamerika",¹ es posible concluir que en una perspectiva histórica el problema central enfrentado por el marxismo latinoamericano ha sido el referido al carácter de la revolución (anticapitalismo o antifeudal). Ello ha supuesto el diseño necesario de la formación económico-social que ha servido de fundamento en las estrategias de conquista del poder. La naturaleza de la revolución, a su vez, ha subordinado una serie de cuestiones políticas esenciales: el problema de las vías, las etapas de lucha, las alianzas de clase, etc. Son estas cuestiones políticas las que expresan las cuestiones metodológicas y teóricas referidas a la aplicación del marxismo a la realidad latinoamericana y que, a su vez, constituye la primera toma de conciencia del acentuado carácter eurocentrista de muchas de las formulaciones clásicas del marxismo. La crítica contra el carácter eurocentrista del marxismo de la cual toman conciencia algunos autores que participan en los años sesenta en el debate referido al intercambio desigual, particularmente la temprana versión de Samir Amín,² está ya presente en la discusión del marxismo latinoamericano de los años treinta. Prueba de ello es la ya clásica polémica entre dos versiones del marxismo: lo que se ha designado como el "exotismo indoamericanista" de fuertes connotaciones antropologizantes que pone énfasis en la especificidad histórica de América Latina y la versión europeizante de fuerte énfasis sociologizante que inspira la interpretación de las sociedades latinoamericanas en el evolucionismo historicista de los modelos de desarrollo económico-social de Europa. Esta última perspectiva se ve particularmente favorecida en el período estalinista por la hegemonía de

de la interpretación soviética del marxismo y que da curso a la doctrina de la revolución por etapas, el rol de la burguesía progresista, el bloque de las cuatro clases y la revolución democrático burguesa. El aspecto esencial de esta polémica entre particularismo y universalismo del marxismo está representado por un tipo de construcción teórica destinada a explicitar el hecho de que el socialismo no constituye la alternativa inmediata; Haya de la Torre ³ y Alejandro Martínez Cambeno ⁴ son quizás los intelectuales más representativos de este tipo de análisis. La figura de uno de los más robustos y fecundos intelectuales del marxismo latinoamericano, José Carlos Mariátegui ⁵ será duramente condenado por no comprender, por eludir el establecimiento de la diferenciación histórica necesaria entre la agraria sociedad indoamericana y el capitalismo industrializado europeo y por haber inventado la mitología de una supuesta vocación revolucionaria del proletariado latinoamericano.

La predominancia de la línea eurocentrista adoptada por el VII Congreso del Komintern en 1935 cierra lo que se ha denominado como el período revolucionario del marxismo latinoamericano cuya expresión teórica más profunda está representada por los trabajos de Mariátegui y por la situación histórica de la insurrección del Salvador en 1932. Ella clausura también la validez teórica del documento de la IIIa. Internacional "Sobre la Revolución en América Latina, llamado a la clase obrera de las dos Américas" de enero de 1921 y el de enero de 1923, "A los Obreros y Campesinos de la América del Sur". En dichos documentos se excluía la idea de una fase nacional y democrática bajo la forma histórica de un capitalismo independiente autosostenido y se denunciaba la complicidad de la burguesía local con el imperialismo, en donde las luchas campesinas deben estar dirigidas en contra del capitalismo agrario. La unidad del proletariado y el campesinado posibilitaría el modelo de una revolución ininterrumpida capaz de superar el "capitalismo atrasado y semicolonial" en que se debatía la América Latina. La revolución rusa había ejercido un impacto profundo en el marxismo latinoamericano de este período, aun cuando ella sea consumida de manera diferente por los distintos intelectuales

y dirigentes obreros y campesinos. La apertura de la fase eurocentrista del marxismo latinoamericano, en la cual se ubica el período estalinista del marxismo y de la predominancia de la interpretación soviética del marxismo (1935-1959), se encuentra indisolublemente ligada a la lucha de la clase obrera de los capitalismos centrales contra el fascismo y a la formulación de la política de Frentes Populares.

5.2. El Marxismo desarrollista y la versión politizada del dualismo estructural.

Es preciso recordar que el marxismo latinoamericano de los años treinta, más que estar directamente confrontado con la lucha contra el fascismo, está directamente enfrentado a lo que se ha designado como crisis del sistema de dominación oligárquico y al proceso de crisis y estancamiento del patrón de desarrollo basado en el modelo primario exportador, como resultado de la contracción del mercado mundial provocada por la crisis internacional del capitalismo de los años treinta, y debe responder e incentivar los procesos estructurales que darán curso al establecimiento de la fase clásica de industrialización que los análisis de Prebisch designaron como industrialización por sustitución de importaciones.⁶ De ahí que, particularmente en el caso chileno, el imperativo de la política de Frentes Populares diseñado por el séptimo congreso del Komintern, el modelo de alianza de clases en él contenido, se identificara más rápidamente con las tareas de la industrialización que la lucha contra el fascismo.⁷ De ahí que la participación del Partido Comunista chileno en la constitución del Frente Popular que condujo a la victoria del candidato radical Pedro Aguirre Cerda, fuera fundamentada en función de la ampliación de la etapa democrático nacional y de un desarrollo progresista e independiente del capitalismo chileno.⁸ Ello en oposición a la complejidad que asume la posición del Partido Socialista, fundado en plena crisis del capitalismo mundial y que se reconoce también en el marxismo que pone énfasis en la "República Socialista de América Latina" y en la "Dictadura de los Trabajadores".⁹

El impacto de la crisis mundial sobre el sistema de dominación que creó las condiciones políticas propicias para la industrialización revelará un elemento peculiar dentro de la política frentista que a su vez definirá el papel de la participación del marxismo en su interior. Dicha peculiaridad está constituida por la simultánea afirmación frente a la industrialización de los procesos de redistribución de la riqueza social. "La simetría de perspectivas entre la burguesía y las clases populares en torno a la necesidad de impulsar la industrialización se convertía en oposición acerca de la forma que revestiría el proceso de desarrollo. La oposición más salarios o más acumulación definía dos orientaciones que habrían de mostrarse irreconciliables".¹⁰ Este será el nudo principal de la problemática desarrollista. A pesar de ello, la participación de los partidos marxistas dentro de la política de Frente Popular transformó las orientaciones básicas del socialismo en un compromiso histórico en torno de la industrialización nacional, pero, a la vez, ello representó el inicio de un prolongado proceso histórico de integración negociadora de la clase obrera al Estado que va ser sólo interrumpida en el período de la "democracia protegida" iniciada con la promulgación de la "ley de defensa de la democracia". Esta fase permite establecer los fundamentos de lo que después será designado como "Estado de compromiso" dinamizado por la incompatibilidad evidente entre el modelo de acumulación de capital para incentivar la industrialización y la presencia del movimiento obrero. Es evidente que el cierre estatal a la participación de la clase obrera en el período de la "democracia protegida" (1947-1958) buscaba rearticular dicha contradicción en beneficio de los proceso de acumulación, aprovechando el contexto internacional de la Guerra Fría y la ideología de la lucha contra el comunismo, pero ello tampoco reveló la "eficiencia necesaria" como para resolver los problemas políticos de hegemonía inestable que enfrentaban las clases dominantes dado que ello requería la existencia de proyectos globales de reorganización económica y social y no el simple establecimiento de frenos legales a la participación popular. Las alternativas del período fueron siempre parciales: el proyecto nacional popular ibañista y el programa de la Misión Klein-Saks.¹¹

Dicho proceso de transformación de las orientaciones básicas del socialismo en compromiso histórico en torno a la industrialización nacional a partir del establecimiento de la política frentista, ha sido evaluado de modo diferente por distintas ópticas políticas e intelectuales.¹² Para algunos, constituyó el impedimento de la transformación revolucionaria de la sociedad chilena, en la medida en que enseñó a las masas a utilizar las urnas electorales. Para otros, el Frente Popular constituyó un gigantesco acto de mistificación social que no intentó jamás la transformación de las relaciones de propiedad o recuperar las "riquezas nacionales" en manos del capital extranjero, destruyendo la iniciativa revolucionaria. Para otros, el triunfo del frente popular del 38 y el de la alianza democrática en 1946 demostraron a la clase obrera la posibilidad de la conquista del gobierno por una vía que no es necesariamente insurreccional.

Sin embargo, la interpretación que alimentó los proyectos de industrialización por sustitución de importaciones no reconoce su origen en la versión desarrollista del marxismo latinoamericano, sino más bien en las formulaciones conceptuales y analíticas de Raúl Prebisch y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),¹³ respecto de la cual la primera de ellas provoca una relación de complementariedad a partir de su versión politizada del "dualismo estructural", fundamento esencial en la construcción explicativa del subdesarrollo de América Latina formulado por la CEPAL.¹⁴ La estrategia elaborada por el desarrollismo en torno a la industrialización por sustitución de importaciones que se llevó a cabo en el período de 1930-60, insistía en la ruptura inicial con el viejo Estado oligárquico liberal que había dinamizado la fase de la economía primario exportadora. Dicho proceso de industrialización fue considerado esencial en la posibilidades de un desarrollo capitalista autosostenido. En la medida en que se sustituyeran internamente los bienes manufacturados obtenidos tradicionalmente a través de las importaciones, sería posible romper los lazos de dependencia establecidos por la vieja división internacional del trabajo. El proceso social que dinamizaba el desarrollo del modelo capitalista autosostenido se caracteriza-

ría básicamente por el conflicto entre las nuevas burguesías industriales desarrollistas (sector moderno) y las viejas clases oligárquicas (sector tradicional). El proletariado industrial en desarrollo y el resto de los sectores populares desempeñarían un papel de apoyo subordinado a las nuevas burguesías ligadas al mercado interno. El patrón de desarrollo se concentraría en el establecimiento de una política de ampliación progresiva del mercado interno que garantizaría la dinámica de acumulación del capital, lo que permitiría acercarse a la conformación económico social de los países de economías centrales. En el modelo centro-periferia elaborado por Prebisch, dos elementos explicarían y dinamizarían la existencia del subdesarrollo: el deterioro de los términos de intercambio entre bienes primarios y bienes manufacturados y la supervivencia de un sector agrario, oligárquico tradicional y un sector moderno específicamente representado por los polos de industrialización.¹⁵

La articulación complementaria que se produce entre el marxismo desarrollista y desarrollismo capitalista gira esencialmente en torno del concepto de dualismo estructural. En la visión de dicho marxismo la problemática del desarrollo se articula sobre la existencia de una contradicción fundamental entre el sector 'feudal' de la economía y otro específicamente capitalista. Los puntos de contactos con el desarrollismo están dados por la posición favorable al papel democrático progresista de la burguesía nacional. De ahí que se pueda concluir que en ambos casos se trata de una misma matriz teórica expresada en lenguajes diversos. Lo mismo puede sugerirse en el nivel de una problematización hipotética respecto de la articulación complementaria que es posible establecer entre el paradigma centro periferia rearticulado en torno al concepto deterioro de los términos de intercambio formulado por Prebisch y el concepto referido al intercambio desigual que rearticula el modelo de economías centrales y periféricas del debate referido a la acumulación a escala mundial.

5.3. El Marxismo de la segunda versión leninista.

En los hechos, las primeras fases del análisis crítico del paradigma de la modernización desarrollista formulado por los economistas marxistas se encontraba inspirado en el supuesto de la movilidad plena de los factores productivos a nivel internacional. El comercio internacional representaba el instrumento esencial de la expansión del capitalismo. El papel asignado al comercio mundial se encontraba específicamente fundamentado en el texto de Marx referido al colonialismo. Como lo expresa Cardoso, se "creía que las tasas diferenciales de interés llevarían también a la exportación de capitales hacia la periferia, aunque hubiera dificultades para la generalización de la forma de trabajo asalariado como relación básica de la explotación económica".¹⁶ Es Maurice Dobb quien primero sistematiza una ruptura parcial con las versiones clásicas del marxismo referidas a la expansión del capitalismo en las formaciones sociales de capitalismo dependiente. Para ello se fundamenta en las críticas elaboradas por Lenin en contra de la versión que sustentaba la idea de los efectos progresistas de la expansión del capitalismo a las áreas subdesarrolladas del sistema mundial, a partir de la constatación de que los requerimientos políticos de dicha expansión sólo eran materializables a través de la vinculación necesaria del capitalismo internacional con las estructuras sociales y políticas hegemónicas de orden precapitalista en las sociedades subdesarrolladas. A pesar de ello en su libro "Economía Política y Capitalismo" (1954), fundamenta el desarrollo capitalista de la periferia en torno a la versión más clásica de que dicho desarrollo puede ser resultado del aumento de la composición orgánica del capital en los países centrales con los efectos consecuentemente negativos sobre la tasa de beneficios. Por el contrario los bajos niveles de composición orgánica de capital y los bajos costos de producción existentes en las regiones subdesarrolladas facilitarían su vinculación necesaria al desarrollo del capitalismo internacional, pero dicha expansión capitalista hacia la periferia no asume necesariamente un contexto estructural de tipo industrializante.

La construcción teórica de la segunda versión leninista es también retomada en los estudios de Baran *"An Interpretation of Economic Backwardness"* (1952) y *"The Political Economy of Growth"* (1957). Pero a ella se agrega la referencia al rol negativo representado por la insuficiencia de los mercados internos, en donde el aumento probable de productividad constituye el eje posible de su propia expansión y cuya ampliación podía ser garantizada por el establecimiento de un modelo de industrialización altamente proteccionista. Pero para ello era necesario erradicar el sistema de relaciones de poder hegemonizado por las clases sociales de tipo tradicional precapitalista ("señores feudales, clases medias capitalistas e industriales conservadores") que se fortalecían progresivamente a partir de los requerimientos políticos de la expansión del capital internacional en las regiones periféricas. A través de la construcción del concepto de "excedente económico" limita el papel negativo asignado previamente al tamaño del mercado interno otorgando una mayor relevancia explicativa del subdesarrollo al deterioro de los términos de intercambio de las economías primario-exportadoras. La utilización socialmente irracional del excedente económico obtiene una relevancia esencial en las estructuras causales explicativas del subdesarrollo, reforzada por las relaciones económicas establecidas en el sistema internacional. Así, es posible asumir la conclusión de Cardoso en el sentido de que "aunque la inspiración marxista más clásica diverge del análisis de la CEPAL porque no veía un problema de falta de capitales, la tradición más política del análisis de Lenin, aceptada *ipso facto* por Baran, percibía la existencia de un problema que aparecería como de mercado y de insuficiencia dinámica de capitales; pero, al contrario que Prebisch, no creía que las reformas, el aumento de la productividad o del capital extranjero pudiera alterar drásticamente las condiciones del subdesarrollo vigente. Sólo una revolución socialista liberaría las fuerzas productivas y permitiría elevar el nivel de vida de las masas mediante la mayor utilización del excedente disponible".¹⁷

Es evidente, que las interpretaciones que giran entorno al marxismo de la segunda versión leninista no tuvieron consecuencias

políticas significativas. Ellas fueron influyentes en reducidos círculos intelectuales.

5.4. El Marxismo de la dependencia.

En el curso de los años sesenta se acentúa en América Latina el desarrollo de una nueva línea de interpretación que pone énfasis en el carácter sociopolítico del desarrollo y que tiene como resultado lo que se ha designado en los términos de análisis de situaciones de dependencia.¹⁸ Dos procesos constituirán el referente empírico inicial de sus reflexiones: el estancamiento y crisis del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que genera la desarticulación teórica de los modelos de interpretación desarrollista¹⁹ y el proceso de reestructuración autoritaria del capitalismo dependiente que busca superar dicha crisis a partir de la erradicación del modelo de desarrollo precedente en beneficio del establecimiento del modelo de desarrollo asociado.²⁰ La reestructuración autoritaria del capitalismo brasileño a partir del establecimiento de la dictadura militar en 1964 concretiza la primera versión histórica de este proceso y establece a la vez la concreción de un modelo singular de desarrollo que no estará presente en los casos posteriores de implantación autoritaria del modelo de desarrollo asociado: el modelo de desarrollo dependiente industrializado.²¹ Probablemente Brasil sea el único caso de dictadura militar en América Latina que pueda especificar el concepto de Estado Burocrático Autoritario en términos de profundización del desarrollo capitalista de acuerdo como lo formuló globalmente O'Donnell.²² Los otros casos latinoamericanos (Chile, Argentina, Uruguay y el período autoritario abierto de Bolivia con el golpe militar de 1980) escapan a dicha conceptualización si ella se especifica en dirección de procesos de profundización de la industrialización.

La elaboración del concepto de situación de dependencia se llevó a cabo en un contexto teórico de crítica simultánea en contra del funcionamiento estructural, el keynesianismo, el marxismo tradicional y las concepciones clásicas referidas al imperialismo

y a la teoría liberal ortodoxa.²³ Su esfuerzo fundamental estuvo dirigido a considerar la problemática del desarrollo en torno a una perspectiva de interpretación que insistía en la naturaleza política de los procesos de transformación económica. Las referencias a las situaciones históricas en las que se daban dichas transformaciones eran presentadas como esenciales para la comprensión de su significado, de sus límites estructurales y de las condiciones que las hacían posibles. Ello suponía la necesaria conceptualización de los procesos económicos en términos de procesos sociales, que metodológicamente se expresaban en una interpretación teórica que posibilitaba la lectura del poder económico como dominación social, es decir, como dominación política. Se reconocía que sólo a través del proceso político los grupos económicos o clases sociales podían imponer al conjunto de la sociedad un modo de producción propio y un proyecto particular de relaciones entre economía y política.²⁴ En esta perspectiva la discusión tecnocrática o abstracta en torno a la problemática del desarrollo de América Latina debía ser abandonada y sustituida por la lectura de modelos propuestos en términos de esquemas de poder entre los distintos grupos sociales constitutivos de las sociedades dependientes nacionales o de su alteración en la constitución vigente.²⁵

En los análisis que preceden a los estudios referidos a las situaciones de dependencia, ésta había sido formulada como una 'variable externa'. Con un contenido diferente tanto la teoría tradicional referida a la problemática del imperialismo como las versiones latinoamericanas de la teoría de la modernización le habían asignado dicho carácter, formulándola como un proceso que se derivaba de las condiciones negativas impuestas por el mercado mundial. El paso teórico significativo dado por las ciencias sociales latinoamericanas, a través del análisis de las situaciones de dependencia, fue el haber puesto énfasis en el papel de la estructura interna del capitalismo dependiente que se constituye dialécticamente a partir de su propia dinámica de clases y del proceso de internalización de los factores externos. El conjunto de estas formulaciones constituyen las variables reflexivas previas

que conducen a la formulación sistemática normativa del concepto de dependencia, definida entonces como una situación condicionante que redefine las posibilidades estructurales de desarrollo de las distintas economías nacionales. La "dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de países tienen sus economías condicionadas por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual la propia está sometida. La relación de interdependencia entre dos economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependientes) sólo lo pueden hacer como reflejo de esa expansión, que puede actuar positiva y/o negativamente sobre su desarrollo inmediato".²⁶ La explicitación de dicho concepto permite especificar dos referencias de orden metodológico que es necesario referir. En primer lugar, el estudio del proceso histórico de constitución del capitalismo dependiente debía preceder el análisis del conflicto interno entre las distintas clases sociales y, en segundo lugar, los condicionantes externos en sus dimensiones políticas y económicas reaparecen inscritos estructuralmente en la articulación de la economía, de las clases y del Estado con las economías centrales. Dicha articulación prevalece en cada situación de dependencia permitiendo recuperar la significación política de los procesos económicos y sociales.²⁷

La construcción de dicho concepto ponía además en evidencia su crítica específica en contra de aspectos centrales de las formulaciones dominantes del marxismo clásico que lo vinculaban con las concepciones tradicionales que se hacían presente en la discusión sobre el desarrollo del capitalismo en América Latina. La primera de ellas se orientaba a la crítica de su contenido fuertemente eurocentrista que se expresaba en una perspectiva profundamente historicista cuando se planteaba la problemática de formulaciones explicativas de las relaciones entre capitalismo y capitalismo en las formaciones sociales de capitalismo dependiente. En la conceptualización tradicional del marxismo en uso, la dinámica del desarrollo histórico de la formación social dependiente era interpretada a partir de su correspondencia con el evolucio-

nismo histórico de la versión economicista del desarrollo de los modos de producción en las economías centrales. Dicha óptica es sustituida en beneficio de una identificación teórica específicamente histórica del desarrollo del capitalismo en las formaciones sociales subdesarrolladas y ella hace referencia al hecho de que el modo de producción capitalista, introducido desde el exterior y basado en el mercado exterior, tiende a constituirse en dominante y no en exclusivo.²⁸ Su función dominante en el interior de la formación social capitalista dependiente se expresa a la vez en su capacidad generadora de estructuras económicas y modos de producción que en el análisis de los capitalismos centrales son calificadas como precapitalismo. Las implicaciones políticas de este tipo de conceptualizaciones son evidentes y el papel supuestamente progresista de una burguesía democrático-industrializante es explícitamente negado.

El segundo tipo de críticas globales en contra del paradigma del marxismo tradicional hace referencia a las concepciones tradicionales sobre el imperialismo. Se declaran teóricamente limitados los enfoques clásicos sobre el imperialismo cuando se manifiesta la necesidad de aplicar su matriz analítica para explicar las condiciones del subdesarrollo en América Latina, limitación que proviene del marcado contenido eurocentrista en la construcción de dichas formulaciones. "Tanto Lenin, Bujarín, Rosa Luxemburgo, los principales elaboradores marxistas de la teoría del imperialismo, como los pocos autores no marxistas que se ocuparon del tema, como Hobson, no han enfocado el tema del imperialismo desde el punto de vista de los países dependientes. A pesar de que la dependencia debe ser situada en el cuadro global de la teoría del imperialismo, ella tiene su realidad propia que constituye una legalidad específica dentro del proceso global y que actúa sobre él de esta manera específica. Comprender la dependencia, conceptuándola y estudiando sus mecanismos y su legalidad histórica, significa no sólo ampliar la teoría del imperialismo sino también contribuir a su reformulación".²⁹ Las teorías sobre el imperialismo y el colonialismo son el resultado de los estudios del carácter que asume el desarrollo del capitalismo en los

países centrales; por el contrario, el estudio del desarrollo del capitalismo en las formaciones sociales subdesarrolladas debería dar curso al campo analítico de las situaciones de dependencia. En esta perspectiva no es posible hablar de la existencia de un nuevo paradigma o del establecimiento de una teoría alternativa al marxismo. En la medida en que insiste en las deficiencias de los consumos clásicos de las teorías marxistas sobre el subdesarrollo, se reconoce la necesidad de la revalidación de los conceptos, categorías y variables que le dieron existencia teórica y social.³⁰

Es este debate el que permitió la formulación provisional de los conceptos de reproducción dependiente del mercado mundial y de heterogeneidad estructural de la formación social del capitalismo dependiente, que vinculadas a los aportes teóricos de la discusión sobre el intercambio desigual deberían haber convergido en una teoría específica sobre el carácter de la reproducción capitalista en la periferia, "que no sería otra cosa que una aplicación de la teoría general del capitalismo a las condiciones históricas específicas de las respectivas zonas periféricas del capitalismo mundial y que tendría por objeto explicar las formas a través de las cuales se impone la ley del valor en esas sociedades con la progresiva internacionalización de las relaciones de producción capitalista".³¹

5.5. El Marxismo de los Movimientos Sociales.

En el inicio de los años ochenta se acentúa una línea de interpretación que pone en discusión las interpretaciones formuladas por la izquierda política chilena en torno a los procesos de reestructuración autoritaria abiertos por la dictadura militar a partir de 1973.³² El objetivo de dicha interpretación constituye un campo de reformulaciones que no se limitan solamente a la puesta en cuestión de las interpretaciones dominantes en las organizaciones políticas que se reconocen en el marxismo, sino que también aspira a la reconstrucción del concepto de socialismo a partir de la reformulación de las lecturas dominantes referidas al

marxismo tradicional y a su eficiencia teórica en relación al fortalecimiento de los necesarios procesos que conduzcan a la transición del autoritarismo a la democracia. Tres críticas sustanciales fundamentan la legitimidad inicial de la construcción teórica que dará curso a lo que hemos denominado como el marxismo de los movimientos sociales. La primera de ella tiene como referencia el rechazo de la idea de la inviabilidad del modelo económico monetarista puesto en práctica por el Estado autoritario chileno, de su incapacidad para dar curso al establecimiento de un desarrollo nacional sostenido con un crecimiento económico, poniendo énfasis en el carácter excluyente y pauperizante del modelo. Dicho razonamiento habría estado vinculado a una visión preferentemente clásica de la izquierda que sostenía la inviabilidad histórica del capitalismo dependiente en América Latina en razón de su incompatibilidad con la democracia, en la necesidad imprescindible del autoritarismo y su carácter concentrador, excluyente y pauperizante. Se afirma, por tanto, la idea del necesario reconocimiento de la viabilidad del modelo económico del autoritarismo como referente esencial en la necesaria reformulación de las políticas alternativas a la dictadura. El concepto de viabilidad de un modelo económico depende de su referencia a un contexto esencialmente político en el cual aquél se inserta y no de su referencia al carácter excluyente y pauperizante en la medida en que sus objetivos de reimplantación del sistema capitalista dependiente no se reconocen en los costos sociales que el mismo genera. Por tanto, se establece como conclusión la necesidad de abandonar la idea de que las crisis periódicas del modelo vinculadas a la acentuación de las desigualdades sociales conducirían a la caída de la dictadura.

La segunda crítica pone en cuestión la conceptualización del régimen militar chileno como un régimen contrarrevolucionario, represivo, defensivo y transitorio a que da curso el establecimiento de un Estado de excepción. Esta interpretación es considerada parcial en la medida en que los hechos demuestran que se establecen dos dinámicas simultáneas en el modelo autoritario: una de carácter defensivo y de reacción frente a la crisis pre-

cedente, otra de 'carácter fundacional', 'de revolución capitalista tardía' que se expresa en el intento por reestructurar y reinsertar el capitalismo desde el Estado. En la primera se privilegian la extensión, intensidad y modalidad de la represión, así como las medidas económicas de normalización y estabilización que condicionarán los procesos políticos y económicos del modelo fundacional del monetarismo. La segunda aparece caracterizada por la diversificación de los principios de legitimación de la dictadura que se apoya en los supuestos "éxitos de la reconstrucción nacional", como en las promesas de la restauración futura de una democracia "depurada" y necesariamente protegida.³³ En esta dirección dichos regímenes no deben ser conceptualizados como sistemas políticos transitorios o de validez coyuntural; constituyen procesos globales de transformaciones estructurales que abren espacio al establecimiento de una revolución capitalista tardía ejecutada desde el Estado. Es este razonamiento el que sustituye la conceptualización de la dictadura como un mero paréntesis en una sociedad de profunda tradición democrática que se fundamentaba parcialmente en el análisis de la fase puramente defensiva y reactiva del autoritarismo.

La última crítica hace referencia a la idea dominante que el establecimiento de las dictaduras militares de nuevo tipo en el cono Sur responden a una tentativa de profundización del desarrollo del capitalismo chileno en la dirección de un modelo de capitalismo dependiente industrializado, similar al abierto por el proceso autoritario de Brasil desde 1964. El concepto de profundización del capitalismo dependiente se constituye a partir de la idea de que la industrialización pasará desde la producción de bienes de consumo a la producción de bienes intermedios de segunda generación cuya fabricación habría sido desplazada de las economías centrales en virtud de las exigencias de la nueva división internacional del trabajo. La internacionalización y el desplazamiento de los aparatos industriales hacia economías periféricas como la chilena se vería favorecido por los bajos costos de mano de obra³⁴ y del proceso productivo en general, a lo cual conduciría la sobreexplotación del trabajo garantizada por la

existencia del Estado autoritario. Por tanto, eso daría curso a un proceso de proletarización generalizada de la población económicamente activa en Chile. Por el contrario, lo que se concretaba en Chile desde fines de 1973 era la puesta "en marcha de una nueva política económica destinada a modificar drásticamente el patrón de desarrollo preexistente. Partiendo de una crítica profunda al modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva - según la cual el proteccionismo excesivo y el intervencionismo desmedido estarían en la base del estancamiento de la economía por haber dado origen a una asignación ineficiente de los recursos -, la nueva estrategia de desarrollo no buscaba una extensión o una profundización de la sustitución de importaciones para superar sus limitaciones, sino una reversión brusca del modelo hacia un esquema de libre comercio" ³⁵ fundamentado en el principio de las ventajas comparativas. El sector exportador se constituiría en dinamizador principal de desarrollo que concentraría los procesos de acumulación de capital a fin de fortalecer su competitividad en el mercado internacional, la agricultura, la minería, la pesca, la elaboración de productos a partir del uso intensivo de esos recursos básicos. La formulación global de esta estrategia de desindustrialización no debe ser confundida como un proceso de restablecimiento del modelo primario exportador que caracterizó la fase del período de dominación oligárquica que había precedido la fase de industrialización por sustitución de importaciones.

Sobre la base de estas reflexiones críticas y las vinculadas a la polémica referida a la transición del autoritarismo a la democracia, se fundamenta una proposición de orden político que altera radicalmente las concepciones de la izquierda fundamentada en la relación entre los conceptos clase, Estado, partido. Esta proposición sostiene que la estructura de clases en Chile ha cambiado como consecuencia de la política económica de la dictadura ello simboliza el éxito del proceso de modernización a que ha sido sometida la sociedad chilena. Las consecuencias de dichas modernizaciones se relacionan con el hecho de que las transformaciones estructurales han transferido al mercado la función reguladora del

conflicto social que en la fase precedente (la del Estado de compromiso, expresión política de la industrialización dependiente por sustitución de importaciones) había sido cumplida por los partidos políticos del Estado desarrollista. El corolario político de este diseño es la supuesta infuncionalidad de los partidos políticos respecto de las organizaciones sociales y de las clases en la medida en que fueron constituidos como instrumento de negociación frente al Estado, todo ello en beneficio de la reivindicación de la autonomía de base de los movimientos sociales (autonomía respecto de la infuncionalidad de los partidos). Las transformaciones puestas en práctica por el Estado autoritario no deben ser sólo leídas como un mero desmontaje del modelo societal precedente, sino el del establecimiento de un nuevo orden social con capacidad de autoreproducción. Las características estructurales que se derivan de este nuevo orden están constituidas por lo que se ha designado como el desafío de la modernización que pone a prueba la consistencia práctica del paradigma teórico de la izquierda chilena: la disminución de los obreros industriales por relación a las dimensiones de los índices de la población económicamente activa, a la agudización de su heterogeneidad interna y al debilitamiento consecuente de su peso estratégico en la sociedad, y el crecimiento substancial de los grupos medios como resultado del desarrollo del sector terciario de la economía.³⁶

Son estos procesos los que abren la posibilidad de la puesta en discusión de la legitimidad del paradigma general de la izquierda chilena y que se fundamentaba en la teoría de la expansión creciente de la clase obrera, de su creciente poder estratégico en la sociedad y la economía y de su condición de soporte esencial en los antagonismos centrales del capitalismo dependiente, constituyendo el único proyecto histórico viable para la superación de dichas contradicciones. El bloqueo de la interpretación de la izquierda parece haber provenido de su incapacidad para imaginar un proceso de expansión y profundización capitalista sin industrialización.

Sin embargo, si se examina la interpretación y el análisis político que la oposición política heredera de la Unidad Popular formula en el período 1973-1981 respecto de la dictadura militar, es posible constatar que ella permanece en su visión tradicional de la sociedad chilena. El estudio de la oposición en el período señalado constituye el objeto del capítulo siguiente.

NOTAS

1. Boris Goldenberg, *"Kommunismus in Lateinamerika"*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1971. También se puede consultar el trabajo mucho más general de Michael Lowy, *"Le marxisme en Amérique Latine de 1909 à nos jours"*. Maspero, París, 1980.
2. Samir Amín, *"Classe et nation dans l'histoire et la crise contemporaine"*, Editions de Minuit, París, 1979. Además debe considerarse la clásica introducción al libro de Babakar Sine, *"Impérialisme et théories sociologiques du développement"*, Editions Anthropos, idép. París, 1975.
3. Víctor Haya de la Torre, *"El Movimiento obrero en América Latina"*, Ediciones obreras, 1953.
4. A. M. Cambeno, *"Perspectivas del socialismo en México"*, La Voz de México, 25 de noviembre de 1945.
5. Carlos M. Cox, "Reflexiones sobre José Carlos Mariátegui" en *"El Marxismo latinoamericano de Mariátegui"*, ediciones Crisis, Buenos Aires, 1973. Debe también considerarse la obra clásica de Mariátegui, *"Siete ensayos de interpretación de la realidad chilena"* (1928), editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1955.
6. La industrialización por sustitución de importaciones se caracteriza por la producción de bienes industriales de consumo directo, por la participación dominante del capital nacional sometido a modelos de dependencia tecnológica, control extranjero de los sectores primario exportadores y por el establecimiento de un modelo de importaciones donde predominan los bienes de producción y materias primas industriales.
7. Liliana de Riz, *"Sociedad y política en Chile"*, Universidad Autónoma de México, 1979.
8. Enzo Faletto, *"Clases sociales, crisis política y problemas del socialismo en Chile"*, FLACSO/ELAS, 1973. James Petras, *"Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno"*, editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1971.
9. Julio César Jobet, *"El partido Socialista de Chile"*, editorial Prensa Latinoamericana, Santiago, 1971.
10. Liliana de Riz, obra anteriormente citada, pág. 57-58.
11. La misión Klein-Saks establece en 1956 un vasto plan de estabilización de la economía chilena basado en un enfoque ortodoxo que seguía las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Con este objeto se puede ver los trabajos de Tomás Moulian *"Desarrollo político y Estado de compromiso. Desajustes y crisis estatal en Chile"*, Colección Estudios Cieplan, 8 de julio de 1982 y el libro de César Muñoz, *"Proceso a la industrialización chilena"*, ediciones nueva Universidad, Santiago de Chile, 1972. También se puede consultar el libro de ICHEH, *"Chile 1940-1975. Treinta y cinco años de discontinuidad económica"*, Santiago, 1978.

12. Textos clásicos que hacen referencia a este punto son los de Galo González *"Décimo Congreso del Partido Comunista de Chile"*, abril de 1956; y el libro de John Reese Stevenson, *"The Chilean Popular Front"*, Greenwood, 1942.
13. Raúl Prebisch, *"El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas"* (mimeografiado, Santiago de Chile, 1949).
Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), *"Estudio económico de América Latina"*, 1949.
Octavio Rodríguez *"La teoría del subdesarrollo de la Cepal"*, Siglo XXI editores, México, 1980.
Gabriel Guzmán, *"El desarrollo latinoamericano y la Cepal"*, editorial Planeta, Barcelona, 1976.
14. Carlos Ominami, *"Critique des théories du développement en Amérique Latine"*, Revue Tiers Monde, Tome XX-N.80, 1979.
15. Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), *"El pensamiento de la Cepal"*, editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1969.
16. Fernando H. Cardoso, *"La originalidad de la copia: la Cepal y la idea del desarrollo"*, Revista de la Cepal, segundo semestre de 1977, pág. 1.
17. Fernando H. Cardoso, obra citada anteriormente, pág. 24.
18. El texto clásico que inicia la sistematización sobre el debate referido a las "situaciones de dependencia" es el libro de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, *"Dependencia y desarrollo en América Latina"*, Siglo XXI editores, México, 1969.
19. El mejor trabajo sobre este objeto sigue siendo el artículo de Maria de Conceição Tavares, *"Auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones en el Brasil"*, Boletín Económico de América Latina, vol. 9, nro. 1, 1964.
20. *"The New Authoritarianism in Latin America"*, David Collier Editor, Princeton University Press, 1979.
21. Fernando H. Cardoso, *"Estado y sociedad en América Latina"*, ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.
Theotonio Dos Santos, *"Brasil: la evolución histórica y la crisis del milagro económico"*, editorial Nueva Imagen, México, 1978.
Ruy Mauro Marini, *"Subdesarrollo y Revolución"*, Siglo XXI editores, México, 1969.
Vania Bambirra, *"El capitalismo dependiente latinoamericano"*, Siglo XXI editores, México, 1974.
Fernando H. Cardoso, *"As idéias e seu lugar. Ensaio sobre as Teorias do desenvolvimento"*, Cuadernos CEBRAP nro. 33, Petrópolis, 1980.
Florestan Fernandes, *"Apontamentos sobre a 'Teoria do autoritarismo'"*, editora Hucitec, São Paulo, 1979.
Florestan Fernandes, *"La revolución burguesa en Brasil"*, Siglo XXI editores, México, 1978.
Luiz C. Bresser Pereira, *"Le sous-développement industrialisé"*, revue Tiers Monde, tome XVII, nro. 68, 1976.

22. Guillermo O'Donnell, *"Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático autoritario"*, Documento CEDES/CLACSO, nro. 1, Buenos Aires, 1975.
23. Fernando H. Cardoso, *"Les Etats-Unis et la théorie de la dépendence"*, Revue Tiers Monde, Tome XVII, nro. 68, 1976.
Gabriel Palma, *"Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situations of Underdevelopment?"*, World Development, vol. 6, 1978.
24. Fernando H. Cardoso, *"Ideología de la burguesía industrial en sociedades dependientes"*, Siglo XXI editores, México, 1971.
25. Fernando H. Cardoso, *"Sociologie du développement en Amérique Latine"*, Editions Anthropos, París, 1969.
26. Theotonio Dos Santos, *"Imperialismo y dependencia"*, Editorial Era, México, 1978, pág. 305.
27. Sobre el particular se puede ver la síntesis referida a la discusión de esta problemática formulada por Vania Bambirra en su libro, *"Teoría de la dependencia: una anticrítica"*, serie Popular Era, México, 1978.
28. Sobre este objeto se pueden consultar los trabajos de Aníbal Quijano, *"Crisis imperialista y clase obrera en América Latina"*, Lima, 1974.
"Dependencia, Urbanización y Cambio Social en América Latina", ediciones Mozca Azul, Lima, 1977. *"Imperialismo y Estado en el Perú 1890-1930"*, Mozca Azul, Lima, 1978.
29. Theotonio Dos Santos, *"Dependencia y cambio social"*, Centro de Estudios Socio-económicos, Universidad de Chile, Santiago, 1970.
Una buena síntesis de esta discusión se encuentra en el libro de David Goodman y Michael Redclift *"From Peasant to Proletarian. Capitalist Development and Agrarian Transitions"*, Camelot Press, England, 1981. También se puede considerar el libro de Ernesto Laclau, *"Política e Ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo y populismo"*, Siglo XXI editores, México, 1978.
30. Una lectura heterodoxa de la problemática de las relaciones entre imperialismo y subdesarrollo se encuentra en el libro de Serge Latouche, *"Critique de l'imperialisme"*, editions Anthropos, París, 1978.
31. Tilman Evers, *"El estado en la periferia capitalista"*, Siglo XXI editores, México, 1979, pág. 17.
32. Se pueden ver los trabajos de Javier Martínez Bengoa, J.J. Brunner, M. Lanzarotti y C. Ominami, José Bengoa, Ricardo Lagos, Guillermo Campero, Manuel A. Garreton y E. Tironi, publicados bajo el título *"Chili: un project de révolution capitaliste"*, Revue Amerique Latine, num. 6, 1981, CETRAL, París.
33. Manuel A. Garreton, *"Procesos políticos en un régimen autoritario. Dinámicas de institucionalización en Chile 1973-1980"*

- FLACSO, Santiago de Chile, 1980. Para el análisis de las bases sociales y los condicionamientos socio-políticos de la reestructuración monetarista del capitalismo dependiente chileno se puede ver el trabajo de Tomás Moulian y Pilar Vergara, *"Estado, ideología y políticas económicas en Chile 1973-1978"*, Colección Estudios Cieplan, nro. 3, Santiago de Chile, junio de 1980. Para el estudio de las transformaciones en las funciones económicas del Estado es necesario considerar el trabajo de Pilar Vergara, *"Las transformaciones de las funciones económicas del Estado en Chile bajo el régimen militar"*, Colección Estudios Cieplan, nro. 5, Santiago de Chile, julio de 1981. En la perspectiva del estudio del movimiento obrero bajo el período autoritario existe el trabajo de Guillermo Campero y José A. Valenzuela, *"El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario"*.
34. Un trabajo representativo de esta óptica es el libro de Folker Fröbel, Jürgen Heinrichs y Otto Kreye, *"La nueva división internacional del trabajo. Para estructural en los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo"*, Siglo XXI editores, México, 1980.
 35. Pilar Vergar, *"Apertura externa y desarrollo industrial en Chile: 1973-78"*, Desarrollo económico, nro. 80, vol. 20, Argentina, 1981.
 36. En esta dirección es necesario considerar el trabajo de Javier Martínez y Eugenio Tironi, *"Clase obrera y modelo económico (Un estudio del peso y la estructura del proletariado en Chile, 1973-1980)"*. Existe una versión resumida de los mismos autores y también policopiada bajo el título *"La clase obrera en el nuevo estilo de desarrollo: un enfoque estructural"*, Santiago de Chile, julio de 1981.

CAPITULO SEXTO

La oposición política al Estado autoritario.

La oposición política del período 1973-80 está constituida de manera global por el espectro político-partidario que existió en el régimen democrático. Se expresa en la participación de todos los partidos políticos que constituyeron la Unidad Popular y la posterior incorporación a la oposición de la Democracia Cristiana que sustentó, de manera inicial, el golpe militar. Lo que dicha oposición debe enfrentar es la constitución de un terrorismo de Estado. El fundamenta su existencia en la capacidad de movilizar todos los recursos de la violencia política y su estabilidad, en la posibilidad de profundizar el genocidio político de la oposición. Esto se expresa en la ferocidad sistemática del aparato militar y político del Estado, en el empleo de la brutalidad física (tortura), el asesinato anónimo (desapariciones), la eliminación de la libertad física y de opinión (encarcelamiento político), el exilio y la deportación. La ampliación de su poder pasa a depender de la generalización de la represión que amplía sistemáticamente el círculo de las víctimas del régimen. Su objetivo político específico en este período está constituido por el intento de eliminación y liquidación del sistema tradicional de partidos políticos.

Frente a dicha situación, la oposición de izquierda intenta subsistir políticamente en un contexto de clandestinidad en donde el problema principal surge de la necesidad de adaptar los aparatos partidarios que se habían organizado en el período de democracia parlamentaria a las nuevas condiciones de represión. Su evolución política estratégica, la necesidad de reformulaciones teóricas, su recomposición organizativa adquieren en este contexto una gran lentitud e ineficiencia. La segmentación política de ella y sus divisiones son el resultado 'lógico' de la dificultad de adaptación y de la forma centralizada en que debe ser enfrentada. Esto último conduce a una enajenación creciente de la so-

ciedad y dificultan su capacidad de lectura real de las transformaciones que ella sufre bajo el Estado dictatorial. En muchos casos ello da como resultado la exacerbación ilimitada de una manera leninista ortodoxa de conceptualizar la nueva realidad, marginando o eliminando en el interior de muchos partidos a aquellos sectores que intentan formalizar una renovación teórica y política más funcional a la nueva situación estructural e ideológica de la sociedad. En este contexto gana terreno una versión estructuralista del marxismo que se expresa en la acentuación del economicismo que conducen a la izquierda a una gran rigidez teórica y política, lo que es particularmente evidente cuando se asume la discusión referida al "rol de los sectores medios". Ello generó una "ilusión de conocimiento" que reafirma la certeza del "triunfo final de socialismo" de manera independiente de la conceptualización rigurosa de la realidad político estructural de la sociedad. Esto último se expresa en la sustitución del debate estratégico por el convencimiento de la caída inevitable de la dictadura, identificando la reconstrucción del aparato partidario con la recomposición de la sociedad. Esto explica la relevancia que asume la discusión referida a la constitución de frentes antifascistas y alianzas que subordinan el desarrollo político de la izquierda a los avatares de la Democracia Cristiana. De allí que sea imposible enfrentar un análisis descriptivo de la evolución política de la izquierda en el período sin considerar el desarrollo político de la Democracia Cristiana, y justifica que el análisis conceptual de la oposición en general lo iniciemos con un estudio referido a las posiciones políticas de dicho partido en el mismo período.

La sustitución del debate estratégico por la certeza de la caída inevitable de la dictadura se constituye en el resultado "lógico" de una conceptualización de la dictadura como fenómeno puramente contrarrevolucionario, carente de proyecto histórico global de reestructuración capitalista del funcionamiento de la sociedad. Esta etapa se cierra con el plebiscito constitucional de 1980, y como resultado de ello (a lo que se suma el cambio de línea táctica del Partido Comunista y la crisis del Partido Socialista de abril de 1979), se abre un amplio proceso no sólo de debate estra-

tégico sino de renovación teórica y política de la izquierda. Este último proceso constituirá el tema central del capítulo séptimo. En las páginas siguientes intentamos dar cuenta del desarrollo de la reflexión política de la oposición y de las alternativas por ella planteadas. Trato de recuperar un conjunto de documentación política que en el futuro puede constituirse en una fuente esencial para el estudio de uno de los períodos más dramáticos de la historia nacional. Sin embargo, en estas páginas está ausente el estudio de la segmentación y fraccionamiento político que han sufrido la totalidad de los partidos de oposición, en la medida en que lo que pretendemos no es la elaboración de una historia de los partidos políticos bajo el Estado autoritario, sino la reconstrucción de las reflexiones globales en las cuales apoyaron su difícil existencia política. De ahí que el acento puesto en una lectura de sociología política es evidente. Tampoco intentamos formalizar un modelo explicativo que explicité las razones de las dificultades que la izquierda encontró para cumplir con el objetivo de toda oposición política a una dictadura: el derrocamiento de la dictadura misma. A pesar de ello, es posible hacer constar un hecho básico: la gran dificultad evidenciada por las organizaciones políticas y sus estructuras para lograr un reequilibrio y alcanzar una conceptualización globalizadora de la nueva realidad de una sociedad sometida a la ferocidad radical de un Estado autoritario. Los partidos políticos son "estructuras pesadas" y las "auto-críticas" necesarias de su pasado político son casi siempre formales y funcionales a las realidades de la coyuntura y, en la mayoría de los casos ellos están destinadas a asegurar su supervivencia y la de sus grupos de dirección. De allí que los partidos de oposición evidencian grandes dificultades para recuperar la iniciativa política frente al Estado.

6.1. Democracia Cristiana y Estado autoritario: la primera crisis de apoyo político de la dictadura.

La actitud inicial de la Democracia Cristiana frente al establecimiento de la dictadura militar en septiembre de 1973 puede

ser caracterizada como de semioposición-apoyo. Ello se expresa en su voluntad inicial de no transformarse en participante oficial del nuevo poder de gobierno, pero sin restar apoyo al nuevo régimen político que se instaura. La naturaleza contradictoria de dicha actitud se explica tanto por la participación de dicho partido en el bloque de oposición política que gestó el derrocamiento del gobierno constitucional, como por la polarización de posiciones internas de sus miembros respecto de la gestión política pre y post golpe militar. Su primera reacción oficial está contenida en la declaración emitida el 12 de septiembre de 1973, elaborada por la mesa ejecutiva presidida por el senador Patricio Aylwin y que excluye al único miembro que no compartiría los términos de dicho texto.

En dicha declaración se legitimaba la participación militar en virtud de que los hechos que vivía el país eran "consecuencia del desastre económico, el caos institucional, la violencia armada y la crisis moral a que el gobierno depuesto condujo al país, que llevaron al pueblo chileno a la angustia y la desesperación".¹ Paralelo al esfuerzo por responsabilizar al gobierno constitucional depuesto por la intervención militar, se intenta presentar ésta como ajena a la voluntad y deseo de las Fuerzas Armadas. Es evidente que con esto último se buscaba neutralizar, por lo menos teórica y verbalmente, cualquier prolongación del control militar del Estado, lo que era compatible con la idea de que era necesario colaborar con las nuevas autoridades. Esto era aún más evidente si se considera que la directiva de dicho partido participaba en alguna medida de la creencia de que, después de un corto período de intervención militar, el heredero legítimo del sistema político y del Estado sería la Democracia Cristiana. Dicha intencionalidad política se formaliza en el texto de la citada declaración en los siguientes términos: "Los antecedentes demuestran que las FF.AA. y Carabineros no buscaron el poder. Sus tradiciones institucionales y la historia republicana de nuestra Patria, inspiran la confianza de que tan pronto sean cumplidas las tareas que ellos han asumido para evitar los graves peligros de destrucción y totalitarismo que amenazaban a la nación chilena, devolverán el poder

al pueblo soberano para que libre y democráticamente, decida sobre el destino patrio". Por otra parte, es evidente que a través de dicha declaración la Democracia Cristiana visualizaba el riesgo de una permanencia prolongada de los militares en el poder. Pero el estímulo de dicho riesgo le era atribuido a los afanes de grupos minoritarios que buscan "modelos regresivos o reñidos con la vocación democrática de nuestro pueblo".

Como testimonio de las contradicciones internas que generaba la política oficial de la Democracia Cristiana dirigida por Patricio Aylwin, surge el 13 de septiembre de 1973 una declaración de condena del golpe militar firmada por dieciseis dirigentes de dicho partido, encabezados por Bernardo Leighton. En dicha declaración se expresa que: "Condenamos categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo gobierno - por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido - fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en la defensa de la autoridad constitucional".² La responsabilidad del golpe de Estado debería, en el contexto de dicha declaración, ser asumida por el gobierno depuesto y por la oposición política: "La falta de rectificación, que en definitiva nos llevó a la tragedia, es de responsabilidad de todos, gobierno y oposición, porque el deber de mantener una democracia no puede ser eludido por nadie". Sin embargo, la responsabilidad mayor en el holocausto de la democracia chilena le es asignada al "dogmatismo sectario" de la Unidad Popular "que no fue capaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo", y a la derecha económica que "con fría determinación aprovechó los errores de la Unidad Popular" para producir las condiciones necesarias que imposibilitaran un consenso mínimo. La declaración "reitera la convicción profunda de que, dentro de los cauces democráticos, habríamos podido evitar en Chile la implantación de un régimen totalitario, sin necesidad de pagar el costo de vidas y los excesos inevitables en las soluciones de fuerza".

Ambas declaraciones fijarán la existencia de dos tendencias

políticas en el seno de dicho partido, y se expresarán en sus discusiones políticas futuras. Frente a la publicación en el Diario Oficial del decreto de clausura del Congreso Nacional del 24 de septiembre de 1973, Eduardo Frei y Luis Pareto, miembros de la Democracia Cristiana y presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente, emiten una declaración de capitulación el 28 de septiembre del mismo año. En ella aceptan dicha clausura sin forma alguna de resistencia moral ni política, en los siguientes términos: "El caos a que Chile fue conducido por una gestión insensata llevó inevitablemente a la quiebra de sus instituciones. Ninguna palabra ni actitud puede en esta hora cambiar los hechos. Lo único importante es pensar en Chile".³ Probablemente sea el documento de Radomiro Tomic, presentado ante el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana el 7 de noviembre de 1973, el que mejor exprese el carácter de la polémica interna de dicho partido.

En dicho documento se reafirma la idea contenida en la "Declaración de los dieciseis", de la cual el propio Tomic formaba parte, en el sentido de que la responsabilidad mayor respecto de la ruptura institucional correspondía al gobierno de Unidad Popular y a la derecha política y económica. Pero además se especifica la responsabilidad de la propia Democracia Cristiana en ello, que no puede "pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre institucional. La gravitación de lo que se hace o deja de hacer, cuando se controla el 40% del Congreso Nacional; el 30% del electorado nacional; 32% de los trabajadores organizados en la Central Unica de Trabajadores; 40% del campesinado y de las organizaciones juveniles chilenas; diarios, radio y televisión, cinco de las ocho Universidades del país... la gravitación, digo, de una fuerza políticosocial publicitaria de esta envergadura, tiene efectos decisivos por sus acciones o por sus omisiones".⁴ La responsabilidad política de dicho partido intenta ser establecida a través de tres hechos esenciales. El primero de ellos hace referencia a la constitución del nuevo gabinete ministerial del 9 de agosto de 1973 integrado por miembros de las FF.AA.. La participación de los militares en dicho gabinete fue

expresamente solicitada por el presidente del partido Patricio Aylwin en el primer día de conversaciones y diálogo de éste con el gobierno. Las designaciones ministeriales del almirante Montero y el general Ruiz fueron ratificadas y aceptadas por la directiva del partido como una demostración de garantía e imparcialidad del gobierno. "Sin embargo, dos o tres días más tarde, el PDC se desligó públicamente, mientras su diario y destacados voceros del partido solicitaban la renuncia de los ministros militares".⁵ El segundo hecho está representado por el apoyo que en el Congreso Nacional prestó la Democracia Cristiana a la "huelga de los camioneros", que logró paralizar el transporte de un millón de toneladas en un período de siete semanas. El autor reprocha la participación de dicho partido en términos de haber sido una "huelga absolutamente ilegal y profundamente inmoral a luz de la moral cristiana, por la desproporción entre la gravedad de los daños inferidos al bien común y la índole puramente material e interesada de las demandas".⁶ Finalmente, el texto rechaza la justificación al golpe militar contenida en la declaración oficial del partido formulada por su directiva el 12 de septiembre de 1973 y la ilegalización de los actos de gobierno proclamada por la Cámara de Diputados, recalcando el silencio del Congreso Nacional bajo control del partido respecto de la tentativa de golpe militar del 29 de junio y la aceptación sin protesta de la clausura de dicho Congreso.

Es interesante destacar en el presente documento la idea de que el término del gobierno de la Unidad Popular era inevitable, lo que no permite concluir necesariamente que el golpe de Estado fuese indispensable. La renuncia del general Prats, comandante en jefe del Ejército, como integrante del gabinete ministerial el 24 de agosto de 1973 marca expresamente el inicio del término del gobierno. "Pero el término del gobierno de la U.P. no tenía que producirse solamente y necesariamente por el pronunciamiento militar! Pudo haberlo sido por la renuncia de Allende - con o sin la renuncia conjunta del Congreso Nacional como alcanzó a proponerlo la Democracia Cristiana".⁷ El término del gobierno también pudo producirse por la desintegración de la propia Unidad

Popular, por los "excesos" de la extrema izquierda o por el "desorden" económico que hacía al gobierno extremadamente ineficaz a corto plazo. En esta dirección el golpe de Estado no era indispensable en la medida en que la "vía chilena al socialismo" era una "experiencia absolutamente agotada". La intervención militar tampoco puede ser considerada como un deber de las FF.AA. "En primer lugar, porque ello contradice la posición oficial, reiterada en numerosas ocasiones desde mayo en adelante, por la Directiva Nacional y el presidente camarada Aylwin de que la Democracia Cristiana estaba y estaría contra el golpe, venga de donde venga. Tal posición es incompatible con la afirmación posterior al 11 de septiembre de que las FF.AA. tenían el deber moral, en nombre de principios de la moral cristiana, de derrocar al gobierno".⁸ La utilización de los principios de la moral cristiana para legitimar el derrocamiento del gobierno constitucional sólo habría sido aceptable en el caso de que se estuviese en presencia de un gobierno tiránico y despótico. Por el contrario, el gobierno de Allende facilitaba la concreción del ejercicio de una amplia democracia, en donde incluso la conspiración legal era tolerada.

Es este último argumento el que permite rechazar (en el contexto del documento citado) la afirmación de que intervención de las FF.AA. puso fin a la eventualidad del establecimiento de una "dictadura marxista-leninista". Este aspecto había desempeñado un papel esencial en las discusiones internas del partido, particularmente en la Junta Nacional de mayo de 1973. En dicha reunión, el 55% de sus miembros concluyó en que este riesgo constituía el peligro más inminente de los representados por el gobierno constitucional. Sin embargo, en el presente texto se insiste en que el peligro esencial consistía en la posibilidad de desarticulación del funcionamiento institucional de la democracia chilena que imposibilitaría su restablecimiento a corto plazo. El peligro fundamental consistía entonces en la "creciente y evidente parálisis institucional, por la gravedad del enfrentamiento sistemático entre los poderes del Estado, y en la profundidad y extensión de la insurgencia generalizada en la base económica, profesional, técnica, gremial, sindical y juvenil del país".⁸ Se

descartan además las especulaciones políticas estimuladas por la derecha política en el sentido de que el gobierno constitucional buscaría superar su propia crisis a través de la ejecución de un autogolpe. Para ello, sostiene el documento citado, se carecía en el interior de la izquierda de la "unidad indispensable" y de la capacidad militar operativa necesaria.

Es evidente que el presente documento explicita una severa crítica en contra de la política de aceptación y de conciliación con el golpe militar, que alcanza incluso a la declaración del 27 de septiembre emitida por la propia directiva nacional del partido. En dicha declaración se caracteriza al régimen instaurado como dictadura y se "expresan serias reservas" respecto de él. No se excluye de dichas críticas al equipo demócrata cristiano que dirige el diario oficial del partido, *La Prensa*, que desarrolló una posición aún más progolpista que la propia directiva del partido. En la sesión del Consejo Nacional del 7 de noviembre, el autor del presente documento hace un esfuerzo considerable por exigir coherencia y consecuencia política al presidente Patricio Aylwin en beneficio de una posición de rechazo de la dictadura establecida: "Estos juicios dados hoy, al empezar esta sesión por el camarada Aylwin, son claros y definidos. Los anoté: 'Este es un gobierno - dijo - que está atropellando los derechos humanos y cuya política tiene una orientación bastante regresiva'. El problema reside en la necesidad de dar continuidad y coherencia a una política que se fundamente en un juicio así, sin incurrir en contradicciones que al final dejan todo peor que antes".⁹

El intento por formalizar una caracterización relativamente sistemática del modelo económico que la dictadura militar intenta aplicar desde su instauración no escapa a la consideración de dicho documento. La orientación económica inicial de él es definida como de "capitalismo clásico", el más "duro y crudo" de los que existen en América Latina. Dicha apreciación se fundamenta en la crítica de la derogación de los sistemas de control de precios y la eliminación del sistema de reajustes legales de sueldos y salarios decretadas inicialmente por la dictadura. A ello se agrega

el rechazo del deseo oficial de otorgar garantías y privilegios de todo tipo a fin de promover las inversiones privadas y extranjeras. Se resalta además el hecho de que el modelo económico inicialmente propuesto ha sido intentado reiteradas veces en Chile por los gobiernos más reaccionarios y conservadores. Los resultados son conocidos: "inflación; endeudamiento externo; redistribución del ingreso negativo para el trabajo y desmesuradamente favorable para el capital; alto índice de paro, desigualdades crecientes, irritantes y desmoralizadoras para la conciencia pública, entre el pequeño porcentaje de los favorecidos y el inmenso número de los sacrificados por una política semejante de un país pobre, de economía insuficiente, sin elasticidad en sus procesos reguladores de mercado, con un pueblo en que el 60% de los niños menores de 6 años viven permanentemente desnutridos como acaba de revelarnos en este mismo mes de octubre la investigación sobre la alimentación del país...".¹⁰ La diferencia substancial con los intentos anteriores por aplicar políticas económicas que conducen a estos resultados proviene del hecho de que ahora será aplicada sin el contrapeso necesario de la presencia de un sistema político democrático. Nada permite esperar que la racionalidad teórica del capitalismo pueda conducir a resultados positivos en el nivel de las igualdades sociales necesarias. El capitalismo teórico es incompatible con las exigencias de la realidad chilena y su aplicación exacerbada conduciría a "peligrosas reacciones sociales". En este intento de caracterización de la política económica aplicada el autor termina recordando que, hace "ya muchos años, yo diría desde su fundación, la Democracia Cristiana denunció el capitalismo, y su visión del orden nacional, su fundamentación teórica y sus exigencias prácticas, como contrarias al interés del país, del pueblo y de la moral cristiana".¹¹

Sin embargo, el radicalismo crítico inicial formulado por el presente documento es sustituido por un pragmatismo político que termina por disolver el carácter aparentemente progresista de aquél. Ello se expresa en una ideología de aceptación de la dictadura en beneficio de la posibilidad de que en una segunda etapa

dicho partido pueda desempeñar un papel protagónico de reemplazo del régimen como consecuencia de sus dificultades a corto plazo. Es esto lo que hemos denominado y caracterizado como de semi-oposición-apoyo. Dicho pragmatismo se concreta en el momento en que el documento debe responder sistemáticamente a la pregunta de cuál debe ser la posición de la Democracia Cristiana frente a las Fuerzas Armadas a corto plazo.

Cuando se intenta responder a esta interrogante, se considera explícitamente la posibilidad de una prolongación de la gestión de la FF.AA. en el gobierno. La presencia de ellas en el gobierno puede ser considerada como positiva y, más aún, como indispensable "para hacer efectivamente posible la construcción de un tipo de sociedad mucho más justa, dinámica y unificadora de la nacionalidad".¹² Más aún, es considerado comprensible y previsible que ellas adopten el esquema de la derecha económica y se vinculen a sus representantes políticos para la concreción de dicha política. Pero es necesario observar una no identificación con esta primera etapa del gobierno y ello se fundamenta en razones "patrióticas y respetables". Esta primera fase es necesariamente transitoria en la medida en que dicha política económica sólo podrá ser sostenida en un plazo muy breve, y de su fracaso las FF.AA. podrán comprobar su inaplicabilidad a la realidad de Chile. Cuando dicha situación logre producirse se iniciará la segunda etapa y en ella la obligación política del PDC se presenta como el "abrir al país y a los propios militares, una perspectiva política utilizable por ellos, el pueblo y nosotros, cuando la opción que ahora ensayan haya demostrado su improcedencia y necesiten un esquema sustitutivo de ideas, de metas, de métodos y de composición de fuerzas sociales como respaldo a la gestión del gobierno militar".¹³ La ingenuidad política y el pragmatismo exacerbado están sin duda en la base de dicho razonamiento político. Es esto lo que permite sostener que a pesar del desacuerdo con las medidas económicas y la crítica llevada a cabo respecto de ellas, es indispensable no denunciar o atacar las medidas asumidas en beneficio del mantenimiento de relaciones favorables con las FF.AA. para garantizar la efectividad de la colaboración en la segunda etapa. Las condiciones para garan-

tizar dicha participación son explicitadas por el propio texto en los siguientes términos: "comparto lo dicho por Aylwin en orden a que no debería la D.C. atacar a la actual junta militar o a su política en términos de ser y sentirnos enemigos de los militares... lo cual nos impediría jugar el papel fundamental que, para el bien de Chile, deberíamos tener en la segunda etapa".¹⁴

Cuando se plantea la problemática de las perspectivas políticas de la segunda etapa del gobierno militar y de su transformación posterior, la ingenuidad política o el oportunismo teórico arrasan el equilibrio del razonamiento propuesto en las primeras páginas del texto. Se convoca a trabajar en la elaboración de un gran consenso que dé origen a un esquema político que posibilite la combinación de los "valores democráticos", con "estructuras socialistas" de organización de la economía, el Estado y la Sociedad. La composición de fuerzas que sostendría en el nivel de gobierno dicho consenso sería "la izquierda de inspiración humanista cristiana, las Fuerzas Armadas y la izquierda de inspiración marxista laica". La compatibilización entre democracia y socialismo es presentada como la tarea histórica decisiva del futuro de la sociedad chilena. Basta recordar que exactamente ese fue el propósito y el contenido esencial logrado por los tres años de puesta en práctica de los que se designó como "vía al socialismo". Dos elementos esenciales favorecen la posibilidad de materialización de dicho consenso. El primero de ellos está explícitamente representado por la existencia del P.D.C., que es definido en el texto como un partido "socialista, comunitario, pluralista y democrático". Sin embargo, la interrogante referida al hecho de por qué dicho partido en el período de su gobierno (1964-70) no materializó el socialismo citado y, en cambio, asumió un modelo de modernización profundo que garantizaba la profundización del desarrollo del capitalismo, queda sin respuesta. El segundo elemento está representado por el vacío político dejado por la represión de los partidos políticos integrantes de la Unidad Popular y ello puede ser aprovechado en beneficio de la alternativa formulada. Esto último es expresado en los siguientes

términos: "La terrible derrota, con las armas en la mano, sufrida por las fuerzas marxistas el 11 de septiembre, ha dejado disponible, por algunos pocos años - breves, pero ; cargados de densidad histórica potencial! - lo substancial de las fuerzas marxistas chilenas (obreros, campesinos, juventud, cuadros profesionales, culturales y técnicos) para una política de fundamentación esencialmente democrática y de expresión socialista en las estructuras económicas e institucionales".¹⁵

La materialización del consenso citado no sólo depende de los dos elementos ya nombrados; además es necesario ejecutar tareas políticas. Estas deben estar destinadas a crear condiciones favorables a la transición pacífica hacia la segunda etapa en el seno de las FF.AA. Pero ella sólo tendrá significación histórica si se logra eliminar el apoyo que el gobierno militar tiene en la derecha económica y política, en beneficio de un apoyo de los "trabajadores y el pueblo" a dicho régimen. Además, deberían sustituirse el carácter dictatorial del ejercicio de la autoridad en favor de una participación democrática. Sin embargo, para hacer posible la participación del partido en la segunda etapa es necesaria la consolidación de un principio que es reiterativo en el texto: la idea de que no se debe atacar sistemáticamente al gobierno ni "proyectarse como su enemigo" y paralelamente evitar cualquier forma de identificación del partido con los hechos y políticas de la primera fase.

La contradictoria y ambigua posición del PDC respecto de la dictadura militar que hemos definido para esta etapa como de semioposición-apoyo se ve acentuada si se considera el texto de Patricio Aylwin, de septiembre de 1975 titulado "Memorandum sobre la situación chilena". Para evaluar la dimensión política y "moral" de dicho texto es necesario tener presente que ya se había verificado la expulsión del país por parte del gobierno, del ex-senador y ex-presidente del partido Renán Fuentealba que integraba la denominada ala izquierda de la Democracia Cristiana. En declaración oficial firmada por 69 relevantes miembros del partido (entre ellos Eduardo Frei) se evita responsabilizar directa-

mente a la dictadura militar y se recurre a una afirmación indirecta: "Llegamos a pensar que elementos incrustados en el gobierno quieren deliberadamente buscar una situación de conflicto irremediable".¹⁶ Por oposición a ello, el lenguaje de la declaración oficial de la "Junta de Gobierno" es explícita y categórica: "el señor Fuentealba ha tenido la incalificable falta de patriotismo de formular a una agencia extranjera declaraciones que se suman a las falsas acusaciones de que los derechos humanos no están siendo respetados en nuestro país... No resulta, en verdad, extraña la actitud del señor Fuentealba, si se recuerda que el día 13 de septiembre de 1973 suscribió una declaración junto a otros dirigentes del PDC (hoy en receso), entre ellos el señor Bernardo Leighton en la cual se condena categóricamente el derrocamiento del que califican como "Gobierno Constitucional de la Unidad Popular".¹⁷ Es preciso recordar que Bernardo Leighton intentará ser asesinado por la policía secreta de la dictadura en Roma en mayo de 1975, con los mismos métodos que fueron aplicados en el asesinato del general Carlos Prats en su exilio de Buenos Aires y del ex-ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende Orlando Letelier en Washington.

En este contexto Patricio Aylwin, relevante opositor D.C. al gobierno de Allende, en el "Memorandum sobre la situación chilena" hace un llamamiento a superar los enfoques polarizados extremos sobre la situación del país. Debe superarse la imagen en "blanco y negro" que de ella se tiene y esto debe ser válido tanto para el gobierno como para sus críticos: "la tesis básica del gobierno de justificarlo todo con lo que ocurría bajo el régimen anterior y con la amenaza comunista, de desacreditar al sistema democrático como corrompido y estéril y, consiguientemente, de presentar como indispensable un período indefinido de dictadura para "extirpar el marxismo" y para "cambiar los hábitos políticos de los chilenos", son tan poco serias como las tesis de los opositores externos, que idealizan al gobierno de Allende como ejemplarmente democrático, presentan el golpe militar como la más injustificada y criminal confabulación de "fascismo" e "imperialismo", exageran la descripción de las brutalidades del régimen y

preconizan un "frente unido antifascista" como camino de restauración democrática".¹⁸ El razonamiento contenido en este documento expresa también el paso a una nueva etapa denominada como de "independencia crítica y activa" frente al gobierno.¹⁹

La profundización de la línea de oposición política del PDC, expresada en la evolución de su posición de "semioposición-apoyo" a la de "independencia activa y crítica", se hace explícita en los informes de Andrés Zaldívar y Tomás Reyes (diciembre-enero de 1976) a propósito del cese de funciones del presidente del partido y su sustitución por Andrés Zaldívar. En el primero de dichos informes se señala la necesidad de la redemocratización como el objetivo fundamental del nuevo proyecto social a que dicho partido debe aspirar.²⁰ Dicho proceso de redemocratización o de transición a la democracia, es definido como esencialmente gradual y sin ruptura de continuidad con el punto de partida representado por la presencia del Estado autoritario. El énfasis en el gradualismo y el rechazo del principio de ruptura se fundamenta en el supuesto de que toda forma de ruptura radical favorecería esencialmente las posibilidades de acceder al poder de los sectores "antidemocráticos primitivamente derrotados". El gradualismo es por tanto la alternativa más eficiente y funcional a la posibilidad de conquista del Estado por parte del PDC. Bajo esta perspectiva, el gradualismo no implica la postergación de las etapas iniciales necesarias para el restablecimiento democrático, sino por el contrario, ellas pueden ser asumidas en la etapa actual. Persiste aún la convicción implícita de que es posible esperar una evolución del régimen hacia formas de convivencia que favorezcan progresivamente la instauración de un sistema político democrático. Para la obtención de dicho objetivo, es necesario romper el círculo vicioso que crea dificultades a la "anticipación democrática" y que está representado por el hecho de que el Estado imposibilita o dificulta el libre funcionamiento de las "organizaciones representativas del pueblo" y el funcionamiento deficiente o limitado de ellas favorecen la supervivencia de la dictadura. La ruptura de dicho círculo y la concreción de políticas que favorezcan la "anticipación democrática"

deben ir acompañadas por el abandono necesario de "ilusiones superestructurales, que confían en una salida que sea fruto de personas y contactos propios de la vida política pasada. Es necesario abandonar también las ilusiones tecnocráticas, que creen que una alternativa política real surge de la mera elaboración técnica de un programa de gobierno. Ilusiones catastrofistas, que esperan de la profundización de la crisis del actual gobierno la transición a la democracia. Ilusiones intervencionistas, que confían en que la presión de naciones extranjeras hará lo que no puede hacer la presión interna. Ilusiones voluntaristas, que plantean proyectos políticos quiméricos que sueñan con la unión de todos los hombres de buena voluntad en un pacto social cuya amplitud es la exacta medida de la realidad".²¹

La materialización de los objetivos descritos pasa necesariamente por la formalización de tres fases denominadas tácticas. La primera de ellas es definida como de "denuncia y testimonio" destinada a crear las condiciones de una "maduración de la conciencia pública" respecto de la naturaleza de la dictadura. La segunda está constituida por lo que se denomina "la persuasión democrática" que deberá extenderse a todos los componentes de la sociedad civil. La última está constituida por la construcción de una plataforma gubernamental, en donde el problema central está representado por el tipo de relaciones que se deben establecer con otras organizaciones políticas, bajo una perspectiva de acumulación de fuerzas sociales antidictatoriales. Este último aspecto abre el debate de la política de relaciones con otras fuerzas que debe ser asumida por el partido en la presente etapa. En primer lugar se explicita categóricamente el rechazo de las organizaciones políticas de tendencia fascista, incluyendo los esfuerzos de institucionalización de modelos de sociedad de tipo neofascista "que cualquiera sean sus perspectivas de crecimiento económico, instituya la desigualdad como criterio social y la atrofia de la vida cívica como modo de las relaciones entre los ciudadanos".²² Dicho rechazo incluye a los "grupos de izquierda revolucionaria partidarios de la vía armada". Su exclusión se fundamenta en el criterio de asignación a ellos de la responsabilidad en el establecimiento

de casi todas las dictaduras militares presentes en América Latina, confundiendo naturalmente lo secundario con lo esencial en el origen de este tipo de regímenes. Es evidente que en el caso chileno constituye una referencia directa, aunque no exclusiva, al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El efecto que dichas organizaciones han provocado en la vida política chilena se expresa en el fracaso de los proyectos de cambio social que se han intentado y en la hipertrofia casi necesaria de los aparatos policiales del Estado. Respecto de la Unidad Popular, se plantea la necesidad de mantener una política independiente que no busque ni dividir ni unificar dicho conglomerado político a partir de acciones o políticas concretas del PDC. Pero eso no debe excluir intentos necesarios de persuasión respecto de la necesidad de una revalorización más realista de la democracia política. Es necesario tener presente que en su fragilidad puede no resistir la crítica despiada en beneficio de una "redención social lejana e ilusoria".

Una mención especial es otorgada por el presente documento a lo que se denomina el "problema comunista", a fin de obtener una "consideración racional" de él. Por una parte esto es el resultado de que el eje central sobre el que se articula la propaganda e ideología de la dictadura sea su anticomunismo exacerbado y, por otra, de la discusión en el seno de la izquierda que ubica el problema de los derechos políticos del Partido Comunista como el problema central de "este tiempo". En este tipo de fundamento se apoya la "necesidad" para el Partido Demócrata Cristiano de explicitar su posición respecto del "debate abierto" en torno a los comunistas chilenos. En primer lugar es necesario eliminar dos enfoques erróneos en torno de los cuales gira dicho debate. El primero de ellos está constituido por la "cruzada anticomunista" abierta por el gobierno militar, que se fundamenta en la consideración del marxismo como una doctrina intrínsecamente perversa. En esta perspectiva el comunista es considerado como la negación por excelencia de la nacionalidad y, por tanto, un enemigo absoluto del Estado constituido. El problema central que representa para la Democracia Cristiana dicha consideración estatal del "problema co-

munista" proviene del hecho de que dichas afirmaciones se hacen extensivas a los sujetos u organizaciones políticas que no participan del contenido oficial que se le asigna al debate. El segundo enfoque erróneo proviene de la asimilación de "comunismo y lucha por la justicia social" que constituye el más viejo de los "sofismas" en que se apoya la conceptualización de los sectores más conservadores del país y "hasta el día de hoy sectores ultrareaccionarios en nombre del anticomunismo ocultan su política de retorno a los privilegios del pasado y destruyen las formas de participación y los valores por los cuales luchó y se movilizó el pueblo en contra del régimen de la Unidad Popular".²³

Como "alternativa" a estos dos enfoques se presenta la consideración demócrata cristiana. El contenido de ella parte de la afirmación explícita de que no es posible desconocer la existencia real del comunismo, su extensión geográfica, su diversidad y sus contradicciones. La expresión "local" de él representa por la existencia del Partido Comunista chileno se caracteriza por la aplicación de una concepción pragmática de la política que es incompatible con las concepciones de la Democracia Cristiana. Dicha incompatibilidad se expresa en una concepción 'unilateral' del problema de los derechos humanos, que sólo es extensiva a la consideración crítica del mundo capitalista. El principio de la 'dictadura del proletariado' y la sustitución de las mayorías nacionales por el concepto de 'Partido vanguardia del proletariado' en la concepción del cambio social acentúan dichas incompatibilidades hasta el punto de imposibilitar la concreción de un 'bloque histórico' o una política común con dicho partido. Es necesario advertir que las críticas formuladas son puramente teóricas y provienen de un autor que se ha caracterizado por una oposición despiadada a las políticas elaboradas por la izquierda chilena. Dicha advertencia se fundamenta en el hecho de que es imposible explicar el proceso continuo de desarrollo y profundización de la democracia chilena desde el establecimiento del "Estado de Compromiso" sin considerar el papel protagónico desempeñado en ella por los partidos de izquierda.

Respecto de la derecha política el texto de Zaldívar plantea la necesidad del surgimiento de nuevos grupos conservadores como resultado de la 'deserción democrática' de la derecha tradicional; dicha deserción no es sólo privativa de la derecha sino también debería incluir a la propia Democracia Cristiana, aspecto esencial que es omitido en el presente documento. La caracterización de la "deserción democrática" de la derecha tradicional se formula en los siguientes términos: "Después del 11 de septiembre de 1973, la dirigencia política de la vieja derecha conservadora liberal ha hecho una abyecta y masiva traición a sus tradiciones y a sus valores más esenciales. Capitaneados por oportunistas de los más diversos pelajes y por sectores nacionalistas, neofascistas e integristas católicos, ha apoyado al gobierno sin reservas, ha luchado por proyectarlo indefinidamente y ha guardado complicidad y silencio frente al terror policial. Del mismo modo, ha mostrado un deseo irracional de venganza y revancha social, que la ha llevado a intentar una monstruosa contrarrevolución que procure volver al país a una situación anterior a la primera administración del presidente Arturo Alessandri Palma, en 1920, mutilando el movimiento social, deshaciendo las reformas y conquistas de la masonería y restableciendo la prepotencia y la arbitrariedad convivencia".²⁴ La necesidad del surgimiento de nuevos grupos conservadores y liberales que constituyan una nueva derecha proviene de la convicción de que la existencia de una derecha política es esencial para la conservación y mantenimiento de la democracia cristiana como política de centro. Su inexistencia empujaría irremediabilmente a este partido a ocupar el vacío conservador por la eventual extinción de la derecha.

Como alternativa a las largas referencias respecto de las relaciones políticas que el partido debe asumir en base a los criterios formulados, se concluye en la necesidad del fortalecimiento de un amplio movimiento humanista que sea capaz de dar curso a un movimiento social autónomo y fuerte. Esto debería inspirar la política de alianzas que en el futuro se formulen, favorecida por el hecho de que su inspiración ideológica encuentra su fundamento en doctrinas no dogmáticas. Dichas alianzas deberían inspi-

rarse en un programa político cuyas variables centrales sean: la asignación de valor universal a los derechos humanos, tendencias justas e igualitarias respecto de la distribución del producto de la economía, pluralismo ideológico social y democracia política. La sociedad y los trabajadores requieren de la democracia como el único método 'disciplinado' en la participación de los beneficios del producto social.

En este contexto, el documento autoproclama a la Democracia Cristiana como la portadora oficial de una 'nueva izquierda', que constituye una aspiración desde el período del gobierno de Frei y que supone la condición de eliminación de la izquierda chilena de inspiración marxista. Pero también ella es considerada como el resultado del aglutinamiento en torno a la Democracia Cristiana de los sectores de la Unidad Popular que logren sobrevivir la represión política. Esta nueva izquierda deberá ser "el fruto madurado en la experiencia histórica y que en razón de ella, y no de convivencias tácticas, sea capaz de valorar la democracia política y de romper de manera inequívoca con los partidarios de la violencia revolucionaria".²⁵

Sin embargo toda renovación política o proyecto alternativo a la situación imperante sería ineffectivo si no se resuelve el problema del aislamiento recíproco entre militares y civiles. Más aún, si no se logra especificar eficientemente el problema de la participación futura de los militares, será dificultoso garantizar la estabilidad de la propia democracia. La separación entre el mundo civil y militar es considerada como el más grave de los errores políticos que han tenido lugar en el período de 1932 a 1973. Dicha situación ha sido acentuada por la propia dictadura, particularmente a través de la sustitución de un modelo de dictadura institucional hacia una de tipo personalista. Se considera que son precisamente las dictaduras personalistas las que más acentúan el aislamiento de los militares respecto de la sociedad civil. Ninguna solución de este problema pasa por la falsa esperanza del 'retorno de los militares a los cuarteles' para servir de apoyo a un gobierno personalista o democrático. Toda

solución positiva de él supone como condición esencial el reconocimiento y asignación a los militares de un "importante papel en la gran política del Estado". Dicha asignación supone una participación real en el desarrollo social, científico, económico y tecnológico. Las FF.AA. deberían tener una participación efectiva en el proyecto futuro de la sociedad chilena articulada en su función específica representada por la salvaguardia de la seguridad nacional. Sobre este último concepto es necesario abrir un debate que permita superar la utilización de él en beneficio del establecimiento de regímenes totalitarios. Dicho debate debería asegurar la coexistencia efectiva entre seguridad nacional y democracia, seguridad nacional y humanismo, ejército y civilidad.

Una de las condiciones esenciales para el cumplimiento del conjunto de los análisis propuestos esta representada por la renovación indispensable de los partidos políticos. Ello es aún necesario si se considera, como lo propone el documento, que la dictadura ha tenido un éxito relativo en su intento por "canalizar y despertar resentimiento en contra de ellos". Dicha renovación debe ser entendida como la recuperación necesaria del prestigio de los partidos y el cambio en el estilo de ejecutar la política debe ser un proceso paralelo a la formulación del proyecto histórico alternativo al Estado autoritario. La necesidad de que el Partido Demócrata Cristiano recupera para sí la 'confianza moral' y política constituye probablemente una de las más difíciles tareas si se recuerda su dramática participación en los procesos políticos pre y post dictadura militar.

El informe de Tomás Reyes Vicuña, "Nuestra fuerza política y social al servicio de la recuperación democrática y en defensa de la justicia", constituye un documento paralelo al presentado por Andrés Zaldívar.²⁶ Tomás Reyes reivindica la necesaria restauración democrática y rechaza la primitiva intención restauradora y ordenadora que las FF.AA. habían asumido frente al agotamiento del sistema institucional chileno. La presencia de la dictadura se expresa en que la ciudadanía ha quedado sin expresión y sin existencia social, "la Constitución y las leyes

interpretadas y vueltas a interpretar arbitrariamente; los Derechos Humanos gravemente atropellados; las instituciones sometidas a un desmantelamiento progresivo; el orden basado en el temor y no en el respeto a la ley; la implantación permanente del Estado de sitio y la indisimulada intención de perpetuarse en el poder, caracterizan el tiempo que vivimos. Todo ello en medio del retroceso del país, el empobrecimiento y desesperanza de los más débiles y el aislamiento internacional".²⁷ Se rechaza el proceso de privatización acelerada de la economía que no considera el resguardo necesario del interés público, conduciendo necesariamente a una concentración monopolista de impredecibles consecuencias políticas, económicas y sociales para el futuro del país. Dicha política ha pretendido ser identificada con la denominada 'Economía Social de Mercado', "sin que el mercado tuviera las características de amplitud, libertad y fluidez requeridas, ni contara con el apoyo de capital y tecnología necesarios. Además, para que fuera social, debía garantizar la libre participación de los trabajadores en la gestión económica y señalarse objetivos que significaran un mejoramiento real de los sectores medios y de más bajas rentas. Terminó siendo una política de exacerbado liberalismo económico que, por la aplicación del tratamiento del 'shock', se hizo más regresiva".²⁸ Se rechaza dicha política por considerarse contraria a los intereses de la nación y de los principios democráticos de gestión de la economía. La alternativa a ella está representada por la "necesidad de implantar una planificación democrática y de establecer una regulación general de la economía, con el fin de detener la inflación, promover las inversiones productivas, garantizar el trabajo estable e impulsar un desarrollo integral que asegure preferentemente la participación y el bienestar de los sectores laborales del país".²⁹

Respecto de la acción del Partido Demócrata Cristiano se formulan una serie de problemas que constituyen aspectos esenciales para considerar su comportamiento político frente a la dictadura. Se presenta una recapitulación de las agresiones de que ha sido objeto dicho partido por parte de la política dictatorial. Ello a pesar de que frente al Estado autoritario en el interior del

partido se han verificado posiciones de variado orden. Dicha diversidad debe confluir en una necesaria unidad política de sus actuaciones que debe operar sobre la base del principio de que deben ser expulsados de él aquellos que "opten por el colaboracionismo y acepten cargos políticos de la confianza del régimen u obtengan posiciones ilegítimas al amparo del poder".³⁰ Tres elementos deben considerarse como fundamento global de su política: el rechazo para integrar el Consejo de Estado, las denuncias sobre la situación del país y la polémica abierta en torno a la retirada del Pacto Andino, todas formuladas bajo la inspiración de la gestión ejecutada por Eduardo Frei. Por ello, a pesar del 'relajamiento aparente' de la violencia de la dictadura, se debe fortalecer la tendencia de creciente rechazo al régimen que se verifica en el interior del partido. Esto debería conducir a una política de 'independencia crítica y activa'. Pero la oposición derivada de ella no debe ser interpretada como una gestión política que parte del reconocimiento de la legitimidad del sistema establecido, sino de la exigencia de un cambio radical de la política del Estado o de su necesaria sustitución en favor de la recuperación democrática. Sin duda, el documento presentado por Tomás Reyes representa a los sectores minoritarios de la Democracia Cristiana que inicialmente rechazaron la legitimidad que dicho partido otorgó a la intervención militar y, por tanto, representa a los sectores antagónicos a la directiva oficial de dicho partido. La creciente discrepancia que en el interior del régimen se verifica es lo que justifica la aceptación de la incorporación a la directiva del partido de los sectores representados por el documento de Reyes y esto se expresa en los términos siguientes: "Ante un llamado para incorporarnos a la actual directiva decidimos participar porque se advertía la falta de presencia en ella de quienes habíamos propuesto distintos planteamientos".³¹

Respecto de las relaciones políticas se privilegia la afirmación de que la D.C. debe constituirse en vanguardia de un vasto movimiento de fuerzas sociales que dinamicen la lucha por la democracia. Ello debería superar la incapacidad evidenciada por las

fuerzas políticas en su función de canal adecuado de relación entre los movimientos sociales y las estructuras jurídicopolíticas del país. Dicha incapacidad constituyó una de las causas esenciales que explican la ruptura institucional que hizo crisis en septiembre de 1973. En ello debe consistir la necesaria renovación del partido en beneficio de un consenso nacional fundamentado en la base social. Sin embargo, la tarea que está presente para todos los partidos políticos existentes en la escena política chilena es la falta de debate público, como resultado de las restricciones impuestas a ellos por el Estado dictatorial. La consecuencia principal es el vacío político que se genera y que sólo favorece a aquellas organizaciones que pueden funcionar con relativa eficiencia dentro de la clandestinidad política y que margina las posibilidades de la Democracia Cristiana. Este último razonamiento ha sido frecuente en dicho partido cuando se hace referencia a los partidos de la izquierda chilena bajo el régimen autoritario, olvidando que la estructura orgánica de clandestinidad de dichos partidos y la eficiencia comparativa mayor que ella genera en comparación con la Democracia Cristiana se ve permanentemente neutralizada por el hecho de que la izquierda concentra el grueso de la violencia del régimen.

Se reconoce la existencia de la izquierda y de la Unidad Popular como representantes formales de 'las fuerzas marxistas', y aunque ella es considerada como una alianza de gobierno se abriga la esperanza de que cada uno de sus partidos constitutivos asumirán de manera individual "su propia misión y su propia responsabilidad" en la recuperación democrática. En este sentido la referencia que se hace a la izquierda en el presente documento es más positiva que la formulada por Zaldívar en el documento anterior. Pero se advierte que a pesar de las dificultades internas experimentadas por el Partido Comunista, la 'equivalencia potencial' establecida entre socialismo y Partido Comunista se ha visto fortalecida dentro de la Unidad Popular por el creciente poder adquirido por dicho partido en el exilio y en la gestión de la solidaridad internacional.

Las dificultades que generan las convicciones ideológicas del Partido Comunista de Chile respecto de la política de relaciones establecida por la Democracia Cristiana serían substancialmente resueltas si éste asume una vocación 'eurocomunista': "Al renunciar a la dictadura del proletariado, y al negarse a aceptar su dependencia política de la orientación soviética, el eurocomunismo se inserta en la realidad democrática del mundo occidental. Sin embargo, entre nosotros se insiste en mantener dichas posiciones. Mientras el PC se desenvuelve en medio de sociedades abiertas con democracia formal, como Francia e Italia, o en otras en proceso de democratización, como España y Portugal, y acepta las condiciones impuestas por esos pueblos, desconozca la realidad chilena que exige democracia como primera condición".³² Es evidente que a pesar de la conducta política reiterada por el Partido Comunista se insiste en sugerir explícitamente la existencia en su seno de una vocación 'intrínsecamente antidemocrática'.

A pesar de ello se advierte que principios esenciales que constituyen las aspiraciones democráticas de la sociedad son compartidos plenamente por extensos sectores políticos de inspiración socialista: "La experiencia histórica les ha hecho valorar la democracia como instrumento de cambio y lo que representa para la convivencia humana. En sus planteamientos está confirmado y se percibe también en la base social".³³ Más aún, en el contexto del documento citado, se reconoce el 'valioso aporte' representado 'por el gran marco' de la ideología socialdemócrata. Dicho marco constituye un campo favorable para la convergencia de distintas fuerzas sociales en la búsqueda de la restauración democrática. Lo que esencialmente dicha convergencia rechaza es que la formalidad democrática se emplea como 'instrumento de congelamiento' de los derechos económicos y sociales. El objetivo central de este razonamiento se expresa en el intento de proclamar la compatibilidad de las tesis políticas de la Democracia Cristiana con los postulados de la ideología socialdemócrata; dicha compatibilidad es representada en términos de identidad. Es evidente, a mi juicio, que el razonamiento positivo respecto de la socialdemocracia,

que nunca ha tenido una relevancia protagónica en el escenario político chileno, está destinado a crear un marco teórico 'progresista' al rechazo ulterior de las posibilidades abiertas por la izquierda para realizar acciones políticas conjuntas de resistencia a la dictadura. Dicho rechazo se expresa en los términos siguientes: "La Unidad Popular ha planteado la formación de un Frente Antifascista, un Frente Amplio o como se denomine, que implicaría un compromiso político con proyecciones hacia la reconquista del poder y su ejercicio ulterior. Tal propósito no corresponde a nuestro pensamiento. Lo rechazamos porque constituye una formalidad política que no interpreta el fenómeno vivido por Chile en los últimos años. En vez de abrir paso a la democracia podría servir incluso para perpetuar el régimen y robustecer a los partidarios de la represión. No está aún el análisis autocrítico a fondo necesario para precisar un acuerdo como el propuesto".³⁴

Dicho rechazo constituye un elemento de gran trascendencia política si se estima, como lo veremos en la parte correspondiente al análisis de la izquierda, que la Democracia Cristiana es considerada en el análisis político de los partidos de la Unidad Popular como esencial en la formalización de un amplio frente político y social destinado a la sustitución del régimen dictatorial. El rechazo de la izquierda proviene no sólo de la 'vocación política alternativista' de la Democracia Cristiana. El se fundamenta también en la suposición de que cualquier vinculación con los enemigos históricos de la dictadura (la izquierda) pueda desfavorecer su capacidad negociadora frente a la eventualidad de la sustitución del régimen. Al desmejorarse la 'capacidad negociadora' disminuiría su 'condición natural' de alternativa postdictatorial. Los frentes o alianzas que conducen a una 'retoma compartida' del poder lesionan el compromiso con la 'democracia abierta, pluralista y participativa'. Es decir, las posibilidades supuestamente efectivas de la conquista del poder por parte de la Democracia Cristiana. Pero el documento también rechaza restricciones posteriores de tipo legal que pueden ser impuestas a la participación política de la izquierda.

Sin embargo, al igual que el documento anterior, Reyes recalca la idea de que cualquier alternativa de redemocratización de la sociedad chilena, o política alternativa formulada por su partido, es insuficiente si no se considera una solución para el 'problema militar'. Se reconoce que las relaciones entre su partido y las FF.AA. se han caracterizado por 'una falta de comunicación y contacto humano', lo que ha conducido a una frialdad e incompresión recíprocas en dichas relaciones. A pesar de ello tanto el partido como ellas participan de nociones idealistas, solidaridad y patriotismo que se fundamentan en una composición social similar. Dicha similitud garantiza la identificación de inquietudes entre ambos. A pesar de ello, ningún cambio necesario en la situación del país podría lograr estabilidad si no se cuenta con ellas. Nada autoriza en las condiciones de existencia de la sociedad chilena el que las FF.AA. o sus jefes militares se arroguen el control de los poderes ejecutivos, legislativos o constituyentes del Estado nacional; "mayor trascendencia tiene este hecho si las Fuerzas Armadas se consideran con el derecho a ejercerlos indefinidamente",³⁵ aún cuando se argumente a su favor el hecho de que constituyen la única institución del Estado en condiciones de enfrentar con éxito la subversión y el comunismo internacional que se infiltra en la sociedad. "Esta concepción olvida que es el Estado, como expresión de la sociedad, el que debe facilitar la realización integral de la persona humana dentro del bien de la comunidad. Corresponde, pues, al Estado, al servicio de la sociedad y originado en la voluntad popular, recurrir a los instrumentos de seguridad para garantizar esa misión... La seguridad y el orden no son fines en sí mismos, sino medios al servicio de objetivos sociales trascendentales".³⁶ Esto marca la diferencia substancial entre dicho partido y los que sostienen el régimen militar. Bajo esta perspectiva la democracia no debe ser considerada ni como la antesala del comunismo ni como la fórmula política del capitalismo.

Las fases intermedias que conducen a la recuperación del sistema democrático deben ser consideradas como esencialmente pacíficas. Dicho proceso deberá ser conducido necesariamente por una autoridad 'fuerte y respetada' cuyas funciones explícitas debe ser:

evitar la venganza o la violencia, acelerar la recuperación progresiva de los derechos sociales y políticos, derogar el estado de sitio y restablecer la función natural de los aparatos de seguridad, abrir los registros electorales y poner en práctica la concreción de un 'pacto social' que garantice la recuperación económica y democrática de los trabajadores. Tanto civiles como militares deberán otorgar una base mayoritaria a dicho gobierno.

6.1.1. De la semioposición-apoyo a la oposición.

Ni el abandono de la presidencia del partido de Patricio Aylwin en 1976 y su sustitución por Andrés Zaldívar que derrota las posiciones claramente opositoras a la dictadura representada por el documento de Tomás Reyes, ni la incorporación de este último a la directiva del partido, logran superar la polémica interna y la polarización política respecto a la posición que debía ser asumida por el partido frente al Estado autoritario. Ambas corrientes, sólo en 1977 logran un consenso político que se expresa en la elaboración del documento conocido como "Una Patria para todos". Dicho documento representa el paso definitivo de la Democracia Cristiana a la oposición y pone en práctica una estrategia de enfrentamiento de la dictadura denominada 'movilización social'. Dicho documento define inicialmente a dicho partido como 'humanista', valorando esencialmente la libertad de conciencia, de asociación, de expresión y de participación. Se define la situación política del momento como la 'víspera inevitable del proceso de restauración democrática'. Ello debe ser entendido como la necesidad ineludible de introducir 'cambios en el sistema del gobierno militar'. Es necesario abandonar el régimen de concentración de poderes.

Las imperiosas transformaciones que debe experimentar el sistema de gobierno militar no son sólo resultado del "deseo o voluntad de quienes fueron violentamente despojados del gobierno y hoy experimentan una dura represión, ni tampoco de quienes mantienen sus convicciones democráticas frente al régimen militar, como lo hicieron frente a actuaciones del gobierno anterior. Por el con-

trario, los mismos medios de comunicación adictos al régimen expresaron no hace mucho esa necesidad. Se habló de poner término al Estado de sitio y de abrir un programa de democratización".³⁷ Las dificultades de la restauración democrática derivan de las dificultades que a ella plantea el gobierno y de las huellas dejadas por el 'empleo masivo de la fuerza pública contra determinados sectores'. Esto genera condiciones para la formalización de tres alternativas frente a la situación chilena. La primera de ellas está representada por la organización de la vía armada y conspirativa, destinada a la recuperación del poder por parte de aquellos que usaron la fuerza para eliminar el gobierno anterior. La segunda está representada por la conservación indefinida del régimen militar en donde su función sea asumir la totalidad de la responsabilidad de la transición del Estado autoritario a la democracia. Esta alternativa impediría la necesaria 'reconciliación nacional' para hacer eficiente la democracia. Los deseos de supresión o postergación de ésta es una de las características esenciales de ambas alternativas. Frente a ellas se proclama la alternativa demócratacristiana que es definida por el documento en términos de que constituye "la perspectiva de una cada vez más amplia y pública conciencia nacional en el sentido de que restaurar la democracia es el único camino viable para Chile. Esto hará que inevitablemente los mecanismos de dureza y represión queden fuera de la realidad. La necesidad inevitable de cambios profundos implicará la colaboración incluso de quienes pertenecan al sistema".³⁸

La obtención del objetivo político propuesto requiere de la organización de un 'movimiento nacional de restauración democrática'. Ni las FF.AA. ni la alianza o suma de los partidos tradicionales pueden desempeñar esta función. Dicho movimiento debe fundarse en la renovación esencial de las directivas políticas. Sin embargo, no debe excluir una visión pluralista de respeto de los partidos políticos. De la misma manera como "sería imposible pensar que un grupo militarista de derecha, irremediabilmente separado de una gran parte de la población, encabece el reagrupamiento nacional, así también va en contra del curso de los hechos

que los partidos políticos tradicionales se adjudiquen, con exclusividad y por encima de todo lo ocurrido, ese mismo papel".³⁹ De la misma forma, en una referencia directa a la política de izquierda, se concluye que la formación de frentes 'irremediablemente dirigidos desde el exterior' no facilitan la restauración democrática. Sin embargo, dicha restauración requiere del diseño de etapas políticas necesarias que aseguren su éxito político. Una primera deberá estar constituida por el inmediato restablecimiento de los derechos fundamentales: eliminación del Estado de sitio y zona de emergencia, regulación y control de los aparatos policiales, de inteligencia e información y restitución inmediata de la libertad de expresión regulada por disposiciones constitucionales y jurídicas. En una segunda fase sería necesario restablecer el libre funcionamiento de las instituciones sobre la base del restablecimiento de los siguientes derechos: de asociación, de autonomía universitaria, derechos laborales. A ello debe agregarse la organización y convocación de una 'constituyente' designada por sufragio universal, que determine el texto de una nueva Constitución que señale el carácter de la normalidad democrática, los derechos políticos y las elecciones de las nuevas autoridades del país. Dicha constitución debería además fijar el estatuto de los partidos políticos y las formas de participación de los ciudadanos frente al Estado. La etapa final estaría constituida por la puesta en vigencia del nuevo texto constitucional. Dicho texto constitucional deberá estar inspirado en la declaración universal de los derechos del hombre en la medida en que a partir de ahí "no será posible decir que permite la infiltración de ideologías antidemocráticas, ni autoriza a usar, contra los disidentes, métodos inhumanos, bajo pretexto de seguridad nacional o cualquier otro".⁴⁰ Tres condiciones esenciales constituyen el plan propuesto: la transición a la democracia debe ser necesariamente gradual, su restauración debe ser hecha efectiva desde ahora y los plazos y modalidades no debe ser ejecutados por 'voluntades autoritarias'.

En el documento "Acuerdos propuestos por la Comisión Política en la sesión de 27 de junio de 1979 y aprobados por la Mesa Directiva" se reafirma la línea política de enfrentamiento de la dicta-

dura, que se expresa en los términos siguientes: "este hecho hace necesario desarrollar simultáneamente tareas que tienen importancia para el objetivo más urgente de poner término a la dictadura...".⁴¹ Las tareas que se sugieren están constituidas por tres formulaciones. La primera de ellas está destinada a 'impulsar la movilización social o proceso de democratización nacional'. Su objetivo está destinado a debilitar el poder del Estado autoritario a partir de la ruptura del inmovilismo social y político de los movimientos sociales, fundamentada en la consideración de sus demandas más directas. La efectividad de dicha movilización dependerá de la exclusión de las presiones propiamente partidistas en favor de una autonomía social. El papel del partido en dicho proceso estará representado por su función de impulso y estímulo de la acción colectiva. La segunda tarea está constituida por la necesaria presentación de una alternativa política, que otorgue los elementos esenciales que posibiliten el consenso básico para permitir la constitución de un gobierno de transición. Finalmente, se deberá contribuir a la reconstitución de las fuerzas políticas existentes que constituirán un aspecto esencial en el funcionamiento posterior del sistema democrático.

En este documento se reitera el antiizquierdismo presente en la casi totalidad de los documentos anteriores y que se expresa en la necesidad de rechazar la vinculación de fuerzas políticas a través de la estrategia de Frentes Amplios. Probablemente una de las excepciones a esta política oficial la constituye explícitamente el razonamiento político de Radomiro Tomic, contenido en una carta privada enviada por éste a Andrés Zaldívar: "El abandono resuelto del esquema partidario y del patriotismo del partido como perspectiva para acelerar el término de la dictadura y, sobre todo, su sucesión; a) la clara conciencia de que no es la salida de Pinochet sino el cambio radical de la orientación y métodos de la política de la junta, el problema principal; b) para esto, no debe buscarse una falsa unidad nacional entre los escasos grupos profitadores de esa política y la inmensa mayoría de sus víctimas, sino la de estas últimas en dos etapas: la primera, un acuerdo tan articulado como sea posible a nivel de las estructuras políticas con

la representatividad y vigencia que todavía conservan, y de la base social sindical y gremial; la segunda las Fuerzas Armadas (el sector susceptible de percibir y converger en que el problema no es 'la persona de Pinochet' sino la totalidad de la fundamentación y objetivos de su política) sin cuya participación no sería viable, por muchos años todavía, la re-orientación y la reagrupación del país; c) el primer elemento operativo de este proceso debe ser la búsqueda leal de acuerdo entre la Democracia Cristiana y las fuerzas de izquierda marxista y laica".⁴²

Respecto de la posición del partido en relación con otras fuerzas políticas y particularmente lo referido a los partidos o movimientos de izquierda se formulan dos tipos de referencias. La primera de ellas está destinada a favorecer las relaciones políticas con los sectores que vinculan el concepto de democracia política al cambio del sistema capitalista, en la medida en que ellos se inspiran en la ideología socialdemócrata o de socialismo democrático. En dicha dirección estos partidos son considerados como elementos de fortalecimiento del sistema democrático. La segunda referencia se vincula al rechazo de los partidos políticos que se sustenta en lo que se designa como 'modelos históricos de socialismo dogmático o totalitario' y que en definitiva deben ser considerados como partidos antidemocráticos. Finalmente, tanto el contenido político como ideológico del documento de 1979 es ratificado y ampliado en el documento denominado, "Partido Demócrata Cristiano: Documento de consenso" (noviembre de 1981). No hay duda de que el contenido reiterativo de este documento constituye una respuesta política a la situación creada como resultado del referendo constitucional de 1980 y que ha sido considerado como el paso definitivo, por lo menos en la óptica del Estado autoritario, a la institucionalización del sistema dictatorial.

6.1.2. La Democracia Cristiana como oposición tolerada por el Estado.

La tolerancia restringida de la que ha podido hacer uso la

Democracia Cristiana en estos diez años de dictadura militar marca una diferencia substancial con la actitud del Estado autoritario respecto de los partidos políticos que constituyeron el gobierno de la Unidad Popular. La explicación de dicha situación se hace aún más necesaria si se considera que el objetivo final del gobierno autoritario estaba constituido por la 'eliminación necesaria' del sistema tradicional de partidos chilenos, tal como había sido constituido en el período del 'Estado de compromiso'. Es evidente que una primera explicación proviene del comportamiento político mismo de dicho partido, particularmente expresado en su estrategia de desestabilización y derrocamiento del gobierno constitucional de Allende, y de su política inicial de apoyo al nuevo gobierno militar instaurado. Su función de 'semi-oposición-apoyo' es demostrativo de ello. Cuando dicho partido formula una política de abandono progresivo de esta estrategia en favor de un paso definitivo a la oposición, la tolerancia demostrada por la dictadura proviene necesariamente del hecho de que ella no está dispuesta a pagar el costo político de la eliminación de la Democracia Cristiana. Las dimensiones del costo citado, de orden nacional e internacional, provienen del hecho de que dicho partido es identificado con la 'oposición democrática al gobierno de Allende'. Pero la tolerancia se explica también, no sólo por la 'vocación procapitalista' de la democracia cristiana, sino también por el convencimiento ideológico del gobierno en el sentido de que existían caminos indirectos.

Los medios indirectos están representados por la aspiración al surgimiento en el seno de la sociedad civil de 'organizaciones sociales intermedias' de tipo corporativista independientes de la influencia de los partidos políticos. Dichas organizaciones serían el resultado lógico de las transformaciones que el Estado autoritario pondría en práctica en la economía y la sociedad. Por tanto la política adquiriría un carácter profundamente consensual y de rechazo estructural de la influencia del marxismo. Sin duda que el razonamiento sobre los partidos políticos no sólo se basaba en ello, sino también en la 'convicción' de que contribuyeron a la organización de una democracia 'puramente formal' y con una in-

fluencia desproporcionada respecto de una sociedad esencialmente subdesarrollada. Ello se expresó particularmente como resultado de las reformas electorales de 1958, que dieron como resultado una 'dramática expansión del electorado'. La democracia de masas es por tanto incompatible con el necesario funcionamiento de una economía capitalista subdesarrollada, en la medida en que la 'lealtad política' al orden socioeconómico predominante no está garantizada. Ello explicaría el crecimiento electoral de la izquierda y la presencia de líderes políticos 'oportunistas y corrompidos'.

6.2. La izquierda y la evaluación política de la derrota del gobierno socialista.

Uno de los primeros documentos del Comité Central del Partido Socialista de Chile que intenta formular una evaluación política de las causas del derrocamiento de la Unidad Popular está constituido por el texto "A los dirigentes del Partido Socialista", fechado en Santiago en noviembre de 1973. Las dificultades esenciales del gobierno fueron el resultado de lo que se designa como 'falta de dirección política y de confianza en las masas'. Ello habría sido el producto 'lógico' del hecho de que tanto el control político del gobierno como el de la izquierda había sido asumido por la 'pequeña burguesía' oportunista. Ella facilitó la concreción de una dirección política simultáneamente reformista y ultraizquierdista, logrando sustituir y desplazar la hegemonía que el movimiento obrero había obtenido inicialmente. El marco estructural en que se sitúa dicha crítica supone la negación del razonamiento esencial que había dado contenido político al concepto 'vía chilena al socialismo'. Dicha negación aparece formulada en términos de que para este partido era imposible "a través de las mismas leyes vigentes, cambiar la superestructura que avalaba el sistema de relaciones de producción capitalista, y el carácter dependiente de nuestra economía".⁴³ En esta dirección la función política del gobierno es considerada como positiva en términos de mejorar la correlación de fuerzas políticas favorables al proyecto socialista. Esto último sería decisivo en el momento del enfren-

tamiento definitivo entre el gobierno popular y los sectores procapitalistas de la sociedad chilena.

Tanto las deficiencias de dirección política como la ausencia de una homogeneidad conceptual respecto de las tareas que dicho gobierno debía cumplir, y que provenían de la diversidad política de la alianza que lo sustentaba, conspiraron en contra de la necesidad de mantenimiento y estabilización de él. El pluripartidismo, la desorganización gubernamental, la utilización del aparato fiscal para reforzar los aparatos organizativos de los partidos integrantes de la Unidad Popular y el caos ideológico condujeron a un aislamiento progresivo del movimiento obrero y de la correlación de fuerzas políticas y sociales en que se apoyaba. La fragmentación progresiva del bloque político de la izquierda contrastaba con el fortalecimiento progresivo del bloque de la oposición articulado en torno a la derecha tradicional, al Partido Demócrata Cristiano y a la política de intervención norteamericana. Dicha situación se habría visto favorecida por la debilidad demostrada por el gobierno frente a las capas medias, a quienes no brindó confianza política ni fue capaz de constituirse en una alternativa de fuerza. Por otra parte, el gobierno evidenció dificultades esenciales en su vinculación con el 'movimiento de masas' como resultado de la influencia decisiva que habían logrado en su seno los sectores reformistas, y ello era el resultado necesario de su intento por eludir el radicalismo político del 'movimiento de masas'. Es evidente que cuando se hace referencia al reformismo se identifica con ello la política adoptada por el Partido Comunista respecto del gobierno de la Unidad Popular, particularmente la del período del 'gabinete Millas Matus'. Sin embargo las dificultades del gobierno también estuvieron vinculadas a la actividad política de la 'ultraizquierda' que exacerbaba las reivindicaciones económicas de los movimientos sociales más allá de las posibilidades estructurales del gobierno de dar respuesta a ellas.

Un análisis más sistemático de las causas de derrota elaborado por el mismo partido fue dado a conocer en marzo de 1974.⁴⁴

Uno de los principios que constituye el punto de partida en la evaluación de las causas de la derrota es la convicción política de la viabilidad de la estrategia de la Unidad Popular. Ella hacía posible tanto la conquista del poder como la transición al socialismo. A pesar de ello, como la "revolución chilena no podía escapar a las leyes de la transición del capitalismo al socialismo", se hacía indispensable la conquista del poder y del Estado sobre la base de la transformación revolucionaria de sus instituciones. A diferencia del documento anterior, se revalorizan los aspectos particulares de la situación chilena que dieron origen al concepto 'vía chilena al socialismo'. Su originalidad "consistía en la posibilidad real de asumir esta tarea ineludible a partir del manejo del más importante centro de poder institucional por el pueblo: el gobierno, con una legitimidad reconocida por toda la sociedad. Con el control del gobierno era posible cumplir cuestiones esenciales del programa, intentar mejorar la correlación de fuerzas, golpear y debilitar a los enemigos principales, facilitar la unidad del pueblo, fortalecer el movimiento de masas y mantener una constante iniciativa política que arrinconara al enemigo y lo obligara a ceder posiciones o, lo que era más probable, a resistir el proceso revolucionario desde el plano de la ilegalidad lo que facilitaría su enfrentamiento y destrucción".⁴⁵ La utilización de la legalidad del gobierno podía lograr la mediatización de las reacciones políticas de los sectores sociales y partidos que no compartían el programa de transformaciones llevado a cabo por la Unidad Popular. En la medida en que la oposición quebrara la legalidad, tanto la conquista de la totalidad del poder político como la sustitución de las instituciones 'burguesas', serían el resultado lógico de la acción defensiva del movimiento popular.

Sin embargo, dicha estrategia fue contrarrestada por la "decidida resistencia de los enemigos del pueblo al proceso y la inmensa fuerza que lograron acumular". Ello se concretó a través de la utilización combinada de tres tácticas fundamentales: sabotaje económico, cerco institucional del gobierno (particularmente a través del parlamento y el poder judicial) y resistencia de masas. Todas

ellas combinaron recursos legales e ilegales que pusieron en evidencia un 'leninismo' efectivo en el combate de la derecha por destruir el gobierno. Un papel esencial en la movilización de masas impulsada por la derecha lo desempeñó el protagonismo político de las clases medias. A pesar de ello la derrota del gobierno provino esencialmente de las dificultades evidenciadas por su conducción y la alianza política que lo sustentaba. "La derrota política del movimiento popular estuvo sellada antes del 11 de septiembre, determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y la ausencia de una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con posibilidades de éxito, de la potencialidad revolucionaria latente en la fuerza de las masas y en los instrumentos de poder institucional al alcance del gobierno".⁴⁶ Esto fue el resultado del hecho del que el movimiento obrero no logró imponer sus intereses políticos en la conducción del gobierno. Esto último se explica también por la imposibilidad demostrada por los partidos constituyentes de la alianza de gobierno para concertar un acuerdo respecto de cuál debía ser la fuerza social dirigente de dicho gobierno y del movimiento popular.

La ausencia de la hegemonía obrera en el frente político de la Unidad Popular habría imposibilitado construir una alianza política y social en torno al programa de gobierno, que resolviera el aislamiento del gobierno buscado por la oposición. Ello se expresó en una incapacidad constante del gobierno, particularmente en el último período para retomar la ofensiva política. Se verificó, por tanto, un conjunto de discrepancias entre los partidos que lo sustentaban respecto de la forma de aplicación del programa de transformaciones estructurales propuesto. Una de ellas se vinculaba a la problemática del 'ritmo de desarrollo del proceso' y que en la mayoría de los casos excluía la referencia necesaria a la necesidad de acumular progresivamente fuerzas. Generalmente se adoptó una política indiscriminada para 'distinguir y calificar' los 'enemigos del gobierno' y se ubicó en una misma línea a enemigos principales junto con opositores secundarios, lo que naturalmente condujo a un reforzamiento de la unidad en bloque de la oposición. Otro aspecto esencial de discrepancia lo constituyó la problemática

ca de los 'compromisos tácticos y la política de alianzas'. Respecto de esto último coexistieron dos posiciones: la ultraizquierdista que calificaba todo compromiso como conciliación y traición al movimiento obrero y las posiciones reformistas que lo conceptualizaban y reducían al problema de ganar los aliados sociales que expresamente formulaba el programa, sobre la base de un criterio extremadamente economicista y sin referencia alguna a la 'autonomía ideológica' decisiva de muchos grupos sociales. En ambas tendencias se evidenció la proclividad a buscar 'entendimientos políticos superestructurales' e independiente del protagonismo popular. A ello debe agregarse, la incapacidad para comprender el papel de la 'institucionalidad' en el proceso de transformaciones y las condiciones de su sustitución.

Una de las deficiencias fundamentales tanto del gobierno como de la alianza política que lo sustentaba hace referencia a la incapacidad de 'educar el movimiento popular' en el problema del enfrentamiento de clases y en el de la violencia revolucionaria. Por el contrario, las masas fueron sometidas a ilusiones políticas sobre el 'desarrollo pacífico' y 'evolutivo' del proceso de transición al socialismo. Esto definitivamente dificultó la utilización de la "fuerza de las masas y la fuerza institucional importante con que se debía contar, ejerciendo la violencia revolucionaria con plena legitimidad para aplastar de contragolpe la acción insurreccional del enemigo, de paso barrer todos los vestigios de su poder y consolidar el curso socialista de la revolución".⁴⁷ El resultado de dicha dificultad se expresó en un tratamiento incorrecto del papel de las Fuerzas Armadas que recibieron la influencia negativa tanto del 'juego de milicias' como del 'verbalismo insurreccionalista', sumadas a la tolerancia gubernamental del 'terrorismo fascista'. En general, el gobierno demostró una tolerancia excesiva respecto de los sectores golpistas en el interior de las FF.AA. y no se asumió la defensa sin límites de los militares que tenían una posición constitucionalista y progresista en el seno de las instituciones militares, postergándose la necesaria reorganización y democratización de ellas. Se sobrevaloró políticamente la posibilidad de la integración de los militares en el proceso

de transformaciones puesto en práctica por el gobierno en detrimento de la fuerza y la autoridad necesaria para destituir a los sectores golpistas. Pero el error fundamental provino de la "incapacidad para articular y combinar el ejercicio de todas las formas de poder con que contaba el movimiento popular: el poder del gobierno y la fuerza del movimiento de masas organizado".⁴⁸

Es este error fundamental el que explica la incomprensión política respecto de la necesidad de construcción del 'Poder Popular'. A ello se sumó el paternalismo obrero, el conflicto entre el gobierno y el poder de masas, el burocratismo y en la no valoración de la participación de los trabajadores en los niveles de decisión política y económica. Son estos errores los que crearon las condiciones favorables para el éxito del movimiento contrarrevolucionario. A pesar del conjunto de errores cometidos, la victoria electoral del gobierno en las elecciones de marzo de 1973 en donde se obtuvo el 44% de los sufragios, constituyó la última alternativa efectiva para recuperar la iniciativa política y enfrentar con éxito la acción contrarrevolucionaria de la oposición. Dicha victoria habría creado condiciones para consolidar una alianza entre los sectores populares y los sectores progresistas de las Fuerzas Armadas. "Sin embargo, la UP fue incapaz de concretar esta posibilidad revolucionaria, lo que permitió al oportunismo de la izquierda sabotear exitosamente su materialización y postular una pretendida 'reagrupación de las fuerzas en torno un polo revolucionario'. La agudización del conflicto entre el ala proletaria de la UP (que fue incapaz de imponerse en la lucha ideológica y de masas) y la ultraizquierda, terminó por paralizar y disgregar la fuerza del pueblo. De otro lado, las presiones tendientes a concretar un acuerdo sin una debida información y agitación en la masa, ayudaron eficazmente a anarquizar el movimiento popular y dividir su fortaleza".⁴⁹ Es este tipo de razonamiento el que permite sostener que la derrota del gobierno constitucional estuvo sellada antes del 11 de septiembre de 1973. Fue esencialmente una derrota política determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y por la carencia de una fuerza dirigente capaz de utilizar exitosamente la potencialidad revolucionaria del movi-

miento de masas y del poder institucional representado por la conquista del gobierno. Dicha incapacidad corresponde esencialmente a la alianza histórica gestada en torno de los partidos socialista y comunista que no formuló una alternativa efectiva frente al hecho de que problema político decisivo estaba constituido por el control de la fuerza militar.

Una interpretación alternativa a la formulada por los documentos citados del Partido Socialista de Chile, está constituida por la posición del Partido Comunista contenida en un documento de noviembre de 1975.⁵⁰ En este documento se comparte la idea de que el factor determinante de la derrota estuvo constituido por el aislamiento progresivo de la clase obrera durante el gobierno de la Unidad Popular. La causa fundamental, y esto marca la diferencia substancial con las interpretaciones del Partido Socialista, estuvo constituida por el 'revolucionarismo pequeño burgués', es decir, la extrema izquierda particularmente representada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y los partidos que en seno de la UP fueron proclives a su influencia ideológica. La acción política de dicho 'revolucionarismo' dió como resultado la pérdida de los aliados que el movimiento obrero había logrado en torno a la formulación del programa de gobierno de la Unidad Popular. Más aún, la acción de la 'ultra-izquierda' logró marginar el apoyo que muchos sectores sociales habían dado al gobierno y transformó en opositores a otros sectores que inicialmente habían sido neutralizados políticamente. "Nuestra experiencia nos muestra cuán caro paga el movimiento popular su debilitamiento interno cuando una parte de la pequeña burguesía deriva al revolucionarismo, al espontaneismo de izquierda y en vez de acercarse a las posiciones del proletariado intentan una política de división y enfrentamiento respecto de los partidos obreros. Los éxitos de tales tendencias se afincan en las debilidades del movimiento obrero para abatir esas concepciones por medio de la lucha ideológica, para asegurar la hegemonía del proletariado y la unidad. Es uno, entre los errores, que necesitamos corregir a fondo".⁵¹

El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) es considerado por el citado documento como la síntesis del 'revolucionarismo pequeño burgués' que había tenido lugar en el escenario político chileno. En torno a él se habrían agrupado ultraizquierdistas de distinto orden: maoistas, trotskistas, miembros expulsados de los partidos socialista y comunista, etc. Es evidente que las dimensiones de la crítica no guardan relación con la importancia que dicha organización política logró en el período 1970-1973. Se critica explícitamente el 'vanguardismo' que inunda el conjunto de las declaraciones políticas de dicho movimiento, es decir, su afición a autopresentarse como la alternativa revolucionaria a los 'partidos de la izquierda tradicional'. Se rechaza además su 'profesión de fe anticomunista, antisoviética' y su vocación por hacer de la política un evento terrorista. Esta caracterización está destinada a fundamentar y a explicitar algo que fue absolutamente evidente en la política de dicho movimiento: su boycott a la constitución de la Unidad Popular en el período previo a las elecciones presidenciales de 1970 y su calificación de reformista otorgada al gobierno de Allende, en beneficio de la formulación de su propia política de partido conocida como la alternativa del 'polo revolucionario de la izquierda'. Su preocupación fundamental consistía en mejorar la correlación de fuerzas, aprovechando las dificultades del gobierno, en beneficio de la ejecución de una política ultraizquierdista. "Las concepciones dogmáticas que propugnaba el Mir definían como adversario del proceso revolucionario a todos los que no eran proletarios o semiproletarios. Para hacer tal afirmación negaban la necesidad de una etapa antiimperialista y antioligárquica del proceso y proclamaban artificialmente el carácter socialista inmediato de la revolución. Al perder de vista los enemigos principales, se embarcaron en una política primitiva de enfrentamientos aislados con propietarios pequeños y medianos, con sectores de las capas medias. El resultado fue el aislamiento de las fuerzas revolucionarias y la creación de una base de masas para los enemigos del gobierno popular que facilitó sus preparativos golpistas".⁵² Esta política habría debilitado la necesidad de concentrar fuerzas en contra de la oligarquía y el imperialismo.

Más aún, en el contexto del documento citado, el rechazo que dicho movimiento formuló al diálogo de la D.C. con el gobierno fue injustificado y perjudicial para la conservación del gobierno popular. Fueron incapaces de comprender la naturaleza 'pluriclasista' del Partido Demócrata Cristiano, que posibilitaba la negociación con sus sectores progresistas. La oposición a dicho diálogo enajenó fundamentalmente la posibilidad de neutralizar los grupos medios que se sentían representados por dicho partido. La política del Mir obstaculizó también las posibilidades de acuerdo entre el gobierno y las FF.AA. y tales acuerdos fueron generalmente presentados como capitulación del gobierno frente a ellas. Uno de los aspectos fundamentales de los cuales dependían la permanencia del gobierno era su capacidad para neutralizar la desestabilización económica que había sido adoptada por la política norteamericana para destruir al gobierno popular. En este sentido la 'batalla de la producción' estaba destinada a superar el desabastecimiento económico; ésta fue explícitamente rechazada por la extrema izquierda que proclamó que "los problemas de la economía y la producción no están colocados por encima de la lucha de clases y que es responsabilidad de los grandes capitalistas el aumento de la producción". A ello debe sumarse el hecho de que la política destinada a obtener un mayor apoyo social para dicho movimiento se fundamentó en el estímulo exagerado de las políticas reivindicativas en el interior de 'sectores obreros y campesinos atrasados', que excedían las posibilidades estructurales de la economía y del programa de gobierno. La influencia de estas políticas sobre los partidos que sustentaban al gobierno se traducían en confusión y desorientación de la 'dirección revolucionaria' del proceso político chileno. Este razonamiento sirve de fundamento para concluir que "una de las claves de nuestra derrota fue la falta de una dirección única del movimiento capaz de llevar adelante una política de principios, que sorteara los riesgos de las desviaciones oportunistas de derecha e izquierda. Y detrás de esa debilidad fundamental figura decisivamente la labor de zapa del revolucionarismo pequeño burgués determinado a impedir la necesaria hegemonía de la clase obrera y sus partidos en la conducción del proceso revolucionario".⁵³

Dicho resultado, de 'confusión y desorientación' de la dirección del movimiento popular, se vió fortalecido por la táctica de infiltración de la dirección de los partidos constituyentes de la Unidad Popular por parte de dicho movimiento. Dicha política de infiltración fue preferentemente dirigida en contra del Partido Socialista. Es evidente que las discrepancias surgidas durante el período de la Unidad Popular entre ambos partidos intentan ser reducidas y explicadas a partir del expediente simple de la infiltración ideológica y de la sobrevaloración del papel y de la importancia política del Mir. Frente a la carencia de una política dirigida hacia las FF.AA., el Mir habría desarrollado una línea 'estrecha y sectaria' cuyo objetivo fundamental habría sido la obstaculización de los esfuerzos desarrollados por el gobierno en torno de los sectores 'constitucionalistas' de ellas. Estas dificultades provendrían de la actitud 'provocadora' del movimiento frente a los altos mandos de dichas instituciones, que favoreció el mejoramiento de la correlación de fuerzas en favor de la oficialidad golpista.

En un documento posterior, el Partido Socialista critica y rechaza las críticas formuladas por el documento del Partido Comunista citado. Más aún se rechaza el razonamiento político que sirve de fundamento para formular las causas explicativas de la derrota del gobierno: "Nos preocupa este documento porque no obstante su objetivo central aparentemente dirigido contra tendencias extremistas, algunos análisis de orden general y de discrepancia dadas en el seno de la Unidad Popular así como referencias concretas a nuestro Partido, dejan de manifiesto una crítica medular al Partido Socialista".⁵⁴ Se rechaza la idea de que la causa central del derrocamiento del gobierno estuvo representada por la gestión política de la 'ultraizquierda' y la transferencia que de ello se hace al Partido Socialista. Se rechaza y se pone en discusión la afirmación comunista en el sentido de que el aislamiento de la clase obrera, resultado político de la acción de la 'ultraizquierda', habría constituido una causa fundamental en la derrota. Ello se fundamenta en la referencia a los resultados de las últimas elecciones de la dirección de la Central Unica de

Trabajadores, en donde el Mir logró apenas el 2% de los sufragios en oposición al 65% de la Unidad Popular. A ello se agrega la referencia de los resultados electorales del país en marzo de 1973 en donde la alianza de gobierno obtuvo el 44% de los sufragios, lo que impidió la materialización de la estrategia de 'golpe legal' de la oposición a través del parlamento. Las cifras citadas hacen insostenible la idea del aislamiento político de la clase obrera. Es evidente que esa afirmación también están en contra de sugerencias secundarias hechas en el mismo sentido por el documento del Partido Socialista de noviembre de 1973. Por otra parte, es claro que cuando el Partido Comunista hace referencia al citado aislamiento se refiere implícitamente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana durante el gobierno de Allende. Por tanto, se concluye que "la clase obrera no estuvo aislada. Quienes estuvimos ajenos a una política de defensa de la revolución fuimos nosotros, la Unidad Popular. Y sobre esto son muy escasas las autocríticas".⁵⁵ También se pone en discusión la afirmación de que otra de las causas de la derrota se vinculó a la carencia de una dirección única. En opinión del documento socialista esto constituye un eufemismo. El problema consiste en que dicha dirección careció de una alternativa frente a la contrarrevolución violenta y no fue capaz de formular una estrategia que definiera el problema del poder. Es preciso no crear confusión entre dirección única y dirección correcta, en la medida en que es posible obtener una dirección única que se fundamente en una perspectiva política errónea. "En definitiva, el problema de la ausencia de una orientación única está conformado por la existencia en el seno de la UP de estrategias distintas para enfrentar el proceso de la revolución".⁵⁶

Por tanto, los elementos esenciales que explican las causas de la derrota se refieren a dos problemas fundamentales: el poder y la estrategia de defensa de la revolución. Ello debe ser conceptualizado como la contradicción entre los que estaban a favor o en contra de la idea de que el enfrentamiento era inevitable y por tanto la preparación para la defensa del gobierno era ineludible, y quienes eran partidarios de transformar el proceso polí-

co en irreversible a través del afianzamiento de la construcción del poder popular. Y sobre estos problemas esenciales, el Partido Socialista lamenta no haber podido transformarlos en una perspectiva compartida por todos los integrantes de la Unidad Popular. Es preciso recordar que los objetivos de dicho gobierno eran de orden democrático y socialista y que la aplicación de un programa de este tipo fue capaz de desatar un proceso revolucionario de vastas dimensiones en un contexto social de una agudización creciente de la lucha de clases y que, por tanto, era necesario formular una respuesta frente a dicho conflicto. A partir de ello se generan dos líneas políticas centrales en torno de las cuales se articulan diferentes alternativas secundarias. Por una parte estaban los que eran partidarios del convencimiento de la transición pacífica al socialismo siguiendo una táctica de ir progresivamente añadiendo fuerzas sociales hasta alcanzar la mayoría absoluta para llevar a cabo el proceso y ganar las elecciones presidenciales siguientes favoreciendo el carácter democrático de dichas transformaciones. La segunda estaba constituida por los que aceptaban la tesis de que la lucha de clases, en tal contexto de transformaciones, hace inevitable el enfrentamiento armado y el peligro inminente de una contrarrevolución. Por ello era indispensable el haber creado las condiciones suficientes para la defensa de la revolución y ello exigía necesariamente el quebrantamiento de los mecanismos legales para obtener la conquista del poder total. En este contexto deben ser entendidas las discrepancias generadas en el seno de la UP en torno al 'diálogo con la Democracia Cristiana' en los últimos días del gobierno de Allende. "Los sostenedores de la posibilidad de la pausa o de las transacciones en la situación específica del proceso chileno, olvidan que no habíamos consumado la toma del poder. Y estando en pleno ascenso hacia ese objetivo, detenerse era cederle iniciativa al enemigo. En los hechos significaba retroceder. El Partido Socialista no se negaba por principio al diálogo y a la pausa para consolidar lo realizado; no había estrechez pequeñoburguesa en la concepción de la alianza. Sosteníamos solamente que no es lo mismo hacer concesiones o retrocesos cuando se tiene el poder que cuando se está en lucha por él".⁵⁷

Muchas de las afirmaciones contenidas en el presente documento socialista constituyen el fundamento de la respuesta de dicho partido al documento comunista de 1975 y habían sido ya adelantadas en un trabajo del secretario general del Partido Socialista de Chile Carlos Altamirano. En su artículo "Reflexiones críticas sobre el proceso revolucionario chileno", se explicita la idea de que la afirmación frecuente en el sentido de que la derrota se debió esencialmente al aislamiento de la clase obrera supone que dicho aislamiento fue provocado por la incapacidad para formular una política que favoreciera el apoyo de las clases medias al proceso de transición socialista. Dicha afirmación es considerada correcta, pero su dimensión real depende de lo que se conceptualice como una "política adecuada respecto de las clases medias". En esta perspectiva la experiencia chilena demuestra que no fue suficiente el intentar obtener su apoyo por medio de una política esencialmente destinada a la satisfacción de sus aspiraciones materiales. Lo que la experiencia chilena pone de relieve es que la vía pacífica al socialismo requiere de una "extrema flexibilidad para operativizar el cambio oportuno de las formas de lucha. El desarrollo pacífico al socialismo no sólo depende de una sólida base de sustentación social, incluso mayoritaria. Esta será arrasada por la contrarrevolución si su dirección no está en condiciones de fuerza y en disposición de imponer los métodos de lucha que cada coyuntura plantea".⁵⁸

Es este último argumento el que facilita la puesta en discusión de los supuestos teóricos de la 'vía chilena al socialismo', que se construye a partir de la convicción de que era posible la transformación de clases del Estado sin previa destrucción. Esto constituía la percepción inversa de la demostrada por la experiencia acumulada por el socialismo existente. Se partía del supuesto de que el gobierno constituía el núcleo esencial del Estado. La experiencia de los tres años de gobierno demostró lo contrario. Y esto hacía discutible la efectividad del supuesto de que se podía utilizar la propia legalidad vigente para favorecer el contenido socialista de las transformaciones estructurales y, a la vez, defender eficientemente el gobierno conquistado. La invia-

bilidad de la 'vía chilena' se hizo progresivamente dificultosa en la medida en que no se resolvía un problema central: el poder y su estrategia correspondiente. "Una estrategia de poder debía estimar previsible el entrampamiento del proceso en las redes de la misma intitucionalidad, bajo cuyo amparo se había generado. Congelada ésta, en términos de obstruir la sustitución revolucionaria del aparato estatal burgués, aquélla debía centrarse, de un lado, sobre la tarea de generar una estructura de poder popular, capaz de articular un cordón social defensivo del proceso; y de otra, sobre la necesidad de quebrar y/o neutralizar el nervio represivo potencialmente adverso. Esta última tarea implicaba, dicho clara y abiertamente, el desarrollo de una 'política militar', que paralelamente al esfuerzo específico hacia las Fuerzas Armadas implementara en el seno de las masas un poder disuasivo. Este factor era el único capaz de evitar el enfrentamiento".⁵⁹ El cumplimiento necesario de este objetivo se vió aún más dificultado por la sobrevaloración de la existencia de un sector democrático en el interior de las FF.AA. que se vincularían a la política del gobierno a través de sus principios constitucionalistas. Dicha imagen era reforzada por la idea del profesionalismo institucional de aquéllas.

Un análisis crítico mucho más elaborado que el documento del Partido Comunista de noviembre de 1975 está contenido en el documento oficial de Informe al Pleno presentado por el secretario general Luis Corvalán en agosto de 1977. En dicho documento se sostiene la tesis de que la política formulada destinada a acumular fuerzas en torno de la clase obrera era obstaculizada en el seno de la UP por posiciones de izquierda y de derecha. Dichas tendencias se expresaron en la obtención de dificultosos acuerdos en torno a la nacionalización de las empresas, las formas que debía adquirir el área reformada de agricultura, el destino de las tierras expropiadas, la importancia de la batalla de la producción industrial y agrícola, la política de salarios en el área de propiedad social, el problema de la distribución, las estrategias de enfrentamiento de los enemigos del gobierno, etc. De manera tal que la correlación de fuerzas sociales y políticas

sólo favorecieron al gobierno cuando se fundamentaron en una perspectiva políticamente unitaria en el seno de la Unidad Popular y se inspiraron en el respeto sin limitaciones del programa de gobierno. Sin embargo, en ellos es necesario distinguir dos tipos de desviaciones y dificultades: de derecha y de izquierda. "El principal error de derecha fue nuestra debilidad en cuanto a tolerar y no impedir las actividades sediciosas del enemigo y el abuso que hacía de las libertades consagradas en la Constitución. En este aspecto prevalecieron en el gobierno criterios reformistas y no revolucionarios. Los contrarrevolucionarios usaban descaradamente la prensa, la radio y la televisión para preparar le derribo del gobierno. Sin ningún tapujo proclamaban que los únicos marxistas buenos son los marxistas muertos y anunciaban 'Yakarta viene'. El gobierno tomó ciertas medidas. Se clausuraron temporalmente algunas radios y una medida similar se aplicó contra "El Mercurio". Además, fueron detenidos y sometidos a proceso unos pocos terroristas y sediciosos. El Poder Judicial con el respaldo de la mayoría del Parlamento y de la oposición anulaba tales acciones".⁶⁰

Las insuficiencias de la 'política militar' tanto del gobierno como de la Unidad Popular son consideradas como uno de los errores de derecha. En dichas insuficiencias desempeñó un papel esencial la 'mentalidad común' de que las FF.AA. guardaban una subordinación absoluta al poder civil y que mantenían una conducta profesionalista caracterizada por una profunda prescindencia política. Dichas concepciones fueron válidas para todos los partidos constituyentes de la UP, incluido el Partido Comunista. Eso a pesar de que dicho partido jamás compartió la imagen popular de la izquierda en el sentido de que el ejército era 'el pueblo en uniforme'. Lo que no excluye el hecho objetivo de que era posible contar con un contingente significativo de las FF.AA. apoyando al gobierno. Sin embargo, el desarrollo progresivo del deterioro de la correlación de fuerzas que afectaba al gobierno ejerció una influencia significativa en la reducción progresiva de los sectores militares constitucionalistas. Es evidente que la conceptualización de la 'vía pacífica' al socialismo formulada por dicho partido en 1956,

que era considerada como una posibilidad, cometió el error de excluir la necesaria formulación de una política militar. Dicha formulación debió ser considerada como "el estudio, el conocimiento de las instituciones armadas de nuestro país y un trabajo dirigido a promover en su seno las ideas democráticas, el interés por la lucha del pueblo. Dicho trabajo, para producir frutos significativos, efectos de importancia, debió desarrollarse desde hacía muchos años, en definitiva, haber sido una constante en la línea del partido".⁶¹ A ello deben agregarse las consideraciones formuladas respecto de la consigna del partido "No a la guerra civil", propuesta después de las elecciones de marzo de 1973 como resultado de la evidencia de que la derecha buscaría el derrocamiento del gobierno por medio del golpe de Estado. Los críticos de dicha consigna consideraban que después de esa fecha era imprescindible cambiar de táctica e iniciar los preparativos del enfrentamiento militar inevitable. A ellos se sumaron los que consideraron que el 11 de septiembre debió enfrentarse la acción militar con una 'resistencia armada de masas'. "La citada consigna tenía en cuenta - además del objetivo ya dicho de unir fuerzas - el propósito de hacer las transformaciones revolucionarias por la vía menos dolorosa para nuestro pueblo y, por otra parte, el convencimiento de que, de desencadenarse la guerra civil, no teníamos ninguna posibilidad de victoria".⁶² Por dicha vía era imposible obtener éxito si se consideraba la correlación de fuerzas desfavorable para el gobierno. Dicha consigna, sumada al éxito del diálogo con la Democracia Cristiana, constituían las únicas alternativas que podrían superar el aislamiento político del gobierno.

Los errores de la izquierda provienen fundamentalmente de concepciones erróneas referidas al papel de la clase obrera y la vinculación a la alianza política de las clases medias. Ambos afectaron decisivamente la conducción política de la UP y se tradujo básicamente en la vulneración constante del programa del gobierno en donde la 'ultraizquierda' desempeñó un papel protagónico, que se expresó, sobre la base del aprovechamiento indiscriminado de la voluntad de cambios que imperaba en el país, en las ocupaciones de pequeñas y medianas empresas industriales y agrícolas que no

eran consideradas por el programa de gobierno como necesarias para constituir el Area de Propiedad Social. A ello se sumó el tratamiento incorrecto de los sectores medios que trajo como resultado su oposición irreconciliable frente al gobierno. Ante ello se careció de un plan coherente que en términos de política económica permitiera enfrentar el problema del aumento de la producción. Frente a la ausencia de tal plan dominó en el seno de la Unidad Popular la concepción ultraizquierdista de que el aumento de la producción era 'asunto de los capitalistas' y que toda transformación estructural debía conducir inevitablemente a la paralización económica o a perturbaciones esenciales de aquélla. La forma correcta de enfrentar la creciente subversión que tenía como objetivo desestabilizar al gobierno fue también dificultada por las desviaciones ultraizquierdistas: "Mientras nosotros proponíamos golpear duro a los fascistas, prohibir sus actividades - la mayoría de ellas abiertamente ilegales - y a la vez diferenciar entre el fascismo y las demás expresiones burguesas, en un parte de la UP se acentuó la tendencia a dirigir los fuegos sobre todo contra la Democracia Cristiana, por el hecho de ser la fuerza más numerosa de la oposición".⁶³ Lo que dichas posiciones no lograron comprender fue que los sectores minoritarios fascistas constituían el enemigo principal y más peligroso para el gobierno y que era posible abrir un diálogo con la DC. Los efectos de dicha política sobre la Unidad Popular fueron considerables en la medida en que en su seno se carecía de un consenso respecto del carácter de la revolución y de sus etapas necesarias. Para algunos sectores de la alianza política, el gobierno debería materializar la revolución socialista careciendo de una estrategia y una política claras respecto de los sectores medios y de su integración en el proceso de transformación económica. Se concluye que la línea política construida por el partido para lograr la conquista del gobierno fue eficiente pero estuvo ausente de la elaboración necesaria de un tipo de análisis político que resolviera los problemas de la transición de la conquista del gobierno hacia el poder total y, del paso de una etapa a otra para lograr la implantación del socialismo.

Por otra parte, no se fue capaz de derrotar las tendencias que

estuvieron destinadas a crear un 'poder popular' alternativo al representado por el gobierno popular. "De esto debemos sacar una conclusión. No fuimos capaces, como Partido Comunista, de llevar la revolución chilena junto a nuestros aliados hasta el fin".⁶⁴

A pesar de que los Partidos Comunista y Socialista constituían el eje central de la alianza de la Unidad Popular y el bloque histórico esencial que había caracterizado a la izquierda chilena desde el establecimiento del 'Estado de compromiso', se habían integrado en términos de aliados, tres partidos menores que habían surgido como desprendimientos de la DC o de su propio fraccionamiento. Dichos partidos también hacen un esfuerzo teórico por precisar una interpretación referida a las causas de la derrota del gobierno. El primero de ellos, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en una declaración de marzo de 1974 sostiene que el establecimiento de la dictadura militar no es sólo el resultado del poderío indiscutible de las 'fuerzas burguesas e imperialistas'. Es resultado, en primer lugar, de las limitaciones de la izquierda chilena y del predominio en el seno del gobierno de la Unidad Popular de concepciones y posiciones reformistas. Por tanto, el balance crítico de sus desviaciones de derecha e izquierda se hace imprescindible.⁶⁵ En un documento inmediatamente posterior se hace un balance más detallado de lo que de acuerdo a su conceptualización política constituyeron las causas de la derrota.⁶⁶ Dicho balance adquiere la forma de enseñanzas políticas que deben ser consideradas para evitar fracasos políticos futuros. En primer lugar, se destaca la capacidad unitaria que se origina dentro de las clases dominantes cuando el movimiento popular constituye una alternativa de poder efectiva. Se destaca su capacidad para ejercer influencia sobre el comportamiento político de las clases medias y articularlas eficientemente con los recursos de la violencia. En segundo lugar, se pone de relieve el carácter 'necesariamente transitorio' de gobiernos que, sobre la base del respeto de la 'institucionalidad burguesa', buscan asumir 'tareas democrático burguesas' (medidas antimonopolistas y antiimperialistas). La inestabilidad de dicho gobierno sólo puede ser superada sobre la base de la revolución socialista de carácter ininterrumpido. En dicho contexto

se hace imprescindible el desarrollo y fortalecimiento del 'poder popular' que debe asumir también una función defensiva militar del gobierno, esto como resultado de la imposibilidad de contar con el apoyo de las FF.AA. regulares. En tercer lugar, se destaca el carácter necesariamente continental de la lucha por el socialismo en América Latina, como única posibilidad efectiva de enfrentar el apoyo norteamericano a las 'burguesías contrarrevolucionarias'. En cuarto lugar, el principio de 'unidad y lucha' debería inspirar la superación de las diferencias 'tácticas y/o estratégicas' que surgen en la alianza política que sustente un gobierno revolucionario. Finalmente, para alcanzar la victoria es imprescindible la constitución de una 'vanguardia revolucionaria', la ausencia de ella fue lo que en definitiva provocó la derrota del gobierno en septiembre de 1973. A pesar del carácter oficial del presente documento, en torno a él surge una amplia discusión que abre interrogantes sobre su legitimidad política. Sin embargo, muchos de estos argumentos combinados de manera diversa están presentes en otras posiciones.

El Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero y Campesino, que surgió como resultado de una escisión del anterior partido, formula su evaluación crítica en un documento titulado "Las tareas del pueblo en la hora presente". En él se define el gobierno de la Unidad Popular como la más importante conquista política de la clase obrera y el pueblo'. El gobierno era considerado como un instrumento que creaba condiciones excepcionales para la acumulación de fuerzas indispensables en la conquista del poder. Eso explica que el objetivo permanente de la oposición fuera el derrocamiento del gobierno. En esta perspectiva, tanto el 'imperialismo' como la 'burguesía monopólica y la gran burguesía agraria' desarrollaron una política plena de éxito en relación con dos objetivos centrales. El primero de ellos estuvo constituido por su política hacia las clases medias que logró transformarlas (comerciantes, pequeños industriales, transportistas, trabajadores independientes, capas profesionales, funcionarios de bancos, pequeños agricultores, etc.) en opositores irreconciliables del gobierno. En dicha movilización antigubernamental "jugaron un papel

fundamental los resortes ideológicos y los errores del gobierno y de la UP en el tratamiento de esos sectores, más que los problemas económicos de esas capas, que objetivamente se vieron materialmente favorecidas - en su conjunto - durante estos tres últimos años. Esta política fue capaz de dar un sustento de masas al fascismo, sin el cual habría sido incapaz de desarrollarse".⁶⁷ El segundo objetivo estuvo constituido por su política hacia la D.C., favoreciendo la imposición en el interior de dicho partido del freísmo, que representaba el sector más duramente opositor. Ello favoreció además la 'fascistización' progresiva de parte de los sectores sociales en los cuales dicho partido ejercía influencia aislando los sectores democráticos de su interior. Ambos objetivos fueron compatibilizados con la política que la derecha desarrolló respecto de las FF.AA. Inicialmente fue ella presa de una gran impaciencia política frente a la neutralización de las FF.AA. y al desarrollo en su interior de tendencias democráticas generadas por el establecimiento del gobierno popular. Esto fue superado por una estrategia destinada a sobrevalorar la unidad interna de los institutos armados y su función de árbitros en una situación social altamente conflictiva. Dicha política fue reforzada indirectamente por las vacilaciones y debilidades de los sectores democráticos y constitucionalistas no debidamente respaldados por el gobierno.

El éxito respecto de la obtención de los objetivos citados fue favorecido por los errores y debilidades políticas tanto del gobierno como de la alianza política que los sustentaba. "Una derrota de la magnitud de la pérdida del gobierno popular no se explica solamente por los éxitos de la política del enemigo. Se explica principalmente por los errores en la dirección del movimiento popular; por la ausencia de una dirección proletaria suficientemente desarrollada; por los errores estratégicos y tácticos que impidieron utilizar la posición de privilegio conquistada en septiembre de 1970, para volcar definitivamente en favor de la clase obrera la correlación de fuerzas".⁶⁸ Los errores de dirección provienen básicamente de la influencia ejercida por 'posiciones pequeño burguesas' de derecha e izquierda en el seno del gobierno y de la alianza política que imposibilitaron la imposición de una política coherente.

Las de izquierda estuvieron representadas por el menosprecio de la necesidad de vinculaciones con las clases medias que se tradujo en el incorrecto tratamiento de la política a seguir respecto de la Democracia Cristiana. Esto era resultado de la conceptualización de dicho partido como 'expresión política del imperalismo y de la gran burguesía', lo cual imposibilitó el haber sustraído a la política de Frei a los sectores democráticos y progresistas de su interior. En esta perspectiva "no es correcto atribuir el fracaso de la política hacia el PDC a las debilidades y vacilaciones de los progresistas. Los partidos, sectores y personalidades burguesas y progresistas son, por definición, políticamente débiles y vacilantes. La cuestión consiste en atraer precisamente a esos sectores, con sus características particulares, a la alianza con la clase obrera y no con sus enemigos".⁶⁹ Los errores de derecha provienen esencialmente de las 'falsas concepciones de la vía chilena' que impidieron comprender el carácter fascista de la oposición al gobierno. Ello condujo a que dicho gobierno no utilizara eficientemente la fuerza de que disponía para reducir y aislar la oposición. Se suma a ello la insuficiencia de una 'línea de masas' que se expresó en una relación burocrática por parte del gobierno, de débil incorporación de ellas a las transformaciones estructurales puestas en práctica y al sectarismo político respecto de los sectores sociales que no habían integrado las políticas de izquierda. La principal autocrítica que se formula a la línea política global ejecutada por dicho partido se refiere al problema de las relaciones con las FF.AA. En esta dirección no se consideró "suficientemente la estricta relación que existía entre el acercamiento y la alianza con el alto mando institucionalista y democrático, y la apertura a la DC en el plano político y a la pequeña burguesía en el plano social".⁷⁰ A ellos se sumó la sobreestimación del papel que podían desempeñar los militares constitucionalistas y de la posibilidad de poder contar con su lealtad para enfrentar la eventualidad del golpe de Estado.

El partido Izquierda Cristiana presenta su evaluación de las causas explicativas de la derrota del gobierno en el documento final de su Primer Congreso Nacional de mayo de 1977. La tarea

fundamental que debía emprender la UP consistía en la formulación de una 'estrategia revolucionaria única' que explicitara suficientemente los pasos que debían darse para la conquista del poder. Para ello era indispensable la construcción de una 'vanguardia' que constituyera la 'cabeza dirigente' efectiva del movimiento popular y que fuera capaz de desarrollar una política efectiva de 'acumulación de fuerzas' que garantizar el éxito político del proceso de transición al socialismo. En este último aspecto era indispensable la neutralización o la colaboración de la clase media que pudo haberse visto favorecida por el "desarrollo y fortalecimiento del poder del pueblo desde la base".⁷¹ Ninguna de estas tareas se abordaron suficientemente. Particularmente porque el problema esencial del poder fue relegado para etapas posteriores en un contexto en que en el seno de la UP no existía consenso sobre las perspectivas estratégicas. Ello afectó negativamente a la necesidad de 'acumulación de fuerzas' que condujo definitivamente a la derrota política del gobierno.

Para el MIR, que no formaba parte de la alianza política de Unidad Popular y que constituía para muchos sectores de la izquierda el 'revolucionarismo pequeño burgués', el gobierno de la UP constituía un modelo 'nacional desarrollista radical'. Su radicalidad provendría de las reformas estructurales por él propuestas y de la exclusión de la participación de la 'burguesía nacional desarrollista'. En este contexto, la política económica de la UP no habría hecho más que "agudizar la crisis de acumulación del capitalismo chileno",⁷² en la medida en que el énfasis mayor fue puesto no en la producción sino en la 'circulación y el consumo'. Bajo esta perspectiva el gobierno es considerado como 'reformista' y ello a pesar de los 'esfuerzos' formulados de dicho partido por minimizar la influencia del Partido Comunista en el movimiento obrero. En esta perspectiva el movimiento popular es presentado como víctima de la influencia negativa del 'reformismo obrero' impulsado por el Partido Comunista y por el 'centrismo de izquierda' que animaría las posiciones del Partido Socialista. Ello habría impedido que el gobierno impulsara la "movilización independiente de la clase obrera y el pueblo"⁷³ y, por el contrario, limitó las

'actividades de las masas' en beneficio de una alianza con la DC, incorporando Fuerzas Armadas al gobierno. Es esa 'política reformista' la que habría impedido la unidad del 'conjunto del pueblo', en la medida en que para hacer posible la alianza con los sectores de la burguesía era necesario limitar la movilización social que debilitó al gobierno hasta su derrota final. "A esto hay que sumar el hecho de que en el curso de esos años las masas populares tuvieron la triste experiencia de que sus direcciones tradicionales (los partidos de gobierno) eran incapaces de ponerse a la cabeza de las movilizaciones más radicales de la clase obrera y el pueblo; situación que quedó demostrada con creces entre junio y agosto de 1973 cuando mientras en todo Chile el pueblo desarrollaba una decidida movilización en contra de la ofensiva burguesa, generaba los gérmenes de un poder alternativo, y buscaba por todos los medios posibles pasar a la contra ofensiva, sus direcciones nacionales buscaban la conciliación y el compromiso, ofrecían garantía a la burguesía, incorporaban al gobierno a las FF.AA. que ya estaban de lleno en los preparativos golpistas e incluso estaban dispuestos a ofrecer la renuncia del compañero Presidente".⁷⁴ La incapacidad de dicho partido para materializar su línea política y 'rescatar' al movimiento obrero de la influencia del reformismo es justificada con un recurso que es casi permanente en las organizaciones políticas menores que participaron en la Unidad Popular: "en un partido pequeño e incapaz de asumir en todos los frentes... la tarea de reemplazar a las viejas conducciones políticas que se habían demostrado incapaces de ponerse al frente de las masas en su batallas decisivas".⁷⁵

6.3. La polémica de la izquierda en torno a la conceptualización del nuevo Estado Autoritario.

La polémica abierta en torno al carácter del Estado y el sistema político instaurado por la dictadura militar a partir de septiembre de 1973 y la interpretación de las transformaciones económicas de corte monetarista por él ejecutadas, cubren parte significativa de la documentación política de los partidos que constituyeron la Unidad Popular. En uno de sus primeros documentos, el

Partido Socialista define la dictadura recién instaurada como un gobierno dependiente de la política norteamericana de carácter fascista y sustentado por los monopolios,⁷⁶ que requiere para la consolidación de su poder de la 'aniquilación política de la izquierda'. Se pone énfasis en la necesidad de distinguir entre los militares que animaron el golpe de Estado y los sectores que por disciplina profesional, corrupción e ignorancia asumen las posiciones de la dictadura. Pero la diferenciación esencial es establecida respecto del grupo de militares constitucionalistas y democráticos que 'esperan un mejor momento para ayudar la causa del pueblo'. El objetivo esencial del primer momento está constituido por la búsqueda del sometimiento ideológico y físico de la población civil por medio de la propaganda y la represión. El trasfondo político y económico de la política represiva está constituido por el intento de 'imponer a sangre y fuego los intereses de una minoría explotadora'. Sus intereses económicos están representados por aquellos respecto de los cuales apuntaban los objetivos del programa de gobierno de la UP. Tanto la política 'liberal de corte manchesteriano' adoptada como la represión de la sociedad civil constituyen, a juicio del documento, dos dimensiones de la política dictatorial. En este sentido se concluye que: "Una ofensiva prematura nuestra, les dará un justificativo por su fracaso económico, dificultará su división interna, y servirá de pretexto para acentuar la represión al movimiento popular, que se fortalecerá precisamente cuando las masas vean que la reacción, teniendo todo el poder en sus manos, no ha resuelto nada, sino que ha llevado más miseria a los pobres y más riqueza a los ricos".⁷⁷ Es evidente que dos presunciones ideológicas animan la reflexión política de la izquierda en la primera fase: la inviabilidad de las proyecciones económicas del régimen y el hecho de que la división interna de las fuerzas militares y políticas podía dar curso a su sustitución. Bajo esta perspectiva la estrategia de la izquierda consiste, según el documento citado, en explotar convenientemente el fraccionamiento político de la alianza social que lo sustenta, como resultado del hecho de que su heterogeneidad de intereses no puede dar curso a una política unitaria que los satisfaga por igual.

En un documento posterior, "Algunas ideas sobre la revolución chilena", del 28 de febrero de 1974, se sostiene la tesis de que la puesta en práctica del 'modelo monopólico-policial' conducirá a la 'crisis final del capitalismo en Chile'. En esta dirección, la única posibilidad de retiro de las FF.AA. del control del poder proviene de un éxito en el modelo económico puesto en práctica que asegurara la estabilidad del sistema, en cuyo caso, se reservarían el papel de garantes de una 'institucionalidad democrática' limitada que sería aceptada por la DC en la medida en que obtendría participación política. Sin embargo, "la gravedad de la crisis de dominación capitalista dependiente plantea a corto y mediano plazo una crisis de las políticas reformistas alternativas a la conducción burguesa actual (sea generada mediante un reajuste interno en las FF.AA. o por un 'prematureo retorno' a los cuarteles y consiguiente restauración democrática), por su imposibilidad de contener al movimiento de masas".⁷⁸ En este caso el concepto de reformismo hace referencia a la Democracia Cristiana.

El mismo Partido Socialista, en su documento de marzo de 1974,⁷⁹ define el objetivo estratégico de la contrarrevolución como el intento de restauración del sistema de dominación capitalista. Esto no debe ser simplemente conceptualizado como la "recuperación de posiciones perdidas sino como el intento de una transformación reaccionaria global e integral de la sociedad chilena. En esta dirección el objetivo de la dictadura está representado por un intento de 'involución histórica' que garantice, tanto al imperialismo como a la burguesía, la represión eficiente de toda amenaza revolucionaria de sustitución del sistema capitalista. La única posibilidad estructural que existe para ello es un modelo basado en la 'consolidación del capitalismo dependiente con un alto grado de concentración monopólica'. El requerimiento social planteado a la dictadura para viabilizar este intento requiere del fortalecimiento de sus vinculaciones con los sectores fascistizados de las clases medias. Pero ello supone una reducción substancial del frente político y social que integró la oposición al gobierno de la UP en la medida en que la aplicación del modelo económico no puede satisfacer los heterogéneos intereses económicos de sus constituyentes.

Un elemento esencial en el 'modelo económico de la restauración' está representado por la exigencia de desarrollar un proceso acelerado de acumulación de capital basado en la superexplotación de la mano de obra y en el estímulo desenfrenado a la inversión extranjera, que permita la orientación de la economía hacia nuevos mercados externos. Para ello es indispensable la profundización de la dependencia externa y la subordinación al capital extranjero de las inversiones destinadas a fortalecer la capacidad exportadora de las ramas estratégicas y dinámicas de la minería, industria y agricultura. Dicha profundización se expresará en los campos financiero, tecnológico y comercial. El resultado es la adaptación de la economía nacional 'a la necesidad y requisitos de un proceso de integración monopólica internacional subordinado a los intereses imperialistas. Este modelo ratifica incuestionablemente la impotencia histórica de la burguesía chilena para proponerse un desarrollo independiente y basa todas sus posibilidades de supervivencia en la dependencia de la economía imperialista".⁸⁰ A ello debe agregarse una segunda característica constitutiva del modelo representado por la progresiva concentración en beneficio del sector monopolista de la propiedad y la producción y fortalecimiento del desarrollo capitalista del sector agrícola. Ello supone la crisis del funcionamiento de los sectores no monopolistas de la economía. Es esta política económica de restauración global la que ha generado un profundo proceso de recesión económica destinado a favorecer la reestructuración del funcionamiento capitalista de la economía.

La ejecución de la lógica restauradora del modelo económico propuesto por la dictadura militar requiere, para su concreción, de condiciones políticas. Es preciso recordar que las FF.AA. conquistaron el poder como representantes de una alianza política y social en que actuó como fuerza dirigente el imperialismo y la gran burguesía agraria e industrial. Para ello se apoyó en la fuerza principal representada por la pequeña burguesía y los sectores no monopolistas de la burguesía, que se sumaron a 'elementos del proletariado atrasado y sectores del subproletariado'. El carácter dirigente de la gran burguesía se explica esencialmente por dos razones fundamentales: porque sólo ella puede ofrecer un modelo de

desarrollo y restauración del capitalismo a largo plazo de acuerdo con la experiencia puesta en práctica por la dictadura brasileña desde 1964 y porque en el frente político de la dictadura ganaron importancia los sectores fascistizados de la pequeña burguesía que lograron una influencia decisiva en las FF.AA., particularmente en la oficialidad alta y media (por fascismo debe entenderse aquí, los requerimientos de un Estado Autoritario). De ahí que se origine una convergencia entre los objetivos políticos fascistas de las clases medias y de la gran burguesía monopolista. Sobre la base de este razonamiento es posible sostener, de acuerdo con el tenor del documento citado, que la dictadura militar adquiere un fuerte contenido fascista, aun cuando ella difiera por ciertos componentes particulares que tuvieron lugar en las experiencias europeas de los fascismo clásicos como, por ejemplo, la ausencia de un partido fascista que canalice las movilizaciones políticas y de 'masas' en favor de la dictadura. Es ello lo que explica que en el seno de las FF.AA., a pesar de estar representadas en su interior todas las corrientes políticas que participaron en la gestación del golpe de Estado, ganaran terreno y fuerza los sectores fascistas. Dichos sectores fascistas militares asumieron el papel de agentes políticos entre el gran capital y los sectores fascistizados de las capas medias. A partir de ahí se explica el carácter altamente represivo y antipopular evidenciado por la dictadura, su 'apoliticismo' y nacionalismo extremo y su anticomunismo exacerbado.

En opinión del documento la debilidad esencial de la dictadura instaurada proviene de la heterogeneidad política y económica de los sectores y grupos sociales que constituyeron su base de apoyo inicial. La ejecución del modelo económico de restauración descrito genera una dinámica de contradicciones de intereses económicos que conduce a la paulatina y progresiva disolución de la alianza y condenan al gobierno a su inevitable aislamiento. Por otra parte, el modelo económico no deja espacio alguno para que la dictadura pueda superar su aislamiento a través de la puesta en práctica de una política de corte populista. Ello se explica por la carencia de una 'mayor cuota' de excedente que pueda ser repartido en otras capas sociales. De ahí que el Estado represivo adquiera el papel de

un factor extraeconómico que facilita el funcionamiento del modelo económico puesto en práctica y para ello es indispensable la eliminación de todas las formas de desarrollo democrático precedentes. "La tendencia a darle forma a un nuevo Estado (el 'orden nuevo' o Estado resistente) es el resultado de la necesidad de la clase dominante de consolidar su hegemonía creando condiciones que permitan imponer el modelo económico de restauración".⁸¹ De allí que el nuevo Estado de características 'crecientemente' fascistas supone la necesaria destrucción de los partidos de la clase obrera y la suspensión de los 'partidos políticos burgueses y pequeño burgueses'.

En un documento posterior del mismo partido, en el pleno de La Habana de 1975, se especifican aún más los objetivos del proyecto económico puesto en práctica por el Estado autoritario. Los objetivos estratégicos del 'gran capital' están destinados a alterar la tendencia 'histórico estructural' de diversificación de la estructura productiva en los últimos cuarenta años, que se había basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. En virtud del fracaso de la burguesía por consolidar su dominación en las estrategias basadas en el desarrollo del mercado interno, intenta por medio de la dictadura redefinir su dominación de clases sobre la base de un modelo de acumulación de capitales fundamentado en la reorientación de la economía hacia el mercado externo y de una subordinación estricta al capital internacional. A partir de ello se intenta lograr una estabilización de la economía, fundamentada en la sobreexplotación del trabajo, mejorando substancialmente las condiciones ofrecidas al capital internacional. Las medidas económicas tomadas por el gobierno están destinadas a la concentración de los sectores industriales y financieros para fortalecer los circuitos de acumulación sobre la base de ganancias monopolistas. Para ello es indispensable el desmantelamiento del Estado intervencionista que se había generado al amparo del proceso de industrialización nacional. "De acuerdo a lo anterior, los objetivos de la política económica en su fase actual se jerarquizan en torno a dos orientaciones básicas. Por una parte, lograr la estabilidad de precios y el restablecimiento del equilibrio externo,

y, por la otra, facilitar la concentración del capital y la remodelación del patrón de funcionamiento de la economía con propósitos de acumulación reforzada e integración activa a la división internacional del trabajo defendida por las corporaciones multinacionales".⁸²

El Partido Comunista de Chile en un documento de diciembre de 1974 define la dictadura militar como "estrictamente transitoria".⁸³ Es presentada como el resultado necesario de la "incapacidad creciente de los monopolios multinacionales y locales para imponer sus designios a la sociedad respetando las formas democráticas".⁸⁴ La dictadura militar es definida como esencialmente fascista en el sentido de que ella es representativa de "la política más retrógada del capital financiero nacional e imperialista, ejercida en su beneficio exclusivo, estableciendo nuevas formas de realización de la ganancia monopólica sobre la base de superexplotación. Esta política es realizada por medios terroristas, dirigidos, en primer término, contra la clase obrera, pero que afectan de más en más a todas las otras capas sociales del pueblo".⁸⁵ En el mismo documento del pleno de 1977, se insiste en la idea de que el gobierno militar no constituye simplemente otra forma de dictadura burguesa sino que ella es expresión de la dictadura terrorista puesta en práctica por los sectores más conservadores y reaccionarios del capital financiero. De ahí que sea contradictoria con la 'mayoría del pueblo' incluidas las clases medias y sectores de la burguesía. En esta dirección dicho concepto no difiere substancialmente del formulado por George Dimitrov en el séptimo congreso de la Tercera Internacional Comunista en agosto de 1935. Dicha definición es la que crea las condiciones teóricas necesarias para formular una política de alianza alternativa a la dictadura militar: el frente antifascista. La nueva base de clase para el fascismo está dada en América Latina por la relación que se ha establecido entre las burguesías y el capital imperialista, de forma tal que los capitales criollos de tipo financiero forman hoy parte "del sistema mismo de explotación imperialista y el imperialismo pasa a constituir un factor crecientemente interno". Considerando las peculiaridades contenidas en la experiencia fascista chilena y que marcan diferencias substanciales

con los fenómenos europeos de fascismo se propone la definición de la situación chilena como de fascismo dependiente.

En el documento ya citado de junio de 1974, el partido Movimiento de Acción Popular Unitaria conceptualiza la dictadura militar como representativa de los intereses 'imperialistas y burgueses nacionales' que se sustenta internamente en la burguesía monopolista, en la alta burocracia estatal y en la pequeña burguesía profesional. Sin embargo existen diversos sectores sociales que apoyaron el golpe de Estado pero que no participaron con la misma intensidad de los frutos de la sobreexplotación del trabajo. Entre estos últimos sectores se destacan las clases medias y la pequeña burguesía no profesional. Dichos sectores constituirían el punto de apoyo más débil del régimen establecido. En este contexto, las FF.AA. desempeñan el papel de representar políticamente a las clases dominantes y se constituyen en su principal sostén. "Ellas están subordinadas ideológicamente a dicha clase, y en su gestión gubernamental han demostrado ya respeto de los tecnócratas e ideólogos de la burguesía entregándoles principalmente la administración del gobierno y autoasignándose principalmente las funciones represivas".⁸⁶ La inestabilidad del régimen constituido proviene esencialmente del hecho de que, en la medida en que se agudicen los conflictos de clases en términos políticos e ideológicos de la alianza que lo sustenta, ellos penetrarán irremediablemente en las FF.AA. A ello se sumará el hecho de que la dictadura no podrá superar una constante que ha encontrado su presencia en el ejercicio del poder en el nivel de Estado. Ello proviene de una situación en la que ninguna de las fracciones de clase dominante que constituyen el bloque en el poder tienen fuerza necesaria para ejercer una dominación excluyente del poder de las restantes: el problema de la hegemonía compartida. De allí que aunque la dictadura representa la unidad de todas las fracciones del gran capital, dicha unidad será necesariamente problemática. "Precisamente a raíz de ello, la dictadura es incapaz de elevarse por encima de los intereses económicos inmediatos de las distintas fracciones de la burguesía monopolística, de utilizar en plenitud el poder estatal de que dispone, y de sacrificar a aquellos sectores de la clase

dominante incapaces de responder a la dinámica económica que exige la articulación de una nueva forma de dominación".⁸⁷ Son estas razones las que explican la imposibilidad de la dictadura para establecer un régimen de tipo fascista que sea capaz de intervenir con profundidad en todas las dimensiones de la vida de la sociedad chilena y que desarrolle una política corporativa de encuadre del movimiento de masas. Por el contrario, la dictadura chilena debe ser caracterizada como una 'dictadura tecnocrática de derechas'. "Esta caracterización no es simplemente una sutileza, sino que recoge la falta de coherencia que manifiestan muchas de sus medidas, y señala al mismo tiempo que su grado de estabilidad y persistencia reales es mucho menor que aquellos que tuvieron en su época los regímenes fascistas".⁸⁸

Para el Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero y Campesino, la dictadura militar constituye un régimen fascista cuyo objetivo fundamental está constituido por el intento de establecer un sistema político, que facilite el funcionamiento estable del sistema capitalista dependiente. Se trata de desarrollar las condiciones estructurales necesarias para erradicar las condiciones históricas que ubican a la clase obrera en condiciones de disputar el poder a la burguesía y al imperialismo. Uno de los supuestos esenciales de dicho intento es que el capitalismo dependiente no puede sostener su supervivencia en los marcos de una organización estatal democráticoburguesa. Los grupos sociales que sostienen la dictadura y el 'sistema político estatal fascista' están constituidos por el imperialismo, la burguesía monopolista y la gran burguesía agraria. A ello se suma el apoyo de la mediana y pequeña burguesía industrial, comercial y agraria, y las capas profesionales y técnicas integradas en las clases medias. Al igual que en los documentos de otros partidos políticos, se sostiene la tesis de que las dificultades políticas esenciales provienen de sus dificultades para obtener un apoyo de masas suficientes. "El fascismo, para ser estable, no consiste exclusivamente en un régimen totalitario y policial. Requiere el apoyo y la movilización de las masas, fundamentalmente pequeño burguesas, de la sociedad".⁸⁹ Las FF.AA. constituyen el principal sostén político de

la burguesía monopolista y de la política norteamericana y ellas buscan el mantenimiento de su unidad a partir de la puesta en práctica de la política fascista. Dicha política constituye la más sólida garantía de las clases sociales en el poder. Pero ello no es una situación consolidada en la medida en que aún prevalecen en su seno importantes corrientes de militares 'democráticos y constitucionales' y en un momento determinado ello se puede ver fortalecido por la permeabilidad que generarán en el interior de las FF.AA. las contradicciones de las políticas ejecutadas por la dictadura. A ello se suman las contradicciones que tienen lugar entre la tropa y la alta oficialidad.

El Partido Izquierda Cristiana define el Estado autoritario constituido como una dictadura terrorista fascista que ha reasumido en favor de la burguesía el poder político del Estado. Ello es el resultado de la culminación de un proceso insurreccional encabezado por la burguesía monopolista y el imperialismo, y en el que participaron vastos sectores medios. "Caracterizamos a esta dictadura fascista, como terrorista, no porque su empleo del terror sobrepase en intensidad a los realizados por otras dictaduras fascistas... sino porque, a diferencia de aquéllas, tiene en este maquiuvelico instrumento su única base de sustentación".⁹⁰

Para el Partido Radical de Chile, el nuevo Estado autoritario debe ser conceptualizado como de carácter 'ultraderechista y proimperialista' y con características que permiten de calificarlo de fascista".⁹¹ La base de sustentación esencial de la dictadura está constituida por la gran burguesía industrial y monopolista, que paralelamente genera un proceso de aislamiento social progresivo del gobierno. Dicho aislamiento se concretará a partir de la marginación progresiva de la clase media, la pequeña y mediana burguesía industrial y comercial, como resultado de la aplicación de una política económica que entre en contradicción con sus intereses económicos.

Para el MIR la conceptualización del nuevo Estado autoritario adquiere una dimensión teórica diferente y constituye la interpre-

tación antagónica a la conceptualización fascista de él. La dictadura militar aparece resolviendo temporalmente la crisis del Estado chileno a partir del establecimiento de un "Estado y régimen político de excepción".⁹² y su política económica la conduce desde el comienzo a autoenajenar su base de apoyo social fundamental representada por la pequeña burguesía y a ampliar dicha contradicción a otras fracciones de clases que constituyen su alianza política y social. Ello conduce a que la dictadura se someta a una débil representación de clase de precaria condición hegemónica para la fracción de clases dominante, lo que sumado a la profunda crisis de acumulación de capital de la economía chilena conduce a la imposibilidad de poner en práctica una política de tipo fascista. A pesar de la política económica ejecutada la dictadura se esfuerza por mantener en el nivel político una alianza con todas las fracciones de la gran burguesía y con el capital mediano y pequeño. "Al amparo de la dictadura gorila se va estructurando un bloque dominante bajo la hegemonía del capital financiero e integrado por la gran burguesía industrial monopólica y no asociada y subordinada al capital extranjero y que produce (o tiene posibilidades de producir) para el mercado externo, la gran burguesía agraria y la burguesía dedicada al comercio de importación-exportación".⁹³ En esta dirección, la dictadura es el resultado exitoso de un vasto movimiento de masas contrarrevolucionario que logró unificar a la totalidad de las fracciones burguesas y servirá necesariamente los intereses de la burguesía nacional vinculada y subordinada al capital extranjero. Ello implica una redefinición substancial de la estructura productiva del Estado desarrollista precedente y del proceso de acumulación nacional. En cierta medida la dictadura militar es el resultado del fracaso de las versiones 'nacionales desarrollistas' de carácter reformista y de las versiones más radicales de tipo populista. Esto último constituye una referencia calificatoria de la experiencia de la UP como un modelo nacional desarrollista radical.

La política económica está destinada en lo esencial a modernizar el aparato productivo por medio del aumento de la composición orgánica de capital y estimular el aumento de productividad

para cumplir la función de economía exportadora. Dicha función proviene del hecho de que el modo de producción capitalista, y particularmente su estructura interna, carece de los medios para posibilitar la reproducción ampliada del capital, en la medida en que carece del sector productor de bienes de capital. De ahí que el proceso de acumulación de capital se encuentre disociado e interrumpido. Esta situación sólo puede ser resuelta por el establecimiento de un mercado de capital de divisas paralelo al mercado de 'capital papel' y la formalización de un sector de bienes de capital comercial importador de dichos bienes. En esta dirección el sector exportador, la inversión extranjera y el endeudamiento externo desempeñan un papel fundamental. El modelo económico puesto en ejecución por la dictadura intenta ser funcional a dicha situación. "El funcionamiento del modelo se caracteriza por una superexplotación acentuada de la fuerza de trabajo, una alta cuota de ganancia, una gran acumulación de capital dinero, pero incapacidad revalorizadora (acceso a capital divisas y conversión en bienes de capital + capital dinero). Débil desarrollo de la composición orgánica del capital, ineficiencia competitiva de las empresas, incapacidad exportadora. Esto provoca además altos precios, mayor oferta que demanda, acumulación de stocks, estancamiento de mercado interno y parálisis de la realización de la plusvalía. Dependencia del crédito, concentración del capital, hegemonía del capital financiero".⁹⁴. Dicho modelo constituye la dimensión económica del Estado de excepción y este último corresponde al intento de la burguesía por reorganizar su dominación en el contexto de una crisis económica, política e ideológica, es decir, una crisis de hegemonía general. De ahí que la forma de Estado y el régimen político sean necesariamente transitorios en una perspectiva en que la dominación tiene plazos políticos, que corresponden al tiempo necesario para la construcción del nuevo sistema hegemónico y el nuevo bloque histórico. El Estado autoritario representado por la dictadura no tiene ningún tipo de relación con la conceptualización de fascismo, excepto en que ambos constituyen formas de Estado o regímenes de excepción del Estado capitalista. En tanto Estado de excepción, el 'régimen militar gorila' es representativo de la burguesía asociada y subordinada al imperialismo y cuya fracción dominante está representada por el capital financiero.

6.4. La política de la izquierda respecto de la Democracia Cristiana: la necesidad de una alianza antidictatorial.

El amplio debate en torno al carácter del Estado autoritario y de su conceptualización como 'fascismo dependiente' presuponía implícitamente una discusión respecto del carácter que debía asumir la alianza política y social destinada a sustituir a la dictadura. Un papel esencial en ella estaba representado por la política que se debía seguir respecto de la Democracia Cristiana y de sus posibilidades políticas de incorporación a la alianza 'antifascista'. Dicha discusión fue abierta con la posición favorable del Partido Comunista respecto de la incorporación del citado partido en la 'alianza antifascista' y esta posición constituirá su política de alianzas esenciales hasta 1980. Por otra parte, la aceptación o rechazo de esta política conformará el eje central de las disputas de la izquierda respecto de este problema que se extenderá hasta la misma fecha.

El presupuesto esencial de la política del PC respecto de la DC se fundamenta en el hecho de que el aislamiento y carácter minoritario del apoyo con que cuenta la dictadura han creado condiciones favorables en el seno de la oposición para constituir un 'frente unitario más amplio'. Ello reafirma la vigencia de la alianza política constituida por la Unidad Popular, pero, "al mismo tiempo, impone ir más allá, a la acción común y la unidad con sectores del pueblo que no estuvieron con el gobierno popular. La línea divisoria entre el pueblo y sus enemigos no ha de trazarse mirando el pasado sino vista al futuro. La divisoria esencial no es la que dividía a gobierno y oposición antes del golpe, sino aquella que separa a los fascistas y golpistas usurpadores del gobierno de los que sufren las consecuencias de su política reaccionaria, de los que están por la renovación democrática, por los cambios sociales progresistas, por la independencia nacional".⁹⁵ En una declaración posterior, de diciembre de 1974,⁹⁶ dicho partido solicita oficialmente a la Democracia Cristiana la consideración de sus planteamientos en beneficio de la constitución de un amplio "Frente Antifascista" y destaca que el hecho político

más significativo está constituido por la sustitución de su apoyo al golpe militar por una política de abierta oposición al régimen. El objetivo esencial de dicho frente está constituido como un movimiento destinado a transformarse en gobierno como resultado de la derrota de la dictadura y la destrucción del Estado totalitario. Ello en beneficio de un nuevo Estado de derecho democrático que favorezca los cambios revolucionarios y la independencia nacional. La 'unidad antifascista' asegurará también la derrota de 'toda salida reaccionaria' o conciliadora frente a la situación actual y que está destinada a la exclusión de la clase obrera en los hechos políticos futuros. El elemento esencial y decisivo en el éxito de la construcción del Frente Antifascista está representado por el 'trabajo de masas' y ello constituirá la táctica clave en el esfuerzo por derrotar a la dictadura. Dichas formulaciones son reafirmadas en un trabajo de Orlando Millas presentado en diciembre de 1974.⁹⁷ En la misma línea de interpretación se inscribe el "Manifiesto del Partido Comunista" de agosto de 1975.⁹⁸

En el documento del pleno de agosto de 1977 del Comité Central,⁹⁹ se plantea que la condición esencial para derrotar la dictadura está constituida por la unidad de las fuerzas democráticas: "Este es precisamente el contenido de nuestra proposición del frente antifascista. Pero no hacemos y no haremos cuestión de nombres. Lo importante no es la etiqueta".¹⁰⁰ El aspecto clave reside en el 'entendimiento' entre la DC y la Unidad Popular. En dicho contexto se asigna una importancia relevante a la participación de los 'militares antifascistas y no fascistas' y al entendimiento entre la clase obrera y las corrientes patrióticas en el seno de las FF.AA. "Lo fundamental es y será siempre la unidad de la clase obrera y el pueblo, pero, en interés del país y del progreso social, la realidad indica que se requiere la alianza con los sectores democráticos y patrióticos de las FF.AA.". ¹⁰¹ En su documento de octubre de 1978 "La lucha de masas derribará a la dictadura", se refuerza la idea de la necesidad de un entendimiento con las Fuerzas Armadas a fin de derrocar la dictadura y se supone que extensos sectores de sus miembros 'perciben la profundidad'

de la crisis generada por el gobierno militar y que profundiza la separación entre ellas y el pueblo. Se reafirma el convencimiento de que la convergencia entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana es el factor decisivo en la materialización de la alternativa democrática.¹⁰² En el pleno de 1979 se introducen variaciones de importancia a la línea de acción política sostenida por dicho partido. Ellas se concretaron en lo que se designó como 'paso táctico' y que consistió en poner el acento no en el problema de la composición de los integrantes políticos del primer gobierno que suceda a la dictadura sino fortalecer la búsqueda de un acuerdo entre toda la oposición en torno a la tarea de poner término a la dictadura. Esto había sido sugerido por los integrantes del interior que habían concurrido a dicho pleno en el sentido de que el objetivo central era el derrocamiento de la dictadura: "Es obligación que el partido se adelante, como ya lo ha hecho, señalando su disposición a gobernar junto a las demás fuerzas opositoras y proponga un programa de transformaciones democráticas; pero, si lo que obtenemos es sólo un compromiso democrático suscrito por quienes estén o no estén en el gobierno de transición, no significa en modo alguno abandonar nuestro objetivo estratégico. Al revés, ello puede significar despejar el camino para avanzar hacia él".¹⁰³

Las formulaciones políticas de los acuerdos del pleno de 1979 fueron hechas públicas en el Manifiesto de mayo del mismo año. En dicho documento se explica la permanencia de la dictadura en el poder como resultado de la utilización del terrorismo de Estado y del apoyo obtenido de los altos mandos militares, de la oligarquía financiera y de la política norteamericana. En ello también han influido las 'esperanzas injustificadas' surgidas en extensos sectores de la oposición respecto de los efectos de la administración Carter, sumándose a ello la sobrevaloración de las disputas entre las diversas fracciones en el interior de la dictadura.¹⁰⁴ Como consecuencia se retrasó la unidad de las fuerzas democráticas. Paralelo a los esfuerzos destinados al fortalecimiento de la unidad se debe desarrollar una política de acercamiento entre las "Fuerzas Armadas y el pueblo" bajo el prin-

cipio del reencuentro que facilite el restablecimiento de la 'libertad y la democracia'. Se propicia el establecimiento de un gobierno provisional que se integre fundamentalmente por la Unidad Popular, la Democracia Cristiana y eventualmente sectores militares que estén dispuestos a ello. La obtención de dicho objetivo sólo puede ser posibilitada por la superación de las disputas y antagonismos existentes en el seno del conjunto de las fuerzas democráticas. Tanto el análisis político y sus proposiciones del segundo pleno como las ideas contenidas en el Manifiesto de mayo de 1979 encuentran una reafirmación en la publicación en julio de 1979 del documento "Nuestro Proyecto Democrático".

En dicho documento se sostiene la tesis de que a partir de las condiciones políticas y sociales existentes en Chile, que plantean como tarea ineludible la sustitución del fascismo, no se supone el hecho de que la constitución de un Estado socialista o 'típicamente burgués' constituyan las alternativas más inmediatas. "En otras palabras, el dilema no es fascismo o socialismo, ni simplemente fascismo o democracia burguesa. Lo que corresponde es un nuevo régimen democrático, popular y nacional, que favorezca y promueva los cambios que emanen de las necesidades objetivas del progreso social".¹⁰⁵ Dichos cambios deberían privilegiar las transformaciones de orden público por encima de las de tipo económico. Ello marcaría una diferencia substancial con las características que el proceso de transformaciones había adquirido durante el gobierno de la Unidad Popular. A pesar de ello el documento se declara partidario de la organización de la economía en cinco áreas: social, mixta, privada, cooperativa y autogestionaria.¹⁰⁶ Dichas áreas constituirían la estructura material del funcionamiento del sistema democrático. Bajo esta perspectiva dicho partido se declara contrario a seguir una política de exclusión de sectores democráticos, rechaza a la vez la puesta en discusión de su propia vocación democrática y "reitera que la unidad antifascista no requiere que nadie renuncie a sus principios, sino que se pongan en primer plano los objetivos comunes".¹⁰⁷ Respecto de la DC se declara el reconocimiento de la importancia política de dicho partido en la sociedad chilena. Las 'dificultades' con él tenidas no

pueden impedir la valoración del papel político de sus sectores democráticos que se han enfrentado al fascismo. A pesar de las nuevas dificultades políticas que se pueden generar entre dicho partido y los de la Unidad Popular, es necesario poner en primer término la necesidad de entendimiento en torno a los objetivos comunes: el restablecimiento de la democracia. "La disputa conduciría a la desinteligencia y a las pugnas en el campo de las fuerzas democráticas y, si la Democracia Cristiana no es arrastrada a unirse a la derecha, el país podría retornar a la división tripartita que prevaleció ayer. En ambos casos se beneficiaría la reacción".¹⁰⁸ Se propicia por tanto, a fin de evitar las citadas dificultades, el entendimiento abierto entre la UP y la DC y el reencuentro de la totalidad de las fuerzas democráticas civiles y militares. En lo que no existe posibilidad de acuerdo es en lo referido a la constitución de un gobierno de coalición. Particularmente porque ello es explícitamente rechazado por la Democracia Cristiana y dicho rechazo alcanza particularmente al Partido Comunista. "Es esta una posición que aparece irreductible y que obedece a determinados intereses de clase o a la creencia de que Chile no está en condiciones de darse un gobierno que disguste a los EE.UU. o a los altos mandos castrenses".¹⁰⁹

Frente a la política de exclusiones se establece como evidente la eventualidad de que un gobierno sin la DC o sin la UP no será lo suficientemente fuerte como para garantizar el restablecimiento democrático. Sin embargo, se sostiene que es posible llegar a un 'compromiso democrático' postergando todo tipo de consideraciones referidas al problema de la constitución del gobierno. Es evidente que esto último constituye además de la aspiración democrática, un esfuerzo político por buscar una alternativa que permita superar el aislamiento político a que intenta ser sometido el Partido Comunista por parte de la política demócrata cristiana.

El Partido Socialista en su documento de noviembre de 1973 ¹¹⁰ expresa la esperanza de que se impongan como posiciones mayoritarias en el interior de la DC las representadas por sus políticos más afines a las posiciones radicalmente antidictatoriales. Es

necesario la búsqueda de acuerdos con su directiva para impedir que se adhiera a la política representada por la dictadura. La dificultad principal en este intento está representada por la influencia y poder de Frei en el partido. "Si a nivel provincial o sectorial sus directivas oficiales aceptan integrar el Frente Unico, esto debe hacerse, ya que a su Dirección Nacional le costaría mucho más tomar una decisión de esa naturaleza que lleva casi seguro, a la división del partido".¹¹¹ Las consecuencias políticas y sociales generadas por el establecimiento del Estado autoritario posibilitaría las condiciones políticas de una alianza entre la clase obrera, sectores de la 'pequeña burguesía propietaria y no propietaria' y al 'subproletariado'. Dichos sectores constituirían un bloque social fundamental en torno del cual agrupar o neutralizar a los sectores no monopolistas negativamente afectados por la política económica del Estado autoritario. La posibilidad de materializar esa alianza dependería esencialmente de la capacidad del movimiento popular para incorporar en su plataforma política los intereses de estos sectores y de la apertura hacia un entendimiento político con los agentes de dichas fracciones y clases". La alianza pluriclasista encabezada por la clase obrera encontrará su expresión en el Frente Antifascista, donde deben confluír la Unidad Popular, el MIR y la Democracia Cristiana, sobre la base de la hegemonía de un sector democrático y progresista".¹¹² La constitución de dicho frente supone necesariamente la derrota previa en el interior de la DC de su fracción derechista, la representada por Frei. En dicho frente cobra una relevancia particular la agrupación de los distintos sectores sociales sobre la base del principio de 'unidad y lucha' a fin de asegurar la 'dirección obrera de él'. Ello supone además, una reformulación de las relaciones establecidas entre el Partido Comunista y Socialista. En la medida en que ambos contienen las representaciones históricas de la clase obrera y el movimiento popular chileno, constituyendo el bloque histórico central que puede garantizar la derrota de la dictadura. En esta perspectiva el Partido Socialista exige respecto de su aliado político histórico la superación de la sobrevaloración de las tácticas pacíficas de reivindicaciones sociales y económicas, que excluyeron la educación del movimiento

popular en el utilización de diversas formas de lucha. Por otra parte no se elimina la posibilidad de incorporación del MIR, que es conceptualizado como expresión política de la pequeña burguesía revolucionaria, a condición de que éste supere el 'infantilismo izquierdista en donde el tema único estaba constituido por el enfrentamiento violento'.

En el documento del pleno de La Habana, ¹¹³ el Partido Socialista 'valoriza positivamente' la participación eventual de la DC en la lucha por derrotar al Estado autoritario. "Nuestra convicción, sin embargo, es que no cabe esperar una consecuente actitud de lucha antifascista del Partido Demócrata Cristiano, en tanto dominan en él los sectores que expresan los intereses del gran capital y el imperialismo. Por ello, el pleno estima que el Frente Antifascista debe ser impulsado desde ya con o sin la presencia demócrata cristiana, a fin de ofrecer de inmediato a las energías populares latentes, un cauce natural que canalice la lucha concreta y efectiva contra la dictadura".¹¹⁴ Una de las tareas esenciales de dicho Frente estará representada por el esfuerzo de aglutinamiento de todas las fuerzas sociales que luchan en contra de la dictadura, a fin de agudizar las crecientes contradicciones que tienen lugar en el seno de la dictadura, lo que contribuiría además a la separación necesaria de los sectores 'honestos y patriotas' de las FF.AA. de los sectores vinculados al fascismo y a la dictadura. En esta dirección, la alternativa para derrotar al gobierno autoritario debe adquirir un carácter político militar. Una de las dificultades esenciales de la DC proviene de la pauperización de las clases medias que limita el campo de acción del 'centrismo pequeño burgués' que es propia de dicho partido.¹¹⁵ A ello se suma su debilidad interna, que proviene del enfrentamiento ideológico interno entre sus diferentes tendencias políticas o fracciones. Toda búsqueda de un enfrentamiento directo con el Estado autoritario se verá limitada por su escasa cohesión interna. Sin embargo, el eje constitutivo central del Frente estará representado por la Unidad Popular y su constitución pasa necesariamente por la unidad de las fuerzas de izquierda, lo que supone la inclusión sin limitaciones del MIR.

En su documento del pleno de septiembre de 1976 se reitera el convencimiento de que el Frente Antifascista debe constituirse a partir de la integración de la UP, la DC y el MIR. "La Democracia Cristiana en reiteradas ocasiones ha planteado una alternativa opuesta al modelo de la dictadura, que no incluye al movimiento popular en su conjunto tras ésta. Con la unidad de los sectores que van desde la derecha liberal a la social democracia se plantea la instauración de un régimen democrático burgués que rescate a Chile de la grave crisis actual".¹¹⁶ Esta política constituye una reformulación del 'viejo esquema colaboracionista' que intenta reformular y representar los 'intereses imperialistas' y que otorga a las FF.AA. el papel de guardianes de la democracia. Esta política es sólo representativa de los sectores derechistas de la DC que controlan la directiva del partido, y los sectores progresistas de su interior que se encuentran subordinados a la política oficial debe ser ayudados por las acciones concretas del movimiento popular. De ahí que la alianza con dicho partido debe formularse a partir de un trabajo de base que se articule desde plataformas mínimas y, a partir de ahí, ampliar las conversaciones a nivel de directivas de los partidos que concrete un programa 'mínimo de democracia del pueblo'. En las resoluciones del segundo pleno de agosto de 1977 se plantea que, en las condiciones actuales de América Latina, la 'contradicción principal' en el campo política está representada por el dilema: dictadura o democracia. Bajo esta perspectiva debe ser encuadrada la política de la administración Carter en los EE.UU. destinada tanto al restablecimiento de los derechos humanos como de la democracia. "Sin embargo, estos sectores imperialistas entienden la democracia como algo puramente formal, como un régimen de centro derecha con parlamento y alguna oposición tolerada, pero que no altere la base económico social capitalista y dependiente. Desde este punto de vista el régimen democrático es entendido como la mejor forma de contener al movimiento popular y conservar intacta la zona de seguridad estratégica de los EE.UU. Es claro que esta posición cuenta con el aplauso de diversos sectores burgueses nacionales que ven en ésta una buena forma de cambiar el rostro de su dominación".¹¹⁷ Es evidente que la aplicación de la política Carter es interpretada

como de fortalecimiento de la estrategia política formulada por la Democracia Cristiana. Sobre todo si se considera que, en el presente documento, existe una conceptualización de la democracia antagónica con dicha política que se define como el esfuerzo del movimiento popular por "ampliar la democracia más allá de las formalidades llevándola a los distintos sectores de la vida económica, política e ideológica". Bajo esta perspectiva la democracia tiene un profundo sentido anticapitalista y prosocialista. La aplicación consecuente de los principios de la democracia económica conducen necesariamente al socialismo en la medida en que exigen la destrucción de las formas capitalistas de producción. La aplicación consecuente de las exigencias democráticas conducen necesariamente al socialismo.¹¹⁸

En el informe del secretario general al pleno extraordinario realizado en Argel en marzo de 1978 ¹¹⁹ se sostiene que tanto la lucha por derrocar a la dictadura como la situación general creada por el fascismo confieren a la discusión sobre la política de alianzas una importancia primordial. El problema central que se deriva de su formulación se relaciona con la necesidad de satisfacer dos objetivos simultáneos: la necesaria unidad de todas las fuerzas democráticas para derrotar a la dictadura y la exigencia estratégica de construir un bloque de fuerzas por el socialismo. Para algunos sectores el objetivo histórico del socialismo "pasa por la reiteración consignista y voluntarista de su contenido más general y abstracto, con desconsideración manifiesta de las consecuencias de la derrota y la irrupción fascista. Para otros, en cambio, ya sea porque no terminan de reconocer la inviabilidad de las soluciones reformistas a la crisis nacional, ya sea porque la magnitud de la derrota y las dificultades considerables de la coyuntura los conduce a postergar indefinidamente la perspectiva socialista y a cuestionar la capacidad de conducción y movilización de las fuerzas populares, la solución pasa por el abandono de la iniciativa ideológica y política a los sectores burgueses democráticos bajo la premisa, más que discutible, de que su primacía es el prerequisite indispensable para la reconstrucción de un clima institucional favorable a la reiniciación del proceso

democrático".¹²⁰ La primera alternativa se expresa en concepciones autonomistas de la política del proletariado que conducen necesariamente a su aislamiento político y dificulta profundamente la necesaria unidad de todas las fuerzas antifascistas. Los segundos hacen uso de un 'realismo pragmático' que termina por desvalorizar la fuerza y la capacidad política del proletariado. Ambas constituyen versiones distorsionadas de la 'autonomía del proletariado'. El problema político esencial que la 'experiencia de la dictadura' plantea a las fuerzas políticas de izquierda es el de las relaciones entre democracia, liberación nacional y socialismo. De ahí que la tarea de construir una alianza estratégica, que concrete la aspiración de la 'Unidad de todo el Pueblo', sea paralela al objetivo por establecer formas superiores de democracia en el período postdictatorial. Ello cobra aún más relevancia al recordar que el objetivo esencial de la presente fase es la derrota del fascismo. En torno de dicho objetivo se produce la convergencia de diferentes sectores políticos y sociales, entre los que debe considerarse la Democracia Cristiana. Una política de acciones comunes con ella no puede significar necesariamente contradicciones con la línea política del Partido Socialista: "lejos de ello, las iniciativas que se adopten en tal sentido deben ser percibidas como expresiones de la concreción táctica que adquiere dicha línea en el período".¹²¹

Pero el establecimiento de una política de vinculaciones con la DC debe estar destinada también a evitar la tendencia de dicho partido a 'administrar en su provecho' la división de las fuerzas sociales contrarias a la dictadura y evitar que ella legitime formas de democracia restringida en el período post-fascista, que puede ser apoyada por tendencias conciliadoras y oportunistas en el seno del movimiento popular. Pero para que la política de izquierda tenga éxito, debe ir acompañada de la elaboración de un proyecto de desarrollo nacional alternativo, tanto al fascismo como al 'centrismo burgués'. Sólo una política de estas características permite enfrentar los efectos negativos del 'retorismo aislacionista' y el conformismo que se fundamenta en los principios de un 'realismo político'. Es bajo estas condiciones como es

posible buscar una convergencia entre la UP y la Democracia Cristiana. Finalmente en las resoluciones del XXIV Congreso, después de producida la división del Partido Socialista, se rechaza la tesis demócrata cristiana destinada a constituir un bloque cívico militar. Dicho bloque debería asegurar un proceso de transición gradual y sin rupturas hacia la constitución de un régimen que logre el desplazamiento de las FF.AA. del control del gobierno. "Para lograr sus objetivos pretende articular sus aspiraciones con las de algunos sectores de las FF.AA., arrinconar a los grupos más reaccionarios y fascistas de la burguesía, asegurarse el respaldo del capital internacional y del imperialismo norteamericano, estructurar un plan político y económico que sea atractivo para la pequeña y mediana burguesía y, por otro lado, subordinar al movimiento popular a sus objetivos para mantener en repliegue al proletariado".¹²² De ahí que, según este documento, la DC se constituya en el centro político e ideológico en torno al cual se concentra la oposición burguesa a la dictadura, y su estrategia consiste en salir del período de la dictadura con un sistema político que sea capaz de otorgar cohesión y estabilidad al funcionamiento futuro del capitalismo en Chile.

Para el MAPU ha surgido una oposición burguesa a la dictadura que está representada por la Democracia Cristiana y representa particularmente a los sectores no monopolistas de la economía. Y eso a pesar de que su núcleo dirigente lo somete a una política de oposición pasiva al régimen. "En base a ésta, que implica una total independencia y no colaboración con la izquierda, y un intento de aprovechar la situación para ganarle sectores populares a los partidos obreros, esperan presentarse como alternativa de centro y conquistar el gobierno una vez que se demuestre el fracaso de la dictadura y se manifieste plenamente su crisis política".¹²³ Todo ello a pesar de la política de colaboración con la izquierda que es buscada por sus sectores progresistas pero que por su condición minoritaria no logran imponer sus posiciones. En el contexto de la crisis generalizada que surgirá como resultado de la política económica puesta en práctica y el aislamiento político progresivo que el Estado autoritario obtendrá como resultado de

ella, la DC desempeñará un papel decisivo. De allí que la izquierda debe intentar impedir una salida de transacción estimulada por dicho partido. Es probable que la Democracia Cristiana intente presentarse como 'equipo burgués de recambio' apoyada por la oficialidad de 'centro derecha' de las FF.AA. Para evitar dicha situación se requiere la constitución de un amplio Frente Antifascista que amplíe y supere lo que la Unidad Popular constituyó en el pasado, y para ello es necesario una conducción previa: la formulación de una real alternativa de izquierda que posibilite la convocatoria de otros sectores políticos. "Mientras ella no exista, somos excépticos respecto a la responsabilidad real de vencer las vacilaciones de la oposición burguesa, porque siempre encontrará razones para tentarse con el colaboracionismo o con el sueño de una alternativa propia al margen de los partidos populares".¹²⁴ Sin embargo, este partido concluye con la necesidad de buscar acuerdos con la DC en todos sus niveles.

Para el partido MAPU Obrero y Campesino la erradicación del Estado fascista será imposible sin la erradicación del poder de las clases en que se sustenta. Para ello es indispensable la formulación desde la izquierda de una política de alianzas que contribuya al aislamiento político del Estado autoritario. De ahí que el objetivo político máximo de esta etapa ¹²⁵ esté constituido por el intento de organizar un Frente político Antifascista que incluya a la UP y al MIR. En este frente, la política que desarrolle la clase obrera respecto de la DC constituye uno de los aspectos más significativos. Este último partido es definido como 'pluriclasista', que representa los intereses de amplios sectores de la mediana y pequeña burguesía. Ha obtenido una significativa influencia entre los trabajadores a partir de su carácter reformista y populista y su ala derecha se encuentra estrechamente vinculada a los sectores de la burguesía monopolista y al imperialismo, que se encuentran particularmente representados por Frei.

El Partido Izquierda Cristiana define como objetivo fundamental para la presente etapa el derrocamiento de la 'dictadura fascista terrorista' sobre la base de metas democráticas, populares y

nacionales. Para ello debe mobilizarse a todos los sectores sociales objetivamente perjudicados por la política autoritaria. "Desde este punto de vista, aparece como prioritaria una actividad ideológica y propagandista que se oriente a justificar y poner en marcha de manera ascendente un proceso de desobediencia generalizada a la tiranía, que se exprese en un activo rechazo a sus planes, en una participación activa en los organismos de resistencia y en el empleo de métodos diversificados de oposición. Entre éstos pueden señalarse formas no violentas; formas de resistencia cívica y formas de movilización popular en su sentido más tradicional".¹²⁶ Respecto de las relaciones con la DC, dicho partido es de la opinión de considerar definitivamente que ella se niega a la constitución de un Frente Antifascista. Frente a ello se propone como alternativa el 'desencadenamiento' de un fuerte movimiento de masas que lleve a la práctica acciones comunes en el nivel de base entre la izquierda y todos aquellos sectores que asuman las políticas antifascistas. Una mayor relevancia cobra la necesidad de buscar una convergencia entre los sectores democráticos de las FF.AA. y el movimiento popular. En el documento final de su segundo pleno ¹²⁷ dicho partido constata que, a pesar de la 'fuerza potencial' de la izquierda, ésta no logra constituir una fuerza capaz de derrocar a la dictadura y establecer un gobierno provisional. Todo eso es resultado tanto de las dificultades de dirección como de la imposibilidad de formular un acuerdo con la Democracia Cristiana. Dicha situación es la que permite al Estado autoritario superar las crisis periódicas a que se ve enfrentado.

Para el MIR las relaciones políticas con la DC y las posiciones respecto del Frente Antifascista tiene un carácter diverso del formulado por los partidos integrantes de la Unidad Popular. En un modelo de economía importadora-exportadora asociada al capital extranjero, que supone un creciente proceso de monopolización de la economía y una restricción radical del mercado interno que arruina al capital mediano y pequeño y que reduce la participación de la pequeña burguesía en la apropiación del excedente generado por la pauperización radical de los sectores populares, la táctica de la

Democracia Cristiana no es la lucha inmediata en contra de la dictadura. Espera el desgaste del Estado autoritario e intenta apoyarse en las dificultades y contradicciones que él genera en la aplicación de su estrategia económica y política, y su táctica consiste en esperar que la dictadura siga golpeando a la izquierda. Mientras tanto, se ocupa en intentar ganar a un sector de las FF.AA., convencer a la burguesía industrial de que Frei constituye la mejor posibilidad para su dominio político e intenta recomponer el 'viejo policlasismo' en que históricamente se había apoyado. Las diferencias esenciales entre el MIR y la UP provienen de cuatro factores esenciales: estrategia, táctica y formas cotidianas de puesta de práctica; caracterización de la dictadura y el período; alianza con la DC y carácter de ese partido, y perspectivas y posibles desarrollos y salidas del actual período. "La diferencia fundamental es la diversa concepción estratégica de los sectores reformistas de la UP y del MIR. Si bien ambos perseguimos el derrocamiento de la dictadura, dichos sectores en una nueva reedición de las políticas reformistas que imperaron en el período del gobierno de la Unidad Popular, aspiran sólo a la restitución del Estado burgués democrático y levantan nuevamente la dañina ilusión de que dentro de los marcos de este Estado democrático burgués a que aspiran (que ahora llaman 'democracia renovada') podrán alcanzar 'tarde o temprano' la sociedad socialista; el MIR persigue el derrocamiento de la dictadura y la restitución de las libertades democráticas, pero tenemos como objetivo estratégico el desarrollar a través de la lucha de resistencia la fuerza social, política y militar revolucionaria del proletariado y sus aliados que permita socavar el Estado burgués, construir un sólido poder popular y llevar adelante una revolución proletaria y socialista".¹²⁸

Bajo esta perspectiva, la formulación de la estrategia antifascista elaborada por el Partido Comunista está destinada a hacer posible su vinculación con la Democracia Cristiana. Para el MIR, al igual que para otros partidos de la izquierda, la DC constituye un partido pluriclasista que coincide con las organizaciones 'reformistas' de izquierda en la necesidad de reconstruir el

'Estado burgués' democrático. Los sectores que representan a la gran burguesía en el interior de dicho partido, "esbirros políticos del gran capital criollo y extranjero", requieren del apoyo de la izquierda para hacer frente al Estado autoritario que los desplazó del poder y, una vez recuperado éste, constituirse en una barrera de contención de los avances del movimiento popular. El MIR sólo auspicia la unidad con aquellos sectores de trabajadores, pequeña burguesía y mediana, que integran la DC. Dicha alianza está destinada a fortalecer al 'proletariado', a las fuerzas revolucionarias y no a subordinarlo a las políticas de la burguesía. Los intentos del reformismo (Partido Comunista) por buscar a través de la alianza con los sectores burgueses (Democracia Cristiana) lo conduce a descartar la resistencia armada. A cambio de ello pone un énfasis desmesurado en la utilización del 'margen restringido de actividad legal reivindicativa'. "Temen que las formas ilegales de lucha y en especial de lucha armada los aleje de las fracciones burguesas a las cuales aspiran a aliarse".¹²⁹ En oposición a ello, el MIR busca impulsar efectivamente la lucha 'legal y semilegal de masas' y las formas de lucha armada. Sólo por medio de la utilización de dicha política es posible lograr acelerar el debilitamiento de la dictadura y agudizar las contradicciones interburguesas. "Por último, es sólo a través de la organización y activación de la lucha reivindicativa, política y armada de masas que lograremos fortalecer el movimiento revolucionario llegando gradualmente a alcanzar la fuerza necesaria para pasar de la defensiva actual a la lucha ofensiva por el derrocamiento de la dictadura y el establecimiento de un poder popular y revolucionario".¹³⁰

Por otra parte, lo que ha dificultado la unidad de resistencia de la izquierda con la 'pequeña burguesía democrática' de la DC es el surgimiento, en el seno de ambos sectores, de la 'ilusión ideológica' de que la dictadura caerá como resultado del desarrollo de sus propias contradicciones interburguesas y de la presión internacional ejercida sobre la dictadura por la 'burguesía internacional y norteamericana'. La represión de que son objeto algunos sectores de la Democracia Cristiana que se manifies-

tan en contra de la dictadura facilitará el convencimiento de los dirigentes de dicho partido, que es imposible por medio de la 'presión' sobre la Junta Militar y el cuerpo de oficiales obtener cambios substanciales en la política de la dictadura.¹³¹

6.5. El 'gobierno provisional' y las alternativas postdictadura.

El amplio debate referido tanto al carácter del gobierno provisional como a las alternativas postdictadura que tiene como objetivo el restablecimiento de la democracia, se subordina a la discusión referida tanto al carácter de la revolución socialista como al problema de las vías de acceso al poder. En esta dirección, para uno de los primeros documentos del Partido Socialista, "la revolución chilena sigue teniendo un carácter fundamentalmente democrático, antiimperialista y antimonopólico, de tipo muy avanzado y popular. Esto obedece al carácter dependiente y de alta concentración monopólica que constituye al imperialismo, la burguesía monopólica y agraria en el núcleo central, eje de sostenimiento y centro de gravedad de la dominación capitalista del país".¹³²

Los elementos constitutivos básicos del programa democrático, popular y antiimperialista de la revolución están formulados en torno a un programa mínimo cuyas tareas son: el derrocamiento de la dictadura, la eliminación del Estado fascista, la formulación de un nuevo Estado democrático de carácter popular y antiimperialista y la restitución de la totalidad de las conquistas sociales, económicas y políticas logradas por el 'pueblo' en el período anterior a la 'contrarrevolución'. La condición esencial para la obtención de estos objetivos está constituida por la necesaria modificación del 'carácter de clase del Estado'. El nuevo tipo de Estado debe dar curso a la construcción de un régimen político que garantice los conceptos de pluralismo, régimen amplio, sufragio universal, régimen de partidos políticos, etc. Dicho Estado deberá articularse con la ejecución de un programa económico que tenga como objetivo fundamental la eliminación del poder del capital imperialista, los monopolios y los terratenientes. Como

resultado de ello deberá construirse una economía de transición, que debería estar constituida por un área social dominante, un sector de autogestión y un área privada que garantice la pequeña y mediana propiedad, y el establecimiento de un sistema de control popular sobre la producción y la distribución. Sin embargo, la constitución del "Estado de Nueva Democracia" no puede ser considerado como la restauración del Estado de compromiso que precedió el establecimiento de la dictadura militar; por el contrario, se trata de la construcción de una nueva institucionalidad que asegure su control efectivo por la 'mayoría del pueblo'. A partir de ello, deberá establecerse la destrucción de todas las formas institucionales generadas por el fascismo y particularmente transformar las FF.AA. y de orden en instituciones al servicio del movimiento popular. Sólo dicha transformación garantizará en último término el carácter democrático esencial del nuevo Estado.

La nueva democracia popular debe ser capaz de expresar la dirección del pueblo sobre el conjunto de la sociedad. Sin embargo el carácter definitivo que asuma el Estado de transición dependerá particularmente de la correlación de fuerzas sociales y políticas existentes en el momento de la caída de la dictadura.

El carácter socialista de la 'revolución antifascista' estará constituido de manera esencial por la eliminación de todas las formas de explotación y por medidas programáticas de expropiación del capital extranjero y de los monopolios. "De darse una hegemonía de la clase obrera limitada por una fuerza considerable de la pequeña burguesía, consecuentemente, se establecería un Estado democrático popular con institucionalidad propia desarrollada que expresaría claramente la hegemonía de la alianza antifascista sobre el conjunto de la sociedad. Las FF.AA. serían depuradas de la influencia fascista y reestructuradas, pero no convertidas en instrumento exclusivo de la clase obrera, quedando bajo control del conjunto del Frente".¹³³ Es evidente por tanto que el carácter socialista dependerá esencialmente de la consolidación y fortalecimiento del papel dirigente de la clase obrera.

Para el logro de ello es necesario que los partidos populares superen sus dificultades orgánicas, ideológicas y políticas; particularmente los partidos Socialista y Comunista que constituyen el eje central de la política del movimiento popular. El derrocamiento de la dictadura sólo será posible si el Frente Antifascista logra acumular fuerzas suficientes en todos los planos: político, ideológico, militar y social. Dicha afirmación introduce el problema de las vías de acceso al poder. Por ello debe entenderse la previsión respecto de la línea principal de 'desenlace de la lucha de clases' y que supone la conservación de una gran flexibilidad táctica y el desarrollo de todas las formas de lucha. En el presente documento se sostiene la tesis de que en importantes fases de la resistencia antifascista se utilizarán esencialmente métodos no armados y en esta dirección el mecanismo esencial de acumulación de fuerzas sociales estará constituido por la lucha política y de masas, y sólo en la fase final la lucha armada adquirirá una importancia decisiva. Bajo esta perspectiva se descartan 'las actividades conspirativas' y la lucha de élite; sin embargo la forma más probable de destitución de la dictadura estará constituida por la insurrección armada en la que confluirían necesariamente todos los aspectos de la crisis del sistema de dominación.

En el documento del pleno de La Habana ¹³⁴ se establecen las bases de una plataforma programática para la constitución del Frente Antifascista. Está constituida por seis exigencias fundamentales: a) garantía y defensa del respeto de los derechos humanos que debe concretarse particularmente a través de la finalización de los estados de emergencia, pleno restablecimiento de las libertades públicas, de los derechos políticos y sindicales, castigo a los responsables de dicha situación; b) defensa del nivel de vida de las masas por medio de reajustes en los ingresos de los trabajadores y de una política de congelación de alzas, llevando a cabo una política de distribución de ingresos por medio de la eliminación del 'exceso del poder de compra' obtenido por los sectores arbitrariamente favorecidos por la dictadura; c) creación de una nueva institucionalidad que garantice la destruc-

ción efectiva e impida el resurgimiento posterior del fascismo; d) defensa de la independencia y soberanía nacional y nulidad de los convenios de indemnización a las empresas extranjeras del cobre y revisión de la totalidad de los acuerdos establecidos en el período autoritario con el capital extranjero. Puesta en práctica de una política internacional de paz y de vinculación con los países en desarrollo; e) devolución al Estado de la totalidad de las empresas privatizadas (monopolios y grandes empresas) que habían constituido el área de propiedad social. Devolución de las tierras a los campesinos sobre la base del respeto de las hectáreas mínimas de regadío básico y; f) reconocimiento de la contribución del área privada al desarrollo económico, que deberá ser debidamente determinada.

En el documento del pleno de 1976 se reitera el carácter democrático y antifascista de la lucha social en el presente período y que determinará la posibilidad de transformación de la lucha democrática en una lucha por el socialismo. "Cualquier otra táctica, aunque se cubra de ropajes izquierdistas, es dañina y reformista, pues aísla al proletariado entregando la conducción del movimiento a la burguesía antijuntista".¹³⁵ Sólo se puede lograr el avance al socialismo fortaleciendo la revolución democrática antidictatorial. Se rechaza explícitamente la constitución de la llamada 'tercera alternativa'. Ella suponía que como resultado de la elección de Carter en EE.UU. se fortalecería la política alternativa llevada a cabo por los sectores derechistas de la DC encabezados por Eduardo Frei. Esto se expresaría en un intento por constituir un frente entre los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, las clases medias y los sectores de las FF.AA. que estén decididos a aislar a los grupos militares partidarios de la dictadura de Pinochet. Su objetivo esencial estaría constituido por el intento de aislar a la izquierda. Como alternativa, el pleno elabora lo que se designa como bases mínimas de compromiso para un programa de democracia del pueblo. Estarían conformadas por cuatro exigencias básicas: a) eliminación de los sectores fascistas del poder del Estado y de las FF.AA. y condena judicial de los crímenes cometidos; b) disolución de la policía

política de la dictadura constituida por la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA) y castigo pleno a los ejecutores de asesinatos, desapariciones, torturas y violaciones generales de los derechos humanos; c) final del Estado de sitio y restitución de los derechos de huelga, reunión y organización. Libre funcionamiento de las organizaciones políticas, sindicales y de masas en general y; d) libertad para todos los presos políticos y sindicales, derogaciones de los decretos de expulsión del país y de pérdida de la nacionalidad por causas políticas, y restitución del derecho de los exiliados para regresar al país. Este documento coincide con los anteriores en el sentido de que la vía más probable de desarrollo de la revolución democrática será la lucha armada y ésta será la culminación necesaria de la lucha de masas. La presencia de una crisis generalizada de la sociedad y el trabajo político en el interior de las FF.AA. pueden lograr su quiebra institucional entre fracciones que intentan seguir sosteniendo la dictadura y sectores que favorezcan la causa del restablecimiento democrático. "La historia del movimiento popular chileno carece de episodios donde demuestre capacidad para formar o demostrar la presencia de una fuerza militar propia. Eso nos hace pensar que hasta el momento del desenlace no habrá formación de una fuerza militar (ejército popular), pero sí habrán acciones de masas, algunas armadas, que aceleren la crisis. Será en presencia de esta crisis que el pueblo apoyará, a través de las acciones armadas simples (sabotaje, control de los centros estratégicos), a la fracción del ejército que se abanderice en sus posiciones".¹³⁶ Pero junto a la caída de la dictadura será indispensable la formación de fuerzas militares propias para enfrentar los intentos de autogolpe militar o restitución de la 'democracia burguesa', que ejecutarán los sectores reaccionarios y conservadores para impedir el triunfo socialista del movimiento popular. Consideramos que tanto el movimiento popular como las organizaciones políticas se encuentran en una 'fase de reflujo', son básicamente los 'métodos de lucha legal' los que posibilitarán con mayor eficiencia la tarea de acumulación de fuerzas en torno a la clase obrera. Los métodos de lucha ilegales son por tanto secundarios en el período en que se publica el presente documento.

En el documento del pleno de agosto de 1977, el Partido Socialista reafirma el contenido de las medidas que buscan la concreción del 'Acuerdo Democrático' entre todas las fuerzas políticas partidarias del restablecimiento del sistema democrático, incluida la DC. Ello debe servir a la obtención del objetivo político del período constituido por la necesidad de acumulación de fuerzas. Sin embargo, se sostiene además explícitamente que la dictadura debe ser derrocada. Ello significa la explicitación del convencimiento político de que la dictadura no caerá como resultado del desarrollo de sus propias contradicciones internas. Ello será el resultado directo de la capacidad del movimiento de masas y de sus organizaciones políticas para obtener la materialización de este objetivo, que deberán estar en condiciones de garantizar el carácter revolucionario de su destrucción. Un papel esencial será jugado por la 'unidad socialista comunista'. "Todo intento por romper esta unidad o desvirtuarla, excluyendo alguno de estos dos partidos en la alianza o acuerdo, que ponga en peligro la unidad de la clase o que reste fuerzas a la vertiente democrática, será rechazado categóricamente".¹³⁷ La Democracia Cristiana en cambio, según el presente documento, considera imposible la derrota de la dictadura como resultado de la lucha del movimiento de masas y cifra sus esperanzas en la capacidad del gobierno norteamericano para colaborar en la 'alteración de la situación' chilena. En esta perspectiva el gobierno norteamericano es un factor clave, los elementos no fascistas de las FF.AA. constituyen una pieza esencial en el carácter gradual de la transición a la democracia y la DC misma se autoconstituye en el agente catalizador de los intereses externos e internos para posibilitar dicha transición. El eje central de dicho razonamiento está basado en la idea de que la dictadura caerá como resultado de sus propias contradicciones internas. En este contexto el límite máximo de una transición 'razonable' está constituido por una forma de democracia restringida, de tutela militar y de limitaciones drásticas a las reivindicaciones sociales, económicas y políticas del movimiento popular.

En el documento del pleno extraordinario de 1979, se pone

énfasis en la necesidad de vincular la lucha por la restauración democrática con la necesidad del socialismo, en la medida en que este último se presenta como la solución efectiva de los 'problemas de masas'. La simultaneidad de ambas tareas constituye el objetivo esencial del trabajo de masas, que debe ser complementado por la constitución de un bloque por el socialismo. Este último es definido como "la fuerza histórica que permitirá avanzar hacia la conquista final del poder y pilar fundamental en el que se asentará la futura República Democrática de Trabajadores; dentro de tal bloque, y precisamente porque su amplitud significará un cierto grado de heterogeneidad ideológica, es preciso que exista una columna vertebral solidamente proletaria que sea capaz de hegemonizar la conducción política del Bloque y garantizar su proyección socialista".¹³⁸ El Bloque por el socialismo es definido además como un movimiento con un programa y plataforma de lucha común que deberá combinar los métodos legales de lucha con los ilegales. La República Democrática de los Trabajadores es además definida como la expresión política de clase de los distintos sectores sociales explotados y dirigidos por la clase obrera. Ella tendrá por misión histórica la transformación de la propiedad privada en propiedad social, la erradicación de las relaciones explotadores-explotados que serán reemplazadas por el principio de cooperación y solidaridad, la consolidación de una estructura socialista de producción y, finalmente, la profundización de la democratización que será hecha a través de mecanismos de control de masa sobre todas las instancias de dirección del Estado. Se reitera además en el presente documento, el contenido del proyecto democrático como programa de transición de la dictadura a la democracia, y el contenido del programa mínimo formulado por el pleno de 1977. Ellos deben constituirse en la base programática esencial del gobierno provisional que sustituya a la dictadura.

Para el Partido Comunista el gobierno provisional debería estar integrado esencialmente por la Unidad Popular y los sectores democráticos de las FF.AA. Dicha unidad debe ser formulada en torno a la construcción de un programa en el cual participen la totalidad de las fuerzas antifascistas. El régimen político

del gobierno provisional que se propone ¹³⁹ debe desarrollar como tareas esenciales: a) respeto sin limitaciones de los derechos humanos y que además de los derechos políticos incluya también los económicos y sociales; b) restablecimiento amplio de todos los derechos ciudadanos y el reconocimiento al pueblo de su plena soberanía para determinar mediante el sufragio universal desde los 18 años de edad el destino político del país; c) creación de nuevas instituciones democráticas: Parlamento, poder judicial, nuevo poder fiscal, nuevos municipios generados democráticamente; d) 'homogeneidad' de las instituciones democráticas a fin de evitar los futuros conflictos entre los poderes del Estado. Para ello es aconsejable la elección simultánea del Parlamento y del presidente de la República, la elección del presidente debería ser hecha por mayoría absoluta y el Parlamento debería tener un carácter unicameral; e) respeto sin límites de la oposición democrática; f) erradicación del fascismo y g) democratización de las FF.AA. Respecto de las tareas económicas que dicho gobierno debe asumir, se destaca la necesidad de poner en práctica un modelo económica que sea capaz de garantizar una transformación profunda de la sociedad. En esta dirección se propician las siguientes medidas: a) anulación de todos los acuerdos contraidos por la dictadura destinados a enajenar bienes industriales esenciales y anulación de los acuerdos de indemnización que se han aplicado a los sectores económicos anteriormente nacionalizados. Devolución al Estado de los sectores básicos de la minería nacional; b) anulación de todas las disposiciones que condujeron al despojo de los campesinos de la tierra que le fue asignada por la reforma agraria; c) promoción de un tipo de desarrollo económico que garantice la independencia económica nacional y ponga término al poder de los monopolios e incentive el desarrollo de las 'fuerzas productivas'; d) organización de la economía en torno a cinco áreas de propiedad: área de propiedad social, área de propiedad mixta, área de propiedad privada, área de propiedad cooperativa y empresas de autogestión o de trabajadores; e) garantía para el funcionamiento de las empresas tecnológicamente deficientes a condición de que su aporte en empleo y productos nacionales sea significativo; f) redefinición de las rela-

ciones con el capital extranjero, derogación del Nuevo Estatuto de Inversión Extranjera y respeto de los compromisos adquiridos con el Pacto Andino; g) creación de un organismo de dirección económica generado democráticamente y en el que tengan participación todos los sectores económicos. Dicho organismo deberá determinar las prioridades estratégicas del desarrollo nacional y dirigir el proceso de planificación del desarrollo económico; h) reexpropiación de los fondos devueltos a los terratenientes con reconocimiento de 40 hectáreas de regadío básico. Programa de ayuda para pequeños y medianos propietarios e impulso decisivo al desarrollo de la agroindustria y medidas para asegurar el autoabastecimiento de los productos básicos; e i) estímulo a la constitución y desarrollo de cooperativas.

Respecto de los aspectos sociales del programa se establece un conjunto de medidas que se basan en el criterio básico de restitución de las conquistas de la clase obrera: a) libertad para todos los presos políticos, fin al estado de sitio y de las disposiciones de emergencia atentatorias contra las libertades públicas, amnistía para todos los procesados por la dictadura, disolución de la policía política del régimen, procesamiento de las personas que han cometido crímenes, regreso de todos los exiliados con plenas garantías para la conservación de su vida y libertad y reincorporación de militares y civiles que han sido separados de su trabajo por razones políticas; b) restablecimiento de los plenos derechos sindicales; c) restitución de la autonomía universitaria a fin de asegurar su dirección democrática; d) restitución del derecho a una enseñanza gratuita; e) término de las medidas de censura puestas en práctica en contra de la cultura y sus actividades. En lo que se refiere a la política internacional, el contenido del programa elaborado por PC propone las siguientes medidas: a) ejercicio pleno de la soberanía nacional en asuntos de política internacional y que se oriente al desarrollo de la distensión, la fraternidad entre los pueblos y la conservación de la paz mundial; b) establecimiento de relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y abandono de los prejuicios ideológicos para la elaboración de estas últimas;

c) restablecimiento de los vínculos de amistad con los países socialistas, no alineados y países de América Latina. Finalmente se manifiesta la obligación ineludible de otorgar una solución al problema nacional y social del pueblo mapuche y buscar acuerdos con los países donde residen un millón de exiliados en difíciles condiciones de subsistencia. El espíritu central de este programa debe estar animado por la búsqueda acelerada de un entendimiento político con todas las fuerzas democráticas existentes en el país, sobre la base de un objetivo ineludible: eliminar la dictadura.

Para el MAPU el programa del gobierno provisional debe contener un programa mínimo en torno del cual se puedan establecer alianzas permanentes entre los partidos obreros y la 'oposición burguesa'. Por otra parte, a partir de él es posible obtener acuerdos puntuales con otros sectores antifascistas a fin de facilitar el objetivo de derrocamiento de la dictadura. Dicho programa debería contemplar las siguientes medidas: a) restablecimiento de las más amplias libertades políticas y sindicales; b) destrucción de la contrarrevolución; c) democratización profunda de las FF.AA. y restitución con poder de mando de los oficiales destituidos por razones políticas; d) control democrático y popular del conjunto de las actividades económicas del país; e) garantías plenas para la pequeña y mediana empresa; f) relaciones económicas y de diplomáticas con todos los países del mundo y renacionalización de las industrias estratégicas y riquezas básicas esenciales en el desarrollo económico; g) democratización de las políticas de gasto público (educación, salud, vivienda, obras públicas, etc.) y redistribución de ingresos en favor de los sectores más necesitados; h) control popular y capacidad de decisión 'sobre los problemas de existencia cotidiana'.¹⁴⁰ e i) establecimiento de mecanismos de control popular sobre el gobierno y poder de representación popular. Se postula este programa sobre la base del supuesto de que el objetivo máximo a que puede aspirar el movimiento popular en este período es el derrocamiento de la dictadura y la instauración de un nuevo gobierno democrático y popular. "Si la clase obrera y el pueblo no logran obtener como mínimo durante este período - desde ahora hasta la maduración de la crisis política -

un substancial debilitamiento del régimen militar y una rectificación significativa de su política que prepara las condiciones para su derribamiento definitivo, la dictadura logrará armarse y consolidarse y entonces se perpetuará por un tiempo indefinido, necesariamente muy largo, la dominación burguesa".¹⁴¹

Para el partido MAPU-Obrero y Campesino, la política antifascista debe ser formulada en torno al desarrollo de una línea de masas y en consideración de que la política de la dictadura afecta a la gran mayoría del pueblo chileno. La pérdida de todos los derechos democráticos, la represión generalizada y los efectos negativos de la política económica constituyen el denominador común que posibilita de manera efectiva la organización de dicho frente. En esta dirección, la movilización de masas debe articularse a partir de cuatro objetivos esenciales: 1) la defensa de las posiciones del movimiento popular y de los derechos humanos mínimos; 2) defensa de las libertades y derechos democráticos de todos los sectores de la sociedad civil. En ello debe incluirse: la legalización de las organizaciones de masas, la libertad de prensa e información, los derechos sindicales y de trabajo, la autonomía universitaria, la defensa del derecho a la organización de los partidos políticos, etc; 3) la defensa del nivel de vida de los trabajadores, la obtención de reajustes equivalentes al alza del costo de la vida, derecho de los parados al trabajo y el fin de una política económica que condena a la miseria a la gran mayoría de la población; 4) la lucha por la defensa de la nación del sometimiento a la política norteamericana y que afecta a los planos diplomático, cultural, militar y económico.

Para el partido Izquierda Cristiana, el régimen post-fascista no puede constituir una simple reimplantación de las formas democráticas tradicionales que animaron la escena política nacional. Debe estar dirigido a la preparación de las condiciones políticas, militares y programáticas para la instauración del socialismo. Bajo esta perspectiva se debe superar la incompatibilidad supuesta entre socialismo y democracia, en la medida en que sólo una base económica socialista está en condiciones de sustentar 'materialmente' la democracia.

La Unidad Popular, en representación de la totalidad de los partidos de izquierda que la constituyeron, presenta en enero de 1980 un borrador de nuevo programa que intenta constituirse en integrador global de las proposiciones formuladas parcialmente por cada uno de sus integrantes, excepto el MIR.¹⁴² Dicho documento parte de la convicción de que el acuerdo democrático para derrotar a la dictadura es posible expresarlo en un proyecto democrático común. En él se reitera la idea de que la democracia futura que se aspira a construir no puede constituir una simple restauración del estilo democrático previo al golpe de Estado. Ella deberá necesariamente integrar nuevos valores y nuevas formas que imposibiliten el surgimiento de tendencias o hechos autoritarios. La nueva democracia debe dar curso a la construcción de un nuevo tipo de Estado que garantice la ampliación substancial de la democracia y que se fundamente en el reconocimiento sin límites del hecho de que la soberanía pertenece al pueblo. Dicha soberanía popular debe ser materializada a través del derecho universal, en donde dicho Estado debe ser sometido a un control democrático permanente que garantice la profundización constante de la democracia. La forma natural de expresión de la soberanía estará constituida por el conjunto de las organizaciones democráticas. Por otra parte, el sistema de poderes del Estado deberá fundamentarse en el respeto sin límites de la voluntad de las mayorías que se constituyan sobre la base del consenso democrático. En este concepto de democracia el funcionamiento de los partidos políticos deberá ser reconocido como la necesaria formulación de la voluntad colectiva. Además, el nuevo régimen democrático deberá asumir la realización de cambios substanciales en la administración de la justicia y del poder judicial. Sin embargo, la totalidad de las transformaciones políticas que se aspira a poner en marcha deben contar necesariamente con las FF.AA. debidamente identificadas con dicho proyecto democrático. A ello debe sumarse el establecimiento efectivo de mecanismos de defensa de los principios constitucionales, de las instituciones democráticas y de las conquistas y avances sociales y de los derechos humanos. Dicho restablecimiento democrático deberá asumir también la tarea del esclarecimiento de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura militar.

Por otra parte, es imposible suponer que la nueva democracia sea compatible con una economía cuyo excedente se lo apropian tanto el capital internacional como los grupos económico del capital financiero y los grandes propietarios agrícolas. En función de ello se considera indispensable la decisión de poner término tanto al poder político como económico de las oligarquías financieras y terrateniente y al papel del capital internacional. Ellos constituyen la base esencial del poder de la dictadura. En oposición a ello, el sector económico debe estar organizado en cinco áreas esenciales: estatal, mixta, privada, cooperativa y de autogestión. "Mientras la propiedad privada predominará en términos del número de unidades, la propiedad estatal se realizará en el sistema financiero, en las riquezas básicas fundamentales y en las unidades de tipo estratégico en poder hoy de los grandes grupos económicos".¹⁴³ Se establecerá además como prioritario la reintegración de los campesinos a la propiedad de la tierra que les fue sustraída en el período del gobierno autoritario. Es este programa democrático de gestión económica el que deberá garantizar tanto el crecimiento de la economía como el control democrático de ella. Por otra parte, el tratamiento del capital extranjero deberá someterse a las normas que rigen el Pacto Andino y deberán buscarse los mecanismos que faciliten la disminución de la dependencia de la banca privada internacional. La aplicación del conjunto de estas medidas deben dar como resultado transformaciones profundas de la estructura económica y que deberá orientarse a la satisfacción de las crecientes necesidades esenciales de la población, al aprovechamiento óptimo del mercado internacional y al desarrollo de las potencialidades productivas humanas y tecnológicas.

La aplicación de los criterios citados deberán conducir a la organización de la actividad económica en cinco grandes sectores: 1) sector productor de bienes de capital y generado de nueva tecnología que constituirá el eje central de la economía. Al mismo tiempo, este sector deberá colaborar en el mantenimiento de la competitividad internacional de la economía. En relación con el sector de bienes esenciales deberá facilitar nuevos y mejores productos para la actividad agropecuaria, creando técnicas y medios

de producción para el sector agrario y de la construcción; 2) el sector de bienes esenciales que deberá satisfacer los requerimientos esenciales de vivienda, alimentación, vestuario, salud, educación y actividades recreativas; 3) el sector generador de divisas que dependerá del proceso creciente de internacionalización de la economía y que deberá colaborar en la solución de la difícil situación de recursos externos; 4) el sector de bienes no esenciales; 5) el sector financiero que deberá vincularse esencialmente al Estado a fin de captar y distribuir los recursos financieros, incluido el manejo de la política fiscal, política monetaria, recursos crediticios y flujos financieros externos. Este será el sector encargado de captar y redistribuir los excedentes, de manera que asegure que el proceso de acumulación corresponda a los objetivos propuestos.

El partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) define como plataforma de lucha para el período el objetivo fundamental de crear una correlación de fuerzas políticas y sociales que facilite el derrocamiento de la dictadura y el restablecimiento de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el tipo de gobierno que debe surgir de dicha asamblea no puede ser definido en la medida en que depende de la correlación de fuerzas existentes en su momento. Si la dictadura es derribada como consecuencia de las contradicciones interburguesas, lo más probable es que el Estado no sufra modificaciones substanciales y sea la burguesía quien controle la asamblea constituyente a través de aquellos de sus representantes políticos que postulen la 'redemocratización' de la sociedad chilena. Si, por el contrario, la dictadura es derribada por la acción política y militar de la resistencia popular con hegemonía del proletariado y ayuda del ejército revolucionario del pueblo, la asamblea constituyente será expresión del poder del proletariado, quien podrá establecer su propia dictadura.¹⁴⁴ A pesar de ello, entre los extremos existe una multiplicidad de gradaciones y su materilización dependerá de las características específicas de la lucha de clases. En la lucha por la obtención de una correlación favorable de fuerzas sociales y políticas, el 'Partido Revolucionario del Proletariado' postula como objetivo

inmediato el restablecimiento de las libertades democráticas. No obstante dicho objetivo, la 'democracia burguesa' es definida como una de las formas que asume la dictadura del capital, en la cual se abren posibilidades de expresión a la ideología proletaria y a la lucha clasista e independiente del proletariado. Por eso la lucha por las libertades democráticas debe ser conceptualizada en una doble dimensión: como solución inmediata a los problemas esenciales de las masas y de la clase obrera (final de la persecución, la tortura, la cárcel y el asesinato) y, por otro lado, como el restablecimiento de la dictadura burguesa que otorga 'mayor campo de maniobra al partido revolucionario'. De esto último proviene la importancia que dicho partido concede a la lucha por el restablecimiento de las libertades democráticas, cuyo contenido esencial está formado por las siguientes reivindicaciones: 1) libertad de reunión, 2) libertad de elecciones. A fin de obtener la restitución de las libertades es necesario luchar por la finalización del estado de sitio y la guerra interior, el fin de las detenciones, torturas y asesinatos, y el libre funcionamiento de las organizaciones sindicales, vecinales, políticas y gremiales.

Otro elemento constitutivo esencial de la plataforma de lucha establecido por dicho partido está representado por el mejoramiento del nivel de vida de las masas, que facilita la obtención de tres objetivos esenciales: 1) poner término al genocidio social a que ha dado curso la política económica de la dictadura, 2) dificultar los intentos de acumulación forzada en beneficio del gran capital y que se fundamenta en la superexplotación del trabajo asalariado. Esto es indispensable para evitar la superación de las contradicciones interburguesas, y 3) organizar y movilizar sobre la base de dichos objetivos a la clase obrera y al pueblo.

6.6. El cambio de táctica del Partido Comunista y la división del Partido Socialista: condiciones estructurales para un intento de renovación política y teórica de la izquierda.

El plebiscito constitucional de septiembre de 1980 convocado por la dictadura abre la posibilidad de una prolongada institu-

cionalización de ella. Frente a dicha situación, el Partido Comunista desplaza el énfasis puesto en la táctica de lucha de masas para derrocar la dictadura hacia la táctica del 'recurso a la rebelión' del pueblo. La ruptura histórica en la línea política del partido es fundamentada en la afirmación de que se han verificado cambios substanciales en la situación chilena, incluida la maduración de la conciencia de masas y que se expresa públicamente en el deseo creciente de la sociedad chilena por poner fin a la tiranía. En opinión de dicho partido su cambio táctico es compartido por extensos sectores de la UP y la izquierda. Ellos también reivindican el derecho del pueblo a la resistencia de la opresión que deberá expresarse en la utilización de los más variados efectivos y masivos métodos de lucha. La experiencia posterior demostrará que dicho cambio no era ampliamente compartido y que por el contrario amplios sectores de la izquierda y de la oposición eran partidarios de la necesidad de "ganar un espacio de oposición legal a la dictadura". Sin embargo, ello facilitará al PC la reconciliación con su enemigo esencial de la izquierda representado por "revolucionarismo pequeño burgués ultraizquierdista", constituido por el MIR. Ambos partidos, más una fracción del Partido Socialista, confluirán en la constitución en 1983 del Movimiento Democrático Popular. Dicho movimiento constituirá una alternativa de oposición a la Alianza Democrática que constituye el frente político natural de la Democracia Cristiana. El cambio táctico de los comunistas chilenos conducirá a un progresivo aislamiento político de dicho partido. Ello no sólo se expresará respecto de su enemigo natural constituido por la derecha política que había apoyado al régimen y que en virtud de dicho cambio pone en dudas la vocación democrática de los comunistas. También la izquierda que empieza a considerar al PC como la expresión política del modelo socialista autoritario de los 'socialismos reales'. Esto último da curso a una amplia discusión sobre la necesidad de construir una alternativa de 'socialismo democrático' que suponga la renovación teórica y política del paradigma clásico de socialismo. Resultado de ello es la creación del que se denomina 'convergencia socialista' y que en 1983 confluye en la creación del 'bloque socialista'. Este último será integrado por sectores del

Partido Socialista, el MAPU, el MAPU-OC, la Izquierda Cristiana y grupos independientes.

El secretario general del Partido Comunista de Chile en un discurso pronunciado el 3 de septiembre de 1980, expresa el convencimiento de que el dictador, de acuerdo con el fraudulento resultado del plebiscito constitucional, puede permanecer en el poder hasta 1997 completando un período de 23 años de dictadura. A partir de ello, el fascismo ha creado una situación "frente a la cual el pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayuden, incluso de violencia aguda, para defender su derecho al pan, a la libertad y a la vida".¹⁴⁵ En un discurso posterior se reitera que la línea política del partido sigue siendo 'firme y flexible'. Ella tiene un carácter proletario, popular y nacional, de lucha de masas y de unidad de la clase obrera, de entendimiento socialista-comunista, de fortalecimiento de la Unidad Popular, de acción común con todas las fuerzas democráticas y de resuelto enfrentamiento de la dictadura.¹⁴⁶ El desarrollo de dicha línea se expresa necesariamente en formulaciones o modificaciones tácticas que intentan responder a los cambios verificados en la situación de masas como a las acciones de los que sustenta la dictadura militar. Sin embargo, la lucha por derrocar la dictadura no ha sido suficiente, se requiere más lucha y más unidad del movimiento de masas a fin de concretar un esfuerzo mayor del realizado hasta ahora; tampoco está clara la forma que adquirirá el derrumbe de la dictadura y es evidente que ella no se desplomará por sí sola, deberá ser destruida. "Los comunistas no buscamos la violencia por la violencia, ni queremos hacer de nuestro país un escenario de terror. Al contrario, queremos terminar con el terror y crear un nuevo orden basado en la justicia social. Para ello propiciamos la unidad y el combate de las masas y el empleo de las más diversas formas de lucha, incluso de violencia revolucionaria ejercida de manera consciente y responsable".¹⁴⁷ A pesar de ello se insiste en que la línea política sigue siendo la de lucha de la clase obrera, de todos los antifascistas, de fortalecimiento de la Unidad Popular y de búsqueda de un entendimiento con la De-

mocracia Cristiana y con toda la oposición. Por el contrario, la Democracia Cristiana sigue auspiciando la línea de la solución pacífica basada en un acuerdo con las FF.AA. Ello constituye para los comunistas una ilusión política. Sin embargo, ninguna alternativa puede ser rechazada a priori y de ahí que se siga con interés la táctica demócrata cristiana de un gobierno de transición cívico-militar que en el curso de un par de años convoque a una Asamblea Constituyente. "Del mismo modo que no negamos a priori la posibilidad de una salida pacífica, ningún demócrata debería objetar por principio la violencia, tanto menos aquellos que en un momento determinado apoyaron la peor de todas - la única inaceptable - la violencia contra el pueblo".¹⁴⁸

Es también posible que en un momento determinado de la lucha popular resurjan tendencias de recambios en el interior del régimen a fin de neutralizar las soluciones radicales. La mejor alternativa para evitar dicho tipo de situaciones está constituida por el avance en la unidad y en la lucha combinando las más variadas formas de combate. Gran parte de estos conceptos son reiterados en el discurso del 18 de diciembre de 1980.¹⁴⁹ En el texto de una charla del 30 de enero de 1981, se reitera la confianza en que el movimiento de masas y la oposición descubrirán 'formas específicas' de expresión del proceso revolucionario y democrático y que darán curso a los más variados métodos de luchas. El fascismo crea una situación respecto de la cual la aplicación de una táctica de violencia aguda se hace necesaria.¹⁵⁰ El texto del discurso supone que los planteamientos formulados sobre las 'nuevas formas de lucha' han sido favorablemente acogidos tanto por los partidos integrantes de la Unidad Popular como por amplios sectores de la Democracia Cristiana y ellos no implican necesariamente un cambio de línea política. Por el contrario, se reafirma la línea de la lucha de masas y la necesidad de acciones comunes con todas las fuerzas de la oposición. Sin embargo, el apoyo de la lucha de masas con otras formas de combate se hace cada día más necesaria. "No somos los únicos partidarios ni los únicos protagonistas de este tipo de acciones. Varias o muchas de las que se han realizado en el último tiempo han sido organizadas por el MIR, el Movi-

miento de Izquierda Revolucionaria, que es una organización que tiene 15 años de vida, que nació como un grupo ultraizquierdista, que no nos prestó, precisamente, ninguna ayuda real durante el gobierno de la Unidad Popular. Al contrario, diría, que nos produjo no pocos daños con su política ultraizquierdista. Pero en este grupo, en esta organización hay una evolución que nosotros observamos con interés. Estamos por la unidad de todos los enemigos de la dictadura, de todos los enemigos del fascismo, con la máxima amplitud. Tenemos alguna relación con el MIR. Ellos han evolucionado a tal extremo que reconocen que el campo socialista - la Unión Soviética y los países de la comunidad socialista - y los partidos comunistas, son las fuerzas revolucionarias principales de la época actual. A los miristas les pedimos que mejoren la puntería porque a veces no disparan bien".¹⁵¹ Cuando se propicia la necesidad de la aplicación de las más diversas formas de lucha se intenta agudizar la lucha de clase y no estimular el 'aventurerismo' político y a lo que se aspira en definitiva es a que las masas tomen el camino de la rebelión.

La crisis interna y la división del Partido Socialista en abril de 1979 ha intentado ser explicada de diferentes formas por cada uno de los grupos y fracciones internas participantes en ella. Sin embargo, lo más significativo no es tanto su naturaleza como el amplio debate a que dió curso, particularmente en lo referido a la necesidad de la renovación política de la izquierda, el problema del socialismo democrático, la necesidad de reconsiderar la naturaleza marxista-leninista del partido, la naturaleza del nuevo escenario estructural que en la sociedad chilena debía enfrentar la oposición política como resultado de las transformaciones puestas en práctica por la dictadura, el problema de la identidad del partido, las relaciones con los comunistas, el problema de las direcciones interior-exterior, el problema de la dirección única, la autonomía del partido, necesidad de fortalecimiento y desarrollo del área socialista, el centralismo democrático, la dictadura del proletariado, etc.¹⁵² El rechazo en amplios sectores de la izquierda de la política de cambio táctico llevada a cabo por el Partido Comunista y la crisis del Partido

Socialista crean las condiciones políticas y favorecen las posibilidades teóricas de un intento de renovación global de la izquierda.

La crisis global que enfrenta la izquierda a finales de la década de los setenta y que encuentra su origen tanto en su incapacidad para derrotar al Estado autoritario como en la crisis interna de cada uno de los partidos que la constituyen, crean las condiciones para un intento sistemático de superación de ella. Esto último adquiere la forma de un movimiento que pone en discusión no sólo las estrategias políticas implementadas por la izquierda histórica, sino que también relativiza las conceptualizaciones esenciales del marxismo y del concepto tradicional de socialismo. El estudio detallado de este proceso teórico los presentaremos en el capítulo siguiente.

NOTAS

1. Declaración Oficial de la Democracia Cristiana del 12 de septiembre de 1975.
2. Democracia Cristiana, Declaración de los dieciseis, 13 de septiembre de 1973.
3. Declaración conjunta de Eduardo Frei y Luis Pareto, 28 de septiembre de 1973.
4. Radomiro Tomic, *"El PDC antes y después del 11 de septiembre"*, exposición hecha ante el Consejo Nacional el 7 de noviembre de 1973, pág. 2.
5. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 3.
6. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 3.
7. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 4.
8. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 6.
9. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 12.
10. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 14.
11. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 15.
12. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 16.
13. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 16.
14. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 16.
15. Radomiro Tomic, texto citado, pág. 19.
16. Declaración de 69 demócratas cristianos en relación a la expulsión de Renán Fuentealba, Santiago, 28 de noviembre de 1974.
17. Declaración de la Junta de Gobierno en relación a la expulsión del ex-senador Renán Fuentealba Moena del 28 de noviembre de 1974.
18. Patricio Aylwin, *"Memorandum sobre la situación chilena"*, Roma, septiembre de 1975.
19. Como antecedentes públicos de la evolución de la política del PDC hacia la política de 'independencia crítica y activa' debe considerarse la carta del 18 de enero de 1974, dirigida al general Pinochet por Osvaldo Olguín y Patricio Aylwin, vicepresidente y presidente del partido respectivamente.
20. Informe de Andrés Zaldívar, Santiago de Chile, diciembre de 1976.
21. Documento citado, pág. 10.
22. Documento citado, pág. 14.
23. Documento citado, pág. 16.
24. Documento citado, pág. 18.
25. Documento citado, pág. 22.

26. Tomás Reyes Vicuña, *"Nuestra fuerza política y social al servicio de la recuperación democrática y en defensa de la justicia"*, Santiago, enero de 1977.
27. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 27.
28. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 32.
29. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 32.
30. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 33.
31. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 34.
32. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 37.
33. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 37.
34. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 38.
35. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 40.
36. Tomás Reyes Vicuña, documento citado, pág. 40.
37. Partido Demócrata Cristiano, *"Una Patria para todos"*, 6 de octubre de 1977.
38. Documento citado, pág. 3.
39. Documento citado, pág. 4.
40. Documento citado, pág. 6.
41. Partido Demócrata Cristiano, *"Acuerdos propuestos por la comisión política en sesión del 27 de junio de 1979 y aprobados por la mesa directiva"*.
42. Carta de Radomiro Tomic a Andrés Zaldívar, fechada en Ginebra el 16 de noviembre de 1978.
43. Comité Central de Partido Socialista de Chile, *"A los dirigentes del Partido Socialista"*, Santiago, noviembre de 1973, mimeografiado.
44. Documento del Comité Central del Partido Socialista de Chile *"Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria!"*, Santiago, marzo de 1974.
45. Documento citado, pág. 3.
46. Documento citado, pág. 19.
47. Documento citado, pág. 21.
48. Documento citado, pág. 22.
49. Documento citado, pág. 27.
50. Declaración del Partido Comunista de Chile, *"El ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo"*, Santiago, noviembre de 1975.
51. Declaración citada, pág. 2.
52. Declaración citada, pág. 3.
53. Declaración citada, pág. 5.

54. Partido Socialista de Chile, *"Una clarificación necesaria"*, marzo de 1976, pág. 59, Boletín Orientación, nro. 13 de junio de 1976.
55. Documento citado, pág. 69.
56. Documento citado, pág. 14.
57. Documento citado, pág. 74.
58. Carlos Altamirano, *"Reflexiones críticas sobre el proceso revolucionario chileno"*, Boletín informativo del Partido Socialista de Chile, nro. 4, septiembre de 1974, pág. 20.
59. Documento citado, pág. 23. Una profundización de este tipo de análisis puede encontrarse en el libro del mismo autor, *"Dialéctica de una derrota"*, Siglo XXI editores, México, abril de 1978.
60. *"Informe al pleno, de agosto de 1977 del Comité Central el Partido Comunista de Chile, rendido por su secretario general, compañero Luis Corvalán"*.
61. Informe citado, pág. 32.
62. Informe citado, pág. 34.
63. Informe citado, pág. 39.
64. Informe citado, pág. 41.
65. Movimiento de Acción Popular Unitaria, *"A medio año del golpe de Estado en Chile: la resistencia revolucionaria del pueblo se fortalece para vencer"*, Santiago, marzo de 1974.
66. Movimiento de Acción Popular Unitaria, *"El pensamiento del MAPU"*, junio de 1974.
67. Documento citado, pág. 8.
68. Documento citado, pág. 10.
69. Documento citado, pág. 11.
70. Documento citado, pág. 14.
71. Partido Izquierda Cristiana, *"Documento final del Primer Congreso Nacional"*, mayo de 1977.
72. Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, *"A consolidar en la clase obrera y crear por la base la unidad del pueblo"*, cuarto trimestre de 1975, pág. 127.
73. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, *"Qué es el MIR?"*, diciembre de 1974.
74. Documento citado, pág. 8.
75. Documento citado, pág. 9.
76. Comité Central del Partido Socialista, *"A los dirigentes del Partido Socialista"*, noviembre de 1973.
77. Documento citado, pág. 14.
78. Partido Socialista de Chile, *"Algunas ideas sobre la revolución chilena"*, 28 de febrero de 1974, pág. 3.

79. Comité Central del Partido Socialista de Chile, *"Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria!"*, marzo de 1974.
80. Documento citado, pág. 30.
81. Documento citado, pág. 34.
82. Partido Socialista de Chile, *"Pleno del Partido Socialista en La Habana. Documentos"*, 23 de abril al 3 de marzo de 1975.
83. Partido Comunista de Chile, *"Al Partido y al pueblo de Chile"*.
84. Documento citado, pág. 1. Para un estudio más detallado de la línea política de este partido, se puede considerar el libro de Luis Corvalán, *"Tres períodos de nuestra línea revolucionaria"*, Dresden, República Democrática Alemana, 1982.
85. *"Informe al pleno de agosto de 1977 del Comité Central del Partido Comunista de Chile, rendido por su secretario general Luis Corvalán"*, pág. 48.
86. Movimiento de Acción Popular Unitaria, *"El pensamiento del MAPU"*, junio de 1974, pág. 11.
87. Documento citado, pág. 2.
88. Documento citado, pág. 12.
89. Comité Central del Partido Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero y Campesino, *"Las tareas del pueblo en la hora presente"*, Santiago, febrero de 1974, pág. 19.
90. Partido Izquierda Cristiana, *"Documento final del primer congreso nacional"*, mayo de 1977, pág. 29.
91. Declaración política del Partido Radical de Chile, Santiago, junio de 1974, pág. 1.
92. Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, *"A consolidar en la clase obrera y crear por las bases la unidad del pueblo"*, cuarto trimestre de 1975.
93. Documento citado, pág. 132.
94. Documento citado, pág. 140.
95. Partido Comunista de Chile, *"Llamamiento al pueblo a la lucha por la libertad y la democracia"*, 31 de diciembre de 1973, pág. 8.
96. Partido Comunista de Chile, *"Al partido y al pueblo de Chile"*, diciembre de 1974.
97. Orlando Millas, *"El partido Comunista de Chile, partido de acción"*, conferencia pronunciada en Berlín en diciembre del año 1974.
98. Partido Comunista de Chile, *"Manifiesto del partido Comunista de Chile"*, Santiago, agosto de 1975.
99. *"Informe al pleno de agosto de 1977 del Comité Central del Partido Comunista de Chile, rendido por su secretario general Luis Corvalán"*.

100. Documento citado, pág. 64.
101. Documento citado, pág. 67.
102. Partido Comunista de Chile, *"La lucha de masas derribará a la dictadura"*, Santiago, octubre de 1978.
103. Luis Corvalán, *"Fragmento de charla dada en Berlín ante una asamblea de militantes del Partido Comunista de Chile el 31 de enero de 1981"*, pág. 2.
104. Manifiesto del partido Comunista de Chile, Santiago, mayo de 1979, pág. 2.
105. Luis Corvalán, *"Nuestro proyecto democrático"*, 5 de julio de 1979, pág. 3.
106. Documento citado, pág. 6.
107. Documento citado, pág. 19.
108. Documento citado, pág. 21.
109. Documento citado, pág. 21.
110. Partido Socialista de Chile, *"A los dirigentes del Partido Socialista"*, noviembre de 1973.
111. Documento citado, pág. 33.
112. Comité Central del Partido Socialista de Chile, *"Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria!"*, Santiago, marzo de 1974.
113. Pleno del Partido Socialista de Chile, La Habana, 23 de abril al 3 de mayo de 1975.
114. Documento citado, declaración final, pág. 3.
115. Documento citado, pág. 78.
116. Documento citado, pág. 32.
117. Documento citado, pág. 9.
118. Declaración de la dirección del Partido Socialista de Chile, *"Los socialistas en la lucha por la democracia"*, Santiago, septiembre de 1977.
119. Informe del secretario general camarada Carlos Altamirano al pleno extraordinario del Comité Central del Partido Socialista de Chile, Argel, marzo de 1978.
120. Documento citado, pág. 32.
121. Documento citado, pág. 36.
122. Partido Socialista de Chile, *"Resoluciones políticas del XXIV Congreso general del Partido Socialista de Chile"*, 1980.
123. Movimiento de Acción Popular Unitaria, *"El pensamiento del MAPU"*, Santiago, junio de 1974.
124. Intervención de Oscar Garreton, secretario general del MAPU. Pleno del Partido Socialista de Chile, La Habana, 23 de abril al 3 de mayo de 1975.

125. Partido MAPU Obrero y Campesino, *"Las tareas del pueblo en la hora presente"*, Santiago, febrero de 1976. Ver también *"La actual coyuntura política y las tareas del partido"*, julio de 1976.
126. Partido Izquierda Cristiana, *"Documento final, primer congreso nacional"*, Santiago, septiembre de 1978, pág. 29.
127. Partido Izquierda Cristiana, *"Conclusiones del segundo pleno"*, 1980.
128. Entrevista de prensa de Andrés Pascal, secretario general del MIR, diciembre de 1974.
129. Entrevista citada, pág. 6.
130. Entrevista citada, pág. 7.
131. *"Carta abierta del MIR a las direcciones y bases del PC, PS, MAPU, MAPU-OC, IC, PR y de los sectores democráticos y antigorilas del PDC, a los trabajadores y al pueblo de Chile"*, 1 de enero de 1975.
132. Comité Central del Partido Socialista de Chile, *"Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria!"*, Santiago, marzo de 1974, pág. 39.
133. Documento citado, pág. 43.
134. Pleno del Partido Socialista de Chile, La Habana, 23 de abril al 3 de mayo de 1975.
135. Partido Socialista de Chile, *"Resoluciones del pleno de septiembre de 1976"*, Santiago de Chile, pág. 8.
136. Documento citado, pág. 14.
137. Comité Central del Partido Socialista de Chile, *"Resoluciones del segundo pleno del Partido Socialista de Chile en la clandestinidad"*, Santiago, agosto de 1977, pág. 20.
138. Partido Socialista de Chile, *"Tercer Pleno del Partido Socialista en la clandestinidad"*, febrero de 1979, pág. 13.
139. *"Informe al pleno de agosto de 1977 del Comité Central del Partido Comunista de Chile, rendido por su secretario general Luis Corvalán"*, pág. 73.
140. Movimiento de Acción Popular Unitaria, *"El pensamiento del MAPU"*, Santiago, marzo de 1974.
141. Documento citado, pág. 22.
142. Unidad Popular, Secretaría Ejecutiva, *"Derrotar al fascismo. Construir una nueva democracia"*, borrador del proyecto de nuevo programa de la UP, enero de 1980.
143. Documento citado, pág. 48.
144. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, *"El programa y las plataformas de la lucha del Partido Revolucionario del proletariado"*, 1974.

145. Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista de Chile, *"Discurso pronunciado en Moscú con motivo del 10 aniversario de la victoria de la Unidad Popular"*, el 3 de septiembre de 1980, pág. 7.
146. Luis Corvalán, *"Avanzar por el camino de la Unidad y de la lucha dominando las más diversas formas de combate"*, discurso pronunciado en Estocolmo el 16 de noviembre de 1980.
147. Discurso citado, pág. 8.
148. Discurso citado, pág. 9.
149. Luis Corvalán, *"La lucha es lo primero y la unidad es la clave de la victoria"*, discurso pronunciado en el segundo congreso del Partido Comunista de Cuba, el 18 de diciembre de 1980.
150. Luis Corvalán, *"Nuestras formulaciones tácticas tienen una acogida favorable"*. Transcripción de la charla dictada en la Escuela Superior Carlos Marx del PSUA, en Berlín, RDA, el 30 de enero de 1981.
151. Texto citado, pág. 10.
152. Sobre la división del Partido Socialista se puede ver, *"Dossier: la crisis del socialismo chileno"*, Centro de Estudios y documentación Chile - América nro. 54-55, Roma, 1979.

CAPITULO SEPTIMO

El intento de renovación teórica y política de la oposición : la 'nueva izquierda'.

A finales de los años setenta e inicio de los ochenta se configura un razonamiento teórico que intenta sustituir el paradigma político en el cual se había fundamentado la oposición de izquierda frente al Estado autoritario. Su fundamento inicial está constituido por el fracaso en los intentos de sustitución del régimen dictatorial por un sistema político democrático. A esto se suma tanto la crisis y división del Partido Socialista como la táctica de la 'violencia aguda' que intenta poner en práctica el Partido Comunista y que no implica renovaciones teóricas fundamentales. Todo ello configura un proceso de crisis generalizada del bloque político de la Unidad Popular y abre espacio a una amplia revisión crítica de los postulados políticos que habían constituido la forma de reflexión clásica de la izquierda respecto de la sociedad chilena. Dicha revisión intenta no sólo poner en discusión la estrategia aplicada por dicho bloque político respecto de la dictadura. Se busca también la sustitución del paradigma clásico en que se fundamentaba la estrategia alternativa representada por el socialismo. Finalmente ello amplía la discusión a la eficiencia del marxismo para garantizar la profundización de un proceso democrático alternativo.

7.1. Los fundamentos teóricos que sustentan la necesidad de renovación de la izquierda.

Los intentos iniciales de renovación adquieren primariamente el carácter de una crítica radical en contra de la conceptualización extremadamente ideologizada que la izquierda formula respecto de la dictadura y de su proyecto global de reestructuración del capitalismo dependiente en Chile. Dicha ideologización estaría en la base de la ineficiencia de las estrategias aplicadas por ella en contra de dicho Estado. Como ya lo adelantáramos en

el capítulo quinto (El marxismo de las sociedades dependientes, el marxismo de los movimientos sociales), adquiere la forma de una crítica en contra de tres mitos ideológicos alimentados por la izquierda heredera de la Unidad Popular. El primero de ellos hace referencia a la afirmación frecuente en el período de 1973-1980 en el sentido de que el modelo de reestructuración aplicado es históricamente inviable. Dicha tesis se fundamenta en la tradición teórica de la izquierda latinoamericana fuertemente influenciada por el debate sobre la dependencia que tiene lugar en los años sesenta, y que certifica teóricamente la inviabilidad del capitalismo dependiente. Dicha inviabilidad se fundamentaría específicamente en la naturaleza pauperizante y socialmente excluyente de las estrategias de desarrollo aplicadas y en su incompatibilidad respecto del sistema democrático. En esta dirección lo que se sostiene es que la viabilidad del modelo económico aplicado en Chile depende esencialmente del contexto político en el cual él se inserta y no de su grado de ajuste con un paradigma de 'desarrollo nacional autónomo' o de su capacidad para satisfacer las necesidades esenciales de la población y de los requerimientos de un sistema democrático. En este sentido, es la presencia del Estado dictatorial la que fuerza la creación de las condiciones políticas favorables a la aplicación del modelo económico monetarista. De allí que es necesario abandonar la conclusión lógica de que la inviabilidad del modelo económico aplicado surgiría de la crisis que daría curso a la sustitución del régimen político. El segundo mito hace referencia a la idea de que la dictadura militar representa un régimen contrarrevolucionario necesariamente transitorio que se define a partir de la constitución de un Estado de excepción. De ahí que el objetivo esencial de la sociedad civil sea el desalojo de dicho Estado para favorecer y restaurar el sistema democrático transitoriamente suspendido. Dicho razonamiento político es considerado parcial en la medida en que se fundamenta en la consideración de la dimensión puramente contrarrevolucionaria y restauradora del autoritarismo. El no otorga importancia a la voluntad del régimen por establecer un proyecto histórico global de reestructuración del funcionamiento capitalista de la sociedad. Todo ello se expresa en la puesta

en práctica de transformaciones económicas esenciales que garanticen el surgimiento de un 'nuevo orden social', destinado a impossibilitar estructuralmente el advenimiento del 'comunismo'. Dichas transformaciones han dado curso al establecimiento de un nuevo escenario de clases y grupos sociales que difiere substancialmente del conocido en el período precedente. Este nuevo escenario exige irremediabilmente al reformulación de las estrategias políticas puestas en práctica por la izquierda. Finalmente se rechaza la idea de que la política económica aplicada por el Estado autoritario responde a objetivos de profundización del desarrollo del capitalismo, en donde el proceso de industrialización deberá pasar de su fase de producción de bienes de consumo a la de de generación de bienes de capital, tal como había sido indicado por los objetivos económicos de la dictadura brasileña establecida a partir de 1964. Dicho rechazo se fundamenta en la evidencia empírica de que el modelo de desarrollo puesto en práctica en Chile se fundamenta en una estrategia primario exportadora altamente diversificada. Ella busca la explotación de las 'ventajas comparativas' de la economía chilena de acuerdo a los cánones más ortodoxos del monetarismo. En este sentido, el sector industrial desempeña una función estrictamente marginal en la estrategia aplicada. El rechazo de esta interpretación, que busca un contexto internacional explicativo en la exigencia impuesta por lo que se denomina como *Nueva División Internacional del Trabajo*, implica también el rechazo de la afirmación de que la aplicación de dicho modelo económico dará curso a una proletarización generalizada de la población económicamente activa. Esto último constituye uno de los componentes esenciales en el razonamiento clásico de la izquierda, en la medida en que ella garantiza teóricamente el crecimiento cuantitativo del proletariado y el aumento progresivo de su peso estratégico en el funcionamiento de la economía, facilitando la concreción de la alternativa socialista como respuesta ineludible a la caída de la dictadura.¹

Los intentos iniciales de renovación no sólo suponen la crítica de las estrategias puestas en práctica por la izquierda en contra de la dictadura; suponen también el intento por establecer un

nuevo diseño explicativo de las causas de la derrota de la UP. Dicho intento no tiene una naturaleza puramente escatológica, sino que aspira a crear las condiciones teóricas necesarias para poner en discusión el discurso clásico del socialismo. Bajo esta perspectiva la concepción de la 'vía chilena al socialismo' constituyó una teoría de la transición 'formulada desde arriba'. Encuentra su origen en el hecho de que el poder representado por el gobierno no es considerado como el medio esencial para concretar el 'programa democrático popular' sino como un instrumento esencial para crear una coyuntura favorable a la superación de dicha etapa. De ahí que en el período Unidad Popular predominen, por lo que se refiere a la sociedad civil, concepciones extramadamente tácticas de las alianzas sociales que sustentan o favorecen la política del gobierno y, paralelamente, una exacerbación carente de toda teoría, respecto de la 'destrucción del Estado burgués'. La presencia de ambos fenómenos encuentra su origen en las formulaciones teóricas de la izquierda del período de los años sesenta. El aspecto central de tales formulaciones se expresa en la idea de la función dirigente predominante que debía desempeñar la clase obrera en la fase 'democrático popular'. Por ello y aun cuando el gobierno de la UP replantea la necesidad de formular 'otro socialismo' que asuma esencialmente la 'cultura democrática' de la sociedad chilena, esto se ve limitado por la insuficiente conceptualización de una teoría de la transición al socialismo. La dificultad mayor proviene del hecho de que el programa obrerista consideraba a las otras clases constituyentes de la alianza como residuales o secundarias, particularmente a las clases medias. Ello impedía la valoración exacta de la radicalidad ideológica del conflicto entre la visión obrerista de la sociedad y las concepciones de clase media. Esto limitó notablemente las posibilidades y perspectivas de materialización del otro socialismo. La exacerbación de la visión obrerista y el carácter políticamente excluyente de otros grupos sociales que impera en el intento de transición socialista, creaban dificultades a la concreción futura de una sociedad democrática. La construcción socialista a través de la profundización del sistema democrático requiere, en esta perspectiva, del abandono de la 'angustia política' por la dirección obrera del

proceso que impera en los partidos de la izquierda chilena. El hecho de que esto no ocurriera explica la incapacidad del gobierno del Unidad Popular para movilizar en su favor tanto a los sectores medios como a los sectores marginales que no constituían parte de la 'clase obrera histórica'.²

El conjunto de estos problemas es el que plantea la necesidad de la revisión de la conceptualización del socialismo como 'necesidad histórica' y de la estrategia obrerista imperante de los partidos de la izquierda. Lo cual plantea de manera evidente la necesidad de reconsiderar el cuerpo teórico en que dicha visión se fundamentaba: el marxismo de vocación leninista y su forma de análisis histórico fuertemente influenciado por las teorías desarrollistas (sobre esto ver capítulo V, 'El marxismo de las sociedades dependientes'). Por otra parte, esto se presenta como la única alternativa viable para que la izquierda pueda superar su incapacidad para reconocer y aceptar los cambios y transformaciones de la sociedad chilena a partir de 1973. Dichas transformaciones no dejan lugar para la conservación de su visión clásica que conceptualiza a la clase obrera como portadora de un nuevo proyecto de sociedad, y ponen en discusión la conceptualización de una estructura de partido leninista que se constituye en destacamento y vanguardia de dicha clase. De ahí que se haga necesario el reconocimiento de la multiplicidad de los sujetos sociales que permita superar una visión biclasista de los conflictos sociales. Esto último conduce el razonamiento político hacia una revaloración exagerada del papel futuro de los movimientos sociales que aspira a reemplazar a la categoría de clase social. Dicha 'ilusión movimientista', inspirada por la sociología de Durkheim, conduce a la caducidad de la función de los partidos políticos en la sociedad civil. Todo ello en la medida en que los partidos no logran expresar y recrear los movimientos sociales, lo que garantiza la independencia de estos movimientos respecto de la gestión política de estos. Se confía en que los movimientos sociales llegarán a una fase en la cual puedan 'expresar su racionalidad' política independientemente de la 'capacidad manipuladora' de los partidos.³

De ahí que la crítica teórica en que se fundamentan los primeros esfuerzos de renovación de la izquierda debe alimentarse necesariamente de la crítica del leninismo y del consumo del marxismo soviético. Dicha crítica debería crear las condiciones necesarias para responder adecuadamente a los desafíos que se le plantean bajo la forma de fenómenos históricos que sustentan su propia crisis. El primero de dichos fenómenos se expresa en el surgimiento de nuevos componentes ideológicos en el seno de la oposición que deben ser necesariamente incorporados a las políticas de la izquierda. Eso configura un nuevo escenario político en donde su contenido ideológico es radicalmente diferente del existente en el período 1970-73. Esto se expresa particularmente en la necesidad de incorporar acciones efectivas en defensa de los derechos humanos. La relevancia que adquiere la defensa de dichos derechos se ubica en un contexto político que se caracteriza por la acentuación de una posición humanista, antieconomicista y profundamente democrática. En lo económico, se expresa en la revalorización de la ideología desarrollista inspirada por la relación que las teorías de la modernización establecieron entre desarrollo industrial y democratización. La revaloración de la idea de los movimientos sociales se inscribe como el recurso necesario para materializar dicha perspectiva, cuya autonomía frente al Estado autoritario proviene de la negación que dicho Estado hace de la sociedad civil. Su autonomía frente a los partidos constituye el resultado necesario de la ineficiencia política derivada de la violencia que contra ellos ejerce la dictadura. El segundo fenómeno histórico proviene de la consistencia del proyecto de reestructuración y modernización radical impuesto por la dictadura y que excluye todo tipo de concesión a las clases y grupos sociales subalternos. Esto plantea para la izquierda el desafío de tener que constituir un proyecto alternativo frente a un Estado que aspira a erradicar, por medio de transformaciones estructurales, el escenario material en el cual se habían asentado las políticas de izquierda. Como resultado de ello, el tercer fenómeno histórico que la izquierda debe enfrentar es la constitución de un nuevo escenario de la lucha social. Es esto último lo que exige de manera ineludible la reformulación programática de la izquierda. Este

nuevo escenario es el resultado de la intensificación de las relaciones capitalistas en el seno de la sociedad y del abandono del papel del Estado como regulador de las desigualdades y conflictos sociales, lo que conduce a una atomización radical de los conflictos sociales y hace ineficiente las antiguas alternativas fundamentadas en los supuestos de la 'unidad y organización' de la lucha social con grupos sociales esencialmente homogéneos que enfrentaban la lucha en contra de las desigualdades sociales. A ello se agrega la alteración profunda de la constitución de las clases sociales y de sus expresiones políticas. Respecto de esto último lo más significativo para la izquierda tradicional está constituido por la disminución cuantitativa de la clase obrera, la desvalorización de su peso político, la terciarización acentuada de la economía que incrementa los sectores medios y el empleo informal y la profundización de la heterogeneidad estructural de la economía que en el nivel de las clases sociales desfavorece la constitución polarizada la sociedad en dos clases sociales antagónicas. Dicha heterogeneidad destruye las condiciones sociales y económicas que permitían la homogeneidad de intereses económicos y políticos para extensos sectores de la sociedad civil. La segmentación radical de los actores sociales y la fragmentación de sus expresiones políticas constituye lo más relevante del nuevo escenario. Son estos fenómenos los que afectan gravemente a la base social histórica en la que se había asentado la izquierda chilena.

Al conjunto de estos fenómenos que constituyen la 'base estructural' de la crisis de la izquierda se agrega la crisis de los valores ideológicos en que ella se sustentaba. La causa fundamental de tal crisis está representada por el debate abierto en el seno de los sectores progresistas respecto de la legitimidad política y moral de los 'socialismos reales'. Los componentes de dicho debate hacen referencia a la vigencia de los derechos humanos, el problema de la democracia y la libertad en el socialismo, la eficiencia de la economía socialista para favorecer estrategias de crecimiento y desarrollo compatibles con las necesidades materiales y democráticas de la población, el grado

de inserción de las economías socialistas en el sistema capitalista mundial, la capacidad del socialismo para resolver los problemas derivados de la lucha de clases y del patriarcado y la eficiencia del socialismo real para resolver las desigualdades sociales, el burocratismo y los problemas de las minorías nacionales. Tanto el 'nuevo escenario estructural' como la crisis ideológica del socialismo se traducen, en el caso de la izquierda chilena, en una desarticulación generalizada del paradigma que sustentaba su gestión política. Esto intenta ser superado por los esfuerzos de renovación teórica y política a partir de la apertura teórica de un espacio de reconciliación del socialismo con la democracia. Pero para que ello sea posible es necesario resolver una serie de problemas teóricos y políticos inherentes al marxismo y su cuerpo teórico. El primero de ellos surge la relación que debe establecerse entre economía y política. Tanto en el modelo autoritario puesto en práctica por la dictadura como en las versiones del marxismo vulgar en uso existe una manera común de explicar la relación entre ambas categorías. Esto se expresa en la idea de que la política (tipo de Estado y sistema político) es el resultado necesario del modo de operación de la economía en la visión de la dictadura militar (sobre esto se puede ver el punto cinco del capítulo IV) y, en el caso del marxismo en uso, la política es el resultado o prolongación necesaria del acontecer de la infraestructura económica (modo de producción y formación económico social). Ambas perspectivas dan curso a un reduccionismo acrítico de la ciencia (economía y materialismo histórico respectivamente) cuyos paradigmas son considerados como actos de fe, que expresan la traducción literal de las ciencias de la naturaleza en el análisis de la sociedad. El darwinismo social, en el caso de la ideología monetarista, será el ejemplo más relevante de ello.

El segundo problema está constituido por la concepción y función del Partido. La idea tradicional de partido leninista es considerada como una de las causas que crean condiciones favorables a las versiones de socialismo no democrático. En la medida en que él es considerado como el portador de la conciencia de clase que debe ser internalizada en el movimiento obrero, a fin de superar

su naturaleza puramente reivindicacionista. Dicha internalización está destinada a transformar el economicismo de clase en un proyecto macroestructural histórico de sustitución del capitalismo. El problema que dicha conceptualización plantea es que facilita la creación de un partido de élite política que, sumado a la burocratización del socialismo y del Estado, lo hacen incompatible con la democracia. Dicha incompatibilidad es el resultado de la identificación entre partido y Estado, entre sociedad civil y Estado. Esto elimina la autonomía necesaria de la sociedad civil respecto del Estado; dicha autonomía es el espacio natural de existencia de la democracia. Por otra parte, la exacerbación de la idea del partido de clase favorece estructuralmente la disolución de la sociedad civil en un partido único. Dicha concepción de partido es contradictoria e incompatible con la necesidad de la revalorización de los movimientos sociales que, en términos de alternativas, se hace indispensable para articular una oposición eficiente a la dictadura que permita superar la ineficiencia política evidenciada por los partidos de oposición en el período autoritario. El tercer problema que se plantea es el representado por la necesidad de la revalorización del papel de los cristianos (católicos) en la sociedad chilena. La necesidad de dicha revalorización se fundamenta en el papel desempeñado por la Iglesia chilena en defensa de los derechos humanos y la protección prestada por ella a sectores de la izquierda en los períodos de más aguda represión y genocidio. La construcción de un proyecto de mayorías para sustituir la dictadura debe contar de manera relevante con el papel de los cristianos. Es evidente por otra parte que dichas afirmaciones suponen también que la necesaria revalorización hecha por la izquierda la colocará en mejores condiciones para enfrentar al partido católico chileno por excelencia: la Democracia Cristiana. El problema final que se plantea es el referido a la política económica del socialismo, considerada como alternativa al capitalismo dependiente. Esto supone necesariamente responder teórica y prácticamente a la crisis que enfrentan los modelos socialistas de desarrollo y a las demandas autogestionarias, antiburocráticas y democráticas que se le plantean, respecto de su modelo de planificación centralizada y de estatización generalizada de

la economía. Por otra parte, es necesario intentar una respuesta a la pregunta crucial referida al hecho de si en el marxismo existe un modelo de desarrollo económico alternativo al capitalismo dependiente y diferente a las interpretaciones nekeynesianas radicales aplicadas por la versión latinoamericana de las teorías de la modernización puestas en ejecución por la CEPAL. O si por el contrario es necesario establecer que lo que el marxismo, en la versión latinoamericana, conceptualiza como estrategia de desarrollo es el nekeynesianismo radical y que por tanto la diferencia entre él y el socialismo de los países subdesarrollados proviene esencialmente del tipo y forma de control del Estado.

Es evidente que esta aproximación inicial por formalizar las premisas básicas de un intento de renovación de la izquierda, y que en su primera fase tiene un carácter puramente intelectual, está inscrito en un período en que el modelo monetarista aplicado en la economía chilena muestra una corta eficiencia. De ahí que muchas de las críticas formuladas respecto de la política seguida por los partidos de la UP expresan implícitamente el impacto ideológico de dichas transformaciones. Esto explica la presencia de un supuesto implícito en dichas críticas: el de que las transformaciones puestas en práctica tienen un carácter irreversible. Lo anterior se expresa en la afirmación corriente entre dichos intelectuales en el sentido de que la política aplicada era socialmente injusta pero funcionaba con eficiencia y era técnicamente viable. Esto se expresa también en el hecho de que el bloqueo practicado por el Estado autoritario, respecto de la gestión de los partidos políticos que los hizo socialmente ineficientes, sea explicado como el síntoma de una infuncionalidad histórica y definitiva de ellos respecto de la sociedad civil. Una suerte de antipartidismo radical está en la base de dicho razonamiento. Si se considera la crisis del modelo monetarista iniciada a comienzos del segundo semestre de 1981 y que condujo a su sustitución posterior en el primer semestre de 1984, es posible descubrir la extrema ideologización de las reflexiones políticas que sirven de fundamento teórico a la necesidad de la renovación de la izquierda. Más aún, es posible y necesario separar la funda-

mentación teórica de la necesidad de renovación y ello porque esto último es históricamente necesario si se desea reconciliar el socialismo con la democracia.

7.2. Las transformaciones estructurales del monetarismo como fundamento material de la crisis de la izquierda.

En los esfuerzos de renovación de la izquierda existe un consenso amplio en el sentido de que la puesta en práctica de las transformaciones estructurales resultantes del modelo económico aplicado por la dictadura, han dado curso a cambios substanciales en la estructura social. Ellas se expresan en la variación porcentual de la distribución de las clases y grupos sociales y en la composición interna de cada una de ellas. La relevancia que ello representa para la izquierda proviene de la estrecha relación que ella establece entre su proyecto político y su base social de apoyo. Las transformaciones económicas habrían comprometido su base de apoyo tradicional (la clase obrera y los sectores populares). A ello debe agregarse la incapacidad que ella demostró para sumar sectores extraobreros a sus políticas oficiales. Una de las preguntas esenciales que se plantean en este contexto se refiere a qué fuerzas sociales están hoy dispuestas a sustentar su proyecto político. El paradigma clásico en que ella se había sustentado partía del supuesto de que el socialismo era el resultado lógico de la universalización de los intereses de clase del proletariado nacional. Dicha clase se constituía en portadora histórica del futuro de la sociedad, cuya importancia creciente pasaba a depender de la organización sindical y del partido de clase y de su capacidad de sumar en favor de su proyecto a sectores sociales no proletarios (alianzas de clase). Dicho supuesto se fundamentaba en una teoría que sustentaba la idea de una expansión creciente de la clase obrera tanto en la economía como en la sociedad. Y esta teoría asimilaba el desarrollo del capitalismo en Chile al modelo típico ideal construido por la economía política clásica para explicar el desarrollo histórico del modo de producción capitalista. Dichas afirmaciones parecían obtener una base empírica en el proceso de industrialización que se genera

en la economía chilena después de los años treinta. La ampliación y diversificación del sistema productivo, el crecimiento del mercado interno, la concentración urbana y la interdependencia creciente entre el conjunto de las actividades económicas parecían reforzar la idea de la presencia de ese modelo típico ideal.⁴

Las características específicas que se derivan de la situación chilena, el hecho de que la industrialización fuera ejecutada desde el Estado capitalista y el hecho de que la constitución de éste precediera en cierta medida a la constitución de clases de capitalismo industrial y, más aún que el mismo, fuera el generador y sustento estructural de su desarrollo (burguesía industrial y proletariado industrial), eran consideradas como particularidades secundarias que provenían de la naturaleza heterogénea y dependiente de la economía. Esto no lograba comprometer la legitimidad histórica del paradigma formulado. Otras características específicas como, por ejemplo, el de que la industrialización nacional fuera acompañada por una expansión acelerada del sector terciario y una rápida terciarización de la economía, simplemente se ignoraba. La ideologización extrema de la sociedad ocupaba el espacio de su necesaria racionalización empírica. Sin embargo, una de las preguntas cruciales que deben formularse a dicha crítica es el por qué a pesar de la extrema ideologización de la realidad fue posible que la alianza política que la sustentaba lograra conquistar el gobierno en 1973. Esto puede ser considerado como una demostración parcial del hecho de que la ideologización extrema no lograba comprometer la eficiencia del proyecto político y de la estrategia adoptada.

Sin embargo, los aspectos esenciales del modelo económico ejecutado por la dictadura militar⁵ y que comprometen la base de apoyo social tradicional de la izquierda chilena, poniendo en discusión sus formulaciones teóricas tradicionales, se relaciona con el hecho de que la expansión generalizada de las relaciones capitalistas a que él da curso es acompañada por una tendencia al desmantelamiento del papel central que había desempeñado la industrialización. Todo ello conduce a una disminución

cuantitativa de la clase obrera, al debilitamiento de su importancia estratégica en la sociedad y a la acentuación de su heterogeneidad interna, que compromete tanto la homogeneidad política como la identidad de intereses económicos. Por el contrario y como resultado de que la dinámica del crecimiento económico se ubica ahora en las actividades primario exportadoras poco consumidoras de mano de obra y con alta renta diferencial en el sector servicios y en las actividades comerciales, son otros los sectores sociales que aumentan su peso e importancia en la estructura social. Están constituidos por la pequeña burguesía independiente, los grupos sociales del sector informal de la economía y los desempleados. Son estos hechos los que desarticulan la matriz teórica tradicional de la izquierda.

CUADRO XXIII

Magnitud de la clase obrera en Chile, 1952-1979 (% sobre la P.E.A.)

	1952	1960	1970	1979 ^a
I. PROPORCION CLASE OBRERA	40.4	40.7	32.5	24.8
a) Obreros agrícolas/P.E.A.	18.2	17.7	12.1	7.2
b) Obreros no agrícolas/P.E.A.	22.2	23.0	20.4	17.6
II. TRABAJADORES AGRICOLAS				
a) Obreros Agríc./P.E.A.Agríc.	64.2	64.0	57.7	41.7
b) Cta.Prop.Agríc./P.E.A.Agríc.	24.2	23.1	26.9	40.9
III. TRABAJADORES MANUALES NO-AGRICOLAS ^b				
a) Según rama de actividad				
a.1. Industria	80.4	85.2	82.8	76.4
a.2. Minería	85.7	84.1	83.8	76.4
a.3. Construcción	84.6	91.1	86.7	85.6
a.4. Transportes	69.6	74.0	71.6	71.4
b) Según status jurídico				
b.1. Empleados	8.3	10.3	17.8	17.7
b.2. Obreros	71.7	71.6	63.4	53.0
b.3. Otros	20.0	18.2	18.8	29.3

^a Sobre total de ocupados: no se dispone de información censal para años recientes; los datos provienen de encuestas a una muestra nacional de hogares, de base censal.

^b Sobre total de población activa en el sector.

FUENTE: Dirección General de Estadísticas, Instituto Nacional de Estadísticas: *Censos de Población y Vivienda para 1952, 1960 y 1970; Encuesta Nacional del Empleo, 1979.* Javier Martínez y Eugenio Tironi, "La clase obre-

ra en el Nuevo Estilo de Desarrollo: un enfoque estructural". Revista Mexicana de Sociología, año XLIV, Vol. XLIV, nro.2, abril-junio de 1982.

Las conclusiones políticas que intentan ser secundariamente formuladas a partir de las consecuencias de las transformaciones de las relaciones de clases citadas se vinculan a cambios supuestos en la representación política de cada uno de los partidos de la izquierda. Esto se fundamenta en el supuesto de la persistencia de dichos cambios estructurales. Se verificaría una reducción cuantitativa y cualitativa de la representación política del Partido Comunista, en la medida en que él representaba mayoritariamente a los sectores obreros. Por otra parte, la presencia de una mayor masa marginal y de desempleados favorecería ostensiblemente las posiciones del área socialista (Partido Socialista, Mapus e Izquierda Cristiana) y al Partido Demócrata Cristiano, lo que crearía condiciones favorables a alternativas de tipo populista que podrían estar socialmente apoyadas en los sectores marginales y en las clases medias independientes.⁶ Sin embargo, tanto el abandono de la política monetarista como la nueva política económica adoptada a partir del primer semestre de 1984 pueden crear condiciones para la reversibilidad de las transformaciones estructurales adoptadas. Más aún y a pesar de que el perfil de la política económica del nuevo gabinete ministerial es aún vago, desde la propia dictadura podría alimentarse una política de tipo populista que pusiera el acento en la dinamización interna de la economía, a fin de favorecer la permanencia del Estado autoritario. Es esto último lo que constituirá una de las dificultades mayores para la oposición democrática. La experiencia de diez años de dictadura demuestra que la premisa de que el Estado autoritario estaba irremediablemente vinculado al modelo monetarista y que de la crisis y de su fracaso económico surgirían las condiciones estructurales para la democracia, era inexacto. Por el contrario se evidencia el hecho de que la dictadura está dispuesta a ejecutar los cambios necesarios de política económica a condición de permanecer en el poder. Tanto la reversibilidad parcial o total como el nuevo escenario social que puede surgir como resultado de la aplicación de la nueva política económica y su viabilidad eventual, ubicarán a la oposición política en un terreno diferente.

7.3. La revisión crítica del marxismo.

Como ya hemos dicho, los primeros esfuerzos de renovación estuvieron destinados a desarrollar una crítica radical en contra de la codificación soviética del marxismo fundamentada en la interpretación leninista. Es evidente que dicha crítica aspira a la refundación de una teoría del socialismo que sea más eficiente en la interpretación de un proyecto viable y alternativo al Estado autoritario. Se expresa frecuentemente en la afirmación de que el 'socialismo real' deja de ser una utopía y abre curso a la evidencia de que el mismo debe ser enfrentado como problema. Esto expresa la necesidad de superar los esquemas políticos que constituyeron el fundamento del proyecto de la izquierda derrotada en 1973. Dicha necesidad conduce a la ruptura teórica con el marxismo leninismo y con los modelos de socialismo real. Sin embargo para algunos sectores críticos más radicales, no se trata sólo de rechazar los resultados sociales o políticos de la aplicación del marxismo (leninismo y socialismo real) sino de alcanzar críticamente también la matriz teórica del marxismo. La práctica histórica del marxismo no puede ser considerada como independiente de sus conceptos centrales. Se intenta advertir de las dificultades que pueden surgir del exorcisar el marxismo y el socialismo a través de adjetivaciones: marxismo renovado y socialismo democrático.⁷

En esta dirección el concepto de renovación debe ser entendido como el esfuerzo de la izquierda por reformular y revisar tanto su programa como las conceptualizaciones teóricas en que se apoya su práctica política, sus medios de acción y sus aparatos partidarios.⁸ En esta perspectiva se constata la predominancia en Chile, desde la década de los sesenta, de la interpretación del marxismo heredero de la tercera internacional. Este se conceptualizaba como una teoría científica absoluta que posibilitaba la interpretación del desarrollo del capitalismo en Chile, de la naturaleza de la revolución política y del carácter de la transición al socialismo. Todo ello constituyó el fundamento teórico de la aplicación de una lógica discriminante respecto de

otras interpretaciones viables: desviaciones y revisionismo, ciencia burguesa y ciencia proletaria, ciencia de la historia e ideología burguesa, etc. El énfasis esencial estaba puesto en la idea de que el marxismo posibilitaba analizar científicamente los procesos sociales en oposición a otros paradigmas que quedaban reducidos al nivel de interpretaciones ideológicas, y esto se expresaba en la afirmación frecuente que calificaba a las ciencias sociales en general como la 'sociología subjetiva' de la sociedad. La disidencia teórica o política, el trotskismo o el titismo yugoslavo, eran considerados como la expresión de penetración burguesa en el seno de la teoría revolucionaria que debía ser necesariamente eliminada. El maoísmo y las consecuencias políticas de la invasión de Checoslovaquia intentaron ser ajustadas a la misma lógica.

Dos aspectos teóricos centrales en el marxismo cobran una relevancia particular en los análisis de los intelectuales partidarios de la renovación. El primero de ellos se relaciona con su insuficiencia teórica para comprender las características esenciales del Estado. Es preciso reconocer que la teoría marxista del Estado fue radicalmente 'modernizada' por la revalorización de los estudios de Gramsci, particularmente la idea referida al hecho de que el sistema político requiere de la utilización de la fuerza más la hegemonía, lo que conduce de todas maneras a una visión más modernizada de la dictadura. Sin embargo, dicha conceptualización imposibilita la socialización real del poder en la medida en que la obediencia respecto del poder político se obtiene por medio de la represión y la norma jurídica. Ellas son complementadas por el sistema de adhesiones ideológicas que se ubica en el límite de la manipulación de las conciencias. El producto histórico de la teoría marxista del Estado ha conducido a un tipo de sociedad autoritaria que niega radicalmente la originalidad del marxismo en cuanto teoría política, de fuertes connotaciones anti-estatales. En oposición a ello, lo que se verifica en el socialismo real es una estatización generalizada de la cultura y la vida social. Dicho resultado no puede ser considerado como una simple disociación entre teoría democrática y práctica política;

por el contrario, es producto de la presencia de un núcleo dogmático en la construcción teórica del marxismo.⁹ Con esta perspectiva, la negación de la sociedad política concretada en el socialismo real es más un resultado lógico de dicha teoría que una distorsión histórica de ella. No se enuncia la respuesta a la pregunta sobre cuáles son los componentes del núcleo dogmático de la teoría y qué desagregación teórica es necesario formular para sistematizar su presencia. Lo que dicho razonamiento intenta demostrar es que no "es exacto, entonces, afirmar que la forma de organización social de los países socialistas está en contradicción absoluta con el proyecto que la teoría formula. Esta última es equívoca. Los elementos libertarios, que plantean el socialismo como superación de la democracia burguesa, se combinan con elementos totalitarios que derivan de la doble relación Marxismo-Saber absoluto y Política-Verdad".¹⁰ La autorepresentación del marxismo como ciencia está de alguna manera en la base causal de sus tendencias antidemocráticas. La teoría del partido y la teoría sobre la clase obrera constituyen un apoyo inestimable a dicha situación. El marxismo como ciencia absoluta otorga al partido un papel ilumista y necesariamente dogmático, cuya expresión teórica y organizativa es la conceptualización leninista. Por eso se establece con frecuencia por los teóricos de la renovación que refundar y renovar la teoría del socialismo no es equivalente a reformular la teoría del marxismo.¹¹ Esto último debe ser entendido como la distinción necesaria entre una teoría socialdemócrata y la teoría del marxismo. Sin embargo esta afirmación nunca es explícita.

Para otros autores,¹² la necesaria consideración crítica del marxismo por parte de la izquierda chilena supone dos formas concretas de enfrentarlo. Por una parte, existe la necesaria aproximación teórica destinada a evaluar su eficiencia teórica para dar cuenta de los problemas actuales de la sociedad chilena. De otra parte, existe la posibilidad de una consideración crítica de su sistema de representaciones que da curso a lo que se denomina cultura de la oposición. Lo que ambas perspectivas suponen es su evaluación respecto de su pretensión científica y de su ideología

de emancipación de la clase obrera. Sin embargo, sus dificultades mayores derivan del carácter determinista de su método que conduce en muchos casos a la sustitución de la realidad por la historia de sus conceptos, de orígenes esencialmente económicos. Esto evidencia dificultades fundamentales para dar cuenta de la multiplicidad de factores que constituyen la realidad social. Es la determinación plural de la realidad la que hace insuficiente su explicación a partir de meros conceptos parciales como modo de producción o lucha de clases. En el nivel de lo político lo más significativo se relaciona con el hecho de que se sostiene la idea, a la inversa de la tradición marxista, de que no son las contradicciones internas de la sociedad las que invalidan la presencia de un sistema democrático sino, por el contrario, son ellas las que ponen de manifiesto la necesidad y viabilidad de su presencia. Esta debe ser considerada como el elemento esencial que posibilita la regulación de los conflictos sociales. El supuesto marxista de que las contradicciones pueden ser eliminadas posibilitó la introducción de la idea de la extinción del Estado, pero el socialismo como fase de transición a dicha extinción condujo a la eliminación del ejercicio democrático del poder. De ahí entonces el que la aspiración a la extinción del Estado arrasara con el valor político y social intrínseco del sistema democrático. Ello explica las dificultades que el marxismo encuentra cuando se ve enfrentado a conceptos como pluralismo y democracia, y que las revoluciones hechas en nombre del marxismo terminen fortaleciendo hasta límites inimaginables el poder del Estado que se aspira a destruir. Esta situación imposibilitó la adopción de un marxismo ecléctico que se fundamentara en un 'relativismo metodológico' y en un 'pragmatismo conceptual'. A pesar de ello, es preciso reconocer en él los resultados políticos e ideológicos de su aspiración crítica de transformación del capitalismo. Y esto se expresa particularmente en la influencia que ejerce en el movimiento sindical y popular en Chile; se trata de un componente esencial de la cultura popular. Por tanto las dificultades mayores de una ruptura con el marxismo no son de orden intelectual sino social.

Este problema intenta ser resuelto a partir de la explicita-

ción necesaria en el sentido de que marxismo y socialismo no son categorías equivalentes; por el contrario, es posible ser socialista sin tener que asumir el marxismo. En esta perspectiva los problemas que surgen respecto del debate abierto sobre el marxismo pueden ser considerados como secundarios. Pero para ello es indispensable también romper con la idea del socialismo como modelo válido en todas las épocas y circunstancias. Se hace urgente el eliminar la idea de un socialismo como verdad revelada y en este último sentido y en este último sentido el socialismo debe ser conceptualizado como búsqueda. Se parte del reconocimiento de que no existen referentes paradigmáticos en su construcción y en ese sentido es un proceso abierto que "no puede ser reducido a la estatización de los medios de producción ni menos aún a la monopolización del poder por parte de un partido que se proclama el legítimo representante de la clase obrera".¹³ Es necesario rescatar el socialismo de toda intención fundamentalista o de cualquier tipo de vocación milenaria. Sólo ello puede posibilitar una solución a la dificultad esencial del socialismo real representada por su incapacidad para auto-transformarse. La reconciliación entre reformismo y revolución puede facilitar la resolución de dichas dificultades.

Sin embargo, no todos los que participan de la idea de una necesaria renovación teórica y política de la izquierda chilena comparten el tipo de construcción teórica que fundamenta la crítica en contra del marxismo. Particularmente porque en dicha crítica la determinación del resultado final corresponde al propósito político previo de eliminar el marxismo independientemente de cualquier consideración analítica profunda de la sociedad.¹⁴ De otra parte, no todos comparten las conclusiones políticas que se derivan de las transformaciones estructurales llevadas a cabo por el modelo monetarista. Particularmente se rechaza la conclusión política que se establece a partir de la pérdida del peso de la clase obrera como resultado de la reducción del empleo en la industria manufacturera y las implicaciones que ello tiene en términos de sujeto político. El fundamento de dicho rechazo está constituido por el hecho de que se pasa de un análisis formulado

en términos de estratificación social a otro que utiliza las categorías de la teoría de clases a fin de forzar y posibilitar una conclusión de orden político.¹⁵ Por el contrario, para obtener información respecto de la forma en que los cambios de las relaciones sociales afectan la capacidad de acción política de la clase obrera, es necesario tener conocimiento objetivo del nivel de su representación social en la sociedad. De la misma forma en que no existe una relación directa entre el crecimiento del paro y la miseria y el 'grado de conflictualidad de la sociedad', tampoco existe para determinar la pérdida de peso estadístico de la clase obrera y su comportamiento social.

El conjunto de la reflexión política expuesta constituye el resultado teórico del movimiento intelectual de renovación de la izquierda que se constituirá a partir de 1980 en el 'grupo de convergencia socialista'. Sin embargo, dichas reflexiones encuentran un antecedente previo en las condiciones políticas favorables que se generaron a partir de la crisis y división del Partido Socialista y que se expresó positivamente en la organización de un seminario en 1979, continuado en 1980, que se denominó "Seminario de Ariccia" (Italia). Dicho seminario fue organizado por iniciativa de la Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazioni dei Popoli.

7.4. El aporte teórico inicial del seminario de Ariccia.

El tema central del seminario de marzo de 1979 fue el "El socialismo chileno: historia y perspectivas". Dicho tema se concreta a partir de la constatación de que en las luchas sociales del último medio siglo se verifica la presencia de dos grandes vertientes ideológico-políticas. La primera de ellas es la comunista que se identifica con el 'comunismo histórico' y que se caracteriza por una gran cohesión doctrinal y organizativa. La segunda está constituida por la vertiente socialista, de una relativa confusión ideológica y una acentuada dispersión que la conducen a una creciente esterilización política. Esto origina un vacío político e ideológico significativo entre las fuerzas sociales que

combaten a la dictadura y de ahí que el buscar una oportunidad de "verificar el grado de convergencia de sus diversos componentes parece una tarea no sólo útil, sino necesaria".¹⁶ Por ello, es posible sostener la idea de que el objetivo específico de dicho seminario estuvo constituido por el intento de crear las bases teóricas que hicieran posible la reconstrucción del área socialista, gravemente afectada por la división del Partido Socialista. "Cuando se habla del 'área socialista' no se quiere expresar solamente cierto grado de parentesco ideológico; pensamos también en la comprobada receptividad de amplios sectores populares al llamado socialista, es decir, en la decisiva presencia del socialismo como factor electoral y como fuerza de masas a lo largo de cinco décadas y en la rapidez con que se ha reconstruido aún después de las crisis más agudas. Pensamos, en otras palabras, en la necesidad de activar esta latente inclinación de las masas a ver en él la vía de una independencia real del país y, simultáneamente, el instrumento de emancipación de las clases explotadas".¹⁷ Se insiste en el hecho de que el Partido Socialista desde 1964 pierde 'consenso y autoridad' en la base de apoyo en que se sustentaba, lo que habría facilitado el surgimiento de otros núcleos ideológicos que se ubican en su misma perspectiva. Reflejo de ello sería la aparición de organizaciones políticas como el MIR, el MAPU y la Izquierda Cristiana, a la que hay que agregar la Unión Socialista Popular. Dicha situación de crisis de consenso y autoridad se ve fortalecida por la división de dicho partido en 1979. Las múltiples divisiones sufridas por el PS a contar de dicha fecha no serán consideradas como resultados de la imposibilidad de contar con la documentación política necesaria.

Se pone de relieve el hecho de que la adhesión del Partido Socialista al marxismo desde su fundación, no ha tenido nunca el carácter de la vinculación a un "conjunto codificado de preceptos inmutables". Lo que de él se valora es su 'método de análisis', su concepción histórica y la sociedad. Ello supone el rechazo del modelo bolchevique de partido y estrategia. Históricamente, dicha situación también sería explicada por el papel de la influencia anarcosindicalista que contribuyeron a erradicar las tendencias

a constituir un partido monolítico y a resistir los intentos de sustitución del capitalismo por un nuevo tipo de Estado autoritario.¹⁸ Por estas razones, el seminario se constituye en un 'foro abierto' a la discusión de las diversas tendencias que constituyen lo que se denomina como la vertiente socialista chilena y que aspiran a diferenciarse de las corrientes comunistas; socialdemócratas o socialcristianas.¹⁹ El objeto de dicha discusión consistió en un intento de rescate autocrítico del ideario originario del socialismo chileno sobre la base de la consideración de la situación política chilena. Se intenta con ello la elaboración de un nuevo proyecto de 'movimiento popular chileno' frente a la dictadura y lograr la democratización global del país con una perspectiva de tipo socialista. En dicha dirección se constata que las estrategias aplicadas en el pasado por la corriente socialista no siempre fueron coincidentes con las aspiraciones socialistas y que, en la base de la derrota de la Unidad Popular, se sitúa la carencia de vanguardias políticas. "Se planteó la necesidad, a partir de lo que ha sido la experiencia histórica del socialismo chileno, de replantear una estrategia que no sólo conduzca a un profundo proceso de renovación de los partidos populares y a la convergencia en el seno de la vertiente socialista, sino también a renovar el movimiento popular chileno".²⁰ El aspecto central sobre el cual existió un acuerdo pleno fue el de la necesidad de construir un proyecto político que abra posibilidades al socialismo. Dicho proyecto debería ser autónomo en el plano internacional, creando las condiciones para constituir un nuevo bloque popular. El bloque debería ser representativo no sólo de la clase obrera sino de los trabajadores en general, incluidos los sectores medios. Pero para ello es necesaria la implementación de una política de acumulación de fuerzas sociales y políticas, que faciliten el desarrollo del 'poder de masas' dentro y fuera del "Estado burgués". Este último objetivo sólo podría ser logrado si se avanza en un proceso gradual de convergencia política y orgánica de las organizaciones constitutivas del área socialista. Todo ello debería crear las condiciones necesarias para la constitución de una organización política de nuevo tipo que resuelva las insuficiencias de las conceptualizaciones tradicionales referidas al

Partido y a su relación de masas. Esto debería superar las deformaciones burocráticas y rígidas del marxismo. "En este sentido, había un gran consenso para buscar, en los pensadores marxistas y en la historia de la lucha del pueblo chileno, las fuentes para una reinterpretación del Partido a la luz de una teoría para la revolución chilena".²¹

La segunda parte y continuación del seminario tiene lugar en enero de 1980. En ella se ponen de relieve dos temas centrales que fueron insuficientemente enunciados en la primera reunión. "El primero envuelve una serie de cuestiones derivadas, tales como la forma de la lucha por la democracia en las condiciones de una dictadura totalitaria; la naturaleza de un gobierno de los trabajadores; las fronteras de la planificación en una economía socialista; los derechos humanos en el ámbito de la nueva sociedad y los límites del pluralismo. En la discusión del segundo ha quedado fuera de toda duda la legitimidad de la participación cristiana en el proceso de emancipación social, a partir de los propios valores cristianos, pero estamos lejos aún de elaborar sólidos cimientos ideológicos para una convergencia no puramente ocasional y que en todo el continente comienza a cristalizar en el combate común."²² Pero el problema central de la izquierda sigue siendo el de iniciar su autotransformación necesaria para recuperar la iniciativa política a fin de derrocar a la dictadura. Para ello es indispensable superar el tipo de partido que caracterizó a las organizaciones políticas chilenas. Todos ellos se caracterizaron por una oscilación permanente entre la tendencia a reproducir pragmáticamente modalidades organizativas orientadas a favorecer tanto el trabajo electoral como la actividad legal de masas y la tendencia a reproducir las "formas orgánicas codificadas por la Tercera Internacional", que se expresaba básicamente en el modelo leninista de partido. "La búsqueda de soluciones organizativas originales se vió limitada, además, por una cierta tendencia a escoger entre modelos abstractos: partido de masas o partido de cuadros, por ejemplo, que le negaban funcionalidad a la acción. En otras palabras, definidas las metas y la estrategia del Partido, se olvidaba que su constitución y funcionamiento de-

bían dar respuesta adecuada y puntual a dos categorías de problemas: el proceso de formación de su voluntad política y la naturaleza de su vinculación con las masas, con la clase, con la base social destinada a protagonizar la mutación revolucionaria".²³

La constatación de estas deficiencias y dificultades son las que permiten concluir, en la segunda fase del seminario, el que se genera en la vertiente socialista un proyecto renovado y de transformación de los esquemas políticos tradicionales, que puede constituir una respuesta acertada en la lucha en contra del Estado autoritario.²⁴ Es este tipo de razonamiento el que servirá de antecedente político para la profundización de la renovación de la izquierda y para la constitución del "Grupo por la convergencia socialista" en 1980 y la creación en 1982 del "Secretariado de la convergencia" que será integrado por los partidos MAPU, MAPU-OC, Izquierda Cristiana y el sector del Partido Socialista denominado XXIV Congreso.

7.5. La renovación de las bases históricas del socialismo chileno y los documentos del "Grupo por la Convergencia Socialista".

En su primer documento, "Convergencia socialista: fundamentos de una propuesta",²⁵ se señala la necesidad de explicitar tres premisas básicas en el proceso de la renovación de la izquierda. En primer lugar es necesario rescatar el patrimonio y bases históricas del socialismo chileno. Ello debe ser entendido como el intento por preservar los elementos centrales del proyecto socialista que han sido elaborados en cincuenta años de historia del Partido Socialista. Esto se expresa en la necesidad de revalorizar los conceptos pluralismo y democracia dentro del partido que se ubican en el marco teórico de los principios socialistas. En segundo lugar se ubica la necesidad de la consideración rigurosa de la nueva realidad de la estructura económica y social generada por el Estado autoritario, y que afecta substancialmente a los actores sociales. Finalmente, se revela la necesidad imperiosa del diseño de una nueva estrategia demo-

crática y socialista para Chile. Ella debería garantizar tanto la estabilidad democrática del sistema político como el desarrollo de un acelerado proceso de igualdad social. Los participantes en la elaboración del citado documento concuerdan en que "la convergencia socialista, es una necesidad histórica y práctica; que su desarrollo es un reto ineludible en el proceso de superación de la crisis de la izquierda y de la falta de iniciativa de las fuerzas que se oponen a la dictadura; y que la presencia nítida del socialismo chileno es un factor imprescindible para democratizar la sociedad chilena y avanzar decididamente hacia una sociedad sin formas de dominación clasista o burocrática".²⁶

Los destinatarios esenciales del documento citado y de los futuros elaborados están constituidos por los partidos políticos en general y en especial aquellos que pueden constituir el área socialista de la política chilena. Por otra parte la Convergencia Socialista es considerada como la resultante de un proceso político destinado a superar el vacío de dirección política del movimiento popular. Dicho vacío encuentra sus causas fundamentales en la profundización y generalización de la crisis de la izquierda que explica las deficiencias de ellas respecto del combate en contra de la dictadura. Esto se expresa en el hecho evidente de que las movilizaciones populares en contra de la dictadura son más el resultado de las organizaciones sociales que de la actividad de los partidos de oposición. La Unidad Popular ha sido superada por la situación política y los cambios de la realidad socio-económica, lo que se expresa en el agotamiento de las anteriores bases programáticas de la izquierda y de su proyecto político precedente. De ahí que la Convergencia Socialista sea "un proceso complejo y multifacético, un proceso de base y de direcciones políticas, de formas diversas y, tal vez, contradictoria. La presencia orientadora de los partidos, dada esta necesaria flexibilidad, será ciertamente crucial".²⁷ Se fundamenta socialmente en la existencia de una demanda popular de carácter democrático y socialista, como resultado del desarrollo histórico de los partidos populares y en especial del Partido Socialista.

La convergencia es, por tanto, entendida como la reorganización necesaria de la unidad de la izquierda sobre las bases del nuevo escenario político y social de Chile. Para ello es indispensable la renovación del socialismo chileno a partir de la adopción de un marxismo crítico antidogmático e independiente de todo congelamiento de su capacidad revolucionaria. Esto es compatible con la forma a través de la cual el PS, desde su fundación, asumió la adopción del marxismo como su teoría política inspiradora, lo que se ve favorecido por la forma heterodoxa en que los partidos que surgen en la década de los sesenta y setenta (MAPU, Izquierda Cristiana, MAPU-OC) asumen dicha doctrina. Pero además es necesario un esfuerzo significativo de orden teórico para que el marxismo responda con eficiencia a la crucial integración de los valores revolucionarios cristianos al proyecto socialista, a la necesidad de la reconciliación entre socialismo y democracia, a la relación entre desarrollo económico y democracia y el de la aceptación de que en las sociedades complejas los conflictos sociales no pueden ser simplemente reducidos a la lógica de la lucha de clases. El intento por dar respuesta a dichos problemas constituye el contenido fundamental del concepto de marxismo crítico. La elaboración del nuevo proyecto político debería encontrar su fundamento en la utilización de las "grandes constantes históricas del socialismo chileno". Estas corresponden a la idea de su carácter nacional, popular, democrático, revolucionario y de masas.

En la base de este razonamiento está presente la afirmación, ya enunciada en el seminario de Ariccia, en el sentido de que el desarrollo del movimiento popular chileno ha contado con la existencia de dos corrientes fundamentales: la socialista y la comunista. Existe además la convicción para los intelectuales de la convergencia, de que la corriente socialista es mucho más compatible con la democracia y la necesidad de renovación de la izquierda que la corriente comunista. La base social heterogénea en que se asienta el apoyo político al Partido Socialista facilita el carácter nacional integrador del nuevo proyecto político. Por el contrario, ello se ve dificultado bajo la perspectiva del

Partido Comunista, en la medida en que éste radica su política en sectores esencialmente obreros lo que le plantea dificultades para la elaboración de un proyecto de alcance nacional.

El documento citado pone énfasis en la consideración de las transformaciones estructurales sufridas por la sociedad chilena y en las implicaciones políticas que de ellas se derivan. Particularmente, esto se refiere a los cambios de las relaciones entre las clases sociales y de su forma constitución. En lo que se identifica como clases dominantes, se constata que no se han verificado cambios substanciales en su tamaño absoluto; sus alteraciones se relacionan con una nueva forma de rearticulación, que se expresa en el hecho de que la nueva fracción dirigente está constituida por los sectores financieros asociados y dependientes del capital internacional, de origen reciente en la historia económica de Chile. La fuerza de apoyo de estos grupos está constituida por la tecnocracia y el aparato militar. Por el contrario, en las clases populares se ha verificado un crecimiento significativo y sus transformaciones se relacionan con la alteración de la participación de los grupos que la conforman. "Así tenemos que el proletariado industrial y agrario tiende a disminuir su importancia cuantitativa en forma notable. Al tiempo que aumentan su peso específico el sector de trabajadores por cuenta propia, la pequeña burguesía marginal y los sectores desempleados. Estos últimos sectores - que agrupan a la gran mayoría de los miembros del bloque popular - se caracterizan por su atomización y falta de ligazón con la plataforma política tradicional de la izquierda".²⁸ Las consecuencias políticas de dicha situación se ven agravadas por los intentos de desarticulación de las organizaciones sociales y políticas de la oposición formulada por el Estado autoritario, lo que se expresa en la marginación del bloque popular del sistema institucional y que es el resultado del bloqueo hecho por el Estado de las relaciones entre masas y partidos políticos.

Es esta realidad la que constituye el fundamento material para la elaboración de un diseño de 'estrategia democrático so-

cialista', alternativa a la dictadura. Dicho diseño debería estar basado en una nueva concepción de socialismo. La reformulación de dicho concepto debe considerar que él surgió como una alternativa en contra de las limitaciones que la existencia de la propiedad privada de los medios de producción imponía al conjunto de la sociedad respecto de su capacidad de decisión sobre la producción social. En esta dirección el socialismo se inscribe en una óptica de socialización del poder y, por tanto, de carácter profundamente democrático. Es necesario considerar cuatro aspectos básicos en la nueva concepción del socialismo. En primer lugar, no puede verse limitado a la socialización de la economía; él constituye en esencia la socialización del 'poder social' en todas sus manifestaciones. Segundo, reconquista de la orientación democrática. "El movimiento socialista puso tradicionalmente el acento, en su lucha por la democratización total de la sociedad, en la dirección de la economía por los trabajadores. Tal orientación era y es plenamente justa, y se oponía a la restricción burguesa de la democracia que restaba a la economía del campo de decisiones soberanas del pueblo, entregándola al poder despótico de la propiedad privada capitalista".²⁹ En tercer lugar, se señala la necesidad de la reconquista del humanismo e integración del aporte solidario del cristianismo. Ello debe expresarse por la revalorización de las orientaciones humanistas del socialismo. Finalmente se destaca la necesidad de fortalecer la autonomía de los movimientos sociales frente al Estado y los partidos. Esto constituye la garantía más eficiente frente a las deformaciones burocráticas del socialismo y a la reversión del proceso democrático.

En un documento posterior, "Convergencia Socialista: un horizonte democrático para Chile",³⁰ se pone de manifiesto la crisis actual de la sociedad chilena. Se la considera como el resultado del agotamiento del proyecto de reestructuración capitalista puesto en práctica por la dictadura militar desde 1973. Su capacidad transformadora se ha disuelto en represión, especulación y concentración del poder económico. Todo ello ha conducido a una desarticulación profunda de la vida social y de ello se desprende

que la naturaleza de la crisis no es simplemente reductible a variables económicas y políticas, sino que también posee elementos de orden moral que comprometen los destinos del país. Esto contrasta radicalmente con la historia de Chile como nación en el presente siglo y que se había caracterizado por un progresivo proceso de democratización y desarrollo nacional, aunque parcialmente concretado. Los agentes sociales centrales en este proceso fueron los sectores medios y populares, que precisamente hoy se encuentran bloqueados por las políticas del Estado autoritario. De ahí que el desarrollo de la sociedad chilena bajo el Estado autoritario deba ser considerado como una reversión extrema de dicha tendencia histórica en la sociedad. Respecto de la oposición política se reafirma su existencia bajo duras condiciones de represión y que se expresa en diversos sectores sociales. Pero su existencia, no logra ser consolidada en términos de proyectos y por tanto es vista difícilmente como alternativa. Finalmente, se reiteran algunos de los aspectos constitutivos de la naturaleza de la convergencia socialista. Se reitera la existencia histórica de una vertiente socialista dispersa en diversas organizaciones políticas y que es necesario aglutinar. Las características específicas del área socialista se relacionan con la idea de un socialismo libertario de tipo participativo no burocrático ni vinculado a centros internacionales hegemónicos, con la revalorización ética del desarrollo de la democracia en Chile, con la necesidad de renovar el concepto de socialismo y con la necesidad de superar las limitaciones de las organizaciones políticas precedentes.³¹

En mayo de 1982 se constituye el secretariado de la Convergencia Socialista que reúne las direcciones políticas de los partidos MAPU, MAPU-OC, Izquierda Cristiana y la fracción del Partido Socialista denominada XXIV Congreso. Ello facilitó la participación de contingentes más organizados de dichos partidos en la discusión referida a la Convergencia Socialista. Sin embargo, esto no fue ni ha sido un proceso fácil en el interior de estos partidos, particularmente porque ellos constituyen estructuras orgánicas que son siempre más rígidas y lentas en los procesos

de renovación que lo verificado en el Grupo por la Convergencia Socialista, que representaba a un grupo de intelectuales que habían abandonado dichos partidos. Dicho abandono se había verificado a partir de la incapacidad de ellos para dar cuenta de la nueva realidad de la sociedad bajo el Estado autoritario. La dificultad interna de dichos partidos para asumir la tarea de la renovación fue significativa. Esto lo demuestra, por ejemplo, el acta de una reunión conjunta de ellos (en la que no participó el sector del Partido Socialista del XXIV Congreso) que tuvo lugar el 18 y 19 de enero de 1982 en Holanda. En dicha reunión y en el aspecto referido al intercambio de información partidaria, el representante del MAPU-OC informa en los siguientes términos: "La imagen de homogeneidad que caracterizó al MAPU-OC ha terminado. Discusión interna difícil de explicar. Por una parte, hay una línea crítica, comprensiva de la situación actual, renovadora. Por otra parte, un sector importante desarrolla una crítica a dicha posición, señalando que representa un abandono del proyecto original de partido... que la tesis del camino insurreccional esconde una concesión al aperturismo y que se abandona la posición internacional del partido".³² La Izquierda Cristiana, por el contrario, se muestra más favorable a impulsar la renovación de la izquierda a través de la Convergencia Socialista y el trabajo entre estos tres partidos. Lo fundamenta en una visión crítica del PC y en la idea de que la crisis del modelo económico puesto en práctica por la dictadura replantea el problema del papel de los partidos políticos. Para obtener los objetivos de convergencia y trabajo conjunto entre dichos partidos es necesario cambiar el fundamento de la unidad de la izquierda: eje hegemónico Partido Comunista-Partido Socialista. Para el MAPU también se hace evidente la necesidad de renovación del movimiento popular y avanzar hacia la creación de un movimiento para la convergencia. Sin embargo, las dificultades para asumirlas son evidentes, particularmente cuando se refieren a la renuncia a dicho partido, formulada por intelectuales significativos que integraran el "Grupo por la Convergencia" y darán un impulso inicial a la renovación de la izquierda. La opinión oficial respecto de los expulsados es la siguiente: "Los seis trabajan en el área intelectual. Por tanto

no afecta mayormente. No van a irradiar. Tenían un espacio, pero no la mayoría del partido.... tienen tendencias antipartido".³³

El contenido de la elaboración de una política global que inspirará la actividad del Secretariado de la Convergencia Socialista se encuentra expresada en un documento denominado: "Nuestra Propuesta : Unidad y Solidaridad frente a la Crisis Nacional".³⁴ En él se especifica que los partidos participantes apuntan a construir una nueva fuerza política en el proceso de convergencia socialista. Esto se expresa en los siguientes términos: "Quienes suscribimos este documento somos partidarios políticos de izquierda que participamos en el proceso de convergencia socialista. Estamos empeñados en renovar y reformular el socialismo chileno para convertirlo en una sentida aspiración de las mayorías nacionales. Nos hacemos cargo de la historia reciente asumiento nuestra cuota de responsabilidad en el drama de Chile. La crisis ha sido también nuestra propia crisis. Para superarla se requiere de la unidad y movilización social, así como de la renovación de las alternativas. Reconocemos que nuestros partidos, por separado, no dieron respuesta a la altura de los desafíos de la nación. Necesitamos de nuestra unidad, pero ella no pretende ser sólo la suma de nuestras fuerzas orgánicas. Lejos de ello, buscamos interpretar los sentimientos de miles de compatriotas que tienen en el Socialismo libertario una aspiración sentida, que se sienten parte de su historia y que por razones legítimas no se sienten interpretados por ninguna de nuestras organizaciones por separado. La Convergencia Socialista apunta así, no sólo a convertirse en una estrecha alianza entre nuestros partidos, sino que la constitución de una nueva fuerza política, capaz de ofrecer al país una alternativa Democrática, Nacional, Popular y Socialista".³⁵

En junio de 1982 se realiza el denominado encuentro de Milán (Italia) que reúne a los diversos grupos y partidos que participan de los criterios de la Convergencia Socialista.³⁶ En el Documento de Milán se expresa la necesidad de que la Convergencia intente aglutinar y renovar las fuerzas socialistas, superando las limitaciones actuales y la dispersión política. El socialismo chileno

debería ser reconstruido sobre nuevas bases teóricas y políticas, recuperando su "perfil propio, antiimperialista y autónomo, democrático y popular". Deben superarse las practicas políticas sectarias, los esquematismos ideológicos, el marxismo verbalista y los modelos alternativos abstractos. Sólo la superación de dichas dificultades pueden garantizar la constitución de una alternativa política a la dictadura que se caracterice por una profundización constante de la democracia. Esta última debe ser definida como un valor permanente de la sociedad chilena que puede garantizar la necesaria eficacia en la reconstrucción de la sociedad civil, gravemente desarticulada por la dictadura. Sin embargo, lo esencial de la renovación del pensamiento socialista no radica sólo en una conceptualización crítica del marxismo, de los socialismos reales y de la relación entre democracia y socialismo, sino que depende también de la capacidad para constituir y desarrollar un movimiento social que sea compatible con los principios esenciales de renovación.

Sin embargo, es en un documento del Secretariado de la Convergencia en el que se explicita con mayor claridad la estrategia política a seguir, tanto respecto de la dictadura como del resto de la oposición de izquierda. El contexto político de dicha estrategia está representado por la crisis general del modelo económico puesto en práctica por la dictadura y a partir de la consideración de ella es posible crear una línea política que eluda los defectos de las formulaciones anteriores de la izquierda. "Por un lado, en el contexto de la crisis nacional actual, se han introducido las ilusiones de un recambio negociado con Pinochet, o la idea de que el tirano caerá espontáneamente fruto de las contradicciones internas del régimen. En la medida que pensamos que el problema central para derrotar a la dictadura es la necesaria unidad de todas las fuerzas democráticas, decimos que tal visión del fin de la dictadura lleva inevitablemente a la desmovilización y retarda la realización de ese objetivo. Por otro lado, creemos que tampoco ayuda a resolver ese problema central la opción de quienes piensan que la cuestión principal de la lucha democrática es la introducción de las formas armadas de combate

que catalicen y radicalicen a un pueblo ya supuestamente organizado y dispuesto. Ambas posturas, pretendiendo acortar caminos, nos alejan de los verdaderos desafíos que tiene el pueblo para desarrollar su fuerza y protagonismo, y restringen la capacidad de convocatoria de la izquierda para impulsar la movilización social".³⁷ La alternativa presentada a la situación chilena está constituida por la formación de un nuevo gobierno de 'emergencia nacional', que sea capaz de impulsar la transición a la democracia plena. Debe fundamentarse en la más amplia movilización social y en un amplio consenso social y político. Entre las iniciativas esenciales que debería asumir es preciso destacar la necesidad de la elaboración de un plan de emergencia para resolver el problema del desempleo, una reactivación económica fundamentada en el 'rearme industrial', resolver el problema del endeudamiento del sector industrial, favorecer la participación de los trabajadores en el proceso productivo y eliminar la especulación y el lucro de los grupos económicos de la reactivación. Por otra parte, debería asumir la restitución absoluta de las libertades públicas y la plena vigencia de los derechos humanos, favorecer el retorno de los exiliados, disolver la policía política (Central Nacional de Informaciones), derogar las disposiciones constitucionales contrarias a la vigencia de los derechos citados y convocar de inmediato a las elecciones de una Asamblea Constituyente. "Ninguna fórmula autoritaria hará vacilar nuestra consecuencia democrática, ninguna dictadura 'legalizada' confundirá al pueblo. Emplazamos a todos los partidos y sectores nacionales de orientación democrática a explicitar su rechazo a cualquier acuerdo con el régimen".³⁸ Se reitera la idea de que el proyecto político final postulado por el Secretariado de la Convergencia está constituido por el socialismo. Pero un socialismo de tipo libertario que haga de la revalorización permanente de la democracia su objetivo central y que supere su limitación referida a la simple socialización de la economía que "termina por enajenar su sentido humanista".

En un documento posterior se pone de manifiesto la inestabilidad del restablecimiento democrático, si éste se fundamenta

en la reproducción de los esquemas políticos tradicionales que se expresaron en la división clásica entre derecha, centro e izquierda.³⁹ Dicho riesgo se acentúa si se considera que no existe en Chile una fuerza política que sea capaz de superar dicho esquema tradicional. De ahí que sea necesaria "una fuerza que, por la amplitud de su programa y composición, por su peso propio en la sociedad y por su disposición a la concertación de todas las corrientes democráticas cumpla el cometido histórico de proponer un nuevo proyecto de nación".⁴⁰ La significación de la necesidad de un nuevo proyecto de nación se expresa en el Secretariado de la Convergencia, en la elaboración de un nuevo proyecto democrático y socialista que supere las versiones tradicionales de la izquierda. Este debería dar curso al establecimiento de un nuevo orden democrático que sustituya radicalmente el actual "orden capitalista autoritario" y que a través de la profundización de la democracia conduzca al socialismo. La democracia es además considerada como un "proceso histórico de reorganización del Estado y la sociedad" que se expresa en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos hace referencia a la modificación drástica de la dirección de la economía formulada por instituciones políticas representativas. Esta deberá conducir a la coexistencia de diferentes formas sociales y privadas de propiedad que se organizan en torno a los mecanismos generados tanto por una planificación central de la economía como por las variables derivadas del funcionamiento del mercado. La síntesis entre economía planificada y economía de mercado parece indispensable. En segundo lugar, dicha síntesis, debería dar curso a una ampliación progresiva de la 'autodirección democrática' tanto en el nivel del Estado como en el del funcionamiento y organización de la sociedad civil. Todo ello debería garantizar el término de la tendencia a usurpar a la sociedad civil de la dirección del Estado, tanto por parte de la burocracia estatal como por los grupos económicos nacionales o transnacionales. Finalmente, el fundamento real de dicha democracia deberá estar constituido por el ejercicio pleno de la totalidad de las capacidades ciudadanas.

En documentos y sucesos posteriores, que escapan al período

de nuestro estudio, se plantean dos cuestiones que para nosotros son significativas: la influencia del proceso y reunificación del Partido Socialista y la cuestión de constituir la Convergencia Socialista en un movimiento o en un partido. Es preciso recordar que uno de los objetivos centrales de las discusiones referidas a la convergencia fue el de revertir 'el proceso de descomposición' de la izquierda, creando un núcleo de agregación sobre la base de la revisión de los paradigmas teóricos y programáticos que habían alimentado las políticas de la izquierda. Como resultado de ello se intenta dar consistencia orgánica a lo que se denominó como 'área socialista' de la política chilena. En esta perspectiva la Convergencia debería estimular el proceso de unificación del Partido Socialista que se considera el 'tronco histórico' de su inspiración política. "Desgraciadamente, no todos lo han entendido así. A nivel local se vienen presentando dificultades o retardos para la plena integración de los Comités de Unidad Socialista en las filas de la Convergencia, por causas difíciles de identificar. Una de ellas podría ser la convicción - a veces explícita - de que la reconstrucción del Partido Socialista debería preceder a cualquier compromiso con otras fuerzas, sea para resolver este punto autónomamente cuando la unidad se hubiese logrado, sea porque se considera que la ausencia de un Partido Socialista fuerte y compacto condenaría al movimiento de convergencia a la ambigüedad o al oportunismo".⁴¹

El debate sobre el carácter de partido o movimiento que debería otorgarse a la Convergencia Socialista estuvo presente en la reunión de Madrid en febrero de 1983. Algunos sectores, particularmente el MAPU, eran favorables a la constitución de un nuevo partido sobre la base de la fusión de todos los sectores que estaban presentes. La idea de la constitución de una nueva organización política se fundamentaba en un diagnóstico que consideraba la crisis y disolución del PS como definitiva. A ello se sumaba la convicción de los integrantes del MAPU, en el sentido en que se daba por fracasado el proyecto original que le había dado vida como partido. Dicho proyecto se había fundamentado en la aspiración a concretar la existencia de una tercera 'fuerza proletaria' de

carácter marxista leninista, que permitiera la superación de la contradicción entre marxistas y cristianos. Esta tendencia refundacional orgánica de la izquierda fue derrotada en la reunión de Madrid en favor de la idea de que la Convergencia Socialista debe constituir una 'comunidad política' pluralista que se concierta orgánicamente, sobre la base de una estrategia política compartida: socialismo y democracia.⁴²

6. La Convergencia Socialista y su estrategia de desarrollo alternativa.

No es posible sostener la existencia de un proyecto económico o esquema de desarrollo único u oficial sustentado por la Convergencia Socialista. Sin embargo, existen numerosos trabajos, proyectos y estudios, ejecutados por especialistas del área económica que comparten los criterios políticos del movimiento de convergencia y que pueden ser considerados como representativos.

Uno de los objetivos esenciales que debe inspirar la 'economía política de la redemocratización' está constituido por la necesaria reconciliación entre economía y democracia, entre sociedad y economía. La necesidad de formalizar un proyecto económico de articulación progresiva entre economía y democracia se hace más urgente si se considera que los modelos económicos puestos en práctica a fin de resolver la crisis económica mundial se fundamentan en una reducción drástica del campo de la democracia. Elementos de la ideología monetarista que antes parecieron privativos de la dictadura chilena, como la relación causal que se establece entre estancamiento económico y democracia, hoy ganan terreno en otro tipo de sociedades. La necesidad impuesta por la dictadura en el sentido de demoler el "Estado desarrollista o de compromiso" encuentra eco hoy en las sociedades desarrolladas y se expresa en la exigencia de la ideología monetarista respecto de restricciones drásticas al "Estado de bienestar". La crisis económica generalizada en que se debate la sociedad chilena ha otorgado una relevancia singular a la necesidad de la redemocratización. Sin embargo, ésta se conceptualiza bajo formas diversas y con riesgos no despreciables.

El primero de ellos proviene del hecho de que posiblemente la democratización se ejecute en un contexto de crisis generalizada y que como resultado de ello sea imprescindible el congelamiento de un conjunto de reivindicaciones sociales y económicas reprimidas por el Estado autoritario. Esto puede originar un sentimiento social generalizado de frustración respecto de los resultados económicos y sociales de la democracia, que pueden ser incentivos por los sectores sociales de vocación política autoritaria, y la necesidad de un pacto social puede tener resultados inversos a los esperados, esencialmente desestabilizadores. El segundo riesgo proviene de lo que se ha denominado como la 'vía de argentinización' de la sociedad y que se refiere al período electoral y a la fase inicial del gobierno del Presidente Alfonsín. Consiste en un estallido incontrolado de demandas que puede favorecer una actitud maximalista de la izquierda, que no guarde relación con las posibilidades económicas reales del país. En este segundo caso el peligro de desestabilización de la democracia está también presente. La consideración de este doble riesgo debe ser considerado en la formulación de las estrategias económicas de la izquierda y se trata de "asumir la defensa de los sectores oprimidos de la sociedad en el cuadro de una política que asume al mismo tiempo, la necesidad de asegurar la estabilidad de la democracia".⁴³

Se constata que la experiencia reciente y pasada de la economía chilena demuestra que ni el libre cambismo y sus expresiones monetaristas, ni un modelo de desarrollo basado en sustituciones de exportaciones de marcadas tendencias proteccionistas, constituyen alternativa viable para la actual situación económica. Los problemas que la economía chilena plantea deben resolverse a partir de la elaboración de una estrategia de desarrollo de nuevo contenido. Respecto de ello, no es posible encontrar entre los esquemas económicos vigentes referencias ciertas, ni la literatura reciente que dió curso al debate sobre el 'nuevo desarrollo' ni los esquemas de planificación económica centralizada (socialismos reales) colaboran en esta búsqueda. Todo eso sumado a la reducción drástica del campo de la democracia (teóricamente destina-

da a superar la crisis), constituyen un elemento demostrativo de la crisis paradigmática que afecta a la economía del desarrollo.⁴⁴ Es necesario tener presente que la capacidad potencial de la economía chilena, su ubicación geográfica y su dotación factorial dificultan la posibilidad de un desarrollo sostenido que se fundamente en un esfuerzo puramente nacional. Aun cuando se ejecuten transformaciones estructurales significativas destinadas a una ampliación sustantiva del mercado interno, numerosos obstáculos al desarrollo mantendrían su persistencia. Dichos obstáculos también son válidos para una política indiscriminada de promoción de exportaciones como la utilizada por algunos países del sudeste asiático. Por otra parte, la economía chilena tampoco puede aspirar a transformarse en exportadora de productos industriales. En esta dirección la alternativa que se sugiere es la representada por una integración regional o subregional que facilite la liberalización de los mercados, la programación industrial y agraria y la colaboración en los esfuerzos tecnológicos.

Como respuesta a la situación planteada se establece la necesidad de distinguir tres dimensiones básicas en la política económica de la redemocratización. La primera de ellas está constituida por la necesidad de reorganización del Estado. Tanto las consecuencias sociales y políticas de la eliminación del papel del "Estado de compromiso" como la aplicación de la estrategia de privatización de la economía impuesta por la dictadura militar, han puesto en evidencia revalorativamente la necesidad de otorgar al Estado una función significativa en la regulación de los procesos económicos y un papel de compensación de las desigualdades sociales. Desde una perspectiva puramente económica la necesidad de intervención estatal en economías como la chilena se pone de manifiesto, si se considera que el sector privado liberado a la lógica del mercado no genera un proceso sostenido de inversión; la reciente experiencia monetarista no hace más que confirmar esta idea. El Estado es el único factor decisivo en las desigualdades creadas por las leyes del mercado a través de los mecanismos tributarios y las transferencias sociales concretadas por medio del

del gasto fiscal. Sin embargo, esto no puede hacerse sobre la base de olvidarse de las variables macroeconómicas. Por otra parte, el aumento del rol del Estado debe ir acompañado de una descentralización efectiva de la toma de decisiones. En dichas condiciones el Estado debe asumir el papel dominante en el proceso de reindustrialización de la economía nacional. La segunda dimensión es la referida a la apropiación social de la economía. Se trata de superar la relación puramente reivindicativa establecida entre sociedad y economía y ello implica la aparición de condiciones destinadas al incentivo de un sentimiento de responsabilidad colectiva respecto de la problemática del desarrollo. Esto debe expresarse consecuentemente en una compatibilización entre la economía de la producción y la economía del consumo y ello sólo puede operar eficientemente en la medida en que los trabajadores sean asociados a las orientaciones del proceso económico. Finalmente, el proceso de redemocratización debe estar inspirado en el nivel económico por el establecimiento de una estrategia de desarrollo pluralista. El pluralismo no debe ser pensado como una característica específica del sistema político; también debe ser traducida a niveles económicos. La noción de pluralismo económico debe expresarse tanto en las formas de propiedad, en la especialización internacional y/o opciones tecnológicas, como en las formas de regulación de la economía.⁴⁵ El conjunto de las concepciones teóricas descritas que establecen los principios generales de la reconciliación de la economía con la sociedad en Chile, intentan superar las contradicciones establecidas entre modelos teóricamente irreconciliables: economía planificada y economía de mercado; proteccionismo y libre cambio; industrialización sustitutiva y ventajas comparativas; capital extranjero y capital nacional.

7.6.1. Los principios de la reindustrialización de la economía.

En lo esencial la estrategia de desarrollo alternativo debe conducir a la creación de una estructura productiva que esté en condiciones de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad,

en un contexto de progresiva autonomía nacional. La experiencia que emana de la aplicación del modelo monetarista implementado por la dictadura ha constituido la negación de esta aspiración esencial. La creencia de que es posible depositar en las actividades de exportación la capacidad de financiamiento de los bienes de importación imprescindibles no sólo hace incierta la capacidad de la economía para satisfacer las necesidades nacionales, sino que también conduciría a una acentuación significativa y unilateral de la dependencia comercial. Esto último transformaría a la economía nacional en una estructura extraordinariamente sensible a las fluctuaciones de las coyunturas externas y del mercado internacional, o a las tendencias proteccionistas de sus mercados destinatarios. Se podría reproducir interminablemente la argumentación favorable a la industrialización nacional que tuvo lugar como consecuencia de los efectos de la crisis de los años treinta y por citar un ejemplo actual se podría considerar la tendencia proteccionista que la economía norteamericana intenta aplicar en contra del cobre chileno en el primer semestre de 1984. En este contexto no se trata de sostener un modelo de economía cerrada al mercado internacional, sino de una evaluación racional de sus ventajas comparativas en combinación con un fuerte proceso de industrialización. Industrialización, apertura externa, proteccionismo y ventajas comparativas, deben encontrar un equilibrio racional.

La industria manufacturera debe constituirse en el motor del desarrollo nacional, en donde este último es considerado como el aumento constante de la productividad social del trabajo que beneficie al conjunto de la sociedad.⁴⁶ El sector industrial constituye un elemento esencial en el cumplimiento del objetivo de un proceso de desarrollo sostenido que se expresa en el crecimiento del empleo y de la productividad. El sector agrícola en cambio presente mayores dificultades para el cumplimiento simultáneo de estas metas, particularmente por las restricciones que se derivan de la limitación de la superficie cultivable y, a largo plazo, con el agotamiento de las tierras disponibles. Ello contrasta con el hecho de que para el sector industrial no existen límites físicos

para el aumento de la productividad y de la producción, dependiendo de la capacidad financiera y tecnológica. Si el aumento de la productividad se traduce en disminuciones del empleo, éstas pueden ser revertidas en otros sectores industriales. Sin embargo la reindustrialización nacional debe ir acompañada de una gestión racional del proteccionismo. Es evidente que, de acuerdo a la experiencia más reciente de la economía chilena, la apertura irrestricta de la economía a la competencia internacional genera consecuencias negativas tanto para el desarrollo industrial nacional como para las actividades productivas en general. Para que el excedente de capital sea reinvertido en las actividades productivas parece necesario facilitar condiciones de rentabilidad efectivas, aún a riesgo de un nivel de ineficacia aceptable en la producción nacional, que no genere un bloqueo del crecimiento económico y del desarrollo. La aplicación de un principio de gestión racional de proteccionismo está llamado a resolver los efectos negativos de un proteccionismo indiscriminado, del cual se había beneficiado durante décadas la industrialización nacional. Dada la desigualdad de la capacidad tecnológica y financiera de Chile en relación a sus competidores internacionales es evidente que amplios sectores económicos necesitarán de medidas proteccionistas relativamente permanentes o prolongadas. "El criterio que debe regir una gestión racional del proteccionismo sería el siguiente: la asignación de capital al sector productivo protegido debe ser tal que el incremento del ingreso por hombre ocupado, consecuentemente, sea superior a aquel que se hubiera producido si el mismo capital huiese sido asignado al sector no protegido".⁴⁷

Tanto la industrialización como el crecimiento económico fundamentados en la demanda interna no pueden sustituir el crecimiento necesario de las exportaciones, de lo contrario esto exacerbaría la necesidad de financiación de las importaciones. La superación de los límites eventuales impuestos por el sector externo debería fundamentarse en una reducción drástica del componente importado y en un aumento considerable del esfuerzo de exportación. Todo ello debería ir acompañado por el establecimiento de un sistema financiero eficaz que permita superar la tendencia histórica de bajo

coeficiente de ahorro en la economía. Es evidente que la necesaria expansión del ahorro encuentra su contrapartida indispensable en una disminución del crecimiento del consumo y en el imprescindible mantenimiento de los equilibrios fundamentales de la economía. Si la crisis actual que vive la economía chilena, específicamente a partir del segundo semestre de 1981, puede conceptualizarse como un estrangulamiento externo de la economía, que va acompañado por una crisis del sistema financiero y que en conjunto genera la caída drástica de los niveles de ventas, empleo, producción, ingreso y demanda agregada, su resolución requiere indiscutiblemente de la distinción entre una política económica de emergencia y una nueva estrategia de desarrollo a largo plazo.

7.6.2. La política económica de emergencia.

El elemento esencial de la crisis de la economía chilena está constituido por el estrangulamiento externo,⁴⁸ que conduce a un débil equilibrio de la balanza comercial y a la necesidad de un servicio de la deuda externa equivalente a los ingresos por conceptos de exportaciones. En virtud de dicha situación se sugiere el establecimiento de las siguientes medidas: 1) renegociación de la deuda pública y privada sobre la base del aval del Estado para esta última. Dicha renegociación debería tener como objetivo la creación de un espacio a fin de utilizar los aumentos de los ingresos de las exportaciones en la reactivación de la economía. Si es necesario todo esto debería ir acompañado de un aumento de las importaciones a fin de favorecer la situación de los sectores sociales de más escasos recursos. Dicha renegociación no debería provocar una interrupción de los flujos financieros; 2) una moratoria general de las deudas financieras debería exigir a los grandes grupos económicos el cumplimiento de las obligaciones en las condiciones y plazos pactados. Esto debería ir acompañado de una reestructuración e intervención de la banca privada nacional, fortaleciendo un sistema de ahorro destinado a colaborar en el financiamiento de la reactivación económica. Los sectores empresariales beneficiados con la moratoria deberían estar obligados a transmitir los beneficios de la repactación de la deuda a sus clientes

bajo nuevas condiciones crediticias; 3) fortalecimiento de los mecanismos de regulación ,control e información del Estado sobre la economía. Esto debería traducirse en un control estricto de la política cambiaria, control de ingreso y precios tanto de exportadores como de importadores, aranceles diferenciados, ajuste periódico del tipo de cambio, impuestos progresivos tanto a la renta como a las utilidades de las empresas, fijación de precios para los productos de primera necesidad, intervención de los Administradores de Fondos de Pensiones, programas de créditos, manejo monetario prudente y modernización del sistema de información económica; 4) programa de reactivación económica, el cual debería concretarse por medio del establecimiento de un programa de obras públicas y de viviendas, créditos especiales para industrias de materiales de construcción, desarrollo de un sistema de ahorro popular destinado a favorecer el financiamiento de la compra de viviendas, regionalización y descentralización de obras públicas y de viviendas, desarrollo de un programa de construcciones de infraestructura (almacenamiento, transporte y comercialización de productos agropecuarios), créditos para pequeñas y medianas empresas agrícolas y regulación del gasto público a fin de evitar las eventuales tendencias inflacionarias de las medidas citadas.

Es evidente que la aplicación de las medidas descritas, que constituyen medidas de emergencia, deben ser implementadas a partir de un desarrollo gradual de la estrategia global de desarrollo (descrita en el punto 6 del presente capítulo). La ejecución del programa de emergencia debe crear las condiciones necesarias para superar la 'herencia económica' de la dictadura a fin de facilitar la ejecución del proceso de reindustrialización. Entre los componentes esenciales de dicha herencia es preciso destacar los siguientes: una exacerbada heterogeneidad de la estructura productiva, estructura de empleo insuficiente para absorber el crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo, radicalización de las desigualdades respecto de la distribución del ingreso, una deuda externa de 20.000 millones de dólares, drástica reducción de la capacidad productiva industrial, minera y agrícola, alto grado de insolvencia del sistema financiero, disminución de la

capacidad estatal reguladora de las inversiones y la 'cultura especulativa' en el nivel de la economía como resultado de la ideología monetarista. Por otra parte, el proceso de reindustrialización que constituiría la columna vertebral del esquema de desarrollo alternativo debería dar lugar a la puesta en práctica de tres líneas esenciales: industrialización sustitutiva de importaciones con alto efecto de multiplicación del empleo, industrialización asociada al incentivo de las ventajas comparativas y de exportación e industrialización de alta selectividad de acuerdos y programas con el capital extranjero.

NOTAS

1. Ver Eugenio Tironi y A. García, *"Cinco proposiciones para una interpretación del actual proceso político chileno"*, Sur, Santiago de Chile, 1977. Eugenio Tironi, *"Nuevo escenario y oposición"*, revista Análisis, nro. 24, junio de 1980, Santiago de Chile. Del mismo autor: *"Tres mitos en boga"*, Sur, Santiago de Chile, 1981, y *"La coyuntura. Un ensayo de interpretación"*, documento de trabajo, nro. 11, Sur, Santiago de Chile, 1982.
2. Tomás Moulian, *"Sobre la teoría de la renovación: notas introductorias"*, Encuentro de Chantilly I, Francia, 3 al 5 de septiembre de 1982; y *"Democracia y Socialismo en Chile"*, FLACSO, Santiago de Chile, 1983.
3. Para una crítica de esta interpretación se puede considerar el trabajo de Manuel Antonio Garreton, *"La política de ayer y de hoy"*, Encuentro de Chantilly I, Francia, 3 al 5 de septiembre de 1982.
4. Sobre este problema se pueden considerar los siguientes trabajos: Javier Martínez y Eugenio Tironi, *"Clase obrera y modelo económico (un estudio del peso y la estructura del proletariado en Chile, 1973-1980)"*, manuscrito fotocopiado inédito. De los mismos autores: *"La clase obrera en el nuevo estilo de desarrollo: un enfoque estructural"*, Revista Mexicana de Sociología, año XLIV, vol. XLIV, nro.2, abril-junio de 1982.
Javier Martínez, Eduardo Muñoz, Eugenio Tironi y Eduardo Valenzuela, *"Notas preliminares para el estudio de las clases medias en la sociedad chilena actual"*, documento de trabajo nro. 13, Centro de Documentación Sur, Santiago de Chile, agosto de 1982.
Javier Martínez y Eugenio Tironi, *"Materiales para el Estudio de las clases medias en la sociedad chilena 1960-1980"*, documento de trabajo, nro.21, Centro de Documentación Sur, Santiago de Chile, diciembre de 1982.
5. Respecto del contenido del modelo económico, ver capítulo IV del presente libro.
6. Eugenio Tironi, *"Acerca de las bases sociales de una alternativa socialista de democratización nacional"*, trabajo fotocopiado sin publicar, Santiago de Chile, mayo de 1983.
7. Carlos Ominami, *"Notas sobre marxismo y socialismo, hoy día"*, encuentro de Chantilly II, 2 al 4 de septiembre de 1983.
8. Tomás Moulian, *"Sobre la teoría de la renovación: notas introductorias"*, Encuentro de Chantilly I, 3 al 5 de septiembre de 1982.
9. Tomás Moulian, trabajo anteriormente citado.
10. Tomás Moulian, trabajo anteriormente citado, pág. 4.
11. Alejandro Rojas, *"Contra el reduccionismo de clase"*, Encuentro de Chantilly I, 3 al 5 de septiembre de 1982.

12. Carlos Ominami, *"Notas sobre marxismo y socialismo, hoy día"*, Encuentro de Chantilly II, 2 al 4 de septiembre de 1983.
13. Carlos Ominami, trabajo citado, pág. 11.
14. Osvaldo Fernández, *"Crítica, tradición y práctica teórica"*, Encuentro de Chantilly II, 2 al 3 de septiembre de 1983.
15. Cecilia Montero, *"Las condiciones para una acción colectiva"* Encuentro de Chantilly I, 3 al 5 de septiembre de 1982.
16. Lelio Basso, *"Carta de invitación al seminario"*, Roma, 22 de septiembre de 1983.
17. Raúl Ampuero, *"Informe introductivo (I) al seminario de Ariccia"*, Italia, marzo de 1979.
18. Raúl Ampuero, texto citado, pág. 3.
19. Comunicado de prensa del Seminario de Ariccia, Roma, 12 de marzo de 1979.
20. Texto anteriormente citado, pág. 2.
21. Texto anteriormente citado, pág. 3. Una versión más detallada de este tipo de problemática se encuentra en el documento presentado al seminario por Rodrigo González, *"Un nuevo proyecto democrático para Chile"*, policopiado, sin fecha.
22. Raúl Ampuero, *"Informe introductivo (II)"*, 10 de enero de 1980.
23. Raúl Ampuero, texto citado, pág. 5.
24. Acta de Ariccia, pág. 1, Roma, 13 de enero de 1980.
25. Grupo por la Convergencia Socialista, *"Convergencia Socialista: Fundamentos de una propuesta"*, Santiago de Chile, agosto de 1980.
26. Documento citado, pág. 1.
27. Documento citado, pág. 4.
28. Documento citado, pág. 14.
29. Documento citado, pág. 17.
30. Grupo por la Convergencia Socialista, *"Convergencia socialista: un horizonte democrático para Chile"*, Santiago de Chile, agosto de 1980.
31. Para un estudio sistemático de estos problemas debe considerarse el libro de Jorge Arrate, *"El socialismo chileno, rescate y renovación"*, Ediciones Instituto para el Nuevo Chile, Rotterdam, abril de 1983. Para una consideración más detallada del desarrollo del Grupo por la Convergencia se puede considerar el *"Informe del comité de iniciativa"*, de marzo de 1982. También se puede ver la versión de la intervención de R.L. en el acto inaugural del Encuentro de la Convergencia Socialista: *"Chile en los ochenta"*, del 17 de junio de 1983.
32. Reunión MAPU, MAPU-OC e Izquierda Cristiana, Holanda, 18 y 19 de enero de 1982.

33. Documento citado, pág. 3.
34. Secretariado de la Convergencia Socialista, *"Nuestra propuesta: Unidad y Solidaridad frente a la crisis nacional"*, Santiago de Chile, 1 de mayo de 1982. Antecedentes de dichos planteamientos pueden encontrarse en el documento, *"Reunión de Convergencia MAPU, Izquierda Cristiana, MAPU-OC, Acta interna: la cuestión de la izquierda y el proceso de México"*, Berlín, 25-26 de febrero de 1982.
35. Secretariado de la Convergencia Socialista, *"Nuestra propuesta: Unidad y Solidaridad frente a la crisis nacional"*, 1 de mayo de 1982, pág. 4.
36. Sobre esto se deben considerar los siguientes documentos: 1) *"Acta y evaluación del encuentro de Milán"*, 2) *"Resolución del encuentro de Milán"* y 3) *"Por la Convergencia, Documento de Milán"*, Milán, 18 al 20 de junio de 1982.
37. Secretariado por la Convergencia Socialista, *"Nadie lo hará por nosotros! (propuesta política del Secretariado por la Convergencia Socialista)"*, pág. 5, Santiago de Chile, septiembre de 1982.
38. Documento citado, pág. 4. Sobre esto también se puede considerar el *"Informe político del Secretariado de la Convergencia Socialista"*, Santiago de Chile, 1982.
39. Secretariado político de la Convergencia Socialista, *"Proposiciones para el socialismo chileno"*, mayo de 1983.
40. Documento citado, pág. 10.
41. Raúl Ampuero, *"Rumbo y tareas de la convergencia. Relación introductiva para la reunión del comité de coordinación"*, Madrid 24-26 de febrero de 1983, pág. 4. Se debe considerar también sobre la reunión de Madrid el *"Informe preliminar del movimiento de Convergencia Socialista"*, Comité Ejecutivo.
42. Partido Izquierda Cristiana, Rama Exterior, Circular nro.3, 27 de marzo de 1983, pág. 5.
43. Carlos Ominami, *"Hacia una economía política de la redemocratización (notas preliminares)"*, policopiado, marzo de 1983, pág. 2 y 3.
44. Alexis Guardia, Mario Lanzarotti y Carlos Ominami, *"Principios de estrategia económica alternativa"*, Encuentro de Chantilly I, 3 al 5 de septiembre, Francia, 1982.
45. Taller de economía de Vector, *"Papel del Estado como promotor y regulador del proceso de desarrollo económico"*, policopiado, Santiago de Chile, marzo de 1983. Eugenio Laera, *"Ciencia y desarrollo para el desarrollo nacional"*, policopiado, Santiago de Chile, mayo de 1983.
46. Alexis Guardia, Mario Lanzarotti y Carlos Ominami, *"Principios de estrategia económica alternativa"*, Encuentro de Chantilly I, 3 al 5 de septiembre, Francia, 1982. Mariana Schkolnik, *"Bases para una economía democrática"*, mimeografiado, París, agosto de 1983. Gonzalo Martner, *"El contexto internacional de la redemocratización"*, Viena, agosto de 1983.

47. Alexis Guardia, Mario Lanza­rotti y Carlos Ominami, obra citada, pág. 11.
48. Sobre este aspecto y el referido a la elaboración de un programa de Emer­gencia alternativo a la política económica de la dictadura se debe considerar el trabajo de Humberto Vega, *"Bases de un programa económico para la Democracia y el Socialismo"*, mimeografiado, Santiago de Chile, 26 de enero de 1983.

CAPITULO OCTAVO

Resumen y conclusiones.

El establecimiento de dictaduras militares y la generalización de los procesos de autoritarismo estatal de nuevo tipo han dominado el escenario político de América Latina desde la segunda mitad de la década de los sesenta. Ellos fueron iniciados con la dictadura militar de Brasil en 1964 y continuaron con Bolivia en 1972, Chile en 1973, Argentina en 1976 y nuevamente Bolivia en 1980. Una de las características comunes de dichos regímenes es su contradicción fundamental con los proyectos nacionalistas que habían fundamentado su existencia sobre un 'modelo de desarrollo hacia adentro' basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Ella era considerada esencial en la obtención de un tipo de desarrollo capitalista industrial autosustentado. Con la fabricación interna de los bienes manufacturados que tradicionalmente se obtenían a partir de las importaciones, sería posible superar la dependencia económica creada por la vieja división internacional del trabajo. El tipo de desarrollo a que la industrialización daría curso se materializaría en el establecimiento de una política de ampliación progresiva del mercado interno, lo que favorecería una conformación económico-social similar a las de las economías capitalistas desarrolladas. Este esquema de desarrollo, que tuvo lugar en el período de 1930 a 1960, implicó una ruptura inicial con el viejo Estado oligárquico que había favorecido el modelo de economía primario exportador.

En este contexto, las dictaduras militares expresan un intento de reestructuración global del funcionamiento del capitalismo dependiente. Ello encuentra su causa explicativa en la crisis y estancamiento del patrón de desarrollo fundamentado en la industrialización sustitutiva. Dicha crisis expresa, desde una óptica de funcionamiento capitalista de la economía, la necesidad de un nuevo modelo de acumulación de capital. Esto dio

origen al establecimiento de un nuevo patrón de desarrollo que fue genéricamente designado como 'patrón de desarrollo asociado'. Si se considera el carácter que asume el desarrollo económico social implementado por los Estados autoritarios, es necesario distinguir al interior de dicho concepto la existencia de dos patrones diversos. En primer lugar, está lo que se designa como 'modelo de desarrollo capitalista dependiente industrializado' y que corresponde a la estrategia de desarrollo implementada por la dictadura militar de Brasil desde 1964. El establece un patrón de acumulación de capital que se concentra sectorialmente en las ramas denominadas 'dinámicas' correspondientes a los bienes de consumo duraderos, bienes de capital y bienes intermedios. Esto constituye un proceso de sustitución de importaciones en nuevos sectores con capital extranjero. Es evidente que este modelo de desarrollo constituye una alternativa que busca superar la crisis y estancamiento del esquema precedente a partir de la profundización de la industrialización misma. Es un esquema de profundización del desarrollo capitalista que busca establecer una continuidad con el desarrollo industrial abierto por el proceso de industrialización sustitutiva. En segundo lugar, existe lo que podríamos designar como 'modelo primario exportador altamente diversificado', que corresponde al implementado por la dictadura militar en Chile en el período 1973-1981. El se caracteriza esencialmente por el abandono del supuesto que la industrialización constituye el eje dinámico del desarrollo. El rol dinámico de la industrialización es sustituido por un esquema económico que privilegia la exportación de productos primarios altamente diversificados y se fundamenta en el principio de las ventajas comparativas de la economía a nivel mundial. Ello provoca el desplazamiento del eje de la acumulación desde el mercado interno hacia el mercado internacional.

Ambas variantes del patrón de desarrollo asociado son las que dinamizan el proceso general de reestructuración del capitalismo dependiente y constituyen un rechazo de la alternativa implementada por las fracciones de la burguesía nacional ligada al mercado interno. Esto establece como premisa la necesidad de una reor-

ganización general de la estructura y de las relaciones de clases que habían caracterizado la fase precedente (industrialización sustitutiva) del desarrollo del capitalismo dependiente. En la escena política dichos procesos conducen a la caducidad de la democracia parlamentaria y al establecimiento de un modelo político que adquiere la forma de un 'Estado de excepción permanente', que inicialmente es designado como 'Estado de Seguridad Nacional'.

El conjunto de estos procesos han dado como resultado un amplio debate referido a la interpretación sociológico-política del cambio de patrón de desarrollo. De manera inicial, se ubicó la interpretación del proceso general de reestructuración en un marco teórico que se designó como 'desarrollo del capitalismo tardío'. Ello tenía como objetivo el favorecer el estudio comparativo de formas históricas de 'capitalismo tardío' que facilitara el desarrollo de conclusiones teóricas, conducentes a interpretar la intervención militar como la constitución de un Estado fascista. Ello sumado a un amplio debate político referido al carácter de la hegemonía burguesa puso en el centro de la discusión el carácter que asumía el Estado autoritario. El nuevo escenario político a que daban curso los regímenes militares replantearon las consideraciones teóricas sobre el Estado. Desde una perspectiva estructural las formas estatales autoritarias pueden ser consideradas como el resultado de la desestabilización de la estructura de dominación que se expresa en la crisis del modelo político del populismo, que había constituido la expresión política de la industrialización. En el caso chileno, la desestabilización debe ser entendida como el resultado de un intento por articular un modelo socialista como alternativa al estancamiento de la industrialización. La amplitud y diversidad de las interpretaciones sobre el carácter de las dictaduras militares expresa la dificultad de conceptualizar el nuevo proceso de relaciones sociales a que ella da curso.

Dicha diversidad se materializó en la formulación de cuatro alternativas teórico políticas para interpretar el Estado auto-

ritario: Estado burocrático autoritario, Estado de excepción bajo la forma de Estado militar, dictadura militar como resultado del conflicto redistributivo y fascismo dependiente. La primera de ellas ponía de relieve el hecho de que el surgimiento de nuevos patrones de dominación autoritaria deben distinguirse radicalmente de otras formas de autoritarismo de Estado (fascismo, populismo, autoritarismo tradicional, autoritarismo oligárquico, etc.). La emergencia de la forma de Estado denominada Estado burocrático autoritario sería el resultado de procesos de creciente participación política de los sectores sociales que pueden constituir una alternativa extra-sistema frente al capitalismo dependiente. Dicha participación política cercaría al Estado, presionando constantemente en favor de una redistribución de ingresos. Dicho cerco es expresado bajo el concepto de 'pretorianismo de masas'. En esta perspectiva el establecimiento del Estado burocrático autoritario constituye la respuesta lógica a dicha situación y una alternativa a la crisis económica, representada por el intento de profundización del desarrollo capitalista. Si por este último se entiende la profundización de la industrialización, es necesario concluir que dicha interpretación limita su validez sólo al caso de la dictadura brasileña.

La segunda interpretación propone caracterizar la dictadura militar establecida en Chile en septiembre de 1973, como una contrarrevolución burguesa ejecutada por un Estado que corresponde al tipo general de Estado capitalista y que asume las características de un Estado de excepción bajo la forma de una dictadura militar. Esta interpretación está destinada a subrayar la ausencia de una teoría general explicativa del carácter que asume el Estado capitalista en las sociedades de capitalismo periférico. Frente a dicha situación se propone la utilización provisional de dicho concepto, a fin de constituirlo en alternativa frente a la interpretación dominante de Estado fascista. Desde un punto de vista político, dicha interpretación busca alimentar teóricamente las alternativas del MIR, que conceptualizó el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) como la expresión más radical de los 'movimientos nacional populistas desarrollista'. Ella aspira

a constituir una alternativa frente al reformismo representado por la política del PC de Chile.

La tercera interpretación está representada por los análisis de Raúl Prebisch y la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL). Ella explica el proceso de militarización de los Estados latinoamericanos a partir de la crisis que crea la pugna redistributiva del ingreso. La presión permanente sobre la redistribución de ingresos afectaría negativamente los índices necesarios de acumulación de capital. La respuesta autoritaria tendría como función el restablecimiento de índices satisfactorios de acumulación de capital. En este contexto habría que distinguir la existencia de dos grandes ciclos en el desarrollo del capitalismo periférico. El primero de ellos estaría constituido por los requerimientos de industrialización destinado a fortalecer y ampliar el mercado interno. Ello debería dar como resultado la constitución de un patrón de consumo compatible con las exigencias de realización de la plusvalía a fin de posibilitar la acumulación de capital del sector industrial. Este período corresponde directamente con la ampliación del proceso democrático. El segundo ciclo se inicia con los efectos negativos de las políticas de redistribución de ingreso sobre los procesos de acumulación de capital y corresponde con el período de autoritarismo estatal. Esta interpretación busca privilegiar políticamente las alternativas de reconstitución del frente social y político que había posibilitado el proceso de industrialización precedente.

Finalmente, la interpretación que designa la dictadura militar como 'Estado fascista' busca privilegiar la constitución de un 'frente antifascista' que reuna en su seno a todas las fuerzas políticas antidictatoriales. Como ya lo reiteramos en los capítulos correspondientes, el concepto de fascismo es utilizado como la 'dictadura terrorista del capital financiero', de acuerdo con la formulación de George Dimitrov en el VII Congreso de la Internacional Comunista en 1935. Esta interpretación constituyó durante largos años la caracterización predominante de la

dictadura militar y fue específicamente formulada por el Partido Comunista de Chile. Sin embargo es necesario advertir que en ella también se intenta, por lo menos en el nivel verbal dar cuenta de que se trata de un fascismo en países de capitalismo dependiente. En esta dirección las designaciones del régimen militar que se proponen son: fascismo dependiente, colonial fascismo, fascismo militar, fascismo atípico, fascismo militar tecnocrático, neofascismo, etc.

El conjunto de estas interpretaciones intentan conceptualizar el tipo de Estado que se constituye como resultado del establecimiento de la dictadura militar y que asume a la vez, un proceso general de reestructuración monetarista de las relaciones entre economía y política. Sin embargo ello, desde el punto vista teórico, no da suficientemente cuenta de la distinción necesaria que debe ser establecida entre régimen político y Estado. Ello es imprescindible si se aspira a superar las visiones 'funcionales' del Estado que distorsionaron el análisis político de la oposición. Dicha distinción se fundamenta en el hecho de que el Estado se constituye sobre una autonomía relativa respecto de la clase dominante. El régimen político en cambio lo hace por referencia a las clases y a las fracciones de clases. Es evidente que las concepciones instrumentalistas no dan cuenta del carácter complejo que asume la relación entre Estado y régimen político. Lo que el tipo de Estado privilegia en su constitución es una manera particular de relación con el capital y régimen político lo hace en relación con las clases y fracciones de clases que sustentaron a dicho Estado.

En el caso de la dictadura chilena es necesario abandonar la idea de que el Estado es una suerte de condensación de fuerzas sociales. De otra manera, no sería posible explicar porque la dictadura militar a partir de abril de 1975 asume un modelo monetarista de reestructuración del capitalismo dependiente que se hace desde el Estado y que contradice materialmente a vastos sectores empresariales tradicionales que habían constituido un apoyo esencial en su surgimiento.

Si se observa retrospectivamente el tipo de relación que se establece entre desarrollo y formas de Estado en Chile, es posible sostener que cada patrón de desarrollo es estimulado por una forma específica de Estado. Es el 'Estado de compromiso' el que acompaña y estimula el desarrollo de la industrialización que se fundamenta en el patrón de industrialización sustitutiva de importaciones. El Estado autoritario de corte monetarista es el que estimula y acompaña el proceso general de reestructuración capitalista en Chile en el período 1973-1981 y el que crea las condiciones estructurales para el establecimiento del modelo 'primario exprotador altamente diversificado'. Es evidente que el fracaso de dicho modelo a partir del segundo semestre de 1981 crea las condiciones para la alteración de elementos substanciales que constitúan el Estado autoritario. Esta crisis asume la forma de una contradicción entre las necesidades objetivas de reproducción del capital y las relaciones sociales subyacentes. Dicha contradicción es el resultado necesario de la forma que asume el conflicto social del desarrollo. Por cierto, el Estado a pesar de las relaciones que mantiene con las clases conserva una gran autonomía y que se expresa incluso en el abandono de los grupos sociales que lo sustentan. Es evidente que la historia del desarrollo de Chile al igual que en otros países de capitalismo dependiente es ilegible si no se considera el rol del Estado. La sociedad chilena es impensable sin la consideración de la lógica del Estado. Ello no significa que la naturaleza de clases del Estado sea suficientemente evidente. Su rol protagónico proviene del hecho de que él se constituye en generador y organizador de clases sociales. El Estado es en varios momentos la vanguardia del capitalismo dependiente y su productor esencial. El se constituye no sólo en garante de las relaciones capitalistas de producción sino en un productor directo de dichas relaciones. El Estado aparece sustituyendo parte significativa del rol de las clases capitalistas y su naturaleza específica depende mucho más de su forma de inserción en la economía mundial que de la relación de fuerzas de clases internas de la sociedad. Las clases sociales internas juegan un rol más determinante en la constitución del régimen político que en la del Esta-

do. Dicho proceso es lo que economista María Tavares designa como 'solidaridad orgánica entre el Estado y el capitalismo internacional'. De allí que si se observa el proceso de reestructuración monetarista en Chile en el período de 1973-1981, es posible sostener que la mayor dificultad de la dictadura no provino de la constitución del Estado autoritario sino de la formalización de un régimen político. Las dificultades de la constitución de un régimen político (proceso de institutucionalización política de las transformaciones estructurales implementadas por la reestructuración monetarista) se han visto más acentuadas a partir del fracaso del modelo monetarista verificado a partir de 1981.

El establecimiento de la dictadura militar y su proyecto de reestructuración monetarista puso fin a la continuidad relativa de una política económica que desde la crisis de los años treinta se habían fundamentado en la industrialización. Dicha ruptura se materializó a partir de la instauración de un esquema de libre comercio de inspiración monetarista. Con ello se intentará resolver la crisis y estancamiento del patrón de desarrollo de industrialización sustitutiva y paralelamente eliminar las condiciones estructurales favorables al 'advenimiento del comunismo'. La crisis que se deriva del agotamiento del proceso de industrialización se expresa al término de la década del sesenta en una incapacidad creciente para mantener la dinámica del desarrollo y la repartición equitativa de sus frutos. En el nivel del Estado ello se expresa en la imposibilidad de mantener la estabilidad del régimen político que por medio del Estado de compromiso, había acompañado a la industrialización. Ello era el resultado de la ruptura del pacto social de la industrialización. La estabilidad del régimen político en alguna medida se explica por el rol predominante jugado por el centro político del Estado de compromiso. Los resultados de la crisis de los años treinta adquirieron expresión en el escenario político a través del desplazamiento de la hegemonía de los sectores tradicionales en favro del centro político representado específicamente hasta 1952 por el Partido Radical. El condujo a la redefi-

nición de las funciones políticas y las posibilidades de influencia directa en el ejercicio del poder por parte de las clases dominantes tradicionales. Ellas deben revalorar la escena parlamentaria como alternativa para disminuir el 'radicalismo' de los programas reformistas de centro. Ellas deben aceptar condiciones de participación política subordinada al centro. Por otra parte, la industrialización y el centrismo político es acompañado de una participación progresiva de los sectores populares en el sistema político. La derecha sólo logra superar el 'bloqueo defensivo' que le había sido impuesto por el proceso de industrialización con la elección presidencial en 1958. En el período de 1964-1973 retornará el citado bloqueo defensivo que logrará superar sólo con el golpe de Estado de 1973.

Es en el período de 1964-1973 en que se acentúa la inestabilidad del régimen político. En estos casi diez años que se inician con la victoria presidencial de la DC y que termina con el derrocamiento del gobierno de la UP, se somete la sociedad chilena a la aplicación de dos esquemas diferentes de desarrollo. Ellos están constituidos sucesivamente por el intento de modernización de la economía capitalista dependiente conocido como 'revolución en libertad' y por la 'vía chilena al socialismo'. Ambos intentan resolver el estancamiento del desarrollo económico generado por agotamiento del esquema de industrialización precedente. Ambos participan de una visión estructuralista de la resolución de dicha crisis; las transformaciones estructurales del sistema económico eran consideradas indispensables. Elló expresó como resultado, cambios esenciales en el nivel del Estado y régimen político que concluyeron con la ruptura del sistema social de sustentación del Estado de compromiso. El programa económico de transformaciones estructurales implementado por el gobierno de la DC desestabiliza el principio de negociación que había fundamentado la articulación de las políticas centristas con la derecha tradicional. Su intento por modernizar el sector industrial le restan el apoyo político que le había otorgado la burguesía industrial en las elecciones presidenciales de 1964. La implementación del programa de reforma agraria generó una ruptura frontal

con los sectores sociales que constituirán la oligarquía agraria. En este contexto el programa político y económico del gobierno de la Unidad Popular, en su intento por favorecer cambios estructurales para la transición al socialismo, no hizo más que acentuar radicalmente la inestabilidad del Estado de compromiso iniciada por el programa de modernización del período de 1964-1970.

Las transformaciones estructurales implementadas por ambas alternativas fueron drásticamente alteradas por la política económica de la dictadura militar. La crítica esencial que ella desarrolló para abrir el espacio ideológico necesario a la implementación del modelo primario exportador altamente diversificado, se concretó en la industrialización. La industrialización y la presencia del sistema democrático constituirían la base explicativa del estancamiento de la economía chilena. El desarrollo de un tipo de industrialización deficiente habría favorecido el surgimiento de una burguesía industrial parasitaria, que debía su existencia al proteccionismo exacerbado implementado por el Estado desarrollista. A ello se sumaban los efectos negativos de la presencia del sistema democrático, que había creado condiciones políticas favorables para el desarrollo de un vasto movimiento social que presionaría constantemente sobre el proceso de acumulación de capital. La industrialización no sólo había dado como resultado un tipo de desarrollo insuficiente, sino que había posibilitado las condiciones estructurales necesarias para el surgimiento de un proletariado industrial de carácter nacional. Este último hecho es considerado por los ideólogos de la dictadura como la causa material de la presencia del 'peligro comunista'. A fin de resolver dicho riesgo, era indispensable sustituir el rol protagónico que la industrialización había jugado en el desarrollo nacional en los últimos cuarenta años. La nueva política económica debería dar curso a un proceso general de desindustrialización de la economía que facilitaría la extinción de la clase obrera, a ello debía sumarse los 'efectos positivos' de la erradicación del sistema democrático. Esto exigía también, el abandono de aspectos esenciales referidos a la conceptualización del desarrollo. Se debía abandonar la idea de que el desarrollo

equivalía a la industrialización. El desarrollo debería ser conceptualizado como el crecimiento económico y él podía ser logrado a través del fortalecimiento de la capacidad exportadora de la economía en aquellos sectores en los cuales ella evidenciara mayores ventajas comparativas en el mercado mundial.

De allí que la política económica inicial adoptada por el nuevo Estado autoritario se articulara sobre la base de dos objetivos esenciales: control y regulación de los desequilibrios macroeconómicos (inflación y desequilibrio de la balanza de pagos) y reorganización del marco institucional del funcionamiento capitalista de la economía gravemente afectado por la experiencia de la UP (1970-1973). La concreción del nuevo esquema de desarrollo se materializó a través de la utilización de cinco variables: liberalización del mercado como condición previa para la constitución del sistema de precios en el mecanismo esencial de asignación de los recursos del sistema económico, apertura irrestricta de la economía al mercado mundial, constitución de un mercado de capitales privados a fin de favorecer la capacidad de ahorro del sistema económico e intervención del mercado de trabajo a fin de provocar un decrecimiento de los salarios, proporcional al aumento de las exportaciones. Esto conduciría al reemplazo del patrón de desarrollo y el esquema de acumulación de capital que se había fundamentado en la industrialización por un patrón de desarrollo primario exportador altamente modernizado y diversificado. El aprovecharía las ventajas comparativas de la economía a partir de una nueva forma de inserción en el mercado mundial. El nuevo modelo funciona con un criterio esencialmente desindustrializador de la economía, baste recordar que la participación del sector industrial en el PGB pasó de un 29,5% en 1974 a un 20,7% en 1980. Esta última cifra es inferior a la verificada en 1955.

La implementación de esta política económica trae como resultado un cambio substancial en las funciones económicas y políticas del Estado. La minimización de la influencia del Estado en la actividad económica aparece como un resultado directo de

la lógica de la privatización generalizada de la economía. El debe renunciar la rol predominante que había obtenido en el desarrollo y abandonar su función de regulación tanto de los procesos económicos como de las desigualdades sociales. Según la ortodoxia monetarista él debe limitar su papel al mantenimiento del orden social, servicios públicos (defensa) y sustentación de las actividades del sector privado de la economía.

La aplicación de dicha política económica condujo a una degradación progresiva de la doctrina propiamente militar que había servido de fundamento ideológico al golpe de Estado: la doctrina de la Seguridad Nacional. Ella pierde gradualmente su carácter de ideología de Estado y es sustituida por la creciente influencia de la ideología del mercado. Ello explica el fracaso de los intentos por transformar la ideología de la Seguridad Nacional en el principio cohesionador y neutralizador de las crecientes desigualdades sociales generadas por el modelo económico. La articulación ejercida en el nivel del Estado tanto por la participación militar como por la ideología económica monetarista, han dado como resultado transformaciones esenciales en su esquema de organización política precedente. Ellas están referidas a cambios substanciales en la forma de concreción del ejercicio del poder y de su materialización normativa. Estas transformaciones afectan radicalmente la estructura precedente de organización del Estado y tiene como resultado el cambio de las funciones propiamente políticas de éste. La función de coerción es predominante dentro de sus nuevas funciones y excluye toda forma de legitimación de sus actividades. De allí que sea posible afirmar que el régimen político, vale decir el sistema de relaciones establecido por el Estado respecto de la sociedad civil, se ha concretado por medio de mecanismos puros de coerción, dominación y represión. El carece de todo componente que permita afirmar la existencia de hegemonía, vale decir un sistema de dominación legítimo y aceptado por la sociedad civil.

El establecimiento de un tipo de Estado garante de la reorganización monetarista de la economía exigió la erradicación de

los principios que habían sostenido la legitimidad del Estado de compromiso. Se requiere la eliminación de la naturaleza pública e igualitarista que había sostenido a dicho Estado, el término de su naturaleza liberal representativa consagrada por la Constitución política del Estado desde 1925. Esto último será sustituido por una concepción no representativa de la política que postula la soberanía absoluta del Estado sobre la sociedad civil. Sólo el Estado tiene derecho de determinar el contenido de conceptos como 'bien común' o 'intereses generales' de la nación. El contenido tradicional del concepto de libertad imperante en la sociedad chilena será reemplazado y reducido al concepto de libertad económica, y la libertad de los individuos en la sociedad será conceptualizada como el ejercicio de su soberanía en términos de consumidores.

En el período inicial de la dictadura, el problema de su legitimidad política no presenta dificultades particulares. Ello se explica porque tanto las FF.AA. como los sectores sociales que sustentan la intervención militar del Estado, consideraban que ella constituía una oportunidad histórica para materializar una reestructuración global del sistema capitalista dependiente y/o situación de emergencia que facilitaba la resolución de la crisis que había generado la Unidad Popular (Democracia Cristiana). Dicha situación se fortalecía aún más por el rol de la ideología anticomunista y por la adhesión pasiva de vastos sectores sociales. En la medida en que se concreta el modelo económico y particularmente la política de 'tratamiento intensivo de la economía' se explicita la naturaleza excluyente de dicha política. La implementación del modelo de reestructuración monetarista pone fin a la fase inicial propiamente reactiva y 'contrarrevolucionaria' del régimen y abre progresivamente la discusión referida a su legitimidad.

Lo anterior conduce a los intentos de institucionalización de la dictadura que se expresa en la constitución de un régimen político. Este equivale a la formulación de un sistema de relaciones entre Estado y sociedad civil, que posibilite la transfor-

mación de un Estado autoritario no normativo en una forma de dictadura militar que apele a la construcción de su propia legitimidad. La institucionalización es considerada pro los partidarios del gobierno como la garantía jurídico-política de la reproducción del modelo económico adoptado.

El fracaso de los esfuerzos de la oposición por derrocar el Estado autoritario dió curso a un amplio proceso de desestabilización ideológica y de crisis de los supuestos teóricos que habían sustentado su actividad política. Ello se reflejó en la puesta en discusión inicial sobre la legitimidad y eficiencia teórica del marxismo para explicar la crisis y desarrollo del capitalismo dependiente. Pero las dudas fundamentales fueron vinculadas a su capacidad como teoría profundizadora de la democracia alternativa al terrorismo de Estado representado por la dictadura. Ello era tanto el resultado del impacto político de las transformaciones estructurales monetarista de la sociedad como, del rechazo de las formas de autoritarismo que reducen la sociedad a la identificación entre Estado y partido: el socialismo real. Ello explica el debate referido a la necesidad de abandono o reformulación de la forma clásica que había sido asumido el marxismo y obliga a un esfuerzo de identificación de los distintos tipos y formas de marxismos que han sido consumido por la sociedad chilena.

Es evidente que un tipo de lectura del marxismo que pone énfasis en una perspectiva sociológico-histórica dificulta la integración necesaria de tres dimensiones fundamentales de éste: la reflexión teórica general, su desarrollo como construcción teórica que evidencia la profundidad de una sistematización designada con la categoría de ciencia y, el nivel de la práctica política, en la medida en que esta asume el objetivo de transformación y sustitución del capitalismo dependiente. Por lo menos este es uno de los problemas metodológicos fundamentales que deberían ser resueltos en cualquiera profundización de la problemática señalada.

Por otra parte es necesario sugerir explícitamente la pluralidad teórica, política y sistemática que encierra el concepto 'marxismo latinoamericano', que en el capítulo correspondiente del presente libro, he tratado de identificar a partir de su vinculación con la problemática del desarrollo en América Latina. No es suficiente asumir sólo la diversidad que hoy representa, sino también considerar la que ha estado presente en su desarrollo histórico. No es posible concluir que sólo en virtud de la crisis política de la izquierda derivada de la presencia del Estado autoritario se pone de relieve su diversidad teórica, ella ha estado presente también en los períodos en que no se cuestionaba su legitimidad teórica, dicha diversidad debe también ser revalorada y sistematizada.

El conjunto de estas problemáticas plantea la necesidad ineludible de poner énfasis en una perspectiva de estudio que fundamente el análisis y la investigación histórica referida a la forma en que ha sido conceptualizado el marxismo en Chile. Ello en mi opinión debe superar la práctica frecuente caracterizada por el hecho de que la formulación de una estrategia política debe preceder necesariamente al análisis histórico. Generalmente se ha recurrido al análisis histórico en función de legitimar una perspectiva política previamente formulada. Probablemente la primera dificultad metodológica que la superación de esta dificultad presenta se vincula a la disociación entre el tiempo de la investigación y la urgencia ineludible de la formulación política. La segunda dificultad se relaciona con la necesidad de superar y abandonar el sociologismo pseudo-historicista, que en ausencia de la investigación histórica transforma la especulación general y abstracta en principio de explicación histórica.

La oposición política que debe enfrentar al Estado dictatorial se constituye en el período de 1973-1981, a partir de las organizaciones políticas que habían formado la Unidad Popular. A ellos se agrega la posterior incorporación de la Democracia Cristiana. Este último partido constituye un punto de referencia necesario en los esfuerzos de la izquierda por sumarlo a la opo-

sición y construir un amplio frente antifascista. La Democracia Cristiana sustentó de manera inicial el golpe de Estado adoptando posteriormente el rol de una semi-oposición-apoyo. Ello constituye una decisión política de no transformarse en partícipe oficial del régimen que se instaura. Dicha posición se explica tanto por su protagonismo político en el bloque de la oposición que creó las condiciones políticas para el derrocamiento del gobierno de Allende, como por la polémica interna a que dicha participación abre curso. La Democracia Cristiana considera la intervención militar como esencialmente transitoria y se reconoce a sí misma como la heredera lógica del control del Estado una vez superada la emergencia de la intervención militar. En la medida en que esta última aspiración no se concreta y la dictadura empieza a revelar su aspiración a constituirse en la clave política para una reestructuración global del funcionamiento de la economía y la sociedad, la DC evoluciona progresivamente hacia una oposición abierta al régimen. Ello logra el status de una oposición tolerada por el Estado autoritario, que se niega sistemáticamente a asumir contacto orgánico y político con la oposición de izquierda. Esto último se sustenta en el idea que cualquier compromiso con ella dificultaría su capacidad de diálogo frente a las FF.AA.

La izquierda en cambio debe enfrentar el grueso de la violencia política desatada por el Estado. Será obligada a intentar subsistir bajo duras condiciones de clandestinidad y represión debiendo adaptar sus estructuras orgánicas a las nuevas condiciones. Resultado de ello será la verificación de un proceso de una profunda segmentación política y un aumento considerable del verticalismo político ejercido por las direcciones orgánicas. Esto último implica la sustitución de un debate estratégico necesario por la creencia de la caída inevitable de la dictadura, resultado lógico de la conceptualización del Estado autoritario como un fenómeno puramente contrarrevolucionario que carecía de un proyecto histórico de reestructuración de la economía y de la sociedad. Las políticas implementadas por la dictadura eran consideradas como estructuralmente inviables. Esta forma de razonamiento polí-

tico se prolonga hasta la época del referendo constitucional de 1980. Dicha fecha marca el inicio de un proceso sistemático de transición y reemplazo de esta forma de razonamiento que abrirá un espacio significativo para su renovación política y teórica. Ello se verá favorecido por el cambio de línea táctica del PC y por la división del Partido Socialista en 1979.

El contenido de dicha renovación no se limita sólo a la puesta en discusión de las interpretaciones dominantes en el seno de la izquierda heredera de la UP, sino que intenta también la reconstrucción y reformulación del concepto de socialismo. Ella fundamenta sus análisis iniciales en la crítica de tres aspectos que habían dominado las interpretaciones políticas de la izquierda en el período autoritario. Se rechaza la tesis de la inviabilidad del modelo monetarista implementado, se pone en discusión la afirmación frecuente de que el régimen militar constituye un Estado contrarrevolucionario, represivo, transitorio, carente de capacidad para organizar un nuevo proyecto de sociedad. Finalmente se rechaza la idea que la dictadura militar constituye un esfuerzo de profundización del desarrollo capitalista en la forma sugerida por los estudios de Guillermo O'Donnell.

Esta renovación crea condiciones favorables para una proposición de orden político que altera radicalmente las concepciones clásicas de la izquierda. Ella se expresa en la afirmación de que los elementos constitutivos del nuevo 'cuadro estructural de la discusión política' están representados por los cambios en el sistema de relaciones entre economía y sociedad. La consecuencia de ello se expresa en el hecho de que las transformaciones monetaristas han transferido al mercado la función reguladora de los conflictos sociales, que en el período precedente de industrialización había sido cumplida tanto por el Estado de compromiso como por los partidos políticos. Corolario político de ello es la infuncionalidad de los partidos políticos respecto de las organizaciones sociales, en la medida en que ellos habían sido constituidos como instrumento de negociación frente al Estado. Las transformaciones implementadas por el modelo monetaris-

ta no deben ser conceptualizadas como una simple sustitución del modelo social precedente, sino como el establecimiento de un nuevo sistema social con capacidad de autoreproducción. Desde el punto de vista social una de las transformaciones que más puede afectar la base de apoyo político de la izquierda, es la disminución de los obreros industriales en relación a la población económicamente activa. Dicho proceso es acompañado por una agudización de su heterogeneidad interna, el debilitamiento de su peso estratégico en la sociedad y por un crecimiento substancial de los grupos medios.

De allí que el concepto de renovación deba ser entendido como el esfuerzo de la izquierda por formular y revisar tanto su programa como las conceptualizaciones teóricas en que se apoya su práctica política, sus medios de acción y sus aparatos partidarios. Sin embargo dicho esfuerzo se ve confrontado a partir del segundo semestre de 1981, con la crisis definitiva del modelo económico de reestructuración monetarista. La crisis económica, la utilización improductiva de los recursos económicos y los elevados índices de endeudamiento facilitan la quiebra relativamente generalizada del sector privado de la economía. Uno de los elementos explicativos esenciales del descalabro del 'milagro económico chileno' es el endeudamiento externo de la economía en el período 1974-1982. El funcionamiento de la economía utilizaba los flujos externos de capital como si se tratase de rentas del Estado nacional.

La crisis del segundo semestre de 1981 implica el desarrollo de alteraciones económicas y políticas significativas. En el nivel económico se crean las condiciones favorables al abandono del modelo monetarista que había sustentado el proceso general de reestructuración de la economía desde abril de 1975. Ello se traduce en la inestabilidad del patrón de desarrollo primario exportador altamente diversificado que había constituido el eje del funcionamiento de la economía del período. El había dado curso a un nuevo tipo de inserción de la economía en el mercado internacional y a la vez había acentuado notablemente la sensibilidad

de ella respecto de las oscilaciones de dicho mercado. La recesión financiera internacional comprometió notablemente la estabilidad del modelo de desarrollo adoptado y significó internamente el fallecimiento de la fracción financiera interna que se habían desarrollado al amparo del régimen militar. Es preciso recordar que la burocracia militar había confiado un rol protagónico en la economía a los sectores financieros internos. De allí que los procesos económicos que se verifican en Chile a partir del segundo semestre de 1981 estimulan la presencia de un tipo de funcionamiento económico que se caracteriza por una lógica dual. Por una parte se intenta conservar los aspectos esenciales de las transformaciones monetaristas, particularmente la forma de inserción externa y por otra, se pone un énfasis significativo en la reactivación económica interna. Si ello constituye un proceso de transición hacia un nuevo patrón de desarrollo que desplace el centro dinámico de la acumulación de capital desde el sector externo hacia las actividades ligadas al mercado interno, es aún prematuro sugerirlo. Ello depende de la naturaleza futura del conflicto social en donde los factores extra-económicos podrían jugar un rol decisivo en dicho desplazamiento. El problema económico central que la dictadura debe enfrentar está referido a como posibilitar la reactivación económica interna manteniendo la forma de inserción exterior de la economía. Es evidente que el límite de la reactivación está constituido por el mantenimiento de la expansión del sector externo y la obtención de flujos de capital externo que alivien la gigantesca deuda externa de la economía.

En el escenario político, dicha crisis creó condiciones favorables para la cristalización de la oposición política. Esto se expresó tanto en la Constitución de la Alianza Democrática de predominancia demócrata cristiana que intenta implementar una alternativa de centro derecha, como en la formación del Movimiento Democrático Popular que se fundamenta en la alianza del Partido Comunista con el MIR y otros grupos menores, y la constitución del bloque socialista, que aspira a la renovación teórica y programática de la política de izquierda. Es evidente que la

cristalización de la oposición es el resultado político y el precio que el Estado autoritario debe pagar frente a la crisis económica. Ella disgregó la alianza social que lo había sostenido y ha comprometido gravemente su capacidad de reproducción política. Esta crisis puso fin a los diversos grados de complicidad pasiva que diferentes sectores sociales habían mostrado respecto del terrorismo de Estado.

El resurgimiento de la actividad pública de la oposición política a partir de 1983 favorece ostensiblemente la posibilidad de una restauración democrática. Sin embargo, ello no puede ser considerado como el inicio de un camino irreversible y definitivo en la conquista de ella, esto dependerá de la resolución positiva de muchos problemas. Entre ellos es necesario destacar que el fraccionamiento de la oposición en tres bloques (Alianza Democrática, Movimiento Democrático Popular y Bloque Socialista) puede afectar negativamente la unidad de las fuerzas políticas democráticas. La necesidad de un pacto político y social entre ellas que facilite la democratización y de garantías para su estabilidad futura es imprescindible. Sin embargo, un énfasis desmesurado en los aspectos ideológicos que justifican el reagrupamiento de la oposición en tres bloques diversos puede dificultar gravemente la elaboración de dicho pacto y facilitar la materialización de la opción política de la dictadura representada por su modelo de 'democracia protegida' contenido en la Constitución Política del Estado de 1980.

Otra de las dificultades evidentes que la oposición enfrenta es la débil correspondencia entre su capacidad de dirección y la autonomía demostrada por el movimiento social en su lucha contra el Estado Autoritario. Los nuevos protagonistas sociales que hoy enfrentan directamente a la dictadura están constituidos esencialmente por los sectores marginales o de débil inserción en el mercado de trabajo y que habitan la periferia de las grandes ciudades. Esto evidencia un cambio substancial en el componente social de los opositores más activos a la dictadura. Es preciso recordar que en casi todo el período que va desde la crisis de los años

treinta a 1973 el rol protagónico en el conflicto social había sido jugado por los sectores sociales integrados estructuralmente en el mercado de trabajo (obreros industriales, clases medias del Estado y posteriormente movimientos campesinos). Hoy sin embargo, son los sectores urbanos más marginados por las políticas económicas implementadas por la dictadura, los opositores más radicales a ella. Las clases medias, las direcciones políticas de la oposición y los restantes sectores sociales apoyan su oposición al régimen en estos nuevos protagonistas.

Esto último constituye un fenómeno nuevo para los partidos de la oposición que tradicionalmente cimentaron su poder político electoral sobre la base de los trabajadores organizados y de las clases medias inciertas en la expansión pública de los servicios del Estado. Es preciso recordar que para la izquierda que se expresó en innumerables partidos políticos desde 1930 a 1973, la clase obrera organizada y sindicalizada constituía el eje de las transformaciones estructurales necesarias en la sociedad chilena. La nueva situación le plantea significativas dificultades políticas para asumir y adaptarse a las características de estos nuevos protagonistas. Símbolo de ello es la ausencia del nexo entre su condición de dirección política y la autonomía que el movimiento social ha demostrado en las distintas protestas nacionales que se inician en 1983. Ello también explica que la política represiva de la dictadura se concentre hoy en el asalto militar y las detenciones masivas ejecutadas en los sectores marginales de las grandes ciudades. Es evidente que el gobierno busca a partir de la implementación de dichos métodos el aislar definitivamente a las direcciones políticas de los partidos de oposición de los sectores sociales más dinámicos que luchan por el restablecimiento de la democracia.

La democratización reciente que ha tenido lugar en otras sociedades latinoamericanas (Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay) que al igual que Chile habían sido sometidas a dictaduras militares puede favorecer un optimismo exagerado respecto de la democratización chilena. Es preciso recordar que existen diferencias

substanciales entre el comportamiento político de control del Estado implementado por los militares chilenos y las restantes dictaduras militares que por razones diversas en el último período han debido ceder frente a las exigencias de la sociedad en favor de una restauración democrática. Es efectivo de que el golpe militar de 1973 manifestó una significativa debilidad institucional y que esta es sólo lograda un año después. Pero ella puso término definitivo a la disputa de la dirección de la insurrección militar entre los distintos sectores de las FF.AA. Dicho término se manifestó en la supresión de los mecanismos de deliberación política en su interior y facilitó la recuperación de la 'verticalidad del mando' consolidando el poder de los Comandantes en Jefes en cada una de sus ramas y que habían participado en la dirección de la insurrección militar. Posteriormente posibilitó la consolidación del poder de Pinochet por sobre la Junta de Gobierno, al ser designado como Presidente de la República.

Son estos procesos los que han facilitado el alto mando de la dictadura militar el cambio de políticas gubernamentales (como la aceptación del experimento monetarista en 1975 y el abandono de dicha política en 1982) sin que ello conduzca necesariamente a la sustitución del dictador por nuevos jefes militares. Por otra parte ello aseguró la autonomía absoluta de las decisiones gubernamentales respecto de las FF.AA. en su conjunto, de manera tal que las alianzas militares al interior de ellas se hicieron innecesarias para sustentar las políticas de gobierno. Es esto lo que explica a mi juicio la estabilidad del poder político de la dictadura respecto de los institutos armados y que ha sido una constante en los últimos diez años. Es en esta dirección en que deben ser interpretadas recientes declaraciones del Comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta de gobierno, en el sentido de que las FF.AA. son institutos militares no deliberante y que cualquier entendimiento respecto de la democratización exigido por la oposición debe reconocer como único interlocutor a los Comandantes en Jefe de cada una de sus ramas.

Sin embargo, la movilización social antidictatorial que se inicia con la crisis del modelo monetarista en el segundo semestre de 1981 y que culmina con las protestas nacionales de 1983 y 1984, fue violentamente cerrada con la declaración del estado de sitio decretada en noviembre de este año. Esto último demuestra que la apertura política tolerada por la dictadura en el período citado estuvo destinada a ganar tiempo para facilitar la implementación de una nueva política económica. Ello permite pensar de que la permanencia del Estado autoritario no depende del éxito o el fracaso de la política económica, sino de la voluntad de la dictadura de permanecer en el poder del Estado con el único apoyo de las Fuerzas Armadas. Ello es el resultado del ideologismo anticomunista extremo y de la esperanza que los militares chilenos depositan en el nuevo período presidencial de la administración norteamericana. El cautiverio de la sociedad civil de momento continúa.

A NEW CEDLA – IDC PROJECT

Colección de Documentos para la Historia de la Oposición Política al Estado Autoritario en Chile (1973-1981)

TOMO I : 1973-1978

Compilado por A. E. Fernández Jilberto

The first volume of the projected 3-volume series of documents from the political opposition to the authoritarian state in Chile covers the period 1973-1978. The 14 documents included present a representative picture of the political thought of the parties in opposition. They have previously only been available in mimeo form as internal reports; only small fragments of a few have been published for a wider public.

In the introduction an attempt is made to situate these declarations and analyses against the constantly shifting background of the alliances and rifts of the parties involved. In particular, the problem of periodisation is assigned a central place.

The origin and rise of authoritarianism in Latin America have been the subject of various studies. This collection provides some of the materials for the study of authoritarianism in decline.

AN ORIGINAL MICROFICHE EDITION

PRICE : Sfr 20

Orders (and reservations for parts 2 and 3) should be sent to:

Inter Documentation Company AG

Microfiche Publishers

Poststrasse 14

6300 Zug

Switzerland

CEDLA-IDC 1984